Perspectivas económicas de América Latina 2023

INVIRTIENDO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE



OCDE CENTRO DE DESARROLLO
NACIONES UNIDAS CEPAL
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Comisión Europea

Perspectivas económicas de América Latina 2023

INVIRTIENDO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE, del Presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Presidente de la Comisión Europea. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los Miembros de la OCDE, ni del Centro de Desarrollo de la OCDE, ni de la Corporación Andina de Fomento (CAF) o de la Unión Europea, ni de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Los nombres de los países y territorios y los mapas utilizados en esta publicación conjunta siguen la práctica de la OCDE.

Tanto este documento, así como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él, se entenderán sin perjuicio respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

Por favor, cite esta publicación de la siguiente manera:
OECD et al. (2023), *Perspectivas económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5cf30f87-es.

ISBN 978-92-64-93820-5 (impresa)
ISBN 978-92-64-88545-5 (pdf)
ISBN 978-92-64-52428-6 (HTML)
ISBN 978-92-64-32480-0 (epub)

Perspectivas Económicas de América Latina
ISSN 2072-5191 (impresa)
ISSN 2072-5183 (en línea)

Número de referencia del CAF: CAF-513i-2023

Número de referencia de la CEPAL: LC/PUB.2023/21

Unión Europea
ISBN 978-92-68-09676-5 (pdf)
Número de catálogo: MN-09-23-582-ES-N (pdf)
ISBN 978-92-68-09677-2 (impresa)
Número de catálogo: MN-09-23-582-ES-C (impresa)

Título original: OECD et al. (2023), *Latin American Economic Outlook 2023: Investing in Sustainable Development*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c93ff6e-en. La OCDE ha externalizado la traducción del presente documento.

Imágenes: Diseño de la portada realizado por Aida Buendía y Mélodie Ly Descours (Centro de Desarrollo de la OCDE)

Las erratas de las publicaciones se encuentran en línea en: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© OCDE/CAF/UNIÓN EUROPEA 2023

El uso del contenido del presente trabajo, tanto en formato digital como impreso, se rige por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en: https://www.oecd.org/termsandconditions.

Prefacio

El informe *Perspectivas económicas de América Latina* (LEO) analiza cuestiones críticas relativas al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe (ALC). Desde su primera edición en noviembre de 2007, este informe anual compara el desempeño de ALC con el de otras regiones, analiza los principales retos en materia de desarrollo y plantea recomendaciones, experiencias y buenas prácticas para la elaboración de políticas públicas.

El LEO se beneficia de los conocimientos especializados y las contribuciones de sus coautores. Desde 2011, este informe se publica de forma conjunta con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En 2013 se incorporó al equipo de autores el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Comisión Europea se unió como socio principal en 2018.

Esta decimosexta edición del LEO, *Invirtiendo para un desarrollo sostenible*, resalta la urgente necesidad de adoptar estrategias de inversión para promover un futuro más sostenible e inclusivo en la región. El informe ofrece recomendaciones de política pública para movilizar y atraer inversiones que permitan avanzar hacia un mejor modelo productivo, crear empleos de calidad y mejorar el bienestar de los ciudadanos. El LEO 2023 analiza tendencias socioeconómicas y de inversión, presenta mecanismos de financiamiento innovadores y destaca el papel de la gobernanza y las instituciones para promover más inversiones que permitan dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Por último, el informe subraya la necesidad de reforzar las alianzas internacionales para impulsar una mejor inversión y potenciar la integración regional.

Agradecimientos

Los socios de este informe son la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Unión Europea (UE) y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este informe cuenta con el apoyo de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (INTPA).

La contribución del Centro de Desarrollo de la OCDE a este informe ha sido liderada y dirigida por Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, con la coordinación de Luis Cecchi, analista de políticas de esta Unidad, bajo la dirección de Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, y Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Juan Vázquez Zamora, jefe adjunto de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, René Orozco y Olivia Cuq, economista y analista de políticas, respectivamente, en la misma Unidad, han contribuido a la elaboración y coordinación del informe. La contribución de la CEPAL ha estado liderada por Marco Llinás, director de la División de Producción, Productividad y Gestión, y Sebastián Rovira, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías, bajo la dirección de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL. La contribución de la CAF ha estado liderada por Adriana Arreaza, directora de Estudios Macroeconómicos, bajo la dirección de Verónica Frisancho Robles, economista jefe, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. La contribución de la Comisión Europea fue dirigida por Diana Montero Melis, jefa de unidad adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (INTPA), con la asistencia de Rodolfo Lazarich Gener, oficial de Ayuda Internacional / Cooperación, y Claudia Pablos Lorenzo, consultora de cooperación, bajo la dirección de Olivier Luyckx, jefe de unidad América del Sur y operaciones regionales, y Félix Fernández-Shaw, director de INTPA para América Latina y el Caribe de relaciones con países y territorios de ultramar.

El informe se benefició de la investigación y la colaboración de varios autores de estas organizaciones, entre los que se incluyen Adriana Arreaza (CAF), María Carolina Arcila (OCDE), Laura Buchet (OCDE), Adriana Caicedo (OCDE), Luis Cecchi (OCDE), Olivia Cuq (OCDE), Rita Da Costa (OCDE), Samuel Elrington (OCDE), Andrés Espejo (CEPAL), Sofia Faurie (OCDE), Sonia García Lorenzana (OCDE), Nicolo Gligo (CEPAL), Laura Gutiérrez Cadena (OCDE), Michael Hanni (CEPAL), Sebastián Herreros (CEPAL), Ingrid Jenezova (CE), Andrea Laplane (CEPAL), Juan Ramón Larraín Aylwin (OCDE), Martina Lejtreger (OCDE), Carlos Maldonado (ECLAC), Thomas Manfredi (OCDE), Nathalia Montoya González (OCDE), Sebastián Nieto Parra (OCDE), Georgina Núñez (CEPAL), René Orozco (OCDE), Ramón Pineda (CEPAL), Marti Pera Planas (CEPAL), Esteban Pérez (CEPAL), Noel Pérez Benítez (CEPAL), Juan Vázquez Zamora (OCDE), Helvia Velloso (CEPAL) y Cecilia Vera (CEPAL). Rosario Hernando Cruz (OCDE), Daniela Sánchez Galvis (OCDE), Agustina Vierheller (OCDE) y Paul Wonder (CEPAL) han prestado un apoyo administrativo invaluable durante la elaboración del informe.

Un grupo de expertos y colegas han participado de forma especialmente activa y generosa a lo largo del proceso de producción, brindando opiniones, aportes o gráficos, comentarios y orientación estratégica al informe. Nos gustaría destacar el apoyo de José Antonio Ardavín (OCDE), Jens Arnold (OCDE), Julia Benn (OCDE), Eric Bensel (OCDE), Francesca Borgonovi (OCDE), Monica Brezzi (OCDE), Aida Caldera Sánchez (OCDE), Maya Camacho (OCDE), Jorge Carbonell (OCDE), Olivier Cattaneo (OCDE), Claire Charbit (OCDE), Helena Cravinho (OCDE), Pietrangelo De Biase (OCDE), Rachida Dkhissi (OCDE), Falilou Fall (OCDE), Priscilla Fialho (OCDE), Jacobo García Villareal (OCDE), Paula Garda (OCDE), Daniela Ibarra (OEA), Stratos Kamenis (OCDE), Fatos Koc (OCDE), Michael Koelle (OCDE), Sarah Kups (OCDE), Alessandro Maravalle (OCDE), Ida Mcdonnell (OCDE), Jeroen Meyer (OCDE),

Veerle Miranda (OCDE), Letizia Montinari (OCDE), Ana Novik (OCDE), Alberto González (OCDE), Lorenzo Pavone (OCDE), Bertrand Pluyaud (OCDE), Annalisa Primi (OCDE), Kim Osbone (OEA), Adolfo Rodríguez-Vargas (OCDE), Ana María Ruiz Rivadeneira (OCDE), Carlos Santiso (OCDE), Daniela Sena Rojas (OCDE), Luz Serrano (OAS), Rebeca Vidal (CAF), Martin Wermelinger (OCDE), Bettina Wistrom (OCDE) y Yumika Yamada (OCDE).

El contenido del informe se ha enriquecido gracias a las constructivas observaciones recibidas a raíz de la consulta informal efectuada el 22 de febrero de 2023 a los países de ALC y los miembros del Comité Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE; las reuniones virtuales de expertos que se celebraron los días 30 y 31 de mayo de 2023; y la reunión de consulta al sector privado que tuvo lugar el 27 de junio de 2023. Además de a los delegados de ALC en el Comité Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, estamos especialmente agradecidos con los expertos, académicos, representantes del sector privado y otros funcionarios públicos que nos prestaron su apoyo durante la reunión de expertos, la reunión de consulta al sector privado y las reuniones informales: Graciela Altruda (MEF, Uruguay), Daniela Araujo (Fundación EU-LAC), María Paula Arenas (MINCIT, Colombia), Patricia Benavente (BM), Juan Benavides (Fedesarrollo), Antoine Berthou (OCDE), Janos Bertok (OCDE), San Bilal (Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo), Marie-Pierre Bourzai (AFD), Ana Capilla (OEI), Lucio Castro (CFI), Mario Coronado (TEF Hispam), Andrea Costafreda (OXFAM), Humberto Cote (DNP), Manuel Escudero (Delegación Permanente de España ante la OCDE), Ministra Elisa Facio (MIEM, Uruguay), Almudena Fernández (PNUD), Juan Miguel Gallego (DNP Colombia), Pilar Garrido (OCDE), Andrés García Suaza (Universidad del Rosario), Cecilia Giffuni (MRREE, Uruguay), Elaine Godoy (AUCI), Carla Fernández-Durán Gortazar (BID), Martín Francos (Ministerio de Economía, República Dominicana), Andrés García Suaza (Universidad del Rosario), Fernando Jaramillo Mejía (Universidad del Rosario), Fidel Jaramillo (FLAR), Juan Labraga (MEF, Uruguay), Antón Leis (AECID), Guilherme Magacho (AFD), Analia Maguna (MEF, Uruguay), Ana Fernanda Maiguashca (Consejo Privado para la Competitividad, Colombia), Juan Carlos Moreno-Brid (UNAM), Natalia Moreno Rigollot (Telefónica), José Antonio Ocampo (Universidad de Columbia), Laura Oroz (AECID), Eric Parrado (BID), Javier Pérez (Banco de España), Meghann Puloch (AFD), Fazia Pusterla (BID), Olga Lucía R. Ramírez (DLA Piper), Juan Ruiz (BBVA Research), José Antonio Sanahuja (Fundación Carolina), Verónica Santini (MEF, Uruguay), Verónica Suarez (AUCI), Daniel Titelman, (CEPAL), Manuel Toledo (CAF), Ana Valero (TEF Hispam), Marco Varea (AFD), y Felipe Zaccheo (Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea).

Las notas-país se han beneficiado de las aportaciones constructivas, los análisis y las comprobaciones realizadas por las delegaciones de Chile, Colombia, Costa Rica y México ante la OCDE, así como por las embajadas en Francia de Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las embajadas y delegaciones de la OCDE también han coordinado los relevantes aportes provenientes de diferentes ministerios nacionales y áreas gubernamentales.

El Centro de Desarrollo de la OCDE también desea expresar su sincero agradecimiento a la Agence Française de Développement (AFD), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Telefónica y la Universidad del Rosario (Colombia) por su apoyo a las *Perspectivas Económicas de América Latina*.

Por último, nos gustaría dar las gracias a la División de Publicaciones y Comunicaciones del Centro de Desarrollo de la OCDE, en particular a Aida Buendía, Mélodie Descours, Delphine Grandrieux, Elizabeth Nash, Irit Perry, Henri-Bernard Solignac-Lecomte y Felix Zimmermann, por su inagotable paciencia y su diligente labor en la producción de este informe y el material asociado. Los autores también agradecen sinceramente las actividades de edición y corrección realizadas por Mary Bortin y Marilyn Smith; los servicios de coordinación de la traducción al español prestados por Alejandro Barranco, Julia Gregory y Alexander Summerfield; y los servicios de edición en español prestados por Liliana Tafur.

Índice

Prefacio ... 3
Agradecimientos ... 5
Acrónimos y abreviaturas ... 13
Editorial ... 17
Resumen ejecutivo ... 19

Resumen: **Invirtiendo para un desarrollo sostenible** ... 23
ALC necesita aumentar su crecimiento potencial y mejorar sus condiciones sociales en un contexto complejo ... 24
La inversión puede impulsar el desarrollo sostenible en la región ... 26
Para impulsar la inversión se necesitan fuentes de financiamiento innovadoras ... 35
Se necesitan instituciones públicas fuertes que favorezcan la vinculación de las inversiones con las prioridades nacionales y de los ciudadanos ... 39
Las alianzas internacionales pueden ayudar a atraer inversiones y potenciar su impacto en el desarrollo ... 42
Notas ... 46
Referencias ... 46

Capítulo 1. **Perspectivas económicas de América Latina 2023** ... 49
Introducción ... 51
Las perspectivas mundiales siguen siendo frágiles ... 51
La evolución del crecimiento en ALC refleja una coyuntura compleja y los retos estructurales pendientes ... 53
Las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles en la región de ALC ... 70
Principales mensajes en materia de políticas ... 75
Referencias ... 76

Capítulo 2. **Panorama de la inversión en América Latina y el Caribe: retos y oportunidades** ... 81
Introducción ... 83
¿Cuál es la situación de ALC en materia de inversión? ... 85
Hacia una inversión estratégica en infraestructura pública de calidad ... 88
Para impulsar la inversión se requiere una transparencia y gobernanza pública sólida ... 94
Las asociaciones público-privadas (APP) eficaces pueden ayudar a impulsar la inversión en infraestructura pública en ALC ... 99
Aumentar la calidad de la inversión extranjera directa ... 102
Principales mensajes en materia de políticas ... 112
Notas ... 114
Referencias ... 115
Anexo 2.A. Anexo metodológico ... 118

Capítulo 3. **Hacia una nueva estructura de producción y empleo: el rol de la inversión** ... 121
Introducción ... 123
Impulsar la productividad, un reto persistente en ALC ... 124
Análisis de la estructura productiva de ALC ... 126
Dinámicas del mercado laboral y brechas en materia de talento humano: el rol de la inversión ... 138
Invertir en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible ... 147

Principales mensajes en materia de políticas ... 162
Notas ... 164
Referencias ... 164

Capítulo 4. **Desbloqueando el potencial productivo de ALC: el papel de las instituciones públicas y el financiamiento** ... 171
Introducción ... 173
Las instituciones públicas son fundamentales para hacer de la transformación productiva un motor del bienestar y una pieza clave del nuevo contrato social ... 174
Financiando las inversiones necesarias para la agenda de desarrollo ... 190
Principales mensajes en materia de políticas ... 212
Notas ... 214
Referencias ... 215

Capítulo 5. **Alianzas internacionales para más y mejores inversiones** ... 223
Introducción ... 225
Oportunidades en un panorama de cooperación cambiante: el papel del sector privado ... 226
Alianzas internacionales para garantizar mejores inversiones en ALC ... 236
El papel de la integración regional en la transformación productiva y el empleo ... 246
Una nueva agenda UE-ALC para la transformación productiva ... 253
Principales mensajes en materia de políticas ... 257
Notas ... 259
Referencias ... 259
Anexo 5.A. ... 265

Notas País ... 267
Guía del lector ... 268
Argentina ... 274
Brasil ... 276
Chile ... 278
Colombia ... 280
Costa Rica ... 282
República Dominicana ... 284
Ecuador ... 286
El Salvador ... 288
Guatemala ... 290
México ... 292
Panamá ... 294
Paraguay ... 296
Perú ... 298
Uruguay ... 300

Gráficos

1. Crecimiento potencial del PIB per cápita en ALC y en economías avanzadas 24
2. Distribución de los trabajadores informales a nivel de los hogares, selección de economías de ALC 25
3. Inversión total como porcentaje del PIB en ALC y regiones seleccionadas, 1990-2022 26
4. Entradas de IED como porcentaje del PIB, por regiones, 2010-22 28
5. Indicador de la calidad de la IED para la productividad y evolución de la IED en proyectos completamente nuevos, por tipo de energía 29
6. Inversiones de capital y empleos formales creados por la IED en ALC, enero 2003-mayo 2023 30
7. Es más probable que quienes desempeñan trabajos verdes sean hombres, con educación superior y trabajando en el sector formal 32
8. Porcentaje de inversiones en I+D por fuente de financiamiento en ALC y otros territorios, 2011-20 33
9. Sectores con alto potencial para impulsar un desarrollo sostenible 34
10. Estructura tributaria media en la región de ALC y en la OCDE, 2020 36
11. Instrumentos financieros ofrecidos por las IFD a las mipymes, por tipo de financiamiento y sector, 2023 37
12. Emisión internacional de bonos GSSS en ALC, por tipo, como porcentaje del total y por sector, 2014-22 38
13. Número de conflictos sociales sin resolver en ALC vinculados al medioambiente, por categoría, 2022 40
14. Priorización de sectores económicos estratégicos en los planes nacionales de desarrollo de ALC, 2023 42
15. Recursos movilizados de fuentes privadas mediante intervenciones oficiales de financiamiento para el desarrollo, 2012-21 43
16. Agenda de inversiones Global Gateway, número de proyectos por país y sector, 2023 45

1.1. Precios internacionales de las materias primas, enero de 2019 a agosto de 2023 52
1.2. Volatilidad y primas de riesgo en los mercados financieros 53
1.3. Crecimiento potencial del PIB per cápita en ALC y en economías avanzadas 55
1.4. Balanza por cuenta corriente de ALC y flujos de capital a países de ALC 56
1.5. Proporción de manufacturas de alta y media tecnología en las exportaciones de manufacturas totales, último año 58
1.6. Proporción de las exportaciones de servicios en el PIB y en las exportaciones totales, 2019 59
1.7. Diferencia entre la inflación general y la meta de inflación más alta, 2023 60
1.8. Dinámica de la deuda en una selección de economías de ALC 62
1.9. Ratios impuestos/PIB en países de ALC y en otras regiones, 2021 64
1.10. Estructura tributaria promedio en la región de ALC y en la OCDE, 2020 65
1.11. Tasas efectivas del impuesto sobre las sociedades en ALC, 2021 68
1.12. Impacto de los incentivos fiscales a la inversión de sectores específicos sobre las tasas impositivas efectivas en una selección de países de ALC 69
1.13. Evolución de las tasas de pobreza y pobreza extrema en ALC 70
1.14. Impacto de la inflación en la población general y en las personas en situación de pobreza extrema en 2023 71
1.15. Evolución de la informalidad de los hogares en una selección de economías de ALC 73

2.1. Inversión total en % del PIB en ALC y regiones seleccionadas, 1990-2022 85
2.2. Inversión total en % del PIB en países seleccionados de ALC, 2022 86
2.3. Proporción de la inversión total por sector económico en ALC, 1990-2018 87
2.4. Inversión privada vs. pública como % de la inversión total en ALC y la OCDE, 2019 88

2.5. Inversión pública en infraestructura en ALC como % del PIB, 2008-21 90
2.6. Inversión pública en infraestructura en ALC como % de la inversión total, 2019 91
2.7. APP en proyectos de infraestructura pública de ALC como % del PIB, 2010-21 99
2.8. Aspectos clave que determinan la preparación y capacidad de un país para implementar APP 100
2.9. Entradas de IED como % del PIB, por regiones, 2010-22 103
2.10. Entradas de IED como % del PIB, países seleccionados de ALC, 2013-22 103
2.11. Origen de los anuncios de proyectos de IED en ALC como % del valor total, 2003-22 104
2.12. Valor de los anuncios de proyectos de IED en ALC, distribución por sectores 105
2.13. Cifra total de empleos formales creados por la IED en ALC, por país de origen, 2003-22 105
2.14. Inversiones de capital y empleos formales creados por la IED en ALC, enero 2003-mayo 2023 107
2.15. Indicadores de calidad de la IED relacionados con el empleo para países seleccionados de ALC, 2019 108
2.16. Productividad e innovación: indicadores de calidad de la IED para países seleccionados de ALC, 2019 109
2.17. Intensidad de carbono de la producción por titularidad, t CO_2 por millón de USD 110
2.18. Porcentaje de IED en instalaciones totalmente nuevas por tipo de energía en ALC y países seleccionados de la región, 2003-22 112
3.1. Productividad laboral en los países de ALC en relación con Estados Unidos, 1951-2022 124
3.2. Productividad laboral y participación en el empleo en ALC, por sectores económicos principales, 2021 125
3.3. Desglose del crecimiento de la productividad laboral en países de ALC, 1991-2021 126
3.4. Variación del porcentaje que representa el sector manufacturero, subregiones de ALC, 2000-21 128
3.5. Productividad laboral en relación con las grandes empresas, por tamaño de empresa, ALC y Unión Europea (%) 129
3.6. PIB per cápita y diferencias territoriales en ALC frente a los países desarrollados, 2020 132
3.7. Inversiones en I+D como porcentaje del PIB, ALC frente a países y bloques seleccionados, 2011-20 134
3.8. Distribución de los sectores según la tasa de inversión en I+D, países seleccionados, 2015-21 135
3.9. Porcentaje de inversiones en I+D por fuente de financiamiento en ALC y otros territorios, 2011-20 136
3.10. Solicitudes de patentes por región, 2012-21 136
3.11. Porcentaje de solicitudes presentadas por residentes a las oficinas nacionales de patentes, países seleccionados 2019-21 137
3.12. Empleo por sector de actividad económica en ALC, 1991-2021 139
3.13. Crecimiento de la productividad laboral frente al crecimiento del empleo y los salarios reales en ALC 141
3.14. Crecimiento de la inversión frente al crecimiento de la productividad laboral y del empleo en ALC 142
3.15. Inversión en TIC y empleos altamente cualificados en ALC, 1990-2015 143
3.16. Niveles de competencia lectora y matemática, países de ALC seleccionados y OCDE, 2019 144
3.17. Cambios en el empleo urbano por nivel de cualificación, países de ALC seleccionados, 2000-21 146
3.18. Sectores con un alto potencial para impulsar el desarrollo sostenible 148
3.19. Crecimiento del valor agregado de los sectores verdes con respecto al resto de la economía en ALC, 2005-21 149

3.20. Variación neta del empleo de aquí a 2030 a través de la inversión en sectores verdes en ALC ... 150
3.21. Posible variación del empleo en sectores verdes de ALC para 2030 ... 151
3.22. En ALC, es más probable que quienes desempeñan trabajos verdes sean hombres, con una educación superior y empleados de manera formal ... 152
3.23. Energías renovables en ALC: capacidad instalada y anuncios de proyectos de IED, 2005-22 ... 154
3.24. Velocidades de descarga de banda ancha fija y móvil en ALC, 2022 ... 156
3.25. Proyectos de IED anunciados en la industria farmacéutica de ALC y a nivel mundial, 2003-21 ... 159
3.26. Formación bruta de capital y gasto público en agricultura, 2020 ... 162
4.1. La mayoría de los ciudadanos de ALC confía poco en las empresas nacionales e internacionales ... 175
4.2. La percepción positiva sobre la IED ha disminuido entre los ciudadanos de ALC ... 176
4.3. Percepción de los líderes empresariales sobre los factores más problemáticos para hacer negocios en ALC ... 177
4.4. Número de conflictos sociales activos en ALC vinculados a temas ambientales, por categoría, 2022 ... 178
4.5. Priorización de sectores económicos estratégicos en los planes nacionales de desarrollo de ALC, 2023 ... 185
4.6. Profundidad de los mercados financieros de ALC ... 192
4.7. Objetivos de instrumentos financieros de IFD seleccionadas en ALC, 2023 ... 193
4.8. Tipos de financiamiento ofrecidos a las mipymes por las IFD públicas en ALC, 2023 ... 194
4.9. Instrumentos financieros ofrecidos a las mipymes por tipo de financiamiento (%), 2023 ... 195
4.10. Instrumentos financieros sectoriales ofrecidos a las mipymes por las IFD, 2023 ... 196
4.11. Distribución sectorial de instrumentos de financiamiento proporcionados por las IFD a las mipymes en ALC, 2023 ... 197
4.12. Distribución de instrumentos financieros dirigidos a las dimensiones verde, digital y de género, 2023 ... 199
4.13. Distribución de instrumentos financieros ofrecidos al sector público por las IFD públicas en ALC, 2023 ... 201
4.14. Distribución sectorial de instrumentos financieros ofrecidos al sector público por las IFD públicas, 2023 ... 202
4.15. Tipos de estructuras del mercado de deuda basado en la sostenibilidad ... 205
4.16. Emisión internacional de bonos en ALC: bonos GSSS por tipo y como porcentaje del total, 2014-22 ... 206
4.17. Emisión de bonos soberanos GSSS en mercados internacionales ... 207
4.18. Emisión de bonos GSSS en mercados internacionales, distribución sectorial, ALC ... 208
4.19. Vista general de los marcos de finanzas sostenibles para bonos GSSS ... 210
5.1. AOD como porcentaje del INB e IED como porcentaje del PIB, 2021 ... 229
5.2. Tamaño del mercado y crecimiento del financiamiento mixto en ALC, 2012-22 ... 231
5.3. Recursos movilizados de fuentes privadas mediante intervenciones oficiales de apoyo al financiamiento para el desarrollo (%), 2012-21 ... 231
5.4. Financiamiento privado movilizado por sector (%), promedio de ALC 2018-20 ... 232
5.5. Movilización de recursos privados según el mecanismo de incentivo, ALC, promedio 2018-20 ... 234
5.6. Financiamiento privado total movilizado por los BMD, 2012-21 ... 235
5.7. Número de TII firmados y terminados en ALC y en el mundo, 1960-2023 ... 242
5.8. Mecanismos de integración subregional de ALC ... 248
5.9. Cuota de las exportaciones intrarregionales en las exportaciones totales de bienes, 1995-2021 ... 248

5.10. Estructura del contenido importado de las exportaciones, 2017 249
5.11. Participación de ALC en las exportaciones totales de manufacturas, 2021 250
5.12. Agenda de Inversiones Global Gateway: número de proyectos por país y sector 255

Tablas

1. Mecanismos internacionales para promover mejores inversiones 44
1.1. Distribución de las exportaciones de bienes de ALC por intensidad tecnológica, 1999-2001 y 2019-21 58
4.1. Revisiones externas para la emisión de bonos GSSS 212
5.1. Mecanismos internacionales para garantizar mejores inversiones 238
5.2. Elementos clave de la Guía de la OCDE de Debida Diligencia 239
5.A.1. Número de tipos de productos exportados a destinos seleccionados, 2021 265

Recuadros

1.1. Principales mensajes en materia de políticas 75
2.1. Definiciones, consideraciones e indicadores de inversión e infraestructura 84
2.2. Marco de acción para la inversión de la OCDE 95
2.3. Desde México, una guía que permite reforzar la medición estadística de la infraestructura 97
2.4. Recomendaciones de la OCDE sobre gobernanza de infraestructura 98
2.5. Los países de ALC pueden ampliar adicionalmente las relaciones de inversión con los países de la OCDE en el ámbito de la IED en energías renovables 111
2.6. Principales mensajes en materia de políticas 113
3.1. El panorama de las empresas emergentes en ALC 130
3.2. Principales mensajes en materia de políticas 163
4.1. Costa Rica otorga acceso a recursos naturales a cambio de compartir beneficios 181
4.2. Hoja de ruta estratégica para la inversión pública en Colombia 186
4.3. Ecuador — Una iniciativa de éxito para impulsar la productividad de los pequeños agricultores 188
4.4. Desbloquear el potencial de los fondos de capital de riesgo para financiar empresas emergentes en ALC 203
4.5. Principales mensajes en materia de políticas 213
5.1. FEDS+ en América Latina y el Caribe 227
5.2. Fondo para la Innovación en Energías Renovables de Uruguay (REIF) 233
5.3. Redes regionales de políticas públicas: su contribución a un entorno propicio para las inversiones 240
5.4. Cooperación internacional para la transformación de la producción: el programa mexicano *Sembrando Vida* 246
5.5. América Central como ejemplo de integración regional 251
5.6. Alianza Digital UE-ALC: un esfuerzo conjunto para cerrar la brecha digital en ALC 256
5.7. Principales mensajes en materia de políticas 258

Acrónimos y abreviaturas

5G	Red móvil de quinta generación
AAAA	Agenda de Acción de Addis Abeba
ABS	Acceso y participación en beneficios
ACE	Agencias de crédito a la exportación
AFC	Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC
ALC	América Latina y el Caribe
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AEO	Operador Económico Autorizado
AFD	Agence Française de Développement
ALIDE	Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo
AOD	Ayuda oficial al desarrollo
APEP	Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica
API	Agencias de promoción de la inversión
APP	Asociaciones público-privadas
ASG	Ambiental, social y de gobernanza
AUCI	Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional de Uruguay
BAU	Negocios como de costumbre (*Business-as-usual*)
BEI	Banco Europeo de Inversiones
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIICC	Bono indexado a indicadores de cambio climático
BMD	Bancos multilaterales de desarrollo
BND	Bancos nacionales de desarrollo
BNDES	Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil
BRI	Iniciativa Cinturón y Ruta (China)
BSD	Bancos subnacionales de desarrollo
C2F	Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en las Américas
CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo
CAF	Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
CALAS	Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAPEX	Inversiones de capital
Caricom	Comunidad del Caribe
CASEIF IV	Fondo de Inversión para Pequeñas Empresas de Centroamérica IV
CdG	Centros de Gobierno
CDN	Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
CECA	Comunidad Europea del Carbón y del Acero
CECCA	Corredor de Energía Limpia de Centroamérica
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú
CET	Arancel exterior común
CFI	Corporación Financiera Internacional
CIF	Mecanismo de inversión en el Caribe
CIIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
CINE	Clasificación Internacional Normalizada de la Educación

CIT	Impuesto sobre las sociedades
CIUO	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
CIV	Vehículos de inversión colectiva
CO2	Dióxido de carbono
Conagebio	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad de Costa Rica
COVID 19	COVID-19
D4D	Centro Europeo de Desarrollo Digital
DFC	Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos
DIC	Inversión directa en empresas
DNP	Departamento Nacional de Planeación de Colombia
DPR	Derechos de pago diversificados
EEUU	Estados Unidos de América
EFAD	Arquitectura Financiera Europea para el Desarrollo
EMBI	Índice de bonos de mercados emergentes
EMBL-EBI	Instituto Europeo de Bioinformática
ERNC	Energías renovables no convencionales
FBC	Formación bruta de capital
FBCF	Formación bruta de capital fijo
FEDS	Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
fintech	Tecnofinanzas
FMI	Fondo Monetario Internacional
G20	Grupo de los Veinte
GBP	Principios de Bonos Verdes
GEI	Gases de efecto invernadero
GGIA	Agenda de Inversiones Global Gateway de la UE
GSSS	Bonos Verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad
I+D	Investigación y desarrollo
ICMA	Asociación Internacional de Mercados de Capitales
ICTCR	Instituto Costarricense de Turismo de Costa Rica
IED	Inversión extranjera directa
IES	Instituciones de educación superior
IFD	Instituciones de financiamiento del desarrollo
IFI	Instituciones financieras internacionales
IIF	Instituto de Finanzas Internacionales
INB	Ingreso Nacional Bruto
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México
IPC	Índice de precios de consumo
IPO	Salida a bolsa
IRENA	Agencia Internacional de las Energías Renovables
ISDS	Solución de diferencias entre inversores y Estados
IVA	Impuesto sobre el valor agregado
IVDCI	Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
KPI	Indicadores clave de rendimiento
LACIF	Mecanismo de Inversión en América Latina y el Caribe
LAIF	Mecanismo de Inversión en América Latina
Mb/s	Megabits por segundo
MCCA	Mercado Común Centroamericano

MCIT	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
ME	Ministerio de Energía de Chile
MEB	Ministerio de Economía de Brasil
MECON	Ministerio de Economía de Argentina
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana
Mercosur	Mercado Común del Sur
mHRDD	Debida diligencia obligatoria en el ámbito de derechos humanos
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica
MIEM	Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica
Mipymes	Micro, pequeñas y medianas empresas
MPDB	Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia
MRREE	Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay
NAFTA	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
NTB	Barreras no arancelarias
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	Organización no gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organización de la sociedad civil
PFI	Marco de acción para la inversión
PIB	Producto Interno Bruto
PIT	Impuesto sobre la renta a las personas naturales
PMA	Países menos adelantados
PNC	Puntos Nacionales de Contacto
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNL	Organizaciones privadas no lucrativas
PPI	Participación Privada en Infraestructuras (Banco Mundial)
PREUM	Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos
PTF	Productividad total de los factores
Pymes	Pequeñas y medianas empresas
QII	Inversión en Infraestructuras de Calidad
RBC	Conducta empresarial responsable
RCL	Requisitos de contenido local
REIF	Fondo para la Innovación en Energías Renovables de Uruguay
RELAC	Energías renovables en América Latina y el Caribe
SBG	Guías de Bonos Sostenibles
SBP	Principios de Bonos Sociales
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana
SLB	Bonos Vinculados a la Sostenibilidad
SLBP	Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad
SNA	Sistema de Cuentas Nacionales

SNIP	Sistemas nacionales de inversión pública
SNPE	Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador
SOP	Opinión de Segundas Partes
SPPPG	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala
SPT	Objetivos de desempeño en sostenibilidad
SPV	Sociedades instrumentales
STI	Ciencia, tecnología e innovación
STPP	Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay
t CO2	Toneladas métricas de dióxido de carbono
t	Toneladas métricas
TBI	Tratado bilateral de inversión
TEF Hispam	Telefónica Hispam
TIC	Tecnologías de la información y la telecomunicación
TIE	Tasa impositiva efectiva
TIE	Tasa impositiva prevista por la normativa
TIEM	Tasas impositivas efectivas medias
TII	Tratados internacionales de inversión
TIP	Tratados con disposiciones en materia de inversión
TTE	Tratamiento tributario estándar
UE	Unión Europea
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
Unasur	Unión de Naciones Suramericanas
UPME	Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia
USD	Dólar de Estados Unidos
USMCA	Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá
VET	Capacitación y formación profesional
VIX	Índice de volatilidad

Editorial

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) cuentan con un gran potencial para asegurar una senda de desarrollo más robusta y sostenible. Para aprovechar ese potencial, la región debe adoptar una agenda de inversión ambiciosa y amplia. En esta decimosexta edición de *Perspectivas económicas de América Latina* (LEO 2023): *Invirtiendo para un desarrollo sostenible*, se proponen estrategias para impulsar la inversión en la región de ALC, con el objetivo de apoyar a los responsables de las políticas públicas, al sector privado y a los socios internacionales.

La región cuenta con activos que la hacen única. ALC posee una gran riqueza en recursos naturales, biodiversidad y energías verdes. Tiene una población joven y culturalmente diversa y su economía ofrece oportunidades en sectores tan variados como la agroindustria, el turismo sostenible, las energías renovables y las manufacturas vinculadas a la salud. Cuenta con un gran mercado interior, insuficientemente aprovechado, y está idealmente ubicada para integrarse aún más en las cadenas de valor global.

Sin embargo, en los últimos años, los avances socioeconómicos de la región se han estancado. La pobreza, que se sitúa en el 29%, y la extrema pobreza, en el 11.2%, permanecen iguales, en promedio, a los niveles anteriores a la pandemia, y las desigualdades son elevadas. En la región persisten retos estructurales que limitan su desarrollo. Los países de ALC deben invertir en educación y competencias y crear más y mejores empleos formales, ya que casi el 43% de los hogares de la región tiene a todos sus miembros trabajando de manera informal. Es necesario que en la región se adopten políticas ambiciosas de desarrollo productivo para aumentar el valor agregado local, aprovechar el potencial de crecimiento de nuevos sectores, maximizar los beneficios de la transformación digital y contribuir a abordar desafíos globales, en particular la transición hacia una economía más verde.

Para alcanzar estos objetivos, es fundamental aumentar significativamente los niveles de inversión en la región, tando doméstica como extranjera, pública y privada. La inversión total en ALC se sitúa en tan solo un 20% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de todas las regiones del mundo.

Este informe destaca cómo los países de ALC pueden abordar las brechas de inversión. Las reformas tributarias pueden aumentar los ingresos al mismo tiempo que hacen que los sistemas de impuestos y gastos sean más eficientes y equitativos. Las instituciones de financiamiento del desarrollo y los instrumentos financieros innovadores pueden desempeñar un papel clave para impulsar la inversión.

El informe señala la importancia de instituciones públicas eficaces y un diálogo sólido entre los actores socioeconómicos para asegurar que la inversión se alinee con las estrategias nacionales de desarrollo y aborde las prioridades sociales.

Las asociaciones internacionales pueden ayudar a promover una nueva agenda de inversión, reuniendo a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones de financiamiento del desarrollo y el sector privado. Consideramos que la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC representa un paso clave en esta dirección.

Estamos preparados para trabajar juntos y apoyar los esfuerzos de los países de la región y confiamos en que este informe proporcione una base sólida para definir una agenda de inversión que encamine a ALC hacia un mayor bienestar para todos.

Mathias Cormann	Sergio Díaz-Granados	José Manuel Salazar-Xirinachs	Jutta Urpilainen
Secretario General OCDE	Presidente Ejecutivo CAF	Secretario Ejecutivo CEPAL	Comisaria de Asociaciones Internacionales Comisión Europea

Resumen ejecutivo

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) cuentan con un gran potencial para avanzar en una trayectoria de desarrollo más robusta y sostenible. Sin embargo, para aprovechar ese potencial, la región debe adoptar una agenda de inversión ambiciosa y amplia.

ALC necesita aumentar su crecimiento potencial y mejorar sus condiciones sociales en un contexto complejo

Tras la recuperación pospandemia del crecimiento registrada en ALC en 2021, en 2022 las condiciones exteriores se volvieron menos favorables, se redujeron las transferencias públicas de apoyo, la política monetaria se endureció y los efectos de la reapertura de las economías se disiparon. La desaceleración de la actividad económica en ALC en 2023 sugiere que la región está volviendo a los niveles de bajo crecimiento observados antes de la pandemia. Las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles en ALC, con niveles de pobreza (29%) y pobreza extrema (11.2%) en 2022 que aún se mantienen en promedio en valores pre-pandemia. Uno de los principales obstáculos para dar respuesta a esta situación es la informalidad laboral, que se traduce en salarios más bajos y falta de acceso a las redes de protección social. En promedio, el 42.8% de la población de la región vivía en un hogar que dependía solo del empleo informal. Asimismo, el aumento de la inflación ha ido socavando progresivamente el poder adquisitivo en ALC y ha afectado con especial dureza a las poblaciones más vulnerables. Durante el primer semestre de 2023, los hogares en situación de pobreza extrema experimentaron un incremento medio de los precios de unos 4.0 puntos porcentuales más que el promedio de los hogares de la región.

Más y mejores inversiones para impulsar el desarrollo sostenible en ALC

Con tan solo un 20% del PIB, ALC presenta uno de los niveles de inversión total más bajos de todas las regiones del mundo, lo cual obedece, en parte, a las reducidas tasas de ahorro nacional. Desde el año 2000, el ahorro interior bruto alcanzó una media del 20% del PIB, frente al 35% del PIB en las economías de Asia Oriental y el Pacífico. El sector privado es la mayor fuente de inversión en casi todos los países de ALC (78% de la inversión total en 2019 en promedio), si bien esta inversión sigue concentrada en las grandes empresas. El sector público debe desempeñar un papel crucial mediante la inversión en infraestructura pública estratégica y la movilización de la inversión privada. Para ello, el sector público puede apoyar actualizando los marcos regulatorios de inversión y asegurando una buena regulación de las asociaciones público-privadas (APP), bajo marcos institucionales sólidos.

La IED representa una oportunidad para impulsar la productividad y la innovación y para crear empleo de calidad

Pese a que la inversión doméstica sigue siendo baja en ALC, la región ha atraído niveles relativamente altos de inversión extranjera directa (IED). En 2022, fue la región del mundo que registró, en términos relativos, las mayores entradas de IED (equivalente al 4% del PIB de la región). A título ilustrativo, el Plan Marshall adoptado para impulsar la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial ascendió a cerca del 2% del total de rentas nacionales de los países receptores entre 1948 y 1951 (13 000 millones de dólares estadounidenses (USD) en 1948, equivalentes a 160 000 millones en 2022). Por su parte, la IED en ALC superó el 3% del PIB durante los períodos 2017-19 (464 000 millones de USD) y 2020-22 (445 000 millones de USD) y alcanzó el 4% del PIB en 2022. Las empresas extranjeras tienden a ser más productivas e invierten más en innovación de productos y

en investigación y desarrollo (I+D) que las empresas nacionales. Estas diferencias sugieren que existe un potencial importante para la transferencia de conocimiento y tecnología desde las empresas extranjeras a las empresas nacionales. Asimismo, las empresas extranjeras presentes en ALC suelen ofrecer salarios promedio más altos y emplear a una proporción más elevada de trabajadores no cualificados. Además, son más proclives a ofrecer oportunidades de capacitación a sus empleados para mejorar sus competencias y aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo en el futuro. El impacto de la IED en términos de creación de empleo varía significativamente dependiendo del país del que procede y del sector en el que se invierte. La inversión procedente de la UE y de Estados Unidos ha incidido de manera especialmente positiva en la creación de puestos de trabajo en el sector manufacturero de ALC. La IED en energías renovables en ALC crea más empleos que la destinada a los combustibles fósiles.

La inversión en I+D y en sectores emergentes puede transformar la estructura productiva

La estructura productiva en ALC se caracteriza por niveles bajos de productividad. La inversión en capital físico, conocimientos e innovación, ya sea doméstica o extranjera, será un factor fundamental de la transformación productiva. La inversión en I+D se ha mantenido baja en las dos últimas décadas, en torno al 0.65% del PIB en promedio, muy por debajo de la media de la OCDE, en torno al 2.7% del PIB en 2022, y casi el 60% corre a cargo del sector público. Asimismo, la inversión en sectores estratégicos permitirá a la región aprovechar nuevas oportunidades, como las asociadas con la transición verde y la transformación digital. Estos sectores estratégicos pueden agruparse en cuatro grandes áreas, que están interrelacionadas y donde se están generando nuevas oportunidades de inversión y creación de empleo: i) la transición verde; ii) la transformación digital; iii) salud y la economía del cuidado; y iv) agricultura y sistemas de alimentos sostenibles. En términos de creación de empleo verde, varias actividades muestran un elevado potencial, como la fabricación sostenible de alimentos, la administración pública (por ejemplo, en relación con la planificación e implementación de políticas sostenibles); la construcción sostenible; el transporte sostenible; y el comercio sostenible (por ejemplo, vinculado a modelos empresariales más sostenibles y circulares). Dado que las nuevas ocupaciones verdes están relacionadas en su mayoría con habilidades y conocimientos científicos avanzados, se observa una mayor probabilidad de que quienes las desempeñen sean hombres con educación superior y con empleos formales. Esto significa que son necesarias políticas activas de mercado laboral para aprovechar el potencial de formalización del empleo asociado a la transición verde, con una especial consideración a reducir el sesgo de género que se observa en estos empleos.

Una nueva agenda de inversión requiere movilizar recursos financieros mediante instrumentos innovadores

Una agenda de inversión ambiciosa y amplia requerirá una implicación mucho mayor tanto del sector público como del privado. Es fundamental avanzar hacia sistemas impositivos más eficaces y progresivos, una mayor eficiencia del gasto público y de la gestión de la deuda, y marcos fiscales más sólidos y sostenibles para impulsar la inversión pública en un contexto caracterizado por un espacio fiscal limitado. Existen, al menos, dos áreas con potencial para mejorar el flujo de recursos financieros privados y públicos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, las instituciones de financiamiento del desarrollo pueden jugar un papel clave para facilitar el acceso a financiamiento por parte del sector productivo, dado que el 75% de las necesidades de financiamiento de las mipymes no están siendo cubiertas en ALC, y pueden impulsar inversiones en sectores estratégicos. El segundo ámbito es el desarrollo de instrumentos de financiamiento

innovadores, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS). Estos bonos representan el 32% del total de las emisiones internacionales de bonos en ALC.

Instituciones más fuertes son clave para vincular las inversiones con los objetivos de desarrollo nacionales y con las demandas de la ciudadanía

Es fundamental favorecer y promover un mayor diálogo en torno a la agenda de inversión, para mejorar el impacto de estas inversiones en el desarrollo, ayudando además a aumentar su legitimidad y fortaleciendo así el contrato social. Es necesario impulsar la confianza en la inversión privada, ya que más de la mitad de los ciudadanos de la región confiaba poco en las empresas nacionales e internacionales en 2020. Igualmente, la percepción positiva con respecto a la IED descendió hasta un nivel de 53% en ese año. Los gobiernos han de establecer mecanismos que promuevan una participación ciudadana efectiva, evaluaciones de impacto, y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de los proyectos de inversión. Los planes nacionales de desarrollo (PND) pueden proporcionar los marcos de política integrales, bien coordinados y de largo plazo que son necesarios para llevar a la práctica estrategias de inversión y de transformación productiva coherentes. Estos planes pueden servir también como catalizadores para atraer inversión privada, al mejorar la previsibilidad y la transparencia de las políticas, y pueden incluir orientaciones de política pública asociadas a sectores estratégicos con un elevado potencial de desarrollo en la región.

Alianzas internacionales para movilizar mejores inversiones

Las alianzas internacionales pueden crear sinergias entre organizaciones internacionales, gobiernos, expertos, agencias de desarrollo e instituciones del sector privado con el fin de atraer inversiones que contribuyan a la transformación productiva de ALC. Estas alianzas pueden atraer inversiones privadas a través de mecanismos innovadores, como la financiación mixta, para movilizar recursos adicionales hacia proyectos de desarrollo sostenible. Durante la última década, la financiación privada movilizada por las intervenciones oficiales de financiación del desarrollo en ALC aumentó de 3 000 millones de USD en 2016 a 9 000 millones de USD en 2021. Las alianzas internacionales también pueden ayudar a generar un mayor impacto socioeconómico en las inversiones, creando un entorno propicio para la inversión; fomentando la colaboración entre instituciones, como los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones de financiamiento del desarrollo, las agencias de crédito a la exportación, las agencias de promoción de las inversiones y el sector privado; o impulsando el desarrollo local mediante la aplicación de requisitos de contenido local. La integración regional y, en particular, los esfuerzos para la integración productiva pueden servir como un elemento adicional para promover la movilización de mayores y mejores inversiones. Por último, la Agenda de Inversiones *Global Gateway* de la UE en ALC identifica oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Esta herramienta, junto con los mecanismos renovados de diálogo y coordinación entre los actores implicados en la inversión, el comercio y el desarrollo pueden ser útiles para acompañar nuevas iniciativas de reindustrialización. Para alcanzar este objetivo, la agenda debería estar alineada con las prioridades nacionales y garantizar que los flujos de inversión se ajusten a criterios comunes de calidad, sostenibilidad e inclusión.

Resumen

Invirtiendo para un desarrollo sostenible

América Latina y el Caribe (ALC) necesita una agenda de inversión ambiciosa y amplia para emprender una trayectoria de desarrollo más sólida y sostenible. Para cerrar las brechas de inversión existentes y superar los retos estructurales de la región, es esencial aumentar la inversión tanto doméstica como extranjera. Estas inversiones deben ser un catalizador de empleos de calidad y de una mejor estructura productiva, aprovechando las ventajas comparativas de ALC y las oportunidades generadas por las transiciones verde y digital. Fortalecer las instituciones públicas es fundamentales para promover inversiones públicas y privadas eficaces y eficientes y alinearlas con las estrategias nacionales de desarrollo y las prioridades de los ciudadanos. Además, los mecanismos de financiación innovadores, un papel renovado para las instituciones financieras de desarrollo y unas alianzas internacionales revitalizadas son aspectos clave para hacer de esta nueva agenda de inversión un instrumento que encamine a la región hacia un mayor bienestar para todos los latinoamericanos.

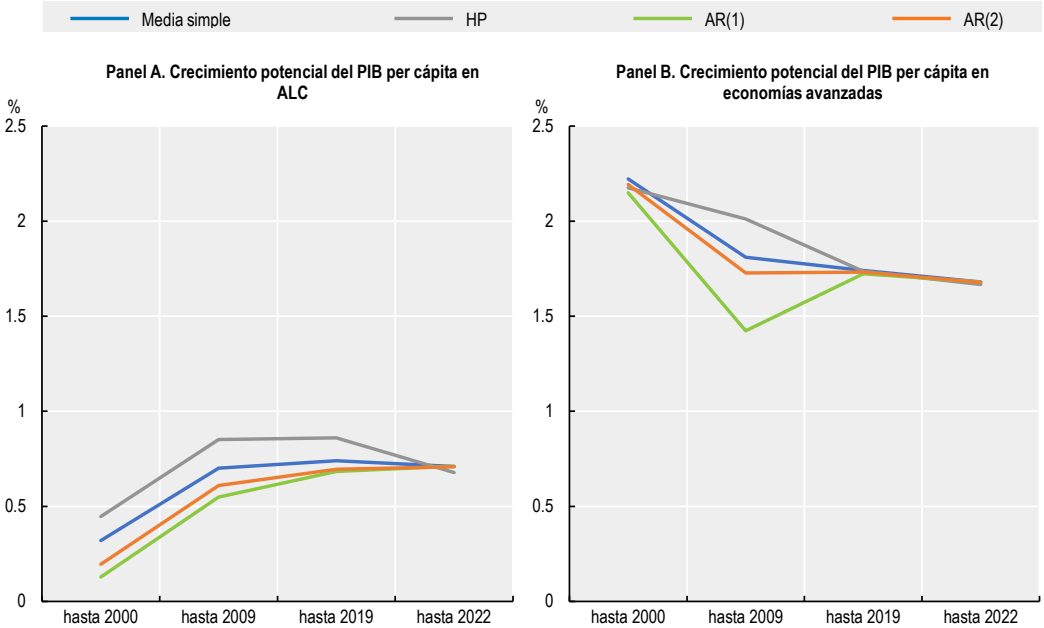
ALC necesita aumentar su crecimiento potencial y mejorar sus condiciones sociales en un contexto complejo

La actividad económica en América Latina y el Caribe (ALC) se ha desacelerado en 2023. Tras la contracción causada por la pandemia del COVID-19, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la región había repuntado en 2021 hasta superar el 6%. Esta expansión se debió fundamentalmente al estímulo fiscal y monetario, a la mejora de las condiciones externas y a un efecto base. En 2022, las condiciones externas se tornaron menos favorables, las transferencias públicas se redujeron, la política monetaria se endureció y los efectos de la reapertura de las economías se disiparon. En 2022, el PIB de ALC creció casi un 4% en promedio, y la mayoría de los países de la región recuperaron los niveles de producto previos a la pandemia. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica en 2023 sugiere que ALC está volviendo a los niveles bajos de crecimiento observados antes de la pandemia.

Este descenso obedece a debilidades estructurales persistentes que limitan el crecimiento potencial de la región, agravadas por el impacto de un contexto mundial desfavorable. El crecimiento potencial del PIB per cápita ha sido inferior al 1% desde 1980, aunque aumentó ligeramente después del auge de las materias primas que se produjo entre 2003 y 2013. Desde entonces, se ha estancado en torno al 0.7% y se ha mantenido sistemáticamente por debajo de la tasa media registrada en las economías avanzadas, que es casi 1 punto porcentual más alta, lo que dificulta la convergencia (Gráfico 1). La coyuntura global también está dificultando el crecimiento en los países de ALC. Las perspectivas de la economía mundial siguen siendo débiles, con condiciones monetarias y fiscales más restrictivas en todas las principales economías, así como una recuperación menos potente de lo previsto en la República Popular China (en adelante, "China") (ECLAC, 2023[1]; OECD, 2023[2]).

Gráfico 1. **Crecimiento potencial del PIB per cápita en ALC y en economías avanzadas**

Estimado por distintos métodos desde 1980



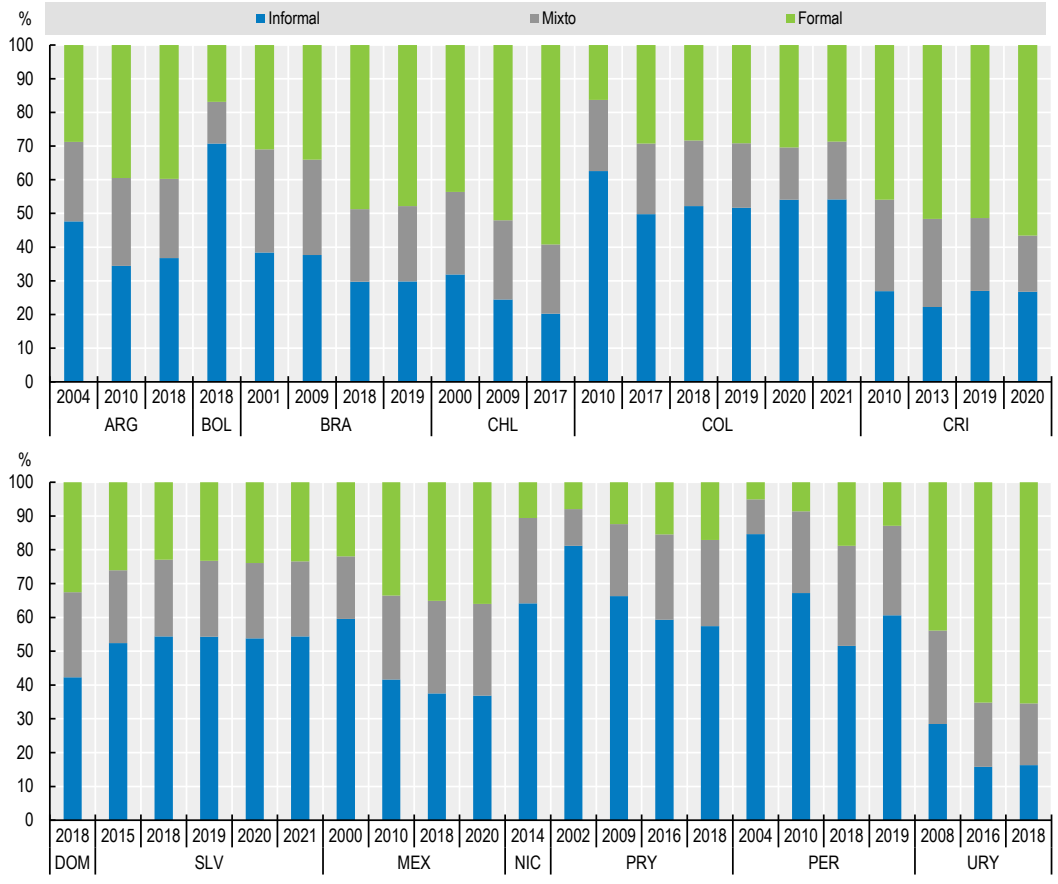
Nota: El crecimiento medio es una media simple del período analizado. HP se refiere al filtro Hodrick-Prescott, que se utilizó como modelo alternativo debido a su resistencia a las perturbaciones a corto plazo para obtener una representación de curva atenuada (lambda 100). AR hace referencia a un modelo autorregresivo, que utiliza datos de crecimiento del PIB per cápita. El número de rezagos (1 y 2) se determinó analizando la función de autocorrelación y eligiendo el modelo que maximizaba la log-verosimilitud. La serie de ALC y economías avanzadas se refiere a los países incluidos en la base de datos de *Perspectivas de la economía mundial* del Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 2023.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (FMI, 2023[3]).

StatLink https://stat.link/epcq7o

Las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles en ALC, con niveles de pobreza y pobreza extrema que se mantienen en niveles similares a los de antes de la pandemia en más de la mitad de los países ALC. En 2022, el 29% de la población de ALC vivía en la pobreza y el 11.2% estaba en situación de pobreza extrema. Uno de los principales desafíos para dar respuesta a esta situación es la persistencia de altos niveles de informalidad laboral, que se traducen en salarios más bajos y falta de acceso a la protección social. En promedio, la tasa de empleo informal en ALC se situó en 2022 en el 48.7% (ECLAC/ILO, 2023[4]). Antes de la pandemia, el 42.8% de la población de la región vivía en hogares que dependían exclusivamente del empleo informal y el 21.8% pertenecía a hogares mixtos, es decir, hogares con trabajadores formales e informales. Por lo tanto, dos tercios de la población de la región dependía total o parcialmente del empleo informal, aunque con importantes variaciones entre países (Gráfico 2).

Gráfico 2. **Distribución de los trabajadores informales a nivel de los hogares, selección de economías de ALC**



Nota: Las economías seleccionadas son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (OECD, 2021[5]).

StatLink https://stat.link/jkatpd

El aumento de la inflación socavó el poder adquisitivo en ALC y afectó severamente a las poblaciones más vulnerables. En el primer semestre de 2023, el efecto negativo de la inflación fue considerablemente más acentuado para los hogares en situación de pobreza extrema, que tuvieron que afrontar un aumento medio de los precios 4.1 puntos porcentuales más alto que el promedio de los hogares. En una muestra de economías de ALC, las mayores diferencias entre el impacto de la inflación en la población general y en

hogares en extrema pobreza se observaron en Argentina (11.6 puntos porcentuales) y Perú (7.0 puntos porcentuales).

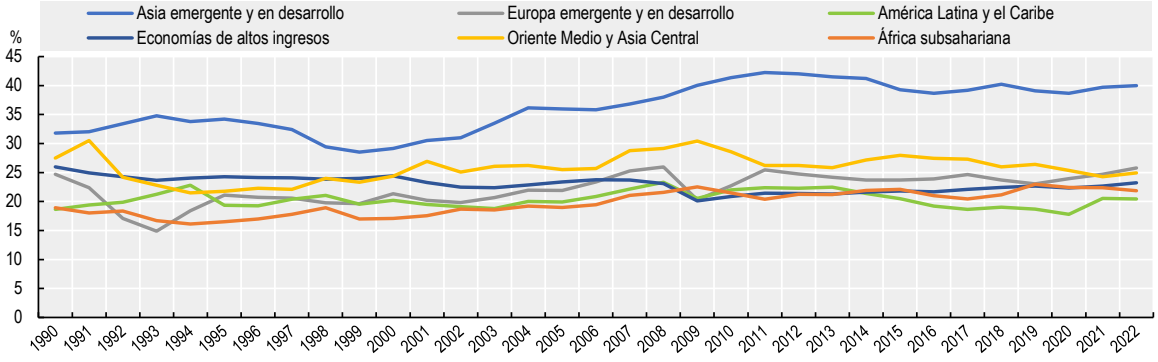
La inversión puede impulsar el desarrollo sostenible en la región

Se necesita más y mejor inversión para elevar el crecimiento potencial y crear más empleo formal; para transformar la estructura productiva y aprovechar las ventajas comparativas de ALC; y para maximizar el potencial de las profundas transformaciones que se están produciendo a escala global, como las transiciones verde y digital.

Los sectores público y privado deberían movilizar más y mejores inversiones

ALC presenta uno de los niveles de inversión total más bajos de todas las regiones a nivel global —tan solo un 20% del PIB—, aunque con importantes divergencias entre los países de la región (Gráfico 3). Tras alcanzar el 23.3% en 2008, los niveles de inversión como porcentaje del PIB han sido relativamente bajos, en particular entre 2016 y 2020, cuando se situaron por debajo del 20% del PIB, y solo se recuperaron ligeramente en 2021 y 2022. Dentro de la región, la inversión como porcentaje del PIB presenta variaciones considerables. Los únicos países que lograron un incremento sostenido de los niveles de inversión entre 2014 y 2022 fueron Antigua y Barbuda, la República Dominicana, Granada, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Paraguay.

Gráfico 3. **Inversión total como porcentaje del PIB en ALC y regiones seleccionadas, 1990-2022**



Nota: Como en la base de datos del FMI, los datos de cada región son medias ponderadas. La inversión, definida como formación bruta de capital, se mide por el valor total de la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y las adquisiciones menos las cesiones de objetos valiosos de una unidad o sector [SCN 1993]. Se expresa como la relación entre la inversión total en moneda local corriente y el PIB en moneda local.

Fuente: (IMF, 2023[6]).

StatLink https://stat.link/m5i7ec

Los niveles de inversión varían considerablemente entre sectores económicos. Casi la mitad de la inversión total en ALC entre 1990 y 2018 fue absorbida por el sector manufacturero (22.7%) y los servicios generales (21.1%). El sector del comercio recibió el 13.7%; la minería, el 12.4%; la agricultura, el 9.4%, y el transporte, el 10.9%. Los servicios esenciales, incluidos la electricidad, el gas y el agua, recibieron 7.2% de la inversión total en ese período (ECLAC, 2022[7]).

Los bajos niveles de inversión en ALC obedecen, en parte, a las reducidas tasas de ahorro doméstico en la región. En promedio, un incremento del ahorro nacional equivalente a 1 punto porcentual del PIB se traduce en un aumento de la inversión doméstica de 0.39 puntos porcentuales, aunque con una fuerte heterogeneidad en la región (Cavallo y Pedemonte, 2015[8]). Pese a estas amplias variaciones entre países, ALC ha presentado sistemáticamente tasas bajas de ahorro interno bruto, con un promedio próximo al 20%

del PIB desde 2000. Este nivel es considerablemente más bajo que el 35% del PIB de ahorro que se observa en las economías de Asia Oriental y el Pacífico.

El sector privado es la mayor fuente de inversión en casi todos los países de ALC, pero esta inversión sigue concentrada en las grandes empresas. En 2019, el 78% de la inversión total se originó en el sector privado, por debajo de la media de la OCDE de 84%. La inversión privada en ALC está muy concentrada: el 1%, el 5% y el 10% de las principales empresas de la región generan, en promedio, el 25%, el 55% y el 69% de la inversión a largo plazo, respectivamente.

El sector público debe desempeñar un papel crucial en el fomento del desarrollo sostenible, especialmente mediante la inversión en infraestructura pública estratégica. Sin embargo, la inversión pública en infraestructura ha permanecido en niveles bajos en las últimas décadas, en particular desde 2008, situándose en 2021 en el 1.6% del PIB (Infralatam, 2022[9]). Algunos de los principales sectores en los que se necesitan inversiones en infraestructura pública son los de energías limpias, transporte sostenible, telecomunicaciones y agua. La inversión en infraestructura de telecomunicaciones y de transporte puede actuar como catalizador de un mayor crecimiento y conectividad, tanto a nivel nacional como subnacional, al permitir que las empresas nacionales e internacionales se conecten con otras regiones y se integren en los mercados nacionales, regionales y mundiales. Del mismo modo, una infraestructura de calidad en los sectores de la energía, las telecomunicaciones y el agua puede contribuir a que tanto la transición verde como la digital beneficien a los ciudadanos de la región.

En 2021, las mayores inversiones públicas en ALC se produjeron en el sector del transporte (0.8% del PIB), seguido de la energía (0.3%), las telecomunicaciones (0.25%) y el agua (0.2%). La mayor parte de la inversión pública en infraestructura en ALC se destina al subsector de las carreteras. Es necesario aumentar la inversión pública en otros modos de transporte para avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible. El carácter estratégico de la infraestructura en energía, telecomunicaciones y agua resalta la importancia de incrementar el esfuerzo de inversión pública en estos ámbitos.

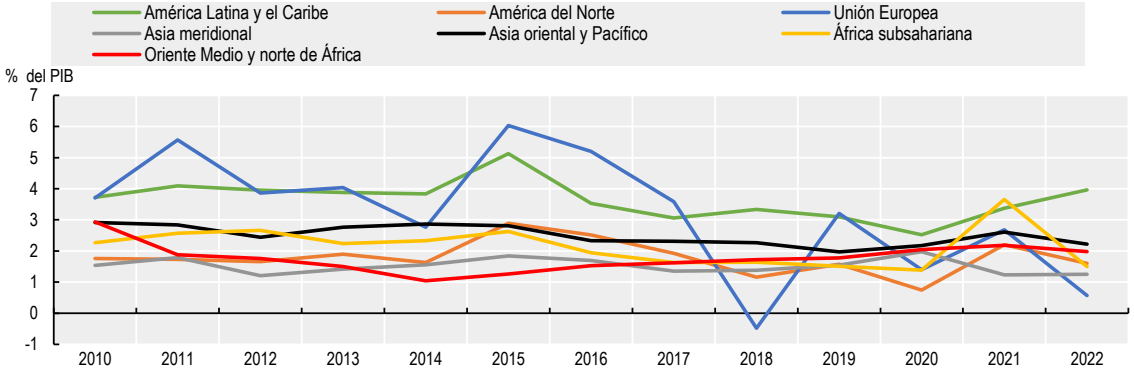
La inversión pública puede atraer más inversión privada, y de mejor calidad, por medio de varios marcos y herramientas. Los gobiernos de ALC pueden fomentar el desarrollo de entornos innovadores para atraer niveles más elevados de inversión, por ejemplo, modernizando los marcos regulatorios en materia de inversión estableciendo condiciones claras y transparentes para los inversores. Además, las asociaciones público-privadas (APP) pueden acelerar el desarrollo de sectores estratégicos y lograr que se avance hacia una matriz de producción más sostenible. Las APP requieren de marcos regulatorios e institucionales efectivos para evitar costos fiscales inesperados como consecuencia de la renegociación de contratos de concesión. Pese a que el porcentaje de APP dedicadas a la mejora de la infraestructura pública en la región continúa siendo modesto (0.46% del PIB), en 2021 ALC se situó por encima de otras regiones en desarrollo como África subsahariana (0.31%), Asia meridional (0.26%), Asia oriental y el Pacífico (0.16%), Oriente Medio y el norte de África (0.05%), pero por debajo de Europa y Asia central (0.47%) (World Bank, 2023[10]).

En conjunto, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, los países de ALC necesitan incrementar sustancialmente tanto el nivel de inversión como su calidad. Para cerrar la brecha entre los niveles de inversión actuales y los necesarios para cumplir los ODS, la región necesitará una inversión estimada de casi 2.22 billones de USD en infraestructura pública, el equivalente a 282 USD per cápita al año de aquí a 2030 (IDB, 2021[11]). Debido a los bajos niveles de ahorro doméstico, los países de ALC se ven obligados a endeudarse en el exterior para financiar sus inversiones, a pesar de que esto en ocasiones puede resultar más costoso e incrementar la exposición a las fluctuantes condiciones externas.

Aunque la inversión doméstica ha sido baja, la región ha conseguido atraer IED

Pese a que la inversión continúa siendo escasa en la región, ALC ha atraído niveles relativamente altos de inversión extranjera directa (IED) en comparación con otras economías emergentes. En 2022, fue la región del mundo que registró las mayores entradas de IED como porcentaje del PIB, una posición que también ocupó, en promedio, en 2018 y 2020. Las entradas de IED fueron equivalentes al 4% del PIB de la región en 2022 (Gráfico 4). Aunque la IED disminuyó un 24% en 2022 a nivel mundial, en ALC los flujos de entrada de IED aumentaron un 55%, alcanzando casi los 225 000 millones de USD. Para poner estos montos en perspectiva, la IED en ALC en los períodos 2017-19 y 2020-22 supuso el equivalente al 290% (464 000 millones de USD) y el 278% (445 000 millones de USD), respectivamente, de los recursos financieros proporcionados por el Plan Marshall para impulsar la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial (13 000 millones de USD en 1948, equivalentes a 160 000 millones en 2022). Del mismo modo, mientras que los recursos distribuidos por el Plan Marshall ascendieron a aproximadamente el 2% de los ingresos nacionales combinados de los países receptores entre 1948 y 1951 (Eichengreen, 2010[12]), la IED en ALC superó el 3% del PIB en los períodos 2017-19 y 2020-22 (llegando al 4% del PIB en 2022).

Gráfico 4. **Entradas de IED como porcentaje del PIB, por regiones, 2010-22**



Nota: Como en (World Bank, 2023[13]), los datos de cada región son medias ponderadas. Para la región de ALC se tuvieron en cuenta 37 países con datos disponibles para 2022: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curasao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Los últimos datos disponibles de Aruba, Curasao y las Islas Caimán corresponden a 2021 y los de Venezuela, a 2014.
Fuente: Elaboración de los autores a partir de (World Bank, 2023[13]).

StatLink https://stat.link/s9bz5c

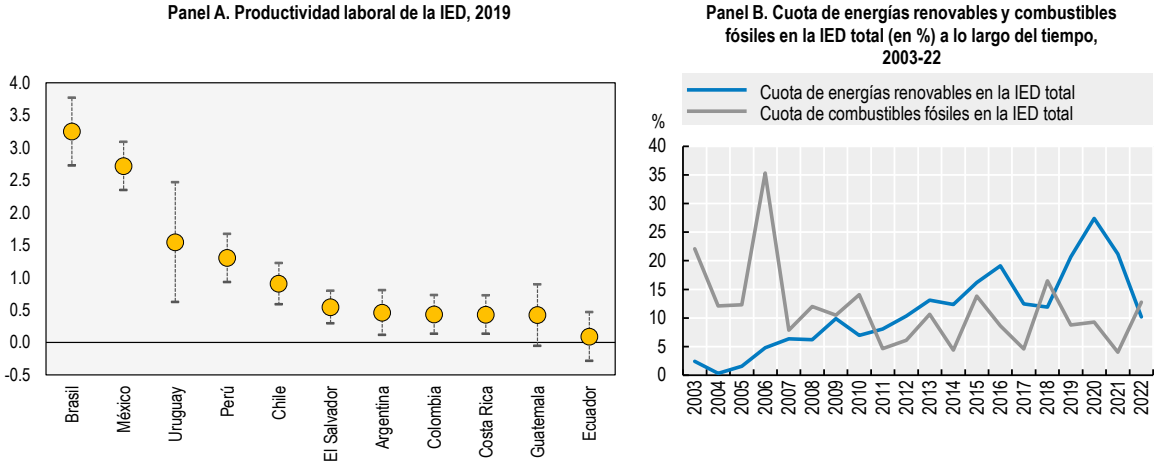
Existe una amplia heterogeneidad en las entradas de IED entre los países de ALC en lo que respecta tanto a su origen como a su destino. En 2022, más de la mitad de las entradas de IED en la región tenían como destino Brasil o México, mientras que América Central registró un descenso del 11.9%. En cuanto a su origen, y sobre la base de los anuncios de proyectos, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han proporcionado sistemáticamente más de la mitad de la IED de la región. Alrededor del 8% de la IED en la región procedió de países de ALC, seguidos de China (4%), el Reino Unido (4%) y Canadá (2%) (fDI Markets, 2023[14]).

La IED representa una oportunidad para impulsar la productividad, la innovación y el desarrollo de sectores estratégicos como, por ejemplo, las energías renovables. Los indicadores de la calidad de la IED elaborados por la OCDE, que se utilizan para medir el impacto de la inversión internacional en el desarrollo sostenible, muestran que los inversores extranjeros son más productivos que las empresas nacionales en la mayoría de los países de ALC (Gráfico 5, Panel A), son más propensos a introducir innovaciones en sus

productos y a invertir en investigación y desarrollo (I+D). Estas diferencias en términos de productividad e innovación sugieren que existe la posibilidad de que las empresas extranjeras transfieran sus conocimientos y tecnologías a las empresas nacionales. Asimismo, en lo que respecta al desarrollo de sectores estratégicos, la IED en proyectos de energías renovables completamente nuevos ha superado a la IED en proyectos totalmente nuevos de combustibles fósiles de forma casi constante desde 2011 (Gráfico 5, Panel B). Esto ha ocurrido en particular en países como Paraguay, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Honduras y Chile, donde la IED en energías renovables ha dominado el sector energético y ha atraído una proporción considerable de la IED total en proyectos completamente nuevos durante el período 2003-22.

Gráfico 5. **Indicador de la calidad de la IED para la productividad y evolución de la IED en proyectos completamente nuevos, por tipo de energía**

Países de ALC seleccionados



Nota: En el Panel A, los puntos naranjas corresponden a la estimación del indicador, mientras que las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza correspondiente. Si el valor es >0, las empresas extranjeras obtienen mejores resultados que las nacionales. Basado en datos de 2019 o el último disponible. Para más detalles metodológicos, véase www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm. El Panel B muestra la cuota de toda la IED en proyectos completamente nuevos abiertos y anunciados en energías renovables y combustibles fósiles como porcentaje de toda la IED realizada en proyectos completamente nuevos en ALC a lo largo del tiempo. En dicho panel, ALC está integrada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (OECD et al., 2021[15]; OECD, forthcoming[16]; OECD, 2019[17]).

StatLink https://stat.link/jesofm

La inversión puede ser un catalizador para la creación de empleo y la mejora de las condiciones del mercado de trabajo

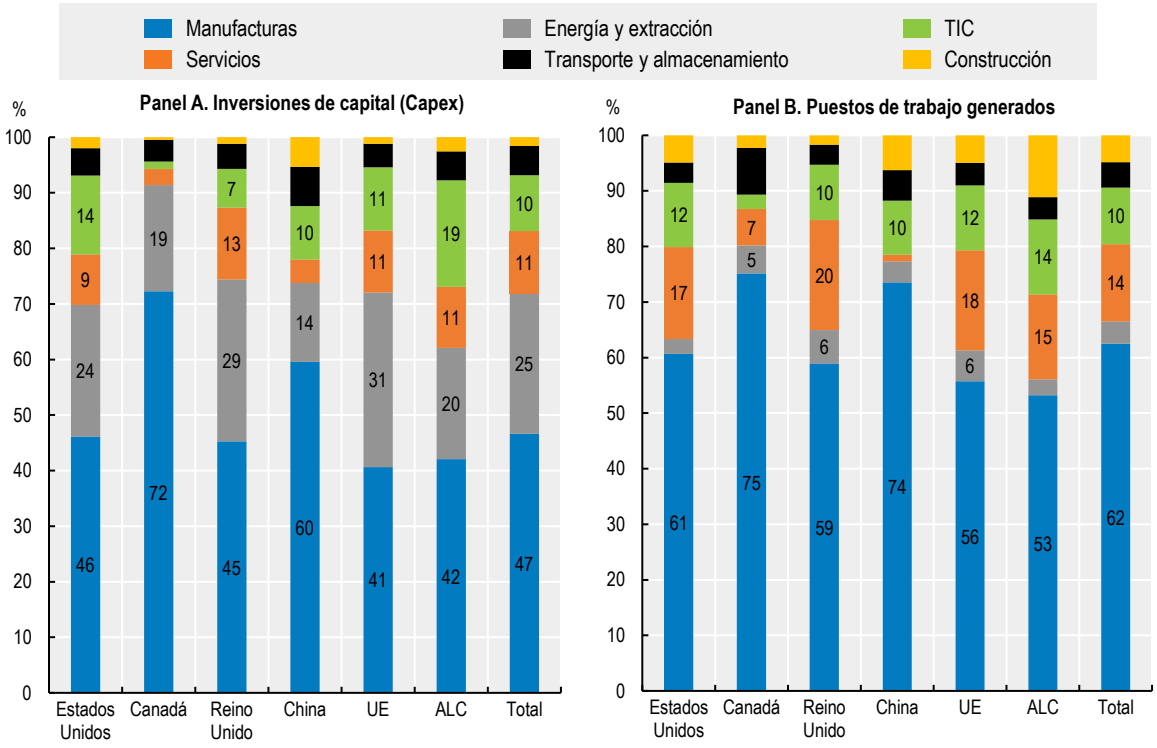
Las inversiones pueden crear nuevos empleos formales en la región de ALC. No obstante, su potencial para incidir de manera favorable en la evolución del mercado laboral dependerá mucho del tipo de inversión, de los sectores en los que se invierta y de las políticas que se apliquen en torno a esas inversiones, incluidas las de protección social, educación y capacitación.

La IED tiene un impacto especialmente importante en las condiciones del mercado de trabajo. Las empresas extranjeras presentes en ALC suelen ofrecer salarios medios más altos y emplear a una proporción más elevada de trabajadores no cualificados que las empresas nacionales, y también son más proclives a ofrecer oportunidades de capacitación (OECD, 2022[18]). Por tanto, los inversores extranjeros son una importante fuente de empleo para los trabajadores no cualificados de la región y pueden contribuir de manera considerable a mejorar sus competencias y a aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo en el futuro.

El impacto de la IED en términos de creación de empleo varía significativamente dependiendo del país del que procede y del sector que recibe la inversión. La inversión procedente de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos ha incidido de manera especialmente positiva en la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, los resultados varían significativamente entre las distintas actividades económicas, como se observa en el sector manufacturero y en el energético y extractivo, los principales destinatarios de la IED total. Concretamente, el 56% de los empleos creados en ALC por la IED de la UE pertenecían al sector manufacturero, que recibió el 41% del capital invertido procedente de la UE. De manera similar, el 61% de los puestos de trabajo creados en la región por la IED de Estados Unidos pertenecían a ese mismo sector, que fue el destinatario del 46% de la IED total procedente de Estados Unidos. En cambio, el 31% del capital procedente de la UE se invirtió en el sector energético y extractivo, pero este tan solo creó el 6% de los empleos. Del mismo modo, el 24% de la IED procedente de Estados Unidos tuvo como destinatario el sector energético y extractivo, que únicamente creó el 3% del total de puestos de trabajo (Gráfico 6). Por último, la IED en energías renovables en ALC genera en promedio un 60% más de empleo que la destinada a los combustibles fósiles. Por ejemplo, 1 000 millones de USD invertidos en combustibles fósiles crean, en promedio, alrededor de 500 nuevos puestos de trabajo, mientras que la misma cantidad invertida en energía renovable se traduce en la creación de 800 empleos.

Gráfico 6. **Inversiones de capital y empleos formales creados por la IED en ALC, enero 2003-mayo 2023**

Por sector y país de origen



Nota: TIC = tecnologías de la información y la telecomunicación. Capex = inversiones de capital. Los datos abarcan de enero de 2003 a mayo de 2023. Energía y extracción incluye: carbón, petróleo y gas; minerales y energías renovables. Servicios incluye: servicios empresariales, servicios financieros, servicios de salud, hostelería y turismo, y ocio y entretenimiento. Construcción incluye el sector inmobiliario. TIC incluye: comunicaciones, *software* y servicios informáticos. ALC incluye 27 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (fDi Markets, 2023[19]).

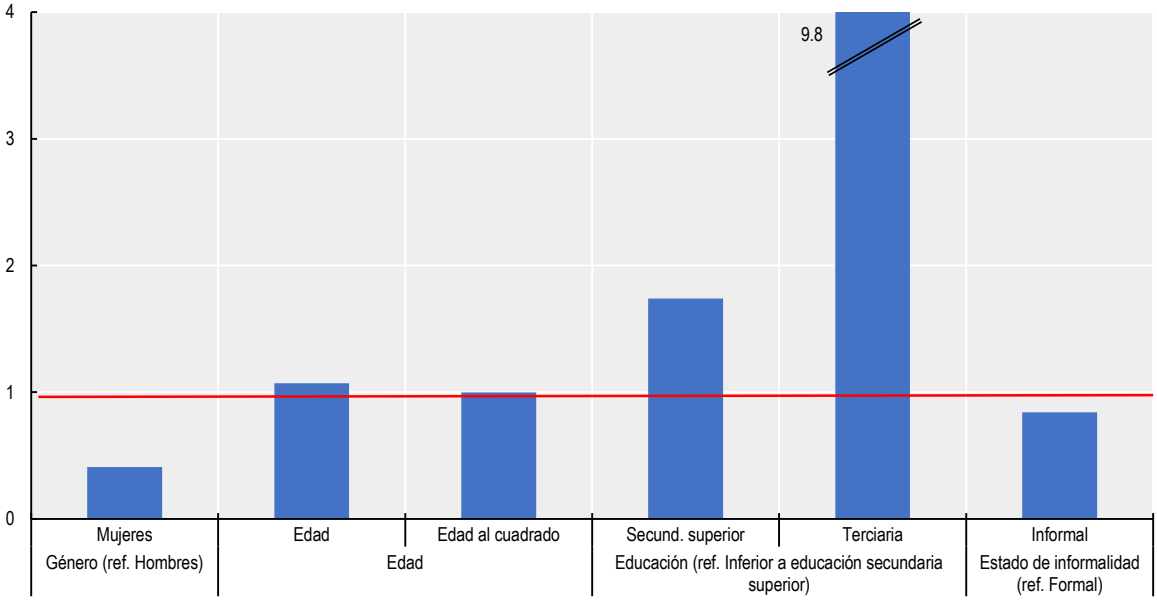
StatLink https://stat.link/mltdu9

Los sectores emergentes ofrecen importantes oportunidades en materia de creación de empleo. En un escenario en el que la inversión en sectores verdes experimentase un incremento anual de 3 puntos porcentuales, la creación neta de empleo adicional podría alcanzar el 10.5% de aquí a 2030 (OECD et al., 2022[20]). En particular, en términos de creación de empleo verde, varias actividades muestran un alto potencial: la producción sostenible de alimentos (+18.8% de nuevos empleos verdes proyectados para 2030), que está relacionada con modelos de producción más sostenibles en agricultura, alimentación y bebidas, y productos intermedios; la administración pública (+14.6%) incluye actividades relacionadas con la planificación e implementación de políticas sostenibles (desde la administración general hasta el desarrollo local sostenible y políticas energéticas), y que también comprende la supervisión y administración de la vida social y económica, incluyendo actividades públicas relacionadas con la economía social; la construcción sostenible (+14.3%), vinculada principalmente a nuevas construcciones, instalaciones y terminaciones de edificios sostenibles para mejorar la eficiencia energética de los edificios gracias al uso de nuevas tecnologías, y que también incluye reparaciones, ampliaciones y reformas para mejorar las construcciones existentes desde el punto de vista medioambiental; el transporte sostenible (+14.1%), que refleja la necesidad de adoptar sistemas de transporte de pasajeros y mercancías más sostenibles, y de apoyar las actividades de transporte sostenible, incluidas las relacionadas con la transformación digital y las telecomunicaciones; por último, el comercio sostenible (14.1%) representa los nuevos modelos de negocio de venta de bienes y servicios, y de reparación de bienes que deberían contribuir al desarrollo de la economía circular.

El desarrollo de los sectores verdes requiere también de inversiones focalizadas en la generación de capital humano, para garantizar que nadie quede atrás. Las nuevas profesiones verdes están relacionadas principalmente con habilidades y conocimientos científicos avanzados, y se observa una mayor probabilidad de que quienes las desempeñen sean hombres con una educación superior, y que se enmarquen en el sector de empleo formal (Gráfico 7). Esto significa que son necesarias políticas activas de mercado laboral para aprovechar el potencial de formalización del empleo asociado a la transición verde, con una especial consideración a reducir el sesgo de género que se observa en estos empleos.

Gráfico 7. **Es más probable que quienes desempeñan trabajos verdes sean hombres, con educación superior y trabajando en el sector formal**

Ratios de probabilidades



Nota: Un ratio de probabilidades superior a 1 indica que es más probable que una condición o acontecimiento se produzca en el primer grupo. Un ratio de probabilidades inferior a 1 indica que es menos probable que el acontecimiento se produzca en el primer grupo. En el gráfico la probabilidad de que las mujeres ocupen un empleo verde es 0.4 veces la de los hombres, lo que significa que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de estar empleadas en una ocupación verde. Los datos se refieren a una muestra colectiva de trabajadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay en 2021. Las tareas verdes se identifican usando la metodología de (Vona et al., 2018[21]).

Fuente: Cálculos de los autores a partir de encuestas nacionales sobre la población activa.

StatLink https://stat.link/wgnqo6

La inversión es clave para la transformación productiva y para aprovechar las oportunidades que ofrecen sectores estratégicos emergentes

La estructura productiva en ALC se caracteriza por niveles bajos de productividad, que han permanecido así durante décadas, lo que ha llevado a que la brecha de productividad con las economías avanzadas continúe ampliándose. En 2023, la productividad laboral en ALC representaba un 27% de la de Estados Unidos, frente a cerca de un 40% a principios de la década de 1980.

Los niveles de productividad muestran un alto grado de heterogeneidad, tanto entre los distintos sectores como entre las empresas dentro de cada sector. En este sentido, en la región conviven sectores muy dinámicos y con una elevada productividad que generalmente se orientan a la exportación con otros menos dinámicos y con altas tasas de informalidad. Esta heterogeneidad se observa también a nivel de las unidades de producción. Las numerosas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) informales con bajos niveles de productividad conviven con empresas emergentes de rápido crecimiento y de base tecnológica.

Transformando la estructura productiva, los países de ALC podrán elevar la productividad, incrementar el crecimiento potencial y crear mejores oportunidades de empleo. La inversión en capital físico, conocimientos e innovación, ya sea de origen doméstico o externo, será un factor fundamental de esta transformación productiva. De manera similar, la inversión en sectores estratégicos permitirá a la región aprovechar oportunidades que aún no se han explotado, sobre todo las asociadas con la transición

verde y la transformación digital. También ayudará a la región a incrementar su dinamismo mediante la modernización tecnológica, la diversificación hacia actividades más intensivas en conocimiento en todos los sectores económicos y la creación de empleo de mayor calidad.

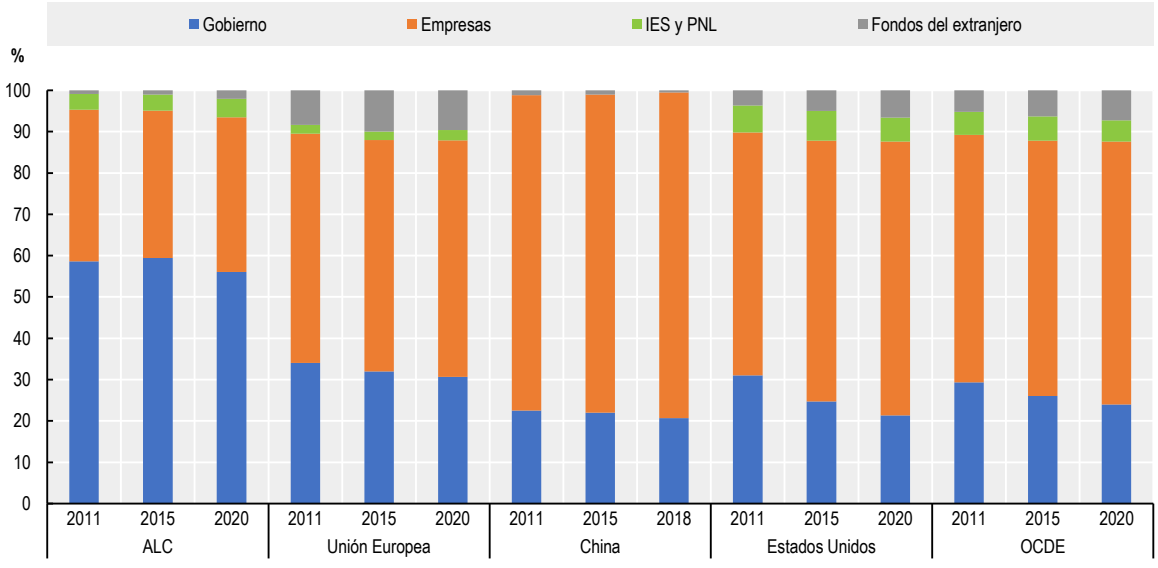
Se necesita inversión en I+D para transformar la estructura productiva de ALC

La innovación es crucial para el desarrollo sostenible y la transformación de la estructura productiva en ALC, pues tiene la capacidad de estimular y prolongar el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, la inversión total en investigación y desarrollo (I+D) en ALC ha permanecido en niveles bajos durante las dos últimas décadas, cerca del 0.65% del PIB entre 2017 y 2020, lo que supone tan solo el 2.3% de la inversión mundial total, y muy por debajo de la media de la OCDE, el 2.7% aproximadamente, en 2022 (RICYT, 2022[22]).

En el gasto en I+D se observa una considerable heterogeneidad entre los países de ALC. En términos absolutos, Argentina, Brasil y México representaron un 86% del gasto en I+D de la región en 2020. Brasil, que es responsable de un 65%, invierte el mayor porcentaje del PIB (casi un 1.2% en 2020), seguido de Argentina y Cuba (0.52%). Por el contrario, los niveles de inversión en I+D de Guatemala y Trinidad y Tobago se sitúan cerca del 0.05% (RICYT, 2022[22]). La gran heterogeneidad de capacidades con que cuentan los países de ALC supone que algunos de ellos enfrentan desafíos específicos en cuanto a la mejora de su sofisticación tecnológica y las posibilidades de innovación de sus estructuras productivas.

En ALC, los gobiernos son la principal fuente de financiamiento de la inversión en I+D, representando casi el 60%[1] del total (Gráfico 8). Esto resalta la necesidad de incrementar la inversión privada en I+D, que en las economías desarrolladas ha ido aumentando de manera constante y se sitúa en torno al 60% en Estados Unidos, la Unión Europea y los países miembros de la OCDE, mientras que en China se aproxima al 80%.

Gráfico 8. **Porcentaje de inversiones en I+D por fuente de financiamiento en ALC y otros territorios, 2011-20**



Nota: IES se refiere a instituciones de educación superior. PNL alude a organizaciones privadas no lucrativas.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (RICYT, 2020[23]) en relación con ALC e Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI) de la OCDE, en relación con los demás territorios.

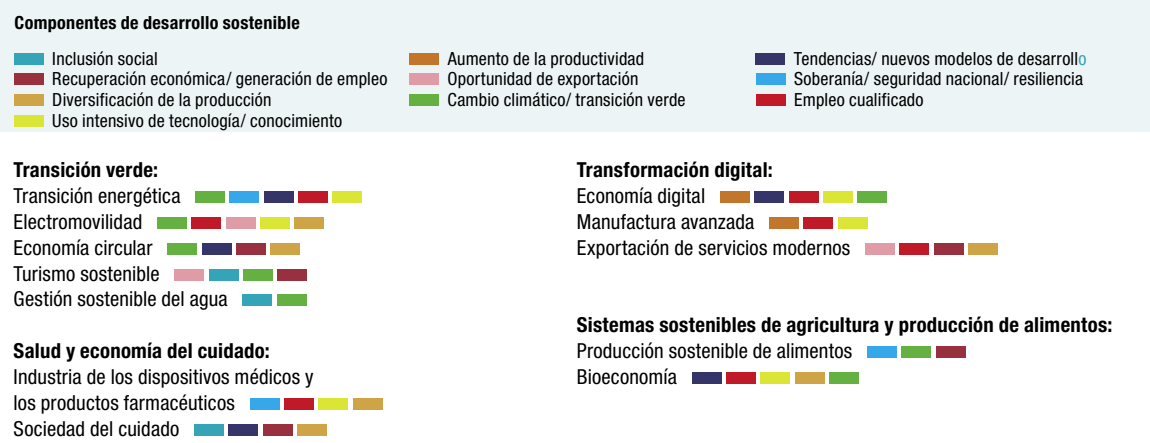
StatLink https://stat.link/pblc03

En ALC, la mayoría de los sectores invierte un porcentaje medio o medio bajo del valor agregado en I+D y, en los últimos años, las solicitudes de patentes han sido presentadas principalmente por no residentes (87%) (WIPO, 2023[24]). Esto contrasta con lo observado en países más desarrollados, en los que las empresas invierten un porcentaje más alto del valor agregado en I+D y la mayoría de las solicitudes de patentes son presentadas por residentes.

La inversión debería canalizarse hacia sectores estratégicos, como los vinculados con las transiciones verde y digital

Los sectores con mayor potencial para incrementar la productividad, crear empleos de mejor calidad y desarrollar cadenas de valor sostenibles e inclusivas pueden agruparse en cuatro grandes áreas, que están interrelacionadas y en los que se están produciendo transformaciones significativas que generan nuevas oportunidades de inversión y de creación de empleo: i) la transición verde; ii) la transformación digital; iii) la salud y la economía del cuidado y iv) los sistemas sostenibles de agricultura y alimentos (Gráfico 9).

Gráfico 9. **Sectores con alto potencial para impulsar un desarrollo sostenible**



Fuente: Elaboración de los autores a partir de (ECLAC, 2023[25]; OECD et al., 2022[20]).

La transición verde requiere una inversión sustancial en nuevas tecnologías y talento humano, y llevará aparejada una gran reasignación de trabajadores de sectores marrones a sectores verdes. En las últimas décadas, los sectores verdes de ALC han mostrado un crecimiento más dinámico (3.3% anual) que el del conjunto de la economía (2.8%). El desarrollo de una industria del hidrógeno verde y la agregación de valor local al sector de las materias primas críticas son dos ámbitos en los que la región tiene un potencial especialmente destacable.

La transformación digital puede contribuir a mejorar la productividad y la competitividad, además de ser una vía para aprovechar el progreso tecnológico. La economía del cuidado y la salud puede ayudar a incrementar la capacidad de resistencia y la preparación para futuras crisis sanitarias mediante el desarrollo de industrias locales más fuertes y autosuficientes, y el refuerzo de la capacidad científica, tecnológica y productiva de la región. Esto puede contribuir a construir sociedades más inclusivas al fomentar servicios de cuidados de salud de calidad y asequibles. Avanzar hacia sistemas de agricultura y producción de alimentos más sostenibles es clave para garantizar la seguridad alimentaria tanto en la región como en el resto del mundo, ya que ALC cuenta con la mayor reserva de suelos con potencial agrícola del mundo.

Para impulsar la inversión se necesitan fuentes de financiamiento innovadoras

La región de ALC necesita movilizar una gran cantidad de recursos de fuentes tanto privadas como públicas para financiar una agenda de inversiones ambiciosa. El reducido espacio fiscal en muchos países de la región limita el margen para la inversión pública, ya restringida por los bajos niveles de recaudación tributaria. Aunque el sector público puede desempeñar un papel destacado, sobre todo invirtiendo en infraestructura de calidad, una agenda de inversión ambiciosa y amplia requiere también de niveles significativamente mayores de inversión privada, que tradicionalmente se ha visto limitada por los bajos niveles de ahorro y las elevadas tasas de interés. Para estimular la inversión, las instituciones de financiamiento del desarrollo (IFD) pueden apoyar el acceso al financiamiento, impulsar las inversiones en sectores clave y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial del financiamiento privado. Asimismo, se pueden desarrollar instrumentos de financiamiento innovadores, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS).

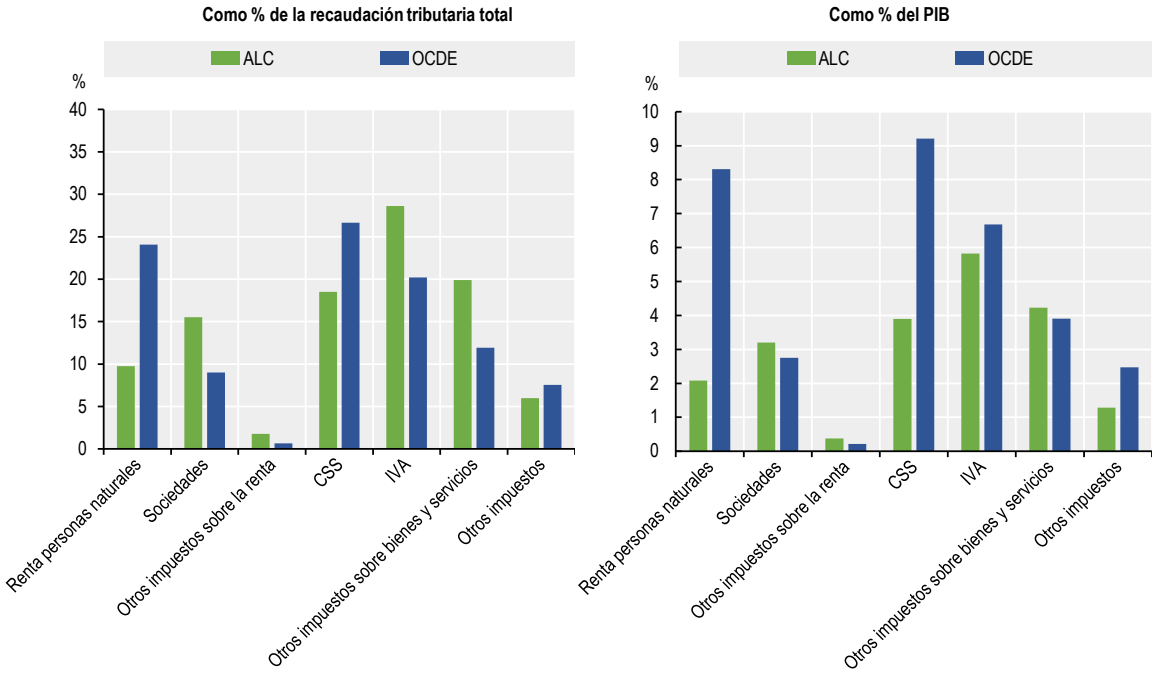
Mejorar la eficiencia del sistema tributario y del gasto debe contribuir a ampliar los recursos disponibles para la inversión pública

Para incrementar la inversión pública será necesario movilizar recursos de distintas fuentes de financiamiento, pero la mayoría de los países de ALC están condicionados por un espacio fiscal limitado. Esto pone de manifiesto la importancia de avanzar hacia sistemas impositivos más eficaces y progresivos, una mayor eficiencia y eficacia del gasto público y de la gestión de la deuda, y marcos fiscales más sólidos y sostenibles (ECLAC, 2022[7]; OECD et al., 2022[20]; OECD et al., 2023[26]).

En cuanto a la recaudación tributaria, el ratio impuestos/PIB en la región de ALC promediaba en 2021 un 21.7%, muy por debajo de la media del 34.1% de las economías de la OCDE. Estos ingresos diferían considerablemente entre los países de ALC, desde el 12.7% del PIB en Panamá hasta el 33.5% en Brasil. Los impuestos indirectos tienen más peso que los directos en las estructuras tributarias de ALC (Gráfico 10). En 2020, los impuestos sobre la renta y los beneficios representaban, en promedio, el 25.2% de la recaudación tributaria en ALC, frente a una media del 33.1% en la OCDE.

Los impuestos sobre las sociedades, relativamente elevados en la región, pueden ser un desincentivo a la inversión y el emprendimiento. Dentro de los impuestos sobre la renta, el impuesto sobre las sociedades aportaba el 15.5% del total de la recaudación en la región, mientras que el impuesto sobre la renta a las personas naturales suponía un 9.7%. En las economías de la OCDE, el impuesto sobre la renta a las personas naturales representa un porcentaje mayor de los ingresos tributarios (24.1%) que el procedente del impuesto sobre las sociedades (9.0%) (OECD et al., 2023[26]). Además, las tasas efectivas del impuesto sobre las sociedades —es decir, las obligaciones fiscales reales de las empresas después de tener en cuenta las disposiciones tributarias vigentes— suelen ser elevadas, como consecuencia del nivel relativamente alto de las tasas estatutarias y la existencia de disposiciones tributarias menos generosas que en otras jurisdicciones.

Gráfico 10. **Estructura tributaria media en la región de ALC y en la OCDE, 2020**



Nota: "Renta personas naturales" hace referencia al impuesto sobre la renta a las personas naturales, "Sociedades" se refiere al impuesto sobre las sociedades, "CSS" denota las contribuciones a la seguridad social e "IVA" se refiere al impuesto sobre el valor agregado.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (OECD et al., 2023[26]).

StatLink https://stat.link/s059ax

En cuanto al gasto público, se podrían aumentar su eficacia y eficiencia a través de una mejor focalización (incluyendo el gasto destinado a fines sociales y los subsidios). Respecto a la deuda pública, esta se sitúa por encima de los niveles observados antes de la pandemia y los pagos de intereses representan un porcentaje mayor del gasto, lo que reduce el margen para la inversión y las políticas anticíclicas.

Es necesaria una mejor gestión de la deuda y un crecimiento económico más elevado para que la deuda se estabilice o se reduzca. La inversión es crucial para que esto sea posible. Las inversiones de capital son esenciales para la transformación productiva. A corto plazo, pueden ayudar a contrarrestar los efectos contractivos del ajuste fiscal. Por lo tanto, la política fiscal debe proteger la inversión pública con marcos fiscales adecuados, incluidas reglas fiscales suficientemente flexibles para adaptarse a los *shocks* externos. Esto puede lograrse mediante la inclusión de objetivos fiscales ajustados cíclicamente, estableciendo cláusulas de escape bien definidas y aplicando un tratamiento diferenciado de los gastos de inversión.

Las Instituciones de Financiamiento del Desarrollo pueden favorecer el acceso a financiamiento de las mipymes y la inversión en sectores estratégicos

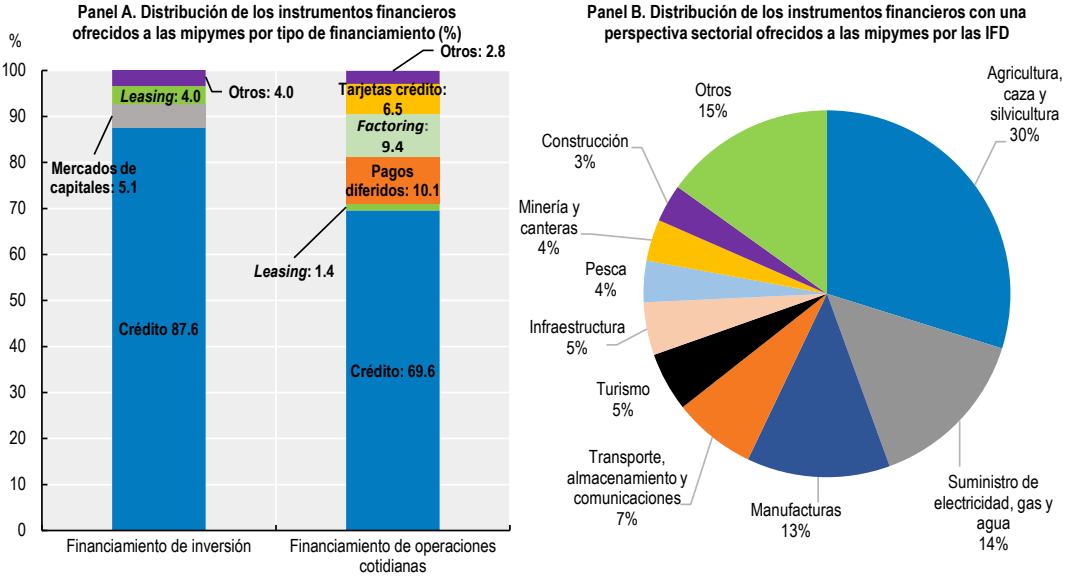
El potencial de las instituciones públicas de financiamiento del desarrollo (IFD) nacionales y subnacionales suele estar subutilizado en los países de ALC. Las IFD cuentan con instrumentos financieros diversos e innovadores que pueden desempeñar un papel clave para abordar la falta de profundidad de los mercados financieros en ALC, redistribuyendo los riesgos y haciendo que los mercados sean más inclusivos. Además, las IFD también tienen potencial para cerrar las brechas de financiamiento que enfrentan las empresas y contribuir a expandir el tamaño del mercado.

El 75% de las necesidades de financiamiento de las mipymes no están cubiertas en ALC. Las IFD pueden realizar una contribución fundamental para subsanar esa carencia. Las IFD públicas en ALC ya tienen un foco importante en las mipymes, como muestra un análisis de 2023 con datos de 38 IFD públicas de los ámbitos nacional y subnacional procedentes de 13 países de la región. Del total de instrumentos utilizados por estas IFD, el 42% se dirige tanto a las mipymes como a las grandes empresas, el 39% únicamente a las mipymes, el 7% a instituciones públicas y el 4% exclusivamente a grandes empresas. El financiamiento ofrecido a las mipymes se destina principalmente a inversiones (45%) y a las operaciones cotidianas (34%). Esto demuestra el compromiso de las IFD para garantizar las necesidades de capital, liquidez e inversión a largo plazo de estas empresas.

Las IFD ofrecen a las mipymes de ALC una amplia gama de instrumentos financieros adaptados a sus necesidades financieras en cada fase de su desarrollo. Los créditos son el instrumento más utilizado para financiar proyectos de inversión (87.6%) y los gastos cotidianos (69.6%), pero también se emplean otros instrumentos, como el *factoring*, los arrendamientos financieros (*leasing*), las garantías y los mecanismos de acceso a los mercados de capitales (Gráfico 11, Panel A).

Las IFD también pueden fomentar la innovación y la inversión a largo plazo en sectores estratégicos, alineándose con las prioridades nacionales de desarrollo. Esto contribuirá a los esfuerzos del sector público para promover la transformación productiva en los ámbitos nacional, subnacional y local. Asimismo, las IFD apoyan las inversiones del sector privado en sectores clave. Del total de instrumentos financieros ofrecidos a las mipymes con una perspectiva sectorial, el 30% se destina a la agricultura, la caza y la silvicultura; el 14% al suministro de electricidad, gas y agua; el 13% al sector manufacturero; y el 7% al transporte, el almacenamiento y las comunicaciones (Gráfico 11, Panel B).

Gráfico 11. **Instrumentos financieros ofrecidos por las IFD a las mipymes, por tipo de financiamiento y sector, 2023**



Nota: La base de datos incluye datos de 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Panel A: La categoría "Otros" incluye los siguientes instrumentos financieros: apoyo financiero no reembolsable; fondos de crédito; garantías; fideicomisos; y cancelación de pasivos. Panel B: La categoría "Otros" incluye los siguientes sectores: comercio mayorista y minorista; intermediación financiera; actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales; administración pública y defensa; educación; sanidad y asistencia social; otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; TIC; e industrias creativas.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) de 38 IFD públicas de 13 países de ALC, consultados en 2023.

StatLink *https://stat.link/klasj2*

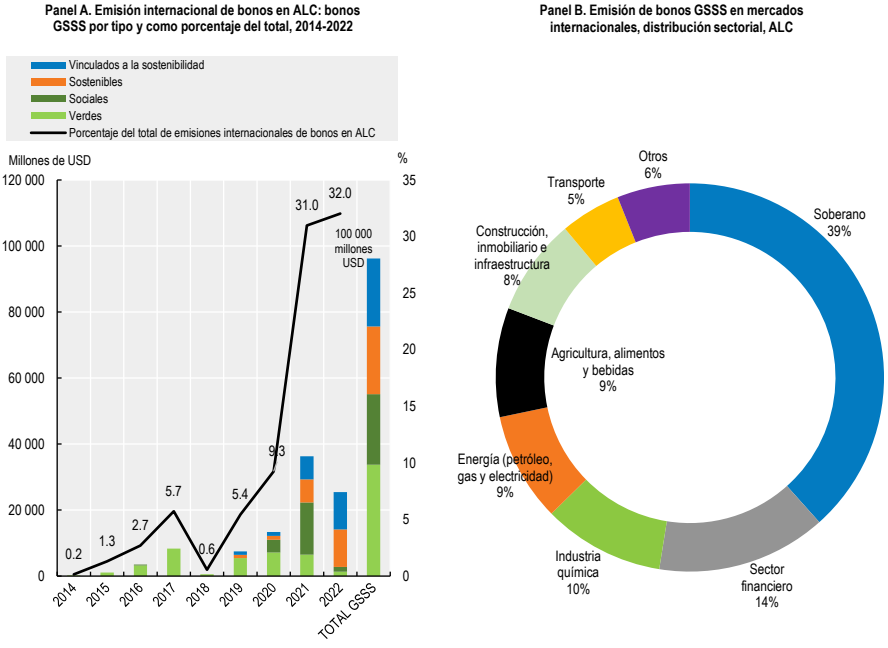
Potenciar el uso de instrumentos de deuda innovadores puede impulsar la inversión pública y privada en ALC

El desarrollo de instrumentos sostenibles de deuda puede ayudar a canalizar recursos hacia sectores clave para el desarrollo. Aunque el mercado de bonos GSSS representa tan solo un 1% del total de activos en circulación y alrededor del 2% de las nuevas emisiones a nivel mundial, constituye una vía prometedora a explorar (OECD, 2022[27]). En ALC, incluso con unos mercados financieros restrictivos, los bonos GSSS son un mecanismo de financiamiento atractivo, que representa el 32% del total de las emisiones internacionales de bonos en la región. Entre 2014 y 2022, el mercado internacional de bonos GSSS alcanzó un valor acumulado cercano a los 100 000 millones de USD, de los cuales la emisión de bonos verdes representó por sí sola un total de 33 400 millones de USD, seguida de los bonos vinculados a criterios de sostenibilidad (24 400 millones de USD) (Gráfico 12, Panel A).

En los últimos años, las emisiones soberanas de bonos GSSS han ido creciendo como proporción del total de bonos GSSS emitidos en ALC. En 2022, la emisión de bonos soberanos GSSS de ALC en los mercados internacionales representó el 35.7% del total de las emisiones soberanas de bonos de todo tipo en los mercados internacionales. Durante los primeros seis meses de 2023, esta cifra aumentó hasta el 43.5%. Hasta junio de 2019, todas las emisiones de bonos GSSS de ALC procedían del sector empresarial. En 2022, los emisores soberanos lideraron las colocaciones totales de bonos GSSS en ALC, con una cuota del 57%, seguidos por las empresas (23%) y los emisores supranacionales y cuasi-soberanos (20%).

Los bonos GSSS también han surgido como instrumentos atractivos para que determinados sectores capten capital y aborden las dificultades sectoriales más acuciantes de la región de ALC. Entre 2014 y abril de 2022, los principales sectores que emitieron bonos GSSS, después de las emisiones soberanas (39%), fueron el sector financiero (14%), la industria química (10%) y el sector energético (9%) (Gráfico 12, Panel B).

Gráfico 12. **Emisión internacional de bonos GSSS en ALC, por tipo, como porcentaje del total y por sector, 2014-22**



Nota: GSSS se refiere a bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. El total de bonos sostenibles para 2022 incluye dos bonos azules emitidos por Bahamas. Panel B: La categoría "Otros" incluye los siguientes sectores: telecomunicaciones; silvicultura y papel; y comercio minorista y productos de consumo.

Fuente: (Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[28]; OECD et al., 2022[19]).

StatLink https://stat.link/d60mye

Los países de ALC están avanzando en ampliar, mejorar y armonizar los marcos de finanzas sostenibles, que son esenciales para regular, supervisar y verificar la emisión de bonos GSSS y otros instrumentos. Contar con marcos más consolidados debe ayudar a reducir los costos de transacción para los inversores, haciendo que los mercados de capitales de la región resulten más atractivos. En la región se han desarrollado taxonomías verdes y sostenibles: se han implementado en México y Colombia, y están en desarrollo en países como Brasil, Chile, Perú y República Dominicana y en subregiones como Centroamérica. En junio de 2023, el sistema de Naciones Unidas en ALC lanzó el primer Marco Común de Taxonomías de Finanzas Sostenibles. Este marco regional se ha concebido como un documento de orientación voluntario para los actores de la región que están en proceso de desarrollar taxonomías o que pretenden iniciarlo. El marco también sirve de orientación para la interoperabilidad de las taxonomías dentro de ALC y a nivel mundial (UNEP, 2023[29]). Para mantener la transparencia del mercado y evitar prácticas de *greenwashing* en el ámbito de los ODS, es fundamental contar con unos sistemas fiables y consolidados de seguimiento y verificación. En ALC, el mercado de bonos GSSS ha avanzado desde el autoetiquetado hasta convertirse en un mercado revisado externamente, pero aún le queda un largo camino por recorrer. Las revisiones externas, es decir, las revisiones previas y/o posteriores a las emisiones de bonos, deben asentarse y mejorarse.

Se necesitan instituciones públicas fuertes que favorezcan la vinculación de las inversiones con las prioridades nacionales y de los ciudadanos

Contar con mejores instituciones públicas es fundamental para garantizar que la inversión y la transformación productiva respondan a las prioridades de los ciudadanos y estén bien conectadas con las estrategias de desarrollo de los países de ALC. Asimismo, reforzando el estado de derecho, la transparencia y la integridad, las instituciones públicas pueden crear un entorno propicio para la inversión, contribuir a generar confianza y reducir la aversión al riesgo.

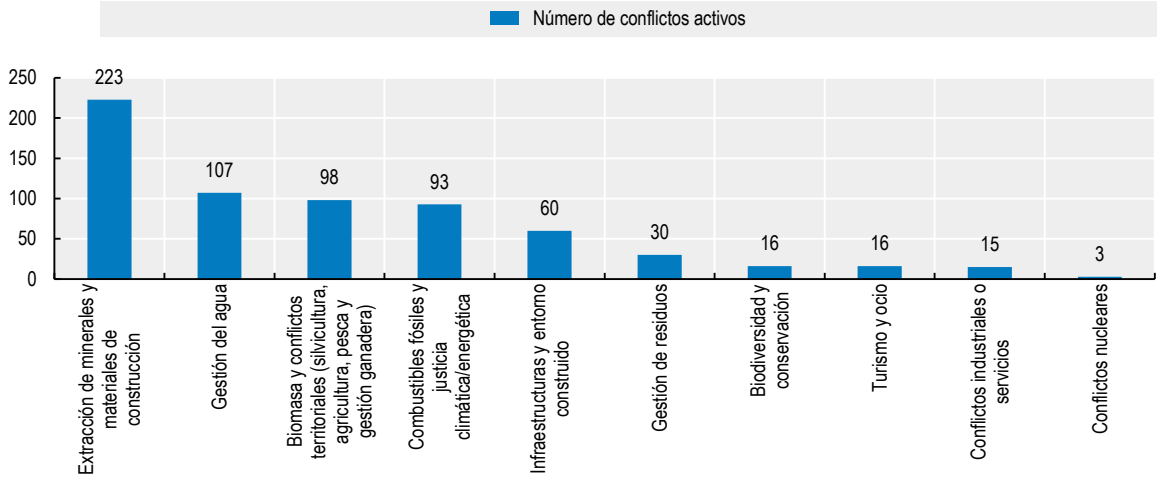
Favorecer el diálogo sobre la agenda de inversión para fortalecer el contrato social

Una agenda de inversión ambiciosa puede tener un impacto significativo en los niveles de vida de la ciudadanía. Para ello, es fundamental contar con la visión y participación de todos los grupos socioeconómicos involucrados, generando así apoyo hacia los esfuerzos de inversión y evitando posibles conflictos. En este sentido, será necesario comprender las prioridades de las partes interesadas e incorporarlas al proceso de elaboración de políticas públicas, lo que incrementa la legitimidad de las estrategias de inversión y, de este modo, refuerza el contrato social.

Dado que las empresas son fundamentales de cara a la transformación productiva y constituyen una de las principales fuentes de inversión, la percepción que tienen los ciudadanos sobre su papel es crucial. Sin embargo, en la actualidad, los ciudadanos de ALC tienen poca confianza en las empresas nacionales e internacionales. En 2020, los ciudadanos de ALC no confiaban en absoluto (20.3% y 24.4%) o confiaban poco (35% y 34.2%) en las empresas nacionales e internacionales, respectivamente (Latinobarómetro, 2020[30]). Dicho de otro modo, más de la mitad de los encuestados expresaban falta de confianza. En cambio, la percepción de que la IED tiene efectos positivos en el desarrollo económico sigue siendo relativamente alta en ALC, aunque en los últimos tiempos ha disminuido. El 53.6% de la población encuestada en 2020 consideraba que la IED era beneficiosa, una cifra significativamente inferior al 70.7% de 2016, y el nivel más bajo hasta la fecha.

Un diálogo inclusivo durante todo el ciclo de inversión es fundamental para evitar conflictos derivados de los posibles impactos económicos, sociales y medioambientales de algunas inversiones sobre comunidades específicas. En ALC han surgido numerosos conflictos sociales en torno a cuestiones medioambientales. De los 742 conflictos sociales que surgieron en la región entre 2000 y 2022, 661 seguían sin resolverse a finales de 2022. Cerca de un tercio de los conflictos todavía activos en 2022 se concentraba en la minería (33.7%), seguida de la gestión del agua (16.2%), los conflictos por la biomasa y conflictos territoriales (14.8%), y los combustibles fósiles y la justicia climática/energética (14.1%) (Gráfico 13).

Gráfico 13. **Número de conflictos sociales sin resolver en ALC vinculados al medioambiente, por categoría, 2022**



Nota: Estos conflictos se definen como movilizaciones de comunidades locales y movimientos sociales, que también pueden incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales contra determinadas actividades económicas, como la construcción de infraestructura o la eliminación de residuos/contaminación, en las que los impactos ambientales son un elemento clave de las reclamaciones. El gráfico muestra los conflictos iniciados y no resueltos durante el periodo 2020-22.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos de (Environmental Justice Atlas, 2023[31]).

StatLink *https://stat.link/b1j7ie*

Para construir apoyos para la agenda de inversión y de transformación productiva, al tiempo que se previenen o gestionan los posibles conflictos sociales y casos de corrupción, los gobiernos han de establecer mecanismos que aseguren una participación ciudadana efectiva, evaluaciones de impacto ambiental y social estandarizadas y rigurosas, y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de los proyectos de inversión. Las consultas públicas, el acceso a la información y los datos, los presupuestos participativos y los procesos deliberativos representativos son prácticas útiles para involucrar a los ciudadanos en el proceso. Los gobiernos locales tienen un papel clave en la promoción de la participación ciudadana, dado que los proyectos de inversión suelen tener efectos directos en comunidades y territorios específicos.

Alinear la agenda de inversión con las estrategias nacionales de desarrollo

Los planes nacionales de desarrollo (PND) proporcionan un marco de políticas públicas amplio, coordinado y de largo plazo que permita desarrollar estrategias de inversión y de transformación productiva coherentes. Con frecuencia, la región de ALC ha tenido que lidiar con la fragmentación de las políticas públicas y con la incertidumbre política, dos factores que desincentivan las inversiones nacionales y extranjeras que son esenciales para la transformación productiva. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región, los PND se han convertido en instrumentos muy eficaces para proporcionar orientación

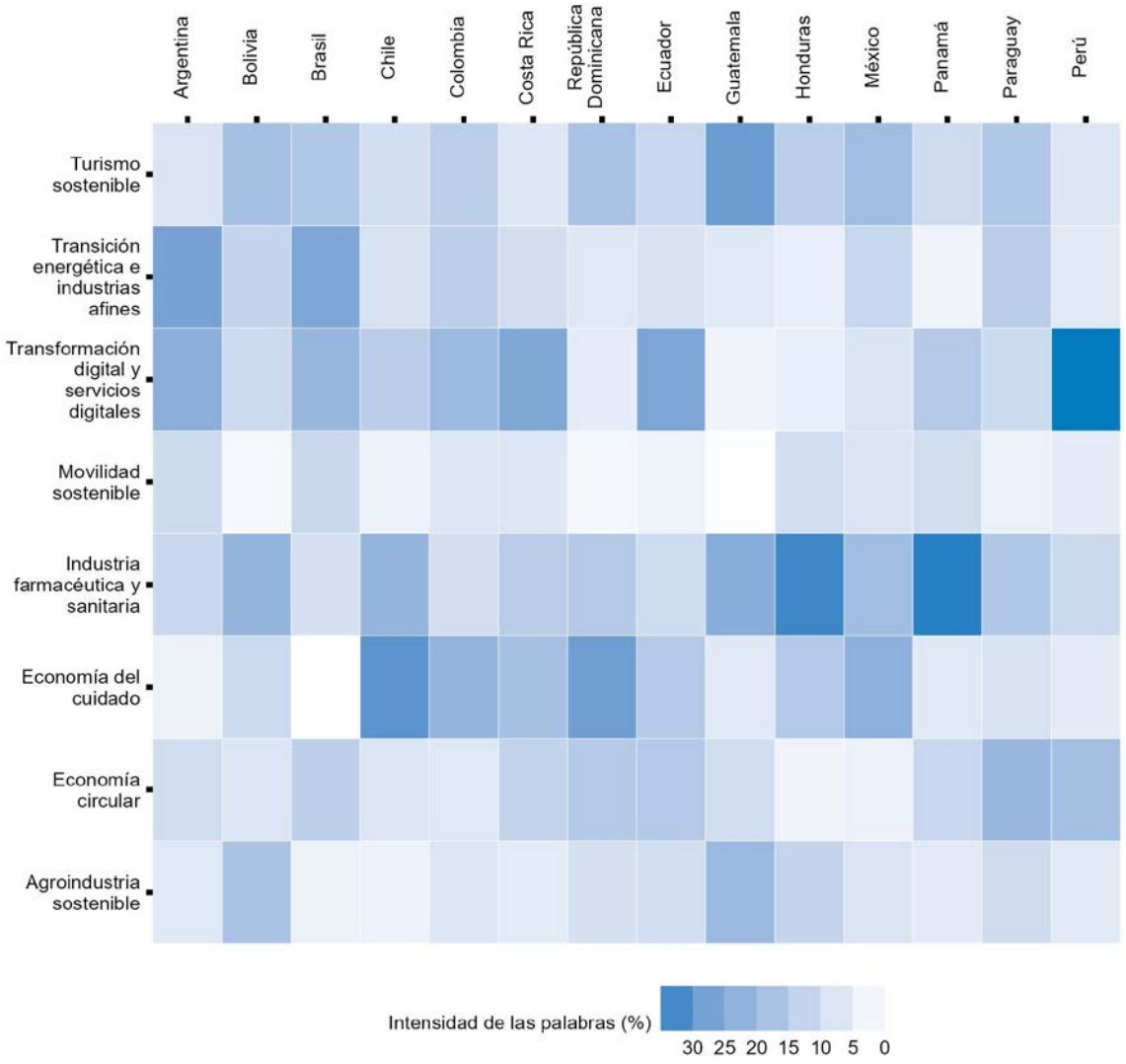
estratégica, incrementar la confianza de los inversores y fortalecer los contratos sociales. El proceso de elaboración de un PND suele incluir mecanismos para incorporar la participación ciudadana y fomentar la inclusión de una amplia gama de puntos de vista. Estos planes pueden contribuir también a la adopción de una estrategia con alcance a todo el gobierno, que alinee las políticas públicas tanto horizontalmente (entre sectores) como verticalmente (entre los distintos niveles de gobierno), fomentando la eficiencia en la utilización de recursos y la planificación de la inversión.

Los PND pueden servir también como catalizadores para atraer inversión privada, al mejorar la previsibilidad y la transparencia de las políticas, y pueden incluir orientaciones de políticas públicas asociadas a sectores estratégicos con un elevado potencial de desarrollo en la región. Un análisis de los PND de 14 países de ALC indica que agendas como la de la transformación digital aparecen de manera bastante destacada en la mayoría de ellos, con especial relevancia en países como Costa Rica, Ecuador y Perú. La industria farmacéutica y de la salud también recibe una atención significativa en la mayoría de los planes nacionales, y países como Guatemala, Honduras y Panamá tratan de manera significativa esta agenda. La transición energética se aborda igualmente en la mayoría de los PND, aunque no en todos, y se trata con especial énfasis en Argentina y Brasil. El interés por la economía del cuidado también varía de un país a otro, y países como Chile, Colombia y la República Dominicana se sitúan a la cabeza en este ámbito. El enfoque del turismo sostenible se distribuye de manera equilibrada en todos los países, si bien Guatemala asigna una mayor importancia relativa a este sector. La agroindustria sostenible se aborda en todos los países, aunque recibe algo menos de atención que otros temas, y son Bolivia y Guatemala los países que le conceden una mayor importancia relativa. La economía circular se aborda de forma equilibrada en la mayoría de los PND, aunque la mayoría de los países no la consideran un sector prioritario, al menos por ahora. Por último, la movilidad sostenible recibe una escasa atención en los PND de todos los países (Gráfico 14).

Conviene señalar que algunos países tienen estrategias sectoriales específicas para determinados sectores que no ocupan un lugar destacado en los PND. Los planes de desarrollo sectorial, que a menudo se formulan en consulta con diversas partes interesadas, proporcionan marcos especializados adicionales para estimular el crecimiento y el desarrollo en sectores económicos clave. Estas herramientas de planificación son especialmente importantes para alinear las inversiones con los objetivos socioeconómicos generales y para detallar las medidas de implementación.

Otros acuerdos institucionales ofrecen mecanismos de coordinación adicionales. Los sistemas nacionales de inversión pública desempeñan un papel fundamental para orientar los procesos de inversión pública, ya que proporcionan un marco institucional para garantizar la sostenibilidad fiscal y potenciar el impacto económico y social del gasto público. Una gobernanza multinivel eficaz es crucial para alinear los objetivos de la política nacional con las necesidades locales de inversión y transformación productiva. La implementación de herramientas de gobernanza multinivel puede producirse vertical u horizontalmente, con la participación de distintos niveles de gobierno y de partes interesadas. Los contratos que especifican las responsabilidades de todos los actores y las cláusulas de cofinanciamiento pueden mejorar el cumplimiento de las obligaciones y la eficiencia. Los gobiernos locales desempeñan un papel clave en la captación de IED y la prestación de servicios esenciales, con el apoyo de las políticas de ordenamiento territorial.

Gráfico 14. **Priorización de sectores económicos estratégicos en los planes nacionales de desarrollo de ALC, 2023**



Nota: Se entiende por intensidad de las palabras la frecuencia con la que aparece un conjunto específico de palabras asociadas a un sector estratégico en cada PND. La idea es que cuanto más frecuentemente aparece un conjunto de palabras, más "intensas" o importantes pueden ser dichas expresiones en el contexto analizado. Esta intensidad, medida por la frecuencia, puede ser indicativa de la prominencia o importancia de un tema concreto dentro del texto. Los colores más oscuros indican una mayor frecuencia de las referencias a un determinado sector estratégico dentro del plan. La suma de las frecuencias relativas de todos los sectores económicos del PND de un país asciende a 100. Los datos del texto de cada país proceden del último plan de desarrollo (o su equivalente) publicado hasta octubre de 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes nacionales de desarrollo de 14 países de ALC.

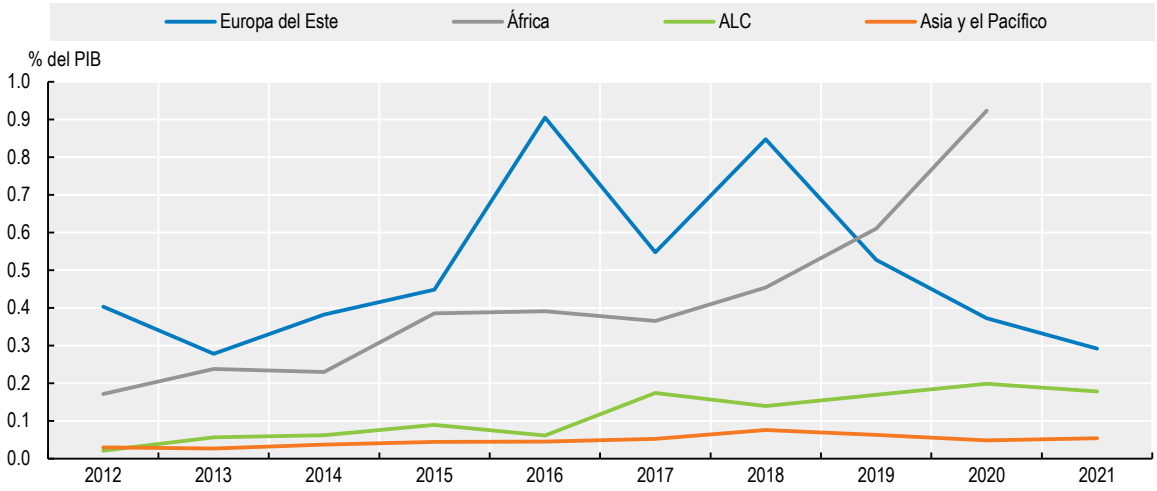
StatLink https://stat.link/0o23ay

Las alianzas internacionales pueden ayudar a atraer inversiones y potenciar su impacto en el desarrollo

Con el fin de atraer inversiones que contribuyan a la transformación productiva en ALC, las alianzas internacionales pueden crear sinergias entre organizaciones internacionales, gobiernos, expertos, agencias de desarrollo e instituciones del sector privado. Las cambiantes dinámicas y tendencias globales están transformando el modo en que se conciben estas alianzas, en particular en lo relativo al financiamiento para el desarrollo y al potencial del sector privado para cerrar las brechas de inversión global.

La cooperación internacional debería contribuir a atraer inversiones privadas que financien el desarrollo y la transformación económica de ALC. La diversidad de oportunidades y la riqueza de los recursos medioambientales con los que cuenta la región pueden atraer más IED, inversión "de impacto" y otros flujos financieros internacionales. Además, si bien ALC muestra una baja dependencia de fuentes de financiamiento concesionales, como la ayuda oficial al desarrollo (en porcentaje de la renta nacional bruta), la cooperación para el desarrollo continúa siendo esencial para que la región siga movilizando flujos financieros internacionales por medio de mecanismos innovadores. Por ejemplo, el financiamiento mixto puede movilizar financiamiento adicional para proyectos de desarrollo sostenible. Durante la última década, en ALC se ha producido un incremento del financiamiento privado movilizado por intervenciones oficiales de desarrollo como porcentaje del PIB, que ha pasado del 0.06% (3 000 millones de USD) en 2016 al 0.18% (9 000 millones de USD) en 2021 (Gráfico 15). La mayor parte del financiamiento destinado a servicios bancarios y financieros provino de garantías, líneas de crédito y préstamos sindicados, instrumentos que generalmente se utilizan para apoyar el desarrollo de mipymes y reforzar la inclusión financiera (OECD, 2023[32]).

Gráfico 15. **Recursos movilizados de fuentes privadas mediante intervenciones oficiales de financiamiento para el desarrollo, 2012-21**



Nota: Países incluidos en Europa del Este: Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo*, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. Países incluidos en Asia y el Pacífico: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Camboya, China (República Popular de), Fiyi, Georgia, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kazajstán, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Malasia, Maldivas, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Niue, Palaos, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, Sri Lanka, República Árabe Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Cisjordania y Franja de Gaza, y Yemen. Países incluidos en ALC: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela. África incluye todos los países del continente. Los datos de África 2021 están siendo revisados.

* Esta designación se hace sin perjuicio de posiciones sobre estatus, y está enlínea con la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD.Stat, 2023[33]; IMF, 2023[6]).

StatLink https://stat.link/m8yz7n

Más allá de las oportunidades que ofrecen los flujos financieros internacionales, las alianzas internacionales son fundamentales no solo para movilizar más recursos, sino también para que las inversiones produzcan un impacto socioeconómico mayor. Enfocarse en tres objetivos principales puede ayudar a las alianzas internacionales a movilizar más y mejores inversiones. En primer lugar, estas alianzas pueden ayudar a crear un entorno propicio que atraiga y facilite inversiones que impulsen la transformación productiva de la región. Esto incluye herramientas como normas y marcos internacionales y tratados

de inversión, o la capacitación y transferencia de tecnología, que mejoran la capacidad de competir en igualdad de condiciones de los países de la región. En segundo lugar, pueden fomentar que los actores relacionados con la inversión, como los bancos multilaterales de desarrollo y las IFD, las agencias de crédito a la exportación, las agencias de promoción de inversiones y el sector privado en general se alineen y colaboren entre sí para mejorar la coordinación y la eficacia a través de plataformas específicas. En tercer lugar, pueden promover el desarrollo local a través de medidas como requisitos de contenido local que refuercen las economías y las cadenas de valor locales, así como adecuando su apoyo a las estrategias de desarrollo de cada país (Tabla 1).

Tabla 1. **Mecanismos internacionales para promover mejores inversiones**

Objetivo	Instrumento existente o potencial
Crear un entorno propicio	Normas y marcos internacionales
	Tratados internacionales de inversión
	Capacitación y transferencia de tecnología
Fomentar el alineamiento entre instituciones	Plataformas de coordinación entre actores relacionados con la inversión con fines de desarrollo y comerciales
Impulsar el desarrollo local	Plataformas para adecuar las inversiones a las prioridades nacionales
	Requisitos de contenido local

Fuente: Elaboración de los autores.

Es importante reconocer que las políticas destinadas a atraer IED deben ir acompañadas de medidas encaminadas a elevar la capacidad local de absorver inversiones. Esta sinergia es esencial para que la IED resulte eficaz como mecanismo de transferencia de conocimientos y tecnología. Entre las medidas para alcanzar esta sinergia cabe destacar la inversión en educación, el fortalecimiento de los marcos institucionales y el desarrollo de infraestructura física, científica y tecnológica. Es crucial establecer un marco integral que vincule los esfuerzos para atraer IED con políticas de desarrollo productivo. Los socios para el desarrollo pueden apoyar los esfuerzos para mejorar las políticas de desarrollo productivo a través de alianzas internacionales y cooperación.

Profundizar la integración regional en ALC puede contribuir a la movilización de inversiones de mejor calidad y a aumentar su impacto. Para que los países de ALC aprovechen las oportunidades de integración regional y subregional, son esenciales las políticas públicas orientadas a la integración regional de la producción, el desarrollo productivo y el comercio, el diálogo internacional y la cooperación entre mecanismos de integración. ALC ha avanzado en su integración regional; por ejemplo, la región ha reducido de manera considerable sus barreras arancelarias, lo que hace que la entrada en el mercado regional sea más atractiva para la IED. En 2019, el arancel medio impuesto al comercio dentro de la región era de tan solo 2% (ECLAC, 2021[34]). Los bloques comerciales subregionales han contribuido a este progreso y también han ayudado a armonizar la regulación y la normativa de los países miembros. Alinear la regulación en materia de aduanas, fiscalidad, procedimientos de inversión y prácticas empresariales ayuda a reducir las barreras para los inversores. Además, puede mejorar la transparencia y la previsibilidad, facilitando a las empresas el desarrollo de actividades e inversiones transfronterizas. Para seguir atrayendo inversiones a la región, deben priorizarse una mayor integración productiva y comercial de la región, cadenas de producción regional económicamente viables y un mercado estable que combine una escala eficiente con la minimización de los costos de transacción.

Una nueva agenda de inversión UE-ALC

Reforzar las alianzas y la cooperación con la Unión Europea puede potenciar el impacto de las inversiones en el desarrollo de los países de ALC. La UE no solo es el tercer socio comercial de la región y el mayor contribuyente en materia de cooperación al desarrollo,

sino también uno de los principales inversores en ALC. Con un nuevo impulso de las relaciones UE-ALC, la región se sitúa a la cabeza de las prioridades de la inversión de la UE, especialmente gracias al lanzamiento de la nueva agenda de inversión denominada "Global Gateway" (European Commission, 2023[35]). Esta agenda identifica oportunidades de inversión en ALC que contribuirán a la transformación productiva de la región en sectores como el clima y la energía, las materias primas críticas, infraestructura, el desarrollo de pymes, la electromovilidad y el turismo sostenible, entre otros (Gráfico 16). Esta herramienta, junto con el diálogo político y en materia de políticas públicas, puede ser fundamental para apoyar la transformación productiva de ALC, gracias a una combinación de acciones de comercio, inversión y cooperación. Los mecanismos renovados de diálogo y coordinación entre los actores implicados en la inversión, el comercio y el desarrollo pueden ser útiles para acompañar nuevas iniciativas de reindustrialización en ALC, alineadas con las prioridades nacionales y garantizando que los flujos de inversión se ajusten a criterios comunes de calidad, sostenibilidad e inclusión.

Gráfico 16. **Agenda de inversiones Global Gateway, número de proyectos por país y sector, 2023**

	Clima y energía	Digital	Educación e investigación	Salud	Transporte
País					
Argentina	7	5			
Barbados	5			3	
Belice	4	5			
Bolivia	4				
Brasil	6	3			3
Chile	6		4		
Colombia	6	3			5
Costa Rica	4	3		5	6
Cuba	3			4	
República Dominicana	5	5			3
Ecuador	7			5	3
El Salvador		5			5
Guatemala	3	5		5	
Guyana	5			5	
Haití	3		4		
Honduras	5			4	
Jamaica	5	5			5
México	5			4	
Panamá	7	5	4	4	
Paraguay	5			4	
Perú	7			4	5
Surinam	3				3
Bahamas	3				
Trinidad y Tobago	3	3		4	
Uruguay	5				3
Venezuela	3				
Región y subregión					
Cuenca del Amazonas	3				
Caribe	3				3
América Central y México	5				
Caribe oriental	5				
ALC	3	5	3	3	3

Nota: El gráfico muestra la cifra total de proyectos en cada país que publica la Comisión Europea. Los tonos azules más oscuros indican un mayor número de proyectos (azul más claro = 1 proyecto; azul más oscuro = 7 proyectos). Además del número de proyectos correspondientes a cada país, también figura la cifra de proyectos a nivel regional y subregional en las regiones de la Cuenca Amazónica, el Caribe, América Central y México, el Caribe oriental y ALC.

Fuente: (European Commission, 2023[35]).

StatLink https://stat.link/rpyajm

Notas

1. Esta cifra debería ser más alta, puesto que los datos de inversión empresarial incluyen las inversiones realizadas por empresas estatales.

Referencias

Cavallo, E. y M. Pedemonte (2015), "What is the Relationship between National Saving and Investment in Latin America and the Caribbean?", *IDB Working Paper Series*, No. IDB-WP-617, https://publications.iadb.org/en/what-relationship-between-national-saving-and-investment-latin-america-and-caribbean. [8]

ECLAC (2023), *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/67989-estudio-economico-america-latina-caribe-2023-financiamiento-transicion. [1]

ECLAC (2023), *Iberoamérica: Espacio de oportunidades para el crecimiento, la colaboración y el desarrollo sostenible*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/48769-iberoamerica-espacio-oportunidades-crecimiento-la-colaboracion-desarrollo. [25]

ECLAC (2022), *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2022: Trends and Challenges of Investing for a Sustainable and Inclusive Recovery*, United Nations Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48078/7/S2201057_en.pdf. [7]

ECLAC (2021), *International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean: Regional Integration Is Key to Recovery After the Crisis*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/46614-international-trade-outlook-latin-america-and-caribbean-2020-regional-integration. [34]

ECLAC/ILO (2023), *Employment Situation in Latin America and the Caribbean: Towards the Creation of Better Jobs in the Post-pandemic Era*, UN-ECLAC and International Labour Organization, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48988. [4]

Eichengreen, B. (2010), "Lessons from the Marshall Plan", *World Development Report 2011 Background Case Note*, World Bank, https://documents1.worldbank.org/curated/en/907961468155715855/pdf/620420WP0Lesso0BOX0361475B00PUBLIC0.pdf. [12]

Environmental Justice Atlas (2023), *Global Atlas of Environmental Justice*, https://ejatlas.org/. [31]

European Commission (2023), *EU-LAC Global Gateway Investments Agenda - Infographics*, https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/eu-lac-global-gateway-investment-agenda-infographics_en. [35]

fDI Markets (2023), *fDi Markets: The Crossborder Investment Monitor.* [14]

fDi Markets (2023), *fDi Markets: The Crossborder Investment Monitor*, https://www.fdimarkets.com/. [19]

FMI (2023), *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*, International Monetary Fund, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023. [3]

IDB (2021), *The Infrastructure Gap in Latin America and the Caribbean: Investment Needed Through 2030 to Meet the Sustainable Development Goals*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/en/infrastructure-gap-latin-america-and-caribbean-investment-needed-through-2030-meet-sustainable. [11]

IMF (2023), *World Economic Outlook Database*, International Monetary Fund, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/weo-report (consultado el 5 de septiembre de 2023). [6]

Infralatam (2022), *Data on Public Investment in Economic Infrastructure in Latin America and the Caribbean (database)*, http://infralatam.info/en/home/ (consultado el 5 de septiembre de 2023). [9]

Latinobarómetro (2020), *Latinobarómetro (database)*, https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (consultado el 18 de septiembre de 2023). [30]

Núñez, G., H. Velloso y F. Da Silva (2022), "Corporate governance in Latin America and the Caribbean: Using ESG debt instruments to finance sustainable investment projects", *Project Documents*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47778. [28]

OECD (2023), *OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 2: Preliminary version*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7a5f73ce-en. [2]

OECD (2023), "Private finance mobilised by Official Development Finance Interventions", Development Co-operation Directorate, OECD, Paris, https://www.oecd.org/dac/2023-private-finance-odfi.pdf. [32]

OECD (2022), *FDI Qualities Policy Toolkit*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7ba74100-en. [18]

OECD (2022), "Green, social, sustainability and sustainability-linked bonds in developing countries: How can donors support public sector issuances?", OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dac/green-social-sustainability-and-sustainability-linked-bonds.pdf. [27]

OECD (2021), *Key Indicators of Informality Based on Individuals and Their Household (KIIbIH), (database)*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dev/key-indicators-informality-individuals-household-kiibih.htm. [5]

OECD (2019), *FDI Qualities Indicators: Measuring the Sustainable Development Impacts of Investment*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/investment/FDI-Qualities-Indicators-Measuring-Sustainable-Development-Impacts.pdf. [17]

OECD (próximo a publicarse), *Promoting investment for green growth in Latin America and the Caribbean*, OECD Publishing, Paris. [16]

OECD et al. (2023), *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a7640683-en. [26]

OECD et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a Green and Just Transition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en. [20]

OECD et al. (2021), *Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en. [15]

OECD.Stat (2023), *Mobilisation*, database, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DV_DCD_MOBILISATION# (consultado el 23 de mayo de 2023). [33]

RICYT (2022), *El estado de la ciencia: Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos / interamericanos 2022, Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología*, Altuna Impresores S.R.L., Buenos Aires, https://oei.int/oficinas/argentina/publicaciones/el-estado-de-la-ciencia-principales-indicadores-de-ciencia-y-iberoamericanos-interamericanos-2022. [22]

RICYT (2020), *Network for Science and Technology Indicators – Ibero-American and Inter-American (RICYT)*, http://www.ricyt.org/en/. [23]

UNEP (2023), *Common Framework of Sustainable FInance Taxonomies for Latin America and the Caribbean*, United Nations Environment Programme, Geneva, http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Common-Framework-of-Sustainable-Finance-Taxonomies-LAC.pdf. [29]

Vona, F. et al. (2018), "Environmental Regulation and Green Skills: An empirical exploration", *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, Vol. 5/4, https://www.journals.uchicago.edu/doi/suppl/10.1086/698859/suppl_file/2015197Appendix.pdf. [21]

WIPO (2023), *WIPO IP Statistics Data Center: Patent (database), World Intellectual Property Organization*, https://www3.wipo.int/ipstats/ips-search/patent. [24]

World Bank (2023), "Capitalización en el mercado de empresas nacionales que cotizan en bolsa (del PIB) (database)", *World Development Indicators*, World Bank Group, Washington, DC, https://datos.bancomundial.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2020&start=1975&view=chart. [13]

World Bank (2023), *Private participation in infrastructure (database)*, https://ppi.worldbank.org/en/customquery (consultado el 5 de septiembre de 2023). [10]

Capítulo 1

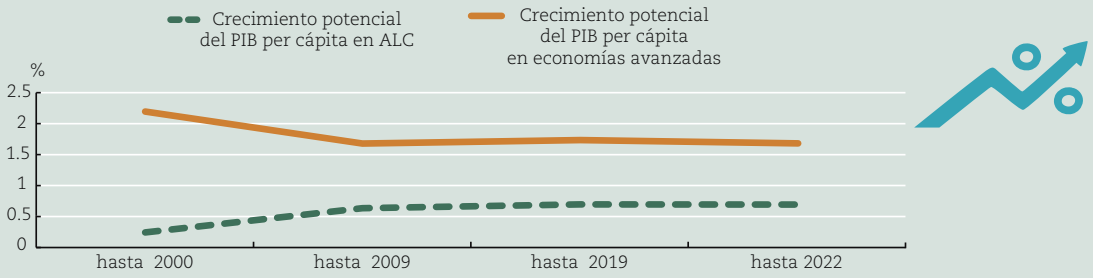
Perspectivas económicas de América Latina 2023

Este capítulo describe el complejo contexto económico y las principales causas de la desaceleración de la actividad económica en América Latina y el Caribe (ALC) en 2023, tras el repunte del crecimiento que siguió a la pandemia de COVID-19. Asimismo, expone los desafíos socioeconómicos que afronta la región, en la que la pobreza y la pobreza extrema se mantienen por encima de los niveles observados antes de la pandemia en más de la mitad de los países de ALC. El capítulo analiza, en primer lugar, la política macroeconómica en ALC, con especial atención a la deuda y los impuestos. A continuación, repasa las condiciones sociales, presentando la evolución reciente en los ámbitos de la pobreza, la desigualdad y la informalidad. Los principales mensajes en materia de políticas apuntan a la necesidad de promover más y mejor inversión para lograr un crecimiento más dinámico y sostenible y generar empleo de calidad. El capítulo también hace hincapié en la necesidad de proteger a los más vulnerables y, al mismo tiempo, asegurar la estabilidad de los precios.

Perspectiva macroestructural

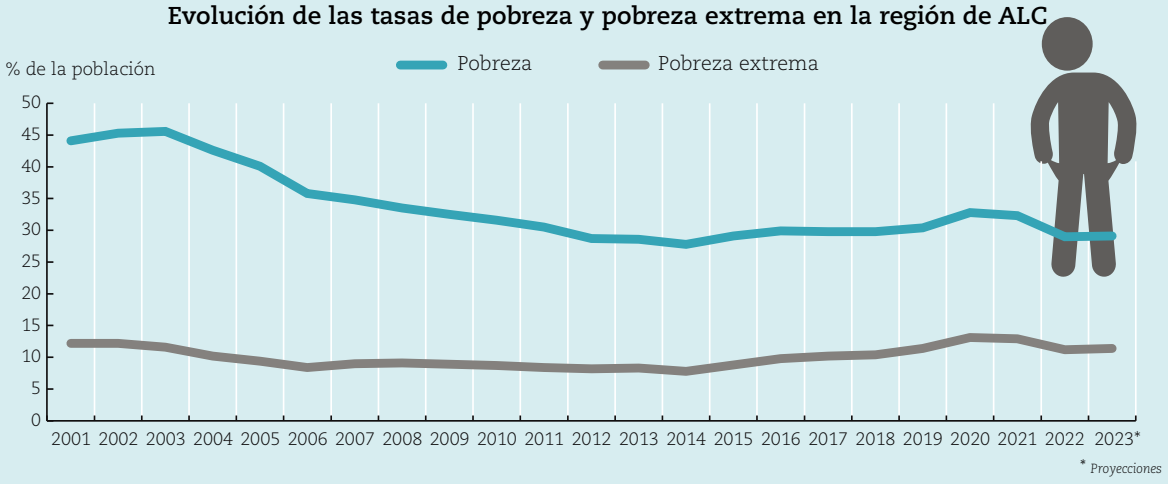
El crecimiento en las economías de ALC se ha desacelerado en 2023 debido a un contexto global complejo y un crecimiento potencial persistentemente bajo

El crecimiento potencial del PIB per cápita ha estado por debajo del 1% desde 1980 en ALC, consistentemente por debajo al de las economías avanzadas



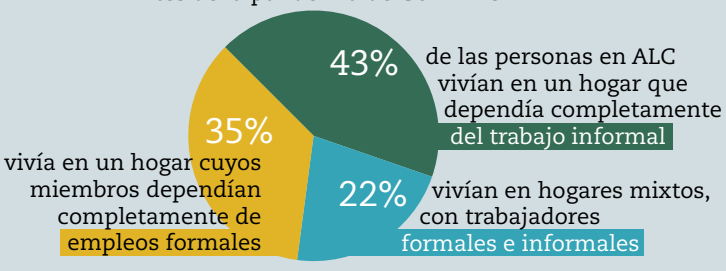
Las condiciones sociales siguen representando un desafío en la región de ALC

Evolución de las tasas de pobreza y pobreza extrema en la región de ALC



Informalidad: un desafío importante para abordar la pobreza

Antes de la pandemia de COVID-19





Introducción

La actividad económica en América Latina y el Caribe (ALC) se ralentizará en 2023 como consecuencia de la dinámica cíclica, bajo crecimiento potencial y la escasa inversión. La desaceleración sigue después del repunte del crecimiento que se produjo tras la pandemia, cuando el estímulo monetario y fiscal, las condiciones exteriores más favorables y la reapertura de las economías impulsaron la recuperación después de 2020. La actual reducción del ritmo de crecimiento se debe a un deterioro de la coyuntura exterior, el repliegue de las transferencias públicas que se activaron para mitigar los efectos de la pandemia y el endurecimiento de la política monetaria para frenar la inflación.

Aunque la recuperación económica de ALC ha sido relativamente fuerte y ha traído consigo un aumento del empleo y de los ingresos familiares, las condiciones sociales siguen siendo difíciles. El aumento de la inflación socavó el poder adquisitivo, especialmente de los más pobres, y la pobreza y la pobreza extrema en la región se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia en más de la mitad de los países de ALC. En 2022, el 29% de la población vivía en la pobreza y el 11.2% estaba en situación de pobreza extrema. Uno de los principales obstáculos para dar respuesta a esta situación es la informalidad laboral, que se traduce en salarios más bajos y falta de acceso a los sistemas de protección social. Antes de la pandemia, el 42.8% de la población de ALC vivía en un hogar que dependía exclusivamente del empleo informal y el 21.8% vivía en hogares mixtos, es decir, hogares con trabajadores formales e informales. Por lo tanto, el 64.6% de los ciudadanos de la región dependían total o parcialmente del empleo informal. Del mismo modo, la desigualdad en la distribución de los ingresos en América Latina, medida por el coeficiente de Gini, permaneció estancada en niveles relativamente altos entre 2017 y 2021, aunque mostró una ligera mejora de 0.46 en 2020 a 0.45 en 2022.

Este capítulo examina, en primer lugar, el contexto mundial, que continúa siendo frágil. A continuación, presenta el desempeño económico en ALC, poniendo énfasis en la heterogeneidad de la región, las cuentas externas, las condiciones inflacionarias y el limitado espacio fiscal. Después explora las actuaciones que podrían mejorar los regímenes tributarios para promover la inversión, recuperar espacio fiscal e incrementar la progresividad, con especial atención al impuesto sobre las sociedades. El capítulo repasa también las condiciones sociales en ALC, haciendo hincapié en la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y la evolución de la informalidad en los hogares. A modo de conclusión, presenta los principales mensajes en materia de políticas.

Las perspectivas mundiales siguen siendo frágiles

Las perspectivas económicas mundiales empezaron a mejorar tras los efectos de la pandemia, pero las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles. Aunque, para 2023, el crecimiento del PIB ha sido más fuerte de lo previsto, sigue siendo moderado, y se moderará aún más en 2024. La inflación subyacente está resultando persistente y el impacto de la subida de los tipos de interés en todo el mundo se deja sentir cada vez más, sobre todo en los mercados inmobiliarios y financieros. Se prevé que el crecimiento mundial se modere del 3.3% en 2022 al 2.9% en 2023 y al 2.7% en 2024, y que la inflación disminuya en 2023 y en 2024 (OECD, 2023[1]; OECD, 2023[2]).

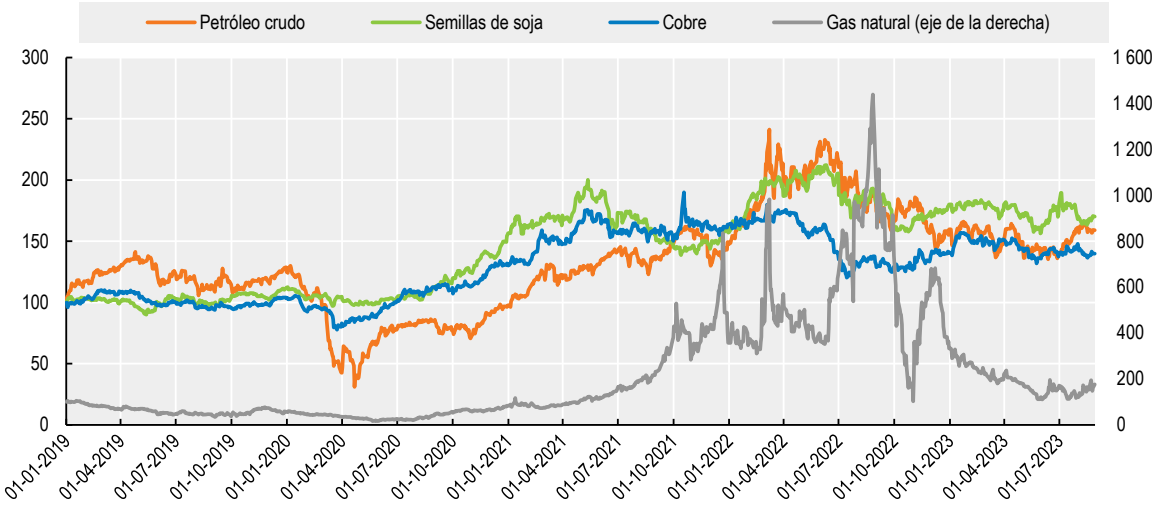
Se espera que la economía mundial permanezca por debajo de su potencial en 2024, como consecuencia de la orientación más restrictiva de las políticas macroeconómicas necesaria para frenar la inflación. Los riesgos para estas perspectivas se inclinan a la baja. El mantenimiento de la política monetaria restrictiva durante un período de tiempo más largo podría causar nuevos episodios de fragilidad financiera que sigan deteriorando las condiciones crediticias y depriman la demanda más de lo previsto. Una recuperación

menos dinámica de lo esperado en la República Popular China (en adelante, "China"), las tensiones geopolíticas, los riesgos climáticos, el sobreendeudamiento, la mayor rigidez de la inflación y la fragmentación geoeconómica también podrían ensombrecer las perspectivas (OECD, 2023[1]; OECD, 2023[2]).

Los precios de la mayoría de las materias primas se están normalizando, lo que alivia las presiones inflacionarias (Gráfico 1.1). La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania provocó subidas de precios en un contexto de desajuste entre la oferta y la demanda que vienen desde la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de la incertidumbre generada por la guerra, los precios del petróleo, el gas, el carbón y los metales industriales se dispararon en 2022 y fluctuaron en niveles elevados en los meses siguientes. Los precios de los alimentos y la energía han retrocedido desde el segundo semestre de 2022, pero permanecen por encima de los niveles observados antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Pese a que la invasión rusa de Ucrania continúa, un invierno moderado en 2022/23, la desaceleración de la actividad económica mundial y el levantamiento de las restricciones por el COVID-19 en China han contribuido al descenso de los precios de las materias primas.

Gráfico 1.1. **Precios internacionales de las materias primas, enero de 2019 a agosto de 2023**

Índice de enero de 2019 = 100



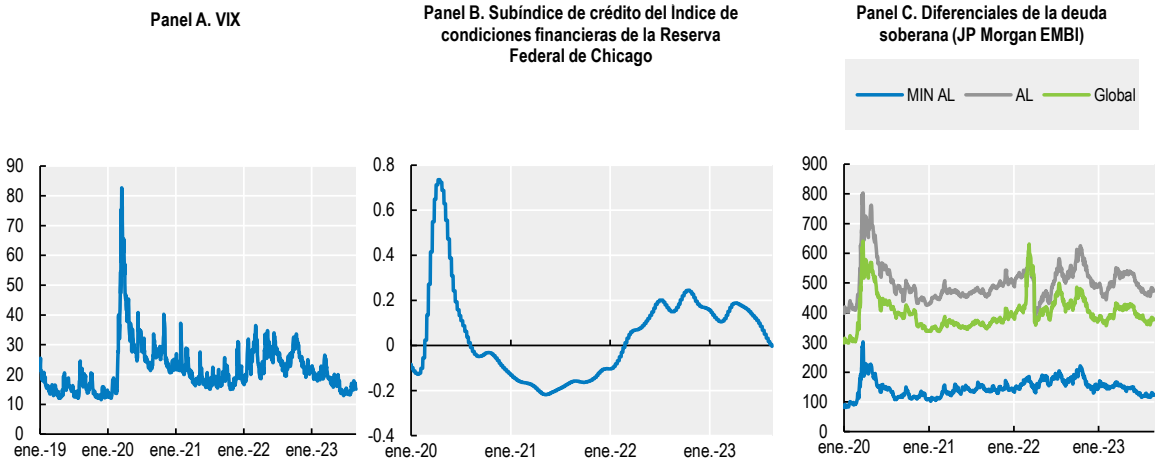
Fuente: (Refinitiv Eikon, 2023[3]).

StatLink https://stat.link/59cmex

La dinámica de la política monetaria en las economías avanzadas afecta al comportamiento de los mercados de capitales. Tras las turbulencias financieras que se produjeron en marzo de 2023 en Estados Unidos y Suiza, la volatilidad de los mercados bursátiles medida por el índice de volatilidad (índice VIX) ha remitido y retornado a los niveles observados antes de la pandemia (Gráfico 1.2, Panel A). Las condiciones crediticias en Estados Unidos, que mide el subíndice de crédito del Índice de condiciones financieras nacionales de la Reserva Federal de Chicago, se relajaron una vez resueltas las turbulencias financieras causadas por la quiebra de tres bancos regionales de ese país (Gráfico 1.2, Panel B). De manera similar, las primas de riesgo en los mercados de deuda soberana de mercados emergentes, medidas por el Índice de bonos de mercados emergentes de J.P. Morgan (EMBI), se han reducido desde el episodio de fragilidad financiera y se mantienen claramente por debajo de los niveles observados en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, lo que indica un repunte del interés de los inversores por los activos de

mercados emergentes. En ALC, los diferenciales de los bonos soberanos han seguido por encima de la media mundial, pero con una elevada heterogeneidad entre países. La media se ve afectada por los valores de países concretos (Argentina, Ecuador, Venezuela y, más recientemente, Bolivia). Los diferenciales en otros países de ALC incluidos en el índice EMBI son inferiores a la media mundial, lo que indica que los gobiernos y las empresas pueden financiarse en los mercados internacionales de capitales (Gráfico 1.2, Panel C), aunque a costos más elevados debido al incremento de las tasas de interés.

Gráfico 1.2. **Volatilidad y primas de riesgo en los mercados financieros**



Nota: Datos del período comprendido entre enero de 2020 y agosto de 2023. En el Panel A, un nivel más alto del índice VIX indica que los participantes en los mercados prevén oscilaciones de precios más significativas y posibles fluctuaciones. En el Panel B, los valores positivos del subíndice de crédito del Índice de condiciones financieras nacionales de la Reserva Federal de Chicago indican unas condiciones financieras más restrictivas que el promedio, mientras que los valores negativos señalan condiciones financieras más relajadas que el promedio. En el Panel C, un valor más elevado del índice indica que la confianza y el apetito por el riesgo de los inversores en lo que refiere a la deuda de mercados emergentes está reduciéndose. En el Panel C, MIN LA se refiere al país con el diferencial de riesgo soberano más bajo en América Latina.

Fuente: (Refinitiv Eikon, 2023[3]).

StatLink https://stat.link/1jlkbp

La evolución del crecimiento en ALC refleja una coyuntura compleja y los retos estructurales pendientes

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) en ALC superó el 6% en 2021 y se acercó al 4% en 2022. Esta recuperación estuvo impulsada fundamentalmente por el estímulo fiscal y monetario, por la mejora de las condiciones exteriores y por efectos de base. Sin embargo, en 2022 las condiciones exteriores fueron menos favorables, las transferencias públicas se retiraron progresivamente, la política monetaria se endureció y los efectos de la reapertura de las economías se disiparon. Con todo, la actividad en 2022 fue más resiliente de lo que se había previsto, gracias al buen desempeño del mercado laboral. No obstante, la recuperación ha sido heterogénea en la región de ALC. Para 2022, la mayoría de los países de ALC, incluidas las mayores economías, habían recuperado los niveles de PIB de antes de la pandemia; las excepciones eran Ecuador y varios países caribeños, que experimentaron profundas recesiones económicas en 2020 y han sufrido los efectos de la caída de los flujos turísticos y del limitado espacio fiscal (ECLAC, 2022[4]; Galindo y Nuguer, 2023[5]; Adler y Chalk, 2023[6]; Banco de España, 2023[7]; OECD, 2023[1]).

El espacio para políticas de demanda es muy limitado. Las tasas de inflación general han disminuido en la mayoría de los países, gracias al descenso de los precios de la energía y los alimentos, pero siguen en niveles elevados en varios, fundamentalmente debido a la

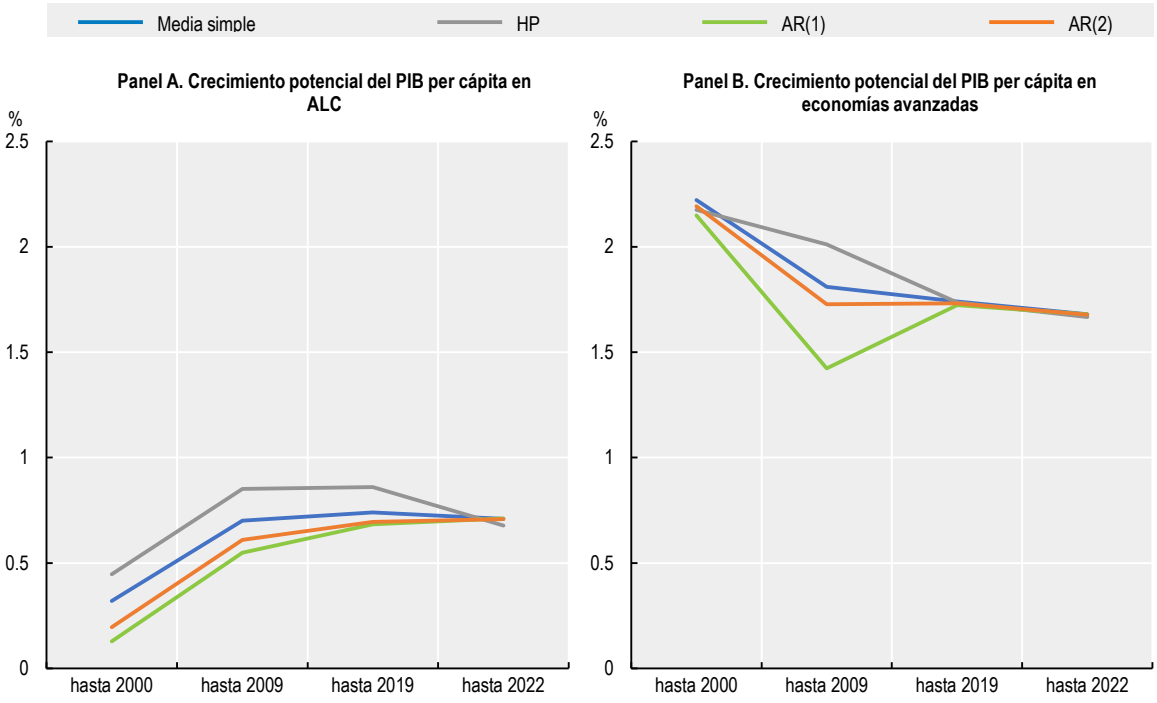
persistencia del dinamismo de los precios de los servicios. Como consecuencia, la mayoría de los bancos centrales mantienen una política monetaria restrictiva, con tasas de interés por encima de los niveles neutrales. La región de ALC tiene un espacio fiscal limitado. Buena parte del estímulo fiscal de 2020 se ha retirado, pero los niveles de endeudamiento siguen siendo altos y continúan las consolidaciones fiscales graduales (CAF, 2023[8]; ECLAC, 2023[9]). Entre los riesgos para las perspectivas de ALC cabe citar una ralentización más acusada y más rápida de lo previsto en los principales socios comerciales de la región, así como el endurecimiento de las condiciones financieras y la incertidumbre política en la propia región, y una escalada de la invasión rusa Ucrania (Galindo y Nuguer, 2023[5]; Adler y Chalk, 2023[6]; IMF, 2023[10]; OECD, 2023[1]; CAF, 2023[11]).

Los reducidos niveles de inversión se han asociado al bajo crecimiento potencial de ALC. En las últimas décadas, la inversión ha sido uno de los factores más determinantes del crecimiento económico en América Latina (De Gregorio, 1992[12]). Con tan solo 20% del PIB, ALC presenta uno de los niveles de inversión más bajos de todas las regiones (Capítulo 2); por tanto, se precisa más inversión y de mejor calidad para impulsar el crecimiento potencial. Ya antes de la pandemia, el crecimiento del PIB per cápita era un reto estructural para el desarrollo en ALC, y ahora continúa siendo uno de los principales motivos de la lentitud de los avances en materia de desarrollo económico. El crecimiento potencial del PIB per cápita ha sido inferior al 1% desde 1980, aunque aumentó ligeramente después del auge de las materias primas (entre 2003 y 2013). Desde entonces, el crecimiento potencial del producto per cápita se ha estancado y se mantiene constantemente por debajo de las tasas de las economías avanzadas, lo que impide la convergencia (Gráfico 1.3).

Un mayor crecimiento de la productividad —basado en un aumento y una mejora de la calidad de la inversión— debería ser prioritario para reducir la brecha con las economías desarrolladas (Capítulos 2 y 3). La productividad laboral en la región de ALC, en comparación con la de Estados Unidos, explica prácticamente la totalidad de la brecha del PIB per cápita (Capítulo 3) entre ambas economías. Los países que han conseguido reducir esa brecha y aumentar su productividad han diversificado su economía hacia actividades más intensivas en tecnología y conocimiento en todos los sectores. Esto se ha logrado gracias a una inversión suficiente en capital físico y humano, así como implementando políticas decididas de desarrollo de la producción que han contribuido a la modernización, diversificación y transformación estructural de estas economías (OECD et al., 2022[13]; Álvarez et al., 2019[14]; ECLAC, 2022[15]).

Gráfico 1.3. **Crecimiento potencial del PIB per cápita en ALC y en economías avanzadas**

Estimado por distintos métodos desde 1980



Nota: El crecimiento medio es una media simple del período analizado. HP hace referencia al filtro Hodrick-Prescott, que se utilizó como modelo alternativo debido a su resistencia a las perturbaciones a corto plazo para obtener una representación de curva atenuada (lambda 100). AR hace referencia a un modelo autorregresivo, que utiliza datos de crecimiento del PIB per cápita. El número de rezagos (1 y 2) se determinó analizando la función de autocorrelación y eligiendo el modelo que maximizaba la log-verosimilitud. La serie de ALC y economías avanzadas se refiere a los países incluidos en la base de datos de *Perspectivas de la economía mundial* del Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 2023.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (IMF, 2023[10]).

StatLink https://stat.link/epcq7o

El bajo nivel de inversión en ALC se puede explicar, en parte, por las reducidas tasas de ahorro nacional. Los particulares, las empresas y los gobiernos ahorran dinero para suavizar su consumo (protegerse de choques) e invierten para mejorar su bienestar, incrementar su productividad y prestar más servicios públicos, respectivamente. A su vez, el ahorro así acumulado puede utilizarse para financiar inversiones, por lo que existe una relación positiva entre los niveles de inversión y el ahorro interno. En el promedio de ALC, por cada incremento de 1 punto porcentual del PIB del ahorro nacional, la inversión interna aumenta en 0.39 puntos porcentuales, aunque con una fuerte heterogeneidad entre países (Cavallo y Pedemonte, 2015[16]). No obstante, la región ha presentado sistemáticamente tasas bajas de ahorro interno bruto, con un promedio próximo al 20% desde 2000. Este nivel es considerablemente más bajo que el 35% del PIB que ahorran las economías de Asia Oriental y el Pacífico. Las economías con tasas de ahorro reducidas se ven obligadas a endeudarse en el exterior para financiar sus inversiones, pero esto puede resultar más costoso e incrementar el riesgo de crisis dada la volatilidad de los flujos financieros internacionales (Cavallo y Serebrisky, 2016[17]; World Bank, 2023[18]).

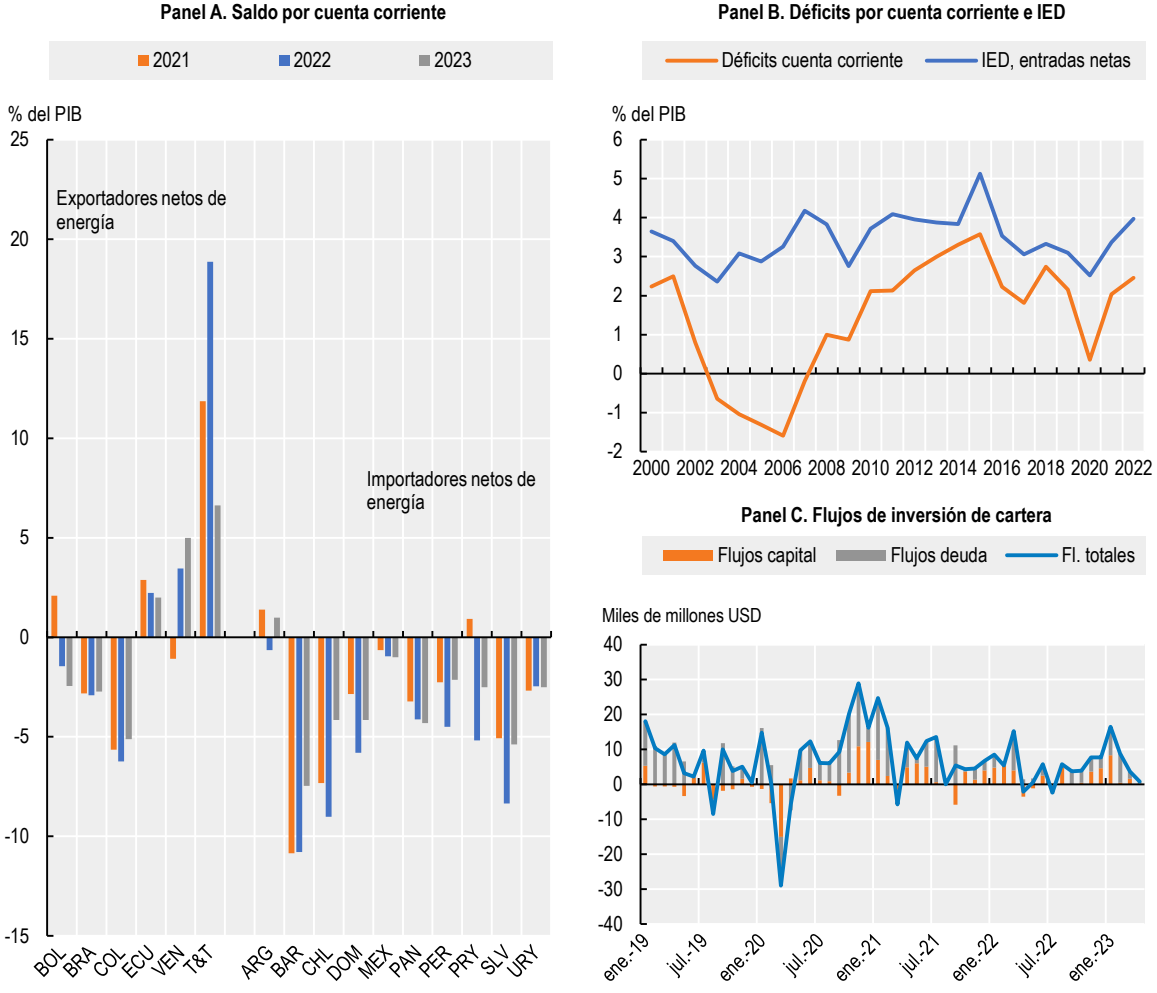
La compleja coyuntura mundial y los problemas estructurales que arrastra la región de ALC ponen de manifiesto la importancia de atraer y movilizar inversión para que sea un motor fundamental de la transformación de la producción regional (Capítulo 3). Esto es aún más importante en un contexto en el que las principales economías mundiales están tomando medidas decididas para promover su industria nacional: por ejemplo, en Estados Unidos, con la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips, y en la Unión Europea

(UE), con el Pacto Verde Europeo. Esta tendencia puede transformar significativamente el panorama mundial del comercio y la inversión y generar nuevas oportunidades, pero también retos. En este contexto, los países de ALC deben crear unas condiciones que les permitan beneficiarse de las transformaciones en curso y fomentar la inversión en sectores con oportunidades emergentes (Capítulo 3).

Se espera que las cuentas exteriores mejoren

La mayoría de los países de ALC seguían presentando déficits por cuenta corriente en 2022, especialmente los importadores netos de energía (Gráfico 1.4, Panel A). La evolución de los saldos por cuenta corriente ha estado determinada por los cambios en los términos de intercambio —en particular, la evolución de los precios de la energía y los alimentos— y la dinámica de la demanda interna. Las cuentas externan deberían mejorar en 2023 a medida que se normalicen los precios de los insumos intermedios y las materias primas, y se ralentice la demanda interna. Pese a esa normalización, como los precios permanecen por encima de sus medias históricas, cabe esperar que la presión sobre los exportadores netos de materias primas no sea significativa.

Gráfico 1.4. **Balanza por cuenta corriente de ALC y flujos de capital a países de ALC**



Nota: IED = inversión extranjera directa.

Fuente: (IMF, 2023[10]), (IIF, 2023[19]) y (World Bank, 2023[18]).

StatLink https://stat.link/x0huk1

La cuenta de capital continúa desempeñando un papel fundamental en el financiamiento de los déficits por cuenta corriente. Los flujos de inversión de cartera hacia los mercados emergentes se han debilitado en 2023, pero la mayoría de los países de ALC han podido financiarse en los mercados internacionales de capitales (Gráfico 1.4, Panel C; véase también el Capítulo 4). Los déficits por cuenta corriente continúan siendo manejables en la mayoría de los países de la región y se financian fundamentalmente mediante la inversión extranjera directa (IED) (Gráfico 1.4, Panel B). Las entradas de IED han contribuido de manera constante a financiar los déficits por cuenta corriente desde mediados de la década de 1980. En 2022, las entradas de IED aumentaron un 55.2% (hasta situarse en el 4% del PIB), el nivel más alto de las últimas tres décadas. Este incremento sustancial se debió fundamentalmente a las inversiones en servicios, hidrocarburos y manufacturas. En cuanto a los principales componentes de la IED, las participaciones en el capital fueron el 36% del total en 2022, un nivel similar al de 2019, pero todavía inferior al de 2013. Con un porcentaje del 43%, los beneficios reinvertidos siguieron siendo la principal fuente de IED en 2022 (ECLAC, 2023[20]). La cantidad de IED no es lo único importante, también es fundamental su calidad. Una IED de calidad puede contribuir a mejorar la productividad, incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), generar más empleo de calidad e impulsar el desarrollo de sectores clave (Capítulos 2 y 3) (OECD, 2019[21]; OECD et al., 2021[22]).

La cesta de exportaciones necesita más valor agregado y más diversificación

La proporción de las exportaciones mundiales que procede de ALC no ha variado en las últimas décadas y se ha mantenido entre el 4% y el 5%. Además, si se excluye a México de los datos de ALC, el peso de la región en las exportaciones totales se reduce en 1 punto porcentual. Estos datos contrastan con los significativos ascensos de la cuota de otras regiones en desarrollo. Por ejemplo, la región de Asia Oriental y el Pacífico, con China a la cabeza, vio incrementada su aportación a las exportaciones mundiales del 19% en 1990 al 32% en 2022. La reducida participación de las empresas latinoamericanas en el comercio internacional obedece, en parte, al limitado uso del comercio regional como parte de una estrategia para ampliar las exportaciones mundiales. Entre otros motivos, esto se debe a que la liberalización del comercio no ha dado lugar a incrementos elevados y sostenidos del comercio intrarregional. Para fomentar la integración regional e impulsar el comercio en ALC, será importante simplificar los requisitos y las formalidades en frontera, así como reducir los aranceles y las barreras no arancelarias. Con miras a promover el intercambio de mercancías, servicios y de bienes regionales, incluida la energía, se precisa también una mejora de la conectividad (Sanguinetti et al., 2021[23]).

El desempeño de las exportaciones de ALC durante las dos últimas décadas muestra que hay margen para diversificar y agregar más valor a la cesta de exportaciones. El peso de la región en los envíos de manufacturas a escala mundial (incluidas las basadas en recursos naturales) no ha superado el 5%. En el ámbito de los servicios, la proporción de las exportaciones mundiales correspondiente a la región ha caído desde 2000 hasta situarse en el 2.6% en 2021; en el caso de los servicios modernos susceptibles de prestación digital, es de tan solo el 1.7% (ECLAC, 2023[24]). Durante este período, el principal cambio en la estructura de las exportaciones de bienes de la región ha sido el aumento del peso de los bienes primarios, que pasaron de representar el 27% de las exportaciones totales de mercancías, de media, entre 1999 y 2001 a promediar un 36% entre 2019 y 2021. Este incremento está relacionado con la caída del peso de las manufacturas de baja y alta tecnología. No obstante, a escala subregional se observan dinámicas heterogéneas. En América del Sur, la proporción de productos primarios aumentó entre los dos períodos citados en más de 16 puntos porcentuales, hasta el 58% de las exportaciones totales. En América Central se observa la tendencia contraria: el peso de los productos primarios en

su cesta de exportaciones se redujo en más de 9 puntos porcentuales, mientras que se registró un incremento de la proporción de manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de baja y media tecnología. Por último, en México, la proporción de materias primas en las exportaciones totales se mantuvo estable en torno al 11%, uno de los niveles más bajos de la región. El principal segmento de las exportaciones mexicanas es el de manufacturas de tecnología media, que acapara casi la mitad del valor total de sus exportaciones de bienes y cuyo peso ha aumentado en casi 10 puntos porcentuales en los últimos 20 años (Tabla 1.1).

Tabla 1.1. **Distribución de las exportaciones de bienes de ALC por intensidad tecnológica, 1999-2001 y 2019-21**

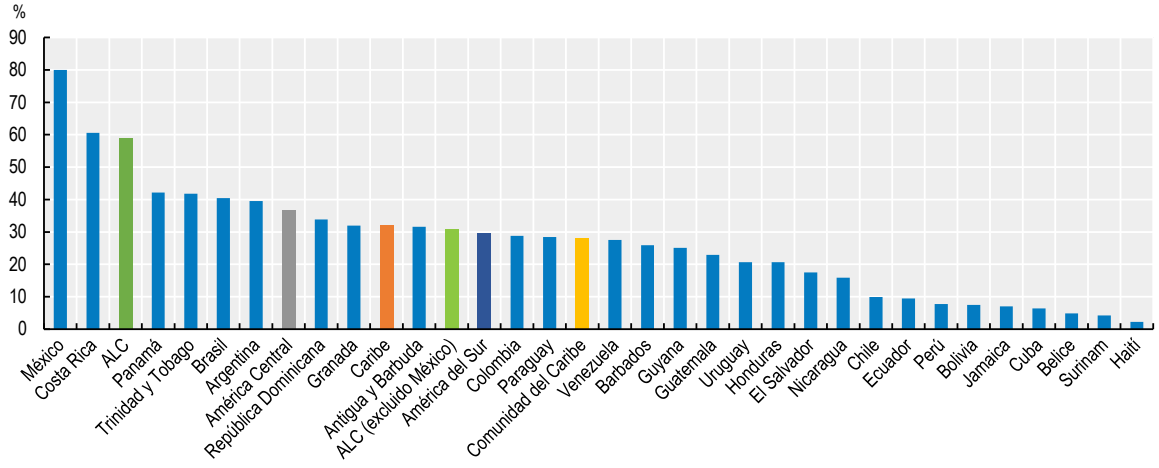
ALC, subregiones determinadas y México (porcentajes)

	Bienes primarios		Manufacturas basadas en recursos naturales		Manufacturas de baja tecnología		Manufacturas de media tecnología		Manufacturas de alta tecnología	
	1999-2001	2019-21	1999-2001	2019-21	1999-2001	2019-21	1999-2001	2019-21	1999-2001	2019-21
América Latina y Caribe	26.7	36.2	18.2	18.3	13.5	7.8	25.3	26.4	16.4	11.3
América Latina y Caribe (excluido México)	40.1	53.8	28.8	25.3	11.4	6.8	13.9	11.1	5.8	3
América del Sur	41.9	58.4	29.4	25.1	9.4	4.2	14.2	10	5.1	2.3
México	11.3	11.2	6.1	8.4	15.8	9.4	38.4	48.1	28.4	23
América Central	34.9	25.6	16	20.3	21.9	26.8	10.1	17.6	17.2	9.8
Caribe	20.4	11.4	30.2	38.7	37.2	21.5	9.1	19.2	3	9.1

Fuente: Basado en datos sobre estadísticas del comercio internacional de las Naciones Unidas (COMTRADE).

La heterogeneidad de los patrones exportadores de los países de ALC también se observa en la proporción de los bienes de intensidad tecnológica media y alta en el total de exportaciones de manufacturas. Esta proporción, que alcanza un máximo del 80% en México, iguala o supera el 40% en tan solo seis países y es igual o inferior al 10% en nueve, todos situados en América del Sur y el Caribe (Gráfico 1.5) (ECLAC, 2023[24]).

Gráfico 1.5. **Proporción de manufacturas de alta y media tecnología en las exportaciones de manufacturas totales, último año**



Nota: Las exportaciones de Panamá incluyen reexportaciones.

Fuente: (ECLAC, 2023[24]) basado en la Base de Datos estadísticos de las Naciones Unidas sobre el comercio internacional (COMTRADE).

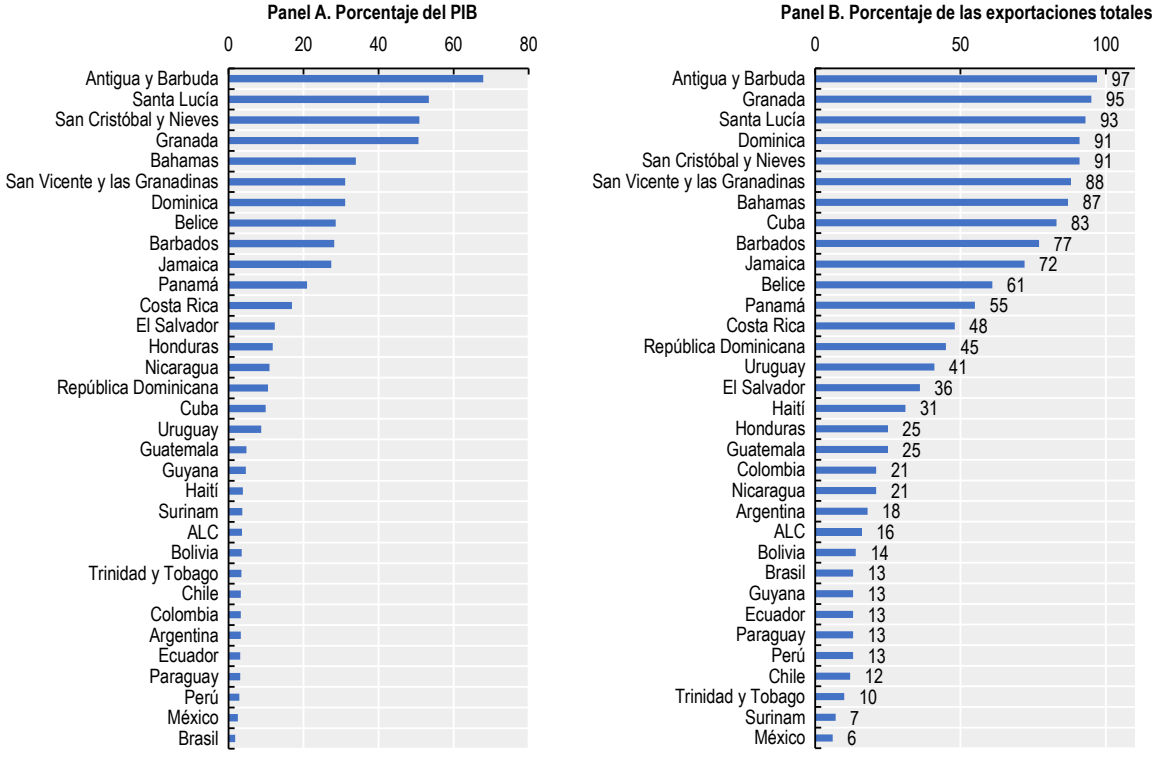
StatLink https://stat.link/qoejb4

Aunque el crecimiento de las exportaciones de servicios en ALC se ha reducido en comparación con la tendencia mundial, ha superado al de las exportaciones de bienes. Entre 2005 y 2019, la tasa de crecimiento anual media de las exportaciones de servicios de la región se situó en el 5.6%. Pese a ser inferior a la tasa media de expansión de las exportaciones mundiales de servicios en el mismo período (6.3%), este porcentaje supera la tasa media anual de crecimiento de las exportaciones de bienes de la región (4.2%). El valor de las exportaciones de servicios de ALC alcanzó un máximo histórico en 2019, por encima de los 190 000 millones de dólares estadounidenses. En 2020, la pandemia de COVID-19 causó un desplome del 18% en el comercio mundial de servicios como consecuencia del hundimiento del turismo y la reducción de la demanda de servicios de transporte asociada a la contracción del comercio de bienes. La caída de las exportaciones de servicios de la región de ALC en 2020 fue del 37%, un porcentaje muy superior al promedio mundial, debido a que el peso del turismo en las exportaciones antes de la pandemia de la región (47%) duplicaba al peso de este sector en las exportaciones mundiales (23%).

La importancia relativa del comercio de servicios es muy dispar de unos países de ALC a otros. En general, su peso en el PIB y en las exportaciones totales es inversamente proporcional al tamaño de las economías. Por ejemplo, los servicios representan más del 70% de las exportaciones totales en Cuba y varias economías de habla inglesa del Caribe, pero en Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Belice se sitúan solo por encima del 40% (Gráfico 1.6).

Gráfico 1.6. **Proporción de las exportaciones de servicios en el PIB y en las exportaciones totales, 2019**

Porcentajes



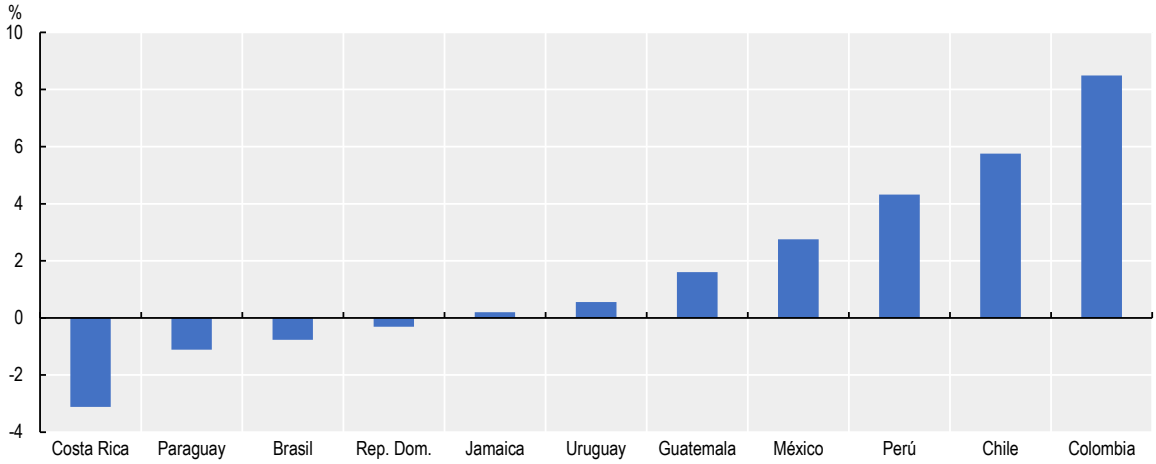
Fuente: (ECLAC, 2023[24]) basado en UNCTADSTAT (exportaciones) y CEPALSTAT (PIB).

StatLink https://stat.link/69ubx3

La inflación cede, pero se espera que varios bancos centrales mantengan una política restrictiva

La inflación en ALC ha descendido en los últimos meses, ya que los precios de los alimentos han tendido a la baja y el endurecimiento de las políticas monetarias ha comenzado a surtir efecto. La inflación alcanzó su máximo del ciclo a mediados de 2022, situándose en su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008. Este ascenso tuvo varias causas, que en el caso de algunos países incluyen factores externos, como las perturbaciones del comercio y los cuellos de botella en la oferta causados por la pandemia y agravados por la guerra de Rusia en Ucrania, que también afectaron a los precios de las materias primas. En otros países también influyeron factores internos, como la magnitud del estímulo fiscal para hacer frente a la pandemia y favorecer la recuperación. Aunque estas dinámicas ejercieron presión especialmente sobre los precios de la energía y los alimentos, la inflación se ha extendido a otras categorías de precios en casi todos los países. Las tasas de variación de los precios aumentaron en la práctica totalidad de los países de ALC, con independencia de sus regímenes monetarios, aunque el ascenso fue menor en los países dolarizados y mayor en los países sin un régimen de metas de inflación. Pese a que la inflación se está reduciendo desde mediados de 2022, en algunas economías de ALC permanece por encima de las metas fijadas por los bancos centrales. Desde el segundo semestre de 2021, los países con regímenes de metas de inflación han subido rápidamente sus tasas de interés para anclar las expectativas de inflación. Las tasas de crecimiento de los precios han seguido estando por encima de sus metas en el primer semestre de 2023 (Gráfico 1.7) en algunas economías de ALC, especialmente en los países en los que las presiones de demanda eran más fuertes, como Colombia y Chile. La normalización de los precios de las materias primas está contribuyendo al descenso de la inflación general, que ya está por debajo de la banda superior del intervalo fijado como meta en varios países. Sin embargo, la mayor rigidez de los precios de los servicios ha hecho que la caída de la inflación subyacente se prolongue en el tiempo (Adler y Chalk, 2023[6]; Galindo y Nuguer, 2023[5]; ECLAC, 2022[4]; Banco de España, 2023[7]; CAF, 2023[11]).

Gráfico 1.7. **Diferencia entre la inflación general y la meta de inflación más alta, 2023**



Nota: El gráfico solo incluye las economías que tienen regímenes de metas de inflación. Datos del período comprendido entre enero de 2023 y agosto de 2023.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (Refinitiv Eikon, 2023[3]).

StatLink https://stat.link/4vspt6

El retroceso de la inflación general se debe, en parte, al descenso de los precios de la energía y los componentes subyacentes. La energía ha realizado contribuciones negativas a la inflación general durante los últimos nueve meses. También los precios de los bienes

subyacentes han empezado a descender, gracias a una reducción de los cuellos de botella en la oferta y a la apreciación de las monedas. Sin embargo, las presiones inflacionarias siguen siendo altas en el caso de los alimentos, y los servicios continúan realizando una aportación notable a la inflación, sin que se observe una disminución apreciable de las presiones (Banco de España, 2023[7]; CAF, 2023[11]).

La mayoría de los bancos centrales de la región de ALC mantuvieron una política monetaria restrictiva durante la primera mitad de 2023, con el fin de anclar las expectativas de inflación. Solo unos pocos países, como Costa Rica, comenzaron a bajar sus tasas de interés oficiales en el primer semestre de 2023. Otros factores —como la velocidad de la desaceleración de la actividad económica, la volatilidad en los mercados financieros internacionales y las consiguientes fluctuaciones de los tipos de cambio, o el impacto de fenómenos meteorológicos adversos como El Niño— pueden condicionar la política monetaria y el uso de instrumentos macroprudenciales para preservar la estabilidad macrofinanciera (ECLAC, 2022[4]; Banco de España, 2023[7]; CAF, 2023[11]; OECD, 2023[1]).

El espacio fiscal sigue siendo limitado a pesar del repliegue de las medidas de estímulo

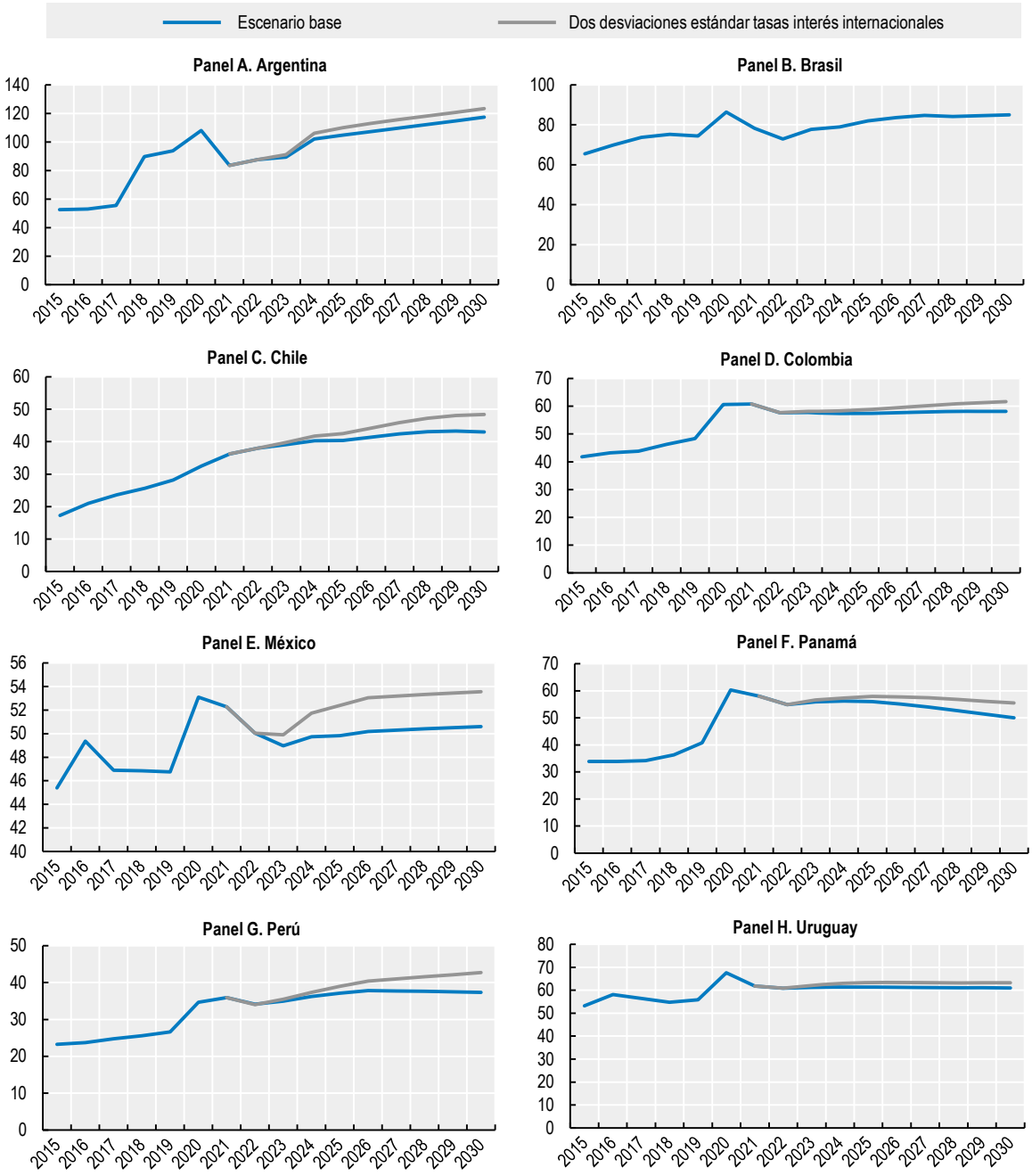
Las cuentas públicas han ido mejorando en ALC desde 2021, gracias al aumento de los ingresos y a la disminución del gasto derivado de las medidas de apoyo a la economía introducidas durante la pandemia. Por consiguiente, en las cuentas públicas de las Administraciones Centrales se observa (en promedio) una evolución positiva con respecto a los déficits de 2020 (-6.9% del PIB) causados por la respuesta a la crisis del COVID-19. Los déficits públicos se redujeron hasta promediar un -2.4% del PIB en 2022, frente a -4.2% en 2021. Las economías del Caribe siguen teniendo déficits públicos y primarios, pero también han registrado mejoras graduales (ECLAC, 2023[9]; CAF, 2023[8]).

A su vez, la reducción de los déficits públicos y la rápida recuperación del crecimiento del PIB nominal han contribuido a un descenso de la deuda pública. En 2020, la deuda pública bruta de las Administraciones Centrales (como porcentaje del PIB) en la región de ALC alcanzó el 56.3% (y se disparó hasta el 87.4% en el Caribe, su nivel más alto de los últimos 30 años). En 2022, los niveles medios de deuda se redujeron hasta el 51.5% del PIB (77.3% en la subregión caribeña). Sin embargo, se observa una considerable heterogeneidad entre países en cuanto a los niveles de deuda, que van desde más del 100% del PIB en algunos Estados del Caribe (como Barbados y Surinam) hasta menos del 40% en Chile, Guatemala, Paraguay y Perú (ECLAC, 2023[9]; CAF, 2023[8]).

Pese a los recientes esfuerzos de consolidación, el espacio fiscal sigue siendo limitado en ALC; por lo tanto, no debe ponerse en peligro la estabilidad fiscal. En promedio, la deuda se sitúa por encima de los niveles observados antes de la pandemia y los pagos de intereses representan un porcentaje mayor del gasto, lo que reduce el margen para la inversión y la implementación de políticas anticíclicas. Para que la deuda se estabilice o se reduzca, continúa siendo fundamental propiciar una tasa de crecimiento económico superior a las tasas de interés reales. El aumento de la inversión pública y privada debería ser un elemento prioritario en la agenda de crecimiento de los países de ALC (Capítulos 2 y 3). Si eso no es posible, el superávit primario debería ser lo suficientemente amplio para compensar la diferencia negativa entre la tasa de crecimiento y las tasas de interés.

Gráfico 1.8. **Dinámica de la deuda en una selección de economías de ALC**

Deuda pública como porcentaje del PIB



Nota: La dinámica de la deuda se modeliza mediante una ecuación conductual definida en Bohn (1998) y FMI (2018).

$$b_{t+1} = b_t \left\{ \frac{(1-\alpha)\left(1+i_t^d\right)+(\alpha)\left[1+d_t\right]\left[1+i_t^*\right]}{1+g_t} \right\} - SP_t$$

Esta ecuación considera cuatro variables que afectan la relación entre deuda y PIB (bt): el crecimiento del PIB real (gt); las tasas de interés reales internas y externas (ld, l*); la variación del tipo de cambio (dt); y el saldo fiscal primario en términos del PIB (SPt). Las perturbaciones aleatorias de las tasas de interés externas reflejan un ejercicio de 1 000 simulaciones estocásticas sobre la base de una distribución "conjunta normal" de las cuatro variables fundamentales de la ecuación conductual de la deuda/PIB para calcular la matriz de covarianza. En el caso de Uruguay, solo se calcula una desviación estándar y, en el de Brasil, solo se muestra el escenario base.

Fuente: (CAF, 2023[8]).

StatLink https://stat.link/jv5owz

Es probable que las cifras de deuda pública se estabilicen en niveles manejables en la mayoría de las economías de ALC. No obstante, la dinámica de la deuda varía mucho de unos países a otros, en función del crecimiento económico, los saldos primarios, la inflación general, las tasas de interés, los tipos de cambio y la composición por monedas de la deuda. En cuanto a este último aspecto, una repentina evolución desfavorable de las tasas de interés internacionales podría hacer descarrilar la evolución de la deuda, dependiendo de la exposición a deuda en moneda extranjera y de la interrelación con el crecimiento económico. Por ejemplo, en Argentina, Chile, Panamá y Perú, una perturbación de dos desviaciones estándar en las tasas de interés internacionales podría incrementar los niveles de deuda en aproximadamente un 5% del PIB de aquí a 2030 (Gráfico 1.8) (CAF, 2023[8]).

Tanto la composición de la consolidación fiscal como su calendario serán importantes para configurar un desarrollo económico inclusivo (Powell y Valencia, 2023[25]). A corto plazo, la región debe mantener sus esfuerzos de consolidación fiscal, dando prioridad al mismo tiempo a la protección de los más vulnerables frente a la inflación. Esto puede lograrse reforzando la focalización de los sistemas de protección social y manteniendo o implementando políticas de apoyo focalizadas para contrarrestar los efectos negativos de la elevada inflación (OECD et al., 2021[22]).

A largo plazo, la política fiscal debe proteger la inversión pública con marcos fiscales adecuados. Las inversiones de capital son esenciales para la transformación de la producción y (a corto plazo) pueden ayudar a contrarrestar los efectos contractivos del ajuste fiscal. No obstante, en los episodios de consolidación fiscal, a los gobiernos les resulta más fácil recortar el gasto de capital que el gasto corriente, ya que lo primero suele tener un costo político más bajo que reducir el consumo de las administraciones públicas (Ardanaz y Izquierdo, 2022[26]). Esto no solo incide en el crecimiento a largo plazo, sino que también puede afectar a la recuperación económica. La protección de la inversión durante el período de consolidación fiscal puede mitigar la contracción económica y, en algunos casos, dar lugar a una expansión (Ardanaz et al., 2021[27]). Para proteger la inversión pública, la región de ALC debe desarrollar o reforzar los marcos fiscales, en los que las reglas fiscales puedan ser una herramienta importante. Asimismo, estas reglas han de ser suficientemente flexibles para adaptarse a las perturbaciones exógenas, lo que puede lograrse mediante la inclusión de objetivos presupuestarios ajustados en función del ciclo, cláusulas de escape bien definidas y un tratamiento diferenciado de los gastos de inversión (OECD et al., 2022[13]; Arreaza et al., 2022[28]; Cavallo et al., 2020[29]).

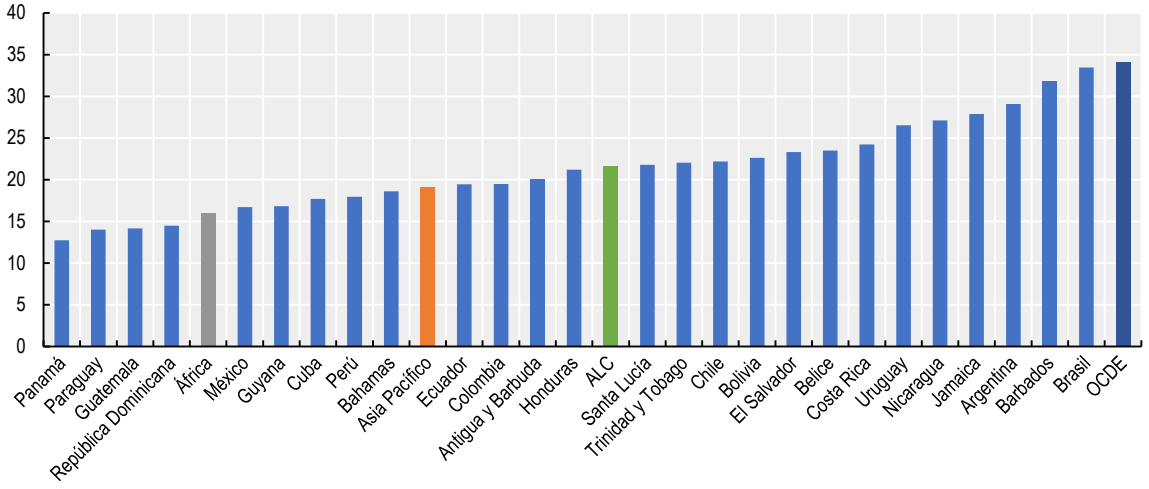
La ampliación del espacio fiscal y el incremento de la inversión pública deberían impulsarse por medio de mejores instituciones fiscales, un gasto público más eficiente y eficaz, ingresos tributarios más progresivos (OECD et al., 2022[13]; OECD et al., 2023[30]; ECLAC, 2022[31]) y una mejor gestión de la deuda. Unas instituciones fiscales más fuertes incrementan la confianza, lo que reduce las primas de riesgo y amplía el espacio fiscal, ya que el ajuste fiscal que se necesita para estabilizar la deuda es menor (Arreaza et al., 2022[28]). Además, los elevados niveles de deuda en muchos países de ALC pueden lastrar el crecimiento al reducir la inversión pública, incrementar los costos de financiamiento y frenar la inversión privada.

Alinear la política fiscal y la monetaria es fundamental para promover un crecimiento sostenible. La moderación de la demanda como consecuencia de la consolidación fiscal puede ayudar a reducir las presiones inflacionarias. Además, la consolidación fiscal puede crear espacio fiscal al reducir las primas de riesgo y minimizar los gastos de financiamiento, lo que a su vez reduce la tasa de interés de política monetaria neutral (Galindo y Nuguer, 2023[5]; Adler y Chalk, 2023[6]).

Los sistemas tributarios necesitan mejoras para financiar los servicios públicos y la inversión

La región de ALC debe recuperar espacio fiscal para financiar las inversiones que se necesitan para transformar la producción, ampliar los servicios públicos de calidad y asegurar la sostenibilidad fiscal. Para lograr este objetivo pueden emplearse varios instrumentos, incluidos el gasto y los impuestos. El gasto puede ser más eficaz y eficiente si se logra focalizar los desembolsos públicos (incluidos los destinados a fines sociales y los subsidios) y se alcanza un mejor equilibrio entre la inversión en capital y el gasto corriente (OECD et al., 2021[22]; Izquierdo, Pessino y Vuletin, 2018[32]). En cuanto a los impuestos, el ratio impuestos/PIB en la región de ALC promediaba en 2021 un 21.7%, considerablemente por debajo de la media del 34.1% de las economías de la OCDE. En 2021, el nivel de la recaudación tributaria presentaba considerables variaciones entre los países de ALC, desde el 12.7% del PIB en Panamá hasta el 33.5% en Brasil (Gráfico 1.9) (OECD et al., 2023[30]).

Gráfico 1.9. **Ratios impuestos/PIB en países de ALC y en otras regiones, 2021**



Fuente: (OECD et al., 2023[30]; OECD, 2023[33]).

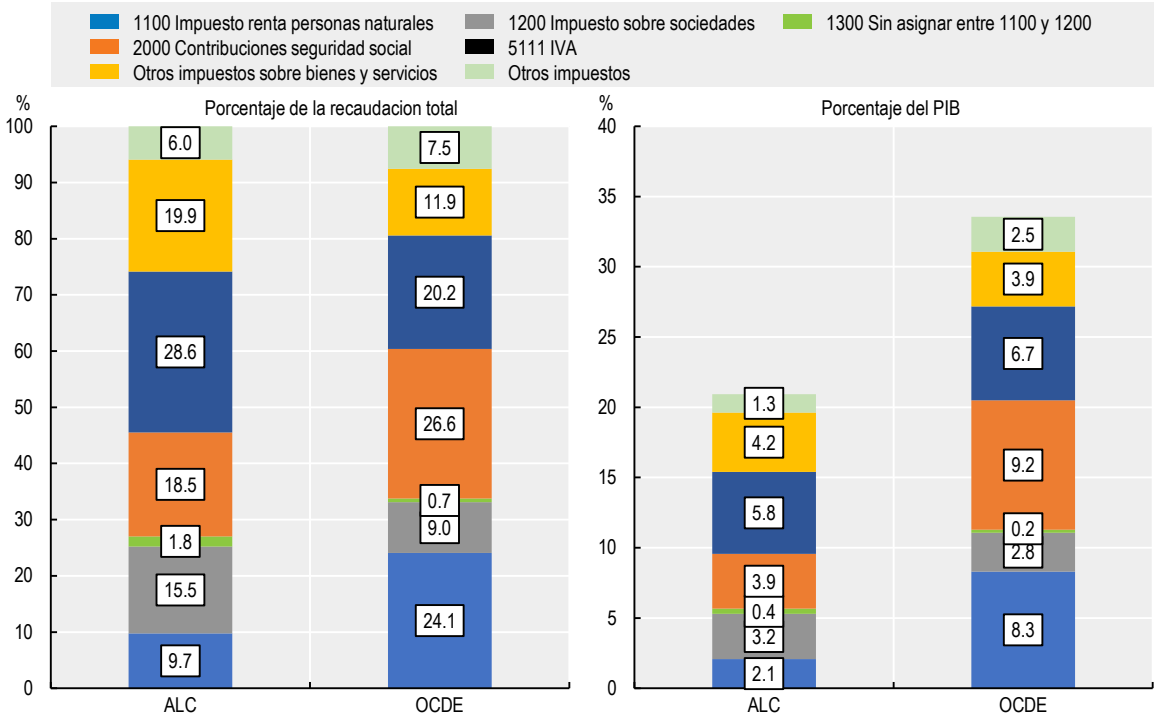
StatLink https://stat.link/r03sg2

La mayoría de las economías de ALC necesitan incrementar su recaudación de impuestos y reformar sus sistemas tributarios para perseguir diversos objetivos sociales, económicos y de inversión. En una región con una elevada desigualdad, debería concederse prioridad a mejorar la capacidad redistributiva del sistema tributario (OECD et al., 2022[13]). Los regímenes tributarios tienen un efecto directo sobre las principales prioridades en materia de políticas, como la formalización del empleo, el emprendimiento, la inversión y el crecimiento económico general. Asimismo, el sistema tributario puede contribuir a impulsar la transición verde y a reducir la desigualdad de género. Entre las opciones de política que pueden ayudar a alcanzar estos objetivos se incluyen la reducción de la evasión y la elusión fiscal, la mejora del cumplimiento fiscal, el fortalecimiento de la administración tributaria, el aumento de la progresividad de los impuestos sobre la renta a las personas naturales y la eliminación de los gastos fiscales que contribuyen poco a la equidad o a la creación de empleo (Nieto-Parra, Orozco y Mora, 2021[34]). Para lograr esos objetivos también hará falta un enfoque gradual y bien coordinado con miras a financiar la transición verde y disminuir la dependencia de los ingresos generados por los hidrocarburos que tienen algunos países.

Reequilibrando su estructura tributaria, las economías de ALC pueden tener sistemas tributarios más progresivos y reducir las desigualdades de ingresos. En la región, los

impuestos indirectos tienen más peso que los directos en las estructuras tributarias de ALC. Los impuestos indirectos o impuestos sobre el consumo suelen ser regresivos, puesto que implican una carga mayor para los hogares de ingresos bajos. En 2020, los impuestos generales sobre el consumo (principalmente el impuesto sobre el valor agregado [IVA]) representaron casi la mitad de la recaudación tributaria en los países de ALC, frente al 32.1% en los países de la OCDE (Gráfico 1.10). En cambio, los impuestos directos o sobre la renta son más progresivos, ya que los hogares con ingresos elevados contribuyen con una proporción mayor de su renta que los hogares con ingresos más bajos. En 2020, los impuestos sobre la renta y los beneficios representaban, en promedio, el 25.2% de la recaudación tributaria en ALC, frente a una media del 33.1% en la OCDE. Dentro de los impuestos sobre la renta, el impuesto sobre las sociedades aportaba el 15.5% del total de la recaudación en la región, mientras que el impuesto sobre la renta a las personas naturales tan solo representaba un 9.7% de esos ingresos. Unas tasas elevadas del impuesto sobre las sociedades pueden entorpecer la inversión y el emprendimiento. En las economías de la OCDE, el impuesto sobre la renta a las personas naturales representa un porcentaje mayor de los ingresos tributarios (24.1%) que el procedente del impuesto sobre las sociedades (9.0%) (OECD et al., 2023[30]).

Gráfico 1.10. **Estructura tributaria promedio en la región de ALC y en la OCDE, 2020**



Fuente: (OECD et al., 2023[30]).

StatLink https://stat.link/0y82k4

Los regímenes tributarios no solo sirven para recaudar, sino que también pueden ayudar a perseguir objetivos medioambientales. Incrementar los impuestos medioambientales puede impulsar la transición verde y la transformación digital, al reducir la contaminación, reorientar los patrones de consumo hacia modelos más sostenibles y estimular la innovación tecnológica. La región de ALC todavía tiene un gran margen para utilizar los impuestos relacionados con el medioambiente de una forma más eficaz. En promedio, los ingresos tributarios relacionados con el medioambiente de los países de ALC representaban el 1.0% del PIB en 2021, apenas la mitad del promedio del 2.0% de la OCDE (OECD et al., 2023[30]).

Sin embargo, los impuestos medioambientales pueden tener repercusiones negativas para la población más vulnerable y causar distorsiones que afecten a la actividad económica. Por ejemplo, pueden agravar la situación de los más vulnerables al incrementar el precio de los productos y servicios intensivos en combustibles fósiles. Por lo tanto, resulta esencial desarrollar y mejorar sistemas de compensación, que pueden incluir transferencias monetarias y en especie bien orientadas, complementadas por políticas activas en el mercado laboral y programas de trabajo autónomo y de emprendimiento (OECD et al., 2022[13]). Además, los impuestos medioambientales pueden distorsionar las bases imponibles o acentuar distorsiones ya existentes, lo que puede incidir de manera negativa en la actividad económica y el emprendimiento. Por ese motivo, es necesario utilizar parte de la recaudación obtenida con los impuestos medioambientales para compensar esos efectos (OECD, 2010[35]). Si se diseñan correctamente, los impuestos medioambientales producirán los cambios deseados en el comportamiento de los consumidores y las empresas, tras lo cual deberían retirarse de manera automática y gradual.

Los sistemas tributarios de ALC también pueden servir para promover la igualdad de género. Aunque los hombres y las mujeres están, por lo general, sujetos a la misma normativa tributaria, las desigualdades de género existentes en el sistema tributario pueden perpetuarse de manera involuntaria como consecuencia de diferencias sociales y económicas, como las disparidades en materia de nivel de ingresos o los distintos niveles de participación en el mercado de trabajo. En ALC, la carga de los impuestos tanto directos como indirectos afecta más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, los sistemas tributarios no tienen en cuenta, en general, que las mujeres asumen una proporción mayor del trabajo no remunerado, lo que hace que la carga impositiva sea desproporcionada a nivel de los hogares. Otro ejemplo de sesgo de género en la política tributaria es la existencia de desgravaciones fiscales en sectores económicos dominados por los varones. Por lo tanto, es importante promover sistemas tributarios que eliminen todos los sesgos de género, ya sean explícitos (como cuando la legislación tributaria identifica y trata a las mujeres y a los hombres de manera diferente) o implícitos (cuando las leyes o los reglamentos tributarios establecen un tratamiento similar para hombres y mujeres, pero su aplicación da lugar a un resultado no equitativo). Acabar con los sesgos explícitos e implícitos del régimen tributario de un país puede incrementar la igualdad de género —por ejemplo, cambiando la naturaleza de la titularidad de los activos— y, al mismo tiempo, incrementar la participación en la fuerza laboral y el emprendimiento de las mujeres, lo que les permite contribuir al crecimiento económico. La conciencia sobre estas cuestiones está aumentando en la región de ALC. Países como Argentina, México y Uruguay ya han implementado políticas o reformas tributarias encaminadas a mejorar la igualdad de género; no obstante, es preciso seguir avanzando por ese camino, y que lo haga una proporción mayor de las economías de ALC (Astudillo et al., 2022[36]; OECD, 2022[37]; OECD et al., 2021[22]).

Las medidas fiscales deben coordinarse en el marco de una secuencia de políticas bien definidas. Se necesita un diálogo nacional que permita lograr un consenso, basado en datos empíricos, sobre el momento y las dimensiones del gasto público y los impuestos necesarios. Ese consenso puede contribuir a la renovación del contrato social (OECD et al., 2021[22]).

Los incentivos del impuesto sobre las sociedades deben mejorarse para potenciar las inversiones

En las decisiones sobre la inversión privada pueden influir distintos tipos de instrumentos tributarios, como los impuestos que normalmente se aplican a las empresas, incluidos los impuestos sobre la renta, sobre la nómina y sobre bienes y servicios (por

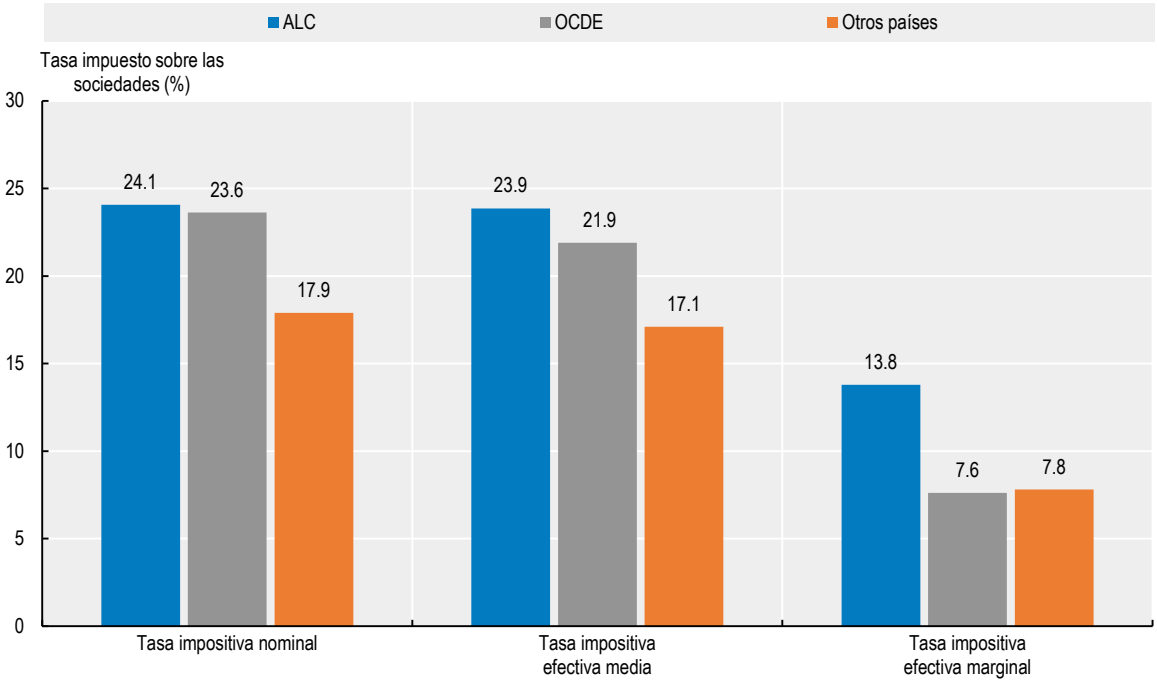
ejemplo, el IVA) y otros tributos más específicos, como los impuestos correctivos y los que gravan la riqueza. Además, determinadas disposiciones tienen por finalidad reducir el costo del capital, como los créditos a la inversión o los mecanismos de amortización acelerada. Cada uno de estos instrumentos presenta ventajas comparativas que es importante considerar cuando se diseña un programa de incentivos a la inversión (ECLAC, 2022[31]; ECLAC, 2013[38]).

En ALC, la gran mayoría de los incentivos fiscales se centran en el impuesto sobre las sociedades, aunque algunos también se aplican a los aranceles de importación, el IVA y otros impuestos indirectos. Los incentivos fiscales se definen como disposiciones tributarias específicas que prevén desviaciones favorables para el contribuyente del tratamiento tributario estándar de un país y que dan lugar a una reducción o un diferimiento de la deuda fiscal (Celani, Dressler y Wermelinger, 2022[39]; OECD, 2022[40]). Los incentivos específicos del impuesto sobre las sociedades son una herramienta ampliamente utilizada para impulsar la inversión privada, pero tienen un costo: reducen los ingresos públicos. Estos incentivos pueden fomentar la inversión e incidir positivamente en el producto, el empleo, la productividad y otros objetivos relacionados con el desarrollo sostenible. Sin embargo, si se gestionan de forma incorrecta o se abusa de ellos, pueden mermar la recaudación tributaria, causar distorsiones económicas, erosionar el principio de equidad y aumentar los costos administrativos y de cumplimiento y, potencialmente, generar una competencia fiscal perjudicial (Celani, Dressler y Wermelinger, 2022[39]).

Las variaciones en la base imponible del impuesto sobre las sociedades puede incidir de manera significativa en la carga tributaria y jugar un papel en la competencia internacional y en el fomento o la desincentivación de la inversión. Las normas en materia de amortización a efectos fiscales y otras disposiciones relacionadas (por ejemplo, las deducciones en la base imponible por el coste de los fondos propios (ACE), la convención semestral o los métodos de valoración de existencias) pueden ayudar a explicar las variaciones en las bases imponibles entre jurisdicciones. Las tasas impositivas efectivas son un indicador más preciso que las tasas impositivas nominales (las previstas por la normativa) para medir la incidencia de estas disposiciones y realizar comparaciones entre economías, ya que ofrecen una imagen más fiel de las obligaciones fiscales de las empresas (OECD, 2022[41]).

En ALC, las tasas impositivas efectivas medias y marginales que gravan los ingresos de las empresas son relativamente elevadas (Gráfico 1.11). Esto se debe a que las tasas impositivas nominales son altas en términos relativos y a que se aplican desgravaciones por bienes de capital que dan un tratamiento menos generoso a determinados activos en comparación con las estimaciones de depreciación económica y con el tratamiento en otros países. Estos niveles relativamente altos de las tasas impositivas efectivas podrían desalentar inversiones potenciales (Hanappi et al., 2023[42]).

Gráfico 1.11. **Tasas efectivas del impuesto sobre las sociedades en ALC, 2021**



Nota: Tasas impositivas efectivas prospectivas. "Otros países" incluye datos de Europa emergente (9), Oriente Medio y Asia Central, Asia emergente y África subsahariana (16).

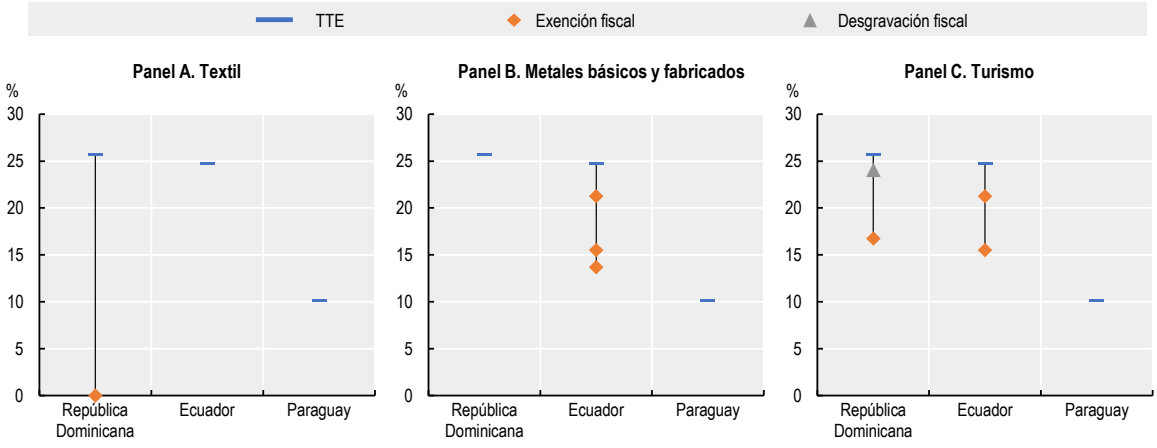
Fuente: (Hanappi et al., 2023[42]).

StatLink https://stat.link/zje2ny

Varios países de ALC conceden incentivos fiscales focalizados o prevén tratamientos tributarios preferentes que reducen la tasa impositiva efectiva para actividades, sectores y ubicaciones concretos. En la actualidad están disponibles análisis sobre tres países (República Dominicana, Ecuador y Paraguay) y tres sectores económicos distintos (textil, metal y turismo) (Gráfico 1.12). Aunque la República Dominicana y Ecuador tienen una tasa impositiva efectiva estándar del 25%, ofrecen incentivos fiscales a sectores específicos que reducen de manera sustancial la imposición efectiva en algunos sectores. Por ejemplo, la tasa impositiva efectiva puede llegar a ser tan baja como el 0% aplicado en el sector textil de la República Dominicana, mientras que en el sector del metal de Ecuador es hasta un 45% más baja que la tasa estándar (13.7% frente al 24.8%). Paraguay no utiliza incentivos en el impuesto sobre las sociedades, pero sí tiene una tasa estándar relativamente baja en ese tributo, que se traduce en la tasa impositiva efectiva de los sectores del metal y el turismo más baja de los tres países (OECD, 2022[40]; Hanappi et al., 2023[42]; Celani, Dressler y Wermelinger, 2022[39]).

Gráfico 1.12. **Impacto de los incentivos fiscales a la inversión de sectores específicos sobre las tasas impositivas efectivas en una selección de países de ALC**

Tasas impositivas efectivas medias (TIEM) del tratamiento tributario estándar (TTE) e incentivos fiscales a la inversión en el sector correspondiente



Nota: Esta cifra tiene en cuenta los incentivos fiscales a la inversión y el tratamiento tributario estándar a 1 de enero de 2020. Las tasas impositivas efectivas medias (TIEM) se calculan para una inversión estandarizada en un único activo inmobiliario no residencial. El tratamiento tributario estándar se calcula teniendo en cuenta las tasas estándar del impuesto sobre las sociedades de cada país, las desgravaciones por bienes de capital aplicadas a activos específicos y el método de recuperación de costos. Las rentas exentas de impuestos de manera temporal o permanente no dan lugar a desgravaciones por bienes de capital estándar.

Fuente: (OECD, 2022[40]; Celani, Dressler y Wermelinger, 2022[39]).

StatLink https://stat.link/3aut2v

La recaudación perdida como consecuencia de incentivos fiscales, deducciones y tasas impositivas reducidas (entre otros factores) alcanza cifras significativas en ALC. En 2021, se situaba en un promedio del 3.7% del PIB, equivalente al 19% de la recaudación tributaria de las administraciones públicas. Si los incentivos fiscales están mal diseñados, su eficacia puede ser limitada; además, podrían generar ganancias extraordinarias no justificadas para proyectos que también se habrían llevado a cabo en ausencia del incentivo.

Para poder cumplir sus objetivos de desarrollo, los incentivos fiscales deben diseñarse correctamente y aplicarse de manera racional. Para que esto sea posible, las economías de ALC han de mejorar sus marcos institucionales con miras a asegurar una buena gobernanza y reducir esfuerzos baldíos, lo que implica crear incentivos fiscales transparentes y claros con requisitos jurídicamente vinculantes para su cuantificación, incluidos análisis de costo-beneficio, y procesos de evaluación sólidos. Los incentivos fiscales con períodos de vigencia explícitos, criterios de concesión claros y los correspondientes mecanismos de revisión tienen una tasa de éxito alta. Podría ayudar unificar todos los aspectos del diseño de los incentivos en un corpus jurídico, que incluya información sobre los objetivos de política de esas medidas (OECD, 2022[21]) (ECLAC-OXFAM, 2019[43]; OECD, 2015[44]; Celani, Dressler y Wermelinger, 2022[39]; ECLAC, 2022[31]; OECD, 2019[21]).

La evaluación de los incentivos fiscales está poco desarrollada en la región de ALC y hasta la fecha se han llevado a cabo escasos estudios exhaustivos. Las revisiones periódicas son un ejercicio importante para determinar si los incentivos fiscales están justificados. En estas revisiones se ponderan los costos asociados con la aplicación de los incentivos y los beneficios sociales que aportan, en función del objetivo para el que se hayan diseñado (desarrollo industrial, creación de empleo o protección medioambiental, entre otros). La adopción de programas de incentivos fiscales debe llevar también aparejada una evaluación de su costo de oportunidad en comparación con otros instrumentos de políticas que también puedan incidir de manera positiva en la dinámica de la inversión, como las inversiones públicas, la contratación pública, subsidios focalizados e instrumentos

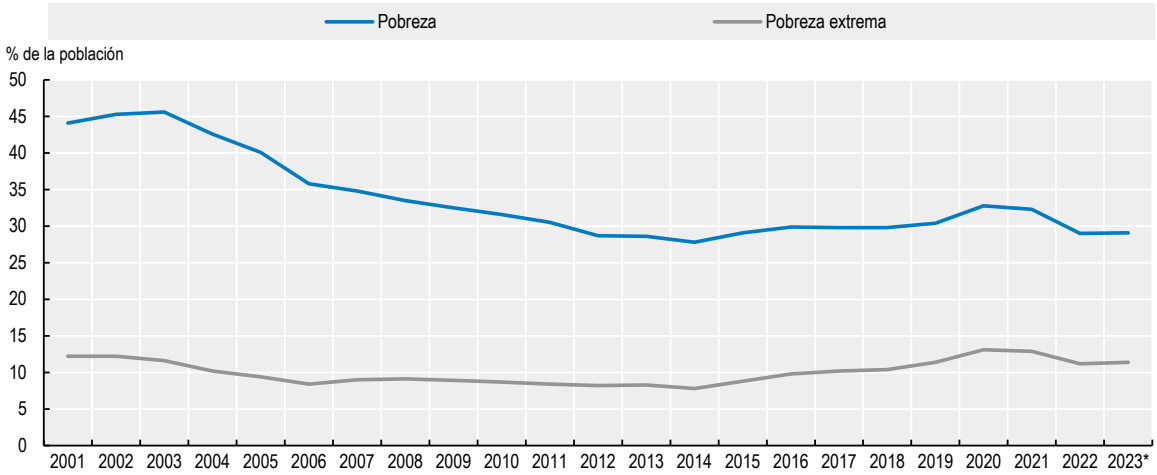
de liquidez con garantía pública. Estas revisiones exhaustivas deben complementarse con un marco institucional que asegure la buena gobernanza y establezca requisitos jurídicamente vinculantes relativos a la cuantificación de los incentivos fiscales y la realización de análisis continuos de costo-beneficio, así como estrictos procesos de evaluación (OECD et al., 2023[30]).

Las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles en la región de ALC

La pobreza y la pobreza extrema se mantienen por encima de los niveles prepandémicos en ALC en más de la mitad de los países de ALC

En 2022, el 29% de la población de ALC vivía en la pobreza y el 11.2% estaba en situación de pobreza extrema (Gráfico 1.13). Las estimaciones para 2023 muestran que tanto la pobreza como la pobreza extrema deberían mantenerse en niveles similares a los de 2022. Además, la pobreza y la pobreza extrema se mantienen por encima de los niveles prepandémicos en más de la mitad de los países de ALC La tasa de pobreza mejoró ligeramente entre 2020 y 2022. Tras un incremento pronunciado en 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19, la pobreza retrocedió ligeramente en 2021 y 2022 gracias al fuerte repunte económico. Sin embargo, la pobreza extrema ha crecido sistemáticamente cada año desde 2014, con la excepción del moderado descenso que se produjo en 2021, y en 2022 volvió a situarse en el nivel observado en 2020. La evolución combinada de la pobreza y la pobreza extrema en 2022 se debió a dos factores contrapuestos. Por una parte, el crecimiento económico (pese a ser considerablemente inferior al de 2021) generó un incremento del empleo y de la renta de los hogares. Por otra, 2022 se caracterizó por una inflación disparada, que erosionó el poder adquisitivo de las rentas (ECLAC, 2023[45]; Cherkasky, 2022[46]).

Gráfico 1.13. **Evolución de las tasas de pobreza y pobreza extrema en ALC**



Nota: Media ponderada de los siguientes países: Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay. *Las estimaciones para 2023 son proyecciones.

Fuente: (OECD et al., 2022[13]; ECLAC, 2023[45]).

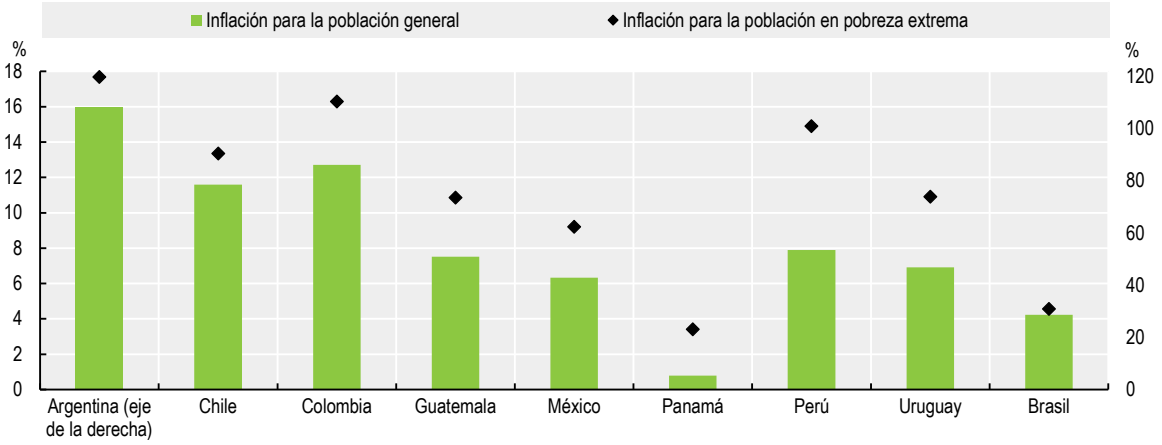
StatLink https://stat.link/u9fw5b

El efecto negativo de la inflación en la renta de los hogares de ALC durante el primer semestre de 2023 fue considerablemente más acentuado para los hogares en situación de pobreza extrema, que experimentaron un incremento medio de los precios superior en 4.1 puntos porcentuales al del hogar medio a escala nacional (Gráfico 1.14). En una muestra de economías de ALC, Argentina y Perú fueron los países que presentaron las mayores diferencias entre el efecto de la inflación en la población general y el impacto en

los hogares extremadamente pobres. En Argentina esa diferencia alcanzó los 11.6 puntos porcentuales y en Perú fue de 7.0 puntos porcentuales.

Gráfico 1.14. **Impacto de la inflación en la población general y en las personas en situación de pobreza extrema en 2023**

Selección de países de América Latina (%)



Nota: Datos del período comprendido entre enero y julio de 2023. Crecimiento medio interanual de los índices de precios de consumo (IPC) nacionales frente a crecimiento medio en los umbrales de pobreza extrema. En el caso de Panamá, los datos acaban en junio de 2023 y, en el de Chile, empiezan en 2022. Los umbrales de pobreza extrema se basan en el costo de una cesta de alimentos básica que cubre las necesidades básicas y las necesidades calóricas mínimas de los miembros de un hogar de referencia. En el caso de Colombia y Perú, se tuvo en cuenta la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas de su IPC. En el de Panamá, los datos incluyen los distritos de Panamá y San Miguelito. Para Uruguay, se considera la inflación en Montevideo. Para calcular la tasa de inflación que afecta a las personas en situación de pobreza extrema de Brasil se utilizaron los promedios de las cestas de las 17 capitales consideradas por Dieese para crear la cesta básica. Los datos de Argentina se representan en el eje de la derecha.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos de las oficinas nacionales de estadística sobre el IPC y los umbrales de pobreza.

StatLink https://stat.link/946js3

Las economías de la región de ALC han comenzado a implementar políticas para aliviar los efectos de la elevada inflación en su población más vulnerable. Dichas políticas se han articulado mediante instrumentos como transferencias monetarias; la venta de alimentos a precios reducidos o su distribución gratuita a grupos de población aislados o marginados socialmente; subsidios a los precios de los combustibles y el transporte; reducciones del IVA de algunos productos básicos incluidos en la cesta de consumo de los más pobres y vulnerables; ayudas al sector agroalimentario (con énfasis en las explotaciones familiares); la abolición o reducción de aranceles para algunos bienes alimentarios; y la reducción de determinadas tasas. Varias economías latinoamericanas han puesto en marcha medidas sociales —como exenciones del IVA o de derechos de importación, congelaciones de precios o medidas generales destinadas a impulsar el suministro de alimentos— junto con medidas en materia de precios o de competitividad. Argentina proporcionó ayudas a las rentas para proteger a los trabajadores con remuneraciones bajas. Brasil amplió la cobertura y el importe de las transferencias de "Auxílio Brasil" y "Auxílio Gás". Chile implementó el bono "Chile Apoya de Invierno" para ayudar a los sectores más vulnerables a afrontar el ascenso de los precios de los alimentos. Colombia amplió la cobertura de su programa "Ingreso Solidario". México estableció el "Paquete contra la inflación y la carestía", que refuerza los programas tradicionales de seguridad alimentaria. Perú implementó un pago único destinado a beneficiarios de los programas no contributivos "Juntos" (Pensión 65 y Contigo). Uruguay destinó transferencias adicionales a reforzar los programas sociales existentes (ECLAC, 2023[45]). De cara al futuro, es importante que estas medidas de apoyo se focalicen en los hogares de ingresos bajos y protejan los incentivos a la reducción del consumo energético (OECD, 2023[1]).

La desigualdad y la reducida movilidad social persisten en la región de ALC pese a algunos avances

La desigualdad en la distribución de los ingresos en América Latina, medida por el coeficiente de Gini, se mantuvo relativamente estancada entre 2017 y 2022, después de registrar un descenso significativo en la década de 2000 y una reducción más limitada en la de 2010. En 2022, el coeficiente de Gini de América Latina, en promedio, se redujo ligeramente, hasta situarse en 0.45 frente a 0.46 en 2020. Los países que presentaban los coeficientes de Gini más elevados (indicativos de una mayor desigualdad) en 2021 eran Brasil y Colombia con promedios superiores a 0.50. Los coeficientes de Gini más bajos se observaron en Argentina, República Dominicana y Uruguay, con coeficientes entre 0.38 y 0.40 (ECLAC, 2023[45]).

Para explicar la evolución de la desigualdad entre los países de ALC, es útil referirse a la evolución de los ingresos medios de los hogares. En los países donde aumentó la desigualdad, los quintiles de mayores ingresos ganaron más que los más pobres (por ejemplo, Uruguay). Por el contrario, se observan tres patrones distintos en los países donde la desigualdad disminuyó. El primero corresponde a países (República Dominicana, Argentina y Costa Rica) donde los ingresos de los quintiles más pobres se mantuvieron sin cambios, mientras que los del quintil de mayores ingresos disminuyeron. El segundo patrón muestra países (Brasil, Panamá y Perú) donde los ingresos del quintil más pobre aumentaron significativamente, mientras que los ingresos del resto de los quintiles disminuyeron, siendo los hogares de mayores ingresos los más afectados. El tercero corresponde a países (Chile, Ecuador y México) donde los ingresos del quintil más pobre aumentaron con los de casi todos los demás quintiles, pero a un ritmo más rápido que en el quintil de mayores ingresos (ECLAC, 2023[45]).

Los reducidos niveles de movilidad intergeneracional son una de las principales causas de que la desigualdad no haya cambiado de manera sustancial o sostenible en los países de ALC (CAF, 2022[47]). Un análisis del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) examina mediante un enfoque a largo plazo la evolución de la movilidad intergeneracional en la región durante el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Dicho análisis muestra que la persistencia de una movilidad social reducida está estrechamente relacionada con la desigualdad de oportunidades imperante en la región. A su vez, las desigualdades que afectan a las personas de orígenes socioeconómicos distintos determinan sus oportunidades de formación de capital humano, acceso a empleos de calidad y acumulación de activos durante toda su vida (CAF, 2022[47]).

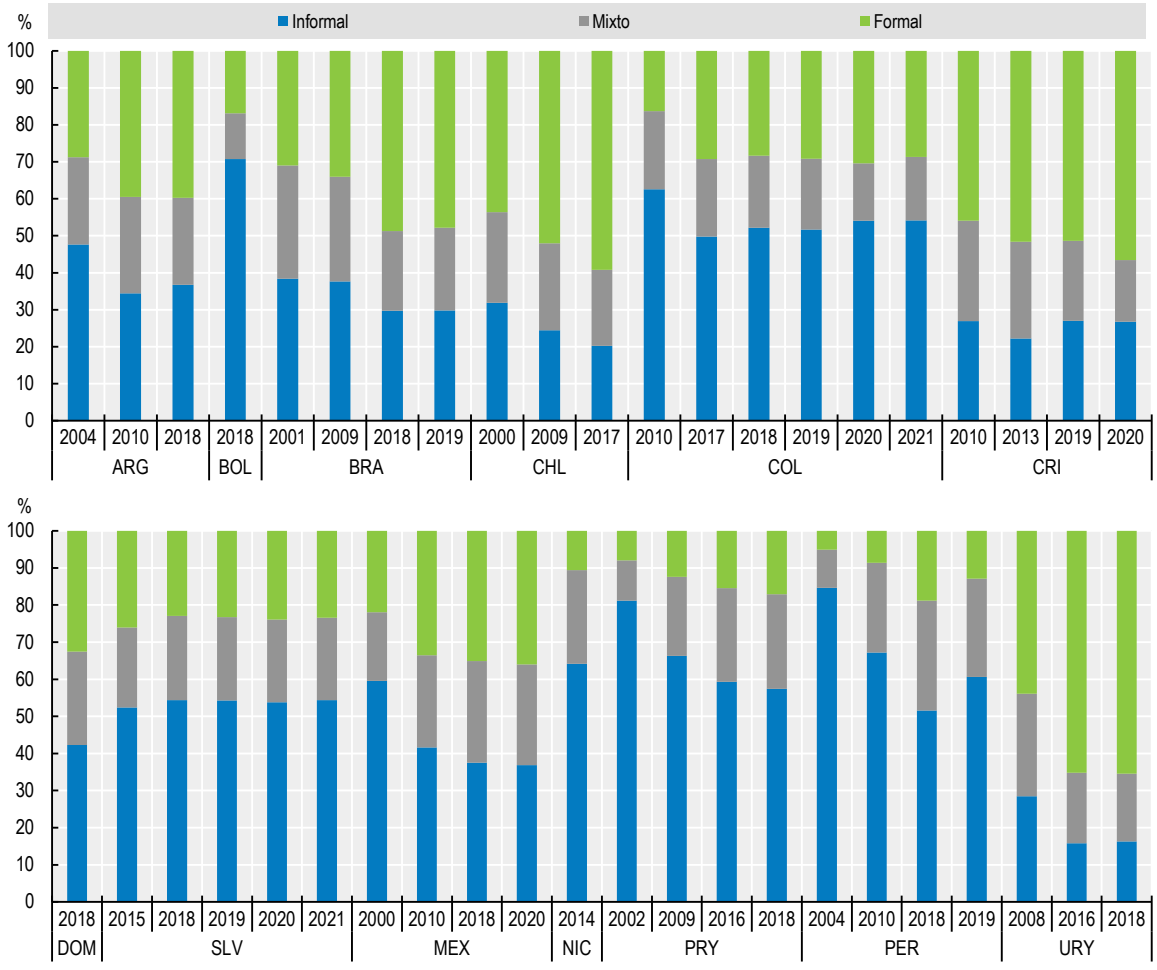
La movilidad educativa es una dimensión de la desigualdad intergeneracional. En ALC, el desarrollo de la educación que ha beneficiado a los niños y los jóvenes de familias desfavorecidas durante las últimas décadas se ha producido en los niveles educativos más bajos (fundamentalmente, enseñanza primaria y, en menor medida, secundaria). En los niveles educativos superiores, especialmente el universitario, la mejora del acceso se concentró más en los jóvenes de familias de niveles socioeconómicos medios y altos. Los menores avances logrados en niveles educativos más altos limitan la movilidad ascendente, lo que se traduce en progresos escasos en términos de la movilidad relativa (CAF, 2022[47]).

Mejorar la movilidad social en los países de ALC puede potenciar los incentivos para dedicar más esfuerzo e inversiones a la educación y la capacitación, elevando así la productividad. Además, si la región aborda la elevada persistencia de la desigualdad intergeneracional derivada de la falta de igualdad de oportunidades, puede contribuir a reforzar la confianza de las personas en sus conciudadanos y en las instituciones. En ese contexto, los responsables de la formulación de políticas deben valorar la eficacia de las medidas de política en términos de la movilidad relativa de las personas (la comparación de su situación social con la de sus iguales) y no solo en términos de la movilidad absoluta (comparando su situación exclusivamente con la de sus padres) (CAF, 2022[47]).

Para impulsar la formalización se necesitan sistemas de protección social más fuertes y más inversión

La informalidad laboral continúa siendo un obstáculo importante para dar respuesta a la pobreza y a la pobreza extrema en ALC, donde la tasa media de empleo informal se situó en el 48.7% en 2022 (ECLAC/ILO, 2023[48]). La informalidad también sigue siendo alta a nivel de los hogares. Antes de la pandemia (2018 o 2019, en función de la disponibilidad de datos), el 42.8% de la población de la región vivía en un hogar que dependía exclusivamente del empleo informal y el 21.8% pertenecía a hogares mixtos, es decir, hogares con trabajadores formales e informales. Sumando ambos porcentajes, el 64.6% de la población de la región dependía total o parcialmente del empleo informal. Solo el otro tercio restante (35.4%) vivía en hogares que dependían exclusivamente del empleo formal. Entre los países con datos disponibles a nivel de los hogares, las poblaciones de Bolivia y Perú son especialmente vulnerables, ya que más del 60% de los hogares dependen por completo del empleo informal. En cambio, en Uruguay, Chile y Costa Rica, más de la mitad de los ciudadanos viven en hogares completamente formales (Gráfico 1.15) (OECD et al., 2022[13]; OECD, próximo a publicarse[49]).

Gráfico 1.15. **Evolución de la informalidad de los hogares en una selección de economías de ALC**



Fuente: Elaboración de los autores a partir de (OECD, próximo a publicarse[49]).

StatLink https://stat.link/jkatpd

La informalidad se ha mantenido en niveles persistentemente elevados en la mayoría de los países de ALC durante las dos últimas décadas. Aunque las perturbaciones económicas negativas suelen incrementar los niveles de informalidad, las características particulares de la pandemia de COVID-19 dieron lugar a resultados heterogéneos en lo que respecta a la evolución de las tasas de informalidad. Uno de los factores más importantes fue la prevalencia de niveles elevados de informalidad en sectores muy afectados por los confinamientos y las medidas de contención, a lo que se sumó la disponibilidad limitada de oportunidades de teletrabajo. Además, un número considerable de trabajadores del sector informal pasaron a estar inactivos, lo que se tradujo en su exclusión de la población activa (Acevedo et al., 2021[50]). Como consecuencia, la comparación de los indicadores del período inmediatamente posterior al COVID-19 con los de 2019 muestra patrones diferentes en las distintas economías de ALC. En Uruguay y Chile, la formalidad del empleo aumentó, aunque por motivos distintos: mientras que en Uruguay la formalización se debió a una contracción del empleo total, con una caída mayor en el sector informal que en el formal, en Chile se produjo un crecimiento del empleo total, y el proceso de formalización se debió a que la pérdida de empleos informales se vio contrarrestada por el crecimiento de los formales. En cambio, en la República Dominicana, Ecuador y Perú, la informalidad aumentó en el mercado laboral, fundamentalmente porque el crecimiento del empleo informal superó al del empleo formal. Por último, en Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Paraguay, la proporción del empleo informal en el empleo total siguió siendo similar a la observada en 2019 (OECD, 2023[51]; OECD, próximo a publicarse[49]).

Disponer de una visión de la informalidad de los hogares es clave para el diseño de las políticas públicas. Tradicionalmente, la informalidad se ha medido a nivel de las personas, lo que resulta útil para entender su heterogeneidad y realizar comparaciones internacionales. Sin embargo, estas mediciones no tienen en cuenta el contexto de los hogares. La condición de trabajadores informales o formales de los miembros activos de un hogar puede tener consecuencias importantes para sus miembros dependientes. El empleo formal de al menos uno de los miembros de un hogar puede incrementar el acceso de este a los sistemas de seguridad social, que con frecuencia cubren al cónyuge y/o los hijos del contribuyente. Por eso, los hogares en los que solo hay trabajadores informales se enfrentan a vulnerabilidades diferentes, y con frecuencia de distinta magnitud, que los hogares mixtos. Incorporar la dimensión del hogar brinda una oportunidad para diseñar políticas públicas focalizadas que atiendan mejor necesidades específicas con miras a mitigar las vulnerabilidades y consecuencias negativas de la informalidad para los individuos y los hogares (OECD, próximo a publicarse[52]). Esto es especialmente importante en el contexto posterior a la pandemia, en el que, en vista de las restricciones fiscales, los países han de mejorar la focalización y la condicionalidad de las medidas de protección social.

La agenda de inversión en las economías de ALC es una oportunidad para impulsar la formalización del empleo. Las inversiones en capital físico en sectores económicos pueden generar oportunidades para reducir la informalidad siempre que se complementen con el desarrollo efectivo del capital humano. Las inversiones en capital humano deberían encaminarse a mejorar las competencias de los trabajadores de manera que respondan mejor a las necesidades del mercado laboral, especialmente las de actividades económicas consideradas prioritarias en las políticas de desarrollo de la producción de los países de ALC. Dicho de otro modo, debería proporcionarse apoyo específico a los trabajadores informales para asegurar que la agenda de inversión de ALC no deje a nadie atrás (Capítulo 3).

Principales mensajes en materia de políticas

La región de ALC debe afrontar los desafíos a corto y a largo plazo para minimizar los efectos negativos sobre la población más vulnerable y lograr alcanzar niveles más elevados de bienestar. Impulsar la transformación de la producción, principalmente mediante una mayor inversión y la aplicación de políticas de desarrollo productivo bien diseñadas, será clave para enfrentar los desafíos estructurales de bajo crecimiento potencial y el reducido crecimiento de la productividad en ALC. La agenda de inversión de la región debe priorizar la creación de empleos formales de calidad e inversiones para la creación de capital humano.

Para poner en práctica con éxito esta agenda, será necesario recuperar espacio para la política monetaria y fiscal. En el ámbito monetario, los bancos centrales deberían centrarse en garantizar la estabilidad de precios y anclar así las expectativas de inflación a largo plazo. Coordinar las políticas fiscal y monetaria es clave, ya que los responsables de la formulación de políticas deben proteger a las personas más vulnerables del impacto de los fuertes incrementos de los precios y evitar que se produzcan presiones de demanda sobre los precios inducidas por la política fiscal.

En el ámbito de la política fiscal, es necesario ampliar progresivamente los ingresos públicos. Los recursos adicionales resultantes podrán destinarse al financiamiento de mejores servicios públicos que potencien el crecimiento a largo plazo y el bienestar de la población en general, así como a la implementación de políticas de transformación de la producción. Asimismo, esos ingresos pueden contribuir a mitigar los efectos negativos de perturbaciones económicas y a establecer sistemas de protección social más fuertes que sean universales, integrales, resilientes y sostenibles (Recuadro 1.1).

En general, la existencia de características socioeconómicas, desafíos y posibles soluciones distintos en función del contexto hace que sean necesarios abordajes a la medida de cada uno de los países de ALC. No obstante, algunas consideraciones comunes pueden ayudar a los países a establecer "menús de políticas" eficaces y lograr una combinación de políticas adecuada.

Recuadro 1.1. **Principales mensajes en materia de políticas**

Reforzar los marcos fiscales y de inversión para dar respuesta al bajo crecimiento en ALC

- Se necesita más y mejor inversión, tanto en capital físico como en capital humano, para incrementar la productividad y, por tanto, el crecimiento potencial.
- Hacen falta políticas de desarrollo productivo bien diseñadas y más decididas para afrontar el reto del estancamiento de la productividad.
- La región debe fortalecer sus marcos fiscales, con reglas fiscales como base, para salvaguardar las inversiones.

Medidas de apoyo para proteger a la población vulnerable de la elevada inflación

- Asegurar que las expectativas de inflación estén ancladas y, al mismo tiempo, proteger a los más vulnerables de los efectos de la elevada inflación.
- Apoyar marcos de política monetaria creíbles garantizando la independencia de los bancos centrales e implementando regímenes de metas de inflación.

Recuadro 1.1. **Principales mensajes en materia de políticas** *(cont.)*

Ampliar el espacio fiscal para financiar inversiones en un marco fiscal sostenible

- La naturaleza de la consolidación fiscal y su calendario serán importantes para configurar un desarrollo y un crecimiento económico inclusivo.
- Deben mejorarse los regímenes tributarios balanceando políticas que puedan implementarse a corto plazo con otras a más largo plazo. Los responsables de la formulación de políticas pueden tomar medidas destinadas a alcanzar los siguientes objetivos:
  - Reducir la evasión y la elusión fiscal.
  - Incrementar el cumplimiento fiscal y reforzar la administración tributaria.
  - Incrementar el peso del impuesto sobre la renta a las personas naturales en la recaudación tributaria total en los países que dependen mucho de los impuestos indirectos y del impuesto sobre las sociedades.
  - Subir los impuestos relacionados con el medio ambiente y revisar los subsidios generales a la energía, protegiendo al mismo tiempo a la población más vulnerable de los posibles efectos negativos de la agenda de la transición verde.
  - Fomentar mejor la igualdad de género en todo el sistema tributario.
  - Racionalizar los incentivos fiscales y alinearlos con los objetivos de desarrollo y las estrategias de desarrollo productivo. Mejorar su diseño estableciendo requisitos jurídicamente vinculantes con plazos de vigencia explícitos y criterios de concesión claros en el marco de un corpus jurídico unificado.
  - Alinear el tratamiento de las desgravaciones por bienes de capital con los objetivos de desarrollo de la inversión, ya que determinados activos son objeto de un tratamiento menos generoso.
  - Llevar a cabo revisiones periódicas de los incentivos fiscales a la inversión.

Continuar mejorando el bienestar de la población más vulnerable

- Reforzar las medidas destinadas a proteger a las personas y los hogares más vulnerables y, al mismo tiempo, continuar avanzando hacia sistemas de protección social universal más sólidos.
- Asegurarse de que la agenda de inversión en las economías de ALC ayude a crear empleo formal de calidad e incluya la necesaria inversión en capital humano.

Referencias

Acevedo, I. et al. (2021), *Informalidad en los tiempos del COVID-19 en América Latina: Implicaciones y opciones de amortiguamiento*, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0003220. [50]

Adler, G. y N. Chalk (2023), "In Latin America, Fiscal Policy Can Lighten the Burden of Central Banks", *IMF Blog*, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/04/13/in-latin-america-fiscal-policy-can-lighten-the-burden-of-central-banks. [6]

Álvarez, F. et al. (2019), *RED 2018: Institutions for productivity: towards a better business environment*, Development Bank of Latin America (CAF), Caracas, http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1410. [14]

Ardanaz, M. et al. (2021), "The Output Effects of Fiscal Consolidations: Does Spending Composition Matter?", *IDB Working Paper*, No. IDB-WP-1302, http://blications.iadb.org/en/output-effects-fiscal-consolidations-does-spending-composition-matter. [27]

Ardanaz, M. y A. Izquierdo (2022), "Current expenditure upswings in good times and public investment downswings in bad times? New evidence from developing countries", *Journal of Comparative Economics*, Vol. 50(1), pp. 118-134. [26]

Arreaza, A. et al. (2022), *Reglas fiscales para la recuperación en América Latina: experiencias y principales lecciones*, Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF), Caracas, https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1905. [28]

Astudillo, K. et al. (2022), "Making the Invisible Visible: Applying a Gender Perspective to Strengthen Tax Policy in Latin America and the Caribbean", *Technical Note*, No. IDB-TN-2504, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0004350. [36]

Banco de España (2023), *Informe de Economía: Moderación de la inflación, pausa en el endurecimiento monetario y vulnerabilidades fiscales, primer semestre 2023*, Banco de España, Departamento de Economía Internacional y Área del Euro, https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/InformeEconomiaLatinoamericana/2023/S1/Fich/EconomiaLatinoamericana_012023.pdf. [7]

CAF (2023), *Latin American and Caribbean Outlook, April 2023*, Development Bank of Latin America and the Caribbean Internal Document, available upon request. [11]

CAF (2023), *Panorama Fiscal en América Latina y el Caribe*, Development Bank of Latin America and the Caribbean Internal document, available upon request. [8]

CAF (2022), *Inherited Inequalities: The Roles of Skills, Employment and Wealth in the Opportunities of New Generations, Executive Summary*, Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF), Bogota, https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1981/RED2022-Executive%20Summary.pdf?sequence=5&isAllowed=y. [47]

Cavallo, E. et al. (2020), "Growth-friendly fiscal rules? Safeguarding public investment from budget cuts through fiscal rule design", *IDB Working Paper*, No. IDB-WP-1083, Inter-American Development Bank, https://publications.iadb.org/en/growth-friendly-fiscal-rules-safeguarding-public-investment-budget-cuts-through-fiscal-rule-0. [29]

Cavallo, E. y M. Pedemonte (2015), "What is the Relationship between National Saving and Investment in Latin America and the Caribbean?", *IDB Working Paper Series*, No. IDB-WP-617, https://publications.iadb.org/en/what-relationship-between-national-saving-and-investment-latin-america-and-caribbean. [16]

Cavallo, E. y T. Serebrisky (2016), *Saving for Development: How Latin America and the Caribbean Can Save More and Better*, Inter-American Development Bank, https://publications.iadb.org/en/saving-development-how-latin-america-and-caribbean-can-save-more-and-better. [17]

Celani, A., L. Dressler y M. Wermelinger (2022), "Building an Investment Tax Incentives database: Methodology and initial findings for 36 developing countries", *OECD Working Papers on International Investment*, No. 2022/01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/62e075a9-en. [39]

Cherkasky, M. (2022), *Inflación global en el bienio 2021-2022 y su impacto en América Latina*, Estudios y Perspectivas, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://www.cepal.org/es/publicaciones/48504-inflacion-global-bienio-2021-2022-su-impacto-america-latina. [46]

De Gregorio, J. (1992), "Economic growth in Latin America", *Journal of Development Economics*, Vol. 39/1, pp. 59-84, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030438789290057G?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=80a169e11c62d712. [12]

ECLAC (2023), *Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2023: Fiscal Policy for Growth, Redistribution and Productive Transformation*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48900-fiscal-panorama-latin-america-and-caribbean-2023-fiscal-policy-growth. [9]

ECLAC (2023), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2023*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48979-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2023. [20]

ECLAC (2023), *International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean 2022: The Challenge of Boosting Manufacturing Exports*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48651-international-trade-outlook-latin-america-and-caribbean-2022-challenge-boosting. [24]

ECLAC (2023), *Social Panorama of Latin America and the Caribbean 2023: Labour inclusion as a key axis of inclusive social development*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/68703-social-panorama-latin-america-and-caribbean-2023-labour-inclusion-key-axis. [45]

ECLAC (2022), *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2022: Trends and Challenges of Investing for a Sustainable and Inclusive Recovery*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48078-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2022-trends-and-challenges-investing. [31]

ECLAC (2022), *Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2022*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48575-preliminary-overview-economies-latin-america-and-caribbean-2022. [4]

ECLAC (2022), *Towards Transformation of the Development Model in Latin America and the Caribbean: Production, Inclusion and Sustainability*, United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48309-towards-transformation-development-model-latin-america-and-caribbean-production. [15]

ECLAC (2013), *Política tributaria para mejorar la inversión y el crecimiento en América Latina*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://www.cepal.org/es/publicaciones/5361-politica-tributaria-mejorar-la-inversion-crecimiento-america-latina. [38]

ECLAC/ILO (2023), *Employment Situation in Latin America and the Caribbean: Towards the Creation of Better Jobs in the Post-pandemic Era*, ECLAC and International Labour Organization, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48988. [48]

ECLAC-OXFAM (2019), *Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe*, https://www.cepal.org/es/publicaciones/44787-incentivos-fiscales-empresas-america-latina-caribe. [43]

Galindo, A. y V. Nuguer (2023), *Preparing the Macroeconomic Terrain for Renewed Growth*, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0004780. [5]

Hanappi, T. et al. (2023), "Corporate Effective Tax Rates in Latin America and the Caribbean", *IDB Technical Note*, No. IDB-TN-2782, http://dx.doi.org/10.18235/0005168. [42]

IIF (2023), *The Institute of International Finance database*, https://www.iif.com/Research/Download-Data. [19]

IMF (2023), *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023. [10]

Izquierdo, A., C. Pessino y G. Vuletin (eds.) (2018), *Better Spending for Better Lives: How Latin America and the Caribbean Can Do More with Less*, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0001217-en. [32]

Nieto-Parra, S., R. Orozco y S. Mora (2021), "Fiscal policy to drive the recovery in Latin America: the "when" and "how" are key", *VOXLACEA*, https://vox.lacea.org/?q=blog/fiscal_policy_latam. [34]

OECD (2023), *Global Revenue Statistics Database*, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm. [33]

OECD (2023), *Informality and Globalisation: In Search of a New Social Contract*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c945c24f-en. [51]

OECD (2023), *OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ce188438-en. [1]

OECD (2023), *OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 2: Preliminary version*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c945c24f-en. [2]

OECD (2022), *Corporate Tax Statistics: Fourth Edition*, https://www.oecd.org/tax/beps/corporate-tax-statistics-database.htm. [41]

OECD (2022), *Multi-dimensional Review of the Dominican Republic: Towards Greater Well-being for All*, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/560c12bf-en. [40]

OECD (2022), *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b8177aea-en. [37]

OECD (2019), *FDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development*, OECD Publishing, https://www.oecd.org/investment/fdi-qualities-indicators.htm. [21]

OECD (2015), *Policy Framework for Investment, 2015 Edition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264208667-en. [44]

OECD (2010), *Taxation, Innovation and the Environment*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264087637-en. [35]

OECD (próximo a publicarse), *Key Indicators of Informality based on Individuals and their Household (KIIbIH)*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dev/key-indicators-informality-individuals-household-kiibih.htm. [49]

OECD (próximo a publicarse), *Portraying Informality and Households' Vulnerabilities in Latin America*, OECD Publishing, Paris. [52]

OECD et al. (2023), *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a7640683-en. [30]

OECD et al. (2021), *Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en. [22]

OECD et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a Green and Just Transition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en. [13]

Powell, A. y O. Valencia (eds.) (2023), *Dealing with Debt: Less Risk for More Growth in Latin America and the Caribbean*, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0004707. [25]

Refinitiv Eikon (2023), *Refinitiv Eikon Datastream*, https://www.refinitiv.com/en/products/datastream-macroeconomic-analysis. [3]

Sanguinetti, P. et al. (2021), *Pathways to integration: trade facilitation, infrastructure, and global value chains*, Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF), Caracas, https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1907. [23]

World Bank (2023), *World Development Indicators*, https://datos.bancomundial.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2020&start=1975&view=chart. [18]

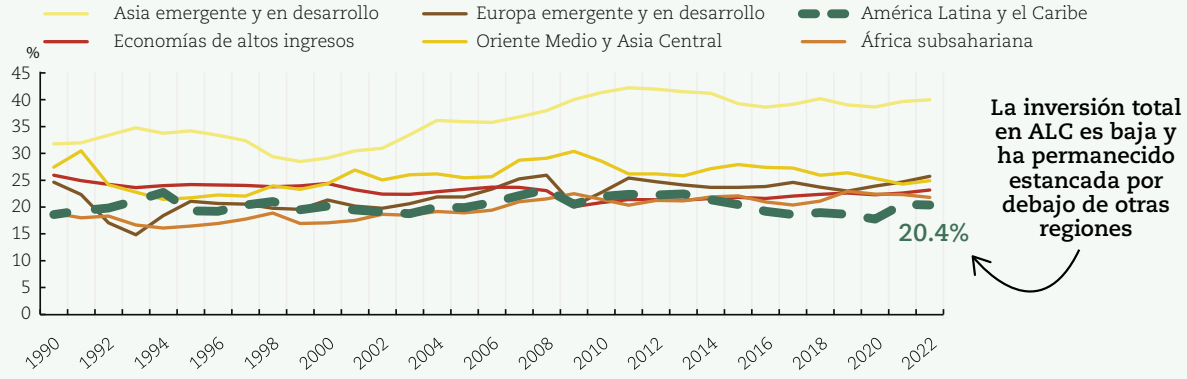
Capítulo 2

Panorama de la inversión en América Latina y el Caribe: retos y oportunidades

En este capítulo se presentan las tendencias recientes de la inversión en América Latina y el Caribe (ALC), prestando particular atención a la inversión estratégica y sostenible en infraestructura pública. En primer lugar, el capítulo destaca los bajos niveles generales de inversión que se registran en la región, examinando el papel de los sectores público y privado. En segundo lugar, analiza cómo una infraestructura pública de calidad en energía, transporte, telecomunicaciones y agua puede contribuir a crear un futuro más sostenible e inclusivo. En tercer lugar, el capítulo hace hincapié en cómo la buena gobernanza y la transparencia pueden contribuir a mejorar el clima de inversión. En cuarto lugar, presenta las principales tendencias de las asociaciones público-privadas (APP) y de qué modo estas pueden acelerar el desarrollo de sectores estratégicos. En quinto lugar, el capítulo examina los beneficios de la inversión extranjera directa (IED) en términos de creación de empleo, productividad e innovación. El capítulo concluye con recomendaciones de políticas clave para encauzar estos esfuerzos.

ALC necesita más y mejores inversiones para un desarrollo más inclusivo y sostenible

Inversión total como porcentaje del PIB en ALC y regiones seleccionadas, 1990-2022



El sector público tiene un papel crucial que desempeñar, especialmente invirtiendo en infraestructura estratégica

Inversión pública en infraestructura en ALC, 2019



Más del **50%** se destinó a inversiones en carreteras



13% se destinó a inversiones en telecomunicaciones



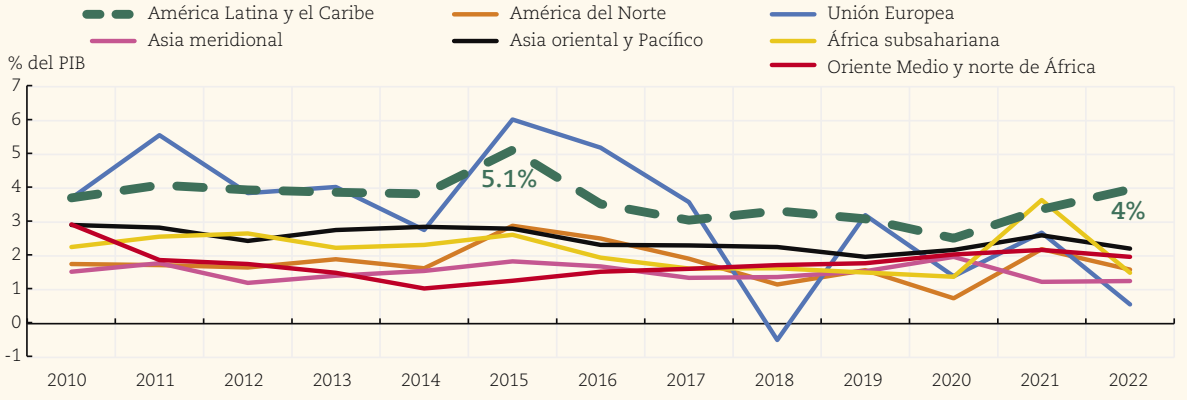
16% se destinó a inversiones en agua



Casi el **16%** se destinó al sector energético

Aunque la inversión nacional ha sido baja, la región ha tenido éxito en atraer inversión extranjera

Entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) como % del PIB, por región, 2010-22



Introducción

La inversión, si se orienta adecuadamente, es un motor fundamental de desarrollo sostenible. Esta puede desempeñar un papel crucial en la mejora del bienestar de la población, al mismo tiempo que contribuye a alcanzar metas más amplias en términos socioeconómicos y medioambientales. No obstante, en los últimos 30 años la inversión total en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido reducida, y durante la última década ha permanecido sistemáticamente por debajo de la inversión en otras regiones en desarrollo. Invertir más y mejor en sectores estratégicos será necesario para impulsar la transformación productiva y forjar un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.

Este capítulo dedica especial atención a la importancia de invertir estratégicamente en infraestructura pública de calidad para potenciar el desarrollo de ALC, sobre todo en sectores tan vitales como el transporte sostenible, las telecomunicaciones y la gestión del agua. A su vez, explora las asociaciones público-privadas (APP) y la inversión extranjera directa (IED) como vectores de una mejor inversión capaz de generar impacto social y medioambiental. En el Capítulo 3 se abordan otras áreas de inversión igualmente esenciales, como el capital humano, el cual está estrechamente vinculado con la transformación productiva.

Los sectores público y privado están llamados a asumir papeles estratégicos para garantizar más y mejores inversiones nacionales e internacionales. El sector público es responsable de proporcionar servicios y bienes esenciales y de impulsar inversiones estratégicas en infraestructuras públicas (de propiedad pública o disponibles para uso público). Asimismo, el sector público cumple un rol estratégico ya que la cantidad y la calidad de la inversión atraída están determinadas por la idoneidad de la gobernanza y los marcos institucionales (p. ej., regulaciones y leyes), el grado de transparencia, la calidad de las instituciones (p. ej., Estado de Derecho, coordinación institucional) y la adecuación en el diseño de las políticas y los programas (como incentivos fiscales y financieros) en todos los ámbitos transversales (p. ej., políticas del mercado laboral, espíritu empresarial) (OECD, 2022[1]). Finalmente, los gobiernos de la región de ALC son los responsables de promover y generar fuentes fiables de información y datos que permitan obtener una visión clara de las inversiones públicas y privadas actuales. Por su parte, el sector privado, tanto nacional como extranjero, puede desempeñar un rol importante, tanto en el desarrollo de infraestructura de calidad que aporte bienestar a las comunidades circundantes, como en otras múltiples prioridades.

Este capítulo comienza analizando las principales tendencias de la inversión en ALC, especificando los niveles de inversión por sectores y sus respectivas fuentes. En segundo lugar, evalúa los principales ámbitos sectoriales de infraestructura pública y de qué manera esta puede contribuir al bienestar general y ayudar a los países de ALC a avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En tercer lugar, el capítulo destaca el papel crucial de una buena gobernanza para potenciar el impacto de la inversión en infraestructura. En cuarto lugar, el capítulo subraya la importancia de implementar cuidadosamente asociaciones público-privadas para fortalecer el potencial de la infraestructura pública. En quinto lugar, se analiza el impacto de la IED, examinando los sectores financiados, los principales inversores, la generación de empleo y los efectos de la inversión extranjera en la productividad, la innovación y la sostenibilidad medioambiental. Para concluir, el capítulo ofrece mensajes clave en materia de políticas con miras a su posterior consideración e implementación. Un anexo metodológico al final del capítulo ofrece detalles sobre la información reflejada en algunos gráficos seleccionados. El Recuadro 2.1 presenta una breve recopilación de definiciones y consideraciones relativas a la inversión y la infraestructura.

Recuadro 2.1. **Definiciones, consideraciones e indicadores de inversión e infraestructura**

Formación bruta de capital fijo (FBCF): Mide el valor total de la inversión realizada por las empresas (tanto financieras como no financieras), los gobiernos y los hogares dentro de una economía determinada (OECD, 2023[2]). La formación bruta de capital fijo se define como "las adquisiciones (menos las cesiones) de activos producidos (nuevos o de segunda mano), incluida la producción de dichos activos por parte de los productores para su propio uso". Se trata de activos destinados a ser utilizados en la producción de otros bienes y servicios durante más de un año. El término "activos producidos" incluye únicamente aquellos activos que pasan a existir como resultado de un proceso de producción y, por lo tanto, no incorpora, por ejemplo, la compra de tierras y recursos naturales (OECD, 2023[2]). La formación bruta de capital fijo se mide por "el valor total de las adquisiciones, menos las cesiones, de activos fijos durante el período contable, más determinados gastos específicos en servicios que agregan valor a activos no producidos", como la mejora de los terrenos (European Commission et al., 2008[3]). Desde 2008, con la adopción de las nuevas normas del Sistema de Cuentas Nacionales, los gastos en investigación y desarrollo (I+D) y sistemas de armamento se incluyen en la FBCF (OECD, 2019[4]).

Formación bruta de capital (FBC): La FBC se mide por "el valor total de la FBCF, la variación de existencias y las adquisiciones menos las cesiones de objetos valiosos" (European Commission et al., 2008[3]).

Inversión: En este informe, el término inversión se utiliza para referirse a la FBCF o a la FBC. Según el Marco de acción para la inversión de la OCDE, "la inversión puede adoptar muchas formas, desde activos físicos hasta capital humano o intelectual. Puede añadir capacidad o simplemente mejorar la eficiencia de los activos existentes, por ejemplo, mediante un cambio de propiedad. En las condiciones adecuadas, aumenta la producción total, tanto a través de la acumulación de factores como mediante la introducción de nuevas técnicas y procesos que elevan la productividad y, en última instancia, el nivel de vida del país" (OECD, 2015[5]).

Inversión pública: "La inversión pública incluye la formación bruta de capital fijo público y las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros no producidos". La formación bruta de capital fijo público es el componente primordial de la inversión pública y se refiere principalmente a la inversión en infraestructura de transporte, aunque también incluye otros tipos de inversiones como edificios de oficinas, viviendas, escuelas y hospitales. La administración pública está integrada por las administraciones central, estatal y local y los fondos de la seguridad social" (OECD, 2019[4]).

Inversión privada: La contribución del sector privado a la inversión total se refiere a la inversión que no proviene de la administración pública, sino que es financiada por hogares, empresas u organizaciones no públicas.

Infraestructura pública de calidad: Hace referencia a decisiones de inversión en infraestructura pública que "tienen en cuenta todas las externalidades de los proyectos a largo plazo, incluida la creación de empleo, las repercusiones sociales y medioambientales, la coherencia con estrategias de desarrollo más amplias y la movilización de recursos adecuados" (OECD, 2021[6]). Infraestructura pública son aquellas de propiedad o uso público que afectan a servicios esenciales como energía, telecomunicaciones, transporte y agua.

Asociaciones público-privadas: Las APP ponen en colaboración a los sectores público y privado con el fin de financiar y desarrollar las distintas fases de un proyecto público, como son la construcción, el financiamiento y la explotación (ECLAC, 2012[7]). Las APP suelen centrarse en proyectos públicos estratégicos, como hospitales, prisiones, carreteras, escuelas y agua y saneamiento (ECLAC, 2004[8]).

Recuadro 2.1. **Definiciones, consideraciones e indicadores de inversión e infraestructura** *(cont.)*

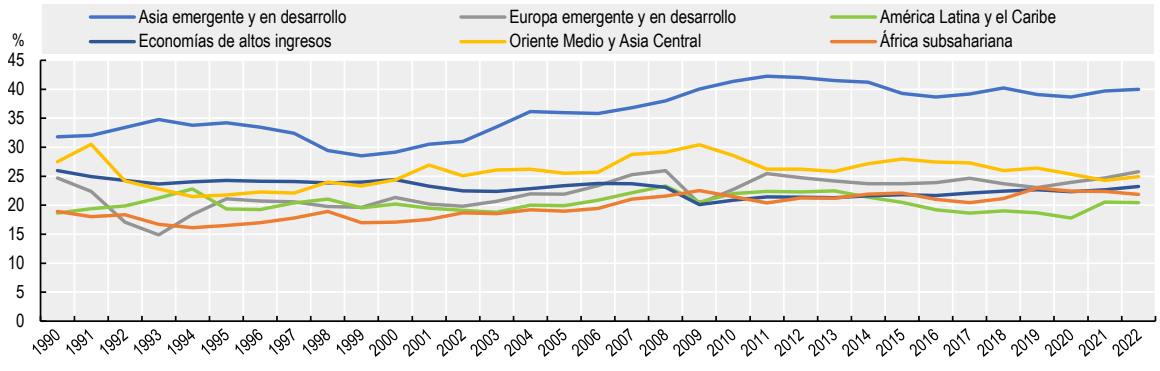
Inversión extranjera directa: La IED "es una categoría de inversión transfronteriza en la que un inversor residente en una economía establece un interés duradero y un grado significativo de influencia sobre una empresa residente en otra economía. La propiedad del 10% o más de los derechos de voto de una empresa de una economía por parte de un inversor de otra economía es prueba de tal relación" (OECD, 2023[9]).

Fuente: Basado en (OECD, 2021[6]); (OECD, 2023[2]); (OECD, 2019[4]); (OECD, 2015[5]); (ECLAC, 2012[7]); (European Commission et al., 2008[3]); (ECLAC, 2004[8]); (OECD, 2023[9]).

¿Cuál es la situación de ALC en materia de inversión?

La progresión de la inversión en la región de ALC revela una ralentización general en las tres últimas décadas, con un estancamiento por debajo del nivel de otras regiones en desarrollo. La inversión total como porcentaje del producto interno bruto (PIB) disminuyó considerablemente incluso antes de la pandemia de COVID-19; ya que cayó en 2 puntos porcentuales entre 2015 y 2019. En 2022, representó, en promedio, el 20.4% del PIB, es decir, unos 2.8 puntos porcentuales menos que la inversión total de las economías de altos ingresos (23.2%). ALC también va a la zaga de otras regiones en desarrollo en términos de inversión total como porcentaje del PIB. Con un promedio del 40% del PIB, las economías emergentes y en desarrollo de Asia presentan las mayores tasas de inversión. En términos generales, la brecha entre ALC y otros países y regiones no ha dejado de crecer desde 2000. Desde 2014, en promedio, todas las regiones han mostrado tasas de inversión total superiores a las de ALC (Gráfico 2.1).

Gráfico 2.1. **Inversión total en % del PIB en ALC y regiones seleccionadas, 1990-2022**



Nota: Como en (IMF, 2023[10]), los datos para cada región corresponden a promedios ponderados. La inversión, definida como formación bruta de capital, se mide por el valor total de la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y las adquisiciones menos las cesiones de objetos valiosos de una unidad o sector [SNA 1993]. La inversión se expresa como relación entre la inversión total en moneda local corriente y el PIB en moneda local. Oriente Medio y Asia Central engloban 32 países: Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Uzbekistán y Yemen.

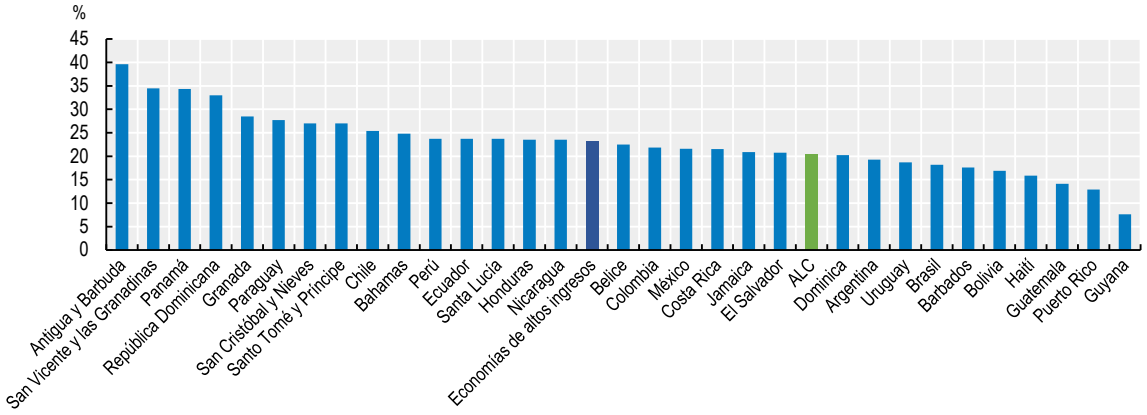
Fuente: (IMF, 2023[10]).

StatLink https://stat.link/m5i7ec

Los niveles de inversión varían significativamente entre los países de ALC. En la región del Caribe, en 2022, la inversión representó más del 32% del PIB en naciones como Antigua y Barbuda, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas, mientras que

supuso menos del 20% en Barbados, Puerto Rico y Haití. En América Central y México la inversión promedio ascendió al 22.7% del PIB mientras que en América del Sur se situó en torno al 21% del PIB (Gráfico 2.2). De 2014 a 2020, los países que exhibieron un aumento constante de los niveles de inversión fueron Antigua y Barbuda, República Dominicana, Granada, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Paraguay (IMF, 2023[10]).

Gráfico 2.2. **Inversión total en % del PIB en países seleccionados de ALC, 2022**



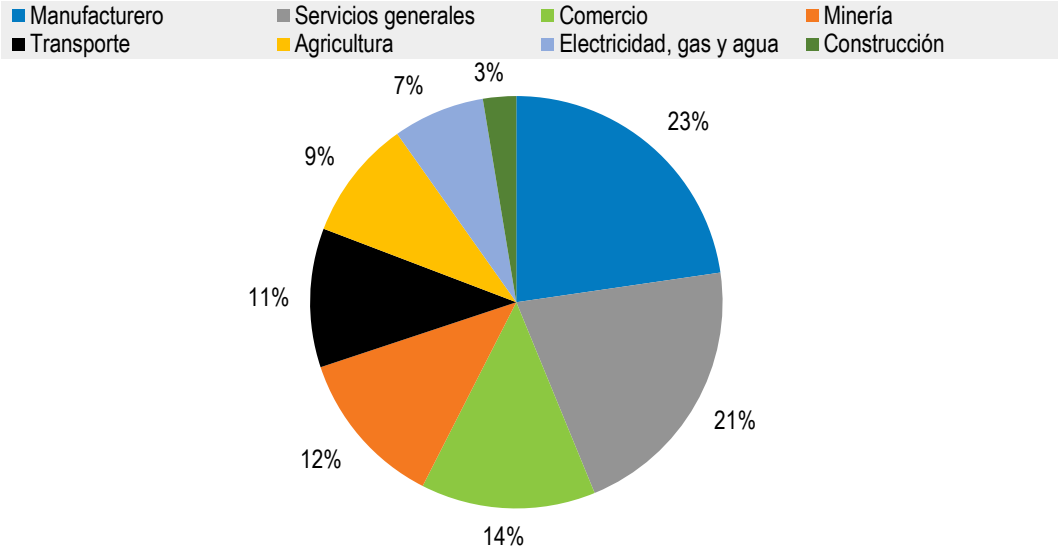
Nota: Como en (IMF, 2023[10]), los datos para ALC y las economías de altos ingresos corresponden a promedios ponderados. La inversión, definida como formación bruta de capital, se mide por el valor total de la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos de una unidad o sector [SNA 1993]. La inversión se expresa como relación entre la inversión total en moneda local corriente y el PIB en moneda local.

Fuente: (IMF, 2023[10]).

StatLink https://stat.link/c7nt8x

Los niveles de inversión en ALC difieren considerablemente de unos sectores económicos a otros. Esta distribución de la inversión puede agruparse en tres grandes grupos. De 1990 a 2018, las mayores cuotas de la inversión total correspondieron a la industria manufacturera (22.7%) y a los servicios generales (21.1%). El segundo grupo, que incluye comercio, industrias mineras y transporte, tuvo una inversión casi 9 puntos porcentuales menor en comparación al anterior, llegando al 13.7%, 12.4% y 10.9%, respectivamente. Por último, la inversión en agricultura (9.4%), electricidad, gas y agua (7.2%) y construcción (2.6%) se situó por debajo del 10% de la inversión total (Gráfico 2.3). Es relevante destacar que la inversión en bienes relaciones con la construcción, y con las maquinarias y equipos, ha experimentado un notable aumento en las tres últimas décadas en ALC. En el período comprendido entre 1990 y 2020, la tasa de crecimiento anual promedio de la inversión en maquinarias y equipos fue del 4.4%, superando la tasa de crecimiento del 3% en bienes relacionados con la construcción (ECLAC, 2022[11]).

Gráfico 2.3. **Proporción de la inversión total por sector económico en ALC, 1990-2018**



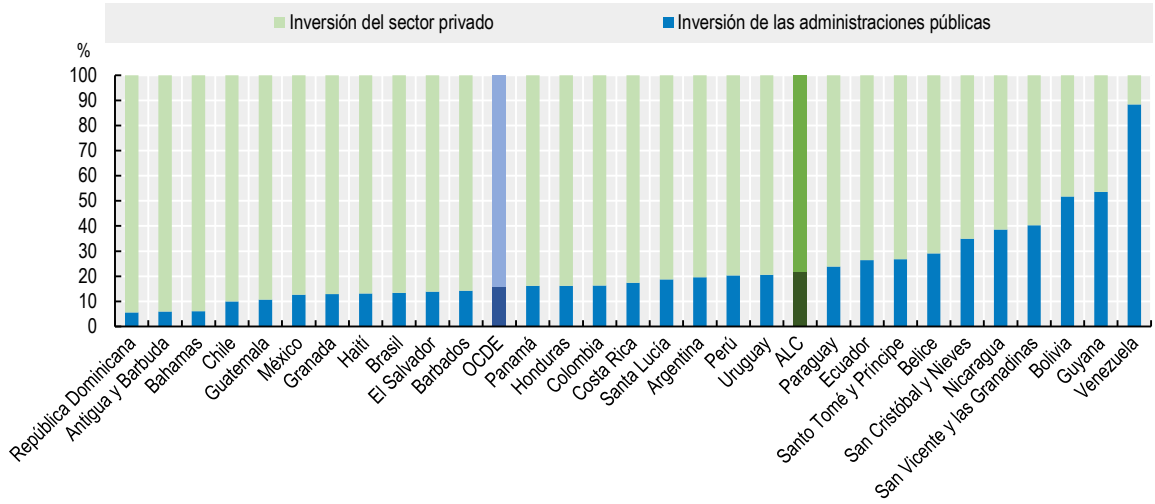
Fuente: (ECLAC, 2022[11]).

StatLink https://stat.link/p623ea

Al igual que en otras economías de mercado, en la mayoría de los países de ALC las inversiones están protagonizadas por los sectores público y privado. En el sector privado se incluye lo que las empresas, corporaciones, hogares y particulares invierten en activos productivos, tales como maquinaria, equipos, edificios, I+D y otras formas de capital fijo. La inversión privada suele financiarse mediante el ahorro privado o la captación de fondos en los mercados financieros e incluye el financiamiento de proyectos de infraestructura (p. ej., infraestructura de transporte, escuelas, hospitales, sistemas de transporte público y otros activos públicos), así como actividades de I+D. La inversión pública por lo general se financia a través de gasto público o de endeudamiento (Capítulo 4). Las APP aúnan ambas fuentes de inversión en proyectos de colaboración (véase el apartado sobre APP).

El sector privado es el principal promotor de la inversión en ALC; en 2019, representó el 78.4% de la inversión total. En Antigua y Barbuda, Bahamas, Chile, República Dominicana y Guatemala, dicho sector fue responsable de más del 89% de la inversión total en 2019. Solo en Bolivia, Guyana y Venezuela, la inversión del sector público superó a la del sector privado en ALC. En conjunto, el peso de la inversión privada (78.4%) en la inversión total en ALC es inferior al promedio de la OCDE, cercano al 84% (Gráfico 2.4). Además, en 2019, la inversión privada como porcentaje del PIB también fue, en promedio, ligeramente más alta en los países de la OCDE (18.8%) que en ALC (16%). Históricamente (desde 1990), la inversión privada en ALC ha representado entre el 70% y el 76% de la inversión total, mientras que la inversión pública ha oscilado entre el 24% y el 30% (IMF, 2022[12]).

Gráfico 2.4. **Inversión privada vs. pública como % de la inversión total en ALC y la OCDE, 2019**



Nota: El promedio de la OCDE es una media simple de todos los países que eran miembros en 2019. El promedio de ALC es una media simple de los países sobre los cuales hay información en la serie de datos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela. Véase el anexo metodológico al final del capítulo para consultar los cálculos de la inversión de las administraciones públicas y del sector privado. Las cuotas de la inversión total correspondientes a la inversión privada y a la inversión de las administraciones públicas se calcularon teniendo en cuenta los porcentajes respectivos del PIB que representa cada categoría.

Fuente: (IMF, 2022[12]).

StatLink https://stat.link/r642mt

Dado que el sector privado es el principal inversionista en ALC, desempeña un papel crucial en la agenda de transformación productiva, la cual requiere una mayor y mejor inversión privada. Hasta 2016, la inversión privada mostraba altos niveles de concentración, ya que el 1%, el 5% y el 10% de las principales empresas de la región eran responsables, en promedio, del 25%, el 55% y el 69% de la inversión con un horizonte de largo plazo, respectivamente (ECLAC, 2018[13]). Para promover una inversión privada más elevada, y a la vez con menor grado de concentración, los gobiernos de ALC pueden recurrir a una gran variedad de estrategias y herramientas. El Capítulo 3 explora herramientas específicas para promover pequeñas y medianas empresas (pymes). El Capítulo 5 destaca el impacto que las asociaciones internacionales pueden tener a la hora de fomentar la inversión privada en sectores estratégicos, siguiendo el ejemplo de la Agenda de Inversiones Global Gateway (AIGG) de la Unión Europea en América Latina y el Caribe. Los apartados siguientes de este capítulo abarcan la inversión estratégica en infraestructuras de calidad, cómo lograr APP eficaces y el impacto de la IED de calidad.

Hacia una inversión estratégica en infraestructura pública de calidad

Esta sección se centra en el papel crucial que desempeña el sector público y cómo la presencia de infraestructura pública de calidad puede contribuir a impulsar un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo en ALC. A su vez, explora cómo una mejor infraestructura pública puede estimular la inversión privada y actuar como catalizador de un mayor crecimiento y conectividad en la región. Se prestará especial atención a los sectores de transporte sostenible, telecomunicaciones y agua.

La infraestructura pública cubre los servicios esenciales que repercuten directamente en el bienestar de los ciudadanos, y suele concentrarse principalmente en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y agua. La calidad de la infraestructura pública en estos cuatro sectores solo será satisfactoria si se diseña e implementa de tal modo que apoye un modelo de producción sostenible que aporte beneficios directos a los ciudadanos. Siguiendo los principios del G20, es esencial que la infraestructura de calidad sea resiliente a lo largo del tiempo y a los efectos del cambio climático, al mismo tiempo que tenga en cuenta consideraciones vinculadas a la igualdad de género y transparencia (OECD, 2020[14]).

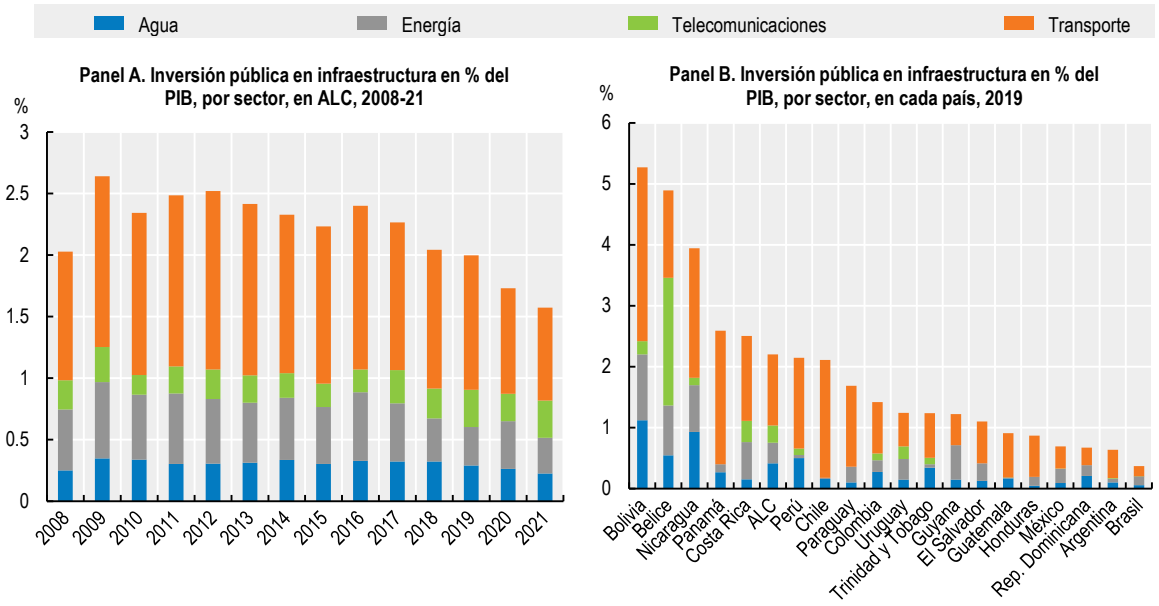
Una infraestructura pública de calidad puede ayudar a los gobiernos a avanzar hacia el logro de los ODS. La inversión en infraestructuras públicas puede actuar de catalizador para conseguir el fin de la pobreza (ODS 1), salud y bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4), agua limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y no contaminante (ODS 7), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), y ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

A su vez, una infraestructura pública de calidad puede contribuir a atraer más y mejores inversiones privadas en sectores estratégicos, como energía, telecomunicaciones e infraestructura de transporte, todos ellos vitales para el desarrollo de la mayoría de las actividades económicas. La inversión en infraestructuras de telecomunicaciones y transporte puede constituir un catalizador para un mayor crecimiento y conectividad, tanto a nivel nacional como subnacional. Esto debe a la posibilidad de conectar a las empresas nacionales e internacionales con otras regiones e integrarse en los mercados nacionales, ya sean regionales o mundiales. Por su parte, la infraestructura de calidad en energía, telecomunicaciones y agua puede proveer de mejores equipamientos para lograr la transformación digital y verde que la región de ALC necesita.

En ALC, la inversión del sector público en infraestructura pública se ha mantenido relativamente baja (en promedio) desde 2008, aunque las fluctuaciones a lo largo de los años ponen de relieve que ha sido particularmente sensible a choques externos. Alcanzó sus niveles más altos en 2009 (2.6% del PIB) y 2012 (2.5% del PIB), pero desde entonces ha venido disminuyendo debido a varios factores, entre ellos el descenso de los precios de las materias primas y el limitado espacio fiscal. En 2021, la inversión pública en infraestructura representó el 1.6% del PIB de ALC. Las mayores inversiones se realizaron en el sector de transporte (0.8% del PIB), seguido de energía (0.3%), telecomunicaciones (0.25%) y agua (0.2%) (Gráfico 2.5, Panel A).

En general, la infraestructura de transporte absorbe la mayor proporción de la inversión pública en la región de ALC, donde Bolivia (2.85%), Panamá (2.2%) y Nicaragua (2.1%) registraron las mayores inversiones en el sector como porcentaje del PIB en 2019. El sector energético recibió la segunda mayor cuota de inversión, seguida de telecomunicaciones, mientras que el sector hídrico obtuvo la más baja. Con la única excepción de Bolivia (1.12% del PIB), todos los países de ALC invirtieron menos del 1% del PIB en infraestructuras hídricas en 2019 (Gráfico 2.5, Panel B).

Gráfico 2.5. **Inversión pública en infraestructura en ALC como % del PIB, 2008-21**



Nota: Véase el anexo metodológico para más detalles sobre el Panel B. Se utilizaron datos de distintos países según el sector y el año. Detalles en la fuente.

Fuente: (Infralatam, 2022[15]).

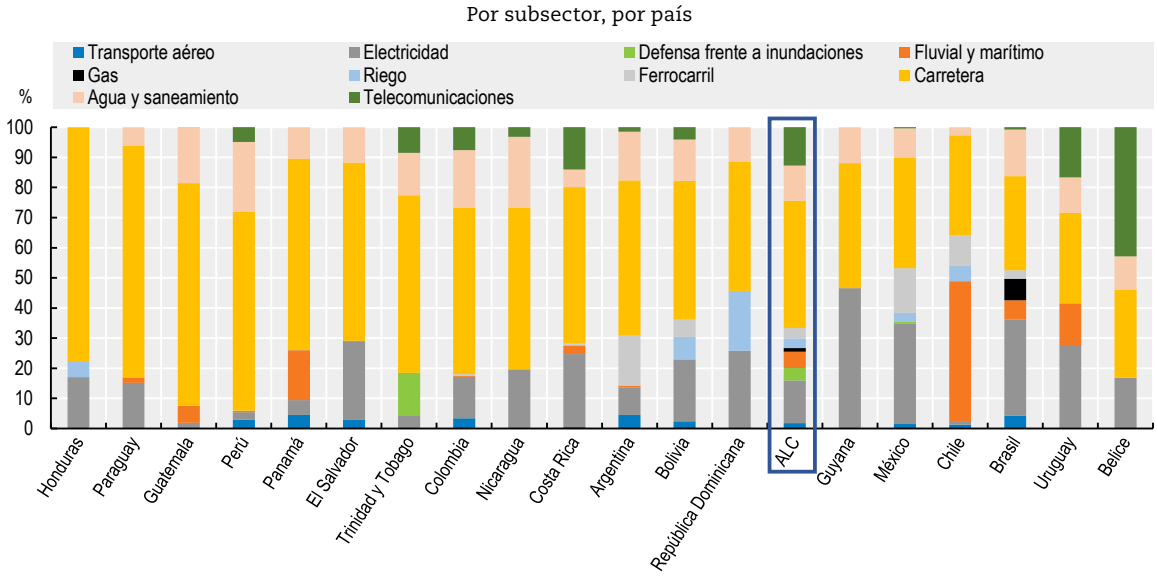
StatLink https://stat.link/oh2f78

La mayor parte de la inversión pública en infraestructura en ALC se destina al subsector de carreteras. De hecho, en 11 de los 20 países de ALC analizados, las inversiones en este subsector representaron más de la mitad de la inversión pública en infraestructura y superaron el 60% en Honduras (78%), Paraguay (77%), Guatemala (74%), Perú (66%) y Panamá (64%) (Gráfico 2.6). Para que el transporte devenga sostenible, es necesario aumentar la inversión pública en sectores alternativos a las carreteras (ver apartado sobre transporte sostenible).

Asimismo, para garantizar que la transformación productiva aumente el bienestar de los ciudadanos y que la región se alinee mejor con los ODS fijados para 2030, los gobiernos de ALC deben elevar significativamente tanto los niveles como la calidad de la inversión en infraestructura pública. Cerrar la brecha existente en ALC entre los niveles de inversión actuales y los necesarios para alcanzar los ODS en 2030 requerirá una inversión estimada de 2.22 billones de dólares estadounidenses (USD) en infraestructura pública, el equivalente a 282 USD per cápita al año de aquí a 2030 (IDB, 2021[16]).

Gráfico 2.6. **Inversión pública en infraestructura en ALC como % de la inversión total, 2019**

Por subsector, por país



Nota: Los sectores considerados (agua, transporte, energía y telecomunicaciones) se refieren principalmente a servicios de infraestructura y servicios esenciales. Por lo tanto, quedan excluidas las inversiones en infraestructura relacionadas con producción de petróleo y gas, refinado de petróleo y petroquímica. También se excluye la infraestructura social (p. ej., escuelas, hospitales, viviendas e infraestructura de seguridad). Telecomunicaciones engloba los servicios de telefonía fija, móvil y por satélite, así como servicios de datos y conexión a Internet. Los demás sectores se subdividen en subsectores. Agua incluye agua y saneamiento (suministro de agua potable a través de la red, prestación de servicios de saneamiento); defensas contra inundaciones (proyectos urbanos y rurales para mitigar los efectos de las inundaciones); y riego (instalaciones y sistemas de riego artificial). Transporte comprende carreteras y caminos; transporte urbano masivo; transporte ferroviario (infraestructura y material rodante); transporte aéreo; y transporte fluvial y marítimo. Energía abarca generación, transporte y distribución de electricidad, así como transporte y distribución de gas natural.

Fuente: (Infralatam, 2022[15]).

StatLink https://stat.link/dsyvl5

Es fundamental contar con un sector de transporte sostenible para impulsar el cambio estructural

El sesgo hacia las carreteras que presenta actualmente la inversión pública en transporte dificulta la implementación de un transporte sostenible en ALC. En 2019, por ejemplo, la inversión promedio de la región en carreteras representó el 42.3% de toda la inversión destinada a infraestructura, mientras que apenas alcanzó el 3.4% en el caso del transporte ferroviario. Teniendo en cuenta las condiciones medioambientales, las distancias y las necesidades socioeconómicas, resulta urgente aumentar la inversión pública en modos de transportes distintos de las autopistas. Para que el transporte sea inclusivo y sostenible, la inversión en dicho sector debe complementarse con inversión en transporte público sostenible y con la electrificación de los distintos modos de transporte (OECD et al., 2022[17]).

También resultará crucial invertir más y mejor en la conectividad del transporte, ya que el estado de la infraestructura de transporte disponible repercute directamente en la capacidad de atraer nuevas inversiones y en el desarrollo de posibles relaciones comerciales entre los países de la región. Al favorecer también la extensión de la conectividad comercial entre los territorios locales de cada país, una infraestructura de transporte de calidad puede ampliar y fortalecer la transformación productiva (CAF, 2021[18]).

Las vías fluviales y el transporte marítimo recibieron la segunda mayor proporción (5.4% del total) de la inversión pública en infraestructura de transporte en 2019, y los mayores montos de inversión en este subsector correspondieron a Chile, Panamá y Uruguay (Infralatam, 2022[15]). En América del Sur, el transporte marítimo representó aproximadamente el 95% de todas las operaciones de comercio exterior, lo que lo convierte en el modo de transporte predominante en la subregión. Esto obedece al aumento de la participación de los productos agrícolas y mineros en el comercio total, los cuales exigen infraestructura portuaria para la manipulación de carga a granel. En México y América Central, el transporte marítimo es también el principal modo de transporte (48%) en los intercambios comerciales internacionales, seguido del transporte por carretera (42%). Este medio puede impulsar la transformación de la producción, al permitir el acceso de los productos de la región de ALC a mercados potenciales exteriores. No obstante, los puertos plantean un reto particular: la conectividad marítima de Europa es un 45% superior al promedio de los países de ALC seleccionados. Entre las iniciativas estratégicas clave para mejorar el transporte marítimo en ALC cabe resaltar: invertir en infraestructura portuaria; garantizar la complementariedad de las mejoras en los puertos; reducir los tiempos de espera de los buques; y apostar por la digitalización de los trámites logísticos (CAF, 2021[18]).

Dentro del sector de movilidad, el transporte aéreo y el ferroviario en ALC han recibido una menor proporción de inversión pública (en promedio), con solo un 0.04% y un 0.08% del PIB, respectivamente (Infralatam, 2022[15]). En 2018, ambos representaron en conjunto menos del 1% de todas las transacciones comerciales de América del Sur con el exterior, una cuota muy inferior al 10% que supuso el sector ferroviario en América del Norte y Central (ECLAC, 2019[19]). Los gobiernos de la región deberían seguir estudiando las ventajas de promover estos medios de transporte. Impulsar la inversión en infraestructura ferroviaria sostenible podría, por ejemplo, proporcionar una alternativa más barata y sostenible para exportar mercancías, enlazando los distintos eslabones de las cadenas de valor estratégicas. En cuanto al transporte aéreo, una colaboración más estrecha con el sector de aerolíneas comerciales privadas podría ayudar a ampliar la capacidad de exportación de determinados productos sin provocar la multiplicación de la flota ni impactos ambientales adicionales.

Para reducir las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas a la energía consumida por el sector de movilidad en ALC, los gobiernos deben priorizar la inversión en infraestructura de transporte que sea respetuosa con el medioambiente. Las inversiones futuras brindan una oportunidad para promover infraestructura que fomente el transporte público y eléctrico frente a la movilidad privada, y se adapte a su entorno, respetando las comunidades locales y la vida silvestre. Cabe destacar que la demanda de transporte urbano de pasajeros y mercancías en la región de ALC supera actualmente los promedios mundiales: para 2050, se prevé que la demanda de pasajeros se multiplique por 3.5 y la de mercancías por 1.9 (OECD et al., 2022[17]). La planificación a largo plazo es crucial para clarificar las prioridades a implementarse y garantizar el financiamiento de la descarbonización del transporte, sobre todo teniendo en cuenta el limitado financiamiento público y el potencial que suponen la participación del sector privado y las opciones de financiamiento internacional (Capítulo 5) (ITF y IADB, 2022[20]).

Facilitar la inversión en telecomunicaciones

Los gobiernos de ALC deberían movilizar inversiones públicas y privadas adicionales en telecomunicaciones para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Aunque la mayoría de los países de ALC se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en acceso a la banda ancha, se han observado avances recientes en la disponibilidad, el uso y las competencias relacionadas con las telecomunicaciones en Costa Rica, Surinam,

Brasil y Colombia (OECD y IDB, 2016[21]). Una inversión en telecomunicaciones que amplíe los niveles de cobertura puede contribuir a que los beneficios de la transformación productiva se propaguen por todos los territorios y jurisdicciones. Además, es posible que tenga un impacto positivo en aspectos relacionados con el bienestar, como el acceso a la sanidad y la educación (OECD et al., 2020[22]; IDB, 2023[23]). La inversión en I+D es un eje complementario de suma importancia para fomentar la innovación y la transformación digital (Capítulo 3).

En la actualidad, el nivel de inversión pública en telecomunicaciones es bajo en la región: en 2019 fue inferior al 1% del PIB en la mayoría de los países. Para cerrar la brecha digital entre ALC y los países OCDE, será crucial movilizar más inversión privada en telecomunicaciones. Se estima que serán necesarios 68 000 millones de USD para ampliar la cobertura de banda ancha móvil y fija al nivel requerido (IDB, 2022[24]). En 2021, los ingresos brutos procedentes del sector de las telecomunicaciones representaron aproximadamente el 2.1% del PIB en varios países de ALC, entre ellos Argentina (1.8%), Brasil (1.5%), Chile (2%), Colombia (2.1%), México (2%), Paraguay (2.9%) y Uruguay (2.5%) (IDB, 2023[23]).

Los gobiernos de ALC tienen la gran responsabilidad de colaborar más estrechamente con el sector privado para maximizar los beneficios socioeconómicos de la transformación digital. La coordinación constante entre los sectores público y privado, un marco empresarial bien establecido, la simplificación administrativa e instituciones más sólidas y creíbles podrían asegurar que las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones constituyan una fuente de transferencia de conocimiento y tecnología, lo que redundaría en beneficio de las zonas urbanas y rurales de toda la región (Capítulo 3) (OECD et al., 2020[22]). Implementar una expansión sostenible e inclusiva de la conexión a Internet de banda ancha en ALC no solo podría crear más empleos y mejorar la productividad y eficiencia del sector público, sino también reforzar los servicios de salud y educación, facilitar el acceso a contenidos culturales y promover la preservación del patrimonio natural y cultural (Atlantic Council, 2023[25]; IDB, 2022[24]).

Las redes móviles de quinta generación (5G) podrían contribuir a poner fin a la brecha entre las zonas urbanas y rurales, además de permitir avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Cabe señalar que las redes móviles 5G ofrecen altas velocidades de conexión con un despliegue más rápido y a menor costo. Su despliegue podría reducir las disparidades de acceso en zonas de densidad media o baja, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos o aldeas (ECLAC, 2022[26]). Hasta la fecha, sin embargo, el despliegue de la tecnología 5G ha sido lento en la región, y la tasa de penetración prevista para 2025 es de tan solo un 12%. La inversión en bienes de equipo necesaria para desplegar estas redes en seis países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú— oscilaría entre 50 800 y 120 070 millones de USD de aquí a 2030, en función de si la instalación se realiza solo en las zonas más pobladas o en todo el país. Esto implica que los operadores de servicios de telecomunicaciones tendrían que aumentar su gasto anual en inversión entre un 10% y un 40% (ECLAC, 2021[27]).

El sector hídrico es estratégico para el desarrollo humano, por lo que necesita más inversión

Es preciso invertir más y con criterios más estratégicos en el sector hídrico y en todos sus subsectores, dada su estrecha relación con el desarrollo humano. En 2019, la mayor parte de la inversión en este sector se destinó al subsector de agua y saneamiento, aunque el promedio regional sigue siendo bajo (11.6% de la inversión total en infraestructura). A pesar de que ALC cuenta con múltiples fuentes de agua potencialmente apta para el consumo, es apremiante invertir más para garantizar un acceso equitativo. Este acceso

es crucial para fomentar el desarrollo, reducir las desigualdades, mejorar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza. En la actualidad, el 34% de los hogares latinoamericanos depende del agua embotellada como principal fuente de abastecimiento de agua; mientras que de aquellos hogares que disponen de conexión a redes de agua corriente, el 41% afirma no tener suficiente agua potable (IDB, 2022[28]).

El subsector de agua y saneamiento requiere un desarrollo integral de capacidades que combine la inversión en infraestructura física con el fortalecimiento institucional, para así subsanar las carencias de conocimientos, los problemas de personal y el carácter obsoleto de la infraestructura. Además, para fomentar el funcionamiento efectivo de las instituciones que promueven la inversión eficaz en el desarrollo de recursos hídricos, es imprescindible establecer fuentes de ingresos estables y suficientes a nivel subnacional. Esto debe realizarse teniendo en cuenta los diversos desafíos financieros asociados a los diferentes ciclos del agua (servicios, ecosistemas y recursos naturales) (OECD, 2012[29]). Asimismo, la mejora de la cantidad y la calidad de la inversión en el subsector de agua y saneamiento puede acercar a los gobiernos de ALC al logro del ODS 6.1, que aspira a que todo el mundo disponga de agua potable, haciendo hincapié en el acceso gestionado de forma segura.

La situación es similar en los subsectores de riego y defensa frente a inundaciones, estrechamente vinculados a la transformación productiva. En 2019, solo se destinó a regadíos un 3.24% de la inversión total en infraestructura de ALC y a defensas frente a inundaciones un 4.05% (Infralatam, 2022[15]). Ambos subsectores son decisivos para limitar los efectos del cambio climático en sectores estratégicos, como la industria agropecuaria sostenible. La optimización de los sistemas de riego contribuiría a combatir las secuelas de las sequías en el medio rural, mientras que la mejora de las defensas frente a inundaciones podría ayudar a evitar las consecuencias de las inundaciones en las zonas dedicadas a la cría sostenible de peces.

En los países costeros, la inversión sostenible en infraestructura marítima puede reportar múltiples beneficios tanto a las comunidades de su entorno como al medioambiente. La habilitación de litorales sostenibles puede impulsar directamente sectores estratégicos como la pesca sostenible y el turismo, mientras que las plataformas para desarrollar proyectos de energía eólica pueden fomentar la generación de energías renovables. En 2018, los servicios de la economía azul aportaron 25 000 millones de USD al PIB total de ALC en su conjunto, y 7 000 millones de USD en los países del Caribe (OECD et al., 2022[17]).

Para impulsar la inversión se requiere una transparencia y gobernanza pública sólida

Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno propicio a la inversión a través de una sólida gobernanza pública. Esto requiere una serie de esfuerzos coordinados en materia de políticas, como se describe en el Marco de acción para la inversión de la OCDE (Recuadro 2.2) (OECD, 2015[5]).

Recuadro 2.2. **Marco de acción para la inversión de la OCDE**

El Marco de acción para la inversión de la OCDE es una herramienta de gran alcance para evaluar y mejorar el entorno de inversión en un país. Cubre diez ámbitos de actuación pública: política de inversiones; política comercial; política de competencia; fiscalidad; gobernanza corporativa; conducta empresarial; desarrollo de recursos humanos; infraestructuras; financiamiento; y gobernanza pública.

En el Marco, los pilares fundamentales para garantizar una gobernanza pública adecuada y eficaz son una regulación de calidad, transparencia, apertura e integridad. Estas dimensiones abarcan cuestiones como la mejora de los marcos regulatorios; la simplificación administrativa; evaluaciones del impacto de la regulación; cumplimiento y ejecución de la normativa de la regulación; gobernanza y estructura institucional; coherencia regulatoria entre niveles de gobierno y jurisdicciones; gobierno abierto; integridad y contratación públicas. El Marco también cubre la gestión de conflictos de intereses, la vigilancia del cumplimiento y la revisión de leyes y regulaciones anticorrupción, así como normas e iniciativas internacionales en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Disponer de medidas eficaces a todos estos efectos puede aumentar considerablemente la confianza de los inversores.

Los marcos regulatorios y la integridad pública juegan un papel fundamental en la configuración del clima de inversión. Las regulaciones mal concebidas, o cuya aplicación no se supervise adecuadamente, pueden obstaculizar la entrada en el mercado, detraer recursos susceptibles de ser mejor invertidos en otros ámbitos, limitar el crecimiento del empleo y, en términos generales, desincentivar la inversión. Quizás el factor que más contribuye a la confianza de los inversores en la regulación es la garantía de estabilidad y la convicción de que las normas son eficaces para lograr sus objetivos. La calidad de los servicios públicos —determinada tanto por las normas internas de la administración como por las impuestas a los proveedores del sector privado— influye enormemente en el clima de inversión. Desde la perspectiva de un inversor, la política regulatoria debe ofrecer pautas y normas claras para los funcionarios públicos, además de definir inequívocamente lo que los inversores pueden esperar en términos de regulación pública.

Fuente: Marco de acción para la inversión de la OCDE (OECD, 2015[5]).

Los gobiernos deben ser lo suficientemente confiables y transparentes como para atraer inversiones. Estos requisitos son especialmente importantes en el caso de la infraestructura, dado que estas suelen ser inversiones a largo plazo que requieren un horizonte predecible y estable. La certeza política, la fiabilidad y una cultura basada en la integridad contribuyen a fomentar la confianza de los inversores, quienes requieren la seguridad de que las políticas, regulaciones y contratos del país serán respetados, y que cualquier cambio potencial será consultado y abordado de forma justa y previsible. Estos elementos reducen los riesgos para los inversores y mejoran la reputación del país como lugar seguro para hacer negocios (OECD, 2015[5]). Asimismo, la transparencia garantiza que los inversores tengan acceso a la información necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa; por ejemplo, sobre las leyes, las regulaciones, los indicadores económicos y las oportunidades de inversión del país en cuestión. Además, la transparencia también puede ayudar a garantizar que las inversiones se realicen con eficiencia y eficacia, evitando su mala asignación o uso indebido, ya sea por actos de corrupción o negligencia.

La adopción de un marco normativo en materia de transparencia, por ejemplo, mediante leyes de "acceso a la información" y ejercicios regulares de rendición de cuentas, puede transmitir una señal positiva que resulte atractiva para potenciales inversores del sector privado (OECD, 2015[5]). Los gobiernos podrían reforzar la confianza entre las partes

interesadas promoviendo la transparencia fiscal, el acceso a la información sobre cómo se asignan los proyectos y las inversiones, así como la divulgación de activos.

Asimismo, la transparencia en los procesos de contratación pública a nivel nacional y local también puede infundir confianza a las partes interesadas del sector privado y la sociedad civil. Mediante un compromiso con procesos de contratación pública eficientes, eficaces, económicamente viables y sujetos a rendición de cuentas, los gobiernos pueden contribuir a evitar la malversación de fondos, aumentar la satisfacción de los usuarios y promover servicios de mejor calidad (OECD, 2015[5]). Las Recomendaciones de la OCDE sobre Contratación Pública destaca la importancia de garantizar la transparencia en todo el proceso de contratación, ya sea a través de la creación de condiciones claras y justas para los posibles proveedores o permitiendo el acceso a información actualizada para el público en general (OECD, 2015[30]).

La coherencia de las políticas es fundamental para garantizar que la inversión movilizada contribuya efectivamente al logro de los ODS y a los objetivos de una transformación productiva sostenible e inclusiva. Dado que el horizonte temporal de la inversión en infraestructura es largo, es esencial que los objetivos de la infraestructura pública estén en consonancia con los de los planes nacionales de desarrollo e inversión. Además, al ser muchas las partes que intervienen en el financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura, será necesaria una cooperación activa entre todas las jurisdicciones pertinentes para garantizar que el diseño de las políticas sea inclusivo y participativo (Capítulo 4).

Los marcos que regulan la inversión deben tener como objetivo no solo aumentar la participación del sector privado, sino también garantizar la generación de externalidades positivas para el medioambiente y las comunidades circundantes. Para ello, se requiere la incorporación de una serie de elementos estratégicos.

En primer lugar, el diseño del marco regulatorio de la infraestructura debe fomentar la competencia entre los inversores, lo que a su vez podría generar más innovación y la adopción de métodos de producción sostenibles. Las nuevas regulaciones deben aspirar a garantizar claridad y transparencia, permitiendo a los inversores planificar sus inversiones a largo plazo. Asimismo, una asignación clara de responsabilidades entre los agentes implicados en cada inversión contribuirá a evitar futuros conflictos o costos adicionales. Por último, las iniciativas para lograr una armonización vertical de las regulaciones en consonancia con marcos nacionales, regionales e internacionales similares podrían evitar la duplicación de procesos y aportar más claridad (OECD et al., 2020[22]). A su vez, la armonización horizontal de las regulaciones en materia de inversión, comercio y fiscalidad podría resultar beneficiosa para impulsar la producción y evitar la evasión de impuestos.

Disponer de datos actualizados y fiables también es indispensable para comprender las necesidades de inversión y movilizar inversión privada hacia sectores estratégicos. En la actualidad, ALC adolece de falta de información sobre asuntos como qué inversores privados planean invertir o ya se encuentran invirtiendo en distintos sectores, cuánto invierten y en qué condiciones. Los gobiernos deben fortalecer su colaboración con el sector privado y el mundo académico para facilitar el acceso a bases de datos pertinentes y garantizar un uso eficiente de los recursos ya disponibles. Contar con datos fiables es esencial para realizar análisis costo-beneficio sólidos y promover con éxito la inversión.

Las iniciativas voluntarias promovidas por los gobiernos, como directrices contractuales y asociaciones de datos, pueden mejorar el acceso a los datos y su puesta en común. Un buen ejemplo es el Acuerdo de Cooperación Dare-2-Share en los Países Bajos, que ilustra cómo la colaboración entre las partes interesadas puede contribuir a definir

referencias y estándares legales que faciliten acuerdos transparentes y fiables en la fase de colaboración en materia de innovación, permitiendo así el intercambio de datos entre grandes y pequeñas empresas. En la misma línea, Digital Hub Dinamarca promueve el intercambio entre los sectores público y privado para enriquecer mutuamente sus series de datos. En ALC, una iniciativa regional en este sentido es el Instituto Abierto del Caribe, que promueve enfoques de desarrollo abierto para la inclusión, la participación y la innovación, utilizando los datos abiertos como elemento catalizador (OECD, 2019[31]). La disponibilidad de información confiable sobre sectores estratégicos puede facilitar la evaluación de posibles inversiones, mientras que la información actualizada sobre la infraestructura existente puede fortalecer el proceso de elaboración de políticas y atraer a inversores privados. El Recuadro 2.3 ilustra un ejemplo de asociación entre los sectores público y académico para mejorar la medición estadística en el ámbito de las infraestructuras.

Recuadro 2.3. **Desde México, una guía que permite reforzar la medición estadística de la infraestructura**

Para medir con claridad las inversiones en infraestructura es necesario disponer de información detallada y fiable. Esta información debe referirse a todas las jurisdicciones, desde la infraestructura nacional a la local.

Una iniciativa mexicana ofrece un ejemplo de asociación entre los sectores público y académico cuyo objetivo es mejorar los datos sobre infraestructuras. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colaboraron en la elaboración de una guía detallada que permite reforzar los sistemas nacionales de medición de infraestructuras públicas.

En sintonía con lo expuesto en esta guía, los gobiernos podrían beneficiarse de los esfuerzos para:

- recopilar, organizar y crear bases de datos de las infraestructuras existentes
- elegir y adoptar una definición de infraestructura para delimitar mejor el alcance y el tipo de información que debe recogerse
- dar prioridad a los principales sectores que deben incluirse en la medición y asignar la investigación a expertos que conozcan las particularidades de cada sector
- decidir si la medición de las infraestructuras públicas se hará en términos físicos (p. ej., número de km) o monetarios (p. ej., en porcentaje del PIB)
- elegir entre las dos metodologías principales —es decir, el sistema de inventario permanente y el método de inventario común— para evaluar la eficacia de las sumas invertidas
- participar en ejercicios de aprendizaje entre iguales para extraer enseñanzas de casos de éxito.

En cuanto a la metodología, el sistema de inventario permanente ha demostrado ser la forma de valoración más utilizada, ya que permite obtener datos sobre el *stock* de capital teniendo en cuenta los flujos de inversión. La información principal que hay que recopilar son los datos de inversión de capital a precios constantes y la vida útil de cada activo. Tras estimar el consumo de capital fijo y especificar su depreciación, es posible pasar de un *stock* de capital bruto a uno de capital neto.

En cuanto al aprendizaje entre iguales, hay un ejemplo interesante en Canadá, donde el gobierno desarrolló un centro estadístico de infraestructura (Infrastructure Statistics Hub), con información estadística sobre el volumen de inversión, el tipo de activos, la contribución económica y el impacto medioambiental.

Nota: En la recomendación original se incluyen consideraciones adicionales para la medición del sistema de inventario permanente.
Fuente: (INEGI, 2023[32]).

La buena gobernanza de las infraestructuras de la región de ALC es crucial para garantizar que la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, aporte bienestar a los ciudadanos sin dañar el medioambiente y la flora y fauna de los alrededores. Las recomendaciones de la OCDE sobre la gobernanza de la infraestructura ofrecen orientaciones detalladas a los países (Recuadro 2.4).

Recuadro 2.4. **Recomendaciones de la OCDE sobre gobernanza de infraestructura**

Las recomendaciones de la OCDE sobre gobernanza de infraestructura abarcan diez ámbitos prioritarios.

Una recomendación de especial relevancia para ALC refiere a la promoción de un marco regulatorio coherente, predecible y eficaz. La misma alienta a los gobiernos a identificar los principales objetivos de sus políticas y a complementarlos, en caso de ser necesario, con nuevas regulaciones y medios adicionales con el fin de encontrar la estrategia más adecuada para alcanzar sus metas. La recomendación también sugiere involucrar en el diseño y la implementación de las nuevas regulaciones a las partes afectadas, abarcando desde representantes de los distintos niveles de gobierno hasta las partes interesadas pertinentes, como el sector privado. La OCDE destaca la importancia de llevar a cabo revisiones sistemáticas de las regulaciones vigentes, para garantizar su validez, y de promover prácticas de buen gobierno, como la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras.

Otra recomendación de interés para ALC invita a los países a promover la toma de decisiones fundamentada en datos empíricos. La misma sugiere identificar y asignar claramente las responsabilidades institucionales en cuanto a la recolección, procesamiento y difusión de datos fiables. Además, aboga por establecer sistemas que recopilen información pertinente a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura. Esta recomendación enfatiza la necesidad de aprovechar las tecnologías digitales y el análisis de datos "para reducir las cargas administrativas, aumentar la transparencia, comprender el desempeño, fundamentar la toma de decisiones y adoptar medidas preventivas" con el fin de hacer frente a los riesgos.

Las recomendaciones de la OCDE también instan a:

1. adoptar una visión a largo plazo
2. velar por la sostenibilidad fiscal, la asequibilidad y una buena relación costo/valor percibido
3. garantizar una contratación eficiente y eficaz de proyectos de infraestructura
4. asegurar una participación transparente, sistemática y eficaz de las partes interesadas
5. coordinar la política de infraestructura entre todos los niveles de la administración
6. implementar un enfoque de trabajo conjunto de toda la administración pública para gestionar las amenazas a la integridad
7. garantizar que el activo desempeñe su función durante toda su vida útil
8. reforzar la resiliencia de infraestructura crítica.

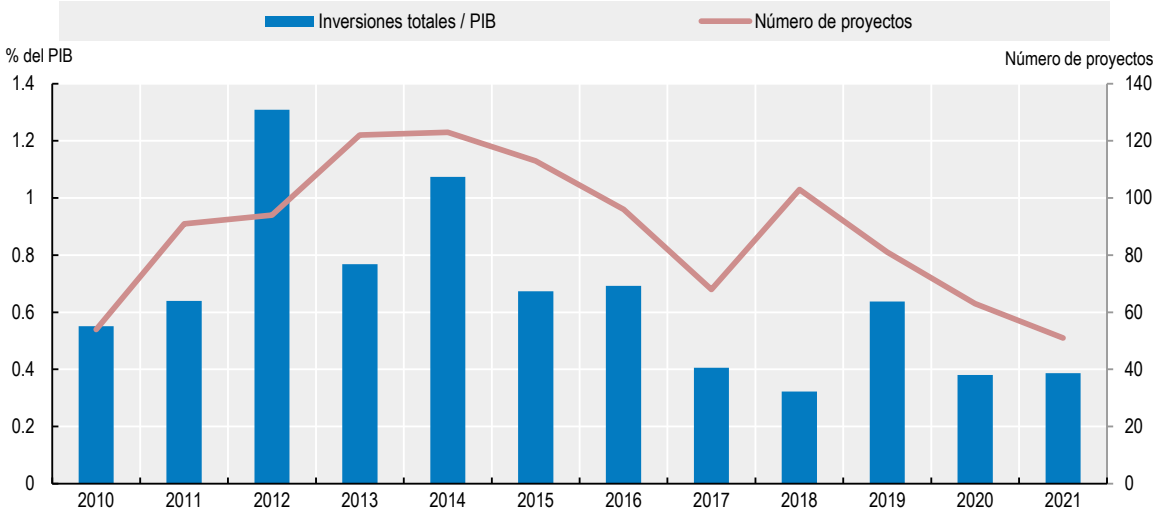
En el Capítulo 4, los principales mensajes sobre gobernanza ofrecen más detalles sobre las recomendaciones de la OCDE.

Fuente: (OECD, 2020[33]).

Las asociaciones público-privadas (APP) eficaces pueden ayudar a impulsar la inversión en infraestructura pública en ALC

Las APP constituyen una poderosa herramienta a disposición de los gobiernos de ALC para acelerar el desarrollo de sectores estratégicos que son esenciales para lograr una transformación productiva. La participación de las APP en proyectos de infraestructura pública en ALC ha fluctuado en los últimos años y alcanzó su punto máximo en 2012 (1.3% del PIB de la región), y su punto más bajo en 2018 (0.32%) (Gráfico 2.7). En 2021, el peso de la inversión comprometida en infraestructura pública a través de APP en ALC (0.46% del PIB) fue mayor que el de África subsahariana (0.31%), Asia meridional (0.26%), Asia oriental y el Pacífico (0.16%) y Oriente Medio y el norte de África (0.05%), y solo se vio superado ligeramente por Europa y Asia central (0.47%) (World Bank, 2021[34]). Entre 2009 y 2022, el 94.5% de los proyectos de infraestructura activos o concluidos en ALC estuvieron dirigidos por entidades privadas que tenían una participación de al menos el 60% en el contrato del proyecto (World Bank, 2023[35]).

Gráfico 2.7. **APP en proyectos de infraestructura pública de ALC como % del PIB, 2010-21**



Nota: La base de datos sobre Participación Privada en Infraestructuras (PPI) del Banco Mundial registra los acuerdos contractuales para proyectos de infraestructuras públicas que han alcanzado el cierre financiero, en los que el sector privado asume riesgos operativos, al cubrir proyectos con una participación privada de al menos un 20% (salvo en el caso de desinversiones, que se incluyen con una participación privada de al menos un 5%), y que pueden incluir participación pública. La estimación del Banco Mundial del porcentaje del PIB tiene en cuenta todo tipo de proyectos, incluidos los interrumpidos y cancelados. "Inversión total" recoge (en millones de USD) la suma de la inversión en activos físicos y los pagos a las administraciones públicas. Se utilizó el indicador del Banco Mundial "PIB en dólares corrientes" para obtener el ratio con la variable de inversiones totales.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2023[35]); (World Bank, 2023[36]).

StatLink https://stat.link/x3vbzl

La evolución del número total de proyectos de infraestructura en ALC ha seguido la tendencia de las APP como porcentaje del PIB (Gráfico 2.7). Esta tendencia se manifiesta también en los tipos de proyectos que normalmente reciben financiamiento, lo que sugiere que existe margen para la diversificación. En 2022, la mayoría de los 80 proyectos de infraestructura (activos o concluidos) con participación privada de ALC se localizaban en Brasil (más del 64%), país al que siguieron —con porcentajes muy inferiores— Colombia (11%) y Perú (9%). En contraste, el menor número de estos proyectos correspondió a Jamaica, El Salvador, México y Paraguay, con solo una APP cada uno (1.25%) (World Bank, 2023[35]). La mayor parte de la inversión realizada a través de APP en ALC se dirige al sector de la energía (67.5% de todos los proyectos), seguido del sector de transporte (26.25%). Los sectores que reciben menos financiamiento son el de agua y alcantarillado (5%) y la gestión

de residuos sólidos urbanos (1.25%). Por citar un caso ilustrativo, la implementación de APP en la gestión del agua en Cartagena (Colombia) mejoró notablemente la calidad del servicio, al ampliar la cobertura del suministro de agua y proporcionar acceso a agua corriente (World Bank, 2016[37]; OECD, 2009[38]).

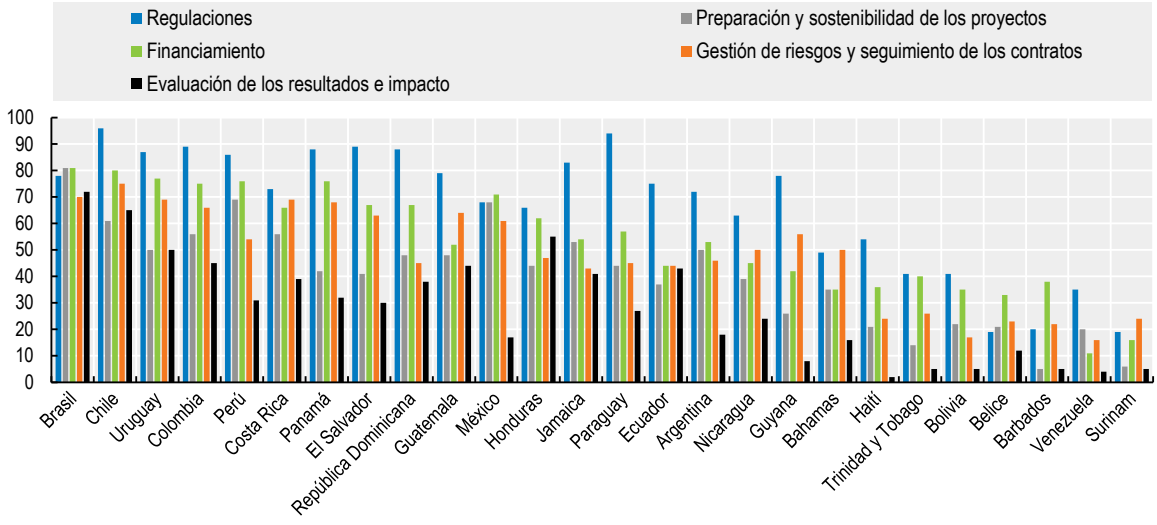
La creciente adopción de APP en ALC durante la última década es un reflejo de los avances logrados en el clima regulatorio, institucional y económico de la región. Un análisis del entorno para las APP en 21 países de ALC puso de manifiesto que, en 2019, 14 de ellos habían consolidado mercados para emprender APP, frente a tan solo 5 en 2014. Además, reveló que se habían forjado asociaciones en sectores que iban desde ámbitos convencionales (como el transporte, la energía y el agua) hasta otros más innovadores (como oficinas gubernamentales, atención sanitaria, deportes y justicia) (EIU, 2019[39]). Los avances de la última década también quedan evidenciados por el hecho de que 16 países han creado agencias dedicadas a promover, supervisar y prestar asistencia técnica a las APP (Economist Impact, 2022[40]). En particular, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú adhirieron a la Recomendación de la OCDE sobre los Principios de Gobernanza Pública de Asociaciones Público-Privadas. Sin embargo, aunque el respaldo político a la inversión privada en el desarrollo de infraestructura es cada vez mayor, aún quedan aspectos por mejorar, como el refuerzo de la transparencia, la rendición de cuentas y las prácticas sostenibles.

Entre los elementos que crean un entorno propicio para las APP en un país, figuran las regulaciones y las instituciones; la preparación y la sostenibilidad de los proyectos; el financiamiento; la gestión de riesgos y el seguimiento de los contratos; y la evaluación de los resultados y el impacto (Economist Impact, 2022[40]).

Si bien es cierto que algunos países de ALC han logrado avances significativos en la implementación de regulaciones relacionadas con las APP y cuentan con capacidades financieras más sólidas, se observan importantes disparidades regionales en lo que respecta a la preparación y sostenibilidad de los proyectos. En particular, se identifican brechas significativas en la gestión de las APP, que requieren mejoras en la gestión de riesgos, la supervisión de proyectos y la evaluación de los impactos económicos y sociales de las APP operativas (Gráfico 2.8) (Economist Impact, 2022[40]).

Gráfico 2.8. **Aspectos clave que determinan la preparación y capacidad de un país para implementar APP**

Infrascope Index, 2021/22



Nota: Puntuaciones de 0 a 100, donde 100 = mejor. Los países están ordenados según su puntuación total, de mayor a menor.
Fuente: (Economist Impact, 2022[40]).

StatLink https://stat.link/um4on0

El éxito en la implementación de APP depende en gran medida de factores regulatorios e institucionales fundamentales. La falta de instituciones sólidas, la incertidumbre que suscita la inestabilidad política, la corrupción endémica y los obstáculos a la obtención de financiamiento a largo plazo han planteado grandes dificultades para la efectiva ejecución de APP en algunos países de ALC. Instituciones estatales débiles, legislación ambigua y un diseño deficiente de los contratos, por ejemplo, han conducido a renegociaciones frecuentes y costosas de las concesiones de carreteras (Bitrán, Nieto Parra y Robledo, 2013[41]). Existe, por tanto, un peligro sustancial de que se produzcan ineficiencias, tales como una selección inadecuada de proyectos, sobrecostos, retrasos y una distribución inapropiada de riesgos. Estos factores contribuyen a generar un entorno de inversión que desalienta la participación efectiva del sector privado, socavando aún más el desarrollo de las APP en ALC (CAF, 2018[42]).

Para hacer frente a estos desafíos es necesario un marco regulatorio sólido, que se caracterice por la transparencia, el desarrollo de capacidades y la estabilidad política (Engel, Fischer y Galetovic, 2021[43]). La claridad y la coherencia en la regulación garantizan la confianza de los inversores y, por tanto, la viabilidad a largo plazo de las APP, mientras que la integridad y la transparencia de los procesos mitigan el riesgo de corrupción y mejoran la rentabilidad. Además, un aspecto esencial para el éxito de las asociaciones público-privadas es la capacidad de las administraciones públicas de adquirir las competencias técnicas necesarias para diseñar, implementar y supervisar dichos proyectos. Asimismo, la estabilidad política, manifestada en el cumplimiento de los contratos a lo largo de los ciclos políticos, puede afianzar un entorno propicio para la inversión a largo plazo a través de APP.

La participación ciudadana en las APP fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión social (World Bank, 2019[44]). A su vez, mejora la credibilidad de la asociación al permitir la incorporación de diversas perspectivas, favoreciendo así una toma de decisiones más eficaz e inclusiva (Capítulo 4). Por su parte, la participación pública eleva la aceptación social de los proyectos, reduce el riesgo de reacciones negativas de la población y puede ayudar a identificar las necesidades locales, lo que, en última instancia, permite encontrar soluciones mejor orientadas y más sostenibles. Es preciso trabajar en la capacitación de los ciudadanos para que su participación sea significativa, garantizando que tenga un impacto tangible en lugar de ser una mera formalidad (ECLAC, 2020[45]).

Teniendo en cuenta la naturaleza a largo plazo de los proyectos de infraestructura, los gobiernos pueden promover APP al mantener consultas periódicas con representantes del sector privado a lo largo de todo el ciclo de inversión, con el fin de garantizar que no haya interrupciones y prevenir posibles conflictos. Para mitigar la incertidumbre y, en última instancia, evitar mayores costos fiscales, es fundamental contar con marcos regulatorios e institucionales bien diseñados que permitan reducir el riesgo de que se produzcan costos de renegociación.

La participación del sector público en la inversión y la disponibilidad de mecanismos de financiamiento mixto —con elementos de reducción del riesgo aportados por los gobiernos nacionales— podrían alentar a los inversores privados a participar en APP (Capítulo 5). Aproximadamente el 27% (en promedio) de las APP activas o concluidas en América Latina entre 2010 y 2017 recibieron algún tipo de respaldo gubernamental directo o indirecto. Las garantías de pago fueron la forma más común de apoyo (14.4%), seguidas de las deducciones fiscales (10.0%), las subvenciones de capital (7.5%) y las subvenciones de ingresos (1.6%) (World Bank, 2023[35]).

Con un diseño e implementación adecuados, las APP podrían ayudar a los gobiernos de ALC a atraer financiamiento privado hacia proyectos de infraestructura pública con un gran impacto social, promoviendo la innovación y contribuyendo a un modelo de

producción sostenible e inclusivo. En la actualidad, el sector público asume la mayor parte de la inversión total en infraestructura pública en la región, mientras que el sector privado contribuye en torno al 33.3% (IDB, 2022[46]). Aunque la inversión privada en infraestructura pública es baja en ALC en comparación con los países de la OCDE, sigue siendo más elevada que en otras regiones en desarrollo. Como porcentaje del PIB regional, ALC registró en 2022 la mayor participación privada en infraestructura (0.53%), por encima de la de Asia meridional (0.34%), África subsahariana (0.25%) y Asia oriental y Pacífico (0.21%) (World Bank, 2022[47]).

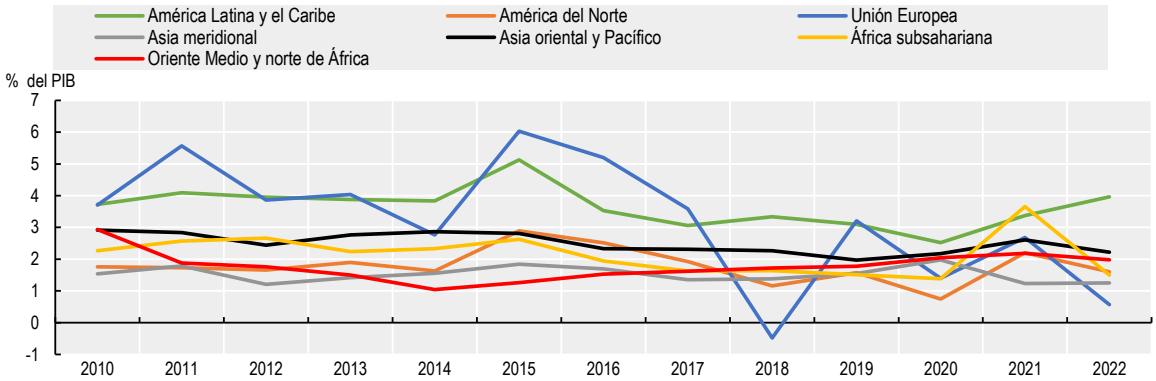
Es importante señalar que, en ocasiones, la colaboración público-privada puede entrar en conflicto con consideraciones medioambientales debido a la tensión inherente entre el desarrollo de infraestructura y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Para mitigar estos posibles conflictos, es esencial incorporar una evaluación exhaustiva de impacto ambiental en las fases de planificación de las APP (OECD, 2008[48]) (Capítulo 4). Además, es fundamental contar con marcos sólidos para la formulación de políticas y mecanismos de cumplimiento y de este modo garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental, así como el fomento de la transparencia y la implicación de las partes interesadas con el fin de velar por un uso de la tierra responsable desde el punto de vista medioambiental y social. Las asociaciones internacionales pueden jugar un papel importante en la movilización de mayores inversiones públicas y privadas capaces de generar un impacto social más significativo (Capítulo 5).

Aumentar la calidad de la inversión extranjera directa

Aunque la IED disminuyó un 24% en 2022 a escala mundial, en ALC los flujos de entrada de IED aumentaron un 55% y alcanzaron casi los 225 000 millones de USD.[1] En términos relativos, con entradas equivalentes al 4% del PIB, ALC fue el primer destino de la IED en 2022, posición que también ocupó en 2018 y 2020. En 2022, a la región de ALC le siguieron Asia oriental y Pacífico (2.2% del PIB), Oriente Medio y el norte de África (2%), Norteamérica (1.6%), África subsahariana (1.5%), Asia meridional (1.3%) y la UE (0.6%). El aumento en la llegada de IED a ALC estuvo impulsado por un marcado interés en los servicios, los hidrocarburos y las manufacturas en los países con mayores capacidades (ECLAC, 2023[49]) (Gráfico 2.9).

Tomando como referencia el Plan Marshall, la IED supone una importante afluencia de capital para los países de ALC. La IED recibida por la región de ALC ascendió a 464 000 millones de USD entre 2017 y 2019, y se redujo ligeramente a 445 000 millones de USD durante el periodo posterior a la pandemia de COVID-19, de 2020 a 2022 (ECLAC, 2023[49]; ECLAC, 2023[50]). Para poner en perspectiva estos flujos de IED, durante los períodos 2017-19 y 2020-22, la IED representó el equivalente al 290% (464 000 millones de USD) y al 278% (445 000 millones de USD), respectivamente, de los recursos financieros proporcionados por el Plan Marshall para promover la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial (13 000 millones de USD en 1948, equivalente a 160 000 millones de USD en 2022). Del mismo modo, mientras que el Plan Marshall representó alrededor del 2% de los ingresos nacionales combinados de los países receptores entre 1948 y 1951 (Eichengreen, 2010[51]), la IED en América Latina y el Caribe superó el 3% del PIB en los períodos 2017-19 y 2020-22 (y alcanzó el 4% del PIB en 2022).

Gráfico 2.9. **Entradas de IED como % del PIB, por regiones, 2010-22**



Nota: Como en (World Bank, 2023[36]), los datos para cada región corresponden a promedios ponderados. Para la región ALC se tuvieron en cuenta 37 países con datos disponibles para 2022: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela. Los últimos datos disponibles para Aruba, Curazao e Islas Caimán corresponden al 2021, mientras que para Venezuela corresponde al 2014.

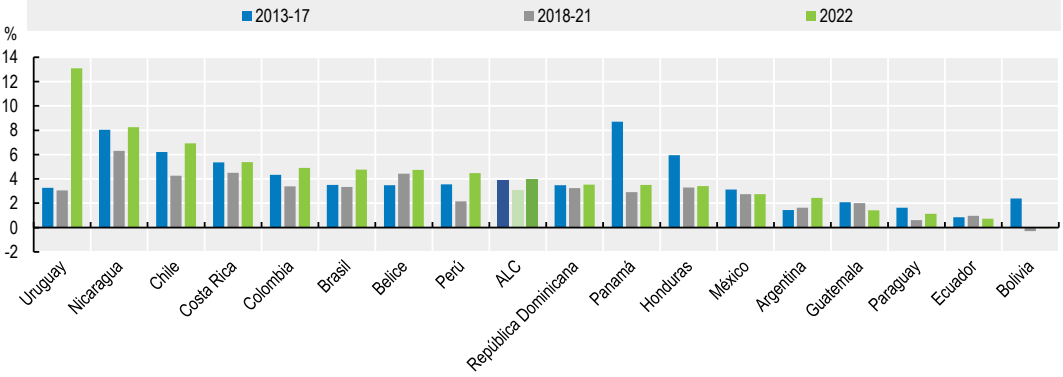
Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2023[36]).

StatLink https://stat.link/s9bz5c

Más de la mitad de la IED recibida por la región de ALC en 2022 se dirigió a Brasil y México. En el caso de Brasil, la entrada de IED alcanzó los 91 000 millones de USD (41% de la IED de ALC), mientras que en México fue de 39 000 millones de USD (17%). En el caso de Brasil, su cuota de IED superó su participación en el PIB de la región (34%), mientras que en el caso de México fue inferior (25%). Si bien la IED recibida por la región se expandió un 55% de 2021 a 2022 —y creció significativamente en la mayoría de las subregiones, sobre todo en América del Sur (81.8%) —, disminuyó un 11.9% en América Central (excluido México).[2]

Los flujos de IED entre los países de América Latina y el Caribe muestran una notable heterogeneidad. Los casos de Uruguay (13.1%), Nicaragua (8.3%), Chile (6.9%) y Costa Rica (5.4%) fueron excepcionales, con niveles de IED superiores al promedio de ALC del 4% del PIB. En contraste, los menores niveles de IED correspondieron a Paraguay (1.1%) y Ecuador (0.7%), mientras que Bolivia registró desinversión, con entradas negativas de IED (-0.1%) (Gráfico 2.10).

Gráfico 2.10. **Entradas de IED como % del PIB, países seleccionados de ALC, 2013-22**



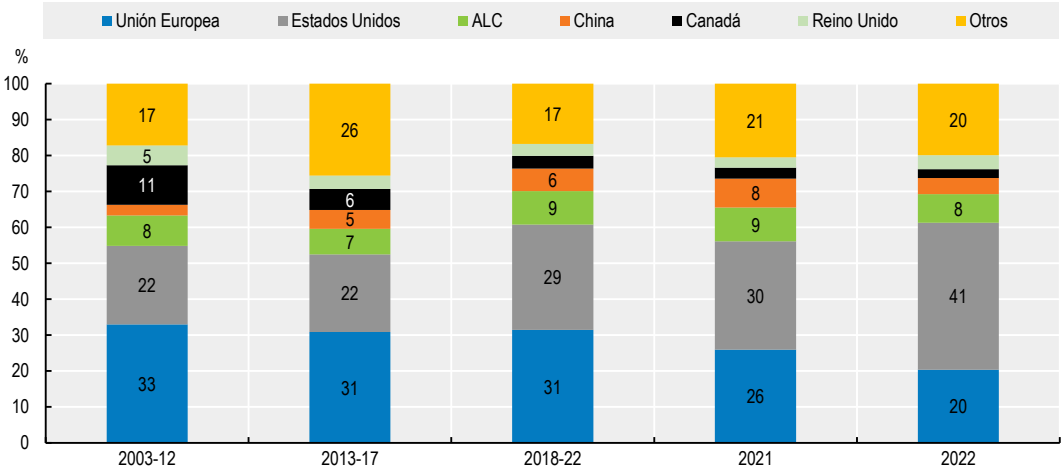
Nota: Los datos de 2013-17 y 2018-21 corresponden a promedios a lo largo del tiempo. Al igual que en (World Bank, 2023[36]), los datos de 2022 para ALC corresponden a un promedio ponderado que incluye 33 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Surinam, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos y Uruguay. Para Aruba, Curazao e Islas Caimán el último dato disponible corresponde al año 2021, mientras que para Venezuela el último dato disponible corresponde al 2014.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (World Bank, 2023[36]).

StatLink https://stat.link/jzv5so

Siguiendo el destino final de la inversión que figura en los anuncios de proyectos de IED, la UE y los Estados Unidos de América (EE. UU.) son los mayores inversores en ALC, ya que representan sistemáticamente más de la mitad de la IED de la región.[3] En 2022, el primer inversor fue EE. UU., con el 41% del valor de los proyectos anunciados, seguido de la UE (20%). Alrededor del 8% de la IED en la región procedió de países de ALC, seguidos de la República Popular China (en adelante, "China") (4%), el Reino Unido (4%) y Canadá (2%), mientras que los demás países juntos representaron el 20%. Aunque la inversión de la UE en ALC disminuyó en 2022 (en 6 puntos porcentuales con respecto a 2021), la UE mantiene una sólida posición como principal socio proveedor de IED para ALC desde hace años (Gráfico 2.11). Dentro de la UE, los principales socios en el ámbito de la IED entre 2013 y 2022 fueron España (9.5%), Alemania (5.1%), Francia (4.3%) e Italia (4.1%).

Gráfico 2.11. **Origen de los anuncios de proyectos de IED en ALC como % del valor total, 2003-22**

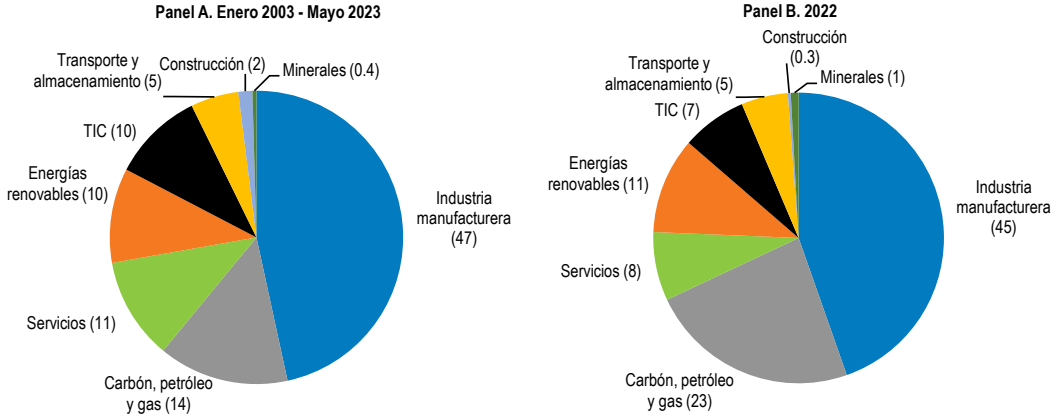


Nota: Los datos de 2003-12, 2013-17 y 2018-22 corresponden a la suma del valor de los proyectos anunciados a lo largo de esos años. ALC incluye 27 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (fDi Markets, 2023[52]).

StatLink https://stat.link/ai2c49

Los proyectos anunciados de IED en ALC se han concentrado en torno a cinco sectores clave. De enero de 2003 a mayo de 2023, el 47% del valor de los proyectos de IED anunciados en la región correspondió al sector manufacturero, seguido del carbón, el petróleo y el gas (14%), los servicios (11%) y las energías renovables y las TIC (10% cada uno) (Gráfico 2.12, Panel A). En 2022, se evidenció un ligero cambio en esta tendencia, ya que los sectores que recibieron más IED fueron la industria manufacturera (45%), el carbón, el petróleo y el gas (23%), las energías renovables (11%) y los servicios (8%) (Gráfico 2.12, Panel B). Cabe destacar que los flujos de IED tienden a ser muy volátiles, como se ilustra en el ejemplo del sector del carbón, el petróleo y el gas. Este sector representó solo el 5% de los anuncios de proyectos en ALC en 2021 (ECLAC, 2022[53]), pero su participación se elevó al 23% de todos los anuncios en 2022, debido a dos grandes proyectos de inversión localizados en Guyana y México (ECLAC, 2023[49]). Por esta razón, es preferible analizar los anuncios de proyectos en un horizonte temporal más amplio.

Gráfico 2.12. **Valor de los anuncios de proyectos de IED en ALC, distribución por sectores**



Nota: Los datos abarcan de enero de 2003 a mayo de 2023. Servicios incluye: servicios empresariales, servicios financieros, servicios de salud, hostelería y turismo, y ocio y entretenimiento. Construcción incluye: el sector inmobiliario. TIC incluye: comunicaciones, *software* y servicios informáticos. ALC incluye 27 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

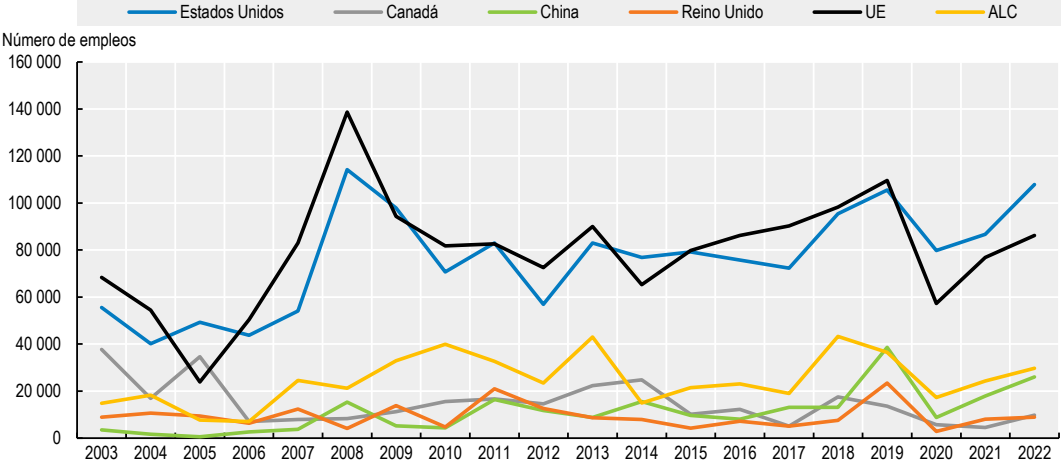
Fuente: Elaboración de los autores con base en (fDi Markets, 2023[52]); (ECLAC, 2023[49]).

StatLink https://stat.link/acz052

Inversión extranjera directa para mejorar el empleo

La IED procedente de la UE y Estados Unidos ha contribuido significativamente a la creación de empleo formal en la región de ALC en las dos últimas décadas. De hecho, desde 2006, la inversión proveniente de estas dos demarcaciones se ha consolidado como la principal fuente extranjera de generación de empleo formal en la región. Se estima que las inversiones anunciadas en 2022 procedentes de Estados Unidos generarán casi 108 000 puestos de trabajo y las de la UE 86 000; les seguirán Canadá (10 000) y China (9 000). Se prevé que la IED con origen en países de ALC anunciada para 2022 genere unos 30 000 puestos de trabajo (Gráfico 2.13).

Gráfico 2.13. **Cifra total de empleos formales creados por la IED en ALC, por país de origen, 2003-22**



Nota: fDi Markets publica cuántos puestos de trabajo se calcula que genere cada anuncio de IED. ALC incluye 27 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

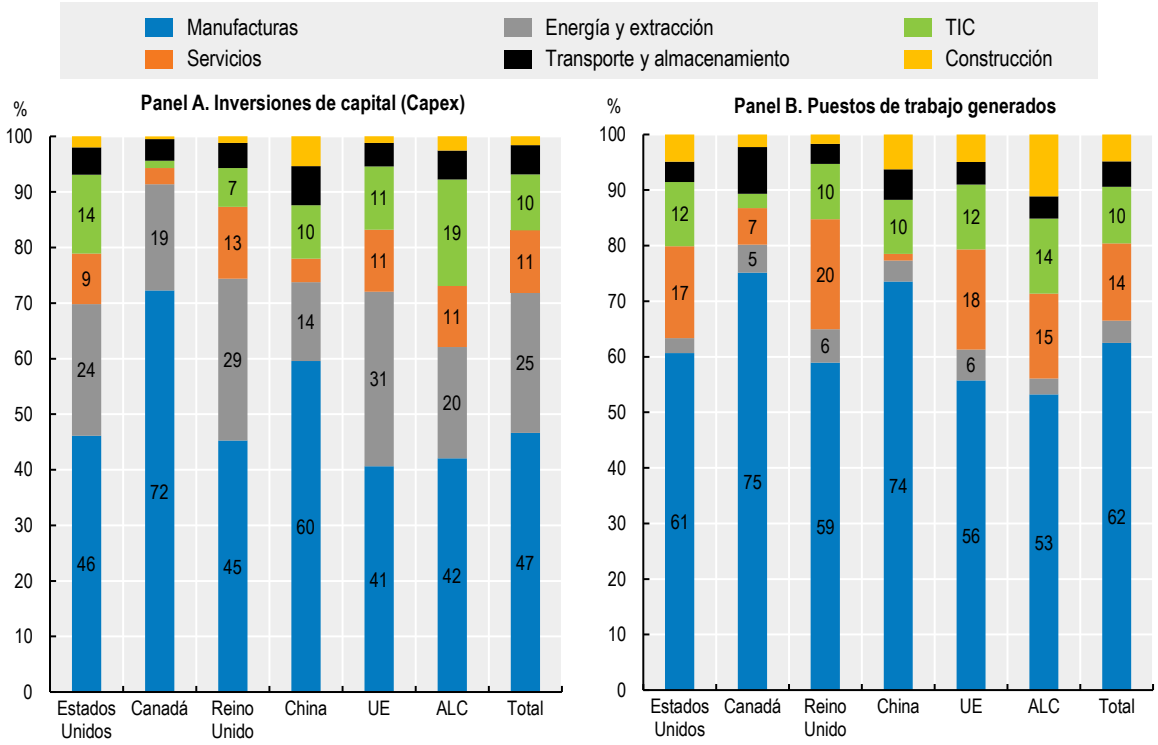
Fuente: Elaboración de los autores con base en (fDi Markets, 2023[52]).

StatLink https://stat.link/ce9t2m

En el plano sectorial, en ALC la mayor parte de la IED se dirige a la industria manufacturera, así como a los sectores energético y extractivo. En los últimos 20 años, el sector manufacturero ha sido el principal receptor, con más del 40% de toda la IED (Gráfico 2.14, Panel A). Este sector ocupa también la primera posición en generación de empleo asociada a la IED en ALC (Gráfico 2.14, Panel B). En el caso de todos los socios principales, la contribución del sector manufacturero a la generación de empleo supera su participación en el capital invertido, lo que resalta su elevada contribución a la economía. El sector servicios también tiene un alto impacto en la generación de empleo, particularmente en lo que respecta a las inversiones procedentes de la Unión Europea y Estados Unidos. En contraste, el sector energético y extractivo tiene un impacto reducido en el empleo, ya que es mayor su participación en el capital invertido que en los puestos de trabajo generados (en todos los países considerados). A modo de ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el 31% del capital invertido se destina al sector de energía y extracción, pero tan solo el 6% de los empleos generados corresponden a ese sector. De manera similar, el 24% de la IED de la región procedente de los Estados Unidos se dirige al sector energético y extractivo, pero solo genera el 3% de los empleos (Gráfico 2.14, Paneles A y B). Además, cabe destacar que la IED en energía renovable resulta en una mayor creación de empleo que la IED en combustibles fósiles. Por ejemplo, una inversión de 1 000 millones de dólares en combustibles fósiles genera alrededor de 500 nuevos empleos en ALC, mientras que la misma inversión en energías renovables crea 800 empleos. Los datos pueden utilizarse como una herramienta poderosa con la que ampliar el impacto de la IED en el empleo. Conocer con precisión qué clase de operaciones realizan las empresas extranjeras en la región de ALC —y el tipo de competencias y capacidades que demandan— podría orientar de manera más eficaz las políticas laborales y fomentar la generación de nuevos empleos formales.

Gráfico 2.14. **Inversiones de capital y empleos formales creados por la IED en ALC, enero 2003-mayo 2023**

Por sectores y países de origen seleccionados



Nota: TIC = Tecnologías de la información y la telecomunicación. Capex = Inversiones de capital. Los datos abarcan de enero de 2003 a mayo de 2023. Energía y extracción incluye: carbón, petróleo y gas; minerales y energías renovables. Servicios incluye: servicios empresariales, servicios financieros, servicios de salud, hostelería y turismo, y ocio y entretenimiento. Construcción incluye: el sector inmobiliario. TIC incluye: comunicaciones, *software* y servicios informáticos. ALC incluye 27 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (fDi Markets, 2023[52]).

StatLink https://stat.link/mltdu9

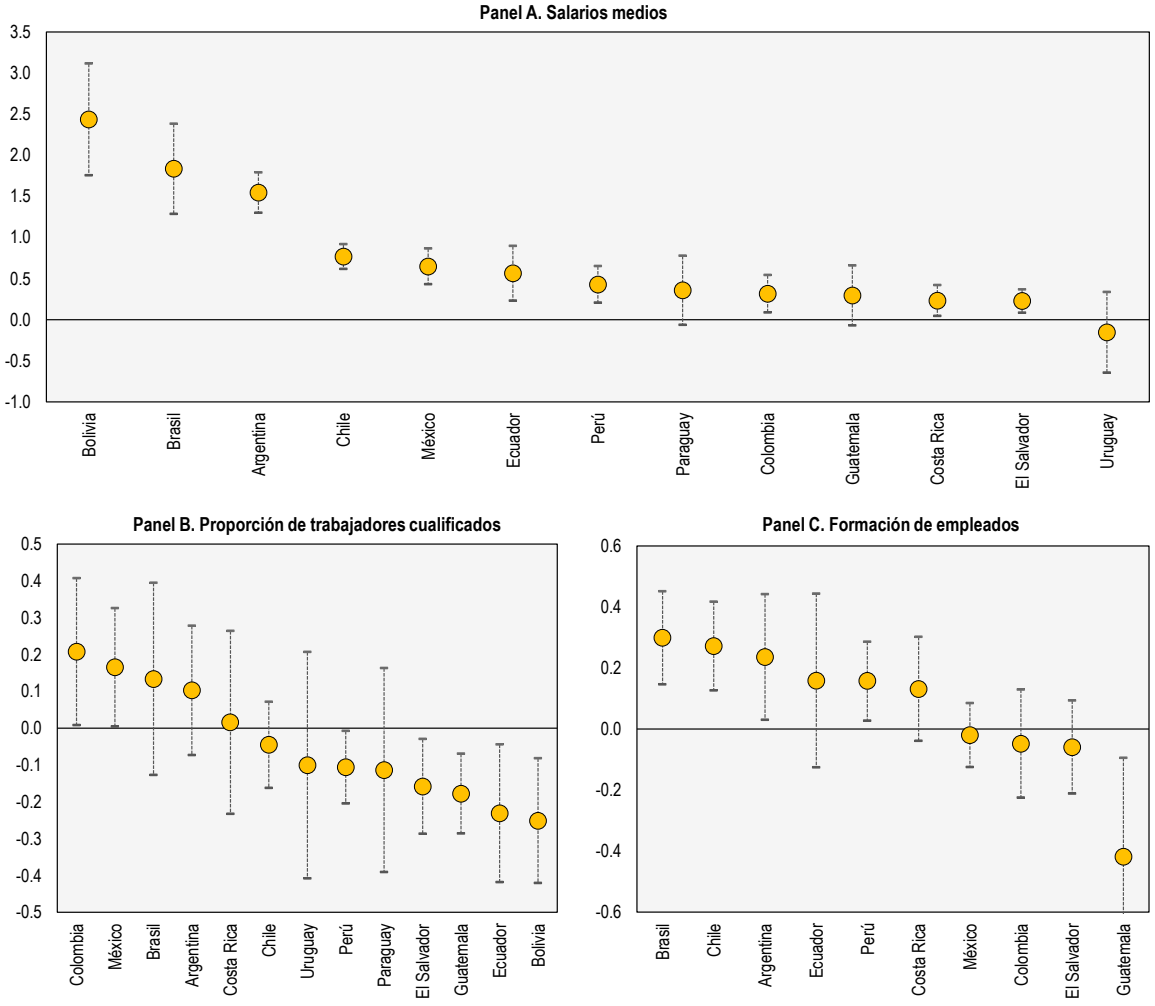
La IED podría ser no solo una fuente de creación de empleo, sino también de mejora de la calidad de los puestos de trabajo y del desarrollo del capital humano (OECD, 2023[54]). Los indicadores de calidad de la IED de la OCDE tratan de dilucidar en qué medida la IED contribuye al desarrollo sostenible, prestando especial atención a la productividad y la innovación, la calidad de los empleos y las competencias, la igualdad de género y la transición a una economía con bajas emisiones de carbono (OECD, 2019[55]; OECD, 2022[56]).

En el caso de la región de ALC, los indicadores de calidad de la IED muestran que las empresas extranjeras suelen ofrecer salarios medios más elevados, lo que sugiere que su mayor productividad redunda, al menos en parte, en beneficio para los empleados (Gráfico 2.15, Panel A). Al mismo tiempo, en la mayoría de los países latinoamericanos examinados, las empresas extranjeras tienden a contratar una proporción mayor de trabajadores no cualificados que las empresas nacionales, si bien también son mucho más proclives a ofrecer oportunidades de capacitación (Gráfico 2.15, Paneles B y C). Esto parece indicar que los inversores extranjeros son una importante fuente de empleo para los trabajadores no cualificados de América Latina y pueden contribuir de manera considerable a mejorar sus competencias y a aumentar sus posibilidades de empleo en el futuro. Para potenciar la contribución de la IED a la creación de empleo de calidad,

los esfuerzos de promoción de la inversión en ALC deberían alinearse con políticas de desarrollo productivo bien definidas que promuevan la diversificación económica, así como con otras políticas relacionadas con la inversión (OECD et al., 2021[57]; OECD, 2022[1]; OECD, 2022[56]; ECLAC, 2023[49]).

Gráfico 2.15. **Indicadores de calidad de la IED relacionados con el empleo para países seleccionados de ALC, 2019**

Las empresas extranjeras obtienen mejores resultados que las nacionales si el valor > 0



Nota: En el gráfico, los puntos naranjas corresponden a la estimación del indicador, mientras que las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza correspondiente. Si el valor es > 0, las empresas extranjeras obtienen mejores resultados que las nacionales. Basado en datos de 2019 o último año disponible.

Fuente: Basado en (OECD et al., 2021[57]); (OECD, 2019[55]).

StatLink https://stat.link/ycv5gp

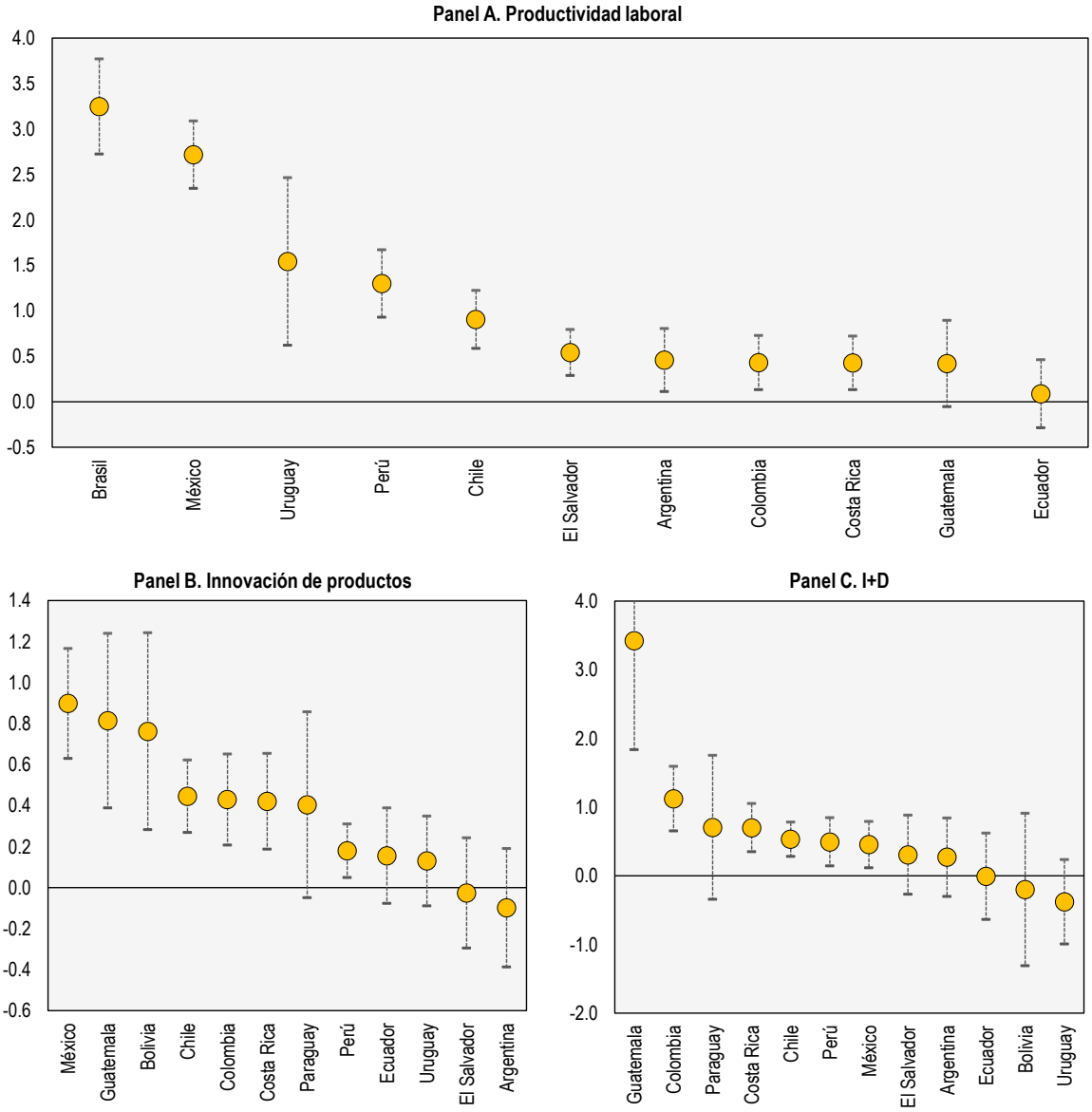
El impacto de la IED en la productividad, la innovación y la sostenibilidad medioambiental

La IED también puede influir en la innovación y la productividad de las economías receptoras. Según los indicadores de calidad de la IED de la OCDE, y en la mayoría de los países para los que se disponen datos, los inversores extranjeros muestran una mayor productividad y disposición a introducir innovaciones en los productos o invertir en I+D que las empresas nacionales (Gráfico 2.16, Paneles A y C). Estas diferencias en términos de

productividad e innovación sugieren la existencia de un potencial para la propagación de conocimientos y tecnología de las empresas extranjeras a las nacionales. Para maximizar el impacto de la IED en la productividad y la innovación, los objetivos de las políticas deben alinearse en todos los niveles de gobierno y ámbitos de actuación pública. Esto incluye la cooperación de las instituciones públicas a nivel nacional y subnacional, y la coordinación con las pymes para crear vínculos empresariales y ecosistemas de innovación más fuertes (OECD, 2022[1]).

Gráfico 2.16. **Productividad e innovación: indicadores de calidad de la IED para países seleccionados de ALC, 2019**

Las empresas extranjeras obtienen mejores resultados que las nacionales si el valor > 0



Nota: En el gráfico, los puntos naranjas corresponden a la estimación del indicador, mientras que las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza correspondiente. Si el valor es > 0, las empresas extranjeras obtienen mejores resultados que las nacionales. Basado en datos de 2019 o último año disponible. Para más detalles metodológicos, www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm.

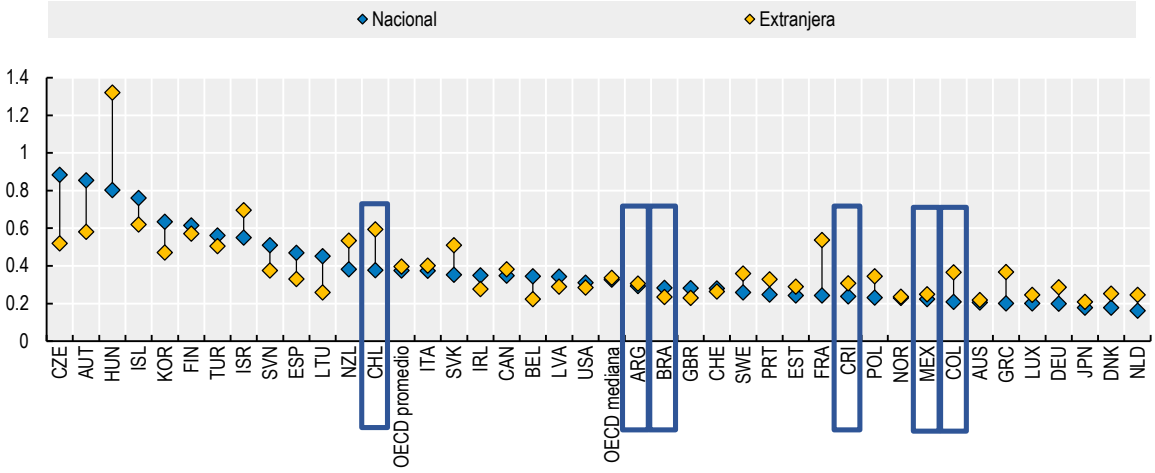
Fuente: Basado en (OECD et al., 2021[57]); (OECD, 2019[55]).

StatLink https://stat.link/rs03f1

Si bien la IED muestra un gran potencial para contribuir al desarrollo sostenible a nivel agregado en la mayoría de las economías de ALC, actualmente parece más intensiva en carbono que la inversión nacional. Sin embargo, algunas industrias con elevadas emisiones por unidad de producción se benefician de la presencia de empresas extranjeras con una menor intensidad de carbono.

Considerando la economía en su conjunto, las empresas extranjeras presentes en ALC superan las emisiones por unidad de producción de las empresas nacionales en una proporción que oscila entre el 4% y el 75% (Gráfico 2.17). Las diferencias —medidas en toneladas métricas (t) de emisiones de dióxido de carbono (CO_2) por unidad de producción— son especialmente marcadas, por ejemplo, en la industria del coque y los productos refinados del petróleo de Costa Rica (donde las empresas extranjeras emiten unas 24 t CO_2 más), y en electricidad y otros servicios públicos de Colombia (6 t CO_2 más). Además, las empresas extranjeras en los sectores de transporte y almacenamiento en México y en la industria maderera en Brasil también presentan una mayor intensidad de carbono en comparación con sus contrapartes nacionales (aunque en niveles inferiores). Esto sugiere que aún queda margen para mejorar el desempeño ambiental de la IED en estos sectores en términos de reducción de emisiones de carbono (OECD, 2023[58]).

Gráfico 2.17. **Intensidad de carbono de la producción por titularidad, t CO_2 por millón de USD**



Nota: La figura muestra las intensidades de carbono —es decir, las emisiones de carbono por unidad de producción— de las empresas extranjeras y nacionales de cada país a nivel agregado. Para obtener los valores nacionales, se agregaron los valores de los distintos sectores utilizando como ponderaciones los porcentajes de la producción de cada sector en la producción total del país.

Fuente: (OECD, 2023[58]).

Debido a la disponibilidad de recursos naturales como la energía eólica y solar, la región de ALC posee un considerable potencial para atraer inversiones significativas en el sector de las energías renovables. La IED en proyectos totalmente nuevos en el sector de las energías renovables ha aumentado en las dos últimas décadas, mientras que la IED en proyectos relacionados con los combustibles fósiles ha disminuido ligeramente (Gráfico 2.18, Panel A). Desde 2011, la IED en energías renovables ha superado a la IED en combustibles fósiles de forma casi ininterrumpida, lo que pone de relieve la creciente contribución de la IED a la transición energética. Sin embargo, el aumento de la inversión transfronteriza en energías renovables ha variado significativamente entre las distintas economías de ALC, y la IED en energías renovables aún no se ha recuperado por completo de la crisis de COVID-19 (OECD, 2023[58]). El Recuadro 2.5 presenta una breve recopilación de mensajes sobre cómo los países de ALC pueden profundizar y ampliar las relaciones para aumentar la inversión transfronteriza en energías renovables.

Recuadro 2.5. **Los países de ALC pueden ampliar adicionalmente las relaciones de inversión con los países de la OCDE en el ámbito de la IED en energías renovables**

Puesto que el espacio fiscal de los gobiernos de ALC ya es reducido, la IED puede desempeñar un papel decisivo a la hora de garantizar los recursos esenciales para la transición verde (Capítulo 1). Para descarbonizar la matriz energética de aquí a 2050, la región de ALC necesitará invertir 1 000 millones de USD en total (UNEP, 2016[59]).

Aunque los proyectos de IED en energías renovables se multiplicaron por más de seis en las dos últimas décadas en ALC, la inversión sigue estando altamente concentrada. Brasil, Chile y México recibieron en conjunto tres cuartas partes de toda la IED en energías renovables abierta y anunciada en la región desde 2003 (Capítulo 3).

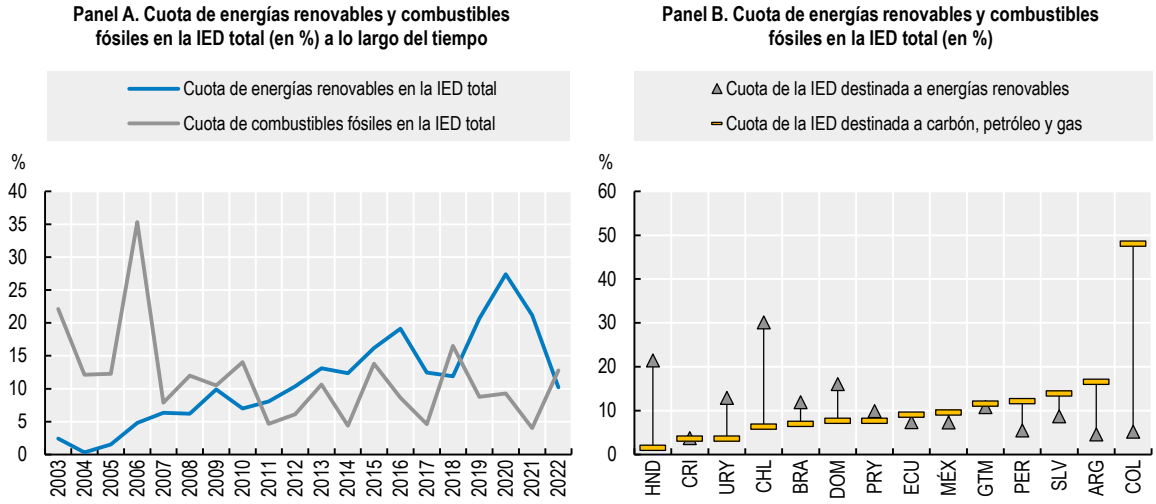
Para promover más y mejores inversiones transfronterizas en energías renovables, otros países de ALC podrían aprovechar los fondos procedentes de los principales inversores de los países de la OCDE. Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y otros países podrían tratar de atraer más IED de los principales inversores en energías renovables. Con el 27% de la inversión total, España representa actualmente la principal fuente de IED "greenfield" (es decir, nuevos proyectos en los que una empresa construye sus propias instalaciones operativas partiendo de cero), seguida de cerca por Estados Unidos y Canadá. Las contribuciones de estos tres países combinadas representan el 44% de la IED total en energías renovables.

Sin embargo, los países de ALC tienen una valiosa oportunidad de ampliar en mayor medida las relaciones de inversión con los principales países que invierten en energías renovables fuera de sus fronteras. Países como Australia, Francia, Alemania, Italia e Irlanda representan una parte significativa de los proyectos mundiales de IED en energías renovables, aunque su presencia dentro de la región sigue siendo relativamente pequeña en términos porcentuales. Por ejemplo, Alemania es responsable del 10% de los proyectos mundiales de IED en energías renovables (2003-22), pero solo del 5% en ALC.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (UNEP, 2016[59]); (OECD, 2023[58]).

La heterogeneidad de la IED en energía sigue siendo amplia entre los países de ALC. En Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú, los combustibles fósiles representan entre el 10% y el 50% de toda la IED nueva acumulada desde 2003 y constituyen más del 50% del *stock* de IED en el sector energético (Gráfico 2.18, Panel B). Por otro lado, en Paraguay, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Honduras y Chile, la IED en energías renovables es la que predomina en el sector energético y ha atraído una proporción considerable de la IED total en nuevas instalaciones, abarcando desde el 10% en Paraguay hasta el 30% en Chile. Concretamente en Honduras, prácticamente la totalidad de los proyectos de IED abiertos y anunciados en el sector energético se centran en energías renovables (93%). Cabe señalar que Honduras presenta el nivel más bajo de electrificación rural de las economías de ALC consideradas, por lo que podría beneficiarse de la IED en energías renovables no solo para reducir las emisiones, sino también para cerrar la brecha existente en el acceso a la energía y promover un desarrollo sostenible (OECD, 2023[58]). Además, una IED de calidad podría contribuir al desarrollo en ALC de sectores estratégicos como la energía, la movilidad sostenible, la industria farmacéutica y la agroindustria sostenible (Capítulo 3). Estos sectores tienen el potencial de impulsar una economía más dinámica y resiliente, además de contribuir a impulsar la transición ecológica.

Gráfico 2.18. **Porcentaje de IED en instalaciones totalmente nuevas por tipo de energía en ALC y países seleccionados de la región, 2003-22**



Nota: Este gráfico muestra la cuota de toda la IED en proyectos completamente nuevos abiertos y anunciados en energías renovables y combustibles fósiles como porcentaje de toda la IED realizada en proyectos completamente nuevos en ALC a lo largo del tiempo (Panel A) y por países (Panel B). En el Panel A, ALC está integrada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El Panel B corresponde al total acumulado en 2003-22.

Fuente: (OECD, 2023[58]).

StatLink https://stat.link/3xt4ym

Principales mensajes en materia de políticas

ALC está experimentando niveles de inversión inferiores a los de cualquier otra región en desarrollo. La inversión total como porcentaje del PIB ya estaba disminuyendo antes de la crisis de COVID-19. Tras un pequeño repunte, alcanzó un promedio del 20.4% del PIB en 2022.

Si bien la heterogeneidad es evidente entre los países de ALC, para garantizar una transformación estructural inclusiva y sostenible, la inversión total tendrá que aumentar en todos los sectores estratégicos. Para lograrlo, los gobiernos de la región tendrán que movilizar más y mejor inversión privada y pública. La creación de infraestructura pública de calidad en sectores clave, como el transporte sostenible, las telecomunicaciones y la gestión del agua, puede impulsar el bienestar de los ciudadanos y ayudar a los países de ALC a avanzar hacia los ODS.

Para aumentar los niveles de inversión, los gobiernos en ALC pueden implementar buenas prácticas de gobernanza y utilizar una variedad de estrategias y herramientas de financiamiento. Asociaciones público-privadas bien diseñadas, acompañadas de elementos que permitan reducir riesgos, pueden incentivar al sector privado a invertir en proyectos públicos estratégicos a largo plazo con un alto impacto social. La IED también puede desempeñar un papel estratégico para abordar el déficit de inversión actual. ALC ya atrae mayores sumas de IED que otras regiones en desarrollo y podría aprovechar esta circunstancia para multiplicar la inversión en el futuro. A través de una estrategia dirigida a captar la IED con mayor potencial para compartir conocimientos técnicos, crear empleos de calidad e implantar métodos de producción sostenibles, los gobiernos podrían apoyar los objetivos de una transformación productiva sostenible e inclusiva en ALC. El Recuadro 2.6 presenta las principales recomendaciones en materia de políticas para alcanzar los objetivos descritos a lo largo del capítulo.

Recuadro 2.6. **Principales mensajes en materia de políticas**

Hacia más y mejores inversiones para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo

- Avanzar en la creación de un clima de inversión más favorable mediante una combinación de esfuerzos coordinados en materia de políticas, tal como se describe en el Marco de acción para la inversión de la OCDE. Respecto a la gobernanza pública, destacan cuatro pilares fundamentales: regulación de calidad, transparencia, apertura e integridad.
- Desarrollar series de datos claras y accesibles sobre la inversión en infraestructuras. Esta información debería proporcionar a los encargados de elaborar las políticas el conocimiento y las herramientas que necesitan para diseñar adecuadamente políticas públicas encaminadas a mejorar las inversiones. Asimismo, les permitirá evaluar con mayor acierto las posibles inversiones, por ejemplo, mediante la realización de análisis bien fundados de la relación costo-beneficio. Estas series de datos también permitirían al resto de las partes interesadas conocer mejor quién está desarrollando cada sector.
- Reforzar la colaboración de los gobiernos con el sector privado y el mundo académico para promover en mayor medida bases de datos fiables y accesibles sobre infraestructuras y garantizar un uso eficiente de los recursos ya desplegados.
- Desarrollar marcos que regulen la inversión en infraestructura y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones con el fin de:
  - fomentar un marco regulatorio coherente, predecible y eficiente,
  - fomentar la competencia entre inversores,
  - aportar claridad y transparencia (permitiendo así que los inversores puedan planificar sus inversiones a largo plazo),
  - distribuir claramente las responsabilidades entre las partes implicadas en cada inversión, y
  - lograr regulaciones armonizadas en consonancia con marcos nacionales, regionales e internacionales similares (armonización vertical) y a lo largo de la inversión, el comercio y los sistemas fiscales para impulsar la producción y evitar la evasión fiscal (armonización horizontal).
- Garantizar que la gobernanza de la infraestructura aporte bienestar a los ciudadanos, incluyendo a las partes implicadas en su diseño y ejecución, basando las decisiones en materia de infraestructura en datos fiables y utilizando las tecnologías digitales para facilitar el acceso a la información y la transparencia.
- Adoptar la Recomendación de la OCDE sobre gobernanza de infraestructura para:
  - maximizar el impacto de la inversión en infraestructura sostenible a fin de garantizar su resiliencia a lo largo del tiempo, incluyendo los efectos del incremento de los fenómenos meteorológicos extremos.
  - tomar medidas para incorporar métodos de participación ciudadana que permitan garantizar que la nueva infraestructura sea realmente inclusiva y respetuosa con las comunidades locales y el medioambiente.
- Velar por que las inversiones en transporte promuevan sistemas adecuados, el uso de transporte público sostenible y la movilidad compartida.
- Colaborar estrechamente con las compañías de telecomunicaciones para promover nuevas inversiones. Entre los objetivos clave deben figurar: el fortalecimiento de los sectores, territorios y agentes más débiles y la ayuda para impulsar la absorción tecnológica en la economía; la facilitación de la transformación de modelos de negocios; y la consolidación de la integración en sistemas productivos más dinámicos e innovadores.

Recuadro 2.6. **Principales mensajes en materia de políticas** *(cont.)*

- Garantizar que las inversiones en infraestructura hídrica proporcionen un acceso equitativo e inclusivo al agua potable. Ampliar la red de suministro de agua para asegurar que la cantidad y la calidad del agua potable sean adecuadas. Adaptar las futuras inversiones en infraestructura hídrica para mejorar la resiliencia frente a riesgos futuros como sequías o aumento del nivel del mar.

Hacia marcos sólidos de asociación público-privada (APP)

- Mejorar el marco regulatorio de las APP (p. ej., con normas exhaustivas para la selección de proyectos, la asignación de riesgos y la gestión de contratos) y fortalecer las capacidades técnicas en su diseño, implementación y supervisión para evitar costosas renegociaciones y garantizar su éxito.
- Crear un entorno de inversión previsible y transparente que refuerce la confianza de los inversores y maximice el impacto socioeconómico y medioambiental de las APP.
- Permitir una participación ciudadana eficiente y eficaz en el proceso de toma de decisiones para fomentar el sentido de pertenencia y una mayor responsabilidad, lo que a su vez podría ayudar a evitar conflictos sociales en el transcurso de los proyectos.
- Promover asociaciones público-privadas sostenibles y diversificadas con el objetivo de alcanzar un desarrollo equilibrado en todos los sectores y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Los gobiernos deberían abogar por incorporar evaluaciones integrales del impacto ambiental en la planificación de las APP.

Hacia la atracción de IED de calidad para impulsar sectores estratégicos

- Coordinar los esfuerzos para promover la inversión en sectores productivos bien identificados, entre los que destaca la energía renovable, y así mejorar la contribución de la IED al desarrollo inclusivo y sostenible en ALC.
- Canalizar la IED de tal forma que genere empleos de calidad y respalde el desarrollo de competencias. Para ello, es necesario recabar información sobre la operativa de las empresas extranjeras, así como sobre las necesidades en materia de cualificaciones, con el fin de poner en marcha mecanismos de previsión de competencias, programas de formación y políticas amplias a favor de la competencia que aumenten los beneficios potenciales para el mercado laboral.
- Concebir políticas acertadas de fomento de la inversión, asegurando la coordinación entre las instituciones públicas a nivel nacional y subnacional en el marco de las políticas de desarrollo productivo.
- Implicar a las pymes en el proceso, haciéndolas partícipes en los acuerdos internacionales, prestándoles asistencia técnica y financiera y fomentando las conexiones intersectoriales para crear vínculos empresariales.

Notas

1. Esta cifra de ALC incluye 30 países con datos disponibles: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.
2. México no está incluido. Los países incluidos son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

3. A la hora de identificar el origen de la inversión en la región, existen diferentes fuentes de información. Fuentes como fDi Markets y Thomson Reuters se basan en las transacciones y, por tanto, tienen en consideración el destino final de las inversiones. En cambio, las cifras oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) no tienen en cuenta el destino final. Esta diferencia puede causar grandes discrepancias, en particular en la región de ALC, ya que muchas islas del Caribe se consideran centros financieros extraterritoriales (CFE) (Ding et al., 2021[60]). Por ejemplo, China no parece especialmente relevante cuando se examinan las fuentes oficiales, ya que las inversiones se canalizan a través de CFE. En 2019, los datos oficiales indicaron una contribución de Asia a la IED total en ALC del 4%. Sin embargo, al incorporar los CFE en el cálculo del *stock* de IED de Asia en ALC, en particular la procedente de China, esta cifra aumentó hasta el 31%. Ese mismo año, un total de 4 300 millones de USD —de los 6 400 millones de USD que entraron en forma de IED en ALC procedentes de China— se registraron como CFE, que no eran el destino final de la inversión (Ding et al., 2021[60]).

Referencias

Atlantic Council (2023), *Unlocking Economic Development in Latin America and the Caribbean: Five Opportunities for Private-Sector Leadership and Partnership*, Atlantic Council, Washington, DC, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2023/06/AALAC_IDB_Report_060823_complete.pdf. [25]

Bitrán, E., S. Nieto Parra y J. Robledo (2013), "Opening the black box of contract renegotiations: An analysis of road concessions in Chile, Colombia and Peru", *OECD Development Centre Working Papers*, No. 317, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k46n3wwxxq3-en. [41]

CAF (2021), *Pathways to Integration: Trade Facilitation, Infrastructure and Global Value Chains*, Development Bank of Latin America (CAF), Caracas, https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1823. [18]

CAF (2018), *Public-Private Partnership in Latin America. Facing the Challenge of Connecting and Improving Cities*, Development Bank of Latin America (CAF), Bogota, https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1549/Public-Private_Partnership_in_Latin_America._Facing_the_challenge_of_connecting_and_improving_cities..pdf. [42]

Ding, D. et al. (2021), "Chinese investment in Latin America: Sectoral complementarity and the impact of China's rebalancing", *IMF Working Papers*, No. 160, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/06/07/Chinese-Investment-in-Latin-America-Sectoral-Complementarity-and-the-Impact-of-Chinas-50217. [60]

ECLAC (2023), "CEPALSTAT", *Foreign direct investment (FDI) inflows*, https://agenda2030lac.org/estadisticas/regional-data-bank-statistical-follow-up-sdg-1.html?indicator_id=4231&lang=en (accessed on 5 September 2023). [50]

ECLAC (2023), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2023*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48979-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2023. [49]

ECLAC (2022), *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2022: Trends and Challenges of Investing for a Sustainable and Inclusive Recovery*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48078/7/S2201057_en.pdf. [11]

ECLAC (2022), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2022*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48521/3/S2200561_en.pdf. [53]

ECLAC (2022), *Redes 5G en América Latina: Desarrollo y potencialidades*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48485. [26]

ECLAC (2021), *"Digital technologies for a new future"*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://repositorio.cepal.org/handle/11362/46817. [27]

ECLAC (2020), *"Public-private partnerships under the 'people-first' approach"*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46538/1/S2000676_en.pdf. [45]

ECLAC (2019), *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019: El adverso contexto mundial profundiza el rezago de la región*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/44918-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2019-adverso-contexto. [19]

ECLAC (2018), *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2018*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/43965-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2018-evolution-investment-latin. [13]

ECLAC (2012), *"Public-private partnerships in renewable energy in Latin America and the Caribbean"*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/4016-public-private-partnerships-renewable-energy-latin-america-and-caribbean. [7]

ECLAC (2004), *"La inversión para la provisión de servicios públicos y su financiamiento en América Latina y el Caribe: evolución reciente, situación actual y políticas"*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5396. [8]

Economist Impact (2022), *"Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2021/22 Infrascope"*, Economist Impact, New York, https://infrascope.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/04/EIU_INFRASCOPE_2021_12.pdf. [40]

Eichengreen, B. (2010), *GGGG Lessons from the Marshall Plan*, https://documents1.worldbank.org/curated/. [51]

EIU (2019), *"Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2019 Infrascope"*, The Economist Intelligence Unit, New York, https://infrascope.eiu.com/wp-content/uploads/2019/04/EIU_2019-IDB-Infrascope-Report_FINAL-1.pdf. [39]

Engel, E., R. Fischer y A. Galetovic (2021), *"When and how to use public-private partnerships in infrastructure: Lessons from the international experience"*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, https://www.nber.org/papers/w26766. [43]

European Commission et al. (2008), *System of National Accounts 2008*, European Communities, IMF, OECD, UN, WB, New York, https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf. [3]

fDi Markets (2023), *fDi Markets*, https://www.fdimarkets.com/. [52]

IDB (2023), *Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe: una perspectiva económico-financiera*, Inter-American Development Bank, Washington, DC. [23]

IDB (2022), *Informe anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha: Brecha digital en América Latina y el Caribe*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0004379. [24]

IDB (2022), *Sustainable Financing of Economic and Social Infrastructure in Latin America and the Caribbean: Trends, Key Agents and Instruments*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Sustainable-Financing-of-Economic-and-Social-Infrastructure-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Trends-Key-Agents-and-Instruments.pdf. [46]

IDB (2022), *Water access in Latin America and the Caribbean: Definitions and data*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0004493. [28]

IDB (2021), *The Infrastructure Gap in Latin America and the Caribbean: Investment Needed Through 2030 to Meet the Sustainable Development Goals*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/en/infrastructure-gap-latin-america-and-caribbean-investment-needed-through-2030-meet-sustainable. [16]

IMF (2023), *World Economic Outlook Database*, International Monetary Fund, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/weo-report (consultado el 5 de septiembre de 2023). [10]

IMF (2022), *Investment and Capital Stock Dataset*, International Monetary Fund, Washington, DC, https://data.imf.org/?sk=1CE8A55F-CFA7-4BC0-BCE2-256EE65AC0E4&sId=1390030341854 (consultado el 5 de septiembre de 2023). [12]

INEGI (2023), *Recomendaciones para la Generación de Información sobre Infraestructura en México*, National Institute of Statistics and Geography (INEGI), Aguascalientes, https://www.inegi.org.mx/infraestructura/modelos/. [32]

Infralatam (2022), *Data on Public Investment in Economic Infrastructure in Latin America and the Caribbean (database)*, http://infralatam.info/en/home/ (consultado el 5 de septiembre de 2023). [15]

ITF y IADB (2022), *Decarbonising Transport in Latin American Cities. A Review of Policies and Key Challenges*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Decarbonising-Transport-in-Latin-American-Cities-A-Review-of-Policies-and-Key-Challenges.pdf. [20]

OECD (2023), *"Investment (GFCF)" (indicator)*, https://doi.org/10.1787/b6793677 (consultado el 24 de agosto de 2023). [2]

OECD (2023), *FDI Qualities Review of Chile: Boosting Sustainable Development and Diversification*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/98bf1829-en. [54]

OECD (2023), *Harnessing the Potential of Foreign Direct Investment to Advance the Low-Carbon Transition in Latin American and the Caribbean*, OECD Publishing, Paris, https://cdn-assets.inwink.com/fd64104f-b9d5-4759-8902-1297bb45b3fd/1273a7fb-265d-4e58-887e-897c1a3558f0?sv=2018-03-28&sr=b&sig=wu2bSRlRz0J6ghha5%2B2CWMHH42Q4Wl1KS8SePRbuIXs%3D&se=9999-12-31T23:59:59Z&sp=r&rscd=inline%3B%20filename%3D%22ENG-LAC-backgroundn. [58]

OECD (2023), *OECD Foreign direct investment (FDI)*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9a523b18-en. [9]

OECD (2022), *FDI Qualities Indicators 2022*, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/investment/FDI-Qualities-Indicators-Measuring-Sustainable-Development-Impacts.pdf. [56]

OECD (2022), *FDI Qualities Policy Toolkit*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/fdi-qualities-policy-toolkit_7ba74100-en. [1]

OECD (2021), *OECD Implementation Handbook for Quality Infrastructure Investment*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/finance/oecd-implementation-handbook-for-quality-infrastructure-investment.htm. [6]

OECD (2020), *"Recommendation of the Council on the Governance of Infrastructure", OECD Legal Instruments*, OECD Publishing, Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0460. [33]

OECD (2020), *OECD Compendium of Policy Good Practices for Quality Infrastructure Investment*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/finance/OECD-compendium-of-policy-good-practices-for-quality-infrastructure-investment.pdf. [14]

OECD (2019), *Effective Public Investment Across Levels of Government: Implementing the OECD Principles*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/OECD_Public_Investment_Implementation_Brochure_2019.pdf. [4]

OECD (2019), *Enhancing Access to and Sharing of Data: Reconciling Risks and Benefits for Data Re-use across Societies*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/276aaca8-en. [31]

OECD (2019), *FDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development*, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm. [55]

OECD (2015), *Policy Framework for Investment, 2015 Edition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264208667-en. [5]

OECD (2015), *Recommendation of the Council on Public Procurement*, OECD Publishing, Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0411. [30]

OECD (2012), *Water Governance for Latin America and the Caribbean: A Multi-level approach. OECD Studies on Water*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264174542-en. [29]

OECD (2009), *Private Sector Participation in Water Infrastructure: OECD Checklist for Public Action*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/env/resources/42350657.pdf. [38]

OECD (2008), *Conducting Sustainability Assessments*, OECD Sustainable Development Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264047266-en. [48]

OECD y IDB (2016), *Broadband Policies for Latin America and the Caribbean: A Digital Economy*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264251823-en. [21]

OECD et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a Green and Just Transition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en. [17]

OECD et al. (2021), *Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en. [57]

OECD et al. (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en. [22]

UNEP (2016), *Carbono cero América Latina: Una Vía para la Descarbonización Neta de la Economía Regional Para Mediados de Este Siglo - Documento de Visión*, https://wedocs.unep.org/20.500.11822/26305. [59]

World Bank (2023), *"World Development Indicators" (database)*, World Bank Group, Washington, DC, https://data.worldbank.org/indicator (consultado el 5 de septiembre de 2023). [36]

World Bank (2023), *Private participation in infrastructure (database)*, World Bank Group, Washington, DC, https://ppi.worldbank.org/en/customquery (consultado el 5 de septiembre de 2023). [35]

World Bank (2022), *Private Participation in Infrastructure (PPI): 2022 Annual Report*, World Bank Group, Washington, DC, https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI-2022-Annual-Report.pdf. [47]

World Bank (2021), *Private Participation in Infrastructure: 2021 Annual Report*, World Bank Group, Washington, DC, https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI-2021-Annual-Report.pdf. [34]

World Bank (2019), *A Guide to Community Engagement for Public-Private Partnerships: Draft for Discussion*, World Bank Group, Washington, DC, https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/guide-community-engagement-public-private-partnerships-june-2019. [44]

World Bank (2016), *Public and private paths to sustainable water supply and sanitation in Colombia*, World Bank Group, Washington, DC, https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/ppar_colombia_01132017.pdf. [37]

Anexo 2.A. Anexo metodológico

Gráfico 2.2. Inversión total como % del PIB en países seleccionados de ALC, 2022

En cuanto a la serie de datos sobre inversión y *stock* de capital (IMF, 2022[12]): la inversión pública se mide utilizando la formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas (es decir, la administración central más las administraciones subnacionales). Este enfoque no incluye: i) subvenciones a la inversión, que son transferencias de las administraciones centrales y/o subnacionales a entidades públicas y privadas ajenas a las administraciones públicas con el objetivo de apoyar la inversión en activos fijos; ii) avales de préstamos; iii) desgravaciones fiscales, por ejemplo, de los intereses hipotecarios, la I+D y los bonos municipales; iv) las operaciones de instituciones financieras públicas, como los bancos de desarrollo, que proporcionan financiamiento a largo plazo a tipos subvencionados; y v) los regímenes de ahorro con respaldo público.

Las estadísticas de los países de la OCDE proceden de la versión de diciembre de 2020 de las Perspectivas Económicas de la OCDE. En concreto, las series extraídas (en moneda nacional y precios constantes) comprenden la FBCF de las administraciones públicas y la FBCF total.

Gráfico 2.5. Inversión pública en infraestructura en ALC, en porcentaje del PIB, Panel B

Argentina: Los datos incluyen la inversión realizada por la administración central, las administraciones subnacionales y las empresas públicas. Sin embargo, en las inversiones subnacionales solo se registran las inversiones llevadas a cabo con fondos transferidos desde la administración central. Los datos de la administración central incluyen la inversión directa real de la administración pública nacional, los anticipos a proveedores a largo plazo (proyectos de inversión prioritarios) y las transferencias de capital (excluidas las transferencias de capital a empresas y a instituciones provinciales y municipales). Los datos de las administraciones subnacionales incluyen las transferencias de capital a instituciones provinciales y municipales. Se excluye el gasto en inversión financiado con recursos recaudados por las provincias y los municipios.

Chile: No se incluyen las inversiones efectuadas en el marco del programa de concesiones de infraestructuras.

El Salvador: En los datos sobre agua y saneamiento se incluyen las empresas públicas no financieras y una parte de las administraciones locales. No existen datos sobre inversiones en agua y saneamiento ejecutadas por la administración central y por instituciones descentralizadas no empresariales.

Guatemala: No se incluyen las inversiones subnacionales; dado que las administraciones locales informan de las inversiones totales, sin establecer ninguna distinción, no es posible identificar las inversiones correspondientes a los sectores de infraestructuras.

Honduras: A partir de 2018, en "transporte total" se incluye la categoría "transporte y obras públicas". "Energía total" para 2020 y 2021 comprende las energías renovables, y es posible que los datos de 2019 las incluyan. En cuanto a las inversiones subnacionales, solo se incluyen las inversiones realizadas por la alcaldía de Tegucigalpa en los años 2011, 2012 y 2013. No se dispone de datos para 2008, 2009 y 2010, ni para otras administraciones subnacionales.

Panamá: Se incluye la inversión realizada por la Autoridad del Canal de Panamá.

República Dominicana: Datos desde 2009. Las estadísticas de "agua y saneamiento" de 2009 a 2015 cubren únicamente el saneamiento (gestión de aguas residuales, drenaje

y alcantarillado). En los datos de transporte de 2016, el total es mayor que la suma de sus partes porque contiene una categoría adicional denominada "planificación, gestión y supervisión del transporte".

Uruguay: Los datos de las administraciones subnacionales o departamentales solo incluyen el transporte; dentro de esta categoría, únicamente se recoge el transporte por carretera (es decir, no se tiene en cuenta la infraestructura viaria urbana).

Las estadísticas disponibles proceden de distintos países, según el sector y el año. Por ejemplo, los cálculos correspondientes al Gráfico 2.5, Panel B, para 2021 incluyen:

	Energía	Telecomunicaciones
2021	Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.	Argentina, Belice, Bolivia, Trinidad y Tobago y Uruguay
	Transporte	**Agua**
2021	Argentina, Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.	Argentina, Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Capítulo 3

Hacia una nueva estructura de producción y empleo: el rol de la inversión

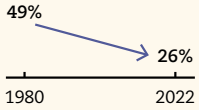
Incrementar y mejorar las inversiones podría ayudar a transformar la estructura productiva de América Latina y el Caribe (ALC), para avanzar en un modelo de desarrollo más sostenible y justo que cree empleo formal de calidad. En este capítulo se analiza la estructura de producción actual de la región, se examina las dinámicas del mercado laboral, la importancia de avanzar en un programa de inversión renovado para crear empleo formal, así como el rol del talento humano en la transformación productiva. Por último, se identifican sectores estratégicos para impulsar la inversión y promover un desarrollo sostenible. El capítulo concluye con los principales mensajes en materia de políticas.

ALC necesita más inversiones estratégicas para transformar sus estructuras de producción y de empleo

La región debería repensar su modelo de transformación productiva

Brecha de productividad laboral

Productividad laboral de ALC respecto de Estados Unidos



Brecha manufacturera

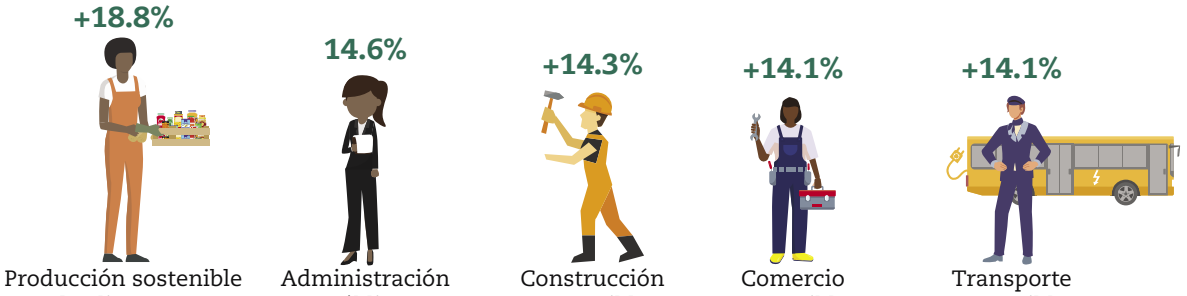
En 2021, en ALC la participación del sector manufacturero en el total de la economía cayó al **13.2% del PIB**

Brecha de innovación

La inversión en I+D en ALC se ha estancado en alrededor de **0.65%** del PIB, representando solo el **2.3%** del total global

La inversión en sectores verdes y digitales puede crear empleos de mejor calidad y aumentar el dinamismo

Sectores verdes con el mayor potencial de creación de empleo para 2030 en ALC



Sectores estratégicos para inversiones públicas y privadas que impulsen el desarrollo sostenible

Transición verde

- Transición energética
- Economía circular
- Gestión sostenible del agua
- Electromovilidad
- Turismo sostenible

Transformación digital

- Economía digital
- Exportación de servicios modernos
- Manufactura avanzada

Salud y economía del cuidado

- Industria farmacéutica y de dispositivos médicos
- Sociedad del cuidado

Sistemas sostenibles de agricultura y produccción de alimentos

- Bioeconomía
- Producción sostenible de alimentos

Introducción

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) se enfrentan al reto de mejorar la estructura de producción para aumentar la productividad, generar oportunidades laborales de calidad y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo.

En este contexto, la región necesita emprender acciones estratégicas para reducir las brechas en materia de capital humano y estándares tecnológicos y de producción que presenta con respecto a las economías más avanzadas (ECLAC, 2022[1]). Estas acciones deben tener por objetivo mejorar y diversificar la economía, y engloban diversos factores, entre ellos: i) modificar la producción y la prestación de servicios pasando de actividades que requieren un bajo nivel de conocimientos a otras que exigen una mayor cualificación, para promover un cambio transformador que impulse el crecimiento económico (OECD, 2016[2]); ii) crear nuevas fuentes de dinamismo para mejorar el modelo de desarrollo, con una distribución más justa de los ingresos, al tiempo que se minimiza el impacto ambiental y mejora la calidad de vida (ECLAC, 1996[3]); y iii) crear mejores empleos por medio de la colaboración entre los gobiernos, las empresas y las personas (CAF, 2014[4]).

Entre dichas acciones, promover y facilitar la inversión, ya sea de origen interno o externo, en capital físico, conocimientos e innovación, puede constituir un factor fundamental para impulsar la transformación productiva. La inversión puede incrementar el dinamismo —a través del crecimiento de la productividad, la mejora tecnológica, el establecimiento de vínculos o eslabonamientos entre proveedores y producción, así como el desarrollo territorial, el capital humano y la creación de empleo formal— de maneras ambientalmente más sostenibles. Son importantes tanto la magnitud de la inversión como las cuestiones prioritarias en las que se centre.

En ALC, el alto nivel de empleo informal supone un desafío para que los gobiernos puedan aumentar la inversión y rediseñar su estructura de producción (Capítulo 1). En este contexto, la educación y la capacitación técnica resultan especialmente relevantes, puesto que pueden dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para aprovechar las ventajas asociadas a la incorporación de tecnologías más avanzadas en diferentes actividades y sectores económicos.

La mejora de la estructura productiva debería basarse en un conjunto integral de políticas a nivel nacional y local, capaz de abordar todas las dimensiones diferentes e interrelacionadas del desarrollo productivo. Dichas políticas deben ir encaminadas a mejorar, en particular, la adopción de tecnología y la innovación; el desarrollo de las cadenas de suministro; la diversificación de las capacidades de producción; la promoción de las exportaciones; la incorporación de las empresas informales al sector formal; y el desarrollo de talento humano.

El sector público debería desempeñar un rol activo a la hora de facilitar la transformación de la producción —en coordinación con el sector privado, la comunidad académica y la sociedad civil— identificando y dando prioridad a sectores y ámbitos estratégicos con mayor intensidad tecnológica y mayor potencial de aprendizaje, innovación y expansión del mercado, además de priorizar también los retos sociales. Las transformaciones que están teniendo lugar en todo el mundo están generando nuevas oportunidades, por lo que es necesario adaptar las transformaciones de los métodos de producción para aprovechar el potencial de la transición verde y la transformación digital, las crecientes demandas de atención en salud y la necesidad de garantizar un suministro de alimentos sostenible (ECLAC, 2022[1]; ECLAC, 2020[5]; OECD et al., 2021[6]; OECD et al., 2022[7]).

Este capítulo consta de cinco secciones. La primera sección analiza los retos de la región en materia de productividad, puesto que es el eje central de la transformación

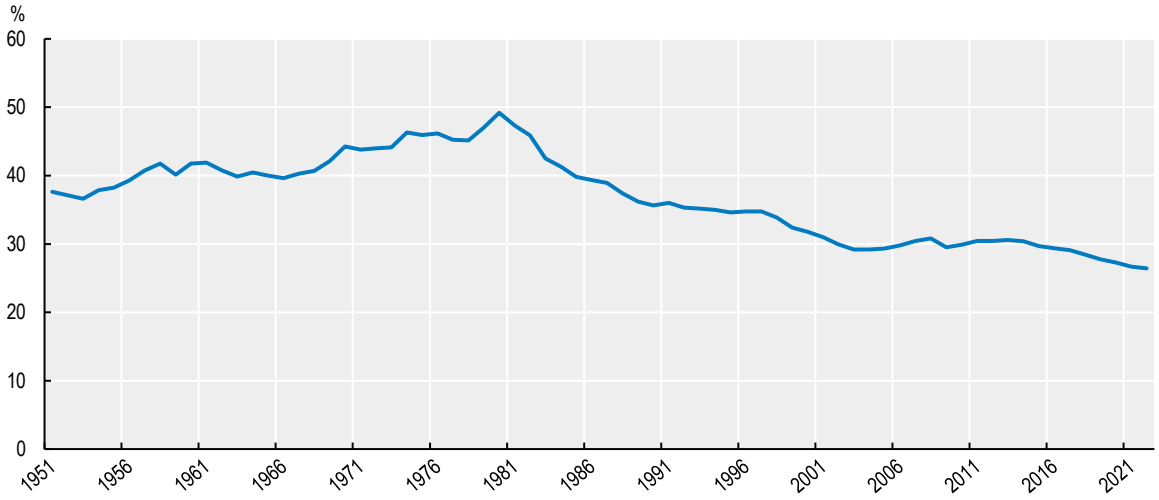
productiva y sigue siendo un factor fundamental para impulsar la creación de empleo de calidad. La segunda profundiza en mayor medida el análisis de la estructura productiva de la región, para identificar los principales retos y oportunidades, y hacer hincapié en el rol de la inversión para impulsar la transformación productiva. La tercera examina la dinámica de los mercados laborales de ALC, subrayando la importancia de aumentar la formalización del empleo y reducir las brechas en materia de educación y habilidades, lo que exigirá más inversiones. La cuarta sección identifica sectores estratégicos con potencial para promover el desarrollo sostenible y que muestran oportunidades de inversión en la región. El capítulo concluye con los principales mensajes en materia de políticas.

Impulsar la productividad, un reto persistente en ALC

Durante varias décadas, los países de ALC han experimentado un escaso crecimiento agregado de la productividad. El crecimiento potencial del PIB per cápita ha sido inferior al 1% desde 1980, con un ligero aumento durante el período de auge de las materias primas (de 2003 a 2013). Desde entonces, el crecimiento potencial del PIB per cápita se ha estancado y se ha mantenido sistemáticamente por debajo del nivel registrado en las economías avanzadas, lo que ha dificultado la convergencia de los ingresos per cápita (Capítulo 1) (OECD et al., 2022[7]; OECD et al., 2021[6]; OECD et al., 2020[8]).

Las economías de ALC muestran comparativamente una brecha de productividad cada vez más amplia con respecto a las economías avanzadas. Por ejemplo, la diferencia de productividad con respecto a Estados Unidos ha ido en aumento en las últimas décadas (Gráfico 3.1). Esta situación no puede atribuirse a variaciones en el uso del capital humano en el proceso de producción, ya que el promedio de horas que los trabajadores dedican a dicho proceso es, en realidad, superior en la región de ALC.

Gráfico 3.1. **Productividad laboral en los países de ALC en relación con Estados Unidos, 1951-2022**



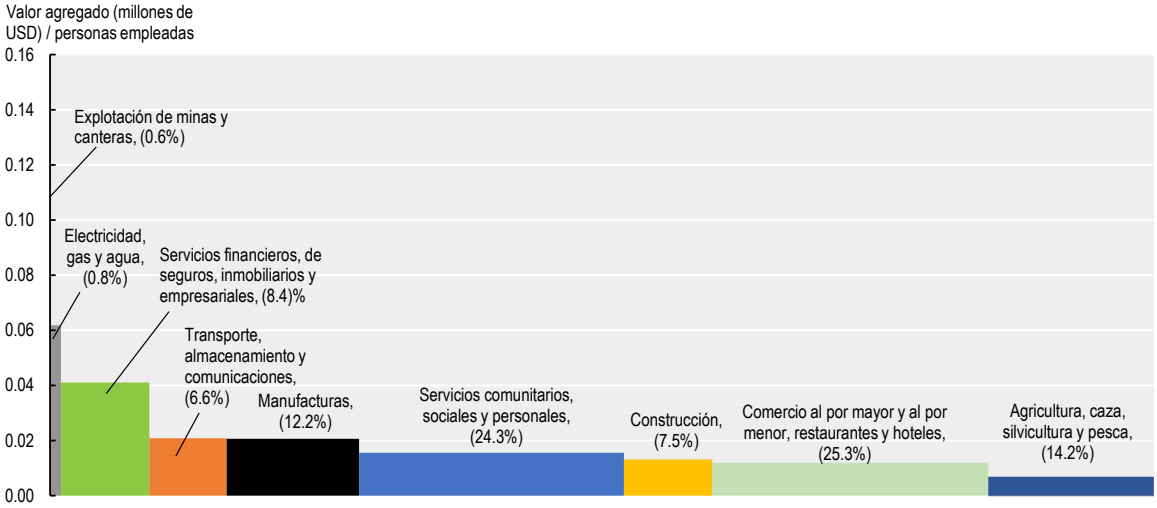
Fuente: Elaboración de los autores a partir de (The Conference Board, 2023[9]).

StatLink https://stat.link/32mrkp

En los países de ALC que poseen datos comparables, la variación de la producción laboral a nivel sectorial ha sido evidente desde la década de los noventa. La productividad agrícola se ha duplicado, mientras que su incremento en el sector industrial ha seguido la misma tendencia que la productividad agregada de las economías de ALC, al aumentar un 60%

(LA-KLEMS, 2021[10]). Los sectores con menores incrementos son el minero, el de servicios financieros y empresariales, y el del comercio. Pese a la mejora de la productividad en algunos sectores, siguen existiendo altos niveles de heterogeneidad, pues incluso aquellos en los que se observa un crecimiento (p. ej., el de la agricultura, silvicultura y pesca), este suele partir de niveles bajos de valor agregado por persona empleada —habitualmente bastante inferiores a los registrados en países más desarrollados (Gráfico 3.2)—. Estas diferencias de productividad son especialmente marcadas en sectores intensivos en mano de obra, lo que explica la brecha en cuanto a productividad laboral promedio entre ALC y las economías desarrolladas.

Gráfico 3.2. **Productividad laboral y participación en el empleo en ALC, por sectores económicos principales, 2021**



Nota: Los datos del eje vertical se refieren a la productividad laboral por persona empleada. En el eje horizontal, los datos se refieren a la participación en el empleo de las principales industrias, definidas de acuerdo con la clasificación CIIU, Rev.3. Los sectores se clasifican de acuerdo con el nivel de productividad correspondiente (de mayor a menor). Los datos que aparecen en las etiquetas se refieren al porcentaje de empleo en cada sector.

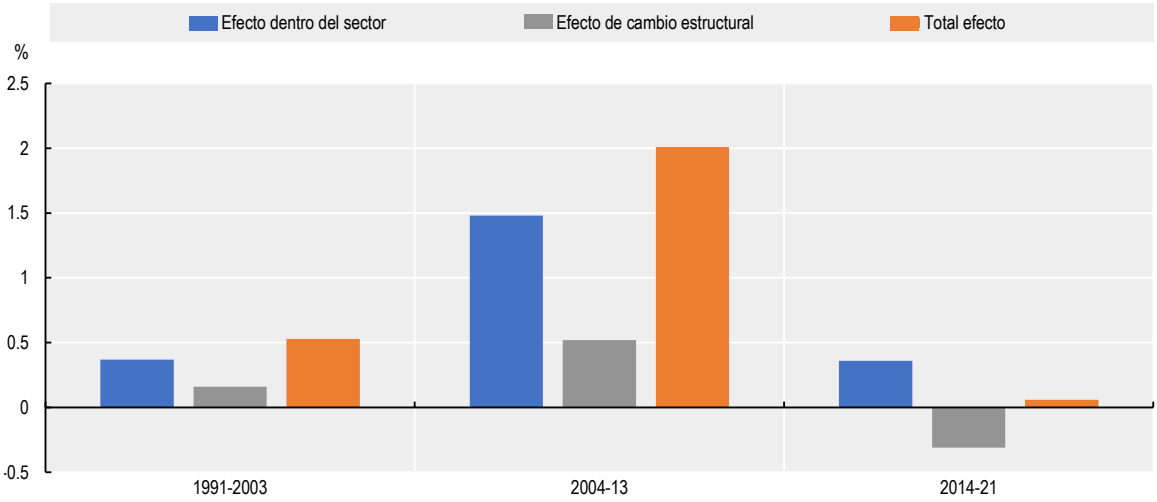
Fuente: Estimaciones de la CEPAL a partir de datos de las oficinas nacionales de estadística.

StatLink https://stat.link/erzjvw

En ALC, una medida que ha logrado impulsar la productividad han sido las mejoras intersectoriales, pero no la reasignación de recursos. El traslado de recursos a sectores con una mayor productividad ("efecto de cambio estructural") suele llevar aparejado un aumento del crecimiento; sin embargo, en el caso de ALC, hasta el momento no ha sido así (Gráfico 3.3). El crecimiento de la productividad de ALC se ha visto impulsado, en cambio, por el aumento de la productividad sectorial ("efecto dentro de los sectores") mediante incrementos del capital físico o humano, cambios tecnológicos o el cierre de empresas con baja productividad y la apertura de otras eficientes. Lo ideal es que las mejoras intersectoriales y la reasignación de recursos vayan de la mano. Por lo tanto, estimular el crecimiento de la productividad mediante la reasignación de recursos sigue constituyendo una oportunidad relevante en la región (CAF, 2018[11]; ECLAC y ILO, 2022[12]).

Gráfico 3.3. **Desglose del crecimiento de la productividad laboral en países de ALC, 1991-2021**

Promedio no ponderado de 18 países de ALC



Nota: Los datos se refieren a un promedio no ponderado de datos procedentes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Fuente: (ECLAC y ILO, 2022[12]).

StatLink https://stat.link/l65sgy

Se necesita un complejo conjunto de políticas para promover el aumento de la productividad tanto dentro de los sectores como entre estos. Para ello, han de reforzarse las instituciones que configuran el entorno productivo de las empresas (independientemente de los sectores en los que operen) (CAF, 2018[11]). Asimismo, deben armonizarse los incentivos y las señales de rentabilidad para poder redirigir las inversiones hacia sectores que se beneficien de un mayor dinamismo tecnológico y de mercado, así como de potencial de innovación (ECLAC, 2020[5]; ECLAC, 2022[1]). Para que estas políticas influyan positivamente en el crecimiento económico y la productividad, deben complementarse con otras destinadas a reforzar las capacidades locales esenciales para la inversión.

Análisis de la estructura productiva de ALC

Los sectores y las actividades en los que se concentran la producción y las exportaciones de un país son factores fundamentales de su modelo de desarrollo, al determinar diferentes sendas de crecimiento. Cuando predominan los sectores con una elevada productividad e intensivos en el uso de tecnología, se generan más eficiencias en materia de desarrollo tecnológico, aprendizaje y efectos positivos indirectos en otros sectores (ECLAC, 2022[1]). Cuando los sectores forman parte de un mercado internacional en expansión, también impulsan la demanda de mano de obra cualificada y puestos de trabajo mejor remunerados (ECLAC, 2022[1]).

La competitividad de la mayoría de los países de ALC se ha basado tradicionalmente en recursos naturales y mano de obra poco cualificada. Estos factores han dado lugar a una industrialización incompleta y son la razón de un estancamiento de las ventajas comparativas. Es lo que se conoce como "competitividad espuria", frente a una "competitividad auténtica", que se basa en la tecnología y la innovación que ofrece ventajas competitivas dinámicas (Fajnzylber, 1983[13]). La región ha hecho ciertos progresos en cuanto a digitalización y modernización de la producción. Si ALC avanza hacia un modelo basado en la generación y adopción de tecnología y en la innovación, debería conseguir

altos niveles de competitividad y poder garantizar un crecimiento que sea compatible con una mejor distribución de los ingresos y protección del medioambiente.

La heterogeneidad estructural es otra característica fundamental de la región de ALC, reflejada en los significativos diferenciales de productividad que existen tanto entre los distintos sectores como dentro de estos: sectores muy dinámicos y con una elevada productividad que generalmente se orientan a la exportación coexisten con otros menos dinámicos y con altas tasas de informalidad. La heterogeneidad general de la productividad también es patente a nivel subnacional. La dificultad para lograr una mayor convergencia no solo radica en la baja intensidad tecnológica de la producción, sino también en los insuficientes vínculos o eslabonamientos entre los sectores, las empresas y los territorios, y en la escasa capacidad para trasladar el progreso técnico en ramas de producción de recursos naturales al conjunto de la estructura productiva (OECD, 2016[2]). Estas características condicionan la frágil inserción de ALC en las cadenas de valor mundiales, agravan las limitaciones externas e incrementan la vulnerabilidad ante perturbaciones externas (Capítulo 1). El nearshoring puede contribuir a una mayor integración de ALC en las cadenas de valor mundiales mediante la reubicación de las inversiones en las cadenas de producción mundiales en lugares geográficos más cercanos. Cuando es aplicado eficazmente, puede ayudar a reducir las diferencias de productividad, promover vínculos entre sectores y territorios y fomentar un panorama económico regional más dinámico e interconectado.

Las tendencias de la producción y las exportaciones presentan elementos específicos importantes a nivel subregional en ALC. En América del Sur, predomina la producción vinculada a los recursos naturales y las actividades primarias, y está en constante crecimiento. En América Central y México hay una mayor concentración en el sector manufacturero, las manufacturas por contrato y las industrias de exportación de servicios. El Caribe, por su parte, depende de los recursos naturales en sectores que van desde el manufacturero al turístico (ECLAC, 2022[1]).

Los aspectos transversales serán fundamentales para avanzar de manera efectiva en estrategias sectoriales y conseguir promover la inversión en ALC. Las estrategias sectoriales deberían alinearse con aspectos horizontales globales, así como con implicaciones intersectoriales tales como los marcos institucionales, herramientas analíticas sólidas y respuestas políticas coordinadas (Capítulos 2 y 4) (CAF, 2018[11]).

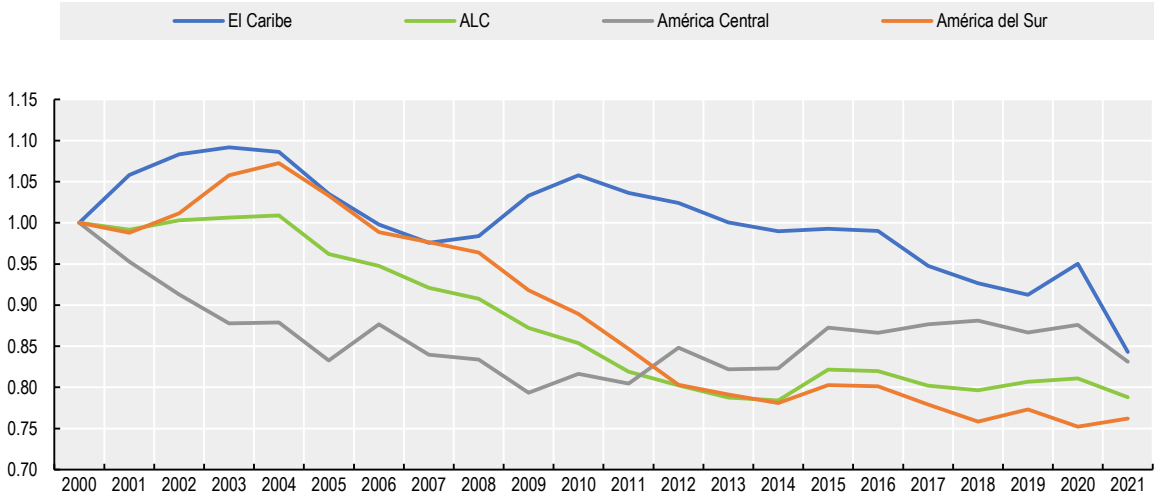
El sector manufacturero pierde terreno en ALC al tiempo que aumenta el dinamismo de los servicios

El sector manufacturero sigue siendo pertinente para el crecimiento a largo plazo de la región de ALC, ya que puede propiciar un rápido aumento de la productividad, generar empleo de calidad y ser una fuente de innovación y propagación de los conocimientos técnicos a toda la economía. Su importancia se debe además a su significativa complementariedad con el sector agrícola y el sector de los servicios. Las medidas destinadas a reforzar estas conexiones son un paso crucial para generar efectos indirectos de índole tecnológica, así como vínculos o eslabonamientos regresivos y progresivos en las cadenas de valor (ECLAC, 2008[14]).

Sin embargo, la importancia relativa del sector manufacturero en la economía regional ha ido disminuyendo. En ALC, el porcentaje que este sector representa en el PIB cayó al 13.2% en 2021, su nivel más bajo de las dos últimas décadas (Gráfico 3.4). Este descenso se ha debido principalmente a una disminución gradual del peso relativo de la industria manufacturera en países de América del Sur, en los que se ha producido una mayor especialización en actividades primarias. Al mismo tiempo, el sector de los servicios ha ganado importancia relativa en la configuración del PIB de la mayoría de los países de ALC.

Gráfico 3.4. **Variación del porcentaje que representa el sector manufacturero, subregiones de ALC, 2000-21**

Índice de valor agregado del sector manufacturero como porcentaje del PIB, año de referencia 2000 = 1



Nota: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Antillas Neerlandesas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Sint Maarten (parte holandesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Fuente: (ECLAC, 2023[15]).

StatLink https://stat.link/zbad89

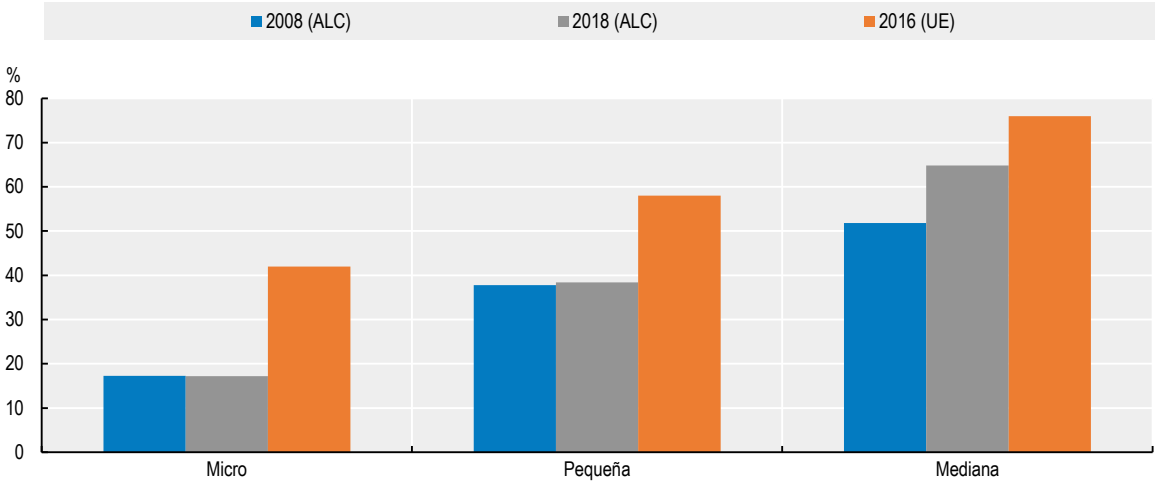
La inversión extranjera directa (IED) en el sector manufacturero ha descendido del 40% en el período 2010-19 al 23% en 2021, mientras que las entradas de IED en el sector de los servicios han aumentado (ECLAC, 2022[16]). La correlación entre las entradas de capital extranjero y los resultados de un sector determinado demuestra la importancia de una visión integrada de los procesos de cambio estructural y de atracción y asignación de inversiones. Para promover sectores y actividades más sofisticados desde el punto de vista tecnológico, así como industrias con una demanda mundial creciente, las políticas de ALC en materia de atracción y asignación de inversiones deben estar en consonancia con dicho objetivo (ECLAC, 2022[16]).

Reducir las brechas productivas y territoriales de la región es fundamental para un mejor desarrollo

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) juegan un rol esencial en las economías de ALC, al representar un 99% de las empresas formales y un 66% del empleo formal (Dini y Stumpo, 2020[17]). La diferencia entre la productividad laboral de las empresas formales más pequeñas y la de las más grandes es, sin embargo, más sustancial en ALC que en las regiones desarrolladas (Gráfico 3.5). En 2018, la productividad laboral de las medianas empresas de ALC fue tan solo un 65% de la registrada por las grandes empresas, y los niveles fueron aún más bajos en el caso de las pequeñas empresas (38%) y las microempresas (17%). Los diferenciales son más pronunciados cuando se compara la productividad de las empresas de los países seleccionados: la productividad de las microempresas de Brasil, por ejemplo, representa un 4% de la registrada por las grandes empresas, frente a un 74% en Francia (OECD et al., 2020[8]).

Gráfico 3.5. **Productividad laboral en relación con las grandes empresas, por tamaño de empresa, ALC y Unión Europea (%)**

ALC = 2008 y 2018; UE = 2016



Nota: Los datos de ALC se refieren a Argentina, Brasil, Chile y México.
Fuente: (ECLAC, 2022[1]).

StatLink https://stat.link/90y4hl

Estas diferencias se deben al hecho de que las mipymes de la Unión Europea constituyen un componente clave, dinámico e integrado de la estructura productiva, condiciones que no se dan en ALC (Dini y Stumpo, 2020[17]). Con contadas excepciones, las mipymes de la región de ALC suelen especializarse en sectores con una baja productividad y su contribución a las exportaciones sigue siendo muy limitada. Solo en ocasiones logran entablar relaciones con grandes empresas más dinámicas. Además, suelen enfrentar dificultades para incorporar tecnologías y promover la innovación. Por otra parte, las pruebas sugieren que la escasa productividad de las mipymes de ALC también está relacionada con prácticas de gestión deficientes, que podrían optimizarse mediante servicios de ampliación del uso de tecnologías (Bloom et al., 2013[18]; McKenzie, 2020[19]; Shapira et al., 2015[20]). Por lo tanto, a pesar de los progresos registrados, los esfuerzos en materia de políticas para apoyar a las mipymes en ALC podrían fortalecerse.

En ALC se destaca además la heterogeneidad entre las unidades de producción de tamaño similar. El elevado número de mipymes informales con una baja productividad de la región coexiste con empresas emergentes de rápido crecimiento y con una base tecnológica. Estas empresas emergentes son una fuente importante de innovación y, por ende, de creación y transformación de las industrias y los modelos empresariales, además de que podrían contribuir a la renovación del liderazgo empresarial. Pese a que las inversiones en este campo se caracterizan por un alto riesgo y por la incertidumbre, cuando tienen éxito, resultan rentables y pueden contribuir enormemente al crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo sostenible (Audretsch et al., 2020[21]). Por lo tanto, merece especial atención la promoción de la iniciativa empresarial y de las empresas emergentes innovadoras, así como la adopción de medidas por parte de los responsables de la formulación de políticas, con independencia de la necesidad de abordar la escasa productividad y la informalidad.

En la última década, en ALC se ha producido un importante aumento del número de empresas emergentes, que se concentran de manera especial en América del Sur. Estas empresas suelen tener una base digital y operar principalmente en los sectores del *software* y la intermediación financiera, aunque algunas se dedican al comercio, la educación y los servicios relacionados con la salud (Recuadro 3.1).

Recuadro 3.1. **El panorama de las empresas emergentes en ALC**

Las empresas emergentes se concentran en América del Sur y en sectores digitales

El 83% de las empresas emergentes de la región de ALC se encuentra en América del Sur, de las cuales el 58% tienen su sede en Brasil, el 8% en Argentina, el 8% en Chile y el 5% en Colombia. Otro 12% se encuentra localizado en México. Según un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, los principales sectores en los que operan las empresas emergentes de la región son los de *software* (19%), intermediación financiera (19%), comercio (9%), educación (8%) y actividades relacionadas con la salud (6%). Sus modelos empresariales dependen principalmente de internet y de actividades en línea: de hecho, el 58% de las empresas emergentes de ALC son proveedoras de servicios digitales u ofrecen soluciones digitales.

La mayoría de las empresas emergentes de la región tienen dificultades para encontrar financiamiento

La mayoría de las empresas emergentes de la región de ALC tiene dificultades para acceder a financiamiento para el desarrollo. Tan solo 20 empresas recibieron la mitad de los fondos totales para el desarrollo de empresas emergentes de la región. Cabe señalar que nueve de esas empresas recibieron cada una un mínimo de 20 millones de USD. Esta situación contrasta claramente con la realidad en cuanto a financiamiento que vive el resto de las empresas de la muestra, que en promedio recibieron 714 000 USD cada una. Teniendo en cuenta esta enorme diferencia, el financiamiento promedio fue considerablemente inferior, de 171 000 USD por empresa emergente.

Las empresas emergentes que operan en la industria de los servicios financieros son las que mayor financiamiento individual recibieron, 420 000 USD por empresa. Esto explica por qué Colombia, con una concentración considerable de empresas emergentes en este sector, presenta los valores más elevados de financiamiento individual.

Las empresas emergentes de ALC también atraviesan dificultades financieras por la reducida disponibilidad de fuentes de financiamiento: un 57% de las empresas cuenta solo con un inversor. En términos generales, los inversores privados aportan un 81% del financiamiento de estas empresas, que recurren al crédito para obtener el 19% restante.

Otros obstáculos a los que se enfrentan las empresas emergentes de la región de ALC son, entre otros, la falta de recursos humanos cualificados, una elevada carga fiscal y una rigurosa normativa laboral, además de (en menor medida) factores vinculados a la corrupción y la inestabilidad política (Federico y Ibarra Garcia, 2014[22]).

Las políticas públicas pueden propiciar las condiciones necesarias para que las empresas emergentes crezcan

En este contexto, es importante destacar el rol de las políticas públicas para propiciar las condiciones necesarias para que las empresas emergentes crezcan, por ejemplo, incentivos al desarrollo de los conocimientos científicos, la tecnología y la innovación, así como la educación y facilitar el acceso al financiamiento (Mageste et al., próximo a publicarse[23]).

Los instrumentos de financiamiento basados en el mercado, entre ellos el capital y los instrumentos de deuda, son herramientas esenciales para que las medianas empresas prosperen en las economías emergentes. Sin embargo, las economías de ALC se han quedado rezagadas con respecto a otras economías emergentes en lo que se refiere al uso de estos instrumentos. Para invertir esta tendencia, la región necesita mejorar los marcos regulatorios e institucionales tomando como insumo la información procedente de las pymes, que no solo es más amplia sino de mejor calidad, sobre las necesidades de financiamiento (Medina et al., próximo a publicarse[24]).

Nota: La información de este recuadro procede de un estudio de la CEPAL llevado a cabo por (Mageste et al., próximo a publicarse[23]) y se ha desarrollado a partir de Crunchbase y Dataprovider (datos correspondientes a Brasil, Chile, Colombia y México).

Fuente: (Mageste et al., próximo a publicarse[23]); (Medina et al., próximo a publicarse[24]); (OECD/UN, 2018[25]); (Federico y Ibarra Garcia, 2014[22]).

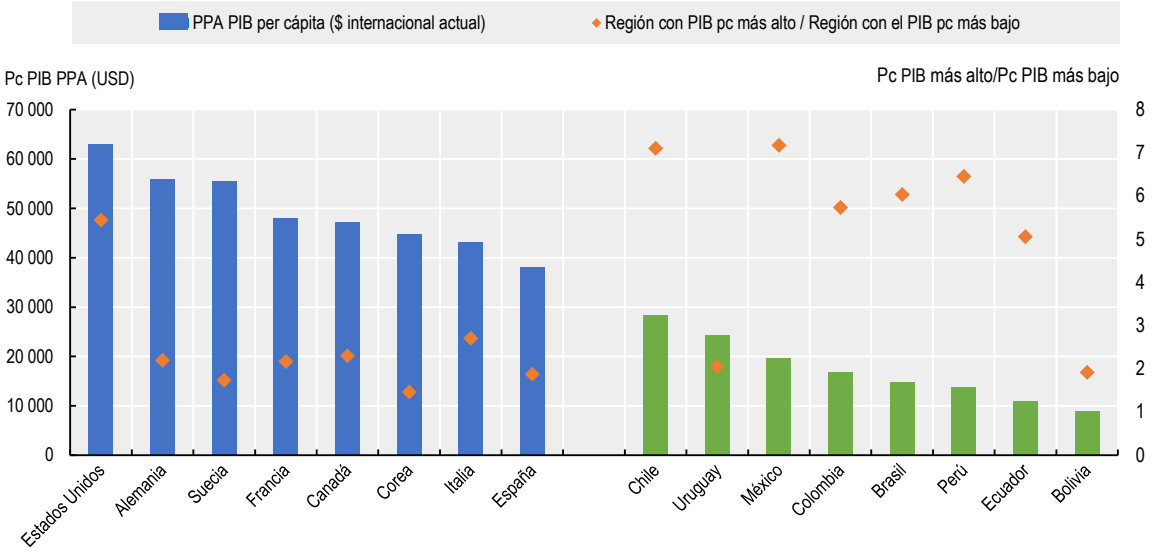
Aunque la región de ALC tiene potencial para generar y formar empresas con base tecnológica, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 perjudicó tanto la demanda como el financiamiento de este segmento. A nivel mundial, el financiamiento empresarial atraído por las empresas emergentes cayó de 21 500 millones de USD en 2021 a 7 800 millones de USD en 2022 (CBInsights, 2022[26]). En consonancia con una tendencia mundial a la baja tras el auge de las empresas unicornio (empresas emergentes valoradas en más de un millón de USD), en ALC también se ha ralentizado la aparición de este tipo de empresas, al descender de 17 en 2021 a 4 en 2022 (Kantis, Caicedo y Ibarra Garcia, 2023[27]). A fecha de abril de 2023, ALC contaba con 31 empresas unicornio (CBInsights, 2022[26]). Casi la mitad de ellas se dedicaban a las tecnofinanzas (45%), seguidas del comercio electrónico (23%), la logística y las cadenas de suministro (13%), y las soluciones de inteligencia artificial (cerca de un 7%).

La promoción de la iniciativa empresarial y el impulso del capital de riesgo deberían ser elementos constituyentes de una estrategia más amplia para promover la transformación productiva y la innovación en la región de ALC. Teniendo en cuenta la elevada concentración de las empresas más pequeñas y las empresas emergentes en determinadas zonas de los países, existen importantes disparidades entre los distintos territorios.

Los desafíos que enfrenta un modelo de desarrollo más justo y sostenible pueden clasificarse en desigualdades verticales y horizontales, que se encuentran estrechamente interrelacionadas. La dimensión vertical —a saber, la desigualdad entre las personas o los hogares— es crucial para el desarrollo individual. Persisten también desigualdades horizontales —a saber, desigualdades entre grupos y sobre todo desigualdades territoriales— en todos los ámbitos de la vida de las personas, que contribuyen a reforzar las disparidades estructurales entre quienes residen en territorios diferentes (es decir, regiones, provincias, zonas urbanas y zonas periféricas).

El dinamismo económico de la región, que depende cada vez más de las economías de aglomeración, ha provocado una brecha económica y espacial creciente entre los territorios rezagados o en decadencia y los más prósperos, que ofrecen mejores perspectivas laborales y mayor bienestar. Como se ha mencionado anteriormente, es evidente que existe una enorme heterogeneidad entre los niveles de productividad de los diferentes países de ALC. Incluso en aquellos que atraviesan un período de transición para integrarse en la categoría de altos ingresos, siguen existiendo focos de estancamiento económico en determinadas regiones (OECD et al., 2019[28]). En otras palabras, muchos territorios empobrecidos siguen atrapados en una situación de bajos ingresos pese al crecimiento económico generalizado de su país (Gráfico 3.6).

Gráfico 3.6. **PIB per cápita y diferencias territoriales en ALC frente a los países desarrollados, 2020**



Nota: PPA se refiere a las paridades del poder adquisitivo. Los datos del eje de la derecha se refieren a la relación entre el PIB per cápita de la región y el PIB per cápita más alto, y entre el PIB per cápita de la región y el PIB per cápita más bajo. En relación con el PIB per cápita se usaron dos series de datos de la OCDE; las bases de datos de i) Cuentas Nacionales y ii) Regiones y Ciudades. Las regiones de cada país que se han tenido en cuenta son: Estados Unidos, Distrito de Columbia y Misisipi; Alemania, Hamburgo y Sajonia-Anhalt; Suecia, Estocolmo y North Middle Sweden; Francia, Île de France y Mayotte; Canadá, Nunavut e Isla del Príncipe Eduardo; Corea, Seúl y Jeju; Italia, Provincia de Bolzano y Calabria; España, Madrid e Islas Canarias; Chile, Antofagasta y Ñuble; México, Campeche y Chiapas; Colombia, Bogotá, Distrito Capital y Vichada; Brasil, Distrito Federal y Maranhão; Perú, Moquegua y San Martín.

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en (OECD.Stat, 2020[29]) y CEPAL.

StatLink https://stat.link/nx6r98

Colombia es un ejemplo de estas disparidades. Las regiones de Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander, que representan un 48.6% de la población, poseen un 63.3% de los ingresos internos del país, mientras que seis regiones que constituyen un 13% de la población total tan solo poseen un mero 7% de los ingresos nacionales. Otro ejemplo es Chile, donde un 8.6% de la población vive en situación de pobreza extrema, pero el nivel de pobreza del país parece relativamente bajo. En realidad, la pobreza extrema oscila entre un 2.1% en la Región XII (Magallanes y la Antártida Chilena) y un 17.2% en la Región IX (Araucanía). Abordar esta dimensión local de la desigualdad resulta crucial para garantizar la estabilidad a largo plazo del desarrollo económico. Es esencial prestar especial atención a reducir las disparidades y promover el desarrollo equitativo a nivel regional (OECD/UN/UNIDO, 2019[30]; OECD/UN, 2018[25]).

Además del PIB per cápita, las desigualdades territoriales repercuten ampliamente en el avance del desarrollo y también inciden en aspectos tales como el acceso a oportunidades, la salud, la educación, el mercado laboral y los bienes públicos. Las disparidades son evidentes no solo entre las zonas urbanas y rurales, sino también dentro de las zonas metropolitanas. Nacer o residir en una localidad concreta influye profundamente en la distribución de las oportunidades entre las personas (OECD et al., 2019[28]).

Para maximizar las oportunidades, en particular en el caso de las personas cuyas circunstancias geográficas influyen enormemente en sus perspectivas, resulta crucial sentar unas bases de producción sólidas. A través de políticas de desarrollo territorial, los gobiernos pueden generar las condiciones adecuadas para estimular nuevas inversiones, mejorar el acceso al capital humano e incrementar el nivel de cualificación, acelerar la adopción de nuevas tecnologías y aumentar la eficiencia de los recursos. En el contexto de

ALC, la internacionalización puede ofrecer oportunidades de desarrollo regional resiliente y sostenible, que promuevan nuevos sectores económicos y creen empleos formales de calidad vinculados a nuevas inversiones (OECD, 2023[31]). Dadas las marcadas necesidades territoriales y oportunidades que existen en ALC, confiar exclusivamente en las políticas sectoriales e industriales nacionales puede limitar los resultados. La formulación de las políticas debe abordarse, en cambio, desde la óptica territorial, teniendo en cuenta los activos específicos de cada zona local y adaptándose a ellos. En este sentido, resulta esencial implantar políticas y programas que impulsen el desarrollo local y regional, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y promuevan la creación de empleo formal (OECD, 2023[31]).

Reducir la enorme heterogeneidad de la productividad entre los distintos sectores, las empresas y los territorios es fundamental para reducir las brechas que presenta ALC en comparación con otras economías más desarrolladas. Para ello, pueden ser efectivas las iniciativas políticas basadas en clústeres, encaminadas a reforzar el desarrollo territorial productivo.

Debe estimularse la convergencia territorial y de la producción necesaria a través de un mayor apoyo público a las mipymes (p. ej., propiciando las condiciones para su formalización, mejor integración y desempeño), a fin de que puedan actuar como agentes cruciales de cambio del modelo de desarrollo.

Para transformar la estructura productiva de ALC, es necesario invertir en I+D e innovación

Tanto la cantidad como la calidad de las inversiones son importantes a la hora de promover la sofisticación tecnológica y la mejora y diversificación de la producción, a través de nuevas industrias y vínculos o eslabonamientos de producción, capacidades de innovación y capacidades para emplear tecnologías de nivel alto y medio.

Las inversiones han de reflejar además las opciones estratégicas, entre otras una concentración en sectores con ventajas competitivas basadas en la tecnología y una demanda creciente (esto comporta eficiencias de carácter schumpeteriano y keynesiano). Estas opciones estratégicas pueden propiciar un cambio de un modelo de especialización viciado a otro virtuoso, capaz de trasladar a los trabajadores de sectores con una baja productividad a otros con mayor productividad y sueldos más elevados (ECLAC, 2022[1]).

Deben desplegarse inversiones públicas suficientes, de manera sostenida a lo largo del tiempo. Las finanzas públicas pueden actuar como catalizador si se extienden a lo largo de toda la cadena de innovación —lo que incluye las etapas posteriores a la investigación, que se caracterizan por tener un elevado riesgo y necesitar grandes cantidades de capital, en las que las empresas suelen carecer de apoyo—.

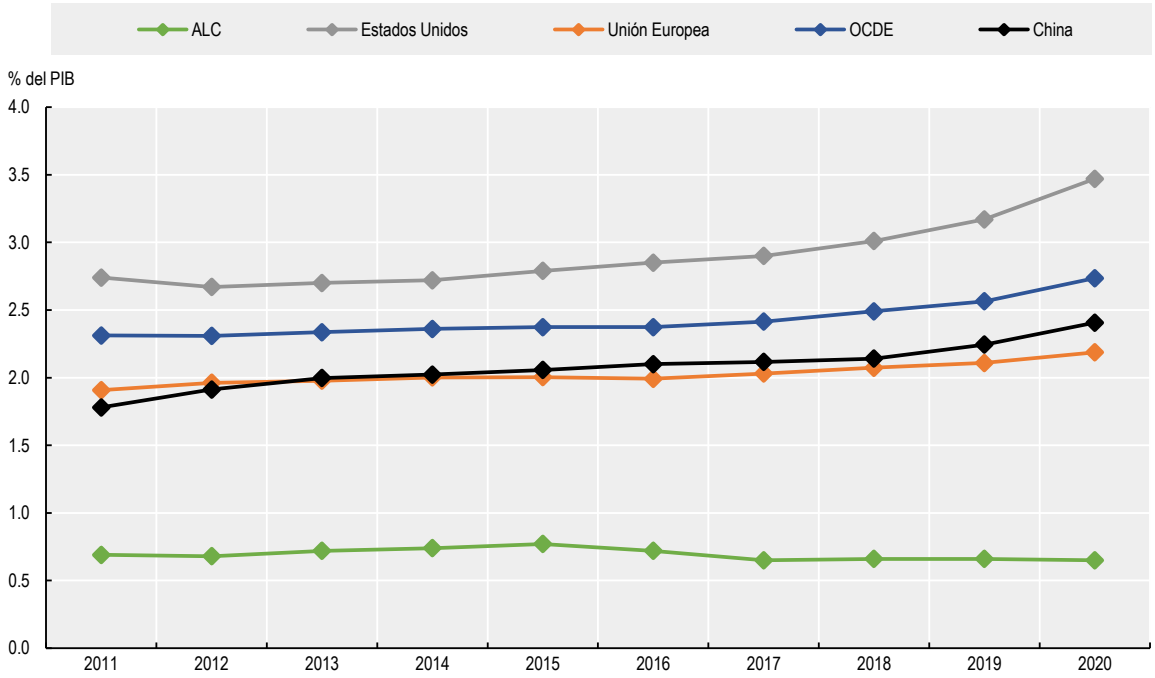
La obtención de resultados en materia de innovación depende sobre todo de la inversión. Además, se basa en sistemas compuestos por un complejo conjunto de interacciones entre diferentes actores, entre ellos las empresas, las instituciones de investigación, las entidades de financiamiento, los órganos regulatorios, los usuarios y otros (Lundvall, 2010[32]; Freeman, 1995[33]). Las principales implicaciones en materia de políticas tienen dos vertientes: por una parte, en cada contexto se necesita un enfoque sistémico para abordar los distintos factores y fuerzas que configuran los procesos de innovación; por otra, es importante estimular y apoyar las interacciones entre los actores para promover una generación y difusión efectivas de los conocimientos de maneras más sistemáticas.

La innovación —y la ciencia y la tecnología en las que se fundamenta— es un motor de desarrollo, pues tiene la capacidad de propiciar y sostener un crecimiento a largo plazo.

Los nuevos productos, los nuevos procesos, las nuevas formas de organizar la producción y las actividades empresariales, así como los nuevos paradigmas tecnológicos, brindan nuevas oportunidades, al tiempo que definen diferentes trayectorias de desarrollo. A su vez, algunas de esas tendencias tienen mayor potencial que otras para promover vínculos territoriales y productivos más amplios y un aumento de los niveles de empleo de calidad.

No obstante, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de ALC se ha estancado en las últimas dos décadas. Como porcentaje del PIB, la inversión en I+D de los países de ALC se mantuvo próxima al 0.65% entre 2017 y 2020, lo que representa únicamente el 2.3% del total mundial (Gráfico 3.7). Esto contrasta con las principales economías del mundo, que han incrementado sistemáticamente la inversión en I+D en años recientes, una tendencia que se intensificó en el marco de las medidas adoptadas para la recuperación de la crisis del COVID-19. En ALC, la inversión escasa, fragmentada y dispersa en I+D se combina con un énfasis en la investigación básica. No existen suficientes ayudas al I+D aplicado, que es clave para promover la capacidad de innovación. En un contexto de aceleración de las transformaciones digital y verde, en el que la vanguardia tecnológica y de la innovación cambia rápidamente, reviste mayor importancia si cabe aumentar la inversión en I+D en la región de ALC. En caso contrario, aumentarán las asimetrías con respecto a las economías más desarrolladas.

Gráfico 3.7. **Inversiones en I+D como porcentaje del PIB, ALC frente a países y bloques seleccionados, 2011-20**



Nota: Los datos correspondientes a ALC son estimaciones.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GASTOxPBI&start_year=2011&end_year=2020, con respecto a ALC; Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI) de la OCDE. Indicadores, https://stip.oecd.org/stats/SB-StatTrends.html?i=G_XGDP&v=3&t=2011,2020&s=EU27_2020,OECD, en relación con Estados Unidos, la Unión Europea y la OCDE; y la Unesco, http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=181, en relación con China.

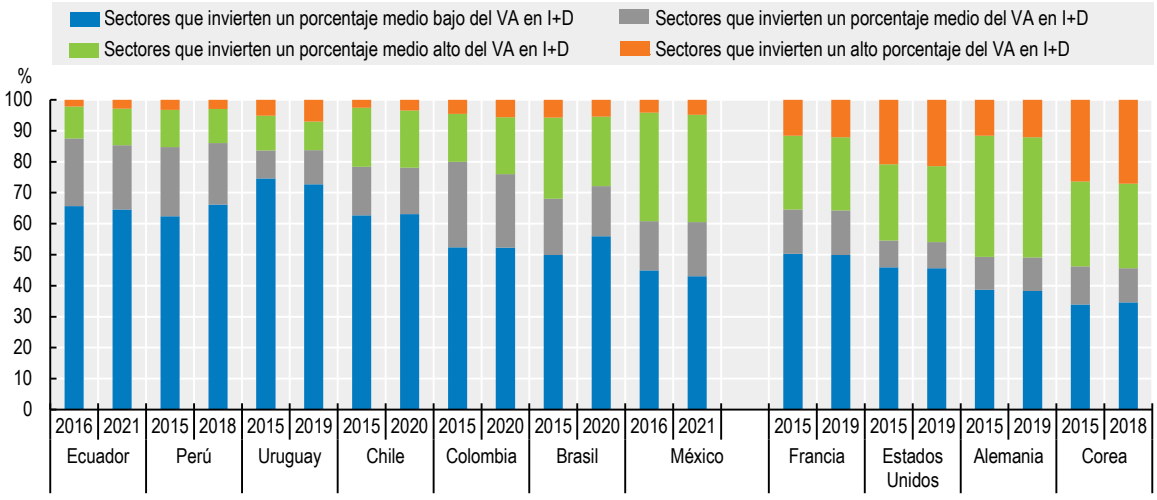
StatLink https://stat.link/fvhmas

Es evidente que existe una heterogeneidad significativa en el gasto en I+D que realizan los diferentes países de ALC. En términos absolutos, Argentina, Brasil y México representaron un 86% del gasto en I+D de la región en 2020. Brasil, que individualmente es

responsable de un 65%, invirtió el mayor porcentaje del PIB (casi un 1.2% en 2020), seguido de Argentina y Cuba (0.52%). Por el contrario, los niveles de inversión de Guatemala y Trinidad y Tobago se situaron cerca del 0.05% del PIB (RICYT, 2022[34]). Dada la tremenda variación de las capacidades, los países de la región encaran desafíos específicos en materia de políticas en lo que se refiere a mejorar su sofisticación tecnológica y las posibilidades de innovación de sus estructuras de producción.

A nivel sectorial, la mayoría de los sectores de ALC invierte un porcentaje medio o medio bajo del valor agregado en I+D. Esto contrasta con otros países más desarrollados, en los que más sectores invierten un porcentaje alto o medio alto del valor agregado en I+D (Gráfico 3.8). Dentro de ALC, los sectores de México son los que más invierten en I+D, mientras que Perú y Brasil están reduciendo su inversión sectorial en este tipo de actividades. En los países desarrollados, en particular en Estados Unidos, Alemania y Corea, la diversidad de sectores que invierten un alto porcentaje del valor agregado en I+D va en aumento.

Gráfico 3.8. **Distribución de los sectores según la tasa de inversión en I+D, países seleccionados, 2015-21**



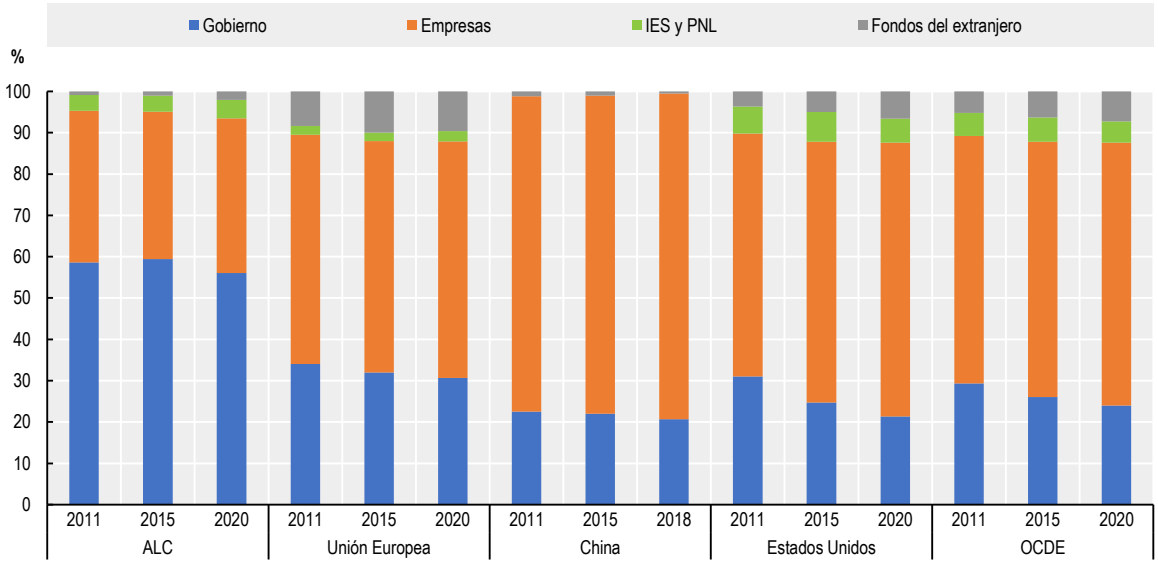
Nota: VA = valor agregado.

Fuente: Estimaciones de la CEPAL a partir de datos de las Oficinas Nacionales de Estadística.

StatLink https://stat.link/s2tfgq

Para desarrollar y difundir las innovaciones y las tecnologías, se necesitan fuentes de inversión tanto públicas como privadas, de la magnitud necesaria para superar los retos contemporáneos y lograr un desarrollo sostenible en ALC. Sigue siendo difícil aumentar el porcentaje de inversión privada en I+D de los países de ALC, donde el financiamiento procede principalmente de los gobiernos, que aportan cerca del 60%[1] (Gráfico 3.9). En economías más desarrolladas, la contribución del sector empresarial a las actividades de I+D es bastante más elevada, ya que supera el 60% en Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países miembros de la OCDE, y alcanza casi el 80% en China. Asimismo, en la última década, el porcentaje de I+D financiado por el sector empresarial ha ido en aumento en esos países, posiblemente debido a nuevas oportunidades tecnológicas. Los responsables de la formulación de políticas deben prestar atención a los bajos niveles de inversión privada en I+D de ALC.

Gráfico 3.9. **Porcentaje de inversiones en I+D por fuente de financiamiento en ALC y otros territorios, 2011-20**



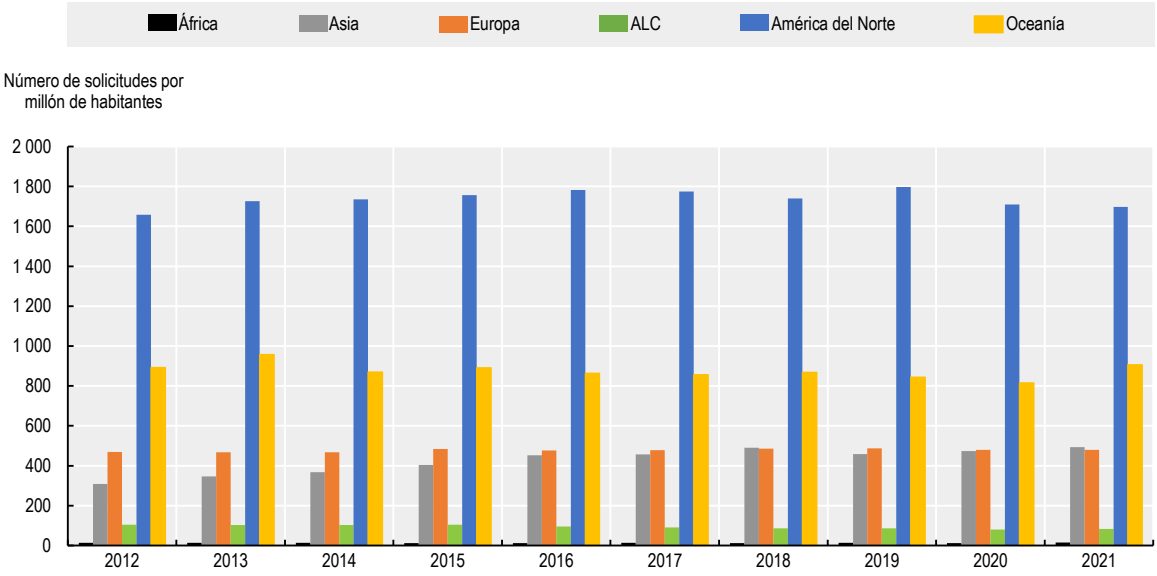
Nota: IES = instituciones de educación superior. PNL = organizaciones privadas no lucrativas.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (RICYT, 2020[35]) en relación con ALC e Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI) de la OCDE, en relación con los demás territorios.

StatLink https://stat.link/pblc03

En ALC, no resulta evidente la tendencia mundial de incremento de solicitud de patentes que se ha venido registrando en la última década. Las solicitudes de patente de esta región han fluctuado a lo largo de los años y siguen siendo bajas en comparación con otras regiones, tanto en términos absolutos como en forma de porcentaje de la población (siendo este último un mejor indicador del desarrollo tecnológico) (Gráfico 3.10) (WIPO, 2022[36]).

Gráfico 3.10. **Solicitudes de patentes por región, 2012-21**



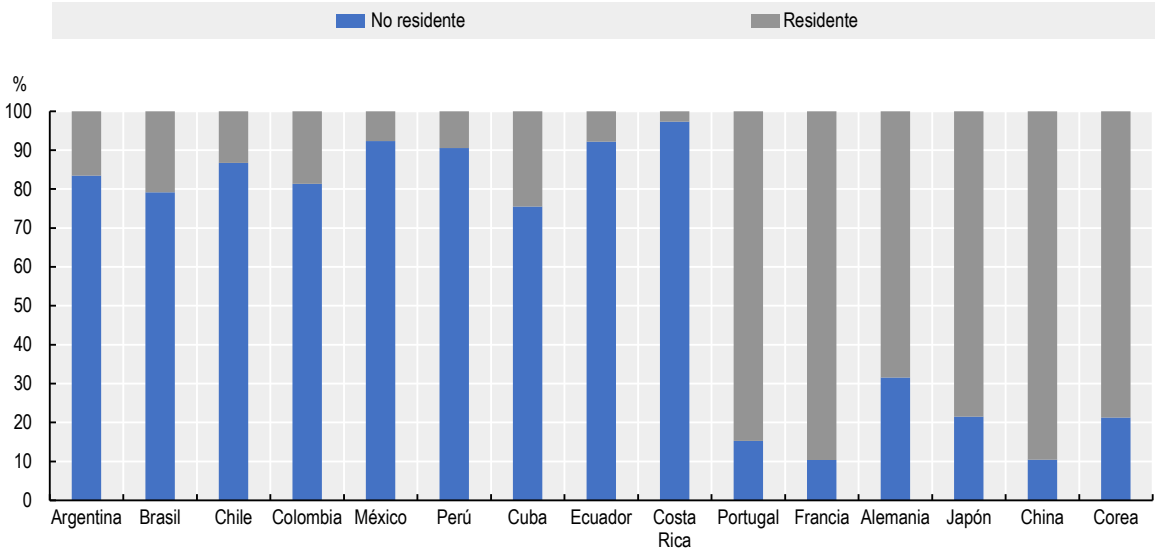
Fuente: Datos de la OMPI, www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator y del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/.

StatLink https://stat.link/k280ez

Otra particularidad de los países de ALC es que, en los últimos años, las solicitudes de patente han sido presentadas principalmente (87%) por no residentes. Esta situación contrasta claramente con la de los países desarrollados, donde la mayoría de las solicitudes de patente son presentadas por residentes (Gráfico 3.11). Este dato indica quién se está haciendo con la propiedad de los conocimientos registrados en un país, independientemente del lugar en el que se haya generado. Además, a partir de 2020, el número de investigadores de ALC representaba un 4.1% del total mundial, marcadamente por debajo de Asia (43.3%), Europa (30.4%) y Estados Unidos y Canadá (19.6%), pero por encima de África (1.4%) y Oceanía (1.7%).

Gráfico 3.11. **Porcentaje de solicitudes presentadas por residentes a las oficinas nacionales de patentes, países seleccionados 2019-21**

Porcentajes (promedios ponderados)



Fuente: Datos de la OMPI, www3.wipo.int/ipstats/ips-search/patent.

StatLink https://stat.link/q9zolv

El desarrollo y la acumulación de capacidades para generar, absorber y hacerse con la propiedad de los conocimientos y las tecnologías es un proceso largo y difícil que requiere la colaboración de diversos actores. Estas capacidades solo se podrán desarrollar plenamente en un contexto de formación de redes (formales e informales) entre diferentes tipos de actores. No obstante, el papel del Estado trasciende el apoyo a los actores y la promoción de ese tipo de redes, pues también implica el establecimiento de sistemas de innovación de distinto alcance (nacional, sectorial o subnacional).

De hecho, armonizar las actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación y su contribución real para satisfacer las necesidades de desarrollo o superar los obstáculos no es un proceso natural ni automático. Las políticas de innovación transformadoras, orientadas al cumplimiento de una misión, son enfoques que están comenzando a analizar los países de ALC, en un esfuerzo por priorizar y movilizar recursos y capacidades destinadas a superar los retos nacionales o subnacionales. La efectividad de las labores de innovación depende además de factores horizontales tales como la educación, los marcos institucionales y el desarrollo de infraestructuras físicas, científicas y tecnológicas —ninguno de los cuales puede descartarse—. Resulta igualmente pertinente garantizar que el incremento efectivo de la inversión pública en I+D se oriente a los objetivos adecuados (p. ej., al paradigma digital y la promoción de una transición verde y justa, de manera que esté en consonancia con las prioridades nacionales). En términos más

generales, resulta fundamental que se armonicen las actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación con las políticas de desarrollo productivo de los países de ALC y sus territorios.

Dinámicas del mercado laboral y brechas en materia de talento humano: el rol de la inversión

Analizar el mercado laboral, la dinámica de inversión y las dificultades existentes en cuanto a talento humano, así como la capacidad de innovación, puede arrojar luz sobre los motivos por los que la región de ALC no ha sido capaz, hasta la fecha, de incrementar la productividad (OECD et al., 2020[8]; CAF, 2018[11]).

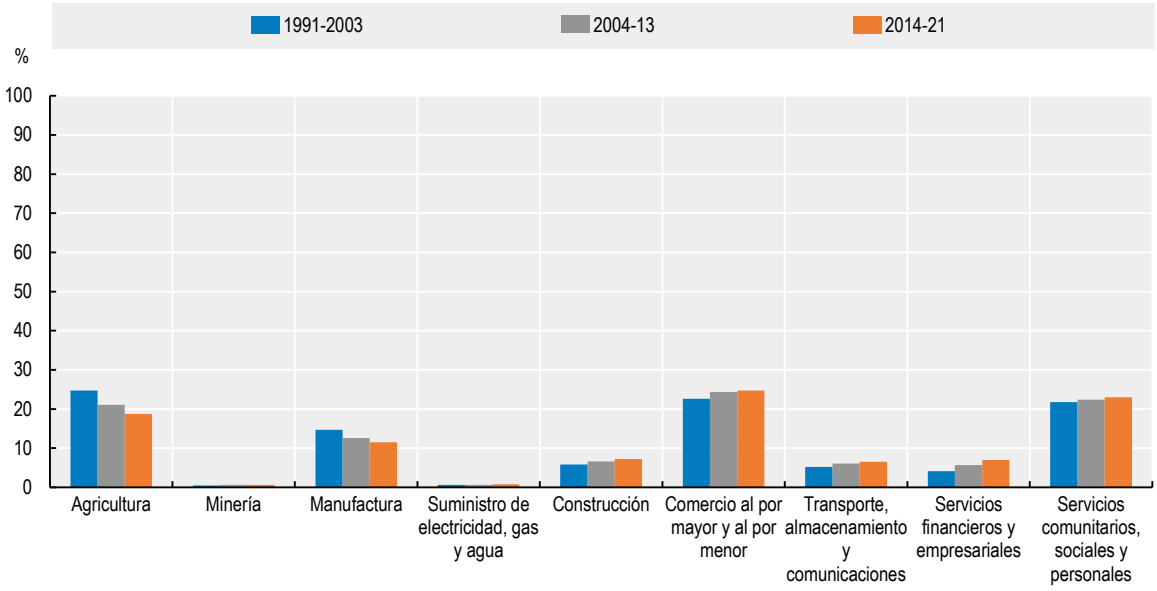
Desde 1990, las inversiones no han tenido la calidad y el impacto deseables para avanzar hacia una mejora en el desarrollo de ALC. Las inversiones no han guardado suficiente correlación con el crecimiento de la productividad y del empleo. En esta sección se mostrará que la mejora de las inversiones de capital físico y humano en sectores verdes podría ser una forma de contribuir a la creación de empleo formal de mejor calidad.

Durante la última década (en comparación con tendencias anteriores), el descenso del crecimiento económico de ALC ha ido acompañado de un descenso del crecimiento del empleo, de los salarios reales por hora y de la productividad. El empleo total de la región aumentó a una tasa del 3.9% en la década de los setenta, un 3.2% en la de los ochenta y un 2.4% en la década de los noventa y del 2000, pero solo un 1.5% en la década del 2010 (ECLAC, 2021[37]; ECLAC y ILO, 2022[12]). Esta dinámica se refleja también en los salarios reales por hora, que se han estancado en las últimas tres décadas, con una tasa anual del 2% en términos agregados.

La participación en el empleo del sector de los servicios de mercado de los países de ALC, con un escaso crecimiento de la productividad, ha ido en aumento (ECLAC y ILO, 2022[12]). Ocurre lo mismo en la construcción y en el sector de los servicios personales y comunitarios sociales; la participación en el empleo del sector tanto manufacturero como agrícola, por el contrario, se ha contraído en las últimas dos décadas (Gráfico 3.12). El aumento de la participación en el empleo del sector de los servicios de mercado, con un escaso crecimiento de la productividad, se encuentra asociado a un cambio estructural para impulsar la productividad y la creación de empleo de calidad en la región.

Gráfico 3.12. **Empleo por sector de actividad económica en ALC, 1991-2021**

Promedio no ponderado de 18 países de ALC



Nota: Los datos se refieren a un promedio no ponderado en relación con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Fuente: Datos de (ECLAC y ILO, 2022[12]).

StatLink https://stat.link/ahw29y

El impulso de la formalización podría influir de manera importante en la mejora de la productividad

La informalidad es un fenómeno complejo y con varias facetas, que además tiene diferentes connotaciones y significados. Algunas personas pueden optar por no formalizar su situación (en lo que a empleo se refiere) si perciben que los costos superan a las ventajas que esto les supondría. Con frecuencia, el empleo informal actúa en mayor medida como una estrategia de subsistencia cuando no existen oportunidades laborales decentes. Dicha subsistencia está asociada a un bajo nivel de cualificación y productividad de los trabajadores, así como a una falta de oportunidades en la economía en general, relacionada estrechamente con la ineficacia del modelo de producción para absorber a los trabajadores formales (Maloney, 2004[38]; Fernández y Villar, 2016[39]; Fernández et al., 2017[40]; La Porta y Shleifer, 2014[41]; OECD et al., 2019[28]). En general, la informalidad trasciende la preferencia de los trabajadores por el autoempleo o el trabajo informal debido a consideraciones económicas; se trata, en cambio, de una consecuencia del reducido número de oportunidades que existe para acceder al mercado laboral formal. La falta de oportunidades para conseguir un empleo formal en ALC es un reflejo de la falta de dinamismo del sector formal, que implica que las empresas formales no crezcan tanto y normalmente mantengan niveles relativamente bajos de productividad. En consecuencia, la distribución de las empresas según su tamaño en el sector formal está dominada por las más pequeñas (OECD et al., 2021[6]; ECLAC, 2008[14]).

Los altos niveles de informalidad de ALC exponen a los trabajadores a vulnerabilidades importantes en términos de estabilidad de los ingresos, condiciones laborales, acceso a los derechos laborales y protección social. Estas desigualdades se agravan como consecuencia de las disparidades interrelacionadas en razón de género, raza, grupo étnico y ubicación geográfica. La reducida capacidad de sectores con una mayor productividad para generar

empleo formal provoca una segmentación del mercado laboral, con un acceso desigual a empleos de calidad y protección social, lo que contribuye a una importante desigualdad en materia de ingresos dentro de los hogares y entre estos (ECLAC, 2022[1]).

Puesto que la informalidad reduce la productividad promedio de una economía, tiene un impacto directo en el crecimiento económico. Los trabajadores del sector formal son prácticamente el doble de productivos que los que trabajan en el informal (CAF, 2013[42]). Dado que más de la mitad de los trabajadores asalariados de ALC son informales, esto reduce considerablemente la productividad laboral agregada. Si se reasignase la totalidad de la mano de obra y del capital a empresas formales, los salarios y la productividad laboral por hora podrían aumentar hasta un 24%, incluso controlando las características de los trabajadores (CAF, 2013[42]). En el caso de la formalización a gran escala de las empresas, la productividad laboral agregada podría aumentar en torno a un 30% (CAF, 2018[11]).

En ALC, es relevante reasignar los factores de producción de empresas informales a otras que sean formales dentro de cada industria o sector. A nivel microeconómico, en determinados países de ALC, existen disparidades considerables en cuanto al retorno de los factores productivos de las empresas de cada industria (Pagés, 2010[43]). Según pruebas recientes procedentes de México, existe una interrelación entre la incorrecta asignación de la mano de obra y del capital y la escasa productividad, lo que pone de relieve la incidencia del sector informal en la configuración de la dinámica de la productividad laboral (Levy, 2018[44]).

Las relaciones entre la productividad, la inversión, los salarios reales y el crecimiento del empleo

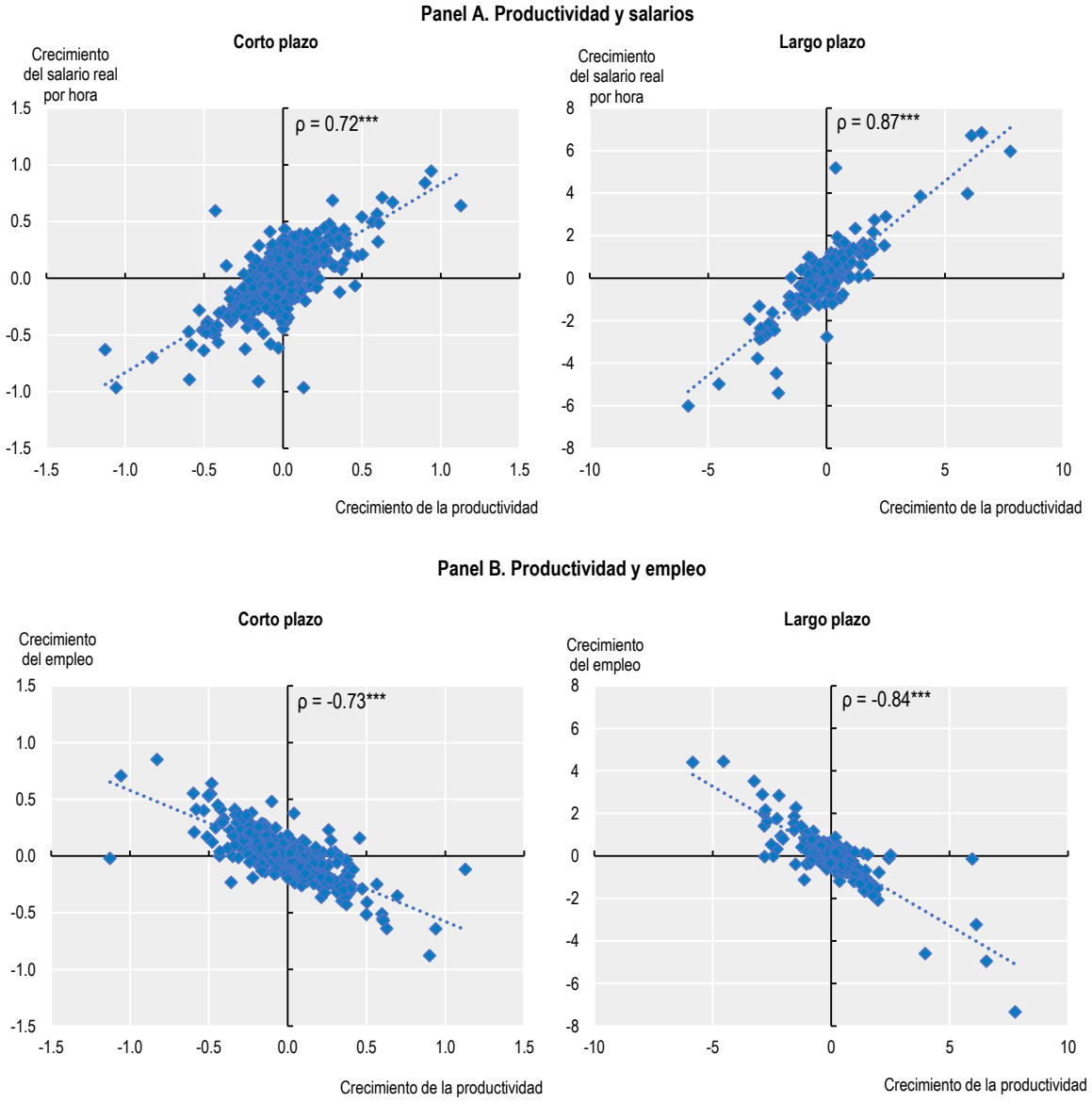
Entender las relaciones entre la productividad, los salarios y la demanda laboral de las economías en desarrollo y emergentes constituye un reto complejo. Sin embargo, resulta crucial tener esos datos para interpretar la interrelación del proceso de innovación con el aumento de la productividad y los salarios.[2] Puesto que la heterogeneidad entre los países de la región es alta, deben tenerse en cuenta las características específicas de las economías de ALC para entender el rol de la inversión en la configuración de estas relaciones. Deberían adaptarse las recomendaciones en materia de políticas para tener en cuenta esta complejidad y el contexto de cada país.

En ALC, en las últimas décadas los datos empíricos han mostrado una correlación positiva entre el crecimiento de los salarios reales por hora y la productividad laboral a nivel sectorial: 0.72 a corto plazo y 0.87 a largo plazo entre 1990 y 2016 (Gráfico 3.13, Panel A). Sin embargo, el crecimiento del empleo rara vez ha ido unido a un crecimiento de la productividad (Gráfico 3.13, Panel B). Cuando el crecimiento de la productividad agregada y sectorial es bajo, la mano de obra se ha asignado estructuralmente a sectores con un potencial de crecimiento muy escaso.

En el pasado, la desconexión entre el crecimiento de la productividad y la inversión dentro de cada sector de las economías de ALC ha sido notable. De 1990 a 2016, la correlación entre el crecimiento de la inversión y el crecimiento de la productividad a corto plazo fue nula, en términos estadísticos, y a largo plazo, fue extremadamente baja (Gráfico 3.14, Panel A). La inversión no fue unida de manera especial a un crecimiento del empleo (Gráfico 3.14, Panel B).

Gráfico 3.13. **Crecimiento de la productividad laboral frente al crecimiento del empleo y los salarios reales en ALC**

Diferencias porcentuales, 1990-2016



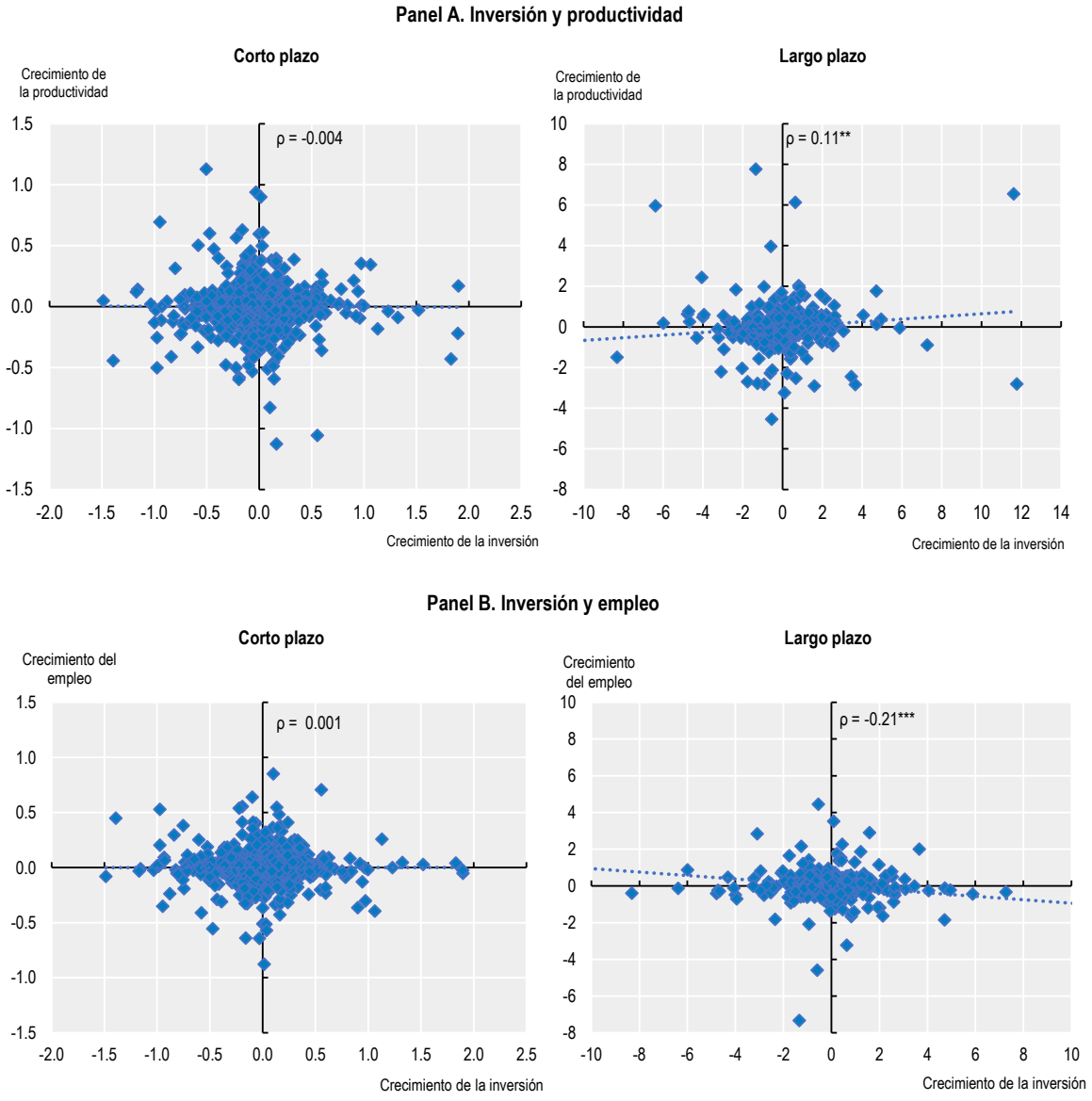
Nota: Los países a los que se refieren los datos son: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Perú. Los gráficos muestran la correlación entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios reales por hora (1990-2016) dentro de los siguientes sectores: agricultura; minería; manufacturas; suministro de electricidad, gas y agua; construcción; comercio al por mayor y al por menor; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades financieras y empresariales; y servicios comunitarios y personales (según la definición de la CIIU Rev. 3.1). Productividad se define como el valor agregado por hora trabajada, deflactada por el deflactor de valor agregado, de cada industria. Salarios reales por hora se define como la retribución por hora trabajada de los empleados, deflactada por el deflactor de valor agregado, de cada industria. Empleo se define como el número de personas que trabaja en cada industria. Crecimiento a corto plazo se refiere a las variaciones interanuales; a largo plazo, se refiere a cinco años de variaciones acumuladas. En ambas correlaciones se controlan los efectos fijos del país por sector (para mostrar la asociación con las industrias) y los efectos fijos en el tiempo (para controlar posibles perturbaciones comunes a todas las industrias en los diferentes países estudiados). Los asteriscos indican el nivel de importancia de cada correlación: ninguno indica que no es significativo, * significa un 10%, ** un 5%, *** un 1%.

Fuente: Estimaciones de la OCDE a partir de (LA-KLEMS, 2021[10]).

StatLink https://stat.link/h08cgl

Gráfico 3.14. **Crecimiento de la inversión frente al crecimiento de la productividad laboral y del empleo en ALC**

Diferencias porcentuales, 1990-2016



Nota: Los países a los que se refieren los datos son: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Perú. Los gráficos muestran la correlación entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del empleo (1990-2016) dentro de los siguientes sectores: agricultura; minería; manufacturas; suministro de electricidad, gas y agua; construcción; comercio al por mayor y al por menor; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades financieras y empresariales; y servicios comunitarios y personales (según la definición de la CIIU Rev. 3.1). Productividad se define como el valor agregado por hora trabajada, deflactada por el deflactor de valor agregado, de cada industria. Inversión se define como la formación bruta de capital fijo real total. Empleo se define como el número de personas que trabaja en cada industria. Crecimiento a corto plazo se refiere a las variaciones interanuales; a largo plazo, se refiere a cinco años de variaciones acumuladas. En ambas correlaciones se controlan los efectos fijos del país por sector (para mostrar la asociación con las industrias) y los efectos fijos en el tiempo (para controlar posibles perturbaciones comunes a todas las industrias en los diferentes países estudiados). Los asteriscos indican el nivel de importancia de cada correlación: ninguno indica que no es significativo, * significa un 10%, ** un 5%, *** un 1%.

Fuente: Estimaciones de la OCDE a partir de (LA-KLEMS, 2021[10]).

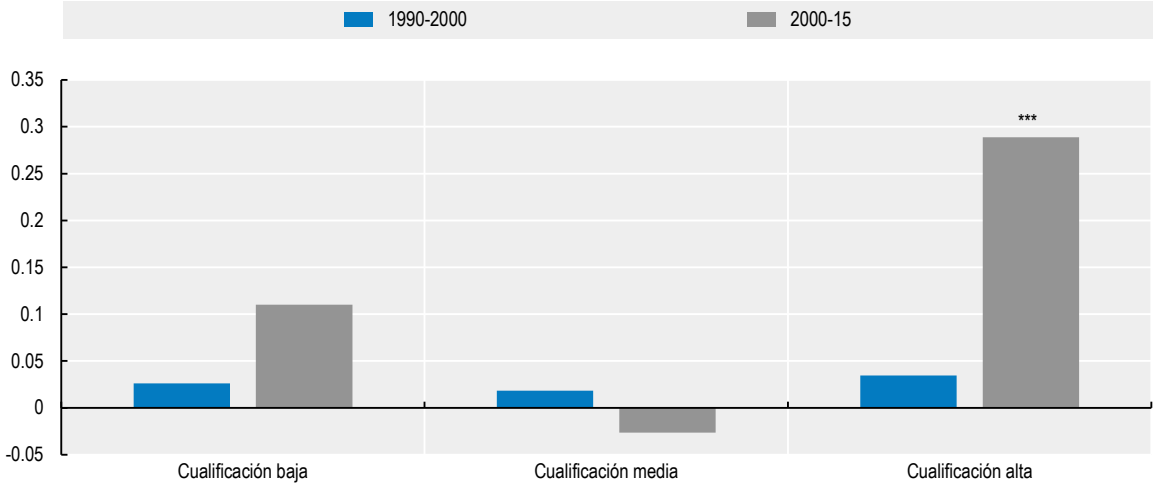
StatLink https://stat.link/zi4b50

La desconexión entre el crecimiento del empleo y la productividad en ALC exige políticas específicas para restaurar los incentivos adecuados para que las empresas innoven e inviertan más en capital tanto físico como humano. La transformación productiva de la región brinda una oportunidad única para ofrecer a los trabajadores los incentivos apropiados para que aumenten la inversión en su cualificación, educación y capacitación, en especial teniendo en cuenta que los trabajadores de ALC se encuentran atrapados en empleos informales poco productivos (OECD et al., 2021[6]; OECD et al., 2020[8]).

Cabe señalar, que la creación de empleos altamente cualificados en ALC mostró una importante correlación con el crecimiento de la inversión en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) entre 2000 y 2015 (Gráfico 3.15). Una canalización más efectiva de la inversión tanto pública como privada es una prioridad política clave de los países de ALC para promover la reconexión de la productividad, los salarios reales y los empleos de alta calidad. Aumentar el número de intervenciones basadas en iniciativas de política industrial en relación con las inversiones en TIC, tales como en banda ancha y otro capital fijo digital, es crucial en ALC. Por ejemplo, reducir las diferencias de calidad de la banda ancha que existen en ALC en comparación con los países de la OCDE generaría más de 15 millones de empleos directos, impulsaría el PIB regional un 7.7% y aumentaría la productividad un 6.3% (IDB, 2020[45]). Además, estas políticas podrían ayudar a avanzar en la formalización de los trabajadores, habida cuenta de que el índice de empleo formal en esta industria es alto (ILO, 2022[46]).

Gráfico 3.15. **Inversión en TIC y empleos altamente cualificados en ALC, 1990-2015**

Coeficientes de correlación entre las inversiones en TIC y el aumento de los empleos altamente cualificados



Nota: Los países a los que se refieren los datos son: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Perú. Los gráficos muestran la correlación entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del empleo (1990-2016) dentro de los siguientes sectores: agricultura; minería; manufacturas; suministro de electricidad, gas y agua; construcción; comercio al por mayor y al por menor; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades financieras y empresariales; y servicios comunitarios y personales (según la definición de la CIIU Rev. 3.1). La inversión en TIC se define como la formación bruta de capital fijo real en *software* y equipamiento informático y de comunicaciones. Empleo se define como el número de personas que trabaja en cada industria, por nivel educativo, siguiendo la clasificación CINE. Las correlaciones se refieren a cinco años de variaciones acumuladas de inversión en TIC y empleo por nivel educativo. En ambas correlaciones se controlan los efectos fijos del país por sector, para mostrar la asociación con las industrias, y los efectos fijos en el tiempo, para controlar posibles perturbaciones comunes a todas las industrias en los diferentes países abarcados. Los asteriscos indican el nivel de importancia de cada correlación: ninguno indica que no es significativo, * significa un 10%, ** un 5%, *** un 1%.

Fuente: Estimaciones de la OCDE a partir de (LA-KLEMS, 2021[10]).

StatLink https://stat.link/qkt5df

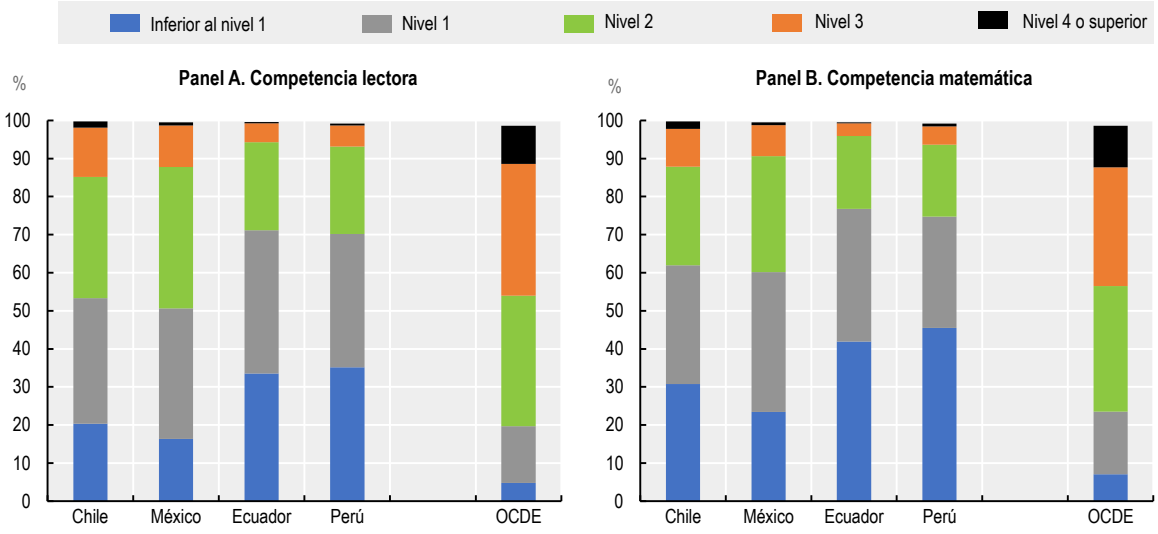
El rol de la educación, las habilidades y la evolución de las tareas laborales en la transformación productiva

Aumentar los niveles de productividad exige algo más que implementar iniciativas relacionadas con el sector productivo y la promoción de la innovación, la investigación y la tecnología. También es necesario incrementar las capacidades de la población, en combinación con políticas laborales y de protección social, al tiempo que se abordan los retos derivados de los cambios en el panorama laboral.

La participación de la fuerza laboral de ALC está muy vinculada a los niveles educativos nacionales. Las tasas de participación de la población adulta oscilan entre el 68%, en el caso de los que han cursado estudios durante cinco años o menos, y más de un 80%, en el caso de los que han cursado estudios durante más de diez años. La crisis del COVID-19 agravó las desigualdades preexistentes. Toda una generación de estudiantes vio interrumpidos sus estudios o tuvo que emplear medios precarios para acceder a ellos de forma remota hasta durante dos cursos académicos completos. Esto ha provocado un aumento de las diferencias en la adquisición de competencias, una pérdida de oportunidades de aprendizaje y un mayor riesgo de abandono escolar. Asimismo, esta situación podría acentuar las brechas de productividad y empleabilidad en el futuro (OECD et al., 2021[6]; ECLAC, 2022[47]).

Los trabajadores de ALC presentan menores niveles de competencia lectora y matemática que los trabajadores de los países de la OCDE (OECD, 2019[48]). En México y Chile, un 20% de la población activa adulta presenta un nivel excepcionalmente bajo de competencia lectora, frente a solo un 5% en los países de la OCDE. En Ecuador y Perú, este porcentaje supera el 30%. La situación empeora en el caso de la competencia matemática (Gráfico 3.16). Más de un tercio (35.2%) de los adultos de América Latina tiene escasa o nula experiencia con los computadores, lo que perjudica el nivel de desarrollo económico y la penetración de las TIC en sus países (OECD, 2019[48]; OECD et al., 2020[8]).

Gráfico 3.16. **Niveles de competencia lectora y matemática, países de ALC seleccionados y OCDE, 2019**



Nota: En cada uno de los dos dominios evaluados, se considera que la competencia es una progresión de la capacidad para dominar tareas de procesamiento de la información cada vez más complejas. Los resultados se representan en una escala del 0 al 500. Cada escala se divide en "niveles de competencia", definidos mediante rangos de puntuaciones, con un fin descriptivo. El objetivo es contribuir a la interpretación y comprensión de las escalas de presentación de informes describiendo los atributos de las tareas que pueden completar correctamente adultos con puntuaciones concretas sobre competencias. Se hace hincapié en que los niveles de competencia no presentan un elemento normativo y no deberían entenderse como "estándares" ni como "referencias".

Fuente: Estimaciones basadas en (OECD, 2019[48]).

StatLink https://stat.link/g2bcxd

Los mercados laborales de ALC muestran un importante desajuste entre la competencia y las habilidades que se emplean de manera efectiva en el trabajo. Este desajuste está relacionado con una baja productividad, una escasa innovación y mercados laborales no funcionales, además de guardar una gran correlación con el nivel de informalidad. Cuanto mayor es la brecha entre lo que se aprende en la educación superior y lo que demanda el mercado, menor es la probabilidad de empleo formal (Ropero Santiago y Cortés, 2022[49]). La competencia por sí sola explica apenas una pequeña parte de la variación de las habilidades utilizadas en ALC, ya que solo representa entre un 1% y un 6% de las habilidades utilizadas en el trabajo (OECD et al., 2020[8]). En realidad, la utilización de las habilidades —el grado en el que efectivamente se aplican en el lugar de trabajo para maximizar el desempeño de las personas— depende de los incentivos, la iniciativa del trabajador o la demanda por parte de las empresas de las habilidades necesarias para un puesto de trabajo específico.

Queda mucho por hacer en lo que se refiere a identificar desajustes más detallados en materia de habilidades, por ejemplo, qué perfiles y competencias necesita el sector de la producción —y en particular aquellos sectores a los que se da prioridad en el marco de las políticas de transformación productiva de los países de ALC y sus territorios—. Esta identificación no solo debería basarse en la información facilitada por el sector productivo (a través de encuestas o de su participación en los mecanismos institucionales), sino también en el uso de tecnologías digitales (p. ej., la inteligencia artificial y las plataformas digitales de empleo). Tras identificar los desajustes en cuanto a habilidades, deberían implantarse programas e iniciativas destinados a abordarlos. Este proceso debería estar respaldado por acuerdos institucionales que garanticen la participación de los sectores público y privado y de la comunidad académica.

Otro problema es la posible destrucción de empleo a consecuencia del cambio tecnológico y la globalización, una cuestión que ha provocado un nerviosismo generalizado en los distintos países de la OCDE en los últimos años (OECD, 2019[50]). En ALC, cerca de un 25% de los puestos de trabajo de Chile, Ecuador, México y Perú corre un alto riesgo de ser automatizado, según estimaciones de análisis de tareas de la OCDE. En estos países, otro 35% de los puestos de trabajo de estos países pueden experimentar cambios sustanciales en las tareas ejecutadas y la forma en que se llevan a cabo (OECD, 2019[48]; OECD et al., 2020[8]). Otras estimaciones similares sobre un conjunto más amplio de países de ALC, que emplean análisis ocupacionales, indican que un 16% de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de ser automatizados (Weller, Gontero y Campbell, 2019[51]).

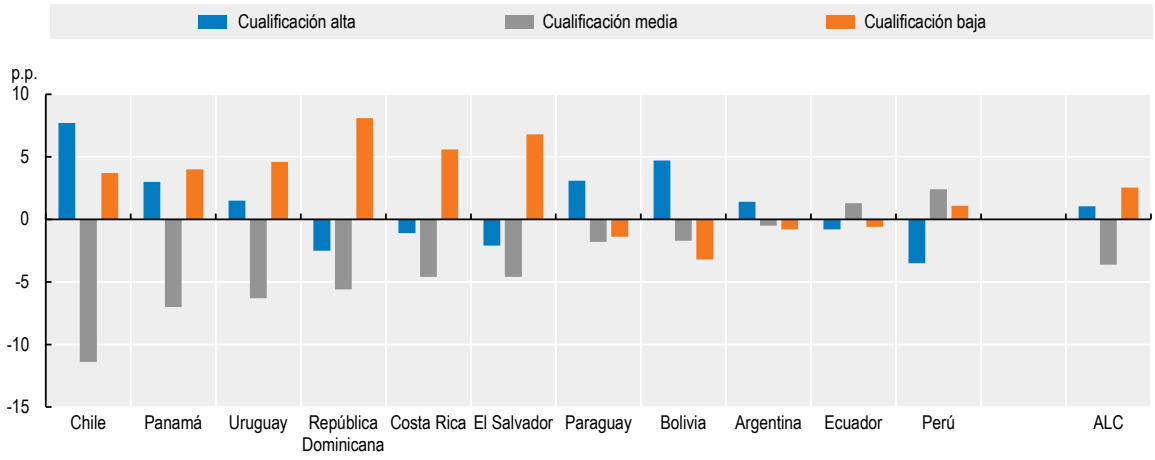
No obstante, también están apareciendo tareas y profesiones nuevas, lo que está impulsando cambios en las habilidades necesarias (Amaral et al., 2018[52]). Según datos recientes sobre contratación de LinkedIn relativos a algunos países de ALC (p. ej., Argentina, Brasil, Chile y México), la demanda de habilidades avanzadas relacionadas con la tecnología y el sector digital está creciendo rápidamente. El cambio en las profesiones también parece estar impulsando un incremento de las categorías vinculadas a la industria tecnológica, entre otras el *marketing*, la publicidad, el diseño gráfico y el *marketing* digital. Por lo tanto, la transformación digital brinda una oportunidad única para impulsar la transformación productiva en ALC (OECD et al., 2020[8]).

La agenda verde de ALC también afectará a los mercados laborales y a las habilidades y las tareas desempeñadas por los trabajadores. Según las previsiones, conforme aumente el número de nuevas tareas y sectores verdes, se irá destruyendo empleo en las industrias "marrones". No obstante, el efecto neto de la transición verde en el empleo podría ser positivo. El resultado último dependerá de los mecanismos de adaptación para crear empleo formal que resulten de la implementación de políticas verdes (OECD et al., 2022[7]).

A consecuencia de las transformaciones del mercado laboral, en la mayoría de los países de ALC se han destruido empleos de cualificación media, por ejemplo, puestos de trabajo de índole administrativa (Gráfico 3.17). En las dos últimas décadas, el porcentaje de puestos de trabajo de cualificación media de ALC ha descendido en relación con el porcentaje de trabajadores que desempeñan profesiones de cualificación tanto alta como baja (Autor, Katz y Kearney, 2006[53]; Goos y Manning, 2007[54]; OECD, 2017[55]).[3]

Gráfico 3.17. **Cambios en el empleo urbano por nivel de cualificación, países de ALC seleccionados, 2000-21**

Variación en puntos porcentuales de la participación urbana en el empleo, por nivel de cualificación de las profesiones



Nota: Entre las profesiones de alta cualificación están los trabajos incluidos en los grandes grupos 1, 2 y 3 de la clasificación CIUO-88: legisladores, directores y gerentes (grupo 1); profesionales científicos e intelectuales (grupo 2); y técnicos y profesionales de nivel medio (grupo 3). Entre las profesiones de cualificación media se encuentran aquellas incluidas dentro de los grandes grupos 4, 6, 7 y 8 de la clasificación CIUO-88; personal de apoyo administrativo (grupo 4); trabajadores calificados agropecuarios (grupo 6), oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios (grupo 7); y operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores (grupo 8). Entre las profesiones de cualificación baja se encuentran aquellas incluidas en los grandes grupos 5 y 9 de la clasificación CIUO-88; trabajadores del sector servicios y vendedores de comercios y mercados (grupo 5); y ocupaciones elementales (grupo 9), que incluyen a los trabajadores del sector agrícola sin cualificación. Los datos se refieren exclusivamente al empleo en zonas urbanas.

Fuente: Estimaciones de la OCDE a partir de datos de la CEPAL, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?lang=en.

StatLink https://stat.link/un89kq

Nueve de los once países de ALC de los que hay datos disponibles han experimentado un descenso del porcentaje de profesiones de cualificación media. En Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay, este proceso va unido a un incremento de los trabajos de cualificación alta; por el contrario, en Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Ecuador y Perú, el porcentaje de trabajadores de cualificación alta también se contrajo durante el mismo período. De hecho, ambas tendencias muestran la necesidad de políticas que promuevan mejoras en las habilidades de los trabajadores de cualificación media acordes a las futuras demandas del mercado laboral, tales como programas de capacitación o recapacitación y formación profesional (OECD, 2019[56]). El impacto de la pandemia de COVID-19 en el aprendizaje en general, y entre segmentos más vulnerables en particular, amenaza con ampliar las disparidades a largo plazo en cuanto a empleabilidad y acceso a trabajos formales o bien pagados. Las diferencias de acceso a la educación y calidad de esta son obstáculos para la acumulación de habilidades por parte de la población activa. Dado que estas brechas en cuanto a habilidades tienen consecuencias para la productividad, la inclusión social y la inclusión en el mercado laboral, también constituyen un importante obstáculo para el desarrollo (ECLAC, 2022[47]).

Invertir en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible

Los esfuerzos en materia de desarrollo productivo deberían dar prioridad a áreas o sectores con un gran potencial de crecimiento de la productividad a largo plazo (incluidas aquellas actividades que exigen una cualificación alta) y en los que la inversión puede actuar como elemento catalizador. Las iniciativas en ese sentido deberían promover una mayor productividad, trabajos de mejor calidad y el desarrollo de cadenas de valor sostenibles e inclusivas (OECD et al., 2022[7]).

Teniendo en cuenta el gran número de retos sectoriales y horizontales a los que se enfrentan los países de ALC, esas iniciativas serán fundamentales para reforzar las capacidades relacionadas con el proceso de formulación de políticas (p. ej., la planificación, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas) y el financiamiento (entre otras cosas, movilizar los recursos financieros para promover la reforma estructural, lo que incluye también el financiamiento de programas de desarrollo productivo). Conocer mejor los vínculos y las causalidades comunes entre las diferentes cuestiones de política sectorial y los objetivos transversales y horizontales de las políticas será esencial para crear respuestas que aborden sus complejas interacciones, al tiempo que se identifican políticas beneficiosas para todas las partes que promuevan sinergias y ayuden a gestionar las contradicciones resultantes (Capítulos 2 y 4) (CAF, 2018[11]).

El Gráfico 3.18 presenta un conjunto de sectores estratégicos que tienen potencial para impulsar un desarrollo sostenible en la región de ALC. En el gráfico, se usan casillas de colores para identificar el potencial que tiene cada sector para contribuir a distintas áreas del desarrollo sostenible, inclusión social y productividad (véase el código de colores arriba del gráfico). Las inversiones en estas áreas pueden actuar como catalizador de la transformación productiva de los países de ALC y también ayudarles a avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (ECLAC, 2023[15]; ECLAC, 2023[57]; ECLAC, 2023[58]).

Gráfico 3.18. **Sectores con un alto potencial para impulsar el desarrollo sostenible**

Componentes de desarrollo sostenible

- Inclusión social
- Recuperación económica/ generación de empleo
- Diversificación de la producción
- Uso intensivo de tecnología/ conocimiento
- Aumento de la productividad
- Oportunidad de exportación
- Cambio climático/ transición verde
- Tendencias/ nuevos modelos de desarrollo
- Soberanía/ seguridad nacional/ resiliencia
- Empleo cualificado

Transición verde:

Transición energética
La lucha contra el cambio climático exige avanzar hacia una matriz de suministro energético más limpia, así como hacia un consumo más sostenible, aumentando la incorporación de energías renovables. La electrificación así como el desarrollo del hidrógeno verde y los minerales críticos y sus cadenas de valor pueden desempeñar un rol esencial en alcanzar los objetivos de descarbonización.

Economía circular
La economía circular podría tener un impacto significativo en la economía mediante el aumento del PIB y del empleo, además de conseguir una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Gestión sostenible del agua
Pese a que ALC posee la segunda mayor reserva de recursos hídricos del mundo, 161 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable. Existe, por tanto, una necesidad y también una oportunidad de impulsar la inversión para universalizar la cobertura del servicio de abastecimiento de agua a toda la población.

Electromovilidad
La transición hacia el transporte bajo en emisiones, en particular el basado en la electricidad y a través de la prestación de un servicio de transporte público de calidad, es clave para luchar contra el cambio climático y la polución. Además, brinda oportunidades de generación de nuevas actividades económicas.

Turismo sostenible
Tras un largo período de restricciones de la movilidad por la pandemia de COVID 19, los países de ALC buscan reconstruir el sector turístico. En este contexto, el turismo sostenible ofrece una alternativa, si se tienen en cuenta sus impactos socioeconómico y medioambiental, tanto actuales como futuros.

Transformación digital:

Economía digital
El desarrollo digital tiene la posibilidad de incrementar el bienestar de las personas, la productividad de las empresas, la eficiencia y la efectividad del sector público, así como la sostenibilidad ambiental. Esto podría ser el resultado de las sinergias entre dimensiones clave, tales como la conectividad, la adopción de las tecnologías digitales y la promoción de la economía digital.

Exportación de servicios modernos
Los servicios prestados por medios digitales (servicios modernos) han sido la categoría sectorial más dinámica del comercio mundial en los últimos 20 años. Las tecnologías digitales han facilitado el comercio transfronterizo de una serie de servicios que, hasta hace poco, no se consideraban servicios comerciales, tales como los empresariales, financieros, de ingeniería, diseño, educativos y médicos.

Manufactura avanzada
La manufactura avanzada y las tecnologías de la Industria 4.0 representan la vanguardia de la producción industrial. La llegada de la Industria 4.0 conlleva cambios y perturbaciones en la estructura productiva actual de ALC, pero también brinda oportunidades para abordar la industrialización de manera innovadora y eficiente.

Salud y economía del cuidado:

La industria de los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos
La industria manufacturera de productos para la salud, tales como los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos, podría tener una función estratégica, no solo debido a su impacto directo en la salud de las personas, sino también porque puede generar empleos de alta calidad, se sustenta en sólidas cadenas de valor de producción y promueve el avance técnico mediante una intensa labor de I+D e importantes externalidades en materia de conocimiento.

La sociedad del cuidado
La sociedad del cuidado representa una gran oportunidad de crecimiento y empleo, en particular en una región con una población cada vez más longeva y en la que las mujeres han cuidado tradicionalmente de los hijos, los hogares y los ancianos en condiciones de informalidad. Invertir en la sociedad del cuidado podría reducir el trabajo no remunerado que llevan a cabo principalmente estas mujeres y contribuir a que disminuyan las restricciones sobre su participación en el mercado laboral, la política y la sociedad.

Sistemas sostenibles de agricultura y producción de alimentos:

Producción sostenible de alimentos
El incremento de la demanda ocasionado por el aumento de la población exigirá una importante ampliación de la producción de alimentos. La región de ALC contiene un 16% de los suelos agrícolas del mundo y un 33% de la superficie agrícola no utilizada globalmente. La inversión en tecnología, infraestructura y capacitación destinada a mejorar la productividad será un factor clave para el desarrollo agrícola.

Bioeconomía
La bioeconomía engloba la producción, el uso sostenible, la conservación y la regeneración de los recursos biológicos para suministrar productos, servicios, procesos e información a todos los sectores económicos. Promueve procesos de biorrefinería y bioindustrialización para la producción de bienes y servicios en segmentos de mercado con una rápida expansión. Es el caso, por ejemplo, de los mercados de la biotecnología, los biofertilizantes y los biofármacos que, según las previsiones, se duplicarán en los siguientes cuatro a siete años, lo que generará oportunidades de inversión en ALC.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de (ECLAC, 2023[15]; ECLAC, 2023[57]); ECLAC, 2023[58]; ECLAC, 2022[1]; ECLAC, 2020[5]).

Cada sector del Gráfico 3.18 representa oportunidades de inversión para los sectores tanto público como privado. Pese a que esta lista no es exhaustiva y podría cambiar con el paso del tiempo, estas áreas podrían ofrecer importantes oportunidades para transformar

las economías de ALC. Cada país podría orientar sus políticas de desarrollo productivo a actividades económicas relacionadas con dichas áreas, definidas de acuerdo con las características, las fortalezas y las prioridades del país (ECLAC, 2020[5]).

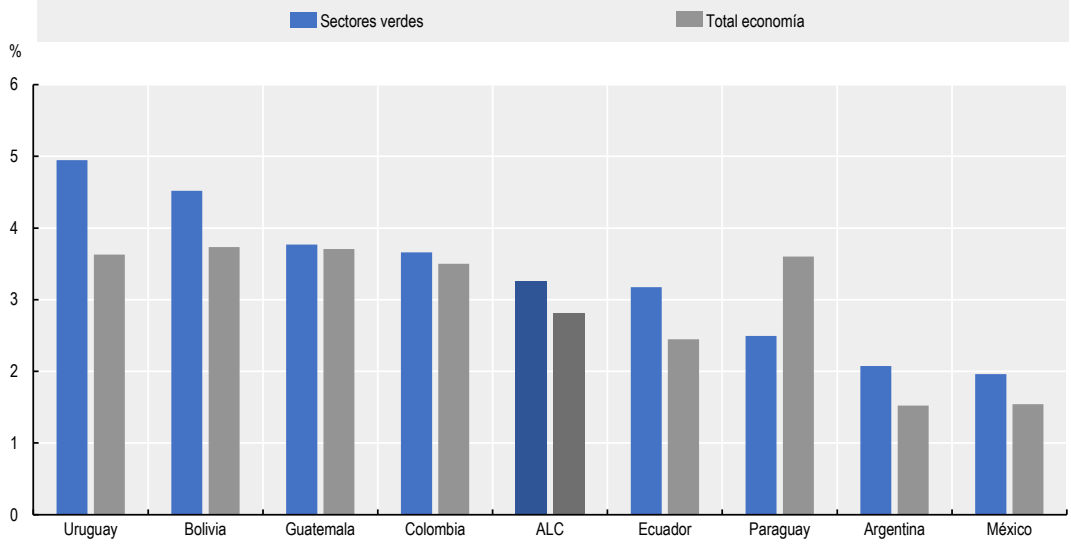
Estos sectores se pueden agrupar en cuatro grandes áreas interrelacionadas en las que están teniendo lugar transformaciones importantes, lo que brinda nuevas oportunidades de inversión y creación de empleo, a saber: i) la transición verde; ii) la transformación digital; iii) la economía del cuidado y la salud; y iv) los sistemas de agricultura y producción de alimentos sostenibles. Dichas áreas no solo podrían estimular la transformación productiva en los países de ALC, sino también contribuir a la transición energética (transición verde); cubrir las carencias y paliar las debilidades evidenciadas durante la crisis del COVID-19 (la economía del cuidado y la salud); mitigar algunas de las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania (sistemas de agricultura y producción de alimentos sostenibles); así como ayudar a crear resiliencia y a reforzar la soberanía nacional, aprovechando el avance tecnológico como catalizador de la mejora de la productividad y la competitividad (transformación digital).

La transición verde

La transición verde brinda una oportunidad sin precedentes para avanzar en la transformación productiva y mejorar el bienestar en ALC (OECD et al., 2022[7]). En las últimas décadas, los sectores verdes de la región han mostrado un crecimiento más dinámico que el del resto de la economía. Desde 2005, estos sectores verdes han crecido un 3.3% cada año, frente a un 2.8% en el caso de la economía total (Gráfico 3.19).[4]

Gráfico 3.19. **Crecimiento del valor agregado de los sectores verdes con respecto al resto de la economía en ALC, 2005-21**

Tasas de crecimiento anual promedio



Nota: Los sectores verdes se definen en cada país identificando primero el número de tareas verdes que realizan los trabajadores en su profesión y analizando, posteriormente, las diez industrias principales en las que se distribuyen dichos trabajos. El valor agregado se define a precios constantes encadenados.

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en (OECD et al., 2022[7]) y en las cuentas nacionales de los países.

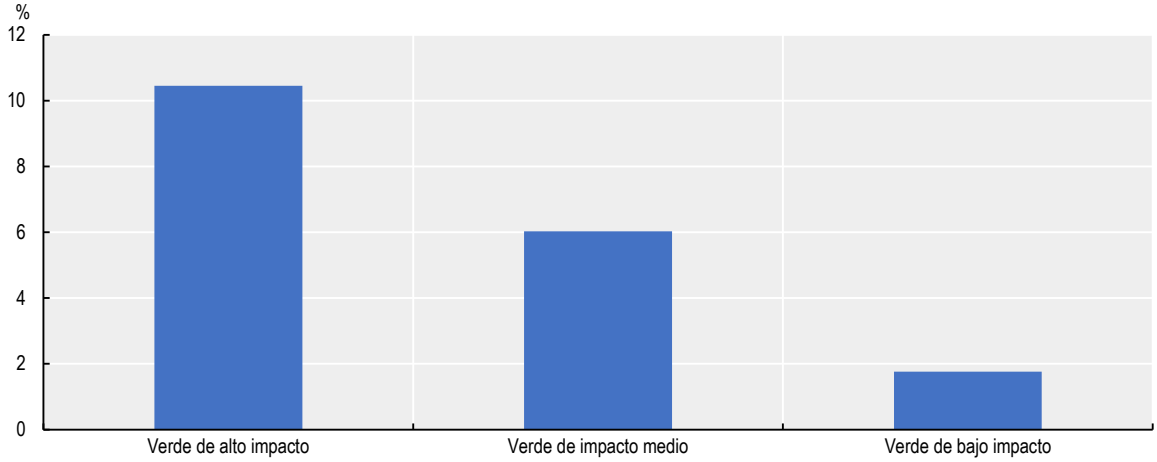
StatLink https://stat.link/n2vhry

Los efectos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en los mercados laborales de los países de ALC implicarán tanto la creación de nuevas oportunidades de empleo, por una parte, como la desaparición de ciertos trabajos debido a las políticas de descarbonización en sectores marrones, por otra. El efecto neto sobre el empleo dependerá de la estructura industrial de cada país y de la eficacia de los paquetes de inversión para impulsar

la creación de empleo verde y amortiguar, al mismo tiempo, el impacto negativo de las políticas de mitigación de los fenómenos climáticos en empresas específicas y en el mercado laboral en general (OECD et al., 2022[7]; OECD, 2023[59]). Gracias a la proporción relativamente alta de sectores verdes que existe en ALC con respecto a los sectores marrones, el efecto neto de la transición verde en el empleo podría ser positivo, ya que los sectores marrones representan en ALC un 35% del empleo total, frente a un 55% en el caso de los sectores verdes. El resultado real dependerá, sin embargo, de la agenda de inversión destinada a implementar mecanismos de adaptación para crear empleo formal en los sectores verdes. Incluso en un escenario en el que la inversión crezca tan solo un punto porcentual al año, los efectos serían positivos en comparación con el escenario de negocios como de costumbre (*business as usual* en inglés [BAU]). Si, por ejemplo, los sectores verdes generasen empleo de acuerdo con un escenario de bajo impacto (en el que la inversión aumenta un punto porcentual al año) y, al mismo tiempo, se destruyese empleo en los sectores marrones de acuerdo con un escenario de alto impacto (en el que el valor agregado de cada sector de este tipo disminuye cinco puntos porcentuales al año), seguiría registrándose un aumento del empleo total del 1.8% en 2030. En el caso de las políticas de impacto medio (incremento anual de la inversión de dos puntos porcentuales) y alto (crecimiento anual de tres puntos porcentuales) relativas a los sectores verdes, en 2030 la creación de empleo adicional sería del 6.0% (impacto medio) y del 10.5% (alto impacto) del empleo total registrado en los sectores marrones y verdes (Gráfico 3.20).

Gráfico 3.20. **Variación neta del empleo de aquí a 2030 a través de la inversión en sectores verdes en ALC**

Variación porcentual del empleo en comparación con BAU 2020, diferentes escenarios



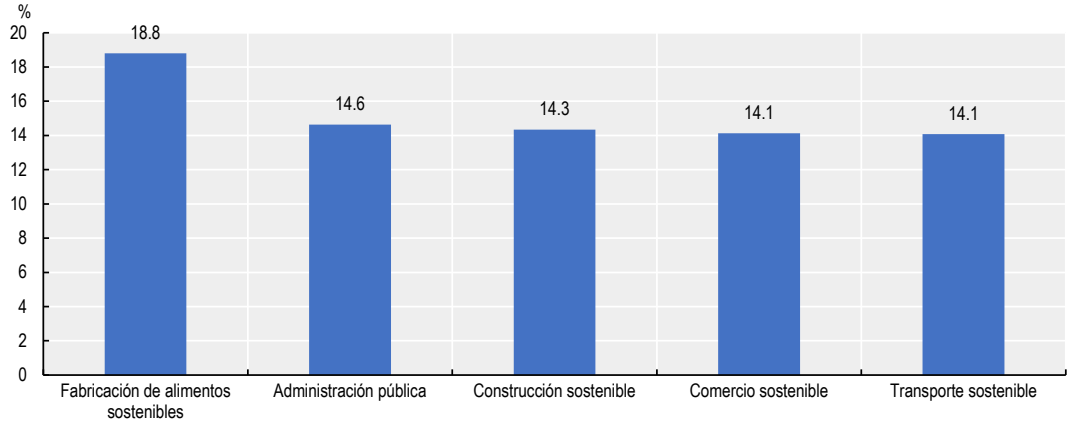
Nota: Los países de ALC incluidos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Los datos se refieren a un promedio no ponderado sobre las previsiones de los países. Los sectores verdes se definen en cada país identificando primero el número de tareas verdes que realizan los trabajadores en su profesión y analizando, posteriormente, las diez industrias principales en las que se distribuyen dichos trabajos. En el escenario BAU, se parte del supuesto de que, en cada sector verde, el valor agregado y el empleo seguirán la misma dinámica que en los últimos diez años. Los escenarios de contraste se definen de acuerdo con el impacto de las políticas verdes que tienen por objeto impulsar la inversión en capital fijo y humano, con un impacto positivo en el crecimiento del valor agregado de cada sector verde. El escenario de alto impacto parte del supuesto de que el valor agregado de cada sector aumentará 3 puntos porcentuales al año, ajustándose al nuevo equilibrio. El escenario de impacto medio parte del supuesto de que el valor agregado aumentará dos puntos porcentuales, mientras el de bajo impacto asume que aumentará un punto porcentual. Los sectores marrones se ajustan a la definición de CAIT (https://datasets.wri.org/dataset/cait-country. En el escenario BAU, se parte del supuesto de que, en cada sector marrón, las emisiones de GEI, el valor agregado y el empleo seguirán la misma dinámica que en los últimos diez años. Los escenarios de contraste se definen de acuerdo con el impacto de las políticas verdes que tienen por objeto reducir las emisiones netas totales de GEI de cada sector marrón en un 50% en 2030 (con respecto a los niveles de 2020). El Gráfico 3.20 asume un escenario de alto impacto en el que el valor agregado de cada sector marrón disminuirá 5 puntos porcentuales al año, ajustándose al nuevo equilibrio. En todas las previsiones, la productividad total de los factores (PTF) crecerá un punto porcentual, debido a una disminución de los daños provocados por fenómenos climáticos y a un cambio inducido por las nuevas tecnologías. La variación del empleo se prevé usando la elasticidad a corto plazo estimada con respecto al valor agregado (mediante un modelo dinámico de panel), que se define por cada sector y país, en la última década.
Fuente: (OECD et al., 2022[7]).

StatLink https://stat.link/giq3kj

La identificación de los sectores verdes depende de la distribución de las tareas verdes entre las distintas profesiones y de la estructura industrial de cada país de ALC. El análisis de los nueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay) en este sentido pone de manifiesto información importante de índole regional. En un escenario en el que la inversión en sectores verdes experimente un incremento anual de 3 puntos porcentuales, la creación neta de empleo adicional podría alcanzar el 10.5% de aquí a 2030 (OECD et al., 2022[7]). En particular, en términos de creación de empleo verde, varias actividades muestran un alto potencial: la fabricación sostenible de alimentos (+18.8% de nuevos empleos verdes proyectados para 2030) está relacionada con modelos de producción más sostenibles en agricultura, alimentación y bebidas, y productos intermedios; la administración pública (+14.6%) incluye actividades relacionadas con la planificación e implementación de políticas sostenibles (desde la administración en general hasta el desarrollo local sostenible y políticas energéticas). También comprende la supervisión y administración de la vida social y económica, como las actividades públicas relacionadas con la economía social. La construcción sostenible (+14.3%) está vinculada principalmente a nuevas construcciones, instalaciones y terminaciones de edificios sostenibles para mejorar la eficiencia energética de los edificios gracias al uso de nuevas tecnologías. También incluye reparaciones, ampliaciones y reformas para mejorar las construcciones existentes desde el punto de vista medioambiental. El transporte sostenible (+14.1%) refleja la necesidad de adoptar sistemas de transporte de pasajeros y mercancías más sostenibles, y de apoyar las actividades de transporte sostenible incluidas las relacionadas con la transformación digital y las telecomunicaciones. Por último, el comercio sostenible (14.1%) representa los nuevos modelos de negocio de venta de bienes y servicios, y de reparación de bienes que deberían contribuir al desarrollo de la economía circular.

Gráfico 3.21. **Posible variación del empleo en sectores verdes de ALC para 2030**

Variación porcentual del empleo en comparación con el BAU 2020, escenario de alto impacto de inversiones en capital fijo y humano



Nota: Los países de ALC incluidos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Los datos se refieren a un promedio no ponderado sobre las previsiones de los países. Los sectores verdes se definen en cada país identificando primero el número de tareas verdes que realizan los trabajadores en su profesión y analizando, posteriormente, las diez industrias principales en las que se distribuyen dichos trabajos. En el escenario BAU, se parte del supuesto de que, en cada sector verde, el valor agregado y el empleo seguirán la misma dinámica que en los últimos diez años. Los escenarios de contraste se definen de acuerdo con el impacto de las políticas verdes que tienen por objeto impulsar la inversión en capital fijo y humano, con un impacto positivo en el crecimiento del valor agregado de cada sector verde. El escenario de alto impacto parte del supuesto de que el valor agregado de cada sector aumentará 3 puntos porcentuales al año, ajustándose al nuevo equilibrio. En todas las previsiones, la PTF crecerá un punto porcentual, debido a una disminución de los daños provocados por fenómenos climáticos y a un cambio inducido por las nuevas tecnologías. La variación del empleo se prevé usando la elasticidad a corto plazo estimada con respecto al valor agregado (mediante un modelo dinámico de panel), que se define por cada sector y país, en la última década.

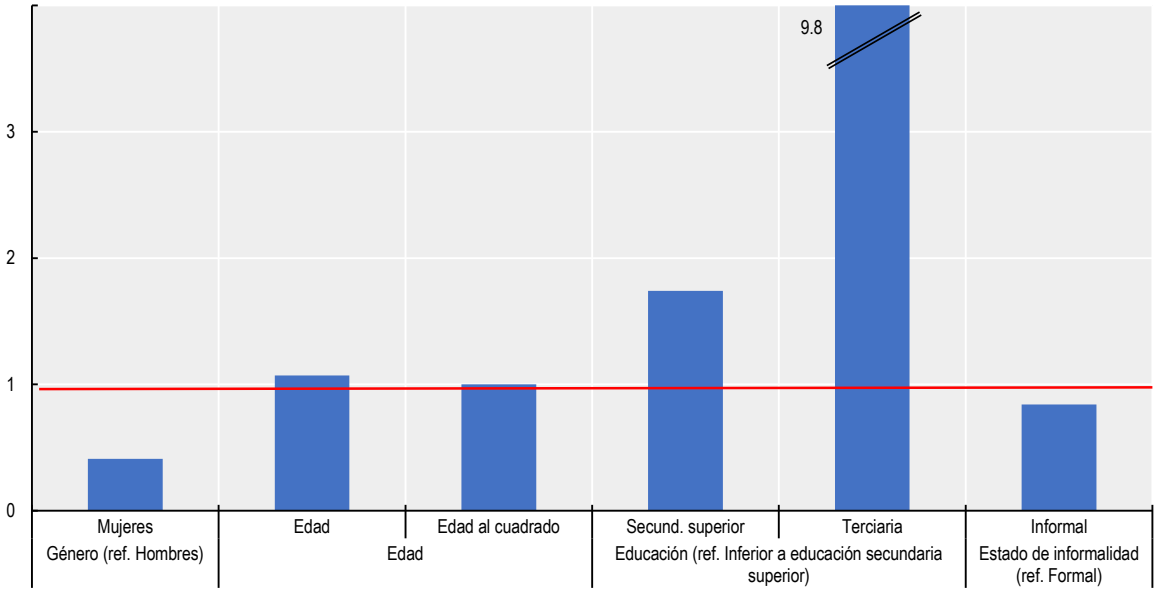
Fuente: Los cálculos de los autores se basan en (OECD et al., 2022[7]).

StatLink https://stat.link/bpqz24

La transición verde representa además una oportunidad única para impulsar la calidad del trabajo en la región de ALC. Las nuevas profesiones verdes están relacionadas principalmente con habilidades y conocimientos científicos avanzados. Los trabajadores que realizan un alto número de tareas verdes en su puesto de trabajo tienen más probabilidades de haber recibido una educación formal superior que la población activa general de ALC (Gráfico 3.22). Sin embargo, en la región siguen existiendo grandes diferencias en función del género en lo que se refiere a la predisposición de la población estudiantil a cursar carreras de ciencias. Pese a que existe un porcentaje similar de hombres (34%) y mujeres (35%) jóvenes que afirma esperar trabajar en una profesión relacionada con la ciencia, cada grupo parece decantarse por campos diferentes. Las mujeres optan por profesiones relacionadas con la salud en mayor medida que los hombres, mientras que estos se deciden por profesiones relacionadas con las TIC, la ciencia o la ingeniería en mayor medida que las mujeres (OECD et al., 2020[8]). Para lograr resultados más equilibrados en lo que atañe a la formalización y la calidad del empleo, las políticas deberían ir encaminadas a reducir el sesgo de género en la elección de una carrera profesional.

Gráfico 3.22. **En ALC, es más probable que quienes desempeñan trabajos verdes sean hombres, con una educación superior y empleados de manera formal**

Ratios de probabilidades



Nota: La figura muestra los cocientes de probabilidades (*odds ratio*) de la regresión logística de tener un trabajo con una alta intensidad de tareas verdes, con los regresores mostrados en el gráfico. La *odds ratio* es la relación entre las probabilidades de que se produzca un acontecimiento en un grupo y las probabilidades de que se produzca en otro grupo. Un cociente de probabilidades superior a 1 indica que es más probable que una condición o acontecimiento se produzca en el primer grupo. Un cociente de probabilidades inferior a 1 indica que es menos probable que el acontecimiento se produzca en el primer grupo. Por ejemplo, en el gráfico, la probabilidad de que las mujeres ocupen un empleo verde es 0.4 veces la de los hombres, lo que significa que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de estar empleadas en una ocupación verde. Los datos se refieren a una muestra colectiva de trabajadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay en 2021. Las tareas verdes se identifican usando la metodología de (Vona et al., 2018[60]).

Fuente: Cálculos de los autores a partir de encuestas nacionales sobre la población activa.

StatLink https://stat.link/wgnqo6

Para que la transición verde sea efectiva, serán necesarias inversiones públicas y privadas considerables en capital físico, así como políticas adecuadas que se anticipen a la demanda de habilidades para los nuevos puestos de trabajo que se crearán. Por lo tanto, se precisan políticas de educación y capacitación, para avanzar hacia un modelo de

desarrollo más justo e inclusivo e incrementar el bienestar de la población. Los servicios de empleo efectivos pueden contribuir a que los trabajadores se trasladen de los sectores marrones a los verdes. En función del sector y la región, cabe señalar que podría producirse un importante desplazamiento de trabajadores (OECD et al., 2021[6]; OECD et al., 2022[7]).

A continuación, se examina el potencial de la transición energética para avanzar en la transformación de la producción verde en los países de ALC. Otros sectores descritos en el Gráfico 3.18, como el de la electromovilidad, la economía circular, el turismo sostenible y la gestión del agua, desempeñan también un papel principal en la consecución de la transición verde y la promoción del desarrollo sostenible en la región.

Transición energética

La lucha contra el cambio climático exige avanzar hacia una matriz energética con bajas emisiones y acelerar los hábitos de consumo sostenible. Las energías renovables representaron un 33% del suministro energético primario de ALC en 2020, una cifra considerablemente superior al nivel mundial, del 13%, aunque los combustibles fósiles siguieron representando un 67%. Por sectores, el transporte es el mayor consumidor final de energía de la región (35%), que procede prácticamente de manera exclusiva de los combustibles fósiles, seguido de la industria (30%) y del consumo residencial (18%) (OECD et al., 2022[7]).

Para satisfacer la demanda potencial de energía limpia y electrificación de ALC, tendrán que duplicarse las inversiones en el sector de la electricidad antes de que termine la década en curso y triplicarse con creces los niveles actuales de aquí a 2050 (IRENA, 2021[61]). Para aumentar las inversiones en energía renovable en la magnitud necesaria para lograr la transición energética, los países de ALC han de adoptar políticas integrales e instrumentos adecuados para atraer inversión privada (Capítulos 2 y 4). Tienen que diseñarse políticas de inversión dentro del contexto más general de las políticas de desarrollo productivo y transición energética. Estas políticas han de tener en cuenta los factores que impulsan la inversión, las fuerzas del mercado y el desarrollo tecnológico internacional para adaptar el conjunto de herramientas y dirigir las inversiones hacia tecnologías, sectores o etapas de la cadena de valor que sean prioritarios (ECLAC, 2023[62]; OECD, 2023[63]). Las energías renovables y la electrificación, así como el hidrógeno verde y los minerales críticos, desempeñarán un papel principal en la consecución de la transición energética en ALC.

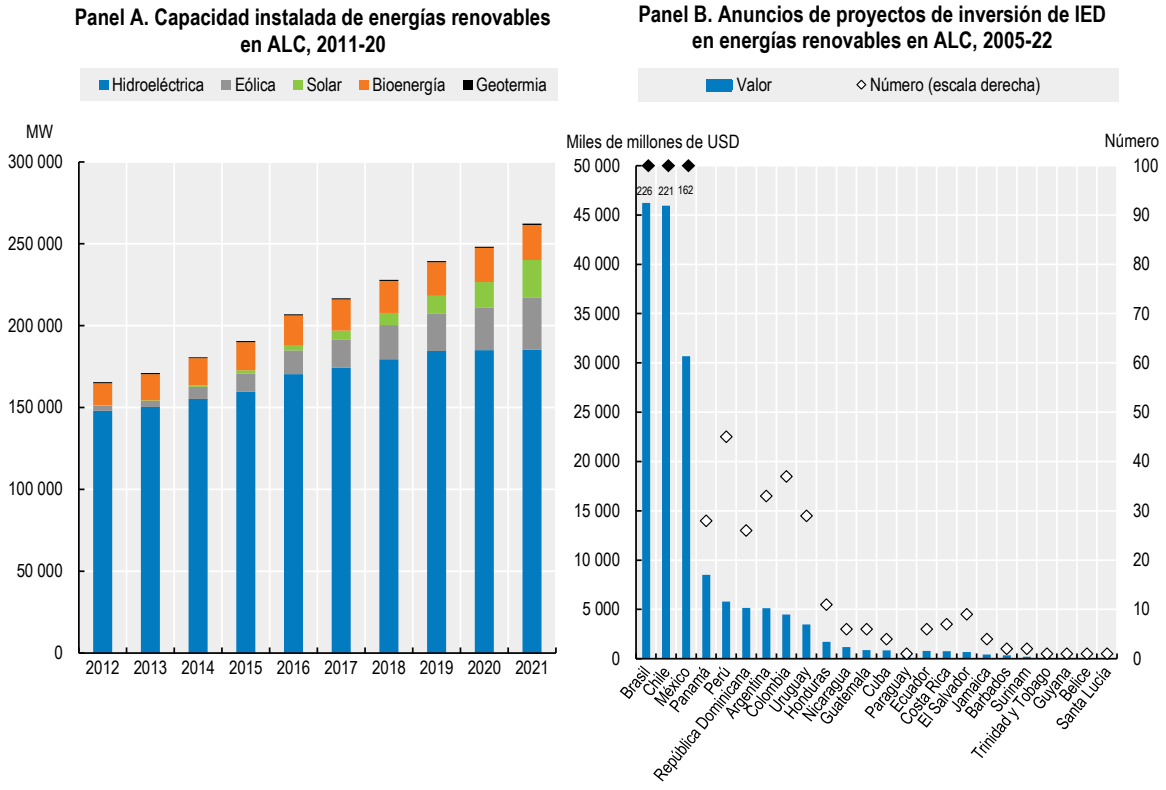
Energías renovables y electrificación

Los países de ALC poseen mercados energéticos bien desarrollados, además de un gran potencial, por su riqueza en recursos energéticos renovables. Para satisfacer la creciente demanda de electricidad de la región, es necesario sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, concentrar los esfuerzos en la gestión de las redes eléctricas nacionales, y promover y reforzar las iniciativas regionales de integración eléctrica. Además, a fin de garantizar los recursos necesarios para avanzar en la transición energética, los países de ALC tendrán que implementar estrategias a medio y largo plazo que movilicen una inversión nacional e internacional en el desarrollo de las energías renovables. La IED puede jugar un papel esencial en este proceso (ECLAC, 2023[62]; OECD et al., 2022[7]).

La capacidad instalada de energías renovables en ALC aumentó un 5% entre 2019 y 2020, y la capacidad de producción de hidroenergía representó más del 70% del total. La energía solar fue la que más creció (36%), seguida de la eólica (18%), la bioenergía (2%) y la energía hidroeléctrica (1%) (Gráfico 3.23, Panel A). En las dos últimas décadas, los anuncios de proyectos de IED relacionados con energías renovables en ALC, tanto en valor como en

número, han estado relacionados principalmente con Brasil, Chile y México (Gráfico 3.23, Panel B).

Gráfico 3.23. **Energías renovables en ALC: capacidad instalada y anuncios de proyectos de IED, 2005-22**



Fuente: Elaboración de los autores a partir de (IRENA, 2021[61]) y (ECLAC, 2023[62]).

StatLink https://stat.link/ad5t3p

El acceso universal a la electricidad sigue planteando un reto en ALC. Un total de 17 millones de personas de esta región sigue sin tener acceso a la electricidad, sobre todo en las zonas rurales, donde la tasa de electrificación de algunos países ronda el 76% (OECD et al., 2022[7]). Para que toda la población tenga acceso, debería invertirse el 1.3% anual del PIB regional durante diez años y deberían incrementarse las tecnologías renovables (principalmente solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7 sobre el acceso a energía asequible y limpia. Estas medidas podrían crear 7 millones de nuevos empleos verdes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 20% (OECD et al., 2022[7]).

Hidrógeno verde

El hidrógeno verde es una fuente de energía producida mediante un proceso que utiliza energía renovable y, por lo tanto, no genera contaminación atmosférica. Dada la abundancia y la competitividad de los recursos de energía renovable de los que dispone ALC (energía hidroeléctrica, solar y eólica), el hidrógeno verde podría ser un catalizador de la siguiente fase de la transición al uso de energías limpias en la región, que también contribuiría a la consecución de los objetivos de seguridad y resiliencia energéticas (RICYT, 2022[34]). El hidrógeno es también una de las opciones principales para almacenar energía renovable (IEA, 2019[64]).

Aunque todavía no existe ninguna experiencia de producción de hidrógeno verde a escala comercial en la región, varios países de ALC cuentan con hojas de ruta y estrategias oficiales, así como con proyectos piloto, para desarrollar una producción que podría abastecer a los mercados nacionales e internacionales (OECD et al., 2022[7]). En la actualidad se están implementando proyectos piloto de hidrógeno verde en ALC en sectores como el del transporte (buses, camiones de larga distancia, transporte marítimo) y la minería (especialmente en reemplazo del diésel de los camiones). Por ejemplo, en 2022, Uruguay presentó su Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde con el objetivo de desarrollar un mercado doméstico y los primeros proyectos piloto para 2025; escalar el mercado doméstico y tener en operación el primer proyecto para exportación para 2030; y consolidar el mercado doméstico, con el objetivo de producir 20 GW de electricidad y 10 GW de electrolizadores para 2040 (MIEM, 2022[65]).

Las políticas deberían promover la industria del hidrógeno verde como motor de una reindustrialización sostenible, respaldada por clústeres industriales distribuidos por toda la región, que podrían reforzarse mediante iniciativas destinadas a este tipo de organizaciones industriales en el marco de las políticas de desarrollo productivo de los países de ALC. Un reto principal es la falta de tecnologías apropiadas (sobre todo equipos de electrólisis) en la región para producir hidrógeno verde, por lo que resulta imperativo crear capacidades y formar a expertos para desarrollar esta industria (RICYT, 2022[34]).

Minerales críticos

ALC ocupa una posición estratégica para el suministro de minerales críticos (p. ej., litio y cobre) que son insumos esenciales para incrementar el uso de tecnologías de energías renovables. Para la transición verde, son necesarias estas tecnologías (y, por ende, también los minerales) en ámbitos como el de las turbinas eólicas, los paneles solares fotovoltaicos, las baterías de iones de litio para la electromovilidad y la infraestructura de transmisión. ALC posee el 61% de las reservas mundiales de litio, el 39% de las reservas de cobre y el 32% de las reservas de níquel y plata. En la actualidad, es responsable del 37% de la producción mundial de cobre y litio (OECD, 2022[66]). Se prevé que la demanda de minerales críticos crezca exponencialmente de aquí a 2040 (en comparación con los niveles de 2020): la de litio podría crecer hasta 42 veces; la de grafito, 25 veces; la de cobalto, 21 veces; la de níquel, 19 veces; y la de cobre, 2.7 veces (IEA, 2021[67]). Para satisfacer el crecimiento de la demanda mundial y evitar rigideces por el lado de la oferta, se deberá multiplicar la capacidad extractiva y de procesamiento de minerales críticos en la región de ALC teniendo en cuenta los impactos socioambientales.

Transformación digital

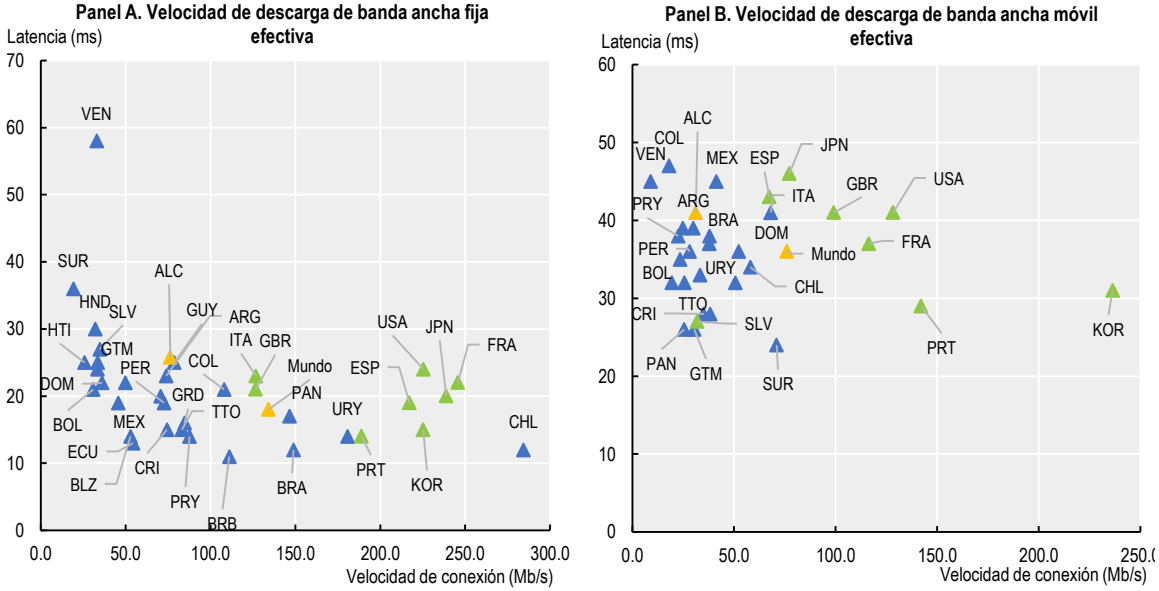
La transformación digital puede incrementar el bienestar de las personas, la productividad de las empresas, la eficiencia y la efectividad del sector público, así como la sostenibilidad ambiental. Se está avanzando hacia la transformación digital como resultado de las sinergias entre dimensiones fundamentales tales como la conectividad, la adopción de las tecnologías digitales y la promoción de las economías digitales (ECLAC, 2021[68]). Si los países de ALC tienen capacidad para ofrecer una infraestructura digital adecuada para el funcionamiento de redes internacionales de producción por medios digitales, dicha capacidad podría constituir un nuevo factor determinante fundamental en las decisiones de las empresas transnacionales con respecto a su localización.

En la actualidad, la disponibilidad y el uso de tecnologías digitales varía enormemente en toda ALC. Pese a los avances en conectividad, siguen existiendo diferencias importantes en cuanto a acceso y uso de las tecnologías digitales dentro de los países de ALC y entre estos, en especial si se comparan con economías más avanzadas. En 2021, la penetración

de la modalidad fija de banda ancha en los hogares de ALC fue del 62%, muy por debajo de los niveles de América del Norte (cerca del 100%) y Europa (90%). Las diferencias existentes en la región son un reflejo de las desigualdades en cuanto a ingresos: un 66% de los hogares rurales y un 43% de los hogares de los dos quintiles de menores ingresos siguen sin tener conexión a Internet, frente a solo un 25% de los hogares urbanos (ECLAC, 2022[69]).

La calidad de las conexiones de banda ancha fija varía entre los distintos países de ALC (OECD et al., 2020[8]). Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Uruguay destacan por tener elevadas velocidades promedio de descarga (más de 100 megabits por segundo o Mb/s) y una baja latencia (menos de 20 milisegundos). Estas cifras superan el promedio mundial y resultan comparables a la calidad de las conexiones que existe en economías avanzadas como Japón, la República de Corea y los Estados Unidos. Por su parte, Argentina, Costa Rica, México, Paraguay y Perú están en una situación intermedia, con velocidades de más de 50 Mb/s (igual que el promedio de ALC), mientras que Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras se encuentran más rezagados (Gráfico 3.24, Panel A). Las conexiones de banda ancha móvil son la principal modalidad de acceso en esta región. Su calidad es más homogénea (que la de la banda ancha fija), con velocidades cercanas a los 30 Mb/s y una latencia de 35 milisegundos en general, aunque está por detrás de la observada en países más avanzados (Gráfico 3.24, Panel B).

Gráfico 3.24. **Velocidades de descarga de banda ancha fija y móvil en ALC, 2022**



Fuente: CEPAL, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, sobre la base de Speedtest Global Index (www.speedtest.net/global-index).

StatLink https://stat.link/zuqld4

La infraestructura digital es necesaria para que las redes internacionales de producción por medios digitales funcionen de manera óptima. Si los países de ALC pueden facilitar una infraestructura digital adecuada, esto podría atraer empresas transnacionales a la región.

Se está acelerando la adopción de tecnologías avanzadas en los sectores de producción

Pese a que las empresas de ALC poseen un elevado nivel de conectividad, siguen estando muy por detrás de las de los países más desarrollados en cuanto a uso de las

tecnologías digitales en sus procesos de suministro, fabricación y distribución. Sin embargo, las empresas de ALC han acelerado notablemente la adopción de tecnologías digitales avanzadas desde la pandemia de COVID-19 (en particular, en el caso de las grandes empresas con más de 200 empleados). La computación en la nube fue la tecnología más utilizada por las empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México en 2020 (55%), y también la que mayor crecimiento tuvo durante la pandemia (26%), seguida de los macrodatos y las plataformas digitales (19% en ambos casos), el Internet de las cosas (18%) y la inteligencia artificial (16%) (Basco y Lavena, 2021[70]). Sin embargo, más de un 70% de las empresas de ALC tiene solo una presencia pasiva en Internet a través de sus sitios web, lo cual pone de manifiesto las enormes brechas en cuanto a adopción de tecnologías digitales emergentes y maduras. Por lo tanto, queda mucho por hacer para ayudar a las empresas, en particular a las mipymes, a adoptar las tecnologías digitales existentes (Vilgis, Jordán y Patiño, 2023[71]).

La IED en la economía digital va en aumento en ALC

Los anuncios de nuevos proyectos de IED y las fusiones y adquisiciones en actividades relacionadas con la economía digital están aumentando en ALC. Sin embargo, la región solo recibió un 7% de los proyectos mundiales de IED en 2021 (frente al 33% de Europa occidental, el 18% de Asia y el Pacífico y el 12% de América del Norte). El número de proyectos de inversión anunciados aumentó de 118 en 2005 a 396 en 2021, mientras que las fusiones y adquisiciones de empresas relacionadas con la economía digital pasaron de representar el 8% del número total de operaciones en 2005 al 17% en 2021. El importe de inversión de los proyectos anunciados alcanzó el nivel máximo de 33 000 millones de USD en 2021.

Los anuncios de proyectos de telecomunicaciones han concentrado la mayor inversión extranjera directa de la región, alrededor del 70% del total entre 2005 y 2021. Si se considera el número de proyectos, el 60% se anunció en el sector de *software* y servicios informáticos, y un 30% en el de las telecomunicaciones.

En los últimos años, algunos actores de capital riesgo importantes han centrado su atención en sectores relacionados con la transición digital en ALC. En 2022, las inversiones de capital riesgo en la región alcanzaron los 7 800 millones de USD, el valor más alto jamás registrado (LAVCA, 2023[72]).

La economía del cuidado y la salud

La industria farmacéutica posee un rol estratégico que trasciende el ámbito de la salud, y puede generar empleo de gran calidad. Gracias a la intensiva actividad de I+D de este sector, también puede promover el avance técnico y efectos indirectos positivos relevantes en materia de conocimientos.

La alteración de la cadena de suministro provocada por la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las debilidades de esta industria en ALC. Para hacer frente de mejor manera a futuras emergencias sanitarias, es urgente reducir el alto nivel de dependencia de las empresas transnacionales que tiene la región. Para ello, es necesario desarrollar industrias nacionales más resilientes y autosuficientes reforzando las capacidades científicas, tecnológicas y productivas regionales. La región dio un paso en esta dirección en 2021 con la aprobación de un Plan de Autosuficiencia Sanitaria (ECLAC, 2021[73]).[5]

Las inversiones nacionales y regionales deben desempeñar un papel central en la generación de condiciones propicias para el desarrollo y el refuerzo de las capacidades de aquellos países de ALC que tengan una industria manufacturera relacionada con la salud. La inversión extranjera también será esencial para facilitar la transferencia de tecnología

y la integración de las empresas de ALC en las cadenas de valor mundiales. Sin embargo, la región solo recibió un 0.55% de la inversión mundial en el sector entre 2005 y 2021 (ECLAC, 2022[16]).

El sector farmacéutico presenta oportunidades para ALC

Si bien las transnacionales dominan el mercado de los medicamentos de marca, muchos de los países de ALC cuentan con capacidades desarrolladas para la elaboración de productos farmacéuticos. En Argentina, Brasil y México, los laboratorios nacionales tienen un papel fundamental en la producción de medicamentos, biosimilares y genéricos. De los 15 mayores laboratorios en ventas, 8 se encuentran en Argentina y Brasil, 6 en México y 1 en Colombia (ECLAC, 2021[73]).

Sin embargo, la participación de la región en el comercio internacional de productos farmacéuticos y biofarmacéuticos solo representó un 0.7% de las exportaciones mundiales en 2020. El valor de las exportaciones de productos farmacéuticos de ALC disminuyó un 32% entre 2012 y 2020, al descender hasta los 4 900 millones de USD, y la región presenta un déficit comercial persistente en este sector. En 2020, el valor de las importaciones de productos farmacéuticos fue seis veces mayor que el de las exportaciones (ECLAC, 2021[73]).

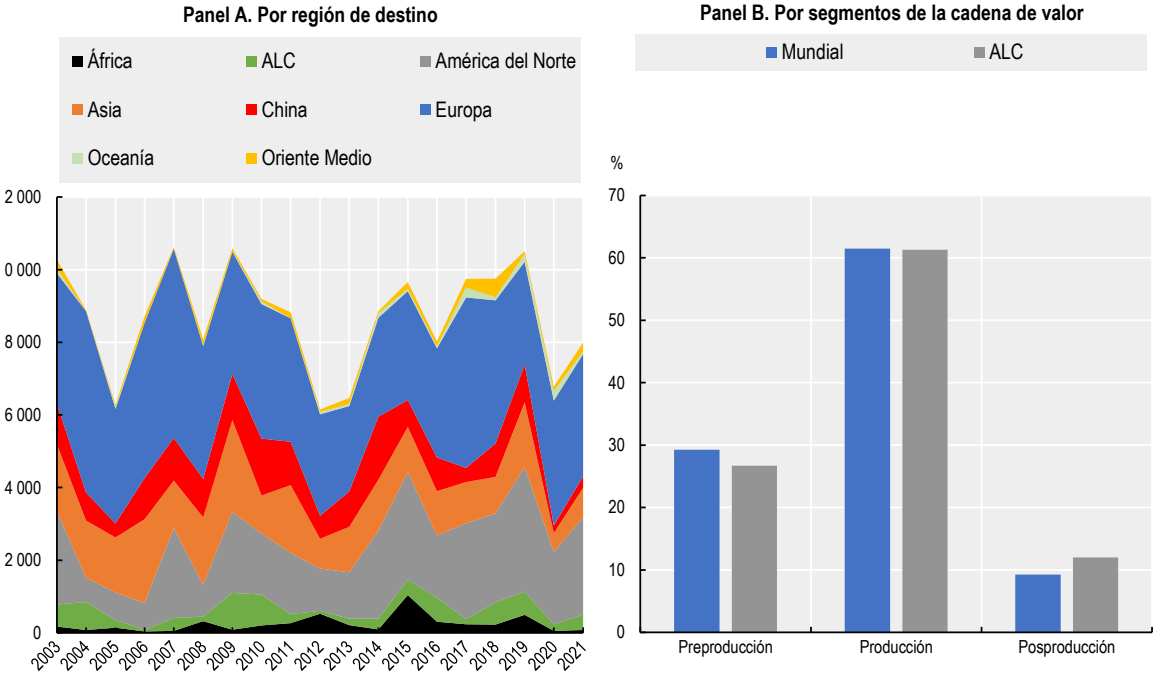
El sector farmacéutico presenta oportunidades importantes para los países de ALC. En primer lugar, el número de medicamentos micromoleculares y medicamentos de marca cuyas patentes van a caducar se duplicará de aquí a 2028. Este segmento de mercado ofrece nuevas posibilidades a los productores de ALC que ya cuentan con capacidades desarrolladas en la producción de genéricos. Además, el mercado de los biosimilares representa una alternativa segura y barata a los medicamentos biológicos con perspectiva de caducidad de patentes a corto plazo.

Los ensayos clínicos son una de las principales etapas del proceso de I+D del sector y uno de los mercados más prometedores para ALC. Si bien la región ha aumentado su participación y sus capacidades para el desarrollo de ensayos clínicos, la mayoría de estudios de este tipo son presentados por laboratorios o institutos internacionales.

Las grandes multinacionales farmacéuticas tienen una escasa presencia en ALC

América Latina y el Caribe no ha sido un destino destacado para el desarrollo de nuevos proyectos en el sector farmacéutico. La región solo recibió un 5% del total global de los proyectos anunciados entre 2005 y 2021. Diez empresas (seis europeas, tres estadounidenses y una canadiense) representaron un 50% de los proyectos de inversión anunciados en ALC. Brasil recibió el 33.9% de los anuncios totales realizados y México, el 17.4% (ECLAC, 2023[57]). Además, los anuncios de proyectos farmacéuticos en ALC se han orientado principalmente a actividades de la fase de producción. El énfasis en las inversiones previas a la producción fue inferior a la media mundial, especialmente en lo que respecta a las actividades de I+D, y el volumen de inversiones posteriores a la producción fue ligeramente superior, sobre todo en servicios logísticos y venta al por menor (Gráfico 3.25).

Gráfico 3.25. **Proyectos de IED anunciados en la industria farmacéutica de ALC y a nivel mundial, 2003-21**



Fuente: Cálculos de los autores basados en el *Financial Times*, fDi Markets.

StatLink https://stat.link/mavr8b

América Latina y el Caribe puede reforzar su industria farmacéutica y avanzar hacia un incremento de la oferta de medicamentos en el mercado regional. Los cambios tecnológicos y estructurales de esta industria exigen un esfuerzo en materia de inversiones para mejorar las capacidades de innovación y producción, y convertir los productos farmacéuticos en un motor de desarrollo para la región. Para atraer IED, es necesario cumplir los requisitos previos básicos del sector: mano de obra cualificada; infraestructura básica; acceso a insumos; marcos institucionales adecuados; correcta regulación de la propiedad intelectual y la sanidad; aumento de la inversión en I+D; y consolidación de la integración regional en las cadenas de producción y distribución. Este programa de acción exige asociaciones y colaboración, como mínimo, a dos niveles. Implica trabajar en iniciativas regionales, tales como la implementación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria, además de reforzar las políticas de desarrollo productivo a nivel nacional y subnacional (ECLAC, 2021[73]).

Los países de ALC se encuentran rezagados en el mercado mundial de dispositivos médicos

El mercado de los dispositivos médicos puede ser un sector estratégico para los países de ALC. En 2018, se calculó que la industria de los dispositivos médicos tenía un valor de 430 000 millones de USD y que la producción mundial se situó principalmente en Estados Unidos, Europa y Japón (ECLAC, 2023[57]). En los últimos veinte años, se ha iniciado un proceso de relocalización de algunas etapas de fabricación de este sector, lo que ha generado oportunidades para que los países de ALC se posicionen en las cadenas de valor mundiales de estos productos. En la actualidad, la mayoría de países de ALC son importadores netos de dispositivos médicos procedentes de los países con altos ingresos. Solo una pequeña fracción de la demanda local se satisface con productos fabricados por pequeñas empresas nacionales con un nivel bajo o medio de sofisticación

tecnológica. Brasil constituye una excepción, ya que el 50% de su demanda de dispositivos médicos se satisface con productos nacionales (Drucaroff, 2021[74]). Algunas empresas multinacionales que exportan dispositivos médicos al mercado norteamericano han comenzado a instalarse en Costa Rica, la República Dominicana y México. Por ejemplo, el sector de dispositivos médicos en México ha aprovechado las prácticas de *nearshoring* y la proximidad geográfica para fomentar el acoplamiento estratégico con la economía de Estados Unidos. De 2003 a 2020, las exportaciones mexicanas de dispositivos médicos crecieron un 8.6% anual, en promedio, y casi el 97% de ellas se exportaron a Estados Unidos.

Para conseguir un nuevo modelo de desarrollo más justo y sostenible, es fundamental construir una sociedad del cuidado

La sociedad del cuidado constituye una oportunidad estratégica para lograr un crecimiento sostenible y equitativo en ALC. El objetivo de las políticas debería ser el de fusionar las dimensiones económica y ambiental, así como revertir la desigualdad social y de género, para convertir el cuidado de las personas y del planeta en el eje central de un modelo de desarrollo sostenible. En 2022, se adoptó el Compromiso de Buenos Aires, en el que los países de ALC acordaron "diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, [...] a fin de garantizar el acceso universal a servicios de cuidado asequibles y de calidad" (ECLAC, 2023[75]). Para ello, es preciso reconocer el derecho al cuidado, garantizando el derecho de cada persona en tres dimensiones básicas (cuidar, ser cuidado y cuidar de uno mismo), sobre todo en el contexto de las sociedades de ALC, cada vez más envejecidas. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la crisis del COVID-19 han aumentado la carga que supone la labor de cuidar, al producirse cambios importantes en la demanda de los cuidados. En esta región, más de 8 millones de personas de 60 años o más (es decir, más de un 1% de la población de la región) necesita ayuda para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (ECLAC, 2022[47]). La labor de cuidar puede medirse de forma aproximada a través del trabajo no remunerado en los hogares, que en ALC oscila entre un 15.9% del PIB (Argentina) y un 27.6% del PIB (México). En promedio, las mujeres realizan un 74% de ese trabajo (ECLAC, 2023[57]).

Se necesitan grandes inversiones para avanzar en la agenda de la sociedad del cuidado en ALC, aunque los rendimientos serían considerables, tanto en lo que se refiere a creación de empleo como a incremento de los ingresos fiscales. Algunos estudios llevados a cabo en Uruguay y México indican que promover sistemas universales y gratuitos de cuidado de la niñez supondría una inversión anual del 2.8% del PIB en Uruguay y del 1.2% del PIB en México (De Henau et al., 2019[76]; UN-Women, 2020[77]). Al mismo tiempo, las tasas de empleo femenino aumentarían 4.2 puntos porcentuales en Uruguay y los niveles totales de empleo se incrementarían un 3.9% en México. Los puestos de trabajo creados generarían ingresos fiscales adicionales que reducirían la brecha de financiamiento neta al 1.4% del PIB en Uruguay, mientras que, en México, los ingresos adicionales podrían aproximarse al 0.3% del PIB.

Sistemas de agricultura y producción de alimentos sostenibles

El consumo mundial de alimentos aumentará un 1.4% anual durante la próxima década, principalmente debido al crecimiento de la población (OECD/FAO, 2022[78]). La agricultura y la agroindustria son sectores clave de las economías de ALC. Esta región contiene un 16% de los suelos agrícolas del mundo y el 33% de la superficie agrícola no utilizada, de manera que cuenta con la mayor reserva de suelos con potencial agrícola del mundo (ECLAC, 2019[79]). Este sector es clave para garantizar la seguridad alimentaria de la

región, además de constituir una fuente de alimentos para el resto del mundo, al tiempo que presenta posibilidades de generar empleo y un crecimiento de la productividad. No obstante, la región ha de aumentar la productividad de la agroindustria, descarbonizar la producción de alimentos y mejorar el acceso a estos por parte de la población más vulnerable.

Los retos de productividad del sector agrícola de ALC son heterogéneos

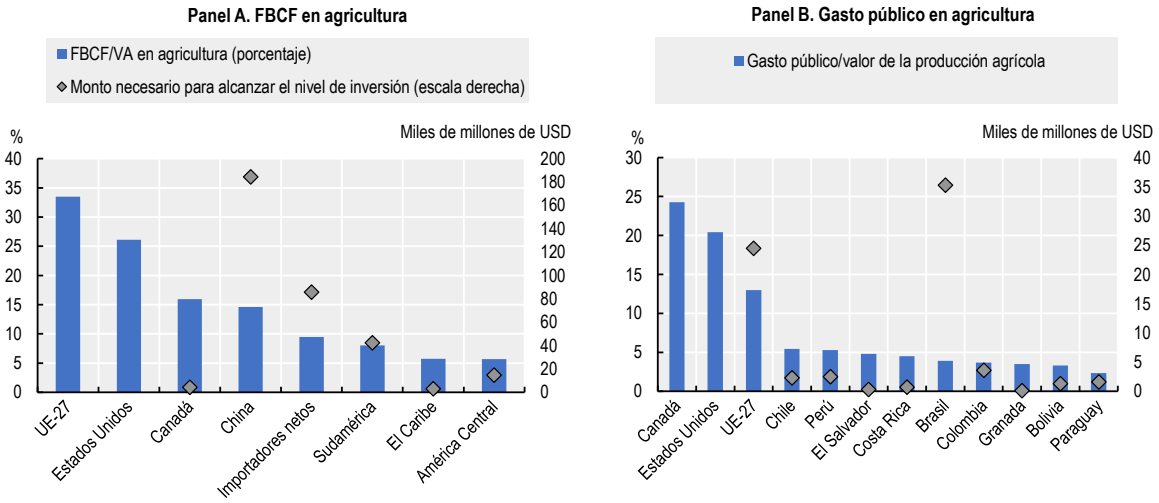
Debido a las restricciones para la ampliación de los terrenos explotables, la mayor parte del aumento de la producción agrícola de ALC debería provenir de incrementos en la productividad. Una mayor inversión en tecnología, infraestructura y capacitación destinada a mejorar la productividad será un factor clave del desarrollo agrícola. Por ejemplo, el rendimiento de la producción de cereales en Estados Unidos es el doble del promedio de ALC (y el promedio mundial) y el triple del promedio observado en el Caribe y en el grupo de países importadores netos de alimentos de ALC. En el caso de la soja, el rendimiento en los países de América del Sur (en especial en Brasil) es prácticamente igual al de Estados Unidos. En lo que se refiere a la ganadería, un indicador de productividad relevante es el peso por animal. En Estados Unidos, este indicador con respecto al ganado es un 70% más alto que el promedio mundial y en torno a 2.5 veces más alto que el promedio del Caribe y de los países importadores netos de alimentos. En el caso de la carne de ave, Estados Unidos y América del Sur (en especial Brasil) presentan rendimientos similares, un 30% más altos que el promedio mundial (ECLAC, 2023[57]).

Se necesita inversión privada y pública para aumentar la productividad del sector agrícola

La región de ALC debería invertir unos 60 000 millones de USD al año para alcanzar el nivel relativo de inversión en la agricultura registrado en las economías avanzadas. La productividad agrícola está directamente relacionada con la intensidad de inversión en este sector.[6] La intensidad de la inversión agrícola de la Unión Europea es cuatro veces mayor que la de América del Sur y seis veces mayor que la de América Central y el Caribe. En el caso de Estados Unidos, la inversión agrícola es tres veces más intensa que en América del Sur y unas cinco veces mayor que en América Central y el Caribe (ECLAC, 2023[57]).

El sector agroalimentario está marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Dos funciones centrales de la inversión pública (además de generar bienes públicos) son ayudar a eliminar los riesgos de las inversiones, tanto mediante información y análisis fiables como mediante el desarrollo de habilidades y competencias en las instituciones y los actores que participan del sector. A pesar de la importancia del gasto público para viabilizar la inversión privada en la agricultura, los países de ALC tienden a destinar relativamente pocos recursos públicos al sector. Estados Unidos destina entre 4 y 13 veces más recursos públicos al sector, como porcentaje del valor de la producción agrícola, que los países seleccionados de ALC. Para alcanzar el nivel relativo registrado en ese país, los países de la región que figuran en el Gráfico 3.26 deberían destinar 48 000 millones de USD al sector cada año.

Gráfico 3.26. **Formación bruta de capital y gasto público en agricultura, 2020**



Nota: Los datos del Panel A se refieren a la formación bruta de capital fijo (FBCF) como porcentaje del valor agregado (/VA) en agricultura. Los datos del Panel B se refieren al gasto público en agricultura como porcentaje del valor de la producción en agricultura.

Fuente: CEPAL, a partir de la base de datos en línea FAOSTAT (www.fao.org/faostat/en/#home).

StatLink https://stat.link/xrjb2y

Las empresas transnacionales están presentes en la industria agroalimentaria de ALC

Las empresas transnacionales tienen una fuerte presencia en las principales cadenas agroalimentarias de exportación de la región de ALC. Empresas de Estados Unidos, la Unión Europea y China, así como transnacionales latinoamericanas son destacados actores en la producción y comercialización del complejo de la soja, el azúcar, el café, la carne vacuna, el maíz, el banano, la carne de pollo y los cereales. Las empresas europeas han liderado los anuncios de proyectos de inversión en la industria de alimentos y bebidas de la región, ya que entre 2017 y 2021 anunciaron inversiones por valor de cerca de 9 000 millones de USD, un 38% del total anunciado. Además, con el 6% del valor de los proyectos registrados en el período, es el séptimo de los diez principales sectores de inversión dentro de los anuncios de las empresas europeas (ECLAC, 2023[57]).

Principales mensajes en materia de políticas

Para que las políticas públicas logren avanzar en la transformación productiva en ALC, deben abordar los obstáculos horizontales y verticales que frenan la mejora y diversificación de las economías de la región. En particular, esto incluye eliminar las brechas tecnológica y productiva con economías más desarrolladas y las brechas de productividad entre sectores, empresas y territorios.

Las políticas de desarrollo de la producción deberían adoptar enfoques integrales, holísticos y sistémicos con un conjunto integral de herramientas, del que todavía carecen los países de ALC, tanto a nivel nacional como local (Capítulo 4). Además, deberían abordar las distintas dimensiones interconectadas de la transformación productiva, entre otras: el desarrollo de talento humano; la formalización de empresas informales; la innovación y la adopción de tecnología; el desarrollo de la cadena de suministro; y la diversificación de las capacidades de exportación y producción. Para lograr un modelo de desarrollo más sostenible y justo, resulta esencial armonizar la priorización de sectores estratégicos —los que muestran mayor intensidad tecnológica y mayor potencial de

aprendizaje, innovación y expansión de mercado— con los retos sociales fundamentales y los problemas transversales que enfrentan las sociedades de ALC.

Siguen existiendo importantes diferencias entre los distintos países de ALC. No obstante, un conjunto de mensajes principales en materia de políticas puede contribuir a orientar a cada país para que implemente su propia combinación de políticas orientadas a avanzar en un proceso de transformación productiva que catalice inversiones, cree empleo formal y aumente el bienestar de la población (Recuadro 3.2).

Recuadro 3.2. **Principales mensajes en materia de políticas**

Hacia una mejor productividad y creación de empleo

- Incluir políticas de desarrollo de la producción sectoriales en línea con las políticas transversales y horizontales como parte esencial de las estrategias de desarrollo.
- Reforzar y diversificar la producción nacional y local, las capacidades tecnológicas y de innovación para que la inversión tenga un impacto positivo en la productividad y la creación de empleo de calidad.
- Formular estrategias para lograr mayor inversión en sectores verdes, tanto en capital fijo como humano, con el objeto de generar efectos positivos netos en términos de creación de empleo.

Hacia una convergencia económica territorial y productiva

- Implementar políticas basadas en clústeres para reforzar el desarrollo territorial de la producción. Ayudar con el financiamiento y la promoción de la innovación entre los miembros de los clústeres y complementar o reforzar vínculos débiles o inexistentes de las cadenas de valor locales.
- Prestar apoyo y ofrecer acceso a financiamiento a empresas emergentes con un alto potencial de crecimiento para que puedan aprovechar su dinamismo y consolidarse.
- Promover el desempeño, la formalización y una mejor integración de las mipymes en las cadenas de valor locales y nacionales.

Hacia la mejora de las inversiones en I+D y la innovación

- Aumentar la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación. Estructurar las ayudas a las empresas para que abarquen todas las etapas de la cadena de innovación, coordinando los instrumentos de política y las instituciones públicas a tal efecto.
- Habilitar las condiciones institucionales y crear un entorno empresarial para aumentar la inversión privada en I+D.
- Formular las políticas de innovación en combinación con las políticas de desarrollo productivo y en estrecha coordinación con el sector privado.

Hacia el impulso del trabajo de calidad y la mejora de las cualificaciones de toda la población

- Complementar las políticas de transformación productiva con políticas sociales y del mercado laboral para mejorar la integración de los trabajadores informales en la economía formal y proteger a los miembros de los hogares cuyos ingresos proceden entera o parcialmente del trabajo informal.
- Invertir en capital humano, talento y nuevas habilidades que se ajusten mejor a la demanda presente y futura de cualificación, y también en la oferta educativa y formativa. Coordinar los esfuerzos públicos y privados a nivel nacional y local.

Recuadro 3.2. **Principales mensajes en materia de políticas** *(cont.)*

- Implementar políticas que impulsen la participación de mujeres y grupos vulnerables en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), brindándoles mayores oportunidades en empleos verdes. Esto se justifica en el hecho de que los empleados en estos sectores suelen tener una educación más sólida y mayor empleo formal que la mayoría de los trabajadores. Además, aún persisten marcadas disparidades de género en estos los sectores verdes.

Hacia la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible

- Adoptar un enfoque sectorial estratégico, en línea con las políticas transversales y horizontales, para impulsar la transformación productiva en ALC. Este enfoque se beneficiará de un mayor dinamismo de mercado y tecnológico, así como de la innovación.
- Promover inversiones en actividades clave, incluida la transición verde, la transformación digital, la economía del cuidado y la salud, y los sistemas de agricultura y producción de alimentos sostenibles, para estimular cambios estructurales, maximizar la productividad e influir positivamente en la inclusión social y la sostenibilidad.

Notas

1. Estos datos son una subestimación, dado que los datos sobre inversión empresarial incluyen las inversiones realizadas por empresas que son propiedad del Estado.
2. Los modelos normalizados parten del supuesto de que el cambio tecnológico es exógeno a corto y medio plazo. El proceso tecnológico se considera externo y no dependiente de la inversión actual en capital humano o físico. Sin embargo, si se asume que la innovación es endógena, en función de los salarios y los costos de capital y las decisiones de inversión de las empresas, el empleo bien podría descender, aunque la productividad y los salarios crezcan al mismo ritmo (Hellwig y Irmen, 2001[80]).
3. Los países de la OCDE han experimentado una megatendencia similar. En prácticamente todos los países de la OCDE de los que hay datos disponibles, este proceso ha provocado un desplazamiento del empleo hacia profesiones de alta cualificación.
4. Ha sido así en todos los países de ALC sobre los que hay datos disponibles, salvo Paraguay.
5. En septiembre de 2021, a petición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas presentó un Plan de Autosuficiencia Sanitaria. El plan, que fue aprobado por unanimidad por los países miembros, está compuesto por sietes líneas de acción y define una hoja de ruta regional clara para aumentar la resiliencia y las capacidades productivas. En junio de 2022, tomando como referencia este plan y en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, se puso en marcha una nueva iniciativa: la Asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para la fabricación local de vacunas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias y el refuerzo de la resiliencia de los sistemas sanitarios. Esta Asociación tiene como objetivo incrementar la capacidad de fabricación de América Latina, fomentar el acceso equitativo a productos sanitarios, reforzar la resiliencia sanitaria y mejorar las capacidades para hacer frente a las enfermedades no transmisibles.
6. La formación bruta de capital fijo en la agricultura como porcentaje del valor añadido en el sector se utiliza como indicador de la intensidad de la inversión.

Referencias

(UN-Women), U. (ed.) (2019), "Investing in free universal childcare in South Africa, Turkey and Uruguay: A comparative analysis of costs, short-term employment effects and fiscal revenue", *Discussion Paper, No. 28*, https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/Discussion-paper-Investing-in-free-universal-childcare-in-South-Africa-Turkey-and-Uruguay-en.pdf. [76]

Amaral, N. et al. (2018), "How far can your skills take you: Understanding skill demand changes due to occupational shifts and the transferability of workers across occupations", *Technical Note*, No. IDB-TN-01501, Labour Markets and Social Security Division, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0001291. [52]

Audretsch, D. et al. (2020), "Innovative start-ups and policy initiatives", *Research Policy*, Vol. 49/10, https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104027. [21]

Autor, D., L. Katz y M. Kearney (2006), "The Polarization of the U.S. Labor Market", *American Economic Review*, Vol. 96/2, pp. 189-194, https://doi.org/10.1257/000282806777212620. [53]

Basco, A. y C. Lavena (2021), *América Latina en movimiento: competencias y habilidades para la cuarta revolución industrial en el contexto de pandemia*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/es/america-latina-en-movimiento-competencias-y-habilidades-para-la-cuarta-revolucion-industrial-en-el. [70]

Bloom, N. et al. (2013), "Does Management Matter? Evidence From India", *The Quarterly Journal of Economics*, pp. 1-51, https://doi.org/10.1093/qje/qjs044. [18]

CAF (2018), *RED 2018. Instituciones para la productividad: hacia un mejor entorno empresarial*, Development Bank of Latin America (CAF), Bogota, http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1343. [11]

CAF (2014), *What is production transformation?*, Development Bank of Latin America (CAF), Caracas, https://www.caf.com/en/currently/news/2014/05/what-is-productive-transformation/#:~:text=Productive%20transformation%20is%20about%20creating,firms%20and%20individuals%20working%20together (accessed on 18 September 2023). [4]

CAF (2013), *RED 2013: Emprendimientos en América Latina. Desde la subsistencia hacia la transformación*, Development Bank of Latin America (CAF), Caracas, https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/168/red_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [42]

CBInsights (2022), *"Research Briefs"*, https://www.cbinsights.com/research/unicorn-startup-market-map/ (accessed on 18 September 2023). [26]

Dini, M. y G. Stumpo (2020), "Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento", *Documentos de Proyectos*, No. LC/TS.2018/75/Rev.1, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2c7fec3c-c404-496b-a0da-e6a14b1cee48/content. [17]

Drucaroff, S. (2021), *Análisis de las fortalezas y debilidades de la industria de equipos e insumos médicos en América Latina y el Caribe*, unpublished, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago. [74]

ECLAC (2023), *Buenos Aires Commitment*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://conferenciamujer.cepal.org/15/en/documents/buenos-aires-commitment. [75]

ECLAC (2023), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2023*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48979-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2023. [62]

ECLAC (2023), *Halfway to 2030 in Latin America and the Caribbean: Progress and recommendations for acceleration*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9481d2a0-70cf-4a5a-a128-5a95123c1ec7/content. [15]

ECLAC (2023), *Iberoamérica: espacio de oportunidades para el crecimiento, la colaboración y el desarrollo sostenible*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/48769-iberoamerica-espacio-oportunidades-crecimiento-la-colaboracion-desarrollo. [58]

ECLAC (2023), *Investment and cooperation opportunities for Latin America and the Caribbean and the European Union*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48992-investment-and-cooperation-opportunities-latin-america-and-caribbean-and-european. [57]

ECLAC (2022), *A digital path for sustainable development in Latin America and the Caribbean*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48461/4/S2200897_en.pdf. [69]

ECLAC (2022), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2022*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48521-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2022. [16]

ECLAC (2022), *Social Panorama of Latin America and the Caribbean 2022: Transforming education as a basis for sustainable development*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48519-social-panorama-latin-america-and-caribbean-2022-transforming-education-basis. [47]

ECLAC (2022), *Towards transformation of the development model in Latin America and the Caribbean: production, inclusion and sustainability*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/48309-towards-transformation-development-model-latin-america-and-caribbean-production. [1]

ECLAC (2021), *Digital technologies for a new future*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf. [68]

ECLAC (2021), *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstreams/dae0d47c-e8bc-4bf6-b6a4-fd9ab98ba8d6/download. [37]

ECLAC (2021), *Plan for self-sufficiency in health matters in Latin America and the Caribbean: lines of action and proposals*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47253. [73]

ECLAC (2020), *Building a New Future: Transformative Recovery with Equality and Sustainability. Summary*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago. [5]

ECLAC (2019), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2019*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/715e2868-75ac-4e6c-867f-5a6dddbf0200/content. [79]

ECLAC (2008), *Structural change and productivity growth, 20 years later: old problems, new opportunities*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2890. [14]

ECLAC (1996), *Changing production patterns with social equity: the prime task of Latin American and Caribbean development in the 1990s*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/37869. [3]

ECLAC y ILO (2022), "Dinámica de la productividad laboral en América Latina", *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*, No. 27 (LC/TS.2022/213), United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, International Labour Organization, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_863688.pdf. [12]

Fajnzylber, F. (1983), *La industrialización trunca de América Latina*, Editorial Nueva Imagen, S. A., México D.F., https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43130. [13]

Federico, J. y S. Ibarra Garcia (2014), "Los obstáculos al desarrollo de las empresas jóvenes: Un análisis comparado", in *¿Emprendimientos dinámicos en América del Sur?: la clave es el (eco) sistema*, Red Mercosur de Investigaciones Económicas, Buenos Aires, https://www.redsudamericana.org/sites/default/files/doc/Emprendimientos.pdf. [22]

Fernández, C. et al. (2017), *Reconciling opposing views towards labour informality. The case of Colombia and South Africa*, Fedesarrollo, Bogota, https://repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3621?locale-attribute=en (accessed on 27 September 2021). [40]

Fernández, C. y R. Villar (2016), "The Impact of Lowering the Payroll Tax on Informality in Colombia", *Documentos de Trabajo*, No. 72, Fedesarrollo, Bogota, https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3300. [39]

Freeman, C. (1995), "The "National System of Innovation" in historical perspective", *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 19, pp. 5-24, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035309. [33]

Goos, M. y A. Manning (2007), "Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain", *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 89/1, pp. 118-133, https://www.jstor.org/stable/40043079. [54]

Hellwig, M. y A. Irmen (2001), *Wage Growth, Productivity Growth, and the Evolution of Employment*, https://cepr.org/publications/dp2927. [80]

IDB (2020), *Informe anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha. Brecha digital en América Latina y el Caribe*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-anual-del-Indice-de-Desarrollo-de-la-Banda-Ancha-IDBA-2020-Brecha-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf. [45]

IEA (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, IEA, Paris, License: CC BY 4.0, https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions. [67]

IEA (2019), *The Future of Hydrogen*, IEA, Paris, License: CC BY 4.0, https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen. [64]

ILO (2022), *E-formalización en América Latina: acelerando en una región llena de brechas*, International Labour Office, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_854208.pdf. [46]

IRENA (2021), "International Renewable Energy Agency (IRENA)", *Renewable energy statistics 2021*, https://www.irena.org/publications/2021/Aug/Renewable-energy-statistics-2021 (accessed on 18 September 2023). [61]

Kantis, H., V. Caicedo y S. Ibarra Garcia (2023), *Unicornios y ecosistemas en América Latina: ¿del boom al final de fiesta?*, PRODES, https://prodem.ungs.edu.ar/publicaciones_prodem/unicornios-y-ecosistemas-en-america-latina-del-boom-al-final-de-fiesta/. [27]

La Porta, R. y A. Shleifer (2014), "Informality and Development", *American Economic Association*, Vol. 28/3, pp. 109-126, https://doi.org/10.3386/w20205. [41]

LA-KLEMS (2021), *Crecimiento Económico y Productividad en América Latina - Julio 2021*, http://www.laklems.net/ (accessed on 18 September 2023). [10]

LAVCA (2023), *LAVCA Trends in Tech 2023*, LAVCA, New York, https://lavca.org/industry-data/2023-lavca-trends-in-tech/. [72]

Levy, S. (2018), *Under-rewarded efforts: The elusive quest for prosperity in MexicoUnder-rewarded efforts: The elusive quest for prosperity in Mexico*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0001189. [44]

Lundvall, B. (2010), *National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Anthem Press, London, http://www.jstor.org/stable/j.ctt1gxp7cs. [32]

Mageste, S. et al. (próximo a publicarse), *Startups en América Latina y el Caribe*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago. [23]

Maloney (2004), "Informality Revisited", *World Development*, Vol. 32/7, pp. 1159-1178, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008. [38]

McKenzie, D. (2020), "Small Business Training to Improve Management Practices in Developing Countries: Reassessing the Evidence for "Training Doesn't Work"", *Policy Research Working Paper*, No. 9408, World Bank Group, Washington, DC, https://documents1.worldbank.org/curated/en/593081600709463800/pdf/Small-Business-Training-to-Improve-Management-Practices-in-Developing-Countries-Reassessing-the-Evidence-for-Training-Doesn-t-Work.pdf. [19]

Medina, A. et al. (próximo a publicarse), *Promoting access to financial markets to SMEs and growth companies in LAC*, OECD Publishing, Paris. [24]

MIEM (2022), *Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde en Uruguay*. [65]

OECD (2023), *OECD Initiative on Global Value Chains (GVCs), Production Transformation and Development*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dev/Global-value-chaines-Initiative-Production-Transformation-Development-Update-April-2023.pdf. [63]

OECD (2023), *Regional Development in the New Global Environment Synthesis Report*, OECD Publishing, Paris. [31]

OECD (2023), *Transición verde y formalización laboral en Colombia*, Making Development Happen, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dev/Transicion-verde-empleo-en-Colombia.pdf. [59]

OECD (2022), *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2023*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fcbe6ce9-en. [66]

OECD (2019), *OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9ee00155-en. [50]

OECD (2019), *OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264313835-en. [56]

OECD (2019), *Skills Matter. Additional results from the survey of Adult skills*, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en. [48]

OECD (2017), *OECD Employment Outlook 2017*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-en. [55]

OECD (2016), *"Production Transformation Policy Reviews (PTPRs): A Policy Assessment and Guidance Tool to Improve the Effectiveness of Production Transformation Strategies"*, DEV/GB(2016)2, OECD Development Centre, Paris, France, https://www.oecd.org/dev/Session2_PTPR.pdf. [2]

OECD et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a Green and Just Transition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en. [7]

OECD et al. (2021), *Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en. [6]

OECD et al. (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en. [8]

OECD et al. (2019), *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en. [28]

OECD.Stat (2020), "Region and Cities", *Regional demography*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REGION_DEMOGR (accessed on 18 September 2023). [29]

OECD/FAO (2022), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en. [78]

OECD/UN (2018), *Production Transformation Policy Review of Chile: Reaping the Benefits of New Frontiers*, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264288379-en. [25]

OECD/UN/UNIDO (2019), *Production Transformation Policy Review of Colombia: Unleashing Productivity*, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264312289-en. [30]

Pagés, C. (2010), *La era de la productividad : cómo transformar las economías desde sus cimientos.*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/La-era-de-la-productividad-C%C3%B3mo-transformar-las-econom%C3%ADas-desde-sus-cimientos.pdf. [43]

RICYT (2022), *El estado de la ciencia: principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos / interamericanos 2022*, Altuna Impresores S.R.L., Buenos Aires, https://oei.int/oficinas/argentina/publicaciones/el-estado-de-la-ciencia-principales-indicadores-de-ciencia-y-iberoamericanos-interamericanos-2022. [34]

RICYT (2020), *Network for Science and Technology Indicators –Ibero-American and Inter-American– (RICYT)*, http://www.ricyt.org/en/ (accessed on 18 September 2023). [35]

Ropero Santiago, S. y D. Cortés (2022), *Encontrar trabajo formal en Colombia. ¿Cuestión de habilidades?*, Universidad del Rosario, Bogota, https://dev.focoeconomico.org/2022/09/14/encontrar-trabajo-formal-en-colombia-cuestion-de-habilidades/. [49]

Shapira, P. et al. (2015), *Institutions for Technology Diffusion*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/en/institutions-technology-diffusion. [20]

The Conference Board (2023), *Total Economy Database*, https://www.conference-board.org/data/economydatabase (accessed on 18 September 2023). [9]

UN-Women (2020), *Costs, returns, and effects of a universal, free, and quality child care system in Mexico*, https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2021/twopager_pobinfantilENG.pdf. [77]

Vilgis, V., V. Jordán y A. Patiño (2023), *Medición de la economía de Internet en América Latina: los casos del Brasil, Chile, Colombia y México*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/48908-medicion-la-economia-internet-america-latina-casos-brasil-chile-colombia-mexico. [71]

Vona, F. et al. (2018), "Environmental Regulation and Green Skills: An empirical exploration", *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, Vol. 5/4, https://www.journals.uchicago.edu/doi/suppl/10.1086/698859/suppl_file/2015197Appendix.pdf. [60]

Weller, J., S. Gontero y S. Campbell (2019), *Cambio tecnológico y empleo: Una perspectiva latinoamericana. Riesgos de la sustitución tecnológica del trabajo humano y desafíos de la generación de nuevos puestos de trabajo*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://hdl.handle.net/11362/44637. [51]

WIPO (2022), *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, https://www.wipo.int/portal/en/ (accessed on 18 September 2023). [36]

Capítulo 4

Desbloqueando el potencial productivo de ALC: el papel de las instituciones públicas y el financiamiento

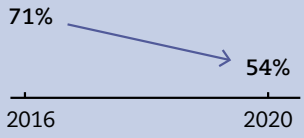
En este capítulo se examinan los principales elementos que son necesarios para movilizar la inversión e impulsar una transformación productiva que aporte un mayor bienestar a los ciudadanos de América Latina y el Caribe (ALC). El capítulo destaca el papel clave de las instituciones públicas, que son fundamentales para generar unas condiciones de inversión adecuadas y para que la transformación productiva esté más conectada con las demandas de la ciudadanía y con las estrategias de desarrollo de los países de ALC. También explora los mecanismos de financiamiento que pueden ayudar a desbloquear los mercados financieros de la región. Las instituciones públicas de financiamiento del desarrollo (IFD) y los instrumentos de deuda innovadores, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés), pueden actuar como motor de la inversión privada y pública. Para concluir, el capítulo ofrece una serie de mensajes clave en materia de políticas.

Desbloquear el potencial productivo de ALC: hacia mejores instituciones y financiamiento para impulsar la inversión

La participación ciudadana y de otras partes interesadas es clave para mejorar el impacto de las inversiones en el bienestar y fortalecer el contrato social

Percepción del impacto de las inversiones

Percepción positiva de la IED en ALC



Confianza en las empresas



El **55%** de los ciudadanos en ALC tenían poca o ninguna confianza en compañías nacionales e internacionales en 2020

Conflicto social

Casi el **90%** de los conflictos sociales medioambientales surgidos entre 2000 y 2022 todavía están sin resolverse



Fomentando la inversión: ¿Cuáles son las prioridades en los países de ALC?

Nuestro análisis de los Planes Nacionales de Desarrollo en 14 países revela los siguientes sectores estratégicos:



Transición energética e industrias relacionadas



Transformación digital



Economía del cuidado, industria farmacéutica y de la salud



Agroindustria sostenible



Turismo sostenible



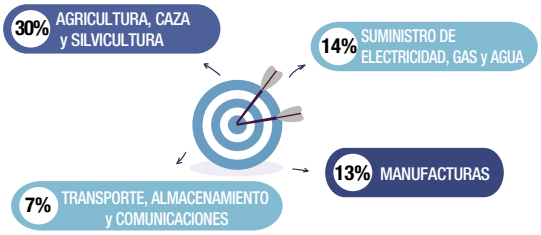
Economía circular

Instituciones de financiamiento del desarrollo (IFD): clave para que las empresas más pequeñas inviertan en sectores estratégicos



Acceder a financiación a través de diferentes mecanismos: créditos, *factoring*, *leasing*, garantías, etc.

Las IFD nacionales y subnacionales pueden ayudar a las mipymes a:



Contribuir a la inversión en sectores estratégicos



Contribuir a objetivos verdes, digitales y de género

Introducción

La inversión es fundamental para impulsar la transformación productiva, la cual resulta a su vez esencial para alcanzar un mayor bienestar en América Latina y el Caribe (ALC). Para lograr una transformación estructural de la economía es necesario diversificar y modernizar el aparato productivo en todos los países de ALC. Dicha transformación puede conducir a un mayor crecimiento económico y productividad, a más empleos de calidad y a una mayor resiliencia económica, elementos esenciales para cerrar las brechas de desigualdad y mejorar los niveles de vida (ECLAC, 2022[1]).

Existen dos dimensiones que son vitales para convertir las estrategias de transformación productiva y de inversión en motores clave del desarrollo inclusivo y sostenible en la región: las instituciones públicas y el financiamiento.[1]

En primer lugar, las instituciones públicas pueden garantizar que las estrategias de transformación productiva se fundamenten en un diálogo inclusivo entre todas las partes interesadas, mejorando así los vínculos entre los esfuerzos de inversión y las prioridades sociales, al tiempo que fortalecen el contrato social dentro de la región. Las instituciones públicas también pueden mejorar el clima de inversión, creando condiciones más propicias y predecibles al reforzar el Estado de derecho y respaldarlo con una regulación de calidad, transparencia, apertura e integridad (OECD, 2015[2]) (Capítulo 2). Estos son ingredientes fundamentales para generar confianza, lo que facilita la inversión al impulsar el cumplimiento normativo y la confianza de los inversores. Por último, las instituciones públicas también pueden establecer un enfoque estratégico con respecto a la inversión y la transformación productiva, garantizando que estos esfuerzos sean coherentes con el conjunto de las estrategias de desarrollo nacional y productivo, y que se adopte un modelo integrado y coordinado entre las instituciones, los distintos niveles de gobierno y las partes interesadas. En este sentido, las instituciones públicas pueden liderar la adopción de un enfoque centrado en el bienestar ciudadano (OECD, 2021[3]), que mantenga su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que contribuya a un desarrollo equitativo y sostenible (OECD et al., 2019[4]).

El financiamiento es la segunda dimensión clave. Será necesario movilizar una gran cantidad de recursos financieros a través de fuentes públicas y privadas para financiar el déficit de inversión existente en sectores clave de los países de ALC, como el de infraestructura de calidad. Para estimular estos recursos, la región tendrá que desbloquear el potencial de sus mercados financieros, asignando un papel crucial a las instituciones de financiamiento del desarrollo (IFD) de cara a apoyar el acceso al financiamiento e impulsar las inversiones en sectores estratégicos. Asimismo, en la región existe un potencial cada vez mayor para la adopción de herramientas financieras innovadoras, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS), que pueden promover la inversión pública y privada con el apoyo de unos marcos de finanzas sostenibles más consolidados y armonizados.

Este capítulo aborda la cuestión de cómo liberar el potencial productivo de ALC y convertirlo en catalizador de un desarrollo óptimo. El capítulo comienza analizando cómo las instituciones públicas pueden contribuir a fomentar las inversiones y la transformación productiva, y a centrar su impacto en el bienestar. A continuación, el capítulo explora cómo mejorar el acceso al financiamiento necesario. Destaca el papel de las IFD, el potencial de los instrumentos de deuda innovadores, como los bonos GSSS, y la necesidad de reforzar los marcos de finanzas sostenibles. Para concluir, el capítulo ofrece una serie de mensajes clave en materia de políticas.

Las instituciones públicas son fundamentales para hacer de la transformación productiva un motor del bienestar y una pieza clave del nuevo contrato social

La transformación productiva —y las inversiones necesarias para hacerla realidad— pueden tener un impacto significativo en los niveles de vida de todos los grupos socioeconómicos de ALC. Será fundamental contar con la participación de las principales partes interesadas a la hora de acordar las estrategias de transformación productiva e inversión, tanto para la viabilidad de las estrategias e inversiones como para evitar posibles conflictos. Para ello, será necesario comprender las prioridades de las partes interesadas e incorporarlas al proceso de elaboración de políticas. Asimismo, si se consigue que los esfuerzos para atraer y movilizar la inversión se centren en las personas, se reforzará el contrato social.

Este contrato social renovado solo perdurará y generará efectos a largo plazo si sitúa las prioridades de las principales partes interesadas en el centro de la visión estratégica adoptada. En otras palabras, las estrategias de inversión y producción deben derivarse de un enfoque con alcance a todo el gobierno y han de estar directamente vinculadas con las estrategias nacionales de desarrollo para garantizar la coherencia entre políticas, la planificación a largo plazo y la coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas y las principales partes interesadas. En las páginas siguientes se aborda cada una de estas cuestiones.

La confianza en que las inversiones tengan un impacto en el bienestar sigue siendo baja en la región

La búsqueda de fuentes de inversión nuevas y más diversificadas, así como de formas de producción más sostenibles, tendrá repercusiones en múltiples dimensiones en la vida de los ciudadanos de ALC, pudiendo sentar así las bases de un nuevo contrato social. Se entiende por contrato social la aceptación intangible pero compartida de lo que la sociedad necesita y de cómo alcanzar estas necesidades a través de una serie de reglas e instituciones (ECLAC/OECD, 2018[5]).

Para garantizar que los efectos de estos cambios conduzcan a un nuevo contrato social y cumplan las expectativas y deseos de los ciudadanos, es necesario que se escuchen y se tengan en cuenta sus opiniones. La única manera de garantizar que la transformación productiva sea verdaderamente sostenible e inclusiva es involucrando a la ciudadanía en sus fases de diseño, implementación y evaluación. Lograr un amplio consenso en torno a las prioridades de la transformación productiva también resultará crucial de cara a los esfuerzos por alcanzar las metas de los ODS para 2030 y en años posteriores.

Comprender las percepciones de los ciudadanos sobre el impacto que tendrán las inversiones en su vida, y sobre el papel que desempeñarán las principales partes interesadas en la transformación productiva, será crucial para generar apoyo social, estrechar vínculos entre las partes interesadas y, en última instancia, reforzar el contrato social.

En general, los ciudadanos de ALC confían poco en sus gobiernos nacionales y están poco satisfechos con sus sistemas democráticos. Tan solo alrededor de la mitad (48%) de la población encuestada en 2023 prefería la democracia a otros sistemas (Latinobarómetro, 2023[6]). La confianza en los gobiernos era de apenas el 27% en 2020 (Latinobarómetro, 2020[7]), muy por debajo del promedio del 41% en los países de la OCDE (OECD, 2022[8]).

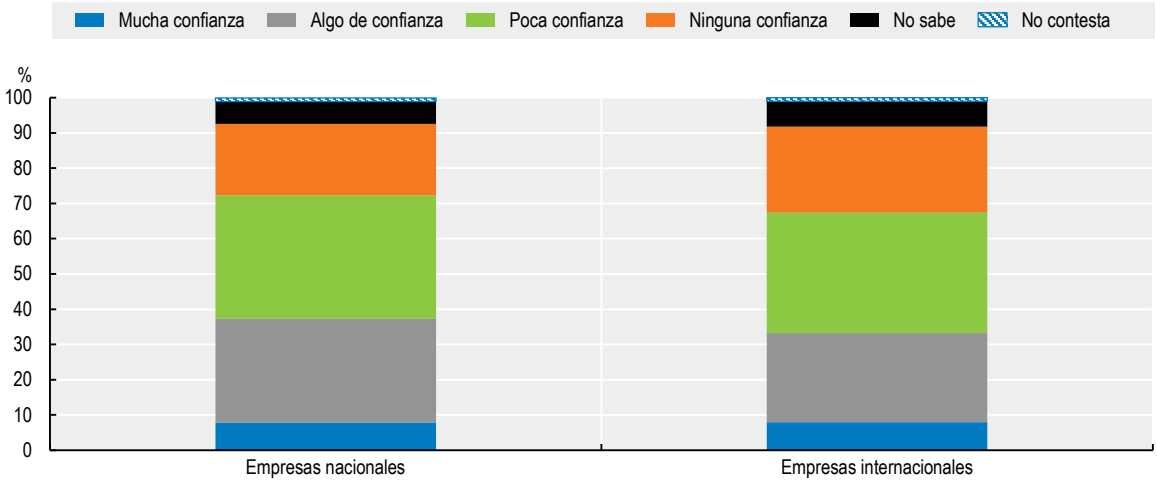
Es fundamental garantizar la confianza en las instituciones públicas. Disponer de un entorno institucional estable resulta crucial para atraer inversiones y crear un horizonte previsible de transformación productiva para las distintas partes interesadas. De hecho, los bajos niveles de confianza existentes pueden indicar que el sector público carece de las capacidades suficientes para impulsar con éxito una estrategia de transformación productiva.

La confianza en las instituciones públicas es especialmente relevante en el contexto de creciente polarización política observado tanto en ALC como a escala global. Los bajos niveles de confianza pueden convertirse en una barrera significativa para la inversión en ALC, ya que el aumento de la división política suele generar incertidumbre en el clima de inversión (Azzimonti, 2011[9]). Esta incertidumbre se deriva de la posibilidad de que se produzcan cambios inesperados en las políticas, sobre todo en materia de fiscalidad, regulación, comercio exterior y en la posible nacionalización de industrias (Biglaiser y Staats, 2010[10]). La inestabilidad política también puede provocar malestar social, perturbar el funcionamiento de las empresas y desalentar la inversión. Además, los entornos profundamente polarizados a veces se enfrentan a problemas como la parálisis gubernamental y la corrupción, que también tienen efectos negativos en la inversión.

Dado que las empresas son fundamentales de cara a la transformación productiva y constituyen una de las principales fuentes de inversión, la percepción que tiene la ciudadanía sobre su papel es crucial. Sin embargo, en la actualidad, los ciudadanos de ALC tienen poca confianza en las empresas nacionales e internacionales. Según la consulta realizada en 2020, los ciudadanos de ALC no confiaban en absoluto (20.3% y 24.4%) o confiaban poco (35% y 34.2%) en las empresas nacionales e internacionales —lo que supone más de la mitad de los encuestados (Gráfico 4.1) (Latinobarómetro, 2020[7]). Esto podría deberse en parte a la falta de información y a la escasa visibilidad existente sobre el papel que desempeñan las empresas en la región. Pero también sugiere que los ciudadanos consideran que existe un gran potencial para mejorar los impactos —sociales, económicos y ambientales— de las actividades desarrolladas por el sector privado. Los gobiernos de la región podrían promover un papel más activo del sector privado mediante una adopción más ambiciosa de la *Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable* (véase más adelante en el apartado sobre la participación de las partes interesadas), entre otros esfuerzos.

Gráfico 4.1. **La mayoría de los ciudadanos de ALC confía poco en las empresas nacionales e internacionales**

Nivel de confianza de los ciudadanos de ALC en las empresas nacionales y/o internacionales, 2020



Nota: Pregunta: "Por favor indique cuánta confianza tiene en cada uno de los siguientes grupos o instituciones. ¿Diría usted que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza?".
Fuente: (Latinobarómetro, 2020[11]).

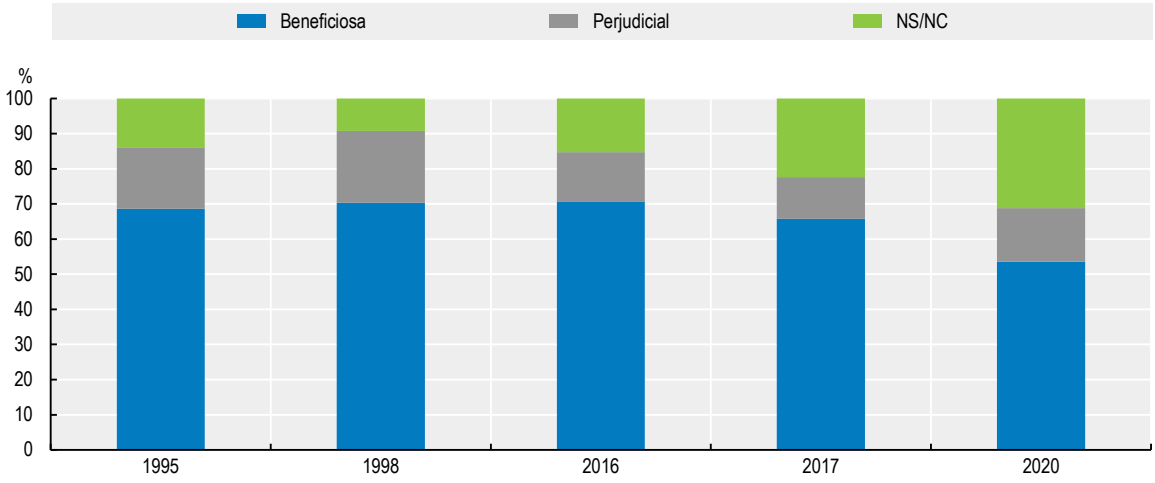
StatLink https://stat.link/zgfvnh

Aunque la percepción de que la inversión extranjera directa (IED) tiene efectos positivos en el desarrollo económico sigue siendo relativamente alta en ALC, ha

disminuido considerablemente en los últimos años. El 53.6% de la población encuestada en 2020 consideraba que la IED era beneficiosa, una cifra inferior al 70.7% registrado en 2016 y el nivel más bajo hasta la fecha (Gráfico 4.2). Este descenso coincide con un creciente desconocimiento sobre la IED entre la ciudadanía de ALC: en 2020, el 28.8% de las personas encuestadas afirmaba no saber lo suficiente para responder si los efectos de la IED eran beneficiosos o perjudiciales para el desarrollo económico de su país (10 puntos porcentuales más que en 2017). La percepción de la IED por parte de la ciudadanía varía en función del tipo de inversión de que se trate. El 40% de los ciudadanos considera que la compra de empresas nacionales por parte de inversores extranjeros es algo positivo para el país, mientras que el 72% piensa que la construcción de fábricas por parte de empresas extranjeras favorece al país (Pew Research Center, 2020[12]). Estas tendencias subrayan la importancia de generar más conciencia sobre los efectos positivos que puede tener la IED (Capítulo 2) y de desarrollar mecanismos para que la IED esté más conectada con las prioridades de desarrollo de los países, las regiones subnacionales y la ciudadanía.

Gráfico 4.2. **La percepción positiva sobre la IED ha disminuido entre los ciudadanos de ALC**

Porcentaje que considera que la IED es beneficiosa o perjudicial para el desarrollo económico de su país, 1995-2020



Nota: Pregunta: "¿Considera que la inversión extranjera es beneficiosa o perjudicial para el desarrollo económico del país o considera que no sabe lo suficiente al respecto para opinar?".

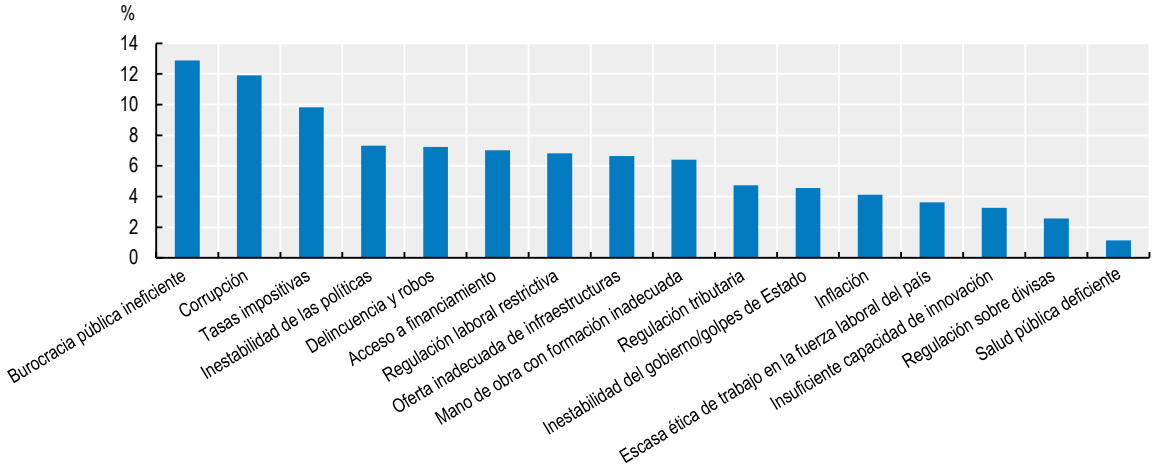
Fuente: (Latinobarómetro, 2020[11]).

StatLink https://stat.link/un4ygl

De cara a diseñar políticas que movilicen las inversiones y mejoren el clima de inversión, puede ser fundamental comprender las opiniones de los representantes del sector privado. Los líderes empresariales consideran que los factores más problemáticos para operar en la región son la ineficiente burocracia pública (12.9%), la corrupción (11.9%) y las elevadas tasas impositivas (9.8%) (Gráfico 4.3). En el estudio *Doing Business 2020*, los propietarios de empresas de ALC expresaban un número mucho mayor de preocupaciones en relación con los obstáculos burocráticos y los costos asociados a sus actividades en el mercado formal. La región ocupa el puesto 119 de un total de 190, una posición muy inferior al puesto 56 que ocupan los países de la OCDE. En cuanto a las tasas impositivas, los líderes empresariales señalaron la presión de la elevada tasa de contribución, en particular durante el segundo año de actividad (47.03%), que está muy por encima de los promedios de la OCDE (39.86%), de otras regiones en desarrollo como Oriente Medio (32.48%) y de Europa oriental y Asia central (32.10%) (World Bank, 2020[13]). Los gobiernos de ALC pueden interactuar más estrechamente con el sector privado y así comprender mejor la amplia gama de factores que influyen en las empresas a la hora de asignar sus inversiones.

Gráfico 4.3. **Percepción de los líderes empresariales sobre los factores más problemáticos para hacer negocios en ALC**

Clasificación de los factores más problemáticos para hacer negocios en ALC según los directivos empresariales, 2017



Nota: Pregunta: "Seleccione los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en su país y clasifíquelos de 1 (más problemático) a 5". En el caso de la región de ALC, se calculó el promedio simple de los siguientes 20 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Fuente: (World Economic Forum, 2018[14]).

StatLink https://stat.link/vplinr

Los bajos niveles de confianza existentes tanto en las instituciones públicas como en las empresas nacionales e internacionales de cara a mejorar el bienestar de la población revelan que es necesario conectar mejor las estrategias de inversión y transformación productiva con los resultados que se obtienen del desarrollo. Para lograrlo, es importante que los gobiernos de ALC refuercen los mecanismos de diálogo entre las partes interesadas, de modo que la transformación productiva se base en el acuerdo y tenga en cuenta sus diversos impactos. Del mismo modo, los esfuerzos de inversión y transformación productiva deben estar alineados con el conjunto de las estrategias de desarrollo y ser el resultado de un esfuerzo coordinado entre políticas y sectores.

Mejorar el impacto de las inversiones en el bienestar requiere que las instituciones públicas fomenten y aseguren diálogos inclusivos entre las partes interesadas

Al crear las condiciones adecuadas para impulsar la participación activa de las partes interesadas, las instituciones públicas pueden desempeñar un papel clave de cara a conseguir que la transformación productiva sea realmente inclusiva y aporte bienestar para todos. Esto es fundamental para conseguir que las inversiones estén verdaderamente centradas en las personas. El hecho de incorporar los distintos puntos de vista de los actores implicados en las inversiones y en los esfuerzos de transformación productiva no solo legitimará el proceso y reducirá los obstáculos, sino que también puede contribuir al éxito de tales esfuerzos aportando nuevas visiones y experiencias.

Diálogo con la sociedad para impulsar la inclusión y gestionar posibles conflictos sociales

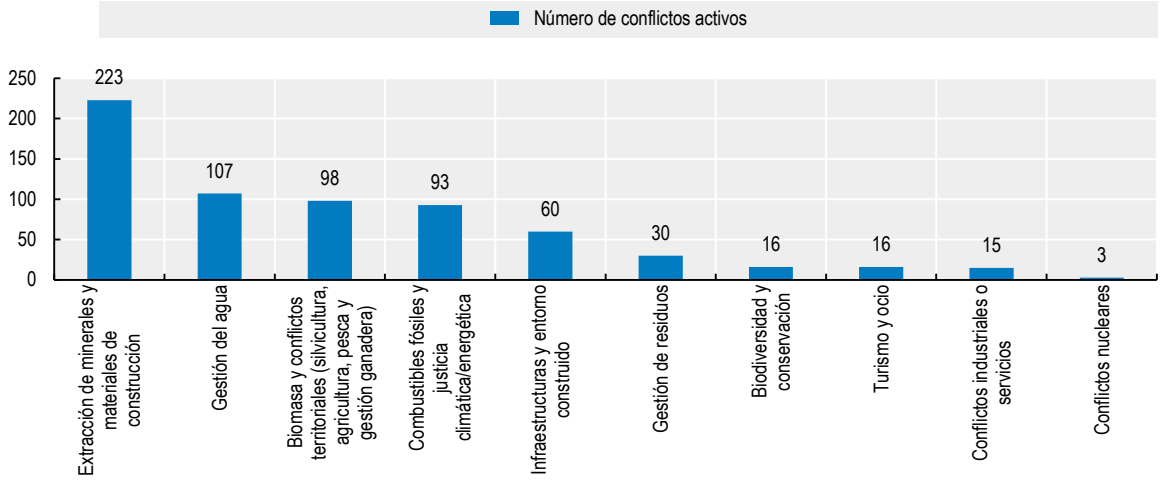
La participación ciudadana a lo largo del ciclo de inversión genera proyectos más eficaces, sostenibles y equitativos. Los aportes de los ciudadanos pueden ayudar a satisfacer sus necesidades y mejorar la confianza en el gobierno; también pueden evitar

que los proyectos terminen siendo "capturados" por determinados grupos con intereses particulares (OECD, 2014[15]).

El diálogo inclusivo es especialmente relevante por el riesgo que existe de que la transformación productiva pueda provocar conflictos sociales por los posibles efectos perjudiciales de algunas inversiones en grupos, comunidades o territorios específicos. Estos conflictos surgen debido a diversos factores económicos, sociales y medioambientales. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la adquisición de terrenos sin las medidas de consulta o compensación adecuadas, se puede provocar el desplazamiento de determinadas comunidades locales y desencadenar así tensiones sociales. Las disparidades económicas resultantes de la distribución desigual de los beneficios de un proyecto también pueden exacerbar los conflictos. Asimismo, puede surgir oposición por las consecuencias ambientales de proyectos a gran escala potencialmente perjudiciales para la biodiversidad y los medios de vida locales, sobre todo en proyectos de minería (Bebbington y Bury, 2013[16]). Estas consideraciones son de especial relevancia en un contexto en el que ALC posee una parte significativa de los minerales que son necesarios para avanzar en la transición verde a nivel mundial, y en el que existe la necesidad de realizar inmensas inversiones en diversas áreas que potencialmente pueden crear tensiones entre distintos grupos socioeconómicos y territorios (OECD et al., 2022[17]).

En los últimos años han surgido en la región numerosos conflictos sociales en torno a cuestiones medioambientales. De los 742 conflictos sociales que surgieron en ALC entre 2000 y 2022, un total de 661 seguían sin resolverse a finales de 2022. Cerca de un tercio de los conflictos activos en 2022 se concentraban en la minería (33.7%), seguido de la gestión del agua (16.2%), los conflictos por la biomasa y las tierras (14.8%), y los combustibles fósiles y la justicia climática/energética (14.1%) (Gráfico 4.4) (CALAS, 2019[18]; Environmental Justice Atlas, 2023[19]; Latin American Observatory of Environmental Conflicts, 2023[20]). En particular, en el sector de la minería, el número de conflictos aumentó un 236% entre 2010 y 2023, y afectó a más de 300 comunidades locales (OCMAL, 2023[21]).

Gráfico 4.4. **Número de conflictos sociales activos en ALC vinculados a temas ambientales, por categoría, 2022**



Nota: Estos conflictos se definen como movilizaciones de comunidades locales y movimientos sociales, que también pueden incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales contra determinadas actividades económicas, como la construcción de infraestructuras o la eliminación/contaminación de residuos, en las que los impactos ambientales son un elemento clave de las reclamaciones. El gráfico muestra los conflictos iniciados y no resueltos durante el periodo 2020-22.

Fuente: (Environmental Justice Atlas, 2023[19]).

StatLink https://stat.link/b1j7ie

Para conseguir apoyo de cara a la transformación productiva al tiempo que se previenen o gestionan los posibles conflictos sociales y casos de corrupción, es fundamental que los gobiernos establezcan mecanismos que aseguren una participación ciudadana efectiva, evaluaciones uniformes y rigurosas de impacto ambiental y social, y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de los proyectos de inversión (OECD/CAF/ECLAC, 2018[22]).

En cuanto a la participación ciudadana, existen varias herramientas que pueden ayudar a los gobiernos a promover una colaboración ascendente e involucrar a los ciudadanos durante la toma de decisiones para las políticas de inversión y transformación productiva. Las *Directrices sobre Participación Ciudadana de la OCDE* ofrecen un programa compuesto por diez pasos para planificar e implementar un proceso de participación ciudadana, que incluye: identificar el problema por resolver y el momento de la participación; definir los resultados esperados; identificar el grupo de personas relevantes; elegir el método de participación; elegir las herramientas digitales adecuadas; comunicar el proceso; implementar el proceso de participación; utilizar las sugerencias de los ciudadanos; evaluar el proceso; y fomentar una cultura de participación (OECD, 2022[23]). Estas directrices también ofrecen ocho métodos diferentes que pueden ser eficaces a la hora de involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, en particular: acceso a información y datos; reuniones abiertas; consultas públicas; innovación abierta; ciencia ciudadana; supervisión cívica; presupuestos participativos; y procesos deliberativos representativos.

En ALC ya existen varios proyectos que han incorporado la participación ciudadana a lo largo de sus fases de desarrollo. Por ejemplo, Chile coordinó un proceso participativo a través de 15 regiones al desarrollar la iniciativa Ruta Energética 2018-22: Liderando la Modernización con Sello Ciudadano, impulsada por el Ministerio de Energía con el objetivo de recabar sugerencias ciudadanas antes de acometer los esfuerzos de modernización energética (Ministerio de Energía, 2017[24]). En Costa Rica, los residentes participaron en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (Reyes y Ríos, 2016[25]; ECLAC, 2021[26]). Entre los ejemplos de supervisión cívica se incluyen la plataforma de tecnología cívica Marea Digital en Buenaventura, Colombia —que permite a los ciudadanos identificar y denunciar problemas locales que afectan a la comunidad— y la plataforma colaborativa de recopilación de datos Promise Tracker en Brasil —que permite a la ciudadanía identificar problemas que quieran abordar y recopilar datos para compartirlos con los responsables de la toma de decisiones (OECD/WB, 2022[27]). Otro buen ejemplo de participación de múltiples actores en el marco de una agenda local de transformación productiva es la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá-Cundinamarca, implementada en Colombia entre 2016 y 2020 (Llinás, 2021[28]).

Los gobiernos locales tienen un papel clave que desempeñar en la promoción de la participación ciudadana. Dado que los proyectos de inversión a menudo tienen efectos directos en comunidades y territorios específicos, los gobiernos locales deben impulsar la participación ciudadana desde el inicio de los proyectos. Las herramientas participativas deben asegurar el mayor acceso posible para todos los ciudadanos, y sobre todo para los grupos más vulnerables, que en ALC incluyen a las mujeres, las personas con discapacidad, los afrodescendientes y los pueblos indígenas. Involucrar de manera temprana a la ciudadanía es crucial en decisiones como la ubicación de instalaciones o los resultados de una evaluación de impacto ambiental. Existen otras prácticas útiles, como las asambleas de vecinos y las visitas a instalaciones, que pueden permitir el desarrollo de amplias consultas con representantes de empresas y administraciones públicas. Los comités de coordinación temporales pueden resultar útiles para crear oportunidades a menor escala de reunir a representantes de empresas, asociaciones civiles, grupos vecinales y

representantes del gobierno local con el fin de supervisar los avances de los proyectos. A su vez, la colaboración con universidades locales u organizaciones no gubernamentales (ONG) puede resultar de utilidad para prestar asistencia técnica, sobre todo en momentos clave como durante los estudios de viabilidad previa o las evaluaciones de impacto ambiental o social.

Las veedurías ciudadanas o comités de supervisión ciudadana son un ejemplo interesante de mecanismos de control que se están aplicando en varios países de ALC. Estos comités permiten a los ciudadanos supervisar las actividades de las administraciones públicas, incluida la ejecución de los contratos públicos y la gestión de los servicios públicos. Estos grupos de vigilancia garantizan la transparencia, la eficiencia y la legalidad mediante un seguimiento cercano de la actuación de los funcionarios y las instituciones públicas. Denuncian las irregularidades a las autoridades competentes y desempeñan un papel fundamental en la prevención de la corrupción y la mala gestión. En el contexto de los grandes proyectos de infraestructura pública, las veedurías contribuyen de forma significativa a garantizar que la ejecución de los proyectos se desarrolle según lo previsto y que los fondos se utilicen adecuadamente, abordando así eficazmente las preocupaciones de la comunidad.

Otros ejemplos de buenas prácticas en la región incluyen la *Guía metodológica de actividades presenciales del servicio de evaluación ambiental con la ciudadanía* de Chile, (SEA, 2013[29]; SEA, 2017[30]), y la *Guía de participación ciudadana* del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016[31]).

Las ONG también desempeñan un papel fundamental de cara a promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión. Un ejemplo de ello en ALC es la Fundación Propaz de Guatemala, que capacita y educa a los ciudadanos en métodos alternativos de resolución de conflictos, comunicación constructiva, liderazgo social, construcción de consensos y metodología sensible al conflicto. En Argentina, la Fundación Cambio Democrático brinda apoyo técnico a comunidades indígenas, mientras que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales apunta a la construcción colectiva de una ciudadanía democrática y participativa en áreas vinculadas con la sostenibilidad ambiental. A nivel internacional, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) ha creado un estándar internacional que promueve la transparencia en los pagos realizados por las empresas extractivas a los gobiernos y viceversa. Entre las medidas de transparencia se incluyen el diálogo y las consultas con la sociedad civil y la involucración de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la recopilación y análisis de datos.

Las evaluaciones de impacto social y ambiental son herramientas esenciales para medir y comprender los efectos que los proyectos, las políticas o las actividades pueden generar en la sociedad y el medioambiente. Estas evaluaciones son fundamentales para llevar a cabo una toma de decisiones informada, para la protección del medioambiente y las comunidades, para la transparencia y la participación ciudadana, así como para el cumplimiento de la regulación y la sostenibilidad a largo plazo. Las evaluaciones de impacto social y ambiental fomentan el diálogo entre las distintas partes interesadas, como las comunidades locales, las empresas, el gobierno y las ONG. Este diálogo facilita la comprensión de las preocupaciones y expectativas de cada parte implicada y busca soluciones de consenso para lograr un desarrollo sostenible.

Existen varias instituciones de ALC que tienen como objetivo gestionar las evaluaciones de impacto social y ambiental. En Chile, por ejemplo, la Ley 20.417 estableció el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que exige la participación pública como parte del proceso de evaluación ambiental de los grandes proyectos. En diciembre de 2021, los organismos encargados de los sistemas de evaluación de impacto ambiental de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú firmaron los estatutos de la Red Latinoamericana de

Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA), creada en octubre de ese mismo año para fortalecer las evaluaciones de impacto en la región e intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas (MSGP, 2010[32]; SEA, 2021[33]).

La adopción de medidas redistributivas transparentes y claramente definidas también puede contribuir a reducir las tensiones resultantes de los proyectos de inversión. Por ejemplo, ante posibles conflictos por actividades que generen un potencial impacto ambiental, es importante hacer hincapié en el desarrollo de actividades alternativas sostenibles, como destinar parte de los beneficios obtenidos al desarrollo humano, la educación y la salud de las comunidades locales, así como a la investigación, el desarrollo y la innovación (Recuadro 4.1) (IDB, 2021[34]).

Recuadro 4.1. **Costa Rica otorga acceso a recursos naturales a cambio de compartir beneficios**

Costa Rica ha implementado un mecanismo para garantizar que las comunidades locales reciban un beneficio directo de las actividades privadas de investigación y desarrollo (I+D) basadas en la biodiversidad de su entorno (esto es, acceso y participación en los beneficios derivados — ABS por sus siglas en inglés).

La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) concede contratos de acceso plurianuales para que las empresas privadas puedan investigar la biodiversidad y los recursos genéticos de Costa Rica con fines comerciales. Este procedimiento requiere el consentimiento informado previo de los productores locales y condiciones mutuamente acordadas. Desde 2016, Costa Rica ya ha concedido permisos a un total de siete empresas.

Siguiendo esta iniciativa, Costa Rica también ha creado el Distintivo ABS, la primera etiqueta de ALC que certifica que los productos cumplen con las regulaciones y mejores prácticas del modelo ABS.

Fuente: (OECD, 2023[35]).

Colaborar con el sector privado para mejorar los efectos beneficiosos en el desarrollo

Para que la transformación productiva se convierta en un motor del bienestar también es necesario incentivar a las empresas para que se transformen en organizaciones con propósito (Schoenmaker, 2020[36]). Entre las herramientas más eficaces para avanzar en esta dirección se encuentran las *Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre la Aplicación de Conductas Empresariales Responsables* y la *Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable* (OECD, 2018[37]). Hasta 2023, ocho países de ALC ya se habían adherido a estas directrices: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) para la conducta empresarial responsable pueden resultar de gran utilidad como mecanismos alternativos para mediar y resolver los conflictos que puedan surgir entre las empresas del sector privado, la sociedad civil y los gobiernos. En 2019, el PNC de Chile ayudó a resolver un conflicto entre los sindicatos y una empresa privada del sector manufacturero que había sido acusada de no respetar los derechos humanos de los trabajadores. Del mismo modo, el PNC de Brasil medió en un conflicto entre un grupo empresarial acusado de no respetar las zonas limítrofes a la instalación de sus minas y una asociación vecina (OECD, 2020[38]). Con independencia de las políticas que se adopten para promover un enfoque ascendente, será esencial que los gobiernos busquen un equilibrio entre las distintas partes interesadas, puntos de vista e intereses para evitar la denominada “captura de políticas”, es decir, situaciones en las

que las decisiones públicas sobre políticas se apartan de forma sistemática o reiterada del interés público hacia el interés específico de un grupo en particular (OECD, 2017[39]).

Existe un amplio abanico de elementos adicionales que pueden adoptarse para involucrar aún más al sector privado y mejorar los efectos positivos sobre el desarrollo. La existencia de regulaciones claramente definidas que promuevan el uso de asociaciones público-privadas (APP) puede ayudar al sector privado a identificar mejor los sectores prioritarios en cada país y sus territorios, y a incentivar las inversiones en proyectos estratégicos que generen impacto social (Capítulo 2). También puede ayudar el fomento de actividades estratégicas basadas en aportaciones moderadas de capital, evitando la concentración del mercado y democratizando su acceso para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que tengan mayor impacto en las comunidades locales (Capítulo 3). Para promover más y mejores inversiones, los gobiernos también podrían garantizar una asignación de recursos equitativa y despolitizada para aumentar la confianza del sector privado. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de infraestructuras, los gobiernos podrían implementar un sistema transparente de selección de proyectos, basado en un sólido análisis costo-beneficio, con directrices diseñadas de forma conjunta para priorizar los proyectos y con mejores evaluaciones ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) (KPMG, 2021[40]). Por último, el sector privado puede contribuir activamente a abordar desigualdades multidimensionales. Por ejemplo, las empresas privadas pueden abordar la brecha de género en determinadas industrias que son clave para la transformación productiva proporcionando formación y desarrollo de capacidades. Las empresas también pueden abordar las desigualdades de género cerrando la brecha salarial de género (Atlantic Council, 2023[41]) o identificando la carga adicional a la que se enfrentan las mujeres en el hogar —como el cuidado de otras personas o el trabajo doméstico no remunerado— y ofreciendo incentivos como horarios flexibles.

Gobierno abierto, una dimensión clave para promover el compromiso de las partes interesadas

Las políticas de gobierno abierto son fundamentales para generar confianza, aumentar la transparencia y promover la participación de las partes interesadas. El suministro de información fácilmente disponible y comprensible sobre las actuaciones gubernamentales, resultados económicos, regulación empresarial y oportunidades de inversión reduce los riesgos de inversión y fomenta una toma de decisiones informada. En los últimos años, los gobiernos de ALC han conseguido avances en la adopción de los principios de gobierno abierto. En 2022, 16 países de la región eran miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto. Además, entre 2011 y 2022 se implementaron al menos 67 planes de acción en ALC en el marco de estos principios.

Los Centros de Gobierno (CdG) pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción del gobierno abierto. Pueden generar impactos significativos al proporcionar más transparencia en cada fase del proceso de inversión, incluida: i) información clara sobre cómo registrar una empresa extranjera; ii) acceso a enmiendas y proyectos de ley; iii) coherencia entre las regulaciones de inversión y mecanismos para identificar incongruencias; iv) plataformas interactivas que muestren la priorización de proyectos con inversión privada y los presupuestos de cada proyecto; y v) información sobre el origen de los fondos privados asignados a proyectos que tengan efectos directos sobre el bienestar de los ciudadanos. Los gobiernos de ALC deben aprovechar las oportunidades que brinda la transición digital y poner a disposición todas estas herramientas en formatos digitales, multiplicando así el espectro de actores que puedan acceder a la información. En la actualidad, los CdG de los países de ALC participan en menos fases del proceso de elaboración de políticas de transparencia que los de los países de la OCDE. Los CdG de ALC tienden a centrarse en las fases de diseño, comunicación y seguimiento, mientras que

tienden a dejar las fases de implementación, coordinación y evaluación a los ministerios u organismos responsables de las políticas (OECD, 2020[42]).

Estrategias de transformación productiva de largo plazo y con alcance a todo el gobierno

La transformación productiva conlleva cambios estructurales graduales y prolongados que requieren coherencia entre políticas, un enfoque con alcance a todo el gobierno y una planificación de políticas de largo plazo. La coordinación de las políticas públicas —tanto horizontal (entre sectores) como vertical (entre niveles de gobierno)— optimiza la utilización de los recursos y mejora el impacto de las inversiones. Asimismo, si se coordinan los objetivos de las políticas entre los distintos sectores y niveles de gobierno, se impulsarán con mayor eficiencia las inversiones hacia sectores estratégicos para su transformación productiva, al tiempo que se evitarán posibles conflictos entre políticas y se abordarán los pros y contras resultantes. Esta coherencia reduce considerablemente la incertidumbre de los inversores. Del mismo modo, la planificación de las políticas permite identificar las prioridades de inversión (Capítulo 3), alinear los objetivos de las políticas y facilitar actuaciones coherentes y coordinadas más allá de los ciclos políticos (OECD, 2018[43]).

La ausencia de consenso político en las políticas estatales ha sido un desafío habitual entre los países de ALC, lo cual ha perjudicado tanto a los niveles de inversión como a la transformación productiva. La incertidumbre derivada de las incoherencias entre políticas desincentiva la inversión debido a la mayor percepción de riesgo existente, al tiempo que las fluctuaciones en los ciclos políticos afectan negativamente los planes de inversión a largo plazo. La adopción de políticas incoherentes transmite una sensación de gobernanza ineficaz, reduciendo así la confianza de los inversores e inhibiendo a la vez las inversiones nacionales y extranjeras. Además, las políticas fragmentadas impiden la formulación de estrategias industriales coherentes, mientras que la ausencia de una planificación a largo plazo obstaculiza los esfuerzos de desarrollo sostenible. La transformación productiva requiere el establecimiento de políticas estables e integrales que consigan un amplio apoyo político.

Los planes nacionales de desarrollo pueden ser una herramienta potente en los esfuerzos de transformación productiva

La mayoría de los países de ALC cuentan con un Plan Nacional de Desarrollo (PND), o estrategia nacional de desarrollo, que sirve como principal hoja de ruta del país en materia de políticas estratégicas y puede actuar como primera guía para los esfuerzos de políticas vinculadas a la inversión y a la transformación productiva. Los PND establecen la orientación de las políticas a largo plazo. Si cuentan con el acuerdo de la mayoría de las principales partes interesadas, pueden contribuir a reforzar el contrato social en la región. El proceso de elaboración de un PND suele incluir mecanismos para incorporar la participación ciudadana y fomentar la inclusión de una amplia gama de puntos de vista. Lo fundamental es que algunos PND van más allá del ciclo político o incluyen protocolos específicos para evitar que los cambios de gobierno afecten la continuidad de las políticas prioritarias (OECD, 2021[3]). Además de los PND, muchos países cuentan con políticas de desarrollo productivo cuyo objetivo es mejorar y diversificar la economía como vehículo para aumentar la productividad. Para lograrlo, estas políticas suelen incluir instrumentos y programas tanto horizontales como verticales que priorizan los sectores estratégicos en los que se centran muchos esfuerzos y recursos de desarrollo productivo.

Por lo general, los PND definen una serie de directrices de desarrollo estratégico que sirven como instrumentos de orientación tanto para las inversiones públicas como para las

privadas. Los planes nacionales de inversión deben estar conectados con las orientaciones de políticas definidas en los PND. Del mismo modo, los PND pueden influir de forma significativa en las decisiones de inversión privada al ofrecer una hoja de ruta estratégica para la estabilidad y el crecimiento futuros, una dimensión clave para la confianza de los inversores. Los PND aportan previsibilidad y, por tanto, incentivan los flujos de capital privado hacia determinados sectores estratégicos en los que los inversores privados pueden prever un crecimiento potencial. Al definir el desarrollo de infraestructuras, iniciativas de desarrollo de capacidades o posibles incentivos económicos, los PND esbozan nuevas oportunidades de mercado, aumentando el atractivo del país de cara a los inversores.

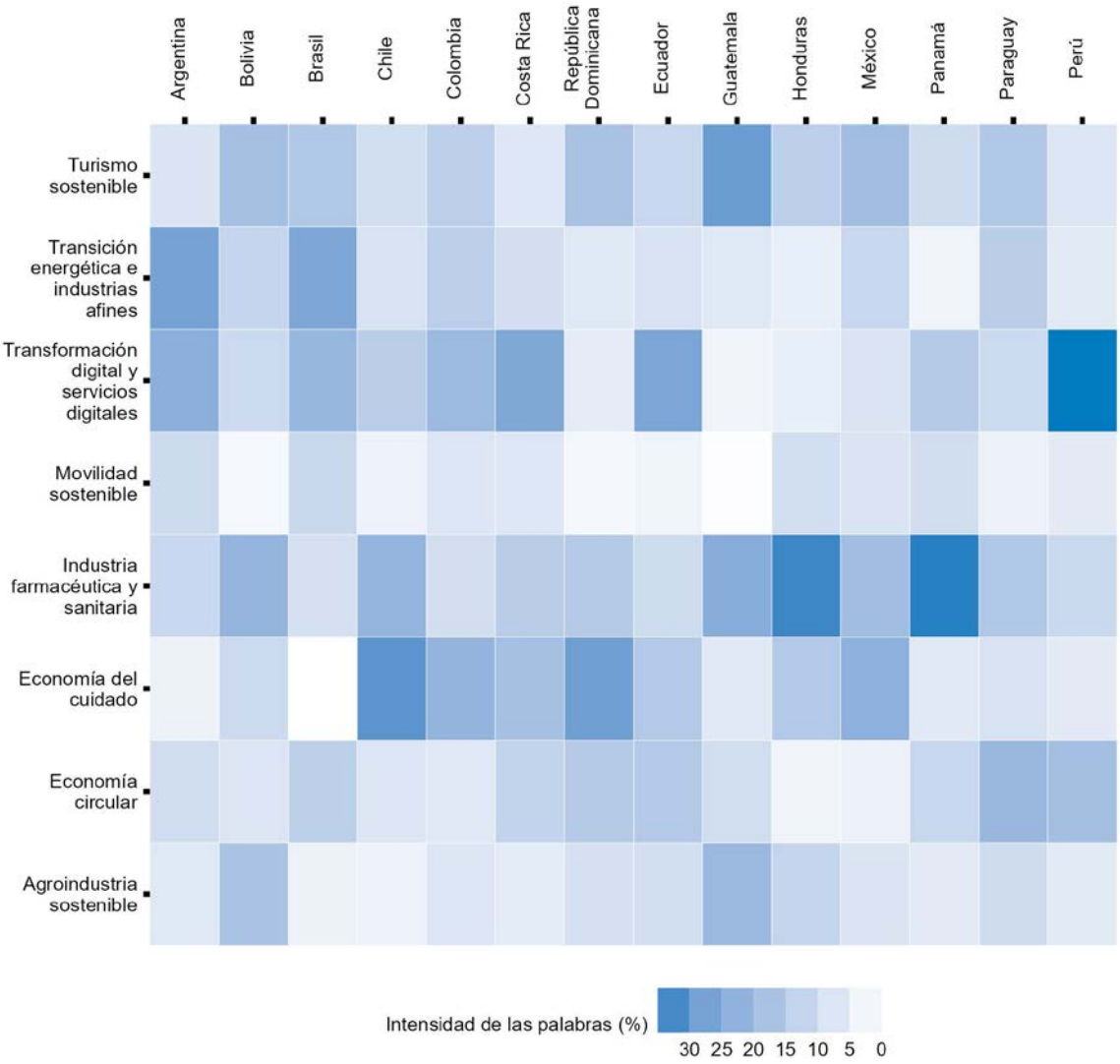
Para garantizar una implementación eficaz, los PND deben definir la asignación presupuestaria de cada prioridad o vincularlas con fuentes específicas de financiamiento; por ejemplo, fondos específicos o recursos de sectores concretos, tales como las industrias extractivas. Otras medidas específicas que pueden contribuir a dinamizar estos objetivos prioritarios son: i) incluir un enfoque sectorial y territorial que permita generar un mapa productivo nacional; ii) aumentar la disponibilidad de terrenos para sectores estratégicos productivos; iii) identificar a las principales partes interesadas de los sectores público y privado y asignar responsabilidades específicas a largo plazo; y iv) establecer herramientas concretas de coordinación horizontal (sectorial) y vertical (subnacional). Por último, será fundamental especificar cómo, cuándo y con qué fondos se llevará a cabo su seguimiento y evaluación.

Los PND suelen diseñarse para aprovechar los puntos fuertes, los recursos y las áreas potenciales de crecimiento de un país, tales como sus recursos naturales, la solidez de su industria, la cualificación de su mano de obra y sus ventajas geográficas. Proporcionan una hoja de ruta para orientar la inversión pública y privada hacia sectores en los que el país tiene o pretende desarrollar ventajas competitivas.

La mayoría de los PND de los países de ALC incluyen orientaciones de políticas públicas asociadas a sectores estratégicos con alto potencial para impulsar el desarrollo sostenible. En el Capítulo 3 se ofrece una relación de sectores estratégicos con potencial para impulsar la productividad, fomentar la inclusión social y promover la sostenibilidad en la región. Estos sectores, que presentan perspectivas atractivas para la inversión, incluyen: la agroindustria sostenible; la economía circular y la gestión sostenible del agua; la economía del cuidado; la movilidad sostenible; la industria farmacéutica y de la salud; la transformación digital y los servicios digitales; la transición energética y las industrias relacionadas; y el turismo sostenible (ECLAC, 2023[44]; ECLAC, 2023[45]).

Un análisis de los PND de 14 países de ALC indica que, entre todas estas áreas estratégicas, hay prioridades, como la transformación digital, que aparecen de manera destacada en la mayoría de los PND, y sobre todo en países como Costa Rica, Ecuador y Perú. La industria farmacéutica y de la salud también recibe una atención significativa en la mayoría de los PND, y países como Guatemala, Honduras y Panamá dan prioridad a esta agenda. La transición energética también se aborda en la mayoría de los PND, aunque no en todos, y se trata con especial énfasis en Argentina y Brasil. El interés por la economía del cuidado también varía de un país a otro, y países como Chile, Colombia y la República Dominicana se sitúan a la cabeza en este ámbito. El enfoque del turismo sostenible se distribuye de manera equilibrada en todos los países, aunque Guatemala asigna una mayor importancia relativa a este sector. La agroindustria sostenible también se aborda en todos los países, aunque con menor atención, y son Bolivia y Guatemala los países que le asignan una mayor importancia. La economía circular se aborda de forma equilibrada en la mayoría de los PND, aunque la mayoría de países no lo consideran un sector prioritario. Por último, la movilidad sostenible muestra una escasa atención en todos los PNDs. (Gráfico 4.5).

Gráfico 4.5. **Priorización de sectores económicos estratégicos en los planes nacionales de desarrollo de ALC, 2023**



Nota: Se entiende por "intensidad de las palabras" la frecuencia con la que aparece un conjunto específico de palabras asociadas a un sector estratégico en cada PND. La idea es que cuanto más frecuentemente aparece un conjunto de palabras, más "intensas" o importantes pueden ser dichas expresiones en el contexto analizado. Esta intensidad, medida por la frecuencia, puede ser indicativa de la prominencia o importancia de un tema concreto dentro del texto. Los colores más oscuros indican una mayor frecuencia de las referencias a un determinado sector estratégico dentro del plan. La suma de las frecuencias relativas de todos los sectores económicos del PND de un país asciende a 100. Los datos del texto de cada país proceden del último Plan Nacional de Desarrollo (o su equivalente), publicados a octubre de 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes nacionales de desarrollo de 14 países de ALC: Argentina (MECON, 2023[46]); Bolivia (MPDB, 2021[47]); Brasil (MEB, 2020[48]); Chile (Government of Chile, 2022[49]); Colombia (DNP, 2023[50]); Costa Rica (MIDEPLAN, 2022[51]); República Dominicana (MEPyD, 2012[52]); Ecuador (SNPE, 2021[53]); Guatemala (SPPPG, 2014[54]); Honduras (Government of Honduras, 2022[55]); México (PREUM, 2019[56]); Panamá (Government of Panama, 2019[57]); Paraguay (STPP, 2021[58]); y Perú (CEPLAN, 2022[59]).

StatLink https://stat.link/0o23ay

Es importante señalar que el alcance y la profundidad de los PND varía de forma considerable de un país a otro, lo cual puede influir en la intensidad con la que aparecen señaladas determinadas áreas de políticas. Del mismo modo, algunos países tienen estrategias sectoriales específicas para determinados sectores que no ocupan un lugar destacado en los PND. Si bien puede haber razones concretas en cada país para explicar

por qué algunos sectores aparecen de forma más destacada que otros, se pueden extraer algunas conclusiones. En primer lugar, algunos sectores pueden ocupar un lugar menos prominente no porque sean menos relevantes, sino porque otros organismos o instituciones asumen un papel más visible a la hora de definir la orientación estratégica en ese sector (p. ej., las cuestiones económicas suelen estar dirigidas por el Ministerio de Hacienda o por los organismos de regulación y supervisión financiera). En segundo lugar, en ocasiones los PND se centran en áreas nuevas y emergentes, en lugar de en áreas de políticas que están sólidamente desarrolladas o que cuentan con un marco de políticas más consolidado.

Recuadro 4.2. **Hoja de ruta estratégica para la inversión pública en Colombia**

En Colombia, el gobierno nacional formula cada cuatro años una hoja de ruta estratégica a mediano plazo para la inversión pública. Esta hoja de ruta se elabora a través de una serie de procesos, organismos e instancias regidos por el Sistema Nacional de Planeación de Colombia. Tras la toma de posesión de cada nuevo gobierno, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) elabora un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se basa en las propuestas del gobierno electo. El borrador inicial se somete a la revisión de tres órganos distintos para garantizar el cumplimiento de varios criterios: la participación de la sociedad civil (a través del Consejo Nacional de Planeación [CNP]), la viabilidad técnica y económica (a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social [Conpes]) y el cumplimiento jurídico (evaluado por el Congreso Nacional).

Cada PND va acompañado de un componente presupuestario, conocido como Plan Plurianual de Inversiones, que es aprobado por el Congreso. En dicho plan, el gobierno nacional estima su capacidad a mediano plazo para alcanzar sus objetivos de inversión pública, respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo establecido por el Ministerio de Hacienda. El PND 2022-2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida identifica cinco áreas clave que son esenciales para la implementación de la agenda del gobierno; el Plan Plurianual de Inversiones y su correspondiente legislación, la Ley 2294 de 2023, establecen una distribución estratégica y detallada a través de las cinco áreas clave de políticas. Estas cinco áreas son: seguridad humana y justicia social (64.4% del total de la inversión pública para el periodo 2023-26); convergencia regional (12%); transformación productiva, internacionalización y acción climática (9.9%); derecho humano a la alimentación (4%); y ordenamiento territorial en torno al agua y justicia ambiental (2.5%). El resto se destina a la estabilidad macroeconómica (7.2%), que se define como elemento transversal en el PND. Además, el Plan Nacional de Inversiones Públicas define un plan plurianual de inversiones intersectoriales para asignar el presupuesto suplementario a los programas del Proceso de Paz.

Fuente: PND (2023[50]); Congreso de Colombia (2023[60]); PND (2023[61]); Montoya y Nieto-Parra (forthcoming[62]).

Los sistemas nacionales de inversión pública ayudan a conectar las inversiones con objetivos específicos

Los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) desempeñan un papel fundamental en las estrategias de desarrollo. Estos sistemas engloban al conjunto de instituciones estatales que rigen el proceso de inversión pública de un país y emplean metodologías, normas y procedimientos para orientar la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión. Los SNIP son clave a la hora de impulsar el impacto económico y social de la inversión pública, lo que mejora la calidad y eficiencia del gasto público

(ECLAC, 2023[63]). Facilitan la toma de decisiones estratégicas en inversiones sociales e infraestructuras, alineándolas con los objetivos de desarrollo, fomentando el crecimiento económico y mejorando la competitividad.

Los SNIP también pueden servir como catalizadores para captar inversión privada, actuando como garantía de continuidad de los proyectos y minimizando el riesgo para los inversores. Si se impulsan la credibilidad, la transparencia y la previsibilidad de las políticas públicas, se podría potenciar el papel de los SNIP de cara a estimular la participación del sector privado. Estas mejoras podrían atraer más IED e impulsar una transformación significativa de la base productiva, estimulando a su vez la innovación, mejorando las cadenas de valor y creando puestos de trabajo de alta calidad.

El éxito de los SNIP se basa en varios elementos fundamentales. En primer lugar, la alineación estratégica con el PND de un país garantiza que las iniciativas de inversión contribuyan a objetivos socioeconómicos más amplios. La existencia de un marco institucional sólido, caracterizado por funciones y responsabilidades claramente definidas, facilitará la coordinación y la toma de decisiones eficaces. Asimismo, se necesitan procedimientos transparentes y eficientes para priorizar, implementar y evaluar proyectos con impacto. La sostenibilidad fiscal es otro aspecto clave en todas las decisiones de inversión, al igual que la participación activa de las partes interesadas, que mejora la calidad de la inversión y el respaldo público. Por su parte, la existencia de un marco regulatorio bien estructurado protegerá los intereses de todas las partes implicadas, promoviendo así un entorno propicio para la inversión. Por último, la integración de las inversiones públicas con los procesos presupuestarios anuales y de mediano plazo garantizará su viabilidad financiera (ECLAC, 2023[63]).

Los planes de desarrollo sectorial son hojas de ruta estratégicas que constituyen un marco sobre el que promover el crecimiento y el desarrollo en sectores económicos específicos. Estos planes suelen ser elaborados por los gobiernos, a menudo en consulta con las partes interesadas del sector privado, del mundo académico y de la sociedad civil. Identifican objetivos, metas y estrategias clave para el desarrollo de diferentes sectores, y también pueden esbozar políticas o iniciativas específicas que deben implementarse. Por ejemplo, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (ME, 2020[64]); Costa Rica dispone de un Plan Nacional de Energía 2015-2030 (MINAE, 2015[65]) y un Plan Nacional de Turismo 2022-2027 (ICTCR, 2022[66]); Colombia tiene un Plan Energético Nacional 2020-2050 (UPME, 2021[67]) y un Plan Sectorial de Turismo 2022-2026 (MCIT, 2022[68]), y actualmente está poniendo en marcha una nueva Política de Reindustrialización que prioriza cinco sectores estratégicos; Perú dispone de un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (MEF Perú, 2022[69]); y la República Dominicana cuenta con un Plan Nacional de Infraestructura 2020-2030 (MEPyD, 2020[70]).

Además de fomentar la coordinación de políticas y la colaboración del sector privado, estos planes pueden atraer inversiones nacionales y extranjeras para apoyar los esfuerzos de transformación. Al mejorar la competitividad sectorial, pueden estimular la innovación, el desarrollo de competencias, la mejora de las infraestructuras y los avances regulatorios. Por ejemplo, el Plan Nacional de Semillas de Alto Rendimiento de Ecuador tuvo un gran éxito e involucró a un gran número de partes interesadas, lo que impulsó la productividad de los pequeños agricultores gracias al financiamiento y a la participación de actores tanto públicos como privados (Recuadro 4.3).

Recuadro 4.3. **Ecuador — Una iniciativa de éxito para impulsar la productividad de los pequeños agricultores**

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador puso en marcha el Plan Nacional de Semillas de Alto Rendimiento en 2013 y contó con la participación de múltiples partes interesadas. El plan se centró principalmente en el suministro de paquetes tecnológicos a los pequeños productores de maíz para mejorar sus niveles de productividad. Una pieza clave del éxito fue la creación de una red en la que participaron el gobierno nacional, los gobiernos locales, empresas privadas y bancos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería dirigió y coordinó el proyecto, mientras que los gobiernos locales desempeñaron un papel fundamental en la formalización de los pequeños agricultores. Las empresas privadas establecieron las bases para la compra del maíz, mientras que los proveedores privados facilitaron los recursos necesarios para los paquetes tecnológicos. Los bancos privados y los bancos de desarrollo facilitaron apoyo financiero. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) proporcionó financiamiento para mejorar la capacidad de las empresas para comprar el maíz producido en el marco del programa. El Servicio de Rentas Internas de Ecuador creó además un régimen fiscal simplificado.

El desarrollo de este tipo de estrategias multipartitas para aumentar la productividad sectorial puede potenciar el impacto de los recursos de inversión. Esta iniciativa duplicó con creces el rendimiento medio de producción de maíz, pasando de 3.8 a 7.66 toneladas por hectárea, mientras que la rentabilidad neta de los beneficiarios osciló entre 890 USD y 1 292 USD por hectárea en 2017, frente a los escasos 102 USD por hectárea de los productores no beneficiarios.

Fuente: CAF (2019[71]).

La gobernanza multinivel puede fomentar el potencial de las inversiones

La multiplicidad de políticas y actores implicados en los esfuerzos de inversión y transformación productiva exige un alto grado de coordinación. Para ello, es necesario implantar una gobernanza multinivel eficaz que coordine los objetivos de las políticas nacionales con las instituciones y los actores a nivel subnacional y local. La implementación de herramientas de gobernanza multinivel para la transformación productiva puede producirse vertical u horizontalmente, con la participación de los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, así como de las principales partes interesadas, tales como el sector privado y las asociaciones de vecinos.

Algunas herramientas de gobernanza multinivel pueden servir de modelo, si bien cada país deberá adaptarlas a sus necesidades específicas (Allain-Dupré, 2020[72]). La creación de un mapa con las principales partes interesadas y sus canales de comunicación puede ayudar a identificar posibles brechas y comprender la distribución de responsabilidades en términos de sectores y funciones (OECD, 2017[73]). En los países de la OCDE es habitual el uso de contratos específicos que permiten establecer de antemano las responsabilidades de todos los actores: el gobierno nacional, que decide la priorización y adjudicación de los proyectos; los inversores, que deben cumplir las normas sociales y ambientales; y los gobiernos locales, que deben proporcionar determinados bienes y servicios (Charbit, 2020[74]). En otros programas de gobernanza multinivel, las prioridades estratégicas se definen a nivel subnacional, como en el caso de las Estrategias de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación, aplicadas en la Unión Europea en la última década (Foray, David y Hall, 2009[75]). Al añadir cláusulas de cofinanciamiento a estos contratos, se puede

contribuir a garantizar que todas las partes cumplan sus responsabilidades. La cooperación interjurisdiccional, cuando se implique a más de un municipio en la producción de un bien o servicio concreto, también puede impulsar las cadenas de valor locales. Este tipo de proceso de gobernanza multinivel podría resultar especialmente útil para las estrategias de inversión coordinadas o las asociaciones rurales-urbanas, generando efectos indirectos positivos, aumentando la eficiencia a través de las economías de escala y potenciando sinergias entre las políticas de municipios vecinos (OECD, 2019[76]).

Los gobiernos locales tienen un papel clave que desempeñar en los esfuerzos de transformación productiva —y en la conexión de las inversiones con las necesidades y el potencial de comunidades y territorios específicos. Por ejemplo, los gobiernos locales pueden atraer IED facilitando a los inversores la información y el acceso a proveedores locales y poniéndolos en contacto con empresas locales (OECD, 2015[2]). Del mismo modo, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de proporcionar bienes y servicios que repercutan directamente en el desarrollo de las comunidades locales y sus actividades productivas, así como en la captación de inversiones (OECD, 2015[2]). La OCDE ha desarrollado un marco con las principales dimensiones políticas de tres regiones específicas de países de América del Sur para mejorar su atractivo: Argentina (Misiones), Chile (Valparaíso y Magallanes) y Colombia (Córdoba y Pacífico) (OECD, 2023[77]).

Las políticas de ordenamiento territorial y la asignación de usos del suelo están íntimamente relacionadas con el tipo de actividades que pueden desarrollarse a nivel local. Actualmente, los 33 países de ALC cuentan con una ley, una política o un plan de ordenamiento territorial; sin embargo, solo 19 de ellos cuentan con mecanismos de coordinación entre la planificación sectorial y la ordenación del territorio (ECLAC, 2023[78]). Esta responsabilidad de los gobiernos locales es especialmente importante, ya que el hecho de contar con información clara sobre la tenencia de las tierras puede incentivar el desarrollo de nuevas inversiones (OECD, 2015[2]). Asimismo, los diferentes usos que los municipios otorguen a cada parcela determinarán directamente qué tipo de inversores podrán ubicarse en la zona. La asignación de terrenos para futuras inversiones debería contar con un alto grado de participación ciudadana (véase más arriba el apartado sobre la participación de las partes interesadas). El ordenamiento territorial y la gestión catastral son esenciales para la inversión y el desarrollo territorial, pero también sirven para mejorar la gestión fiscal y apoyar la integración de toda la información jurídica, inmobiliaria y física (OECD, 2023[77]).

Los acuerdos institucionales alternativos, como las iniciativas basadas en clústeres, tienen el potencial de mejorar la coordinación entre el sector privado, el sector público, el mundo académico y la sociedad civil. Estos marcos de colaboración pretenden abordar las prioridades estratégicas de forma colectiva, fomentando el desarrollo de sectores prioritarios en las estrategias productivas. Estas iniciativas sirven de conducto para tender puentes entre los esfuerzos de desarrollo nacionales y locales, actuando así como herramienta de gobernanza multinivel. El uso de las iniciativas de clústeres ha cobrado un impulso significativo en toda la región de ALC, con experiencias notables en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y el Caribe. Sin embargo, su aplicación podría mejorarse, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de una mayor asignación financiera. Es necesario que se adopten medidas integrales para armonizar la calidad y la profundidad de las agendas de los clústeres, y para garantizar una integración más fluida con las estrategias nacionales generales y las políticas locales de desarrollo productivo (Salazar-Xirinachs, 2020[79]; Salazar-Xirinachs, 2020[80]; Llinás, 2021[28]). Un mayor —y mejor— uso de las iniciativas de clústeres para implementar las políticas de desarrollo productivo en ALC podría resultar clave en la modernización y diversificación de las economías de la región.

Financiando las inversiones necesarias para la agenda de desarrollo

ALC necesitará una amplia movilización de recursos públicos y privados para financiar las inversiones necesarias en la región. Existen dos áreas de políticas que destacan por su capacidad para canalizar inversiones directamente hacia objetivos estratégicos de desarrollo. La primera está vinculada a las instituciones públicas de financiamiento del desarrollo (IFD), cuyo papel puede reforzarse en la región. La segunda es el desarrollo de instrumentos de financiamiento innovadores, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS).

Las IFD, representadas en su mayoría por bancos de desarrollo públicos nacionales y subnacionales, desempeñan un papel crucial en la prestación de servicios financieros innovadores, apoyo técnico y digital y en la mejora del acceso a los mercados financieros de las empresas.[2] Las IFD están bien posicionadas para ofrecer financiamiento asequible a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que impulsan el empleo. Las IFD públicas pueden ofrecer oportunidades únicas para financiar todas las etapas del crecimiento, sobre todo de las mipymes, cubriendo la mayor parte de sus necesidades de capital de trabajo e inversión. También pueden facilitar el acceso de las mipymes a los mercados de capitales, lo cual es crucial para obtener financiamiento a largo plazo, y pueden alinear las inversiones con las prioridades económicas del país. Estas inversiones pueden utilizarse para mejorar infraestructuras vitales, sectores económicos clave, iniciativas de I+D y proyectos que promuevan la igualdad de género, la transformación digital y la transición verde. Al ofrecer servicios financieros y no financieros adaptados a municipios, instituciones públicas locales y gobiernos nacionales, las IFD también pueden impulsar la inversión pública en sectores económicos clave, como el de infraestructura y el de la salud.

Los instrumentos de deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza) son fundamentales para movilizar y aprovechar el financiamiento donde más se necesita, tanto para los emisores del sector público como del privado. Los bonos GSSS, como principal clase de activo dentro del universo de activos ASG, representan una oportunidad única para que ALC vincule sus necesidades de deuda a criterios de sostenibilidad. Para impulsar el financiamiento a través de bonos GSSS, es necesario ampliar y armonizar los marcos de finanzas sostenibles, incluidos los principios, normas y taxonomías (OECD, 2023[81]). También es importante consolidar sistemas fiables de seguimiento y verificación para mantener la transparencia del mercado y evitar prácticas de *greenwashing*, o esfuerzos de las empresas para promover sus contribuciones positivas a algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin mencionar sus impactos negativos en otros.

Esta sección aborda cómo la utilización de servicios financieros y técnicos de las IFD públicas puede ayudar a las mipymes a realizar inversiones clave que impulsen la transformación productiva y aborden desafíos transversales. Asimismo, explica cómo las IFD apoyan a los gobiernos, a los municipios y a las instituciones públicas para impulsar la inversión en sectores clave. Más adelante, se centra en los bonos GSSS y en cómo estos pueden fomentar las inversiones públicas y privadas con el respaldo de marcos de finanzas sostenibles más consolidados y armonizados.

Las IFD como facilitadoras clave de las inversiones públicas y privadas

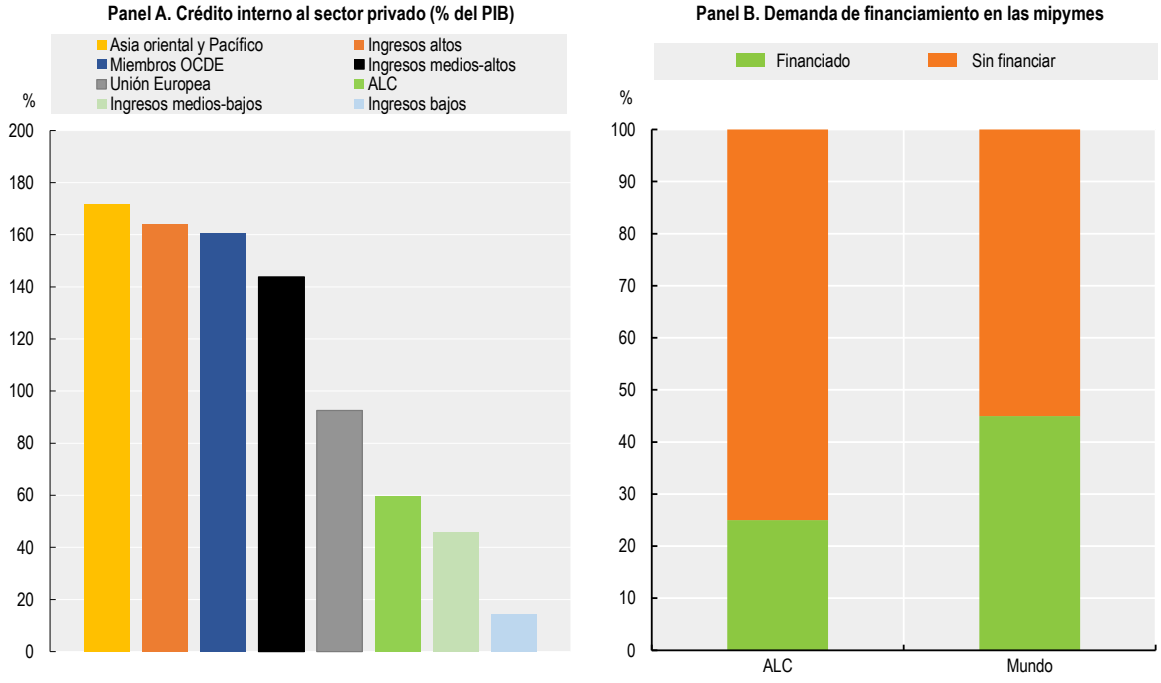
Las IFD nacionales y subnacionales cuentan con un posicionamiento único para movilizar recursos esenciales para alcanzar los ODS y guiar los procesos de transformación productiva de forma equitativa y sostenible (ALIDE, 2023[82]). Las IFD tienen el mandato de promover el desarrollo económico y el empleo, y de facilitar inversiones y proyectos que se ajusten a los objetivos de desarrollo del país. Las IFD públicas engloban principalmente

a bancos nacionales de desarrollo (BND) y a bancos subnacionales de desarrollo (BSD). También incluyen a instituciones financieras especializadas y a fondos de alcance nacional y local. En ALC, el promedio de activos de las IFD asciende al 9.4% del PIB en el caso de Costa Rica, al 7.9% en Uruguay, al 7.9% en Panamá y al 7.4% en Chile (ALIDE, 2020[83]).

Las IFD públicas poseen un conocimiento inigualable de los mercados locales y mantienen relaciones muy consolidadas con actores locales del sector privado y público. Esta posición ventajosa les permite evaluar riesgos, desarrollar carteras de proyectos, generar perspectivas de inversión y facilitar flujos de capitales nacionales e internacionales entre los sectores público y privado (Feyertag, Attridge y Kumar, 2022[84]). Las IFD públicas también pueden desempeñar un papel catalizador utilizando mecanismos de financiamiento mixto para crear rendimientos ajustados al riesgo más favorables para los inversores privados internacionales (Capítulo 5). Dada la heterogeneidad de capacidades y habilidades existente entre las distintas IFD, algunas están más preparadas que otras para apoyar las transiciones verde, digital y social de ALC. No todas las IFD tienen la misma capacidad de préstamo ni pueden acceder a las mismas condiciones de financiamiento. Entre las limitaciones que afectan a algunas instituciones, en particular a los bancos nacionales, se encuentra el escaso acceso a capital de bajo costo a largo plazo. Otra importante dificultad relacionada es la concesión de financiamiento a entidades que no cuentan con garantías claras de sus gobiernos. Esta cuestión es especialmente importante cuando se trata de financiar proyectos para entidades municipales y gobiernos locales muy endeudados.

El potencial de las IFD suele estar subutilizado en los países de ALC, sobre todo a nivel nacional y subnacional (Feyertag, Attridge y Kumar, 2022[84]; Smits y Rodríguez, 2022[85]). Gracias a los diversos e innovadores instrumentos financieros que manejan, las IFD pueden desempeñar un papel clave a la hora de abordar la falta de profundidad de los mercados financieros de ALC, redistribuyendo los riesgos y haciendo que los mercados sean más inclusivos. A su vez, las IFD también tienen el potencial de cerrar las brechas de financiamiento a las que se enfrentan las empresas y ayudar a expandir el mercado. Aunque existe una heterogeneidad sustancial entre los países de ALC, los sistemas financieros de la región siguen estando subdesarrollados en relación con el nivel económico de la mayoría de los países. En términos de crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB, la región de ALC se sitúa, con un 59.5%, muy por debajo de los niveles de Asia oriental y el Pacífico (171.5%) y de los países de la OCDE (160.7%) (Gráfico 4.6, Panel A). Como resultado, el 75% de las necesidades de financiamiento de las mipymes se quedan sin cubrir en ALC (Gráfico 4.6, Panel B).

Gráfico 4.6. **Profundidad de los mercados financieros de ALC**



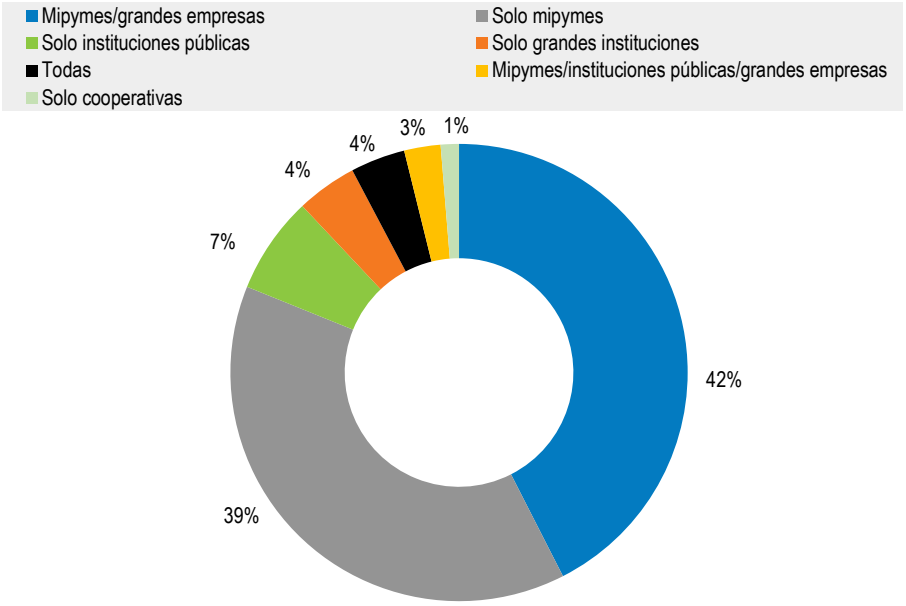
Fuente: (World Bank, 2023[86]); (SME Finance Forum, 2017[87]).

StatLink https://stat.link/3igz56

Las mipymes representan el 99% de las empresas formales y el 66% del empleo formal en ALC (Dini y Stumpo, 2020[88]). Mientras que en Europa las mipymes aportan el 20% del PIB, en ALC solo contribuyen el 3.2%. Esta diferencia se debe, en parte, a la brecha de financiamiento existente en la actualidad y a los limitados esfuerzos por parte de las mipymes de ALC por adoptar las tecnologías y las mejoras en los procesos productivos (Oliveira de Paiva, 2020[89]) (Capítulo 3). Dado que las mipymes pueden constituir un segmento importante para la recuperación económica sostenida y la creación de empleo, es fundamental que se aborde una de las principales barreras estructurales a las que se enfrentan: la brecha de financiamiento (López-Calva, 2021[90]).

Un análisis hecho en 2023 de los instrumentos financieros utilizados por 38 IFD[3] públicas nacionales y subnacionales en 13 países de ALC destaca el papel crucial que desempeñan las IFD en el financiamiento de las mipymes en la región (Gráfico 4.7). De los 473 instrumentos financieros analizados, el 42% se dirige tanto a las mipymes como a las grandes empresas, el 39% solo a las mipymes, el 7% a instituciones públicas, incluidos gobiernos nacionales y municipios, y el 4% solo a grandes empresas.

Gráfico 4.7. **Objetivos de instrumentos financieros de IFD seleccionadas en ALC, 2023**



Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

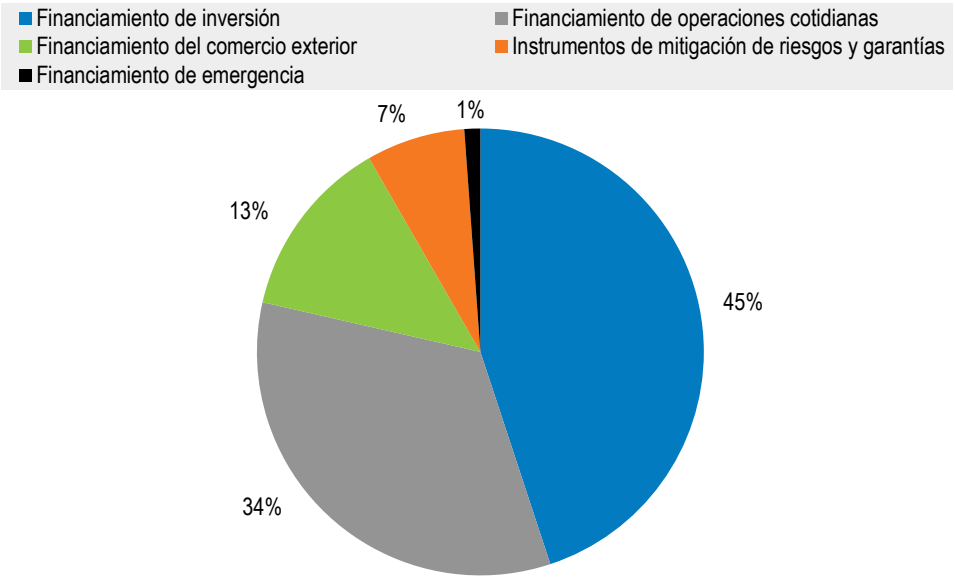
Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/bxst3r

Las IFD ofrecen a las mipymes una variada gama de instrumentos y servicios

En ALC, las IFD ofrecen a las mipymes una variedad de instrumentos financieros a la medida que satisfacen sus necesidades financieras en cada fase de desarrollo. Estos instrumentos pueden agruparse en cinco tipos de financiamiento: i) financiamiento de operaciones cotidianas (capital de trabajo, nóminas, existencias, alquileres); ii) financiamiento de inversiones; iii) financiamiento del comercio exterior; iv) financiamiento de emergencia; y vi) instrumentos de mitigación de riesgos y garantías. Los principales tipos de financiamiento ofrecidos a través de las 38 IFD analizadas son el financiamiento de inversiones (45%) y de operaciones cotidianas (34%). Estos datos demuestran el compromiso de las IFD en garantizar las necesidades de capital de trabajo, liquidez e inversión a largo plazo de las mipymes. Otros tipos de financiamiento son menos habituales y están destinados principalmente a mejorar la inclusión financiera y la competitividad de las mipymes (Gráfico 4.8).

Gráfico 4.8. **Tipos de financiamiento ofrecidos a las mipymes por las IFD públicas en ALC, 2023**



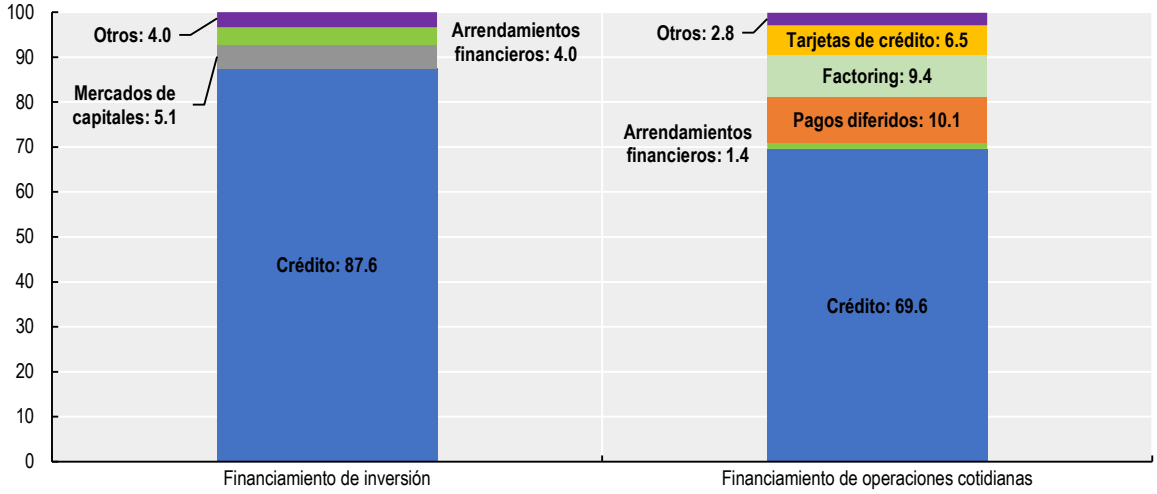
Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/rawmkb

Existen múltiples herramientas para apoyar a las mipymes en el financiamiento de sus necesidades de inversión. Estas inversiones son esenciales para que las mipymes realicen renovaciones o ampliaciones, adquieran nuevos bienes de capital y pongan en marcha proyectos que fomenten la innovación. Los créditos son el instrumento más utilizado para financiar proyectos de inversión (87.6%), aunque existen otros tipos de financiamiento que se utilizan menos, pero que también pueden ser útiles para el desarrollo de las mipymes. Los mecanismos de financiamiento ofrecidos para dar acceso a las mipymes a los mercados de capitales (5.1%) pueden permitirles participar en importantes carteras de inversión. Los arrendamientos financieros (o instrumentos de *leasing*) (4.0%) se ofrecen como herramienta innovadora que puede permitir a las mipymes financiar inversiones productivas a largo plazo. Estas inversiones se llevan a cabo a través de una tasa de interés subsidiada que facilita la adquisición de bienes de capital destinados a aumentar la productividad en sectores clave de la economía. Las garantías y los fondos de crédito son otros de los instrumentos financieros utilizados por las IFD para ayudar a impulsar la inversión (Gráfico 4.9).

Las IFD también pueden financiar los gastos cotidianos de las mipymes, incluido el capital de trabajo, las existencias, las nóminas y los alquileres. Los créditos vuelven a ser el instrumento más utilizado (69.6%) y tienen como objetivo el mantenimiento y/o la generación de empleo y la adquisición de maquinaria. Los créditos a largo plazo pueden permitir a las mipymes adquirir insumos, materias primas o combustible para que puedan mantener su actividad productiva y mejorar su competitividad. Los mecanismos de pagos diferidos (10.1%) se utilizan para ayudar al desarrollo comercial, mientras que el *factoring* (9.4%) se ofrece a las mipymes para impulsar su competitividad y aumentar la liquidez en su día a día. Otros instrumentos financieros utilizados para mejorar la liquidez y el acceso al capital de trabajo son las tarjetas de crédito, los arrendamientos financieros o las ventas con arrendamiento posterior, los fideicomisos, las garantías, los fondos de crédito y la cancelación de pasivos (Gráfico 4.9).

Gráfico 4.9. **Instrumentos financieros ofrecidos a las mipymes por tipo de financiamiento (%), 2023**



Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La categoría "Otros" incluye los siguientes instrumentos financieros: ayudas económicas no reembolsables, fondos de crédito, garantías, fideicomisos y cancelación de pasivos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/9gr42k

Algunas IFD han desarrollado un conocimiento considerable en el financiamiento de las necesidades de comercio exterior de las mipymes. Este tipo de financiamiento se lleva a cabo a través de mecanismos que proporcionan garantías y/o fondos para operaciones de financiamiento previas y posteriores a la exportación de bienes y servicios. Para ayudar a las mipymes a protegerse frente a riesgos y catástrofes naturales, las IFD públicas de la región de ALC también ofrecen líneas de financiamiento (crédito) de emergencia, que pueden financiar la adquisición de nuevos bienes de capital y/o la construcción de instalaciones.

Los fondos de fideicomisos y las garantías también son instrumentos importantes de mitigación de riesgos y seguridad ofrecidos por las IFD públicas que buscan ayudar a las mipymes a acceder al financiamiento de proyectos en sectores estratégicos. Los fondos de fideicomisos ofrecidos a las mipymes apoyan principalmente programas de desarrollo económico y social alineados con las prioridades nacionales que pretenden fomentar la creación de empleo y promover la sostenibilidad medioambiental. Las garantías también pueden mejorar la inclusión financiera al reducir el riesgo de crédito y proporcionar mayor seguridad a los prestamistas. Se trata de un área de actuación especialmente relevante para aquellas mipymes que tienen activos limitados o un escaso historial de crédito. Las IFD públicas que cuentan con una sólida calificación crediticia permiten a las mipymes adquirir financiamiento en mejores condiciones, por ejemplo con plazos más largos, menores requisitos de entrada y tasas de interés más bajas. En ALC, las mipymes utilizan principalmente préstamos y líneas de crédito para el financiamiento relacionado con el clima, lo que resalta la necesidad de ampliar las garantías que pueden ayudar a reducir riesgos y atraer nuevas inversiones. Asimismo, asegurar que los sistemas de garantía crediticia preserven la disciplina de mercado en la asignación de créditos es una cuestión clave (Blancher et al., 2019[91]).

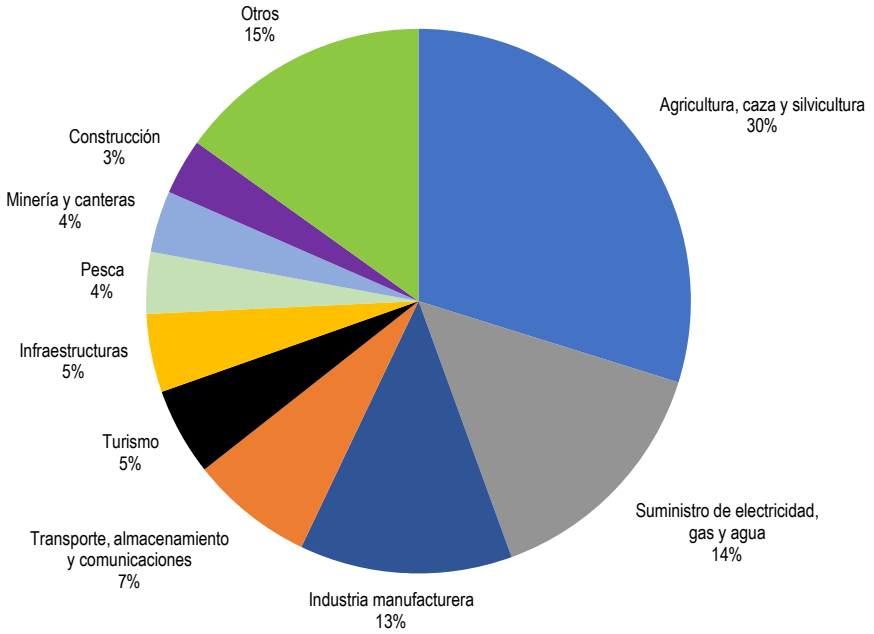
Dada su condición como entidades públicas clave, las IFD tienen ante sí la posibilidad de aumentar la oferta y la calidad de los instrumentos financieros. Estos instrumentos pueden fomentar la inversión innovadora y a largo plazo, así como la creación de empleo

por parte del sector privado, sobre todo en el caso de las mipymes. Es fundamental que estas aumenten su capacidad y accesibilidad a instrumentos financieros innovadores de manera que puedan combatir las limitaciones actuales de los sistemas financieros de la región (Coalición Regional, 2016[92]). También es necesario consolidar sistemas de monitoreo y seguimiento de cada uno de estos instrumentos para conocer mejor su impacto y poder adaptarlos aún más a las necesidades de las empresas. La diversidad de herramientas que las IFD ofrecen a los principales sectores económicos, junto con una adecuada asistencia técnica y digital, pueden ayudar a consolidar la transformación productiva de ALC y a preparar la región para que desempeñe un papel activo en la configuración de una nueva arquitectura financiera internacional.

Las IFD pueden impulsar los principales sectores productivos

Las IFD nacionales y subnacionales pueden desempeñar un importante papel en la promoción de las inversiones en los principales sectores productivos. Estas tienen potencial para aumentar el acceso de las empresas al financiamiento, impulsando así el desarrollo y la creación de empleo (ALIDE, 2022[93]). Los instrumentos financieros personalizados pueden abordar problemas sectoriales específicos y alinear los sectores en torno a los objetivos nacionales. De las 38 IFD nacionales y subnacionales identificadas, el 87% dispone de uno o más instrumentos financieros dirigidos a sectores específicos. De los 473 instrumentos financieros identificados, el 41% tiene una perspectiva sectorial. Un instrumento puede dirigirse a varios sectores a la vez. Del total de instrumentos financieros que tienen una perspectiva sectorial, el 30% se dirige al sector de la agricultura, caza y silvicultura; el 14% al sector de electricidad, gas y agua; el 13% al sector manufacturero; y el 7% al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones (Gráfico 4.10).

Gráfico 4.10. **Instrumentos financieros sectoriales ofrecidos a las mipymes por las IFD, 2023**



Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La categoría "Otros" incluye los siguientes sectores: Comercio mayorista y minorista; Intermediación financiera; Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales; Administración pública y defensa; Educación; Sanidad y asistencia social; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); e Industrias creativas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

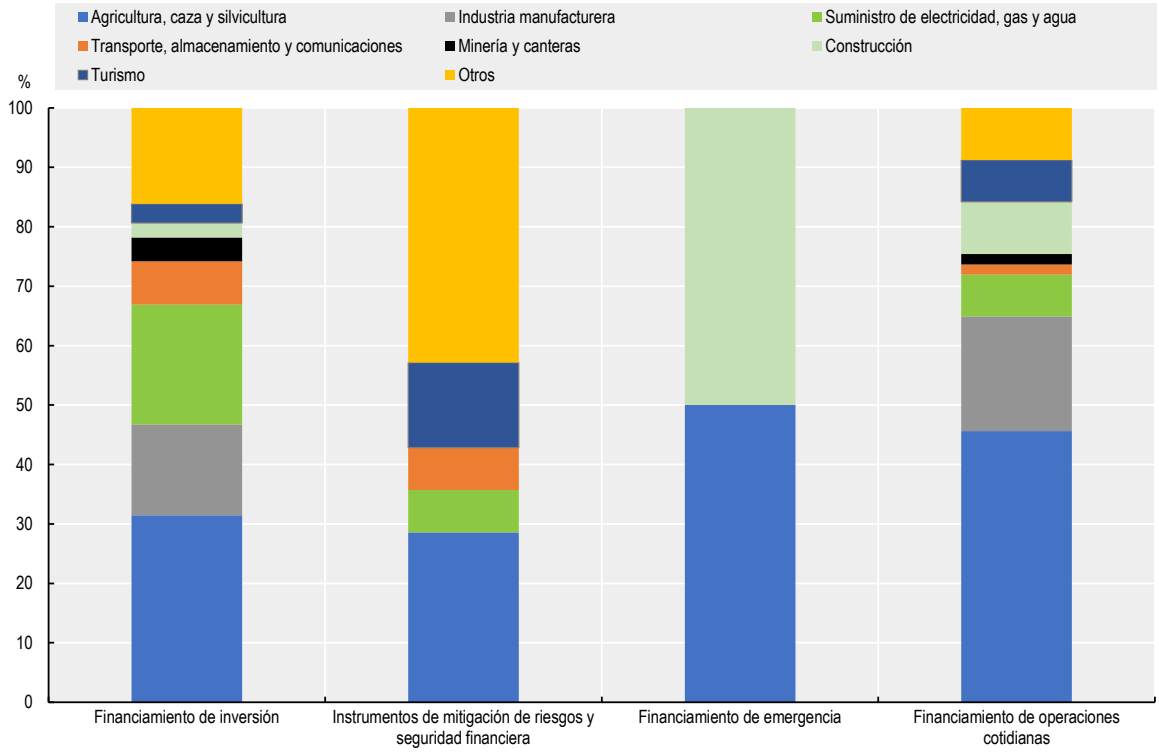
StatLink https://stat.link/f18byu

En ALC, la mayor cantidad de instrumentos de financiamiento que las IFD públicas ofrecen a las mipymes están dirigidos al sector de la agricultura, caza y silvicultura (Gráfico 4.11). Entre estos instrumentos, aquellos que financian la inversión ayudan a respaldar diversos sectores (como el agroalimentario o la bioeconomía) mediante la provisión de recursos para diversas actividades (como el cultivo de hortalizas, la producción de leche bovina, la avicultura, la apicultura y las plantas procesadoras de carne). De este modo, contribuyen a diversificar la estructura productiva de un país. Los instrumentos que financian las operaciones cotidianas también pueden promover la diversificación, contribuyendo a la estabilidad de las mipymes y, por tanto, ayudándolas a estar mejor preparadas para centrarse en la planificación a largo plazo y en la exploración de nuevas oportunidades de inversión.

El sector del suministro de electricidad, gas y agua es objetivo de instrumentos de financiamiento de la inversión, financiamiento de las operaciones cotidianas y apoyo a la mitigación de riesgos y garantías. El financiamiento de inversiones suele incluir incentivos para mejorar la eficiencia energética y medioambiental y la certificación de la producción.

El sector manufacturero también suele ser objetivo de las IFD, sobre todo a través del financiamiento de inversiones y operaciones cotidianas. Los instrumentos de financiamiento de la inversión para este sector se centran en la adquisición de proyectos con unidades industriales ya construidas o en construcción (Gráfico 4.11).

Gráfico 4.11. **Distribución sectorial de instrumentos de financiamiento proporcionados por las IFD a las mipymes en ALC, 2023**



Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La categoría "Otros" incluye los siguientes sectores: Pesca; Comercio mayorista y minorista; Intermediación financiera; Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales; Administración pública y defensa; Educación; Salud y asistencia social; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); e Industrias creativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/q2xg50

Para que las IFD contribuyan eficazmente a impulsar la transformación productiva de ALC, es importante que operen en el marco de estrategias nacionales de desarrollo bien definidas. Estas estrategias deben asignar a las IFD un mandato diferenciado y estratégico, sobre todo en relación con su papel en la promoción de los principales sectores de la transformación productiva. Las IFD también deben avanzar en sus esfuerzos por desarrollar instrumentos que respondan a las necesidades y singularidades específicas de cada sector productivo. Para ofrecer el tipo adecuado de instrumentos, las IFD deben desarrollar capacidades y competencias dentro de las prioridades sectoriales de su país.

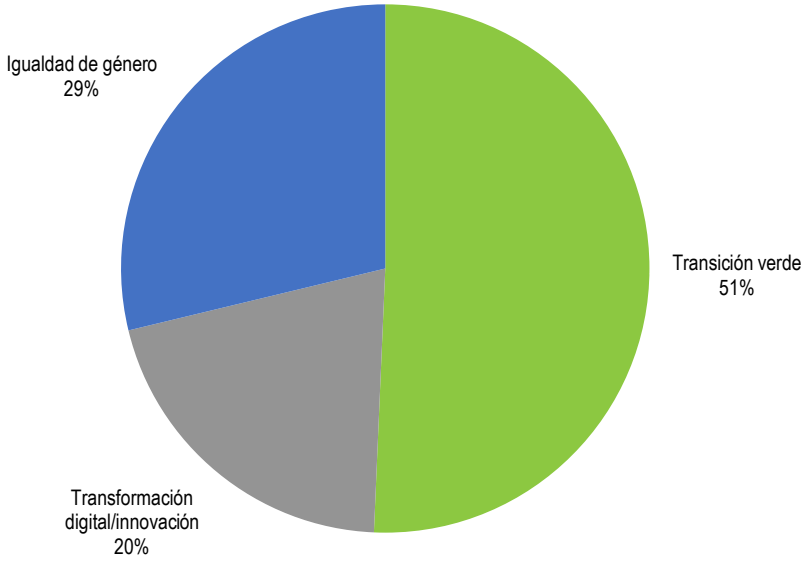
Los sectores nicho dentro de categorías sectoriales más amplias también son relevantes a la hora de desarrollar instrumentos financieros específicos. El hidrógeno verde, por ejemplo, es un sector nicho en crecimiento en diferentes países de ALC y requiere que las IFD aborden sus necesidades emergentes. Entre estas necesidades se incluye financiar el desarrollo del capital humano en el sector y las tecnologías necesarias, y respaldar productos que utilicen el hidrógeno verde. Asimismo, estrechar el contacto con las empresas y conocer sus aspiraciones y capacidades instaladas a nivel sectorial puede facilitar el desarrollo de instrumentos mejor enfocados. Para afinar estos procesos, es necesario que las IFD amplíen sus conocimientos técnicos sobre sectores específicos e inviertan en estrategias de desarrollo de capacidades. La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (Alide) puede convertirse en una plataforma clave para que las IFD públicas nacionales y subnacionales puedan tener acceso a información sectorial. Al reunir la experiencia y los conocimientos de expertos financieros de toda la región, Alide podría liderar la mejora del diseño de servicios financieros específicos para cada sector.

Las IFD pueden ayudar a las mipymes a contribuir con los objetivos verdes, digitales y de género

El compromiso de las IFD nacionales y subnacionales con los ODS podría favorecer el desarrollo de instrumentos financieros para mipymes que tengan objetivos verdes, digitales y de género. De este modo, se puede contribuir a canalizar las inversiones privadas hacia la consecución de objetivos de desarrollo prioritarios. Sin embargo, en la actualidad, de los 473 instrumentos financieros ofrecidos por IFD públicas para mipymes en la región de ALC, solo el 19% aborda al menos uno de estos tres retos transversales. De los instrumentos financieros que abordan al menos un reto transversal, el 51% se dirige a la transición verde en alguna dimensión, el 29% a la igualdad de género y el 20% a los retos digitales y de innovación (Gráfico 4.12).

Gráfico 4.12. **Distribución de instrumentos financieros dirigidos a las dimensiones verde, digital y de género, 2023**

Instrumentos ofrecidos por IFD a mipymes en ALC



Nota: La distribución muestra los retos transversales solo para aquellas IFD que tenían uno o más servicios dirigidos a una dimensión verde, digital o de género. Las siguientes IFD ofrecían instrumentos financieros dirigidos al menos a un reto transversal: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE); Banco de La Pampa, Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO); Banco de la Nación Argentina; Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG); Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Desenvolve SP); Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro); Banco Nacional de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap); Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex); Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips); Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural); Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal); Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN); Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); Banco de México; Banco Nacional de Fomento (BNF); Agencia Financiera de Desarrollo; Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/v4oztg

Para aumentar las inversiones verdes, las IFD de ALC ofrecen servicios financieros a las mipymes para apoyar proyectos relacionados con las energías renovables (generación y eficiencia energética) y para mitigar las crisis relacionadas con las catástrofes naturales. Para acelerar la transición verde, es esencial que las IFD ofrezcan mecanismos de financiamiento dirigidos a los sectores más importantes. De este modo, se ayudará a los países a alcanzar sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entre los servicios financieros dirigidos a la transición verde con una perspectiva sectorial, el 33% se centra en el sector del suministro de electricidad, gas y agua; el 17% en el sector de la agricultura, silvicultura y pesca; y el 10% en el sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones. Otros sectores menos priorizados son la minería y las canteras, así como la industria manufacturera, con un 6.8% cada uno. A pesar de estar menos orientados a la transición verde, estos sectores desempeñan un papel clave en la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación en sus respectivos de los países (UNEP, 2023[94]). Por tanto, es necesario que las IFD públicas amplíen sus servicios financieros y ofrezcan un apoyo más específico a estos sectores con altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las IFD también han definido marcos financieros específicos para facilitar las inversiones impulsadas por mujeres. El apoyo financiero a las mujeres incluye, por ejemplo, préstamos de inversión para mipymes que sean propiedad de mujeres en un

51%, o cuya propiedad esté en manos de mujeres en un 25% como mínimo y cuenten con al menos una mujer en su consejo de administración o en la alta dirección. Sin embargo, aún queda mucho margen de mejora. La proporción de desembolsos a mipymes dirigidas por mujeres sigue siendo muy reducida en comparación con el total. Es necesario que se generen más oportunidades, no solo para aumentar la oferta de servicios financieros para mujeres, sino también para estimular la demanda, por ejemplo, mediante programas de educación financiera centrados en el género.

Las IFD también pueden ayudar a aumentar las inversiones en el ámbito digital, la investigación, la innovación y la tecnología. Las IFD ofrecen fideicomisos dirigidos a impulsar el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, préstamos para fomentar la innovación y apoyo financiero para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios. Las IFD públicas también están innovando en el sector de las tecnologías financieras, ofreciendo a las mipymes plataformas de financiamiento para promover la inclusión financiera. Paralelamente, las IFD públicas se están centrando cada vez más en su propia transformación digital, por ejemplo, mediante la integración de aplicaciones y la automatización de operaciones a través de canales digitales.

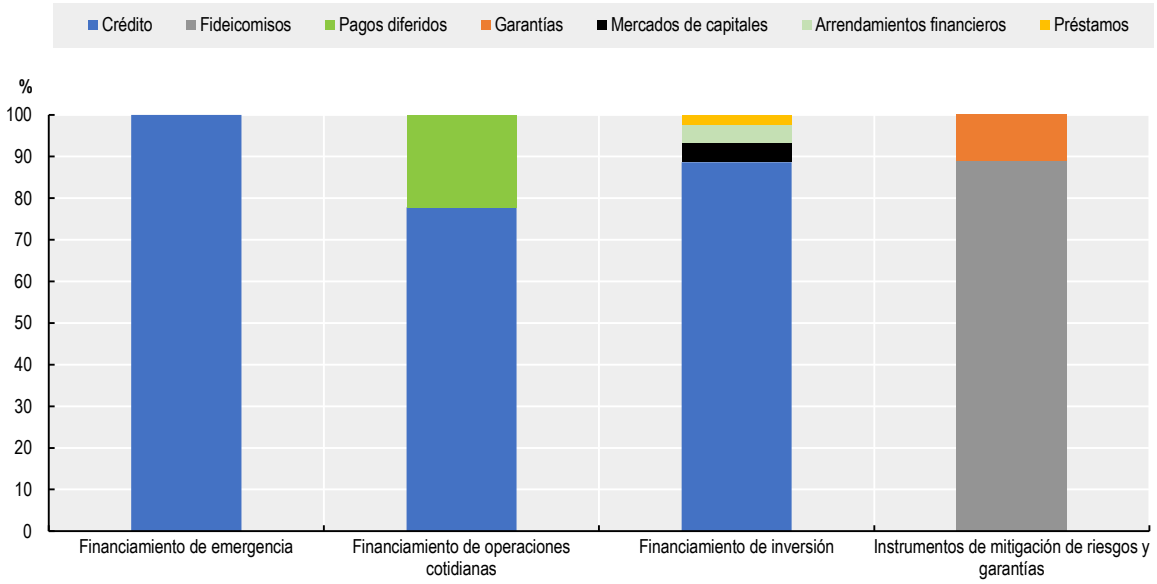
Para impulsar la inversión en estas dimensiones, las IFD pueden establecer programas específicos para: i) la preparación de proyectos, y ii) la asistencia técnica durante la ejecución de los proyectos. Es importante que las IFD participen activamente en los debates sobre la elaboración de políticas relacionadas con la transición verde, la transformación digital y la igualdad de género (Smits y Rodríguez, 2022[85]). Dicha participación debería incluir la aportación de ideas sobre las limitaciones existentes y los catalizadores identificados. Por último, las IFD deben desarrollar la capacidad de articular y medir el impacto de sus instrumentos financieros en relación con el cumplimiento de los ODS y los objetivos relacionados con el clima.

Las IFD pueden respaldar las inversiones efectuadas por los gobiernos locales en sectores específicos

Las IFD nacionales y subnacionales de ALC desempeñan un papel importante en el financiamiento de las inversiones públicas, por ejemplo, proporcionando a los gobiernos nacionales o locales líneas de financiamiento permanentes como créditos, mecanismos de acceso a los mercados de capitales, garantías, arrendamientos, pagos diferidos y fideicomisos (Gráfico 4.13). Los créditos suelen dirigirse a la mejora de infraestructuras y servicios públicos a nivel local. Algunos créditos de inversión se centran en proyectos municipales orientados a los ODS en ámbitos como la eficiencia energética, las ciudades inteligentes, las energías renovables y limpias, el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales, entre otros. Para financiar la inversión, las IFD también ayudan a las instituciones públicas a acceder a los mercados de capitales. Asimismo, los arrendamientos financieros (o *leasing*) se están convirtiendo en un instrumento novedoso que permite a las instituciones públicas acceder a nuevos equipos y tecnologías para inversiones. Este instrumento permite renovar equipos de forma periódica con un bajo costo de financiamiento, mejorando la capacidad de inversión de los gobiernos locales e impulsando los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía (Jouglard, 2019[95]).

Gráfico 4.13. **Distribución de instrumentos financieros ofrecidos al sector público por las IFD públicas en ALC, 2023**

Por tipo de instrumento y objetivo



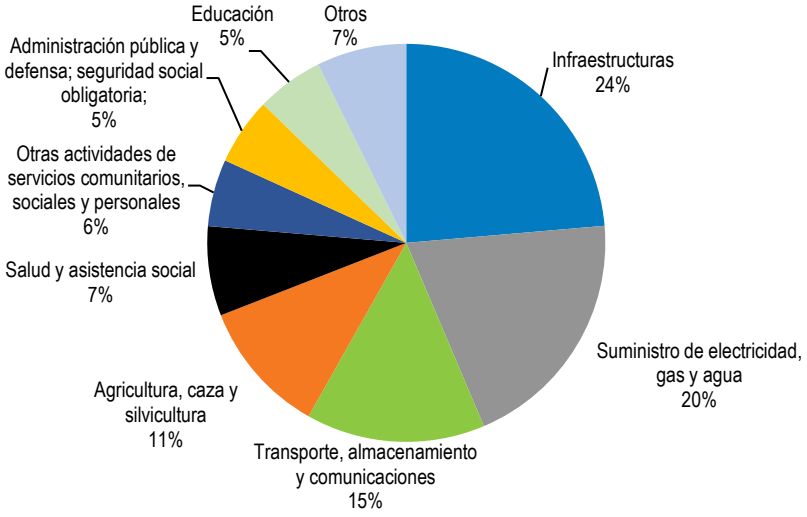
Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/9r8yvw

En ALC, las IFD también ofrecen instrumentos financieros específicos a las instituciones públicas para facilitar la movilización de recursos hacia sectores clave. Del total de instrumentos ofrecidos, el 24% se dirige al sector de infraestructura; el 20% al sector del suministro de electricidad, gas y agua; el 15% al sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones; y el 11% al sector de la agricultura, caza y silvicultura (Gráfico 4.14). La mayoría de los créditos ofrecidos a las instituciones públicas se centran en el desarrollo de infraestructuras urbanas y servicios públicos. Estos créditos permiten financiar carreteras y puentes, así como proyectos de infraestructuras en sectores como la energía, el turismo, la cultura y el deporte.

Gráfico 4.14. **Distribución sectorial de instrumentos financieros ofrecidos al sector público por las IFD públicas, 2023**



Nota: La base de datos abarca 38 IFD públicas nacionales y subnacionales de 13 países de ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La categoría "Otros" incluye los siguientes sectores: pesca; explotación de minas y canteras; comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos de motor, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico; y TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos (informes anuales y de sostenibilidad) consultados en 2023 de 38 IFD públicas de 13 países de ALC.

StatLink https://stat.link/rg74y5

Las IFD también pueden proporcionar apoyo técnico y digital a las entidades públicas. Pueden ofrecer al sector público servicios especializados y de asesoramiento, así como asistencia técnica mediante la creación de asociaciones con secretarías de estado, ministerios y municipios. En mayo de 2023, el estado brasileño de Pernambuco solicitó asistencia técnica al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del país para ampliar sus infraestructuras de saneamiento. El BNDES supervisará a los consultores especializados que realizarán estudios preliminares, incluido un diagnóstico del sector, estimaciones de inversión, una evaluación de las opciones de financiamiento y estudios de viabilidad económica (BNDES, 2023[96]). Algunas IFD también ofrecen formación sobre plataformas digitales para conseguir un acceso eficiente al crédito y ayudan a difundir información sobre las líneas de crédito disponibles.

En ALC, las IFD aún tienen un largo camino por recorrer en la provisión y ampliación de algunos de estos instrumentos al sector público. El acceso a estos instrumentos y servicios debe mejorarse cada vez más a través de innovaciones digitales que agilicen los procesos de solicitud y contratación de las diferentes líneas de financiamiento. Todavía existen ciertas dudas, sobre todo en las entidades públicas más pequeñas, sobre el funcionamiento de estos nuevos tipos de productos y servicios financieros. Por tanto, es necesario que las IFD públicas aumenten los servicios técnicos y digitales de apoyo a los municipios y contribuyan también a "profesionalizar" la esfera pública alineando progresivamente sus prácticas con las del sector privado (Jouglard, 2019[95]).

Las herramientas financieras innovadoras, como los bonos GSSS, pueden ayudar a financiar inversiones

Los mercados de capitales actúan como un componente clave del sistema financiero de ALC, y su potencial puede reforzarse. Los mercados de capitales pueden ayudar a movilizar financiamiento para sectores estratégicos como el de infraestructura y el de

vivienda, facilitar el financiamiento de las pymes y fomentar la innovación (World Bank, 2022[97]). Al funcionar como un centro clave para inversores y emisores, los mercados de capitales de la región facilitan el crecimiento económico y hacen posible que las empresas y gobiernos accedan a los fondos necesarios para su expansión y desarrollo.

Además de los instrumentos tradicionales (como acciones, activos de renta fija y derivados del mercado de divisas), en los mercados de capitales de ALC se han desarrollado nuevos instrumentos. Algunos instrumentos de capital, como los fondos de capital de riesgo, están cobrando importancia y crecen con fuerza en la región. El objetivo de estos fondos es aumentar el financiamiento de las empresas que se encuentran en sus fases iniciales y que tienen un alto potencial de crecimiento (Recuadro 4.4). También se ha producido un crecimiento significativo en la emisión de bonos GSSS, lo cual refleja el interés cada vez mayor de los inversores por los productos con temática ASG (ECLAC, 2022[98]).

Recuadro 4.4. **Desbloquear el potencial de los fondos de capital de riesgo para financiar empresas emergentes en ALC**

El capital de riesgo desempeña un papel clave en el apoyo a empresas emergentes y a entidades que se encuentran en diferentes fases de su crecimiento, desde el desarrollo inicial hasta las actividades de expansión y adquisición (OECD, 2015[99]). Los fondos de capital de riesgo pueden clasificarse en tres tipos principales: financiamiento en fase inicial, financiamiento en fase de expansión y financiamiento en fase de adquisición/compra. El financiamiento en fase inicial abarca el financiamiento semilla, el de *start-ups* y el de primera fase, y aporta capital para que las empresas emergentes puedan optar a préstamos, completar el desarrollo de productos e iniciar actividades de negocio a gran escala. El financiamiento en fase de expansión apoya a las empresas en crecimiento e incluye el financiamiento en segunda fase, el financiamiento transitorio (o *bridge financing*) y el financiamiento en tercera fase. Este tipo de financiamiento permite a las empresas buscar oportunidades de crecimiento y utilizar mecanismos como las salidas a bolsa, u ofertas públicas iniciales (OPI), como enfoque estratégico para el negocio. En las OPI, las acciones de una empresa privada se ofrecen al público por primera vez, de forma que la entidad puede captar fondos adicionales y tener acceso a los mercados cotizados. El financiamiento en fase de adquisición implica aportar fondos para comprar otras empresas o partes de ellas, al tiempo que el financiamiento vía apalancamiento facilita la adquisición de productos específicos (Nayak, 2018[100]).

Muchas empresas medianas tienen dificultades a la hora de encontrar financiamiento convencional debido a los riesgos inherentes a sus empresas (Rudolph, Faruk y Gonzalez-Uribe, 2023[101]). Los inversores de capital de riesgo cubren ese vacío ofreciendo capital, conocimientos especializados y redes de contactos. Su participación en el mercado respalda el crecimiento de las empresas emergentes más prometedoras y contribuye a desarrollar ecosistemas empresariales en la región. Gracias a su apoyo, facilitan la creación de contactos entre empresas emergentes y mentores, expertos del sector y potenciales colaboradores, fomentando así el intercambio de conocimientos.

En ALC, el entorno del capital de riesgo ha experimentado un extraordinario crecimiento en los últimos años. Las inversiones de capital de riesgo han pasado de unos niveles cercanos a 1 millón de USD en 2015 a casi 20 000 millones de USD en 2021 (Rudolph, Faruk y Gonzalez-Uribe, 2023[101]). Este repunte superó los niveles del financiamiento de deuda corporativa, y se acercó a los niveles de financiamiento de capital recaudados a través de las OPI en los mercados primarios de la región. Este rápido crecimiento puede

Recuadro 4.4. **Desbloquear el potencial de los fondos de capital de riesgo para financiar empresas emergentes en ALC** *(cont.)*

atribuirse a la entrada de inversores de capital de riesgo con importantes recursos disponibles que buscan activamente operaciones tanto en sus fases iniciales como en fases más maduras. Estas oportunidades se han visto impulsadas sobre todo por inversores no nacionales que han acudido al mercado de capital de riesgo de ALC y que han desempeñado un papel clave y decisivo a la hora de impulsar el valor total de las inversiones y el cierre de operaciones, impulsando aún más el crecimiento y el desarrollo del ecosistema de capital de riesgo en ALC.

En 2021, las inversiones del capital de riesgo en la región como porcentaje del PIB alcanzaron una tasa del 0.38%, superando el nivel registrado en el Sudeste Asiático (0.27%), si bien se sitúa pero por debajo del promedio mundial del 0.57% (Endeavor Intelligence & Glisco Partners, 2022[102]). En particular, Colombia y Brasil han surgido como líderes con tasas de inversión del 0.52% del PIB en ese mismo año, lo que demuestra su fortaleza a la hora de atraer capital de riesgo. A pesar de haber registrado un descenso de la IED, México alcanzó en 2021 un nivel récord de inversión en capital de riesgo con 3 700 millones de USD (0.29% del PIB). Estas cifras demuestran el creciente protagonismo y el atractivo que acaparan las oportunidades de capital de riesgo en la región, y denotan el potencial existente para conseguir una mayor expansión e innovación en los próximos años.

Los instrumentos del mercado de deuda basados en la sostenibilidad son clave para afrontar los retos del desarrollo

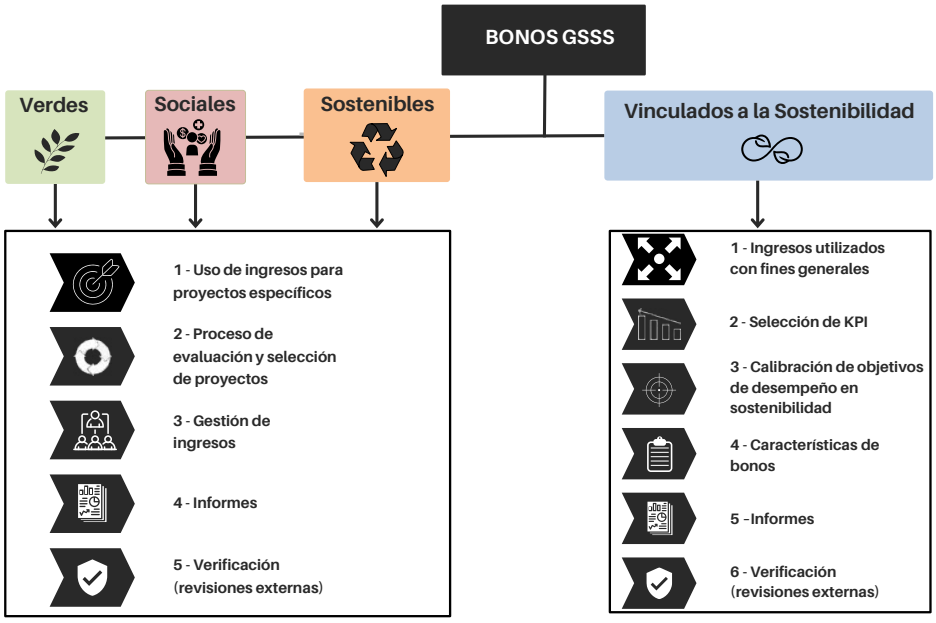
El desarrollo de instrumentos del mercado de deuda basados en la sostenibilidad puede ayudar a movilizar recursos donde más se necesitan. La creciente demanda de los activos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y sobre todo de los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad, ha contribuido a impulsar la captación de fondos públicos y privados para financiar proyectos clave.

Para los países de la región de ALC, la captación de fondos a través de estos activos se ha convertido en una opción atractiva para aumentar la rentabilidad sobre el capital global líquido, diversificar la base de inversores, movilizar capital directamente hacia actividades sostenibles y conseguir apoyo financiero para crear mercados de capitales sostenibles. Tras la pandemia de COVID-19, las inversiones de impacto a través de bonos han cobrado cada vez más importancia, sobre todo porque los fondos europeos están dispuestos a adoptar una visión del riesgo a más largo plazo (Gavin, 2022[103]). En el caso de los países de ALC, los ingresos captados a través de los bonos pueden financiar el gasto público e infraestructuras sostenibles, así como políticas sostenibles y compromisos nacionales, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) establecidas en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático (Frisari, Carlino y Palacios, 2022[104]).

En el caso de las empresas de ALC, la emisión de deuda en los mercados internacionales resulta atractiva, ya que suele ofrecer tasas de interés más bajas y un mayor potencial de ganancias de capital. Los ingresos obtenidos con los bonos también pueden destinarse a inversiones sectoriales en ALC, como el sector agrícola (agroindustria, alimentos y bebidas, silvicultura), el sector financiero (bancos comerciales, empresas de servicios financieros, bancos de desarrollo financiero u organismos multilaterales) y el sector energético (servicios públicos, petróleo, gas, energía) (ECLAC, 2023[105]).

Existen dos tipos de estructuras en el mercado de deuda basadas en la sostenibilidad: los bonos verdes, sociales y sostenibles (GSS), cuyos ingresos se destinan a financiar proyectos sostenibles, y los bonos vinculados a la sostenibilidad, que tienen una serie de objetivos de sostenibilidad específicos (Gráfico 4.15). Según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), los bonos GSS son instrumentos de renta fija cuyos ingresos se aplican exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos verdes, sociales y sostenibles, ya sea total o parcialmente. Por su parte, en los bonos vinculados a la sostenibilidad, los ingresos se emplean con fines generales. Para este tipo de bonos, los emisores eligen los objetivos asociados que desean alcanzar mediante la emisión del bono; en última instancia, acumulan pagos adicionales a los tenedores de bonos si los objetivos preestablecidos no se cumplen. Por lo general, el seguimiento de estos bonos se realiza mediante la evaluación de una serie de indicadores clave de desempeño (KPI) y de objetivos de desempeño en sostenibilidad (SPT) (OECD et al., 2022[17]; Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]).

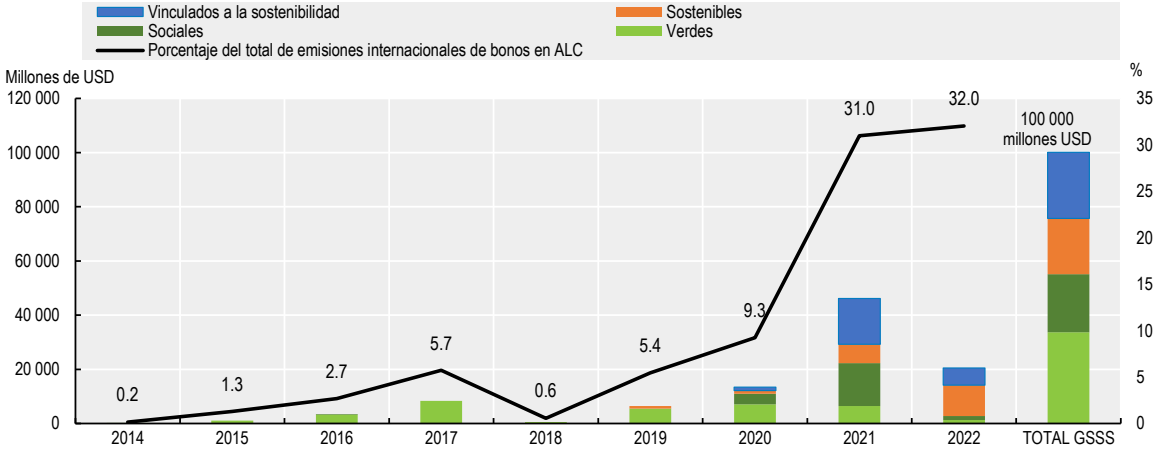
Gráfico 4.15. **Tipos de estructuras del mercado de deuda basado en la sostenibilidad**



Fuente: Elaboración propia a partir de los Principios de la ICMA.

Hasta la fecha, el mercado de bonos GSSS apenas representa una pequeña parte del mercado mundial de bonos. Se sigue considerando un nicho, que representa solo el 1% del total de activos en circulación y alrededor del 2% de las nuevas emisiones a nivel mundial (OECD, 2022[107]).Sin embargo, en la región de ALC, incluso con mercados financieros ajustados, los bonos GSSS siguen siendo un mecanismo de financiamiento atractivo, que representa el 32% del total de las emisiones internacionales de bonos en la región. Los países de ALC emitieron 20 100 millones de USD en bonos internacionales GSSS en 2022, un 56% menos que en 2021, si bien sigue siendo el segundo año de mayor volumen registrado. Entre 2014 y 2022, el mercado internacional de bonos GSSS alcanzó un valor acumulado cercano a los 100 000 millones de USD, de los cuales la emisión de bonos verdes representó por sí sola un total de 33 400 millones de USD, seguida de los bonos vinculados a criterios de sostenibilidad (24 400 millones de USD) (Gráfico 4.16).

Gráfico 4.16. **Emisión internacional de bonos en ALC: bonos GSSS por tipo y como porcentaje del total, 2014-22**



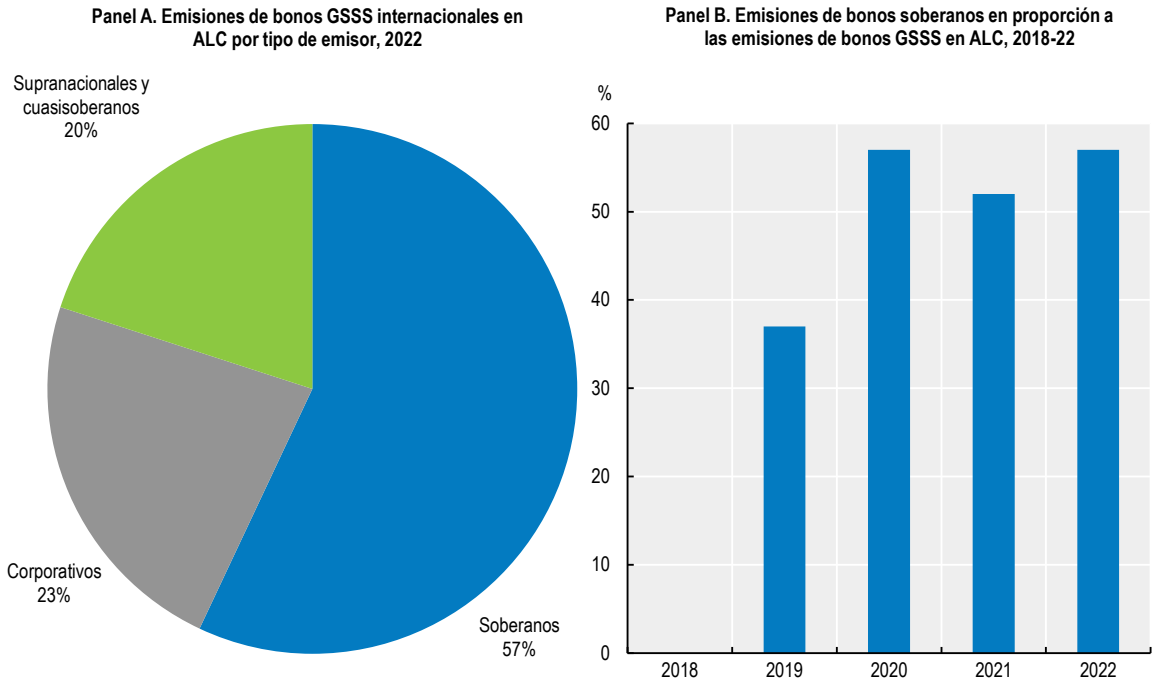
Nota: Bonos GSSS se refiere a bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. El total de bonos sostenibles para 2022 incluye dos bonos azules emitidos por las Islas Bahamas.

Fuente: (Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]; ECLAC, 2023[105]).

StatLink https://stat.link/6q0r1m

La emisión soberana de bonos GSSS ha ido creciendo en proporción a la emisión total de bonos GSSS en ALC. En 2022, la emisión soberana de bonos GSSS en los mercados internacionales de la región representó el 35.7% del total de emisiones soberanas de bonos. Durante los primeros seis meses de 2023, esta cifra aumentó al 43.5%. Hasta junio de 2019, todas las emisiones de bonos GSSS en ALC se originaron en el sector corporativo, y las empresas continuaron liderando por volúmenes totales las emisiones de bonos GSSS en 2019, con una participación del 44% del total, mientras que las emisiones soberanas representaron el 37%, y los emisores supranacionales el 19%. Desde entonces, las emisiones soberanas han ido en aumento. En 2022, los soberanos lideraron el mercado de emisiones GSSS en ALC, con un peso del 57% del total, seguidos por las empresas (23%) y los emisores supranacionales y cuasisoberanos (20%) (ECLAC, 2023[105]) (Gráfico 4.17, Panel A). En junio de 2019, Chile fue el primer país de la región en emitir un bono soberano verde en los mercados internacionales. Para 2022, siete países habían seguido su ejemplo (Ecuador, Guatemala, México, Perú, Bahamas y Uruguay [en orden cronológico]) emitiendo bonos verdes (o azules), sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad en los mercados internacionales (Gráfico 4.17, Panel B) (ECLAC, 2023[105]). En cuanto a las emisiones soberanas en el mercado nacional, Colombia se convirtió en 2021 en la primera economía emergente del mundo en emitir un bono verde soberano en moneda local (TES Verdes) (OECD et al., 2022[17]).

Gráfico 4.17. **Emisión de bonos soberanos GSSS en mercados internacionales**



Nota: Los emisores cuasisoberanos se definen como empresas con propiedad o control gubernamental total o parcial. Los emisores supranacionales se definen como entidades formadas por dos o más gobiernos centrales para promover el desarrollo económico de los países miembros.

Fuente: (ECLAC, 2023[105]).

StatLink https://stat.link/hg24a0

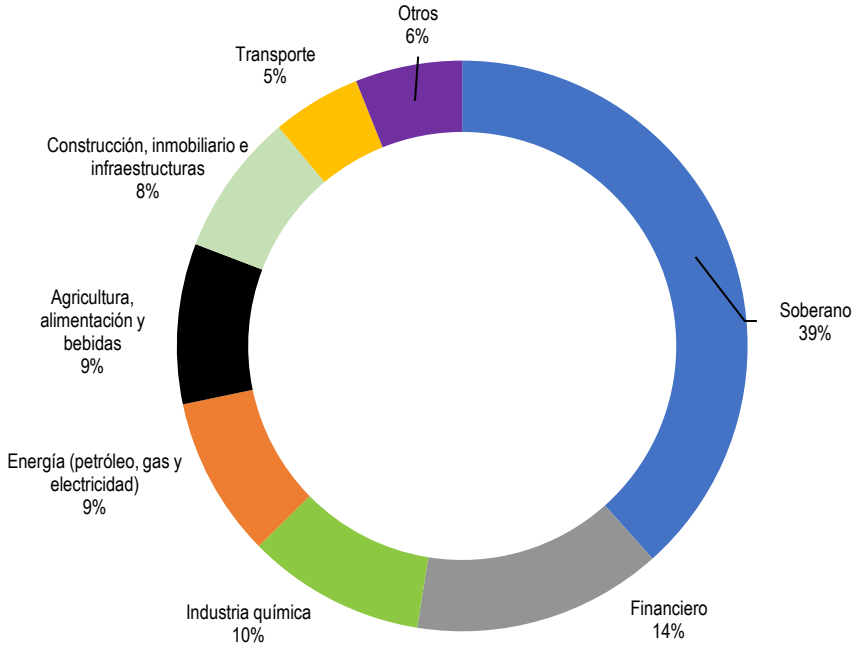
La proporción de los bonos vinculados a la sostenibilidad en el total de emisiones de bonos GSSS cayó al 31% en 2022 con respecto a un 37% en 2021. Estos bonos pueden ser propensos a prácticas de *greenwashing*. Dado que los emisores se autoimponen determinados indicadores clave de rendimiento y objetivos de desempeño en sostenibilidad que pueden ser muy difíciles de verificar externamente, el aumento del escrutinio por parte del mercado y el temor a estas prácticas engañosas pueden frenar el crecimiento de este tipo de bonos a corto plazo. No obstante, los bonos vinculados a la sostenibilidad ofrecen a los emisores la posibilidad de redirigir los flujos de capital para lograr múltiples objetivos sostenibles al mismo tiempo. Dos países de ALC, Chile y Uruguay, se convirtieron en 2022 en pioneros al ser las primeras naciones del mundo en emitir bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad; a mediados de 2023, seguían siendo los únicos emisores de la región (OECD, 2023[81]). En marzo de 2022, Chile emitió un bono soberano de 2 000 millones de USD vinculado a dos indicadores clave de rendimiento: la reducción de las emisiones de GEI y el impulso de la producción energética. Con esta emisión, Chile se convirtió en el primer gobierno en vincular su compromiso oficial en materia de cambio climático en términos de CDN (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) a una emisión de bonos. En noviembre de 2022, Uruguay emitió su primer bono indexado a indicadores de cambio climático.

Los bonos GSSS han surgido como instrumentos atractivos para que determinados sectores capten capital y aborden los apremiantes desafíos sectoriales de la región. Entre 2014 y abril de 2022, los principales sectores que emitieron bonos GSSS, después de las emisiones soberanas (39%), fueron el sector financiero (14%), la industria química (10%) y la energía (9%) (Gráfico 4.18). La diversificación entre sectores en el mercado GSSS ha aumentado en ALC desde 2019 (Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]). Hasta 2018, los

únicos sectores que emitían bonos GSSS eran los sectores de pulpa y papel, alimentación y bebidas, y energía. Desde 2019, nuevos sectores han accedido al mercado sostenible, entre los que se incluyen automoción y actividades relacionadas, tecnología, productos químicos, telecomunicaciones, productos de consumo, sector inmobiliario, transporte y azúcar y etanol (Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]). La distribución sectorial indica que estos bonos tienen potencial para aumentar la inversión financiera en proyectos de sectores clave con impacto en la sostenibilidad.

Gráfico 4.18. **Emisión de bonos GSSS en mercados internacionales, distribución sectorial, ALC**

Diciembre de 2014 a abril de 2022



Nota: La categoría "Otros" incluye los siguientes sectores: telecomunicaciones; silvicultura y papel; y comercio minorista y productos de consumo.
Fuente: (OECD et al., 2022[17]; Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]).

StatLink https://stat.link/7hv32i

Los bonos GSSS pueden desbloquear inversiones clave para abordar la igualdad de género y la inclusión digital

La región de ALC se ha convertido en líder en la emisión de bonos de género, con un total de diez emisiones entre 2016 y 2022 de emisores soberanos, corporativos y supranacionales (Sacristán, 2022[108]). Los bonos de género son un tipo de bono social, sostenible o vinculado a la sostenibilidad que tiene como objetivo captar capital destinado a proyectos nuevos o existentes que apoyen el avance, el empoderamiento y la igualdad de las mujeres. Por ejemplo, el Banco Pichincha de Ecuador, emitió dos bonos de género en 2022. El primero se destinó a financiar préstamos para pequeñas empresas dirigidas por mujeres. La mitad de la venta de bonos fue suscrita por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest y la otra mitad por la Corporación Financiera Internacional (CFI). El segundo bono de género fue una colocación privada, respaldada por derechos de pago diversificados para financiar préstamos a mipymes que sean propiedad de mujeres (ECLAC, 2022[109]; OECD et al., 2022[17]).

En relación con la inclusión digital, los bonos GSSS se están utilizando en todo el mundo para hacer frente a la brecha digital. Al emitir bonos GSSS que incluyen un componente de inclusión digital, las empresas, gobiernos y organizaciones multilaterales de ALC pueden captar financiamiento para apoyar los esfuerzos de transformación digital de la región (Norton y Horton, 2021[110]). El financiamiento con bonos de inclusión digital permite adoptar compromisos con proyectos de inclusión digital e indicadores clave de rendimiento que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la inversión en infraestructuras de banda ancha, la formación en competencias digitales, la inclusión financiera y el acceso a una atención sanitaria y una educación de calidad, entre otras prioridades (Norton y Horton, 2021[110]). En ALC, BID Invest emitió en 2022 su primer bono social con enfoque en la economía plateada para apoyar la inclusión financiera de las personas mayores, incluyendo soluciones digitales. Los fondos se destinarán a financiar proyectos sociales con un enfoque en la reducción de la pobreza y las desigualdades que afectan a las personas mayores y jubiladas en ALC (IDB Invest, 2022[111]).

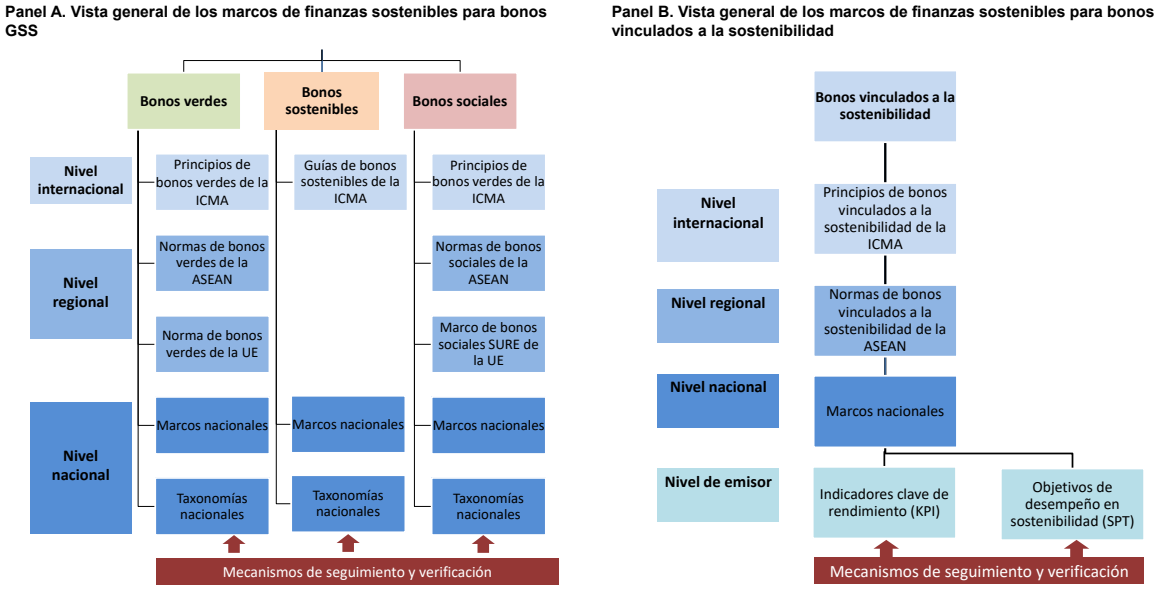
Los bonos GSSS se beneficiarían de la armonización de la regulación y el seguimiento en ALC

Los países de ALC se están centrando en ampliar, mejorar y armonizar los marcos de finanzas sostenibles, que son esenciales para regular, supervisar y verificar la emisión de bonos GSSS y otros instrumentos. Los marcos más consolidados tienen potencial para reducir los costos de transacción para los inversores, haciendo que los mercados de capitales de la región resulten más atractivos (Salazar-Xirinachs, 2023[112]). Dichos marcos pueden incluir principios, normas o taxonomías que cumplan dos propósitos principales: i) reducir y gestionar los riesgos ASG de las actividades financieras; y ii) fomentar el flujo de capitales hacia activos, proyectos, sectores y empresas que generen beneficios ambientales, climáticos y sociales.

Los marcos de finanzas sostenibles guían la emisión de bonos GSSS a escala internacional, regional y nacional. Los principios de la ICMA y los Principios de Helsinki[4] se utilizan a menudo como marcos rectores generales para la emisión de bonos GSSS a escala regional y nacional (Gráfico 4.19). Los principios de la ICMA, por ejemplo, constituyen un conjunto de directrices de procedimiento específicas para cada tipo de emisión de bonos. Esto beneficia a los inversores, ya que les permite tomar decisiones mejor informadas sobre sus inversiones. El conjunto de instrumentos de la ICMA —es decir, los Principios de Bonos Verdes (GBP), los Principios de Bonos Sociales (SBP), las Guías de Bonos Sostenibles (SBG) y los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLBP)— han adquirido cada vez más importancia en los mercados internacionales. Varios países y empresas de todo el mundo los utilizan ahora como referencia para desarrollar sus propios marcos para la emisión de bonos GSSS (Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]) (ICMA, 2023[113]).

El marco de los bonos GSS es diferente del de los bonos vinculados a la sostenibilidad. En el caso de los GSS, se han desarrollado estándares y taxonomías para orientar su emisión, certificación y verificación (Gráfico 4.19, Panel A). En el caso de los bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad, también se han desarrollado normas para guiar la emisión, certificación y verificación, salvo que este último paso consiste en evaluar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y objetivos de desempeño en sostenibilidad (SPT) que se "autoimpone" el propio emisor (Gráfico 4.19, Panel B).

Gráfico 4.19. **Vista general de los marcos de finanzas sostenibles para bonos GSSS**



Fuente: Elaboración propia.

En ambos casos, los principios y directrices generales sirven solo para asesorar a los emisores bajo un marco general. Por lo tanto, es importante que los emisores a nivel regional y nacional desarrollen normas y taxonomías más claras y vinculantes, en lugar de depender únicamente en que el mercado se autorregule a través de principios. Chile presenta un buen ejemplo de cómo se han desarrollado gradualmente normas para todo tipo de emisiones de bonos GSSS. En 2019, el Ministerio de Hacienda de Chile publicó un Marco para Bonos Verdes en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. En 2020, publicó un Marco de Bonos Sostenibles que establecía normas para la emisión no solo de bonos verdes, sino también de bonos sociales y sostenibles. En 2022, el Ministerio de Hacienda desarrolló un Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad antes de emitir (en marzo de 2022) su primer bono soberano de este tipo (OECD et al., 2022[17]).

En ALC se han desarrollado taxonomías verdes y sostenibles. Hasta mediados de 2023, se han implementado en México y Colombia, y se encuentran en desarrollo en países como Brasil, Chile, República Dominicana y Perú, al igual que en subregiones como América Central (UNEP, 2023[94]). Estas son herramientas para gestionar los riesgos financieros relacionados con cuestiones ambientales y sociales y para evitar prácticas de *greenwashing*. Las taxonomías también pueden utilizarse como herramientas para adoptar políticas industriales. La creación de unos criterios técnicos de evaluación para definir lo que constituye una actividad "verde" permite a las autoridades financieras y ambientales, junto con las partes interesadas de la industria, establecer un diálogo integral sobre las cuestiones de sostenibilidad. Este diálogo es esencial para conseguir una transición verde bien informada en la región. En abril de 2022, el gobierno colombiano publicó la primera taxonomía verde de la región, que pretende ayudar a identificar proyectos que tengan objetivos ambientales, desarrollar los mercados de capitales y promover la movilización efectiva de recursos públicos y privados (OECD et al., 2022[17]). En junio de 2023, el sistema de Naciones Unidas publicó también el primer *Marco común de taxonomías de finanzas sostenibles para América Latina y el Caribe* a través del Grupo de Trabajo sobre Taxonomías de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe.[5] Este marco regional pretende ser un documento de orientación voluntario para los actores de la región que están en proceso de desarrollar taxonomías o que pretenden iniciarlo. El marco también sirve

de orientación para la interoperabilidad de las taxonomías dentro de ALC y a nivel mundial (UNEP, 2023[94]). La armonización de las metodologías en las que se basan las distintas taxonomías aumentará la confianza entre los inversores y reducirá los costos de transacción.

Para mantener la transparencia del mercado y evitar casos de *green/SDG-washing*, es fundamental contar con unos sistemas fiables y consolidados de seguimiento y verificación. En ALC, el mercado de bonos GSSS ha avanzado desde el autoetiquetado hasta las revisiones externas, pero aún le queda un largo camino por recorrer (EU-LAC Foundation, 2020[114]; Núñez, Velloso y Da Silva, 2022[106]). Las revisiones externas, es decir, las revisiones previas y/o posteriores a las emisiones de bonos, deben desarrollarse y mejorarse (Tabla 4.1). Hasta la fecha, la ausencia de unas calificaciones crediticias para los bonos verdes emitidos en mercados emergentes que sean reconocidas a nivel internacional ha limitado las oportunidades de inversión. La dificultad proviene de evaluar la solvencia de los emisores de bonos de la región. Sin embargo, desde 2021, una proporción cada vez mayor de emisores de economías emergentes han obtenido calificaciones crediticias de al menos una de las principales agencias de calificación crediticia. En 2021, del total de bonos verdes emitidos por economías emergentes en todo el mundo, el 14% recibió una calificación de grado de inversión, mientras que otro 9% recibió una calificación de grado de no inversión. Los bonos restantes no recibieron ninguna calificación, y un pequeño porcentaje fue retirado. El hecho de que se haya registrado en 2021 un menor porcentaje de bonos con calificación internacional que en 2020 se debe al aumento de las emisiones procedentes de China, donde muchos emisores han recurrido a calificaciones crediticias locales (Amundi y IFC, 2021[115]).

Con relación a los proyectos verdes, sociales y sostenibles, los emisores deben desarrollar un marco metodológico inicial que establezca unos objetivos claros y medibles para la verificación y el seguimiento externos. En el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad, los indicadores clave de rendimiento y los objetivos de desempeño en sostenibilidad deben ser públicos, claros y medibles desde el inicio e incluir señales que denoten la mejora de su rendimiento. El beneficio de desarrollar y reforzar estos mecanismos es doble. Por un lado, el aumento de la transparencia para evitar las prácticas de *green/SDG-washing*. Estas últimas se pueden producir, por ejemplo, cuando la definición de un bono verde implique que los recursos están de alguna manera vinculados a una inversión en proyectos de sostenibilidad (agua, electricidad, paneles solares, etc.), pero el rendimiento del bono no está vinculado a indicadores que midan las mejoras reales en los impactos ambientales del emisor. Y por otro, el refuerzo de la verificación y el seguimiento favorece la armonización de las taxonomías y promueve las prácticas para generar informes de impacto.

Tabla 4.1. **Revisiones externas para la emisión de bonos GSSS**

	Mecanismo
Revisiones previas a la emisión	Opinión de Segundas Partes: una institución con experiencia medioambiental, social o de sostenibilidad que es independiente del emisor y proporciona una opinión sobre el marco. Verificación: un emisor puede obtener una verificación independiente con respecto a un conjunto designado de criterios. Certificación: un emisor puede obtener la certificación de su marco GSSS con respecto a una norma o etiqueta GSSS externa reconocida. Puntuación/calificación GSSS: un emisor puede hacer que su marco de bonos GSSS sea evaluado por terceros, por ejemplo, por proveedores de investigación especializados o agencias de calificación, de acuerdo con una metodología de puntuación/calificación establecida (ICMA, 2021[116]).
Revisiones posteriores a la emisión	Informe de aseguramiento de segundas o terceras partes: aporta un nivel de aseguramiento con respecto a la asignación de ingresos a proyectos GSSS elegibles. Informes de impacto: trata de cuantificar numéricamente el impacto ambiental, social o sostenible de un proyecto o activo. En el caso de los bonos GSSS, el informe de impacto puede detallar si los ingresos se están utilizando de forma eficaz para cumplir los objetivos GSS establecidos al inicio del proyecto. En el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad, el informe puede medir su desempeño con respecto a los KPI y STI fijados en el momento de la emisión.

Fuente: Elaboración propia a partir de (CBI, 2023[117]).

Principales mensajes en materia de políticas

Las instituciones públicas desempeñan un papel fundamental a la hora de potenciar el impacto de las inversiones en el bienestar de la ciudadanía de ALC. Para ello, es necesario que se den unas condiciones atractivas y predecibles que impulsen el flujo de las inversiones (Capítulo 2). Asimismo, se deben desarrollar estrategias de inversión y transformación productiva que reflejen un amplio acuerdo entre las partes interesadas, que estén conectadas con el conjunto de las estrategias de desarrollo de cada país y que, en última instancia, formen parte esencial de un contrato social renovado en la región.

Las inversiones necesarias para impulsar la agenda de desarrollo de ALC deberán proceder tanto de fuentes públicas como privadas. Además de las mejoras de los marcos fiscales (Capítulo 1), hay dos áreas especialmente prometedoras. En primer lugar, el fortalecimiento de las IFD nacionales y subnacionales puede favorecer el acceso al financiamiento, sobre todo para las mipymes, e impulsar las inversiones en sectores clave. En segundo lugar, el desarrollo de los mercados de capitales en la región es esencial. Existe un potencial cada vez mayor para la adopción de herramientas financieras innovadoras, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS), que pueden promover la inversión pública y privada con el apoyo de unos marcos financieros sostenibles más consolidados y armonizados. El Recuadro 4.5 presenta los principales mensajes en materia de políticas para alcanzar los objetivos descritos en este capítulo.

Recuadro 4.5. **Principales mensajes en materia de políticas**

Hacia un diálogo inclusivo para construir consenso en torno a estrategias de inversión y transformación productiva

- Promover espacios para la participación ciudadana siguiendo las Directrices de la OCDE para los Procesos de Participación Ciudadana. Las consultas públicas, los presupuestos participativos y los procesos deliberativos representativos son métodos relevantes para impulsar la participación ciudadana.
- Reforzar las evaluaciones de impacto social y medioambiental de los proyectos de inversión con una adecuada participación ciudadana.
- Desarrollar medidas redistributivas transparentes y claras para apoyar a los grupos socioeconómicos, territorios y comunidades que puedan verse afectados negativamente por los proyectos de inversión.
- Apoyar la adopción de la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, reforzando el papel de los Puntos Nacionales de Contacto como instancias pertinentes para mediar y resolver los conflictos que puedan surgir entre las empresas del sector privado, la sociedad civil y los gobiernos.
- Capacitar a los gobiernos locales para que impulsen la participación ciudadana inclusiva en las decisiones de inversión y producción, involucrando a los grupos vulnerables, colaborando con las instituciones locales y utilizando herramientas para fomentar la innovación, prevenir conflictos y garantizar inversiones sostenibles.
- Mejorar las políticas de gobierno abierto y reforzar el papel de los Centros de Gobierno para aportar transparencia en cada fase del proceso de inversión, incluidas herramientas de transparencia (por ejemplo, información clara sobre el registro; acceso a las enmiendas; regulaciones coherentes; plataformas interactivas de proyectos; y divulgación de los orígenes del financiamiento privado).

Hacia esfuerzos de inversión y transformación productiva con alcance a todo el gobierno

- Garantizar la implementación efectiva de los planes nacionales de desarrollo (PND), profundizando en la planificación estratégica a largo plazo y asegurando la continuidad de las políticas más allá de los ciclos políticos. Las estrategias sectoriales deben estar bien conectadas con el conjunto de las estrategias de desarrollo.
- Definir la asignación presupuestaria de cada prioridad en los PND para garantizar una implementación eficaz.
- Reforzar los sistemas nacionales de inversión pública a través de una mayor alineación con los PND; mecanismos para una coordinación y toma de decisiones eficaces entre las partes interesadas; procedimientos transparentes para la priorización, ejecución y evaluación de proyectos de impacto; y vínculos claros con los procesos presupuestarios anuales y de mediano plazo para garantizar su viabilidad financiera.
- Mejorar la coordinación de políticas y la gobernanza multinivel, y crear un mapa de las principales partes interesadas del entorno de inversión y sus canales de comunicación que pueda ayudar a identificar posibles brechas y mejorar la distribución de responsabilidades.

Box 4.5. **Principales mensajes en materia de políticas** *(cont.)*

Hacia el financiamiento de la transformación productiva y la movilización de inversiones para sectores estratégicos

- Para aumentar la inversión privada, sobre todo de las mipymes, las IFD públicas de la región pueden:
  - Ampliar y evaluar más a fondo la oferta de instrumentos financieros que incentiven la inversión innovadora y a largo plazo por parte del sector privado. Estos instrumentos están destinados a financiar aspectos clave como el capital de trabajo, las inversiones sostenibles, el comercio exterior, y las emergencias climáticas.
  - Avanzar en los esfuerzos por desarrollar instrumentos que respondan a las necesidades y singularidades específicas de los principales sectores productivos en el marco de una estrategia nacional de desarrollo bien definida.
  - Invertir en el desarrollo de capacidades en sectores nicho para ofrecer mejores servicios financieros, digitales y técnicos para sectores específicos, que permitan a las mipymes satisfacer sus necesidades financieras.
- Para abordar el déficit de financiamiento al que se enfrentan las mipymes impulsando instrumentos financieros que tengan objetivos sostenibles, digitales y de género, las IFD pueden establecer programas específicos para la preparación de proyectos y la asistencia técnica durante la ejecución de los mismos.
- Para impulsar la inversión pública, las IFD pueden aumentar su oferta de servicios técnicos y digitales mediante la creación de alianzas con secretarías de Estado, ministerios y municipios, y mejorar la capacitación para estas entidades.
- Para promover instrumentos de los mercados de capitales que apoyen las inversiones en áreas clave del desarrollo, los países de la región pueden:
  - Apoyar la expansión y el atractivo de los fondos de capital de riesgo a la hora de financiar empresas emergentes. Continuar los esfuerzos para crear un entorno más favorable al crecimiento empresarial, por ejemplo, elaborando marcos jurídicos que potencien la inversión en empresas de base tecnológica.
  - Apoyar la expansión y el ajuste de los bonos vinculados a la sostenibilidad, reorientando los flujos de capitales hacia proyectos que promuevan la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, al tiempo que se refuerzan las dimensiones sociales y sostenibles.
  - Mejorar los marcos de financiamiento sostenible para los bonos GSSS y fomentar la coordinación y armonización entre países. Es fundamental consolidar unos sistemas fiables de seguimiento y verificación para mantener la transparencia del mercado y evitar las prácticas de *green/SDG-washing*. Deben desarrollarse y mejorarse las revisiones externas ex ante y ex post a las emisiones de bonos.

Notas

1. En este capítulo, el término "instituciones" hace referencia a organismos gubernamentales y públicos.
2. "IFD" en este documento hace referencia únicamente a instituciones públicas nacionales y subnacionales de financiamiento del desarrollo.
3. Las 38 IFD nacionales y subnacionales son las siguientes. De Argentina: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE); Banco de La Pampa; Banco de la Provincia de Buenos Aires

(BAPRO); Banco de la Nación Argentina; Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba). De Brasil: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG); Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Desenvolve SP). De Chile: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap); Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). De Colombia: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro); Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex); Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle); Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA). De Costa Rica: Banco Nacional de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal. De República Dominicana: Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex); Banco de Reservas de la República Dominicana (BR). De Ecuador: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BdE); BanEcuador B.P.; Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN); Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips). De El Salvador: Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal); Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (Fedecrédito); Banco de Fomento Agropecuario (BFA). De Guatemala: Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural). De México: Banco del Bienestar; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras); Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – Banco de México; Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN), Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext). De Panamá: Caja de Ahorros. De Paraguay: Agencia Financiera de Desarrollo; Banco Nacional de Fomento (BNF); Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). De Perú: Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide); Banco de la Nación, Banco Agropecuario (Agrobanco). De Uruguay: Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

4. Los Principios de Helsinki (acordados en 2019) son una serie de principios compartidos de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, que está formada por miembros de más de 80 gobiernos y cuenta con el apoyo de 25 socios institucionales. Estos principios son ambiciosos y sirven para dotar de un propósito común a los países miembros, que se comprometen a tomar medidas colectivas e internas contra el cambio climático y a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
5. El Grupo de Trabajo sobre Taxonomías de Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe está integrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Referencias

ALIDE (2023), *Potential an opportunities for Latin America and the Caribbean in the current scenario and the support of development banking*, General Secretariat of ALIDE, Lima, http://www.alidedatabank.org/1001/plantilla/documentoPublicacionAlide/Basic%20Document%20Asemmbly%202023.pdf. [82]

ALIDE (2022), *Repensando la matriz productiva de América Latina y el Caribe para el mundo que viene*, ALIDE, Buenos Aires, http://www.alidedatabank.org/1001/plantilla/documentoPublicacionAlide/REUNI%C3%93N-DE-ECONOMISTAS-JEFES-2022.pdf. [93]

ALIDE (2020), *Activos*, ALIDE, Lima, http://hubdebanca.alide.org/community-practice/portal-de-datos/alide/. [83]

Allain-Dupré, D. (2020), "The multi-level governance imperative", *The British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 22/4, pp. 800-808, https://doi.org/10.1177/1369148120937984. [72]

Amundi y IFC (2021), *Emerging Market Green Bonds Report*, Amundi Asset Management and International Finance Corporation, Washington, DC, http://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/202206-emerging-market-green-bonds-report-2021-vf-2.pdf. [115]

Atlantic Council (2023), *Unlocking economic development in Latin America and the Caribbean: Five opportunities for private-sector leadership and partnership*, Atlantic Council, Washington, DC, http://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2023/06/AALAC_IDB_Report_060823_complete.pdf. [41]

Azzimonti, M. (2011), "Barriers to Investment in Polarized Societies", *American Economic Review*, Vol. 101/5, pp. 2182-2204, http://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.101.5.2182. [9]

Bebbington, A. y J. Bury (eds.) (2013), *Subterranean Struggles. New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*, University of Texas press, https://www.crolar.org/index.php/crolar/article/view/169. [16]

Biglaiser, G. y J. Staats (2010), "Do Political Institutions Affect Foreign Direct Investment? A Survey of U.S. Corporations in Latin America", *Political Research Quarterly*, Vol. 63/3, pp. 508–522, http://www.jstor.org/stable/25747955. [10]

Blancher, M. et al. (2019), *Financial inclusion of small and medium-sized enterprises in the Middle East and Central Asia*, International Monetary Fund, Washington, DC, http://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335. [91]

BNDES (2023), *Agência BNDES de notícias*, BNDES, Rio de Janeiro, http://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/0a296115-dd7d-454b-ba26-369893ae3f0c/9b522068-6622-15cc-aae1-5b43cd781bfa?origin=2. [96]

CAF (2019), *Institutions for productivity: towards a better business environment*, Corporación Andina de Fomento, Buenos Aires, https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1410/Institutions%20for%20productivity.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [71]

CALAS (2019), *Las fronteras del neoextrativismo en América Latina*, http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf. [18]

CBI (2023), *External Review*, Climate Bonds Initiative, London, https://www.climatebonds.net/market/second-opinion. [117]

CEPLAN (2022), *Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050*, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (CEPLAN), Lima. [59]

Charbit, C. (2020), "From 'de jure' to 'de facto' decentralised public policies: The multi-level governance approach", *The British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 22/4, pp. 809–819, https://doi.org/10.1177/1369148120937624. [74]

Coalición Regional (2016), *Papel de los Bancos Nacionales de Desarrollo en la estructura del financiamiento regional en América Latina*, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bogota, https://cedla.org/publicaciones/cedla/papel-de-los-bancos-nacionales-de-desarrollo-en-la-estructura-del-financiamiento-regional-en-america-latina/#. [92]

Congress of Colombia (2023), *Law 2294 of 2023: 2022-26 National Development Plan "Colombia World Power for Life"*, Congress of the Republic of Colombia, Bogota. [60]

Dini, M. y G. Stumpo (2020), *Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento*, United Nations Economic Comission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2c7fec3c-c404-496b-a0da-e6a14b1cee48/content. [88]

DNP (2023), *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, Potencia Mundial de la Vida*, National Planning Department (DNP) of Colombia, Bogota. [50]

DNP (2023), *Multi-year Investment Plan*, National Planning Department (DNP) of Colombia, Bogota. [61]

ECLAC (2023), *Capital flows to Latin America and the Caribbean: 2022 year-in-review and early 2023 developments*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/kflows2023final_web.pdf. [105]

ECLAC (2023), *CEPAL insta a los países a revitalizar los compromisos y acelerar el paso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://www.cepal.org/es/noticias/cepal-insta-paises-revitalizar-compromisos-acelerar-paso-cumplimiento-objetivos-desarrollo. [45]

ECLAC (2023), *Iberoamérica: espacio de oportunidades para el crecimiento, la colaboración y el desarrollo sostenible*, XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Santo Domingo 24 y 25 de marzo de 2023, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48769/4/S2300098_es.pdf. [44]

ECLAC (2023), *Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://observatorioplanificacion.cepal.org/. [63]

ECLAC (2023), *Ordenamiento Territorial*, Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/territorial-planning. [78]

ECLAC (2022), *Capital Flows to Latin America and the Caribbean: 2021 year-in-review and the first four months of 2022*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://www.cepal.org/en/notes/capital-flows-latin-america-and-caribbean-2021-year-review-and-first-four-months-2022. [98]

ECLAC (2022), *Capital Flows to Latin America and the Caribbean: the first eight months of 2022*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://www.cepal.org/es/node/57377. [109]

ECLAC (2022), *Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48308/3/S2200584_es.pdf. [1]

ECLAC (2021), *Los planes nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe*, Observatorio Regional de Planificacion para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/los-planes-nacionales-de-inversion-publica-en-america-latina-y-el-caribe. [26]

ECLAC/OECD (2018), *Emerging challenges and shifting paradigms: New approaches on international co-operation for development*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44002/1/S1800619_en.pdf. [5]

Endeavor Intelligence & Glisco Partners (2022), *Venture Capital and Growth Equity Ecosystem in Latin America*, Endeavor Intelligence, https://gliscopartners.com/wp-content/uploads/2022/10/Venture-Capital-LATAM-ENG.pdf. [102]

Environmental Justice Atlas (2023), *Environmental Justice World Map*, https://ejatlas.org/. [19]

EU-LAC Foundation (2020), *The Potential of the Green Bond Markets in Latin America and the Caribbean*, EU-LAC Foundation, Hamburg, https://eulacfoundation.org/en/potential-green-bond-markets-latin-america-and-caribbean-0. [114]

Feyertag, J., S. Attridge y N. Kumar (2022), *GFANZ: a watershed moment or a drop in the ocean of the Global South's climate finance needs?*, The Overseas Development Institute (ODI), Wales, https://odi.org/en/insights/gfanz-a-watershed-moment-or-a-drop-in-the-ocean-of-the-global-souths-climate-finance-needs/. [84]

Foray, D., P. David y B. Hall (2009), "Smart specialisation – The concept", *Knowledge economists policy brief*, Vol. 9/85, p. 100. [75]

Frisari, G., M. Carlino y A. Palacios (2022), "Sovereign Sustainable Bonds as Core Financing Instruments for Sustainable Development", *IDB Blogs*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, http://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/sovereign-sustainable-bonds-as-core-financing-instruments-for-sustainable-development/. [104]

Gavin, E. (2022), *Latin America leads the way in sovereign thematic bonds*, Verisk Maplecroft, London, http://www.maplecroft.com/esg-weekly/latin-america-leads-the-way-in-sovereign-thematic-bonds/. [103]

Government of Chile (2022), *Programa de Gobierno 2022-2026. Apruebo Dignidad*, Government of Chile, Santiago, http://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobierno%2BAD%2B2022-2026%2B%282%29.pdf. [49]

Government of Honduras (2022), *Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026*, Government of Honduras, Tegucigalpa, http://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/PLAN-DE-GOBIERNO-XIOMARA-CASTRO_0.pdf. [55]

Government of Panama (2019), *Plan Estratégico 2020-2024*, Government of Panama, Panama City. [57]

ICMA (2023), *External Reviews*, International Capital Market Association, Paris, https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/external-reviews/. [113]

ICMA (2021), *Guidelines for Green, Social, Sustainability and Sustainability-Linked Bonds External Reviews*, International Capital Market Association, Paris, https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Guidelines-for-GreenSocialSustainability-and-Sustainability-Linked-Bonds-External-Reviews-February-2021-170221.pdf. [116]

ICTCR (2022), *Plan nacional de turismo de Costa Rica 2022-2027*, Instituto Costarricense de Turismo de Costa Rica (ICTCR), San José, https://www.ict.go.cr/pdf/Plan%20nacional%20de%20turismo%202022-2027.pdf. [66]

IDB (2021), *Documento de Marco Sectorial de Industrias Extractivas*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/documentos-de-marco-sectorial. [34]

IDB Invest (2022), *IDB Invest Launches Its First Silver Economy Social Bond to Support Financial Inclusion of Seniors in Latin America and the Caribbean*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://www.idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-launches-its-first-silver-economy-social-bond-support-financial-inclusion. [111]

Jouglard, P. (2019), "Leasing: an opportunity for the public sector", *Blog*, BNP Paribas, https://leasingsolutions.bnpparibas.com/en/leasing-an-opportunity-for-the-public-sector/. [95]

KPMG (2021), *Los cambios en infraestructura en América Latina. Perspectivas del sector publico.*, KPMG, http://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pe/pdf/kpmg_cambios_infraestructura_AmericaLatina.pdf. [40]

Latin American Observatory of Environmental Conflicts (2023), *Latin American Observatory of Environmental Conflicts*. [20]

Latinobarómetro (2023), *Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina*, Latinobarómetro, Santiago, http://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=724. [6]

Latinobarómetro (2020), *Latinobarómetro (base de datos)*, Latinobarómetro, Santiago, http://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=724. [11]

Latinobarómetro (2020), *Latinobarómetro 2021: Adios a Macondo*, Latinobarómetro, Santiago, http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp. [7]

Llinás, M. (2021), *Iniciativas cluster: una forma concreta y efectiva de "mover la aguja" de la productividad*, Editorial Puntoaparte, Bogota. [28]

López-Calva, L. (2021), *Supporting productive SMEs as an engine of recovery in LAC*, UN Development Program, New York, https://www.undp.org/latin-america/blog/graph-for-thought/small-businesses-big-impacts-supporting-productive-smes-engine-recovery-lac. [90]

MCIT (2022), *Plan Sectorial de Turismo 2022- 2026: Turismo en armonía con la vida*, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), Bogota, http://www.mincit.gov.co/participa/consulta-ciudadana/20-12-2022-plan-sectorial-de-turismo-vfpp.aspx. [68]

ME (2020), *Estrategia Nacional Hidrógeno Verde: Chile, fuente energética para un planeta cero emisiones*, Ministerio de Energía, Santiago, https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf. [64]

MEB (2020), *Estratégia Federal de Desenvolvimento Para O Brasil 2020-2031*, Ministério da Economia do Brasil, Brasilia, http://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/efd-2020-2031_v2_1.pdf. [48]

MECON (2023), *Argentina Productiva 2030. Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico*, Ministerio de Economía de Argentina (MEA), Buenos Aires, http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_resumen_de_misiones_1.pdf. [46]

MEF Perú (2022), *Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2022-2025*, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Lima, https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=6082&Itemid=100674&lang=es&language=es-ES. [69]

MEPyD (2020), *Plan nacional de infraestructura 2020-2030*, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de la República Dominicana, Santo Domingo, https://mepyd.gob.do/publicaciones/Plan-nacional-de-infraestructura-2020-2030. [70]

MEPyD (2012), *Ley 1-12. Estrategia Nacional de Desarrollo 2030*, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana (MEPyD), Santo Domingo, http://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/UAAES/END/Informes%20Anuales%20END/end_2030.pdf. [52]

MIDEPLAN (2022), *Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026*, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN), San José. [51]

MINAE (2015), *Plan Nacional de Energía 2015-2030*, Ministerio de Ambiente y Energia (MINAE) de Costa Rica, San José, https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2018/08/VII_Plan_Nacional_de_Energia_2015-2030.pdf. [65]

Ministerio de Energía (2017), "Primera piedra del Parque Eólico Punta Sierra", Ministerio de Energía, Gobierno de Chile, https://energia.gob.cl/noticias/coquimbo/primera-piedra-del-parque-eolico-punta-sierra. [24]

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2016), *Guía de Participación Ciudadana 2016*, https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2017/guia_de_participacion_ciudadana_2016.pdf. [31]

Montoya, N. y S. Nieto-Parra (próximo a publicarse), *Policymaking beyond GDP in Latin America: Case studies and lessons*, OECD Publishing, Paris. [62]

MPDB (2021), *Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones*, Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia (MPDB), La Paz, http://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/PDES_2021-2025a_compressed_0.pdf. [47]

MSGP (2010), *Ley 20.417. Crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y la superintendencia del medio ambiente*, Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MSGP) de Chile, Santiago, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010459. [32]

Nayak, T. (2018), "A Study on the Growth of Venture Capital Financing in India", *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, Vol. 15/1, pp. 1455-1461, http://ignited.in/I/a/304322. [100]

Norton, B. y B. Horton (2021), *Innovative debt financing could close the digital access gap. Here's how*, World Economic Forum, New York, http://www.weforum.org/agenda/2021/09/debt-financing-close-digital-access-gap/. [110]

Núñez, G., H. Velloso y F. Da Silva (2022), *Corporate governance in Latin America and the Caribbean: Using ESG debt instruments to finance sustainable investment projects*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0db29a24-a0b0-4421-a4ca-a47fca752e2d/content. [106]

OCMAL (2023), *Map of Mining Conflicts in Latin America (database)*, Observatory of Mining Conflicts (OCMAL), Santiago, http://www.ocmal.org/. [21]

OECD (2023), *OECD Environmental Performance Reviews: Costa Rica 2023*, OECD Environmental Performance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ec94fd4e-en. [35]

OECD (2023), *OECD Sovereign Borrowing Outlook 2023*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/09b4cfba-en. [81]

OECD (2023), *Regional Attractiveness in the New Global Environment: Argentina, Chile and Colombia*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dev/Atractivo-regional-nuevo-entorno-global-argentina-chile-colombia.pdf. [77]

OECD (2022), *Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings from the 2021 OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions*, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b407f99c-en. [8]

OECD (2022), *Green, social, sustainability and sustainability-linked bonds in developing countries: How can donors support public sector issuances?*, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/dac/green-social-sustainability-and-sustainability-linked-bonds.pdf. [107]

OECD (2022), *OECD Guidelines for Citizen Participation Processes*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f765caf6-en. [23]

OECD (2021), *How's Life in Latin America? Measuring Well-being for Policy Making*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2965f4fe-en. [3]

OECD (2020), *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/13130fbb-en. [42]

OECD (2020), *National Contact Points for Responsible Business Conduct: Providing access to remedy, 20 years and the road ahead*, OECD Publishing, Paris, http://mneguidelines.oecd.org/NCPs-for-RBC-providing-access-to-remedy-20-years-and-the-road-ahead.pdf. [38]

OECD (2019), *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en. [76]

OECD (2018), *OECD Due diligence guidance for responsible business conduct*, OECD Publishing, Paris, http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf. [37]

OECD (2018), *Policy Coherence for Sustainable Development 2018: Towards Sustainable and Resilient Societies*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301061-en. [43]

OECD (2017), *Making Decentralisation Work in Chile. Towards Stronger Municipalities*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264279049. [73]

OECD (2017), *Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264065239-en. [39]

OECD (2015), *New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264240957-en. [99]

OECD (2015), *Policy Framework for Investment, 2015 Edition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264208667-en. [2]

OECD (2014), *Inversión Pública Efectiva en todos los niveles de Gobierno. Principios de Acción*, OECD Publishing, http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/Recomendaci%C3%B3n-sobre-Inversi%C3%B3n-Publica-Efectiva.pdf. [15]

OECD et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a Green and Just Transition*, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/3d5554fc-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F3d5554fc-en&mimeType=pdf. [17]

OECD et al. (2019), *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en. [4]

OECD/CAF/ECLAC (2018), *Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/leo-2018-en. [22]

OECD/WB (2022), *Indicators of Product Market Regulation*, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris/World Bank Group, Washington, DC, http://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/. [27]

Oliveira de Paiva, T. (2020), *The SME leap in Latin America*, International Finance Corporation, Washington, DC, http://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/2020-12-call-for-insights-e-publication.pdf. [89]

Pew Research Center (2020), *Pew Research*, https://www.pewresearch.org/short-reads/2020/08/10/globally-views-of-foreign-direct-investment-vary-depending-on-type-of-investment/. [12]

PREUM (2019), *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*, Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Mexico City, http://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20de%20M%C3%A9xico.pdf. [56]

Reyes, F. y E. Ríos (2016), *Participación ciudadana en proyectos de inversión: Lecciones desde la experiencia internacional*, https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/05/73.pdf. [25]

Rudolph, H., M. Faruk y J. Gonzalez-Uribe (2023), *Venture Capital in Latin America and the Caribbean*, World Bank Group, Washington, DC, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099060223062519487/pdf/P17865500ba5cc0e9081f30b5948199b92f.pdf. [101]

Sacristán, G. (2022), *Latin America, World Leader in Gender Bonds*, IDB Invest, Inter-American Development Bank, Washington, DC, http://idbinvest.org/en/blog/gender/latin-america-world-leader-gender-bonds. [108]

Salazar-Xirinachs, J. (2023), *Common Framework of Sustainable FInance Taxonomies in LAC*, United Nations Environment Programme, Geneva, http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Common-Framework-of-Sustainable-Finance-Taxonomies-LAC.pdf. [112]

Salazar-Xirinachs, J. (2020), *Cluster-Based Policies: What Have We Learned?*, Oxford University Press, http://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-indust. [79]

Salazar-Xirinachs, J. (2020), *Estado de las políticas de desarrollo de clústeres para la exportación en América Latina y el Caribe con énfasis en su institucionalidad y gobernanza*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://redclustercolombia.gov.co/storage/resources/documents/informe-estado-de-las-politicas-de-desarrollo-de-clusteres-para-la-exportacion-bidpdf. [80]

Schoenmaker, D. (2020), "The impact economy: balancing profit and impact", *Working Paper 2020/04*, Bruegel, https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp_attachments/WP-2020-04-Impact-Economy-D.-Schoenmaker.pdf. [36]

SEA (2021), *Entidades ambientales de Latinoamérica firman los estatutos de la REDLASEIA y eligen a su presidente pro tempore*, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, Santiago, http://sea.gob.cl/noticias/entidades-ambientales-de-latinoamerica-firman-los-estatutos-de-la-redlaseia-y-eligen-su. [33]

SEA (2017), *Guía metodológica de actividades presenciales del Servicio de Evaluación Ambiental con la ciudadanía*, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, Santiago, http://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/07/27/web_guia_metodologica_de_actividades_presenciales_del_sea.pdf. [30]

SEA (2013), *Guía para la participación anticipada de la comunidad en proyectos que se presentan al SEIA*, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, Santiago, http://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/guias/GuiaPAC_anticipada_FINAL_20130711.pdf. [29]

SME Finance Forum (2017), *MSME Finance Gap*, International Finance Corporation, Washington, DC, http://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap. [87]

Smits, S. y M. Rodríguez (2022), *Public development banks in the water sector: Case studies from Latin America*, AFD éditions, Paris, https://www.afd.fr/en/rt65_water_case_studies_latin_america_crespi_reghizzi. [85]

SNPE (2021), *Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025*, Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, Quito, https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf. [53]

SPPPG (2014), *Plan Nacional de Desarrollo K'atun: nuestra Guatemala 2032*, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (SPPPG), Guatemala, http://pnd.gt/Documentos/undp_gt_PND_Katun2032.pdf. [54]

STPP (2021), *Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030*, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay (STPP), Asunción, http://www.stp.gov.py/pnd/. [58]

UNEP (2023), *Common Framework of Sustainable FInance Taxonomies in Latin America and the Caribbean*, United Nations Environment Programme, Geneva, http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Common-Framework-of-Sustainable-Finance-Taxonomies-LAC.pdf. [94]

UPME (2021), *Plan energético nacional 2020 – 2050: Transformación energética para el desarrollo sostenible*, Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de Colombia, Bogota, https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx. [67]

World Bank (2023), *World Development Indicators*, World Bank, Washington, DC, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. [86]

World Bank (2022), *Capital Markets*, World Bank Group, Washington, DC, http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/capital-markets. [97]

World Bank (2020), *Doing Business*, World Bank Group, Washington, DC, http://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness. [13]

World Economic Forum (2018), *The Global Competitiveness Report 2017–2018*, https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. [14]

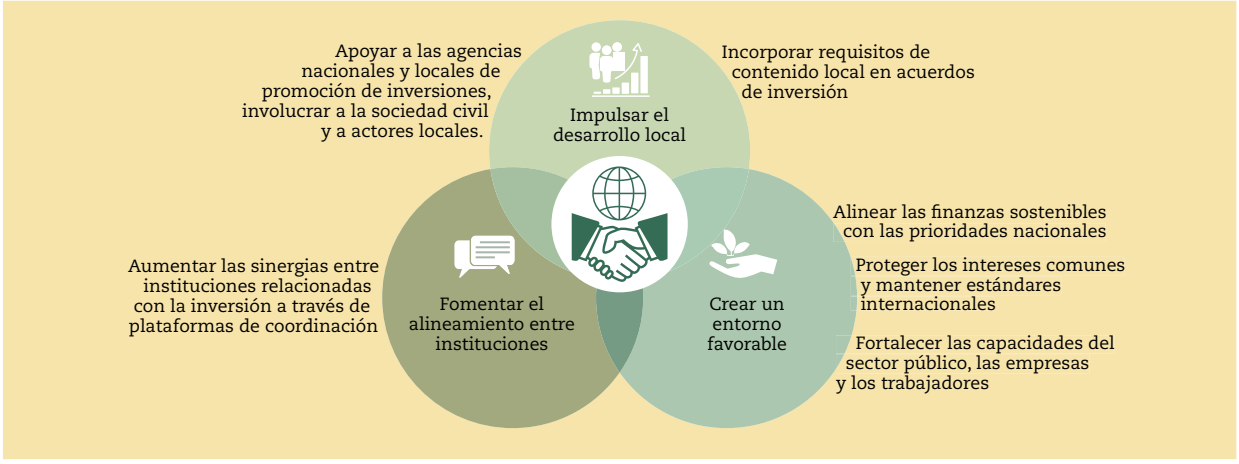
Capítulo 5

Alianzas internacionales para más y mejores inversiones

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deben forjar alianzas más sólidas, modernas y estratégicas para atraer inversiones que impulsen la transformación productiva de la región. Las nuevas herramientas utilizadas en la cooperación al desarrollo, como el financiamiento mixto, brindan a ALC la oportunidad de movilizar un mayor volumen de inversión a través de la participación del sector privado. Para atraer inversiones capaces de transformar las estructuras económicas y productivas de la región, es fundamental explotar al máximo el potencial de los tratados internacionales de inversión, fomentar un entorno de financiamiento sostenible, contribuir al desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología, establecer plataformas de coordinación y promover vínculos que apoyen el desarrollo local y nacional. El fortalecimiento de las alianzas internacionales que promueven la cooperación, los incentivos a la inversión y el diálogo sobre políticas públicas permitirá impulsar los objetivos de transformación productiva de ALC y tendrá repercusiones sociales positivas. La integración regional supone un paso importante hacia el logro de una transformación productiva sostenible a través de una inversión cada vez más estratégica. Por último, la Agenda de Inversiones Global Gateway de la UE en ALC puede impulsar inversiones promotoras de la transformación del modelo de desarrollo de la región.

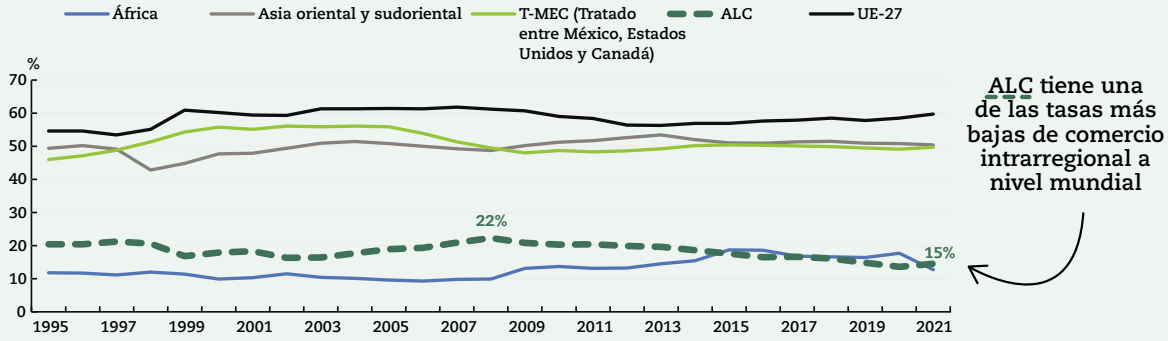
Alianzas internacionales: Claves para movilizar más y mejores inversiones

Las alianzas internacionales pueden potenciar el impacto socio-económico de las inversiones



Una mayor integración regional puede acelerar la transición hacia una producción más sostenible

Cuota de las exportaciones intrarregionales en las exportaciones totales de bienes, 1995-2021



ALC tiene una de las tasas más bajas de comercio intrarregional a nivel mundial

Una nueva agenda UE-ALC para la transformación productiva



45 000 millones de euros

Prioridades:

Clima y Energía · Digital · Salud · Transporte · Educación e Investigación

Introducción

La naturaleza de la cooperación y las alianzas internacionales se está viendo alterada por la evolución de ciertas dinámicas y tendencias mundiales. El panorama geopolítico actual se caracteriza por una confluencia de retos interrelacionados, que van desde los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania hasta el recrudecimiento de las repercusiones del cambio climático. De hecho, el mundo está cada vez más lejos de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU); una evaluación preliminar muestra que solo en torno a un 15% de los objetivos están en vías de alcanzarse (United Nations, 2023[1]).

Este nuevo panorama geopolítico ha agudizado la necesidad imperiosa de que los países de cualquier nivel de ingresos avancen en su triple transición —verde, digital y social. Estas agendas interrelacionadas plantean nuevos modelos de desarrollo socioeconómico, pasando por la necesidad de una transformación productiva sostenible (Capítulo 3). Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo y el programa NextGenerationEU proponen mecanismos para acelerar la triple transición de la UE, que incluye los objetivos climáticos recogidos en el Acuerdo de París (Sanahuja, 2022[2]).

Estas nuevas agendas tienen en cuenta las complejidades de un panorama internacional adverso y su impacto en la forma en que la cooperación y las asociaciones internacionales están evolucionando. Ya en 2015, la Agenda de Acción de Addis Abeba reclamaba un papel más destacado del sector privado en el avance hacia los ODS. Estos llamamientos se han intensificado en los últimos años, con una confianza creciente en el financiamiento en condiciones favorables para incentivar la participación del sector privado.

En este sentido, los países de América Latina y el Caribe (ALC) necesitan promover alianzas más sólidas, modernas y estratégicas para atraer más y mejores inversiones que impulsen el desarrollo de capacidades, creen empleos de calidad, forjen vínculos productivos y faciliten la transferencia de competencias, innovación y tecnologías. Aun reconociendo la importancia —pero también las limitaciones— de los recursos públicos, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las agencias de desarrollo están poniendo la mirada en nuevos enfoques para que el capital privado también se interese por los proyectos de desarrollo. Los países de ALC deben asegurarse de que este nuevo enfoque atraiga y retenga inversiones que contribuyan a transformar los modelos de desarrollo de la región, rompiendo el círculo vicioso de baja productividad y baja diversificación.

En primer lugar, este capítulo explora oportunidades para movilizar mayores inversiones en ALC mediante la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Asimismo, presenta una visión general del financiamiento mixto como posible herramienta eficaz. En segundo lugar, el capítulo destaca la necesidad de poner la mirada más allá de las sumas movilizadas y velar por que las inversiones sirvan para impulsar una transformación productiva sostenible. Se examina el modo en que las alianzas internacionales pueden fomentar mejores inversiones favoreciendo un entorno propicio, siguiendo las normas internacionales, aprovechando el potencial de los tratados internacionales de inversión (TII), promoviendo capacidades y competencias, creando plataformas de coordinación e impulsando el desarrollo local. En tercer lugar, el capítulo analiza el potencial de integración regional y subregional, y de qué manera el comercio dentro de la región puede respaldar iniciativas de asociación para la transformación productiva. En cuarto lugar, considera cómo el fortalecimiento de las asociaciones y la cooperación con la Unión Europea puede ayudar a los países de ALC a avanzar en su camino hacia la reindustrialización y la transformación productiva sostenible. Por último, el capítulo ofrece mensajes clave en materia de políticas públicas.

Oportunidades en un panorama de cooperación cambiante: el papel del sector privado

Se ha producido un cambio notable en la cooperación internacional y el financiamiento del desarrollo que consiste en reconocer el potencial del sector privado para contribuir al logro de los ODS. Este enfoque se refleja en la Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 sobre Financiamiento para el Desarrollo, que reconoció la importancia de las inversiones privadas para alcanzar los ODS. Tras la pandemia de COVID-19, el déficit de financiamiento de los ODS en los países en desarrollo se estima en 3.9 billones de dólares estadounidenses (USD), lo que supone un aumento del 56% respecto a las estimaciones prepandémicas (OECD, 2022[3]). Puesto que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) ascendió a 185 900 millones de USD en 2021, el mencionado déficit supera con creces el presupuesto mundial de cooperación al desarrollo (OECD, 2023[4]). Aunque la AOD sigue desempeñando un papel importante de apoyo a las iniciativas de desarrollo, el reconocimiento de las limitaciones del financiamiento público ha llevado a una reconsideración estratégica de los modelos de financiamiento. En vista de ello, la comunidad involucrada en la cooperación al desarrollo está ampliando su interacción con el sector privado para movilizar financiamiento adicional, establecer y fortalecer alianzas, así como ayudar a desarrollar mercados inclusivos y cadenas de valor en sectores estratégicos (GPEDC, 2019[5]).

La cooperación internacional se está centrando en elevar la escala de las inversiones

Las alianzas internacionales basadas en un modelo de movilización de inversiones para la transformación productiva surgieron en un primer momento a través de los países en desarrollo y los agentes de la cooperación Sur-Sur. Con el aumento del papel del comercio y la inversión en las asociaciones de interés mutuo, surgió un enfoque más holístico de las iniciativas en favor del desarrollo (Chaturvedi, 2016[6]). Este cambio quedó plasmado en la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por su sigla en inglés) de la República Popular China (en adelante, "China"), un plan de inversión lanzado en 2013 que pretende conectar a China con el resto del mundo a través de redes terrestres y marítimas (EBRD, 2023[7]). La BRI representa un nuevo concepto de colaboración mundial, aunque con varios matices, que hace especial hincapié en el comercio y la inversión como motores de la cooperación en materia de desarrollo. China ha utilizado sus redes comerciales mundiales para contribuir activamente a la transformación estructural de países y regiones de todo el mundo, proporcionándoles oportunidades de inversión (Vadell, Brutto y Leite, 2020[8]). La BRI supone una ruptura con el modelo tradicional de cooperación internacional basado en la asistencia, ya que lo que China hace es buscar de forma activa alianzas e inversiones extranjeras para financiar y ejecutar ambiciosos proyectos de infraestructuras en Asia, Europa, África y América (Freymann y García-Herrero, 2022[9]; Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016[10]). Sin embargo, desde su creación, la BRI ha encontrado cierta oposición. Un número creciente de países prestatarios han acumulado niveles insostenibles de deuda con China —agravados por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania—, que en algunos casos superan el 20% del PIB (McBride, Berman y Chatzky, 2023[11]).

En este cambio de enfoque de la cooperación al desarrollo también están tomando la delantera otros socios. La Unión Europea (UE) ha sido un protagonista destacado en la movilización de financiamiento privado. El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), creado en 2017 y ampliado en 2021 con la denominación de FEDS+, es un ejemplo de ello. Estos fondos pretenden fomentar la inversión en países en desarrollo y en los países vecinos de Europa mediante mecanismos mixtos, garantías y otras fórmulas financieras, combinando las subvenciones de la UE con préstamos o capital de inversores públicos y privados para generar mayores volúmenes de inversión (Recuadro 5.1) (Comisión Europea, 2022[12]). Más recientemente, la Unión Europea ha puesto en marcha el programa Global Gateway, con el

que aspira a expandir considerablemente sus acciones. La Agenda de Inversiones Global Gateway de la UE en ALC —que se ha comprometido a movilizar 45 000 millones de euros al 2027— tiene como objetivo impulsar vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, climático, energético y del transporte, así como potenciar los sistemas de salud, educación e investigación en los países socios (Comisión Europea, 2023[13]).

Estados Unidos también dio un paso significativo en esta dirección con la aprobación de la Ley BUILD de 2018, en virtud de la cual se creó la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla en inglés). Esta legislación fue una respuesta a la creciente importancia del financiamiento privado en el desarrollo y un intento por conseguir que los instrumentos de financiamiento al servicio del desarrollo fueran más eficaces (CSIS, 2018[14]). La DFC puede realizar inversiones de capital y proporcionar asistencia técnica; cabe destacar que tiene un límite de gasto más elevado que su predecesora y puede facilitar una mayor participación del sector privado en el financiamiento del desarrollo. Otra iniciativa es la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que agrupa a Estados Unidos, Canadá y varios países de ALC. Esta Alianza actúa como marco de cooperación regional para fomentar la competitividad regional, la resiliencia, la prosperidad común y la inversión inclusiva y sostenible (SICE, 2023[15]).

Recuadro 5.1. **FEDS+ en América Latina y el Caribe**

El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+) forma parte del marco de inversión de la UE para la acción exterior. Así pues, se trata del principal instrumento financiero movilizador de inversiones en el contexto de la estrategia Global Gateway de la UE para reducir la brecha mundial de inversión (Comisión Europea, 2022[12]). En aras de la promoción del desarrollo sostenible, el FEDS+ aspira a captar recursos financieros con los que apoyar la inversión en los países asociados para crear empleo digno, reforzar la infraestructura pública y privada, fomentar las energías renovables y la agricultura sostenible, y respaldar la transición digital, entre otros objetivos. A través del FEDS+, la Unión Europea reforzará su liderazgo en materia de prioridades de inversión compartidas, respetando la necesidad de que las instituciones financieras diversifiquen sus riesgos (geográficamente y entre sectores).

Cuando los proyectos tienen un valor agregado público y no es posible reducir el riesgo mediante garantías, la Unión Europea puede utilizar los mecanismos mixtos del FEDS+. Estos mecanismos utilizan subvenciones para reducir el riesgo de los proyectos de inversión en los países asociados de la UE y posteriormente movilizan préstamos de las instituciones financieras de desarrollo (inversión pública) que mejorarán la sostenibilidad de la inversión, su adaptación al cambio climático y su impacto en el desarrollo.

Los instrumentos mixtos han demostrado su eficacia como herramienta de transformación en la región de ALC. Desde 2010, el Mecanismo de Inversión en América Latina y el Mecanismo de Inversión en el Caribe han aportado más de 597 millones de euros en apoyo a 67 proyectos (LACIF, 2023[16]; LACIF, 2023[17]). El alcance global del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional ha permitido la fusión de ambos mecanismos en uno solo: el Mecanismo de Inversión en América Latina y el Caribe.

Las garantías se utilizan para reducir el riesgo de las actividades e incentivar la inversión privada, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otras instituciones financieras europeas. Los programas de inversión con garantías presupuestarias del FEDS+ se implementan principalmente a través de dos vías. En primer lugar, en asociación con el BEI, la Unión Europea tiene previsto ofrecer una garantía a nivel mundial de hasta 26 700 millones de euros. La finalidad de este financiamiento es apoyar inversiones en ámbitos como las energías limpias, las infraestructuras respetuosas con el medioambiente y la sanidad (Comisión Europea, 2022[18]). Las

Recuadro 5.1. **FEDS+ en América Latina y el Caribe** *(cont.)*

garantías tratan de facilitar las inversiones de la estrategia Global Gateway en países asociados en los que ciertas cuestiones relacionadas con riesgos soberanos y del sector público siguen planteando obstáculos importantes. En segundo lugar, en el marco de la arquitectura abierta del FEDS+, la Unión Europea ofrecerá garantías financieras por valor de hasta 13 000 millones de euros en todo el mundo hasta 2027 (Comisión Europea, 2022[19]). La gestión de estas garantías recaerá en diversos socios encargados de su implementación, entre los que figuran instituciones financieras internacionales e instituciones europeas de financiamiento del desarrollo. El objetivo último es estimular inversiones privadas que ayuden a los países asociados a la UE a cumplir los ODS.

La primera convocatoria de propuestas de arquitectura abierta del FEDS+, que comenzó a mediados de 2022, se estructuró en torno a seis ejes de inversión: i) financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para un crecimiento inclusivo y verde; ii) ciudades sostenibles; iii) agricultura sostenible (lo que incluye biodiversidad, bosques y agua); iv) conectividad (en ámbitos como el transporte y la tecnología digital); v) finanzas sostenibles; y vi) desarrollo humano.

En diciembre de 2022, el Consejo Operativo del FEDS+ aprobó 6 050 millones de euros en garantías financieras para apoyar 40 nuevos programas de inversión en África subsahariana, ALC, y Asia y el Pacífico (Comisión Europea, 2022[19]), 18 de los cuales se implementarán en ALC.

Más allá de las agendas bilaterales de inversión, la necesidad urgente de ampliar el financiamiento para el desarrollo ha demandado una reforma de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). La reforma de los BMD abarca una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la operativa y el impacto del sistema financiero internacional a la hora de proporcionar asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo. Se presta especial atención al alineamiento de las estrategias de los bancos multilaterales de desarrollo con los ODS y a la ampliación del volumen global de financiamiento para el desarrollo (Peter Lankes y Prizzon, 2023[20]). Cabe señalar aquí los esfuerzos encaminados a mejorar la implementación de los proyectos, velando por la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia. En respuesta a la agenda de reforma de los BMD, por ejemplo, el BID está llevando a cabo múltiples iniciativas para la optimización de su balance, lo que le permitirá aumentar su capacidad de absorción de riesgos y su margen para ofrecer préstamos en los próximos diez años. A este respecto, el Banco pretende, por ejemplo: i) obtener garantías de sustitución de créditos de países con calificación crediticia elevada que liberarían capital del Banco, ii) obtener líneas de crédito comprometidas de países con calificación alta para sustituir la liquidez de financiamiento de deuda, y iii) emitir capital híbrido que sea adquirido por países donantes para aumentar la cantidad de fondos propios en el Banco. Estas reformas permitirían al BID ser más eficaz ante las cambiantes necesidades de desarrollo de ALC, alineando al mismo tiempo sus actividades con objetivos más amplios de desarrollo y sostenibilidad.

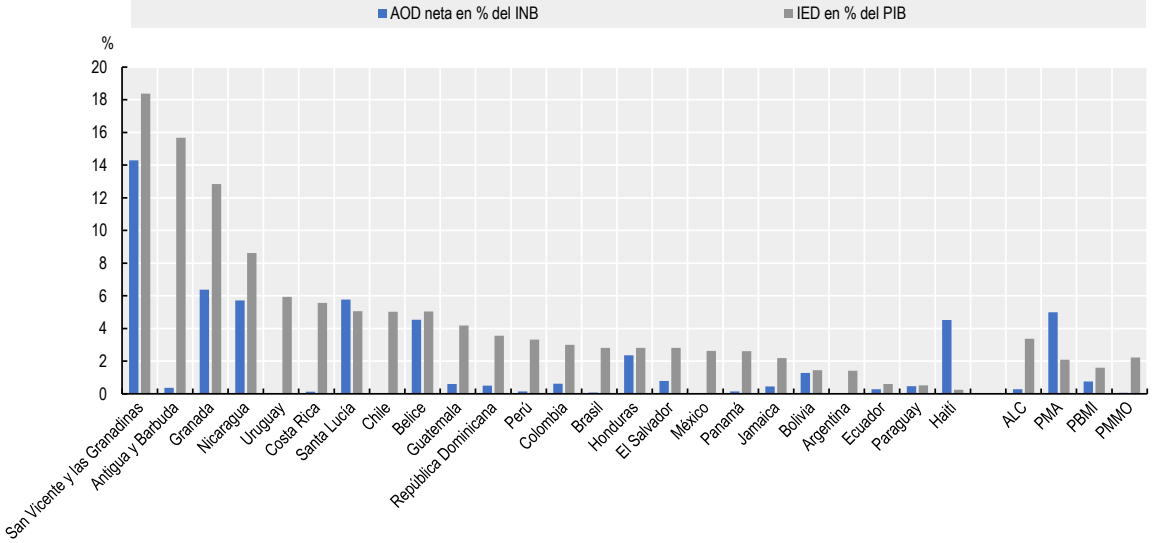
ALC puede impulsar la transformación productiva aprovechando los flujos internacionales

El giro de la cooperación internacional hacia la atracción de inversiones privadas ofrece un potencial considerable para ALC. La región se caracteriza por una combinación de países de ingresos medios-bajos, medios-altos y altos, muchos de los cuales están experimentando importantes tasas de crecimiento económico. Sin embargo, también se enfrentan a retos en materia de desarrollo, como desigualdad, bajos niveles de productividad y carencias de infraestructuras (OCDE et al., 2019[21]). A pesar de estos retos, ALC se ha consolidado como un importante receptor de inversión extranjera directa (IED).

En cuanto a los flujos transfronterizos de capital hacia la región, la IED siguió siendo la mayor fuente de capital y la menos volátil en 2021 (CEPAL, 2023[22]). Además, la heterogeneidad de las economías de ALC y la riqueza de sus recursos medioambientales conforman un panorama prometedor para la "inversión de impacto", al ofrecer oportunidades para mejorar la estructura productiva y conseguir efectos positivos relacionados con la productividad y el desarrollo social, ambiental e institucional (Dallmann, 2021[23]). El mercado mundial de la inversión de impacto se estimaba en 1 164 billones de USD en 2022, y los expertos señalan al cambio climático y a la creciente demanda de normas transparentes de divulgación de información como los principales motores de la actividad inversora mundial (Almaguer y Davidson, 2023[24]). Aunque las secuelas económicas de la pandemia de COVID-19 mermaron el interés de los inversores de capital de riesgo, la inversión global en ALC ha aumentado de forma sostenida en los últimos dos años, en los que la inversión de impacto en la región ha superado la cifra de 25 000 millones de USD (Schwartz y Arévalo-Carpenter, 2021[25]).

ALC se compone principalmente de países de ingresos medios-altos, definidos según el sistema de clasificación de países del Banco Mundial como aquellos con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita de entre 4 466 y 13 854 USD (Hamadeh, Van Rompaey y Metreau, 2023[26]). Por ello, la región se apoya poco y cada vez menos (en porcentaje del INB) en financiación concesional como la AOD (Gráfico 5.1). Si bien es cierto que la importancia de la AOD en porcentaje del INB sigue siendo relativamente pequeña en promedio, la AOD representa una fuente valiosa de financiamiento para los países menos adelantados (PMA) de ALC, así como para los pequeños Estados insulares del Caribe. Por ejemplo, la AOD supone el 14.3% del INB en San Vicente y las Granadinas, el 6.4% en Granada y el 5.8% en Santa Lucía. En este contexto, aunque la IED es un indicador clave para las economías de ALC, la AOD sigue prestando un apoyo fundamental a determinadas economías de la región, y su relevancia no debe pasarse por alto.

Gráfico 5.1. **AOD como porcentaje del INB e IED como porcentaje del PIB, 2021**



Nota: Al igual que en (Banco Mundial, 2023[27]), los datos de 2022 para ALC corresponden a una media ponderada que considera 33 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos y Uruguay. Para Aruba, Curazao y las Islas Caimán, los últimos datos disponibles corresponden a 2021, mientras que para Venezuela los últimos datos disponibles son de 2014. Según la clasificación de la ONU: PMA = países menos adelantados; PIMB = países de ingresos medios-bajos; PIMA = países de ingresos medios-altos.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (Banco Mundial, 2023[27]); (OECD, 2023[28]).

StatLink https://stat.link/murdqn

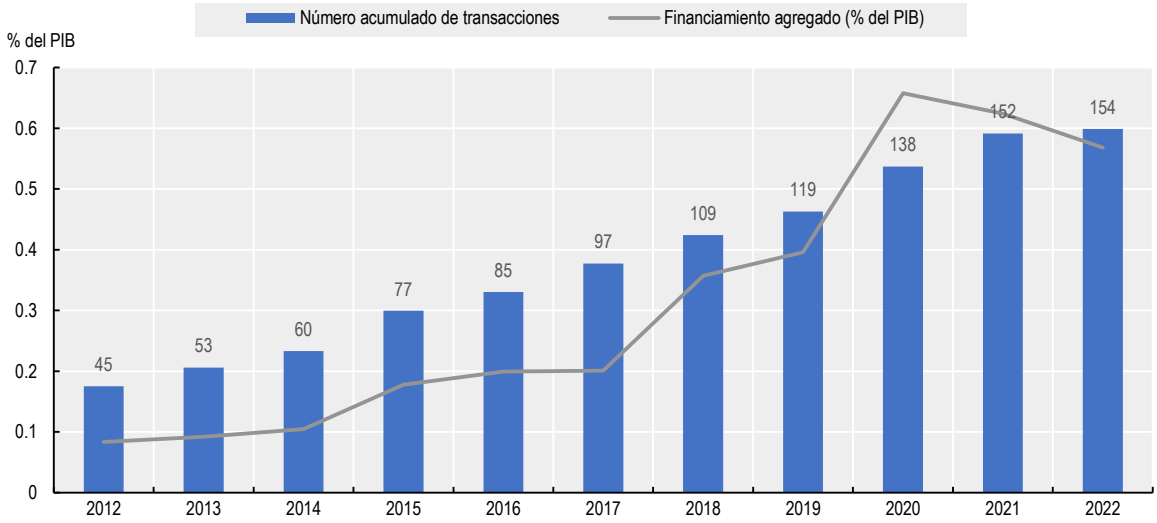
La cooperación al desarrollo es esencial para que ALC pueda acceder a flujos financieros internacionales. A pesar de que ALC sigue siendo un destino atractivo para la IED, los países de la región se enfrentan en ocasiones a dificultades para captar estas inversiones. Esto puede explicarse en parte por la existencia o la percepción de riesgos que dificultan la inversión del sector privado (OECD/UNCDF, 2020[29]). Otros de los desafíos son las transiciones políticas y administrativas, así como los vaivenes de las políticas públicas y las regulaciones por los que pasan muchos países de ALC, que pueden aumentar la incertidumbre (Capítulo 2). Al ofrecer acceso a instrumentos de reducción de riesgos, como financiamiento mixto o garantías otorgadas en condiciones favorables o competitivas para movilizar financiamiento privado, la cooperación al desarrollo puede contribuir a derribar obstáculos a la inversión tales como los riesgos percibidos (OECD, 2022[30]). Los socios para el desarrollo también realizan una importante tarea de apoyo a los gobiernos en sus esfuerzos por aumentar el atractivo de la región como destino de la inversión.

El financiamiento mixto puede movilizar inversiones del sector privado

La presión creciente, especialmente desde 2015, por reducir el déficit de financiamiento para alcanzar los ODS ha convertido la movilización de fondos del sector privado en un eje central de la cooperación al desarrollo (OECD, 2022[30]). Los donantes han desarrollado varias herramientas para aumentar la participación privada en iniciativas al servicio de los objetivos de desarrollo, como el financiamiento mixto, definido como el uso estratégico de financiamiento para el desarrollo con el fin de atraer fondos adicionales para proyectos de desarrollo sostenible (OECD, 2023[31]). Al aprovechar una combinación de fondos públicos y privados, así como fondos filantrópicos, el financiamiento mixto moviliza nuevas fuentes de capital privado hacia los ODS, especialmente para abordar objetivos específicos como el trabajo decente, el crecimiento económico y la acción climática (Convergence, 2022[32]). Lo logra mediante instrumentos de reducción de riesgos, como garantías, reduciendo los riesgos percibidos y haciendo que las inversiones sean más atractivas desde el punto de vista financiero para los inversores privados. La financiación combinada también incluye disposiciones para la creación de capacidades, el fortalecimiento de las capacidades de las partes interesadas locales y la creación de un entorno propicio para la sostenibilidad de las inversiones.

Las instituciones financieras de desarrollo (DFIs, por sus siglas en inglés) y los bancos multilaterales de desarrollo han movilizado una importante cantidad de financiamiento privado en ALC (Convergence, 2022[32]). Los flujos de financiamiento mixto en la región de ALC se mantuvieron constantes, incluso en medio de la pandemia de COVID-19, superando un total de 22 mil millones de dólares en 2021 y 2022, y alcanzando un total de 154 transacciones en 2022 (Convergence, 2022[32]) (Gráfico 5.2).[1] Sin embargo, en comparación con la movilización de recursos internos o la deuda pública (Capítulo 1), los recursos financieros combinados se han mantenido bajos en la última década.

Gráfico 5.2. **Tamaño del mercado y crecimiento del financiamiento mixto en ALC, 2012-22**

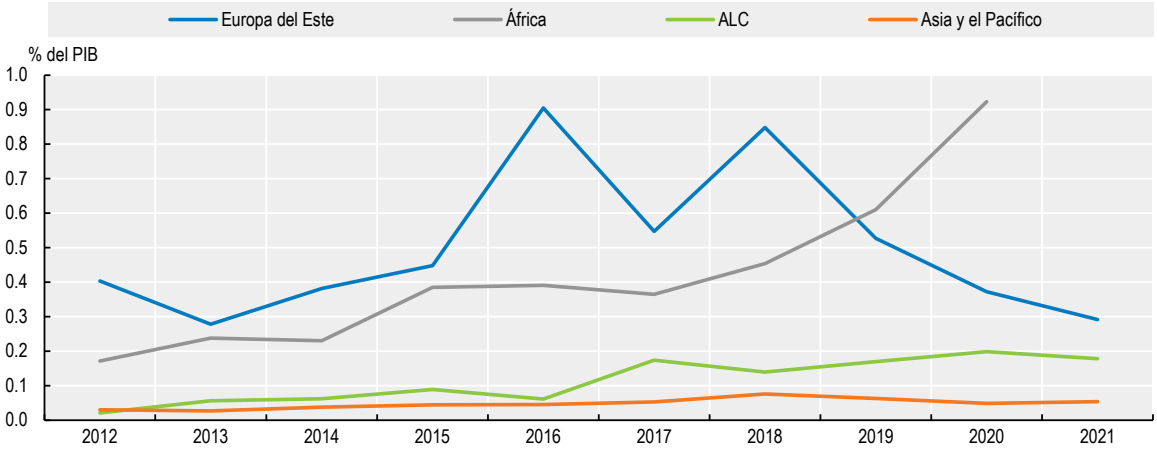


Nota: El año 2012 incluye las transacciones acumuladas desde 1990.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (Convergence, 2023[33]).

StatLink https://stat.link/wspmr8

Entre 2018 y 2020, ALC representó aproximadamente el 15% del total global movilizado del sector privado por intervenciones oficiales de desarrollo.[2] Durante la última década, ALC ha experimentado un aumento en la proporción de financiamiento privado movilizado como porcentaje del PIB, que pasó del 0.06% (USD 3 mil millones) en 2016 al 0.18% (USD 9 mil millones) en 2021 (Gráfico 5.3). A la cabeza de los países de la región se encuentran México, Perú, Ecuador y Colombia, en ese orden (Dembele et al., 2022[34]).

Gráfico 5.3. **Recursos movilizados de fuentes privadas mediante intervenciones oficiales de apoyo al financiamiento para el desarrollo (%), 2012-21**

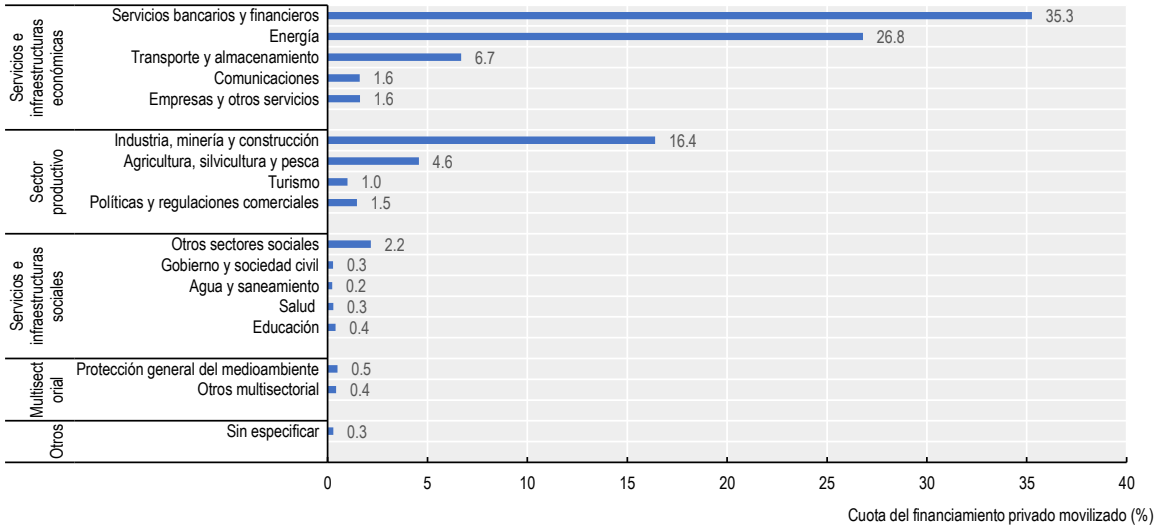


Nota: Países incluidos en Europa del Este: Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo*, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. Países incluidos en Asia y el Pacífico: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Camboya, China (República Popular de), Fiji, Georgia, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kazajstán, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Malasia, Maldivas, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Niue, Palau, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, Sri Lanka, República Árabe Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Cisjordania y la Franja de Gaza, y Yemen. Países incluidos en ALC: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay, Venezuela. Los datos de África correspondientes a 2021 están en revisión.
*Esta designación se hace sin perjuicio de posiciones sobre estatus, y está en línea con la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
Fuente: Cálculos de los autores basados (OECD.Stat, 2023[35]) y (FMI, 2023[36]).

StatLink https://stat.link/m8yz7n

Casi tres cuartas partes (72%) del financiamiento privado movilizado en ALC en 2018-20 se dirigió a sectores del ámbito de los servicios y las infraestructuras económicas, como los servicios bancarios y financieros, la energía, y el transporte y almacenamiento (Gráfico 5.4). La mayor parte del financiamiento destinado a servicios bancarios y financieros provino de garantías, líneas de crédito y préstamos sindicados, instrumentos que generalmente se utilizan para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la inclusión financiera (OECD, 2023[4]).

Gráfico 5.4. **Financiamiento privado movilizado por sector (%), promedio de ALC 2018-20**



Nota: No se incluyeron los datos de 2021, ya que buena parte del financiamiento privado movilizado se destinó al sector de asistencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19. Los sectores que figuran corresponden a la clasificación sectorial del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

Fuente: (OECD.Stat, 2023[35]).

StatLink https://stat.link/qa346r

El sector energético es crucial en la región; diez países de ALC se han comprometido a generar el 70% (por encima del objetivo actual del 40%) de su consumo total de energía a partir de energías renovables para 2030, en el marco de la iniciativa RELAC que promueve las energías renovables en América Latina y el Caribe. Los principales instrumentos financieros utilizados para movilizar financiamiento privado en el sector de la energía han sido las garantías (47.6%), así como la inversión directa en empresas (DIC, por su sigla en inglés) y las sociedades instrumentales (SPV, por su sigla en inglés) para el financiamiento de proyectos, que representaron conjuntamente un 41.4%. El financiamiento mixto puede ayudar a cubrir las necesidades de financiamiento de sectores críticos como las energías renovables, la agricultura sostenible y las infraestructuras, al habilitar recursos para proyectos con viabilidad financiera e impacto social y ambiental positivo. Por ejemplo, Uruguay está utilizando un enfoque de financiamiento mixto para acelerar su segunda transición energética (Recuadro 5.2).

Recuadro 5.2. **Fondo para la Innovación en Energías Renovables de Uruguay (REIF)**

Uruguay está impulsando su segunda transición energética a través de su Fondo para la Innovación en Energías Renovables (REIF, por su sigla en inglés), un instrumento de financiamiento mixto que combina capital privado y fondos de la ONU para promover proyectos al servicio de la transición energética en el país. El fondo moviliza inversiones privadas y públicas para estimular proyectos privados innovadores en energías renovables, un sector que presenta cierto nivel de riesgo y, por lo tanto, requiere una contribución inicial de financiamiento mixto para atraer fondos y reducir el riesgo de las inversiones del sector privado (REIF, 2023[37]). Está previsto que el programa REIF reciba una subvención de 10 millones de USD del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS y que obtenga más de 77 millones de USD de cofinanciamiento de bancos regionales de desarrollo y bancos comerciales privados (UNIDO, 2022[38]). Cuatro de los grandes bancos que operan en Uruguay han firmado un acuerdo de cooperación con el programa: BBVA, Heritage, Santander e Itaú.

El REIF trabaja en colaboración con varias agencias gubernamentales: el Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Ambiente; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (la empresa eléctrica estatal del país, más conocida como UTE). El programa pretende acelerar el cumplimiento por parte de Uruguay de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre las principales áreas de impacto del REIF figuran: mejora de la competitividad del sector privado; sostenibilidad medioambiental; inclusión social y de género; y refuerzo de las capacidades del sector financiero de cara a la inversión en los ODS.

Nota: Otros socios son la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y ONU Mujeres.

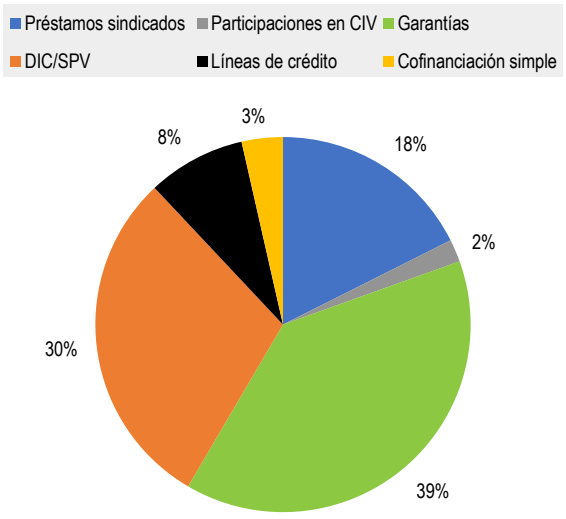
Fuente: (REIF, 2023[37]); (UNIDO, 2022[38]).

Solo el 3% (282 millones de USD) del financiamiento privado total movilizado en ALC en 2018-20 se dirigió a los sectores de infraestructura social y servicios. Sin embargo, las inversiones privadas en sectores sociales han ido ganando terreno en los últimos años para hacer frente a los retos sociales y de desarrollo de la región. Cabe destacar que, en respuesta a la pandemia, las inversiones en el sector sanitario aumentaron drásticamente entre 2020 y 2021, pasando de 47.9 millones de USD a 334.5 millones, lo que supone un incremento del 598.3% (OECD.Stat, 2023[35]). Las inversiones privadas en infraestructuras y servicios sociales pueden tener efectos positivos, pero es necesario tomar en consideración ciertos factores importantes. Dado que las inversiones privadas suelen tener fines lucrativos, los proyectos de financiamiento mixto deben ser objeto de un seguimiento minucioso y es preciso medir sus impactos en el desarrollo (Attridge y Engen, 2019[39]). Es esencial contar con un mecanismo sólido de seguimiento y evaluación para maximizar el impacto positivo de las inversiones privadas, sobre todo en el sector de las infraestructuras y los servicios sociales.

En 2018-20, los principales instrumentos utilizados para incentivar la movilización de recursos privados en ALC fueron las garantías (38%), junto con la inversión directa en empresas (DIC, por sus siglas en inglés) y las sociedades instrumentales para el financiamiento de proyectos (SPV, por sus siglas en inglés) (30% entre ambas) (Gráfico 5.5). Las garantías, que a diferencia de los préstamos tienen la ventaja de no requerir financiamiento inicial, representaron un tercio del capital privado movilizado entre 2012 y 2020 (Alvarez Pagliuca et al., 2022[40]). Los préstamos sindicados, que suelen originarse

cuando un proyecto requiere un préstamo demasiado elevado para un solo prestamista, representaron el 17% del total. Aunque los importes movilizados a través de líneas de crédito (8%), cofinanciamiento simple (4%) y participaciones en vehículos de inversión colectiva (3%) fueron relativamente bajos, estas herramientas pueden seguir siendo eficaces para movilizar recursos en determinados contextos, como el acceso al financiamiento por parte de pymes y proyectos con posibilidades limitadas de bancarización (OECD, 2023[4]).

Gráfico 5.5. **Movilización de recursos privados según el mecanismo de incentivo, ALC, promedio 2018-20**



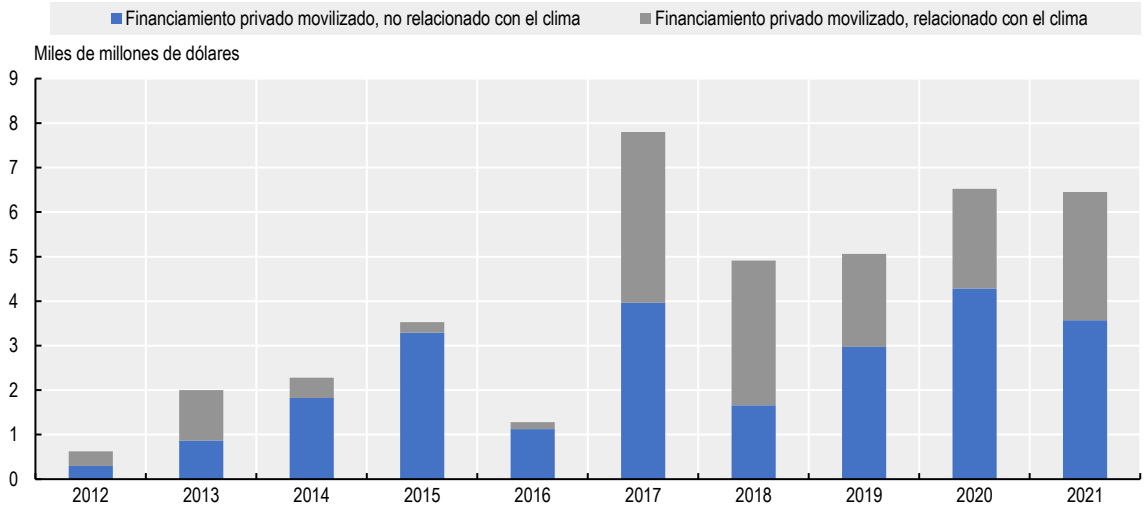
Nota: CIV = vehículos de inversión colectiva; DIC/SPV = inversión directa en empresas y sociedades instrumentales para el financiamiento de proyectos.
Fuente: (OECD.Stat, 2023[35]).

StatLink https://stat.link/as0h2f

Las operaciones de financiamiento mixto dirigidas a pymes en varios sectores clave de las economías de ALC también son esenciales para colmar los déficits de inversión privada y fomentar la transformación económica de la región. En la medida en que el cambio climático supone un reto añadido para la protección y la gestión sostenible de la riqueza natural, las iniciativas de financiamiento mixto están llamadas a jugar un papel crucial en el apoyo a las pymes nacionales. Por ejemplo, en 2022, el fondo regional Central America Small Enterprise Investment Fund IV (CASEIF IV) asignó 75 millones de USD de capital de crecimiento a pymes que operan en América Central, del Sur y el Caribe, con especial atención a los sectores de agroindustria, alimentación y bebidas, industria manufacturera y telecomunicaciones (SIFEM, 2023[41]). Además, el Mecanismo de Inversión en América Latina y el Caribe de la Unión Europea ha aportado 16.4 millones de euros en apoyo del fondo Eco.business, una iniciativa de colaboración que canaliza fondos hacia instituciones financieras locales para promover el uso sostenible de los recursos naturales y mitigar los impactos del cambio climático (LACIF, 2023[42]; Eco.business Fund, 2023[43]). Desde su creación en diciembre de 2014, el fondo ha respaldado más de 816 000 puestos de trabajo relacionados con la gestión sostenible de los recursos, ha gestionado de forma sostenible 1 093 700 hectáreas de tierras de cultivo, ha librado al medioambiente de 144 000 litros de herbicidas y ha ahorrado 5.3 millones de metros cúbicos de agua para riego tanto en ALC como en el África subsahariana (Eco.business Fund, 2023[44]). La ayuda financiera de la UE ha permitido prestar asistencia técnica a 62 proyectos en 14 países de la región, orientando las inversiones hacia resultados más sostenibles.

Los BMD han asumido un papel cada vez más importante en las iniciativas emprendidas a nivel mundial para hacer frente a la crisis climática y sus consecuencias de largo alcance. Desde 2016, la aparición de nuevos proveedores multilaterales con un enfoque centrado en el clima, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima, ha aumentado considerablemente la movilización de financiamiento privado para inversiones relacionadas con el clima. En los últimos años, se ha observado un notable incremento de la proporción de fondos privados asignados por los BMD a iniciativas ligadas al clima y el nivel más alto se registró en 2017 (Gráfico 5.6). De los 7 800 millones de USD movilizados en 2017 por fondos de desarrollo, casi la mitad (3 840 millones de USD) se destinaron a proyectos vinculados al clima. En 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo, por sí solo, movilizó 2 820 millones de USD para apoyar el desarrollo de la región y participó en 111 operaciones con más de 61 socios (BID, 2023[45]). El banco dio prioridad a ámbitos clave, como la acción por el clima y la corrección de problemas sociales que impiden la recuperación de la región.

Gráfico 5.6. **Financiamiento privado total movilizado por los BMD, 2012-21**



Nota: Entre los proveedores multilaterales de ALC figuran el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco de Desarrollo de América Latina, instituciones de la UE, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Grupo del BID, el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Nórdico de Desarrollo, el Grupo de Desarrollo de Infraestructuras Privadas, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima, el Banco de Desarrollo de América del Norte y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional.

Fuente: (OECD.Stat, 2023[35]).

StatLink https://stat.link/vp9ig8

Los BMD también promueven el financiamiento del sector privado orientado al desarrollo a través de mecanismos innovadores que reducen el riesgo de las inversiones y persiguen objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, el BID y The Nature Conservancy acordaron un canje de deuda por naturaleza con Barbados que proporcionó al país 10 millones de USD para apoyar su economía azul, y se asociaron con la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos para llevar a cabo otro canje de deuda por naturaleza, por valor de 450 millones de USD, para proteger las Islas Galápagos en Ecuador (BID, 2022[46]; Reuters, 2023[47]). Además, el BID se ha convertido en el primer banco multilateral de desarrollo en ofrecer una herramienta de financiamiento —Mecanismo para Vincular la Ambición en Biodiversidad y en Cambio Climático al Desempeño (BID CLIMA)— que recompensa a los países por alcanzar objetivos relacionados con la naturaleza y el clima. BID CLIMA proporcionará descuentos en los préstamos cuando

el prestatario cumpla los objetivos relativos a la naturaleza y el clima de los proyectos seleccionados (IDB, 2023[48]).

Más allá de estas oportunidades que ofrece el financiamiento mixto, el giro de la cooperación al desarrollo hacia la movilización de financiamiento privado debe tomarse con cautela. La puesta en marcha de iniciativas de reducción de riesgos para atraer capital privado a los proyectos de desarrollo todavía suscita cierta inquietud. Por ejemplo, la propia definición de financiamiento mixto sigue siendo objeto de debate. Las instituciones adoptan enfoques diferentes en lo que se refiere a los actores que intervienen en el financiamiento mixto, las hipótesis de base sobre los beneficiarios y la mejor manera de evaluar su impacto. La falta de una definición oficial puede causar problemas a la hora de recopilar y comparar los datos (OECD/UNCDF, 2020[29]). Además, los BMD y las IFD también recaban datos sobre financiamiento mixto, otorgando importancia a la combinación de financiamiento en condiciones favorables de donantes o terceros junto con el financiamiento normal por cuenta propia y/o el financiamiento comercial de otros inversores (IFC, 2023[49]).

Otra preocupación crucial que suscita el modelo de financiamiento mixto es el riesgo de que los fondos públicos se desvíen de los países más pobres, que resultan menos atractivos para los inversores privados debido a los mayores riesgos percibidos y al menor potencial de rentabilidad (Attridge y Engen, 2019[39]). Esto podría agravar las desigualdades entre países y en el seno de estos. También hay inquietud por la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones de financiamiento mixto (Hausmann, 2023[50]). Dado que los actores públicos y privados tienen diferentes estructuras de rendición de cuentas y normas de divulgación de información, esto podría complicar el seguimiento de la utilización de los fondos y la garantía de que contribuyen al desarrollo sostenible (Oxfam/Eurodad, 2017[51]). En cuanto a la transparencia y el acceso público a la información, también es crucial garantizar la participación de la sociedad civil y los actores locales en la supervisión y en la exigencia de responsabilidades (Capítulos 2 y 4). Asimismo, el financiamiento mixto entraña el reto de garantizar que las necesidades y motivaciones del sector privado no releguen a un segundo plano los objetivos y resultados del desarrollo (Attridge y Engen, 2019[39]). El financiamiento mixto debe basarse en un análisis atento y ponderado del impacto de las alianzas, garantizando al mismo tiempo que las hipótesis sobre las partes implicadas estén respaldadas por la evidencia disponible (Oxfam, 2019[52]). Por lo tanto, los proyectos de financiamiento mixto deben evaluarse tanto a corto como a largo plazo, asegurando además su transparencia a través del acceso público a su información.

Alianzas internacionales para garantizar mejores inversiones en ALC

Las alianzas internacionales juegan un papel importante en ALC no solo para movilizar mayores recursos del sector privado, sino también para que las inversiones tengan mejores impactos socioeconómicos. Un reto clave para los países de ALC reside en lograr una transformación productiva sostenible a través de una transición justa, verde y digital. Esto es importante en el contexto de los problemas estructurales y sistémicos de crecimiento económico de la región, que se han visto exacerbados por la pandemia de COVID-19, la inflación y las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales (Capítulo 1).

Los desafíos de ALC para atraer IED de calidad pueden atribuirse (en gran parte) a tres factores principales: falta de infraestructuras adecuadas; carencias de cualificación y educación en comparación con otras regiones; y retrasos en investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica. En conjunto, estos factores pueden limitar el atractivo de la región para los sectores intensivos en conocimiento (Capítulo 3). A causa de la caída de

la IED (en relación con el PIB), es posible que ALC haya perdido entre 0.08 y 0.64 puntos porcentuales de crecimiento del PIB per cápita al año entre 2013 y 2020 (Capítulo 2) (Maloney et al., 2023[53]).

Las ventajas comparativas de ALC —en generación de energía sostenible, materias primas necesarias para las industrias verdes emergentes y su capital natural único— ofrecen una nueva fuente potencial de crecimiento. No obstante, su aprovechamiento exigirá políticas que faciliten el acceso a los mercados mundiales, al capital y a la tecnología. La eficacia de la inversión extranjera en estos sectores prometedores podría depender de varios factores. Por ejemplo, una mejor capacidad de absorción de inversión está relacionada con una mayor productividad de la IED, un capital humano más rico, sistemas financieros más sólidos, mejor calidad institucional y estabilidad de los sistemas regulatorios y políticos (Maloney et al., 2023[53]).

Las alianzas internacionales pueden jugar un papel importante en la captación de IED de calidad para la región. Mediante la puesta en común de experiencia, conocimientos y recursos, los países de ALC pueden dar respuesta a necesidades regionales críticas, por ejemplo, estimulando una transformación productiva en todas las economías o creando vínculos progresivos en las cadenas de valor de forma más integral. Normalmente, se considera que una IED de calidad es una inversión que va más allá de la mera contribución financiera y desemboca en resultados sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales. La calidad de la IED se mide por su contribución al fomento de la productividad y la innovación, el empleo, la calidad de los puestos de trabajo, las cualificaciones y la igualdad de género, además de por su papel en la reducción de la huella de carbono (OECD, 2019[54]) (Capítulo 2). Asimismo, el *nearshoring* puede ayudar a atraer IED al ofrecer una combinación de rentabilidad, proximidad y ventajas estratégicas que atraen a las empresas que buscan operaciones globales eficientes y receptivas.

La inversión extranjera en los países de ALC ya ha tenido efectos positivos en términos de productividad, innovación, inversión en I+D y salarios reales (Capítulo 2). Sin embargo, es preciso proseguir los esfuerzos para atraer IED de calidad y así promover un modelo de transformación inclusivo y sostenible. Los socios para el desarrollo están llamados a desempeñar un papel clave. El documento de referencia de la OCDE "Guía de Cualidades de la IED para la Cooperación al Desarrollo" proporciona un marco para reforzar el papel de la comunidad de cooperación al desarrollo en la movilización de IED y la mejora de su impacto en los países en desarrollo (OECD, 2022[30]).

Enfocarse en tres objetivos principales puede ayudar a las alianzas internacionales a movilizar más y mejores inversiones. En primer lugar, estas alianzas pueden esforzarse por crear un entorno propicio que atraiga y facilite inversiones que impulsen la transformación productiva de la región. En segundo lugar, pueden fomentar que instituciones como los BMD y las IFD se alineen y colaboren entre sí para mejorar la coordinación y la eficacia. En tercer lugar, pueden promover el desarrollo local a través de medidas como requisitos de contenido local que refuercen las economías y las cadenas de valor locales, así como alineando su apoyo con las estrategias de desarrollo de cada país (Tabla 5.1).

Tabla 5.1. **Mecanismos internacionales para garantizar mejores inversiones**

Objetivo	Instrumento existente o potencial	Descripción
Crear un entorno propicio	Normas y marcos internacionales	Establece un entorno y un entendimiento común de la debida diligencia para los inversores y la movilización de capital privado.
	Tratados internacionales de inversión	Compromete a las partes contratantes a proporcionar a los inversores extranjeros determinadas normas de trato.
	Capacitación y transferencia de tecnología	Apoya a los gobiernos en: i) el diseño de estrategias coherentes de atracción de inversiones y transformación productiva mediante la formación en sectores estratégicos; ii) la evaluación y el seguimiento del impacto de las inversiones en la creación de empleo; y iii) la mejora de la transparencia y los estándares. Garantiza el compromiso del sector privado de invertir en educación y formación. Asegura la transferencia de tecnología al invertir en sectores específicos, desarrollando los eslabones superiores de la cadena de valor en sectores estratégicos clave.
Fomentar el alineamiento entre instituciones	Plataformas de coordinación entre instituciones	Articula instrumentos e instituciones de desarrollo y otros, aumentando las sinergias entre los actores públicos que intervienen en las políticas de desarrollo y los actores públicos que apoyan iniciativas comerciales (p. ej., agencias de promoción de la inversión [API], agencias de crédito al comercio y a la exportación). Coordina los esfuerzos de los BMD y las IFD que operan en ALC, evitando así solapamientos y generando sinergias dentro de los países y en sectores estratégicos. Promueve el diálogo entre empresas y gobiernos, lo que permite recibir comentarios y observaciones sobre las políticas y los obstáculos a la inversión.
Impulsar el desarrollo local	Plataformas para alinear las inversiones a las prioridades nacionales	Asiste a las API nacionales y locales y a las instituciones financieras locales para que el financiamiento sostenible esté en sintonía con las prioridades nacionales. Brinda apoyo a sectores estratégicos en coordinación con las estrategias nacionales de desarrollo, con el fin de alinear a todas las partes relevantes. Garantiza la participación de la sociedad civil y los actores locales en el seguimiento de los proyectos para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
	Requisitos de contenido local	Refuerza el desarrollo de las cadenas de suministro locales y aumenta la productividad laboral.

Fuente: Elaboración de los autores.

Desarrollar un entorno propicio para atraer más y mejores inversiones

Establecer condiciones y marcos favorables puede animar tanto a los inversores nacionales como a los extranjeros a asignar sus recursos en un determinado país o región. Esto incluye la adopción de políticas y regulaciones que promuevan la transparencia, la previsibilidad y la protección jurídica de los inversores. También implica atenerse a las normas y mejores prácticas internacionales en ámbitos como la gobernanza, la protección ambiental y los derechos laborales. Además, supone adherirse a los tratados internacionales de inversión para ofrecer salvaguardias e incentivos adicionales a los inversores.

Alinear los marcos nacionales con las normas internacionales puede favorecer las inversiones sostenibles en ALC. Al adherirse a los principales instrumentos internacionales, como el Acuerdo de París, los convenios fundamentales de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a instrumentos internacionales sobre conducta empresarial responsable, los gobiernos pueden proteger el interés público de posibles consecuencias negativas de las actividades empresariales (OECD, 2016[55]). Garantizar una conducta empresarial responsable puede atraer a inversores responsables, mitigando los riesgos de posibles impactos adversos de las inversiones, y puede promover el desarrollo sostenible más ampliamente (OECD, 2018[56]).

Hasta la fecha, 50 países, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay, se han adherido a la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable (OECD, 2022[57]). Esta Guía proporciona recomendaciones no vinculantes diseñadas para ayudar a las empresas a gestionar el riesgo y promover impactos positivos en aspectos relacionados con la protección ambiental, los derechos humanos, los derechos laborales, el soborno y la corrupción, y otras cuestiones relativas al desarrollo sostenible. También pretende promover un entendimiento común entre

los gobiernos y otras partes interesadas sobre debida diligencia en materia de conducta empresarial responsable (Tabla 5.2) (OECD, 2018[56]). En los últimos tiempos, la legislación sobre debida diligencia obligatoria en los ámbitos de conducta empresarial responsable y de derechos humanos ha recibido un impulso creciente, con el fin de garantizar que las empresas apliquen la debida diligencia en ambos frentes (OECD, 2022[58]; OHCHR, 2023[59]). Algunos ejemplos son la ley francesa sobre el Deber de Vigilancia y la propuesta en 2022 de una ley para toda la UE (Business & Human Rights Resource Centre, 2023[60]). Estos pasos hacia una legislación en materia de debida diligencia obligatoria pueden desembocar en la imposición de nuevos requisitos a las empresas, protegiendo así al público de posibles repercusiones negativas de las actividades empresariales.

Tabla 5.2. **Elementos clave de la Guía de la OCDE de Debida Diligencia**

Temas	Recomendaciones
Derechos humanos	Ofrece recomendaciones sobre el modo en que las empresas pueden respetar los derechos humanos, incluyendo cuestiones como el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la libertad de asociación; se basa y está en sintonía con el Marco de las Naciones Unidas para Proteger, Respetar y Remediar y con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Empleo y relaciones laborales	Se centra en el papel que juega la debida diligencia en el fomento de la observancia por parte de las empresas multinacionales de las normas internacionales en materia laboral elaboradas por la OIT.
Responsabilidad medioambiental	Insta a las empresas a identificar y gestionar los riesgos ambientales, tomar medidas para mitigar la contaminación y dar respuesta a los efectos del cambio climático en sus operaciones y cadenas de suministro.
Lucha contra el soborno, la petición de soborno y la extorsión	Anima a las empresas a actuar en favor de la igualdad de condiciones en todo el mundo luchando por erradicar el soborno.
Divulgación de información	Alienta a las empresas a difundir información sobre sus esfuerzos en materia de debida diligencia y a comunicar a las partes interesadas su conducta empresarial responsable.

Fuente: Elaboración de los autores con base en (OECD, 2018[56]).

La consideración de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la toma de decisiones financieras es un aspecto crucial que está ganando importancia en ALC (Capítulo 4). El financiamiento procedente de bancos, fondos de capital riesgo, instituciones financieras multilaterales e inversores institucionales está cada vez más vinculado a criterios ASG (Beeber, Li y Schulz, 2022[61]). Las taxonomías ASG, es decir, los criterios para evaluar qué inversiones se consideran sostenibles desde el punto de vista ambiental o social, constituyen un claro ejemplo de ello (UNCTAD, 2022[62]). Proporcionan directrices para clasificar las inversiones en función de sus características ASG. Actualmente existen taxonomías a escala mundial y regional para contribuir al desarrollo de los mercados de inversión. Muchas son el resultado de asociaciones entre países de una misma región y otras instituciones. La Taxonomía Verde de Colombia, por ejemplo, se desarrolló con el apoyo del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial, 2022[63]; Capítulo 4).

La adopción de normas comunes será imprescindible para proteger la Amazonia, un ecosistema compartido por ocho países de ALC. Al establecer normas para los proyectos, los países pueden garantizar una actividad empresarial responsable y de ese modo minimizar las repercusiones ambientales y sociales. En 2023, el BID lanzó Amazonia Siempre, un programa paraguas que reúne a las principales partes implicadas para fortalecer la planificación y ejecución de proyectos en la región amazónica (BID, 2023[64]). A través de esta plataforma, los socios pueden compartir conocimientos e innovaciones con base empírica y aprovechar su experiencia especializada para apoyar el desarrollo de políticas, así como mejorar la colaboración y coordinación a nivel regional. En el contexto de Amazonia Siempre, el BID y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) pusieron en marcha la Coalición Verde para promover iniciativas de desarrollo sostenible colaborativas entre los bancos de desarrollo de los países de la cuenca amazónica (BID, 2023[65]). Esto ha aumentado la escala y el impacto de los proyectos en la región amazónica, sin menoscabo

del respeto a las características locales y regionales. Al establecer estas plataformas de prácticas compartidas y normas comunes, los países pueden mitigar los conflictos relativos al uso de la tierra, la extracción de recursos y el desarrollo de infraestructuras, además de proteger el ecosistema amazónico, la biodiversidad y las comunidades locales.

Los marcos internacionales orientados específicamente a las infraestructuras también contribuyen a crear un entorno propicio para las inversiones en sectores estratégicos relacionados con la transformación productiva. Estos marcos pueden permitir a los países de ALC garantizar la calidad de las inversiones en infraestructura. La región ha experimentado un descenso persistente de las inversiones en infraestructura desde la década de 1990. Por ello, en la actualidad los países están estudiando medidas que garanticen la calidad de la IED. Los Principios del G20 para una Inversión en Infraestructuras de Calidad (QII, por sus siglas en inglés), que son voluntarios y no vinculantes, pretenden ayudar a los países a maximizar el impacto positivo de la infraestructura con el fin de lograr un crecimiento y desarrollo sostenibles (OECD, 2023[66]). Estos principios aportan un marco para subsanar el déficit de infraestructura, garantizando al mismo tiempo inversiones en infraestructura de calidad que promuevan un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado. Chile ha sido un ejemplo de éxito en términos de instituciones, procesos y marcos regulatorios sólidos para las inversiones en infraestructura de calidad, a menudo en consonancia con las buenas prácticas y normas internacionales (OECD, 2021[67]).

El diálogo y el intercambio en materia de políticas públicas también desempeñan un papel importante en el fomento de las inversiones, al crear un entorno propicio para los inversores a través del desarrollo de políticas transparentes, estables y favorables. Estos procesos generan confianza entre los inversores y los responsables de formular políticas, atrayendo en última instancia capitales que pueden impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Las redes regionales de la OCDE en ALC ofrecen a los países miembros una vía para entablar debates constructivos sobre políticas, facilitando el diálogo entre los responsables de formular políticas públicas, los expertos y las partes interesadas para así poder intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas (Recuadro 5.3).

Recuadro 5.3. **Redes regionales de políticas públicas: su contribución a un entorno propicio para las inversiones**

Las redes regionales de políticas públicas de la OCDE para América Latina y el Caribe (OCDE-ALC) cumplen una función crucial en la promoción de un entorno favorable a las inversiones en toda la región. Estas redes actúan como plataformas de intercambio de conocimientos que reúnen a responsables de formular políticas públicas, expertos y partes interesadas de diversos sectores para colaborar en la elaboración de políticas que promuevan la inversión, la integridad, la regulación, la competencia y un gobierno corporativo eficaz. Al fomentar la cooperación y el diálogo transfronterizos, estas redes facilitan el intercambio de buenas prácticas, experiencias y conocimientos basados en datos, que son esenciales para crear marcos sólidos que atraigan y preserven inversiones en la región de ALC.

En lo que respecta a la inversión, estas redes permiten a los países miembros poner en común sus conocimientos colectivos y elaborar estrategias para atraer inversiones nacionales y extranjeras. A través de las experiencias compartidas, los países participantes pueden diseñar políticas bien orientadas que aborden los retos en materia de inversión, reduzcan las barreras y proporcionen normas transparentes y predecibles para los inversores. Por ejemplo, el compromiso con la integridad garantiza la implementación de medidas anticorrupción, reforzando la confianza de los inversores y salvaguardando sus intereses. Al colaborar en los marcos regulatorios, las redes ayudan a los países miembros a desarrollar procesos eficientes y agilizados que estimulan el

Recuadro 5.3. **Redes regionales de políticas públicas: su contribución a un entorno propicio para las inversiones** *(cont.)*

crecimiento del tejido empresarial sin perjuicio de la observancia de los estándares necesarios. El énfasis en la competencia leal promueve el dinamismo económico, la innovación y la eficiencia, contribuyendo así a crear un entorno atractivo para los inversores en busca de mercados pujantes. Además, las directrices de las redes sobre prácticas de gobierno corporativo fomentan una conducta empresarial responsable, que no solo atrae a los inversores, sino que también fortalece el ecosistema empresarial general en la región de ALC. Por último, la red sobre iniciativa fiscal facilita los debates sobre responsabilidad fiscal, transparencia y asignación eficaz de recursos. Esta red ayuda a los países miembros a diseñar políticas fiscales que creen el espacio fiscal necesario para realizar inversiones públicas, preservando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica.
Fuente: (OECD, 2023[68]).

Asimismo, los países de ALC han recurrido a los Tratados Internacionales de Inversión (TII) —también llamados Acuerdos Internacionales de Inversión— como mecanismo para reducir la incertidumbre de los inversores. Dichos tratados exigen a las partes contratantes que respeten determinadas normas de trato hacia los inversores extranjeros (OECD, 2016[55]). El objetivo general de los TII es promover las inversiones mediante la concesión de ciertas protecciones y ventajas a los inversores extranjeros, incluido el recurso a la solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) para resolver disputas con los Estados receptores. En términos generales, los TII pretenden aportar cierto grado de certidumbre y seguridad a los inversores, reduciendo los riesgos que perciben y fomentando la inversión. Sin embargo, en la última década se han producido más rescisiones de TII que ratificaciones de otros nuevos. En 2021, por ejemplo, se puso fin a 86 TII, pero solo se suscribieron 13, con lo que el número total de acuerdos se situó en 3 288 (UNCTAD, 2022[62]). En junio de 2023, los países de ALC habían firmado un total de 706 tratados relacionados con la inversión internacional (Gráfico 5.7).

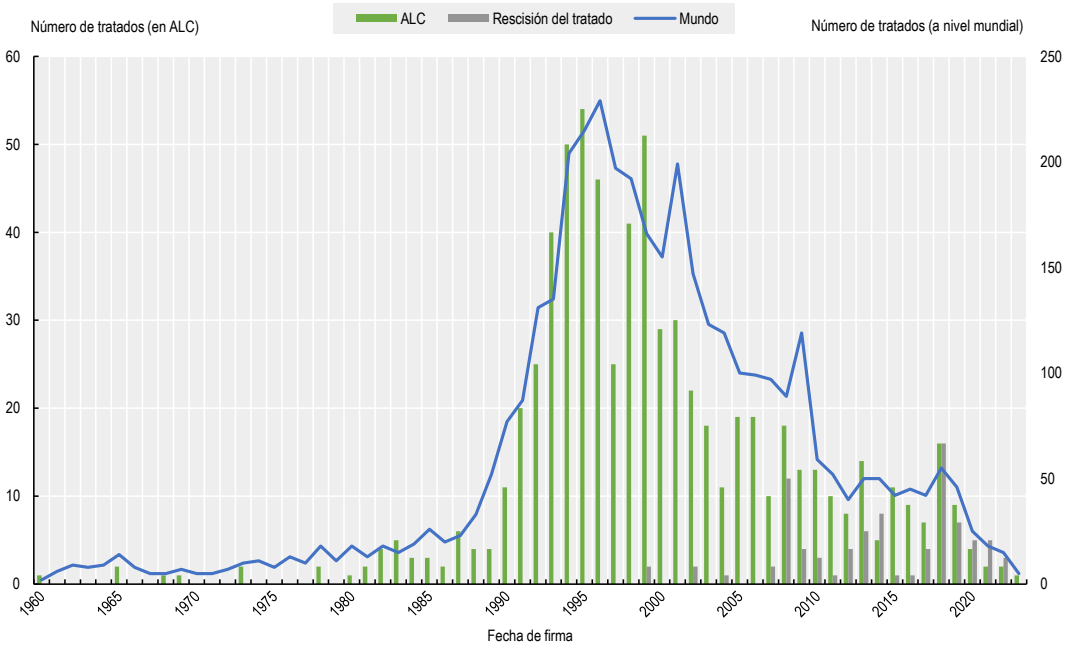
El diseño y la negociación de los TII son procesos complejos y dinámicos, y estos tratados tienen tanto detractores como defensores (Dixon y Haslam, 2016[69]). Muchos de estos tratados se diseñaron hace décadas, cuando la estructura económica mundial era distinta y las preocupaciones eran otras. Sus defensores argumentan que proporcionan a los inversores las protecciones necesarias para fomentar los flujos de capital, mientras que sus detractores sostienen que los TII pueden restringir el margen de maniobra de las políticas públicas de los países receptores y erosionar su capacidad para regular en función del interés público. A pesar de estas opiniones opuestas, se siguen firmando TII en ALC. Por lo tanto, es esencial garantizar que los nuevos TII se propongan una agenda política de desarrollo favorable a todas las partes y a la transformación productiva de la región. Esto requiere marcos regulatorios transparentes para los flujos de inversión.

Los retos actuales —como el cambio climático, el cumplimiento de los ODS y la recuperación pospandémica— tienen carácter mundial y repercusiones locales. Por ello, únicamente pueden afrontarse a través de la cooperación internacional. Los tratados de inversión establecen foros que permiten a los países abordar de forma colectiva cuestiones transnacionales complejas. Contar con TII bien diseñados que protejan los intereses comunes y defiendan las normas y estándares internacionales puede ayudar a los países a dar respuesta a estos retos globales (Gaukrodger, 2021[70]). Por ejemplo, en las recientes revisiones de los acuerdos de la UE con Chile y México se han introducido disposiciones sobre comercio electrónico, sostenibilidad ambiental, normas laborales, igualdad de género y apoyo a las pequeñas empresas. Estos acuerdos también brindan un marco

contemporáneo para la inversión extranjera y la resolución de litigios, fomentando la inversión en sectores vitales para un crecimiento sostenible e inclusivo. Con el tiempo, una base común de acuerdos similares con la Unión Europea podría facilitar la armonización de las diversas iniciativas de integración económica en la región de ALC (CEPAL, 2023[71]).

Los tratados de inversión se están reformulando en el contexto actual para garantizar que tengan en cuenta los nuevos estándares sociales y medioambientales. Los temas que se están reconsiderando tienen que ver con el cambio climático, la recuperación pospandémica y la transformación digital, así como la forma de resolver las disputas sobre los acuerdos existentes. Están surgiendo nuevos planteamientos que podrían propiciar mejores resultados en cuestiones relacionadas con la asignación eficiente del capital, la regulación en aras del interés público y la promoción del desarrollo sostenible. A este respecto, cabe destacar recomendaciones para: i) garantizar que los tratados contribuyan al desarrollo sostenible y no obstaculicen la regulación legítima por el interés público; ii) proporcionar un marco que apoye la apertura del mercado, facilite la inversión y promueva una conducta empresarial responsable; iii) considerar una gama más flexible de procedimientos y recursos a la hora de implementar los tratados; y iv) examinar qué cuestiones pueden abordarse mejor en los tratados y cuáles pueden regularse más eficientemente a través de legislación nacional, directrices internacionales u otras herramientas (Gaukrodger, 2021[70]). Otras novedades destacables de los últimos años son la celebración de acuerdos económicos regionales de nueva generación, la rescisión de tratados bilaterales de inversión y los debates multilaterales sobre la reforma de los mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (UNCTAD, 2022[62]). En el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en julio de 2023 concluyeron con éxito las negociaciones plurilaterales encaminadas a alcanzar un nuevo acuerdo sobre facilitación de las inversiones para el desarrollo. Más de 110 miembros de la OMC participaron en las conversaciones, entre ellos un gran número de países de ALC.

Gráfico 5.7. **Número de TII firmados y terminados en ALC y en el mundo, 1960-2023**



Nota: Entre los tipos de acuerdos se incluyen los tratados bilaterales de inversión (TBI) y los tratados con disposiciones en materia de inversión (TIP). Fecha de firma comprende los tratados en negociación, firmados, en vigor y terminados.
Fuente: (UNCTAD, 2023[72]).

StatLink https://stat.link/vmpkx4

Las condiciones internas también contribuyen decisivamente a la inversión. Los socios para el desarrollo pueden ayudar a fortalecer las potencialidades de las empresas y los trabajadores a nivel nacional mediante el apoyo al desarrollo de capacidades locales, impulsando así la transformación productiva de la región de ALC y fomentando el desarrollo económico sostenible. Las iniciativas de capacitación centradas en fomentar mejoras del capital humano, como los programas de formación y la adecuación de competencias en sectores en transición, contribuirán a atraer IED y a promover impactos positivos en ALC (OECD, 2022[30]). Esto implica identificar sectores estratégicos con alto potencial de creación de empleo y crecimiento que permitan alinear la inversión con los objetivos de transformación productiva. A su vez, estos sectores estratégicos deberían estar en sintonía con los priorizados por los países de la región y sus territorios en el marco de sus políticas de desarrollo productivo. A través de la inversión en centros de formación profesional e institutos de I+D, ALC puede dotar a los trabajadores de las competencias y los conocimientos necesarios para formar parte de cadenas de alto valor e impulsar la descarbonización, la productividad y la innovación, así como la calidad del empleo y la igualdad de género (OECD, 2022[30]). Por ejemplo, con el fin de apoyar la investigación de la región en bases de datos genómicas, el Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI) colaboró con nueve institutos de investigación de América Latina en 2017 para poner en marcha el proyecto Cabana (Stroe, 2017[73]). Cabana, financiado por el Global Challenges Research Fund, tiene como objetivo acelerar la implementación de la biología basada en datos en la región de ALC mediante programas de desarrollo de capacidades que formarán a los diversos colectivos del ámbito de las ciencias biológicas y biomédicas de América Latina (CABANA, 2023[74]).

Fomentar una mayor alineación entre los agentes relacionados con la inversión aumentará su eficacia

Las finanzas y las políticas de los BMD y otros actores internacionales están recuperando protagonismo en los debates sobre el financiamiento del desarrollo. La obtención de los recursos necesarios para avanzar hacia los ODS sigue siendo un gran reto, ya que los países en desarrollo se enfrentan a un creciente déficit de financiamiento que se estima en 4.2 billones de USD al año en sectores clave para el desarrollo sostenible (Joint SDG Fund, 2023[75]). Los bancos de desarrollo multilaterales y públicos resultan cruciales en este contexto, ya que en conjunto gestionan 23 billones de USD en activos y proporcionan anualmente más de 2.7 billones de USD en financiamiento para el desarrollo (FICS, 2022[76]). Los BMD pueden aumentar su contribución al financiamiento del desarrollo sostenible ampliando su capacidad de préstamo y mejorando su eficacia a la hora de abordar los retos mundiales, por ejemplo, adoptando normas comunes y coordinándose mejor como sistema, inclusive con otras instituciones financieras como las IFD (Bilal, 2021[77]).

El problema de la coordinación entre los BMD y las IFD se deriva principalmente del solapamiento de sus funciones y responsabilidades, así como de la naturaleza heterogénea de sus operaciones. Aunque en ambos casos el objetivo es promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo, los enfoques, cometidos y mecanismos de financiamiento suelen diferir, y ello plantea problemas de coordinación. Los BMD conceden principalmente préstamos, subvenciones y asesoramiento sobre políticas a los gobiernos, mientras que las IFD se centran en financiar proyectos del sector privado mediante inversiones de capital, préstamos, garantías o asistencia técnica. Los distintos mecanismos de financiamiento pueden dar lugar a diferencias en la selección de proyectos, la tolerancia al riesgo y los criterios de evaluación. Coordinar planteamientos de financiamiento diferentes puede resultar complicado, sobre todo a la hora de llevar a cabo proyectos conjuntos o acuerdos de cofinanciamiento. Una coordinación eficaz requiere el intercambio oportuno de información, experiencias y buenas prácticas. Sin embargo,

puede que los BMD y las IFD tengan diferentes modelos de presentación de información, requisitos en materia de datos y marcos de evaluación, que dificulten el intercambio de información relevante. Un intercambio insuficiente de conocimientos puede hacer que se pierdan oportunidades de colaboración y obstaculizar el uso eficiente de los recursos.

Mediante la firma de acuerdos de cofinanciamiento, los BMD y las IFD tienen la oportunidad de mitigar los problemas de coordinación y ampliar el volumen de cofinanciamiento. Estos acuerdos son fundamentales para movilizar recursos en favor de proyectos de desarrollo, ya que contribuyen a reducir los costos de transacción y los plazos de tramitación. Por ejemplo, el BID ha suscrito acuerdos de cofinanciamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Comisión Europea, el BEI y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el fin de agilizar los procedimientos de cofinanciamiento y definir a priori los términos y condiciones de los proyectos cofinanciados. En este sentido, los acuerdos de cofinanciamiento pueden contribuir a movilizar mayores inversiones y multiplicar el impacto de las iniciativas de desarrollo.

Otra dimensión importante es la mejor articulación y explotación de las sinergias entre los agentes internacionales del desarrollo, como los BMD, las instituciones financieras internacionales (IFI) y los agentes públicos que apoyan los esfuerzos comerciales, tales como las agencias de crédito a la exportación (ACE), las entidades comerciales y las agencias de promoción de inversiones (API). Las API promueven las ventajas del país, oportunidades de negocio e incentivos a través de iniciativas de comercialización y de la colaboración con los departamentos gubernamentales pertinentes, fomentando un entorno favorable para los inversores. Entre 2002 y 2018, el número de API nacionales y subnacionales pasó de 112 a 170 en todo el mundo (Steenbergen, 2023[78]). Las API no solo apoyan el desarrollo de una economía atractiva para la inversión, sino que además contribuyen a garantizar que la IED tenga una incidencia positiva en el desarrollo de las zonas más pobres, fomentando la transferencia de competencias y la creación de empleo, y mejorando la competitividad global de la región en cuestión (OECD, 2020[79]). Los agentes que trabajan en el ámbito del desarrollo desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la coordinación entre los distintos actores, contribuyendo con ello a la posibilidad de expandir la ayuda y a una mayor coherencia con las prioridades nacionales.

Las plataformas de colaboración existentes podrían ponerse al servicio de la coordinación a gran escala en aras de la transformación productiva. CooperaNet —un espacio virtual de intercambio en temas de cooperación gestionado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)— facilita la cooperación regional y la asistencia técnica a través de la cooperación horizontal y Sur-Sur entre los Estados miembros de la OEA, así como con el sector privado, expertos sectoriales, la sociedad civil, fundaciones, organizaciones internacionales y otros (OAS, 2023[80]). CooperaNet recoge actualmente 214 ofertas de cooperación de 7 Estados miembros de la OEA, 20 ofertas de cooperación de socios de desarrollo de la OEA y 10 necesidades de 8 países en las áreas de innovación tecnológica, agricultura sostenible, seguridad alimentaria, conservación del entorno natural, comunidades sostenibles, gestión de riesgos, energías renovables, mipymes, educación e igualdad de género. Otro mecanismo de coordinación es la Arquitectura Financiera Europea para el Desarrollo (EFAD), una red de instituciones que comprende Estados miembros de la UE, IFD, bancos públicos de desarrollo, organismos de ejecución, BMD y agentes privados. La coordinación entre las iniciativas de desarrollo y los actores públicos orientados al comercio abre la posibilidad de que las entidades privadas participen de forma más eficaz y a mayor escala (Bilal y Karaki, 2023[81]).

La IED, alineada con las estrategias nacionales, puede impulsar el desarrollo local sostenible

Además de proporcionar capital, la IED puede ser portadora de tecnología y conocimientos valiosos para las empresas locales, y contribuir así a la transformación de la producción.

Un planteamiento relevante desde el punto de vista de los socios para el desarrollo consiste en alinear en la mayor medida posible la IED a las prioridades nacionales, según se definen, por ejemplo, en las políticas de desarrollo productivo de los países. Apoyar y reforzar las API y las instituciones financieras nacionales y locales puede facilitar la coordinación con los objetivos de desarrollo sostenible del país. Dotadas de mayor capacidad y alcance, estas instituciones pueden contribuir decisivamente a atraer inversiones extranjeras que se ajusten a las estrategias nacionales de desarrollo, centrando la atención en sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento.

Otra fórmula para promover el desarrollo local y el impacto social de la inversión extranjera consiste en establecer requisitos de contenido local (RCL). La incorporación de RCL en los acuerdos de inversión puede amplificar el impacto transformador de la IED desde el punto de vista social y económico. Estos requisitos incentivan a las empresas extranjeras a colaborar e invertir en empresas locales, lo que favorece una valiosa transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de competencias. Esto puede suponer una importante contribución a la dinamización de la economía local y generar beneficios sostenibles a largo plazo para todo el país.

Los incentivos asociados a los RCL pueden resultar vitales para reforzar el desarrollo de las cadenas de suministro locales e impulsar la productividad de la mano de obra, por ejemplo, en las industrias verdes. Una muestra es la expansión con gran éxito del sector de la energía solar y eólica en Uruguay y Brasil. En 2009, Uruguay convocó una licitación para ampliar pequeños parques eólicos, en la que se exigía un 20% de contenido local, un 80% de contratación local y que el centro de control se ubicara en Uruguay. Esta iniciativa no solo proporcionó empleo de calidad con el que expandir el sector de las energías renovables, sino que también benefició a la industria manufacturera uruguaya gracias a los requisitos de contenido local. Por otro lado, Brasil puso en marcha en 2002 el Programa de Incentivos a las Fuentes Alternativas de Electricidad, con un requisito de contenido local del 60%. El programa sirvió de revulsivo para la cadena de suministro nacional y supuso el nacimiento de más de 300 empresas; en 2014, el contenido local utilizado en el sector brasileño de generación de energía eólica fue del 89% (IDB/ILO, 2020[82]).

Ahora bien, el éxito de los RCL depende de que se compensen mayores costos de producción locales con unos instrumentos de política pública adecuados. Los buenos resultados de los RCL no están garantizados, y la evidencia disponible sobre la mejor manera de aplicarlos no es unívoca (Hansen et al., 2019[83]). Las fuentes bibliográficas sugieren que los países con mejores resultados en este ámbito, tanto en ALC como en África, utilizan marcos sólidos de contenido local que están bien estructurados e integrados en la legislación del país, y que incluyen mecanismos claros de implementación y control (Mushemeza et al., 2017[84]).

Los ejemplos indican que los RCL funcionan mejor en países donde el nivel de competencias y capital humano es suficiente para adoptar nuevas tecnologías que mejoren la productividad local, aumentando así la eficiencia, al tiempo que se apoya el crecimiento nacional. Esto pone de manifiesto la necesidad de invertir más en formación y desarrollo de competencias y, en paralelo, ampliar las capacidades de las industrias existentes (Da Costa y Caicedo, 2023[85]).

Es importante tener en cuenta que las iniciativas para atraer IED deben ir acompañadas de medidas encaminadas a elevar la capacidad local de absorción de inversión, con el fin de garantizar que la IED resulte eficaz como mecanismo de transferencia de conocimientos y tecnología. Entre estas medidas cabe destacar la inversión en educación, el fortalecimiento de los marcos institucionales y el desarrollo de infraestructuras físicas, científicas y tecnológicas. Por lo tanto, es crucial establecer un marco integral que conjugue los esfuerzos para atraer IED con políticas de desarrollo productivo. Los socios para el desarrollo pueden apoyar los esfuerzos dirigidos a mejorar las políticas de desarrollo productivo a través de alianzas y de la cooperación internacional. Las actuaciones del programa mexicano *Sembrando Vida* en El Salvador y Honduras son un buen ejemplo de cómo la cooperación internacional contribuye a la transformación de la producción local (Recuadro 5.4).

Recuadro 5.4. **Cooperación internacional para la transformación de la producción: el programa mexicano *Sembrando Vida***

En la región de ALC se necesitan políticas internacionales de desarrollo audaces para ayudar a las comunidades más desfavorecidas. Una de estas iniciativas innovadoras es el proyecto *Sembrando Vida* del gobierno mexicano, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria en localidades rurales de bajos ingresos de Honduras y El Salvador mediante sistemas agroforestales que fomenten el autoconsumo y la venta de excedentes. En la actualidad, el programa brinda ayuda económica mensual a 10 000 pequeños productores en cada uno de estos países, así como apoyo en especie y asistencia técnica para fomentar la seguridad alimentaria.

Sembrando Vida incorpora en su diseño mecanismos de supervisión y seguimiento. En total se han construido 40 biofábricas en El Salvador y 232 en Honduras; en El Salvador se han montado también 300 sistemas de riego. En cuanto a los resultados, la plantación de hortalizas y árboles frutales y/o madereros ha aumentado por encima del 150%, y más del 90% de los beneficiarios declaran haber incrementado su producción. Los efectos indirectos positivos también son evidentes. Por ejemplo, *Sembrando Vida* también generó puestos de trabajo, ya que los beneficiarios contrataron a jornaleros. En cada país se crearon más de 20 000 puestos de trabajo adicionales. A su vez, la intención de emigrar se redujo en un 90% entre los beneficiarios.

Con esta iniciativa, México quiere contribuir a cambiar los modelos de desarrollo, así como ser líder de innovación y agente de transformación.

Fuente: (PNUD, 2022[86]).

El papel de la integración regional en la transformación productiva y el empleo

La integración regional en ALC juega un papel vital en la promoción de la diversificación productiva, el empleo y la industrialización. Los bloques comerciales regionales y subregionales pueden aumentar el tamaño de los mercados y la participación en las cadenas de valor regionales. Al crear un entorno que favorece la integración económica, una mayor escala de los proyectos y la cooperación entre los países miembros y los socios para el desarrollo, también pueden promover inversiones en ALC conducentes a la transformación productiva.

El comercio intrarregional y la integración productiva pueden impulsar el desarrollo sostenible

Es importante tener en cuenta que la organización de la actividad productiva traspasa las fronteras nacionales y que son numerosos los canales a través de los cuales la internacionalización puede impulsar la transformación productiva. La integración regional abre oportunidades para generar cadenas de valor más sofisticadas, resistentes y seguras. Para que los países de ALC puedan aprovechar estas oportunidades, son esenciales las políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y al comercio, así como el diálogo y la cooperación internacionales.

Un logro clave de la integración económica en ALC radica en su notable reducción de las barreras arancelarias, que hace que la entrada en el mercado regional resulte más atractiva para la IED. En 2019, el arancel medio impuesto al comercio dentro de la región era de tan solo un 2% (CEPAL, 2021[87]). El establecimiento de un marco normativo de reglas para el comercio y la IED es otro activo valioso.

Los bloques comerciales subregionales también pueden contribuir a armonizar las regulaciones y los estándares entre los países miembros. Alinear las regulaciones en materia de aduanas, fiscalidad, procedimientos de inversión y prácticas empresariales permite reducir las barreras para los inversores. Además, puede mejorar la transparencia y la previsibilidad, facilitando a las empresas el desarrollo de actividades e inversiones transfronterizas. Diversos bloques subregionales de ALC han logrado avances notables en la formulación de regulaciones relativas al comercio de servicios, la facilitación del comercio, la contratación pública, el tratamiento de la inversión extranjera y el comercio electrónico, entre otros temas relevantes. Dado que las fuentes bibliográficas indican que la integración regional tiene una repercusión positiva sobre la entrada de IED desde fuera de la región, un efecto indeterminado sobre la IED intrarregional y un impacto conjunto positivo sobre la atracción de IED, estas hipótesis deben analizarse caso por caso (Sánchez-Martín, de Arce y Escribano, 2014[88]).

Los países de ALC han establecido varios mecanismos de integración regional (Gráfico 5.8), aunque no todos comparten las mismas características y profundidad en lo que respecta a las políticas de liberalización. El Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (Caricom) se fundaron formalmente como uniones aduaneras. En ellas, a la liberalización interna de aranceles y barreras no arancelarias, en principio, debía sumarse un arancel exterior común. En la práctica, la implementación del arancel exterior común es muy heterogénea entre estos bloques. En cambio, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) son tratados de libre comercio, en los que los países firmantes han reducido los aranceles y las barreras no arancelarias al comercio interno y han coordinado otra serie de políticas (p. ej., contratación pública, servicios), pero mantienen su independencia en materia de aranceles externos (CAF, 2021[89]). La Alianza del Pacífico pretendía facilitar los flujos comerciales y de inversión con la región de Asia y el Pacífico. La integración de la Comunidad Andina, el Mercosur y el Mercado Común Centroamericano debe revitalizarse para abrir posibles vías de transformación productiva. La mejora de la coordinación entre los mecanismos de integración subregional ayudaría a superar la actual fragmentación del mercado de ALC y a consolidar las asociaciones a nivel internacional para seguir atrayendo inversiones a la región.

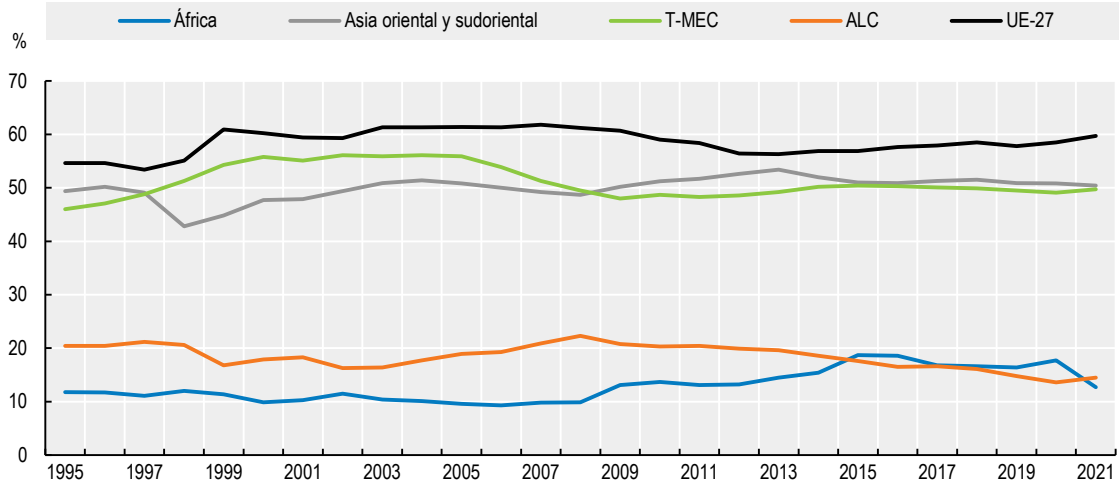
Gráfico 5.8. **Mecanismos de integración subregional de ALC**



Nota: El USMCA entró en vigor en julio de 2020 y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
Fuente: Elaboración de los autores con base en (CAF, 2021[89]).

Sin embargo, los acuerdos comerciales de ámbito regional no bastan para fomentar la integración productiva y comercial. A pesar de algunos avances —y salvo contadas excepciones—, los países de ALC muestran niveles de integración limitados. Esta tendencia se ha acentuado desde la década de 2010. En 2008, el peso del comercio intrarregional en el comercio total de bienes de ALC alcanzó un máximo del 22%, una cifra que, desde entonces, no ha dejado de disminuir. En 2021 se redujo al 15%, uno de los porcentajes de comercio intrarregional más bajos del mundo (Gráfico 5.9). En 2017, la cuota de los bienes importados por la región en las exportaciones totales de las principales economías de ALC fue, en promedio, de tan solo un 3% (Gráfico 5.10).

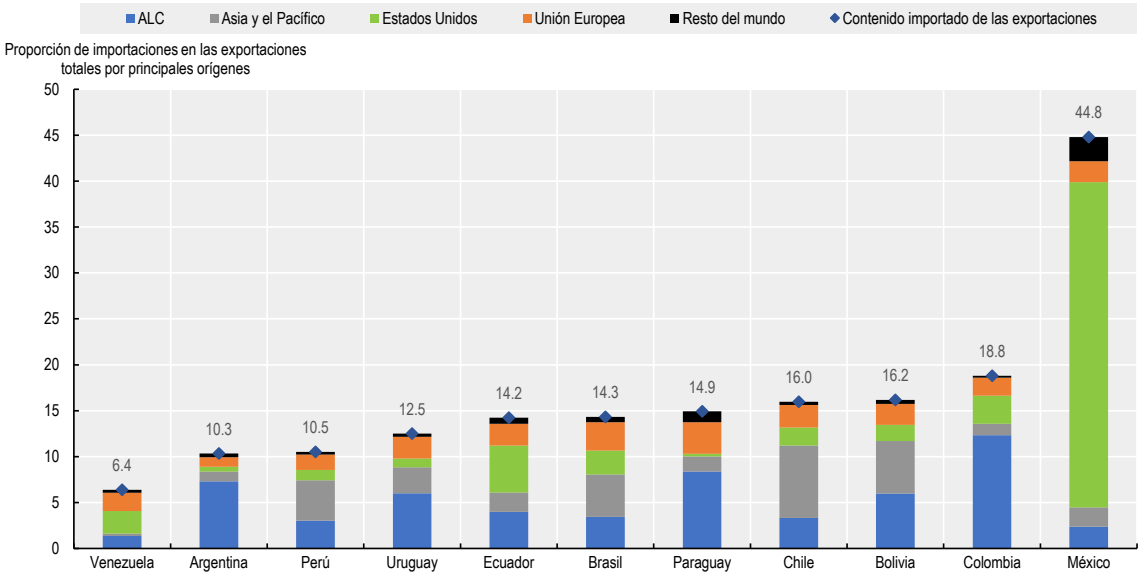
Gráfico 5.9. **Cuota de las exportaciones intrarregionales en las exportaciones totales de bienes, 1995-2021**



Nota: USMCA = Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.
Fuente: Elaboración de los autores con base en (UNCTADStat, 2023[90]).

StatLink https://stat.link/cf6ex7

Gráfico 5.10. **Estructura del contenido importado de las exportaciones, 2017**



Fuente: Elaboración de los autores con base en la matriz Insumo-Producto mundial 2017 (CEPAL, 2020[91]).

StatLink https://stat.link/39ig8c

El declive de la integración económica observado en la región de ALC desde mediados de la década de 2010 es preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que las tendencias mundiales emergentes van en sentido contrario. En respuesta a las fragilidades puestas de manifiesto por la pandemia de COVID-19 y las perturbaciones de origen geopolítico en las cadenas de valor mundiales, varios actores importantes de la economía mundial están promoviendo decididamente una mayor regionalización de sus redes comerciales y productivas. Su objetivo es elevar su autonomía estratégica en el aprovisionamiento de productos e insumos clave. En vista de esta evolución mundial, la revitalización de la integración regional en ALC es de suma importancia. No solo fomentará la diversificación de la producción y las exportaciones, sino que también aumentará la resiliencia frente a futuros reveses externos.

Son varios los factores que contribuyen a los bajos niveles de comercio intrarregional en ALC. En primer lugar, una complementariedad económica limitada, que se deriva de la similitud de las estructuras productivas de muchos de los países. Esto es especialmente notorio entre las naciones de América del Sur, que comparten abundantes recursos naturales. Además, la profunda integración de México en las cadenas de valor norteamericanas se ha traducido en una reducción del comercio con ALC. En 2021, ALC solo acogió el 4.4% de las exportaciones totales de México y representó el 3.5% de sus importaciones.

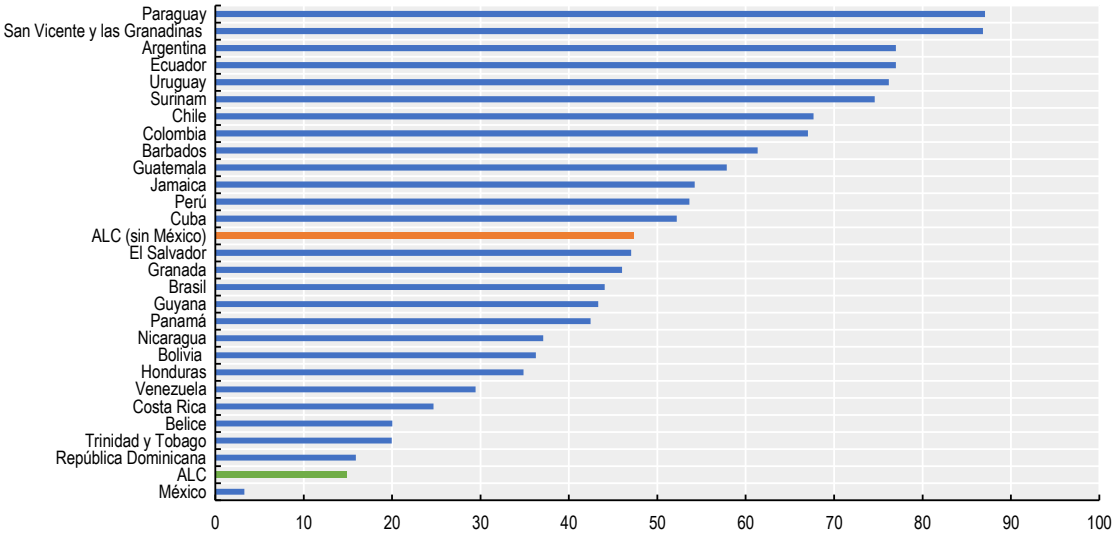
Estos retos se ven agravados por el importante déficit de infraestructuras de transporte y logística que sufre toda la región (Capítulo 2), lo cual obstaculiza la formación de redes productivas y acrecienta las dificultades asociadas a la vasta extensión territorial y la compleja topografía de ALC (Pérez y Sánchez, 2019[92]; CAF, 2021[89]). Además, persisten disparidades notables en las normas y regulaciones aplicables dentro de cada bloque subregional, como estándares técnicos y requisitos de etiquetado. Esta heterogeneidad aumenta los costos comerciales entre los distintos bloques, y ello afecta en particular a las pymes.

Existen otros factores que contribuyen de manera significativa a que los niveles de comercio intrarregional sean reducidos. Por ejemplo, aunque el arancel aplicado

al comercio intrarregional es bajo en promedio (en torno al 2%), sigue habiendo una liberalización arancelaria limitada (o parcialmente ausente) en las relaciones comerciales entre algunas economías clave de la región de ALC. En particular, esto es evidente en las relaciones entre México y países como Argentina y Brasil; América Central y varias naciones sudamericanas; y entre Caricom y el resto de la región. Otro aspecto destacable es la negociación de numerosos acuerdos de libre comercio con socios de fuera de la región, que ha intensificado la competencia para los fabricantes latinoamericanos. Esta competencia se ha acentuado aún más por la afluencia de productos manufacturados chinos en las dos últimas décadas, que ha dado lugar a cambios importantes en la producción regional en múltiples sectores (Durán Lima y Pellandra, 2017[93]).

A pesar de estos retos, el comercio intrarregional tiene un claro potencial positivo para la transformación del sector productivo, ya que representa una gran proporción de las exportaciones manufactureras de ALC. Si bien el mercado regional absorbió en 2021 el 15% de las exportaciones de bienes manufacturados en ALC, este porcentaje fue superior en todos los países para los que se dispone de datos, excepto México (Gráfico 5.11). Además, el comercio intrarregional abarca la gama más amplia de productos exportados (Anexo 5.A) e implica la mayor participación de empresas, en particular pymes (CEPAL, 2021[87]). Así pues, desempeña un papel vital a la hora de promover la diversificación productiva, el empleo y la industrialización.

Gráfico 5.11. **Participación de ALC en las exportaciones totales de manufacturas, 2021**



Nota: América Latina y el Caribe incluye 27 países. Las cifras de Cuba y Venezuela se han calculado a partir de estadísticas espejo.

Fuente: (UN Comtrade, 2023[94]).

StatLink https://stat.link/v9o3jf

El comercio intrarregional se caracteriza por una proporción de materias primas inferior a la de las exportaciones fuera de la región y suele implicar distancias más cortas, lo que refuerza su sostenibilidad ambiental y su papel estratégico en la industrialización. A su vez, una presencia de mipymes mayor en las exportaciones intrarregionales que en las extrarregionales contribuye a distribuir los beneficios de forma más equitativa. En suma, la falta de dinamismo que el comercio intrarregional de ALC ha mostrado en la última década dificulta el logro de una recuperación transformadora.

La región de ALC en su conjunto podría beneficiarse del fortalecimiento de los bloques de integración subregional, siguiendo el exitoso modelo de América Central

(Recuadro 5.5), donde se dan algunos de los niveles más altos de comercio intrarregional (en general, superiores al 25%). A continuación, se encuentra el Mercosur, que en realidad ha experimentado una disminución significativa de los flujos comerciales internos, pasando de un 20% a mediados de los noventa al 12% en 2015-18 (CAF, 2021[89]).

Recuadro 5.5. **América Central como ejemplo de integración regional**

América Central es un destacado ejemplo de integración regional por sus esfuerzos concertados para fomentar la cooperación regional y el desarrollo económico. La creación de instituciones como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Parlamento Centroamericano ha facilitado el diálogo, la coordinación y los procesos de toma de decisiones en toda la región. Además, los países centroamericanos han puesto en marcha iniciativas como el Mercado Común Centroamericano (MCCA) que promueven la libre circulación de bienes, servicios y personas, fomentando así el comercio y la inversión.

En el ámbito de la energía, América Central ha dado un gran paso adelante con la creación de un mercado regional de la electricidad y la culminación de las interconexiones físicas entre los seis países involucrados. El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, finalizado en 2014, es el mayor logro en este ámbito. La región también ha avanzado en la incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC) a los sistemas eléctricos, aumentando la capacidad de generación. Los países implicados han ampliado esta capacidad en la última década, y las ERNC ahora representan algo más del 20% de la generación total de electricidad (CAF, 2021[89]).

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) apoya el desarrollo del Corredor de Energía Limpia de Centroamérica (CECCA), una iniciativa regional que aboga por acelerar el desarrollo y el comercio transfronterizo de energía renovable en Centroamérica. La puesta en marcha de dicha iniciativa y sus actividades en el contexto regional tiene como objetivo apoyar la integración de mayores volúmenes de energías renovables en la red regional de transporte de electricidad. Este potencial es considerado atractivo por los países asociados que desean movilizar inversiones, como los de la Unión Europea (EUCA Trade, 2021[95]).

Hacia una nueva agenda de integración productiva en ALC

Para establecer cadenas de producción regionales económicamente viables, es crucial crear un mercado estable que combine una escala eficiente con la minimización de los costos de transacción asociados a la integración transfronteriza. Para lograrlo se necesitan iniciativas de integración que vayan más allá de los acuerdos existentes y fomenten la convergencia entre las distintas agrupaciones subregionales. Existen varias alternativas para avanzar en esta dirección, que difieren en cuanto a sus instrumentos, plazos, complejidades técnicas y consideraciones políticas, entre otros aspectos.

En la actualidad, la negociación de un acuerdo comercial a gran escala para ALC no parece revestir gran prioridad para la mayoría de los gobiernos de la región. En cambio, están adquiriendo relevancia otras iniciativas de integración regional y subregional, como el uso estratégico de sistemas nacionales de contratación pública, la armonización regulatoria y los acuerdos regionales de facilitación del comercio (CEPAL, 2022[96]). Un aspecto de la agenda de convergencia que podría potenciar enormemente las redes de producción intrarregionales es la armonización gradual o el reconocimiento mutuo

de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. Estos avances serían especialmente ventajosos para las pymes exportadoras, que a menudo tienen que hacer frente a requisitos regulatorios diferentes en los distintos mercados regionales. La armonización de las normas técnicas resulta fundamental para promover la integración productiva, especialmente en ámbitos críticos para la transición energética, como la electromovilidad.

Facilitar el comercio, es decir, agilizar y simplificar los trámites transfronterizos, es crucial en la promoción de la participación en las cadenas de valor tanto regionales como mundiales y en la internacionalización de las pymes. Los efectos positivos de las medidas de facilitación del comercio se amplifican cuando se extienden más allá de las fronteras nacionales y se convierten en iniciativas regionales. Al igual que otras regiones emergentes, ALC ha progresado desde 2019 en la simplificación y armonización de documentos, la automatización y racionalización de trámites y la mejora de la cooperación entre organismos fronterizos nacionales (Sorescu y Bollig, 2022[97]). Un caso ejemplar es el acuerdo de reconocimiento regional del certificado de Operador Económico Autorizado (OEA), firmado en mayo de 2022 por los servicios aduaneros de 11 países de ALC. Cuando se haya implementado por completo, este acuerdo permitirá a las empresas exportadoras certificadas como OEA en un país miembro disfrutar de ventajas similares en otros países miembros, simplificando los trámites aduaneros y mejorando la seguridad de la cadena logística. Otras iniciativas para facilitar el comercio en las que se están logrando avances significativos a escala regional o subregional son la interoperabilidad de los servicios nacionales de ventanilla única para el comercio exterior y la certificación digital de origen.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC establece una base sobre la que los países de ALC pueden apoyarse para asumir compromisos más ambiciosos, en particular en lo que respecta a la digitalización de los trámites. En este contexto, la negociación de un acuerdo regional sobre facilitación del comercio enviaría una señal política firme de compromiso con la integración y contribuiría a fomentar la eficiencia del comercio intrarregional y de las redes productivas. Un acuerdo de esta naturaleza demostraría un compromiso colectivo en favor de la agilización de los trámites y la reducción de las barreras, lo que acabaría contribuyendo a la fluidez de los flujos comerciales regionales. Junto a las iniciativas de convergencia comentadas anteriormente, es crucial abordar la cuestión del déficit regional de infraestructuras.

La fragilidad institucional de los acuerdos de integración constituye una barrera clave en ALC. Las posturas nacionales en materia de integración están a menudo expuestas a cambios ligados a la evolución de los ciclos políticos en los distintos países. Con independencia de los partidos políticos que formen el gobierno, el proyecto de integración regional debe verse como una estrategia de desarrollo regional orientada a cambiar el papel periférico de ALC en el mercado mundial por una posición más central y de mayor valor agregado en las cadenas de valor regionales y mundiales. A su vez, esto proporcionaría mayor soberanía y margen de maniobra a la región en la escena mundial.

ALC puede aprender de Europa lecciones valiosas sobre integración regional, en particular de la experiencia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Desde su instauración en 1951, la CECA sentó las bases de la Unión Europea y desempeñó un papel fundamental en la promoción de la integración económica y la cooperación política entre los países europeos. Creó un mercado común del carbón y el acero gracias a la eliminación de las barreras comerciales, el fomento de la competencia y la garantía de un suministro estable de estos productos. Esta integración impulsó la producción industrial y facilitó avances tecnológicos. ALC puede aprender de esta experiencia tan fructífera dando prioridad a un mercado común y centrándose en sectores estratégicos que estimulen una transformación de los mercados de producción y de trabajo. Mediante el establecimiento de mecanismos similares, adaptados a su propio contexto, los países

de ALC pueden potenciar el comercio intrarregional, armonizar regulaciones y desarrollar políticas comunes en cuestiones cruciales como la energía, el transporte y la protección ambiental. Asimismo, la región podría beneficiarse de la inclusión de la integración comercial regional como parte de las políticas de desarrollo productivo de los países de ALC y sus territorios. Por ejemplo, podrían explorarse oportunidades de integración a través de iniciativas que promuevan *clusters* empresariales en países que compartan cadenas de valor comunes o complementarias.

Los bloques de integración regional en ALC pueden servir, además de para aumentar la IED destinada a la transformación productiva a través de un comercio mejor y más regional, como base de una plataforma regional para proyectos de inversión coordinados. Los estudios recientes muestran una tendencia prometedora, con un aumento de más del 80% en las salidas de IED de los países de ALC en 2023 (CEPAL, 2023[22]). Las inversiones en el extranjero de las empresas transnacionales latinoamericanas (conocidas como multilatinas) alcanzaron la cifra histórica de 74 677 millones de USD en 2022 (CEPAL, 2023[22]). Esta tendencia podría acelerarse mediante el refuerzo de plataformas regionales de inversión como el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), creado con el objetivo de reducir las asimetrías dentro del bloque regional. El Focem recibe contribuciones más elevadas de sus socios más grandes (Argentina y Brasil), mientras que sus asignaciones benefician de forma progresiva a sus socios más pequeños (Paraguay y Uruguay), con especial énfasis en los proyectos de infraestructuras, la competitividad empresarial y el desarrollo social. Otro ejemplo es la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Esta agenda consta de 31 proyectos estructurados con un monto de inversión estimado de 20 100 millones de USD (UNASUR, 2023[98]).

La vasta experiencia de la región en materia de cooperación Sur-Sur proporciona otra herramienta de apoyo a las coaliciones para la transformación productiva. Cuando los bloques de integración regional se vuelven demasiado rígidos e incapaces de aportar soluciones concretas, los países pueden recurrir a alianzas bilaterales y subregionales más flexibles que impulsen los programas de transformación productiva. Un ejemplo de ello es el proyecto de cooperación Sur-Sur entre Uruguay y México, cuyo objetivo central es fomentar dinámicas de ecosistema en investigación, desarrollo e innovación, al tiempo que hace hincapié en agregar valor en las cadenas productivas locales, con especial atención a las cuestiones relacionadas con el medioambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible. El proyecto tiene como eje el intercambio de experiencias entre los sectores público y privado de ambos países, en particular las empresas emergentes en sectores estratégicos. Experiencias como esta pueden reproducirse o ampliarse añadiendo gradualmente nuevos socios.

Una nueva agenda UE-ALC para la transformación productiva

La Unión Europea no es solo uno de los principales inversores en ALC, sino también el tercer socio comercial de la región y el mayor contribuyente en materia de cooperación al desarrollo. Más recientemente, también se ha convertido en un importante socio inversor en ALC, sobre todo en países que reciben una parte considerable de los flujos de IED de la UE en la región, como Brasil (31%) y México (26%), a los que siguen Chile (10%), Argentina (8%) y Colombia (5%) (fDi Markets, 2023[99]) (Capítulo 1). Esta inversión ha desempeñado un papel crucial en la creación de empleo, sobre todo en sectores como los servicios y la industria manufacturera, esenciales para la transformación productiva de ALC (Capítulo 2). Las empresas europeas han instalado plantas de producción y adquirido entidades en el ámbito de las manufacturas, generando oportunidades de empleo en ALC a través de diversas cadenas de valor.

Los lazos comerciales y de inversión entre la Unión Europea y ALC se han reforzado a través de acuerdos comerciales bilaterales y regionales que han facilitado el acceso a los mercados y la integración económica, lo que ha dado lugar a un aumento significativo del comercio bidireccional (Comisión Europea, 2023[13]). La Unión Europea ha firmado acuerdos de asociación con países individuales y bloques regionales de ALC, promoviendo la cooperación, las alianzas políticas y el estrechamiento de las relaciones económicas. Existen acuerdos de este tipo con el Foro del Caribe (Cariforum), Centroamérica, los países andinos (Colombia, Ecuador y Perú), Chile, y México. Además, se han entablado negociaciones con el Mercosur.

El giro reciente de la UE hacia un nuevo paradigma de cooperación al desarrollo basado en alianzas internacionales también está modificando sus formas de trabajar con la región de ALC. Este cambio reconoce a los países asociados de ALC como protagonistas activos en la elaboración de sus propias agendas de desarrollo, dejado atrás un enfoque centrado en el receptor (CEPAL/OCDE, 2018[100]; OCDE et al., 2019[21]). Ello implica entablar un diálogo sobre políticas, codiseñar políticas y ejecutar conjuntamente proyectos que aborden retos comunes (como las transiciones verde y digital), a la vez que se da prioridad a la inclusión social. Además, promueve el trabajo en común de las dos regiones para aprovechar sus fortalezas colectivas y defender intereses comunes. Por otro lado, este enfoque integra herramientas como el comercio, las inversiones y la cooperación en un enfoque multidimensional y que considera todo el aparato gubernamental (Comisión Europea, 2023[13]).

La estrategia Global Gateway de la UE, cuyo objetivo es movilizar la inversión, el comercio y la cooperación al desarrollo, marca un punto de inflexión hacia esta nueva alianza estratégica con la región de ALC. Este nuevo enfoque sitúa en el centro de las relaciones entre la UE y ALC la transparencia y los estándares elevados, ofreciendo a los países de ALC proyectos que promueven la creación de riqueza a través de alianzas entre los sectores público y privado. Asimismo, pretende generar inversiones empresariales que contribuyan a la prosperidad de las sociedades de ambas regiones (Comisión Europea, 2023[101]). La Agenda de Inversiones Global Gateway es una iniciativa de colaboración para identificar oportunidades de inversión en ALC que contribuyan a la transformación productiva de la región en sectores como el clima y la energía, materias primas críticas, infraestructuras, desarrollo de pymes, electromovilidad y turismo sostenible, entre otros (Gráfico 5.12). Por ejemplo, la UE ha colaborado estrechamente con el Grupo BID para identificar oportunidades de inversión en ALC. En los últimos tres años, el BID ha participado conjuntamente con 14 socios europeos en 58 iniciativas en 17 países de ALC, en sintonía con todos los sectores clave de la Agenda de Inversiones Global Gateway. Por cada dólar financiado por los socios europeos, el Grupo BID aporta el doble, y ha alcanzado una cifra superior a 10 000 millones de USD en cofinanciamiento y casi 200 millones de USD en donaciones.

En el contexto de la estrategia Global Gateway, en junio de 2022 se puso en marcha una asociación entre la Unión Europea y ALC para la fabricación local de vacunas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias (Comisión Europea, 2022[102]). Esta iniciativa, que también aspira a reforzar la resiliencia de los sistemas de salud, está plenamente alineada con el plan de autosuficiencia sanitaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que fue aprobado por unanimidad por los jefes de Estado y de Gobierno en septiembre de 2021 (CEPAL, 2021[103]). El plan de la CEPAL destaca como marco de cooperación y actuación en tres ámbitos. En primer lugar, define un enfoque multilateral para potenciar la inversión en el sector sanitario y promover las capacidades productivas regionales. En segundo lugar, establece una visión para integrar salud y desarrollo productivo. En tercer lugar, identifica y establece prioridades entre los proyectos de gran repercusión cuya ejecución es factible a corto plazo.

Gráfico 5.12. **Agenda de Inversiones Global Gateway: número de proyectos por país y sector**

	Clima y energía	Digital	Educación e investigación	Salud	Transporte
País					
Argentina					
Barbados					
Belice					
Bolivia					
Brasil					
Chile					
Colombia					
Costa Rica					
Cuba					
República Dominicana					
Ecuador					
El Salvador					
Guatemala					
Guyana					
Haití					
Honduras					
Jamaica					
México					
Panamá					
Paraguay					
Perú					
Surinam					
Bahamas					
Trinidad y Tobago					
Uruguay					
Venezuela					
Región y subregión					
Cuenca del Amazonas					
Caribe					
América Central y México					
Caribe oriental					
ALC					

Nota: El gráfico muestra la cifra total de proyectos en cada país que publica la Comisión Europea. Los tonos azules más oscuros indican un mayor número de proyectos (azul más claro = 1 proyecto; azul más oscuro = 7 proyectos). Además del número de proyectos correspondientes a cada país, también figura la cifra de proyectos a nivel regional y subregional en la Cuenca Amazónica, el Caribe, América Central y México, el Caribe Oriental y ALC.

Fuente: (Comisión Europea, 2023[104]).

StatLink https://stat.link/rpyajm

La transformación del modelo económico y social de la UE —basado en una doble transición verde y digital justa— brinda una oportunidad de intercambio con los países de ALC en apoyo de su propia transformación. Global Gateway es una herramienta importante en este sentido. Debe ir acompañada de un diálogo político (y sobre políticas públicas), así como de la necesaria adaptación a las condiciones estructurales específicas de la región y la mitigación de los posibles costos. La Cumbre UE-CELAC de julio de 2023 marcó un punto de inflexión en esta alianza, al demostrar un compromiso renovado al más alto nivel político para acometer esfuerzos conjuntos entre las regiones. Durante el encuentro, el BID, la CAF y la Comisión Europea organizaron conjuntamente una Mesa Redonda Empresarial UE-ALC, que constituyó un hito en la implicación del sector privado en la alianza birregional hacia una transformación productiva.

Un mayor diálogo e intercambio en materia de políticas fomentaría lazos más fuertes, allanando el camino hacia la transformación productiva a la que aspiran los países de ALC. Para lograr una agenda en la que el comercio, la inversión y la cooperación generen beneficios mutuos es preciso que esté cimentada en un diálogo más sólido, fuentes de financiamiento más amplias e innovadoras y recomendaciones sobre políticas con base empírica, así como en la coordinación entre los niveles nacional y regional. Los mecanismos renovados de coordinación y alineamiento con las estrategias nacionales de desarrollo son cruciales para garantizar que los flujos de inversión se ajustan a criterios compartidos de calidad, sostenibilidad e inclusión. Estos mecanismos deberán acercar entre sí a los colectivos implicados en la inversión, el comercio y el desarrollo, y garantizar que el proceso que acompaña a la reindustrialización de ALC se alinea con las prioridades nacionales.

Los intercambios técnicos sobre políticas de "especialización inteligente" (p. ej., planes de transformación económica o políticas de desarrollo productivo) pueden revestir una importancia estratégica para la transformación productiva de ALC. Estos intercambios pueden contribuir al desarrollo sostenible al fomentar la competitividad y la innovación en las distintas regiones y reducir las desigualdades territoriales (Di Cataldo, Monastiriotis y Rodríguez-Pose, 2022[105]; Halleux, 2016[106]). La Unión Europea ha implementado este enfoque innovador, que podría ser útil para los países de ALC, donde las disparidades económicas subregionales son elevadas (UTEC, 2021[107]). Dentro de ALC, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile ha desarrollado políticas de este tipo. La Unión Europea está prestando asesoramiento a sus países miembros sobre cómo adaptar sus estrategias a las necesidades de las políticas industriales para alinearse con las transiciones verde y digital. Recientemente, el bloque de la UE aunó esfuerzos con la región de ALC en una nueva alianza digital (Recuadro 5.6).

Recuadro 5.6. **Alianza Digital UE-ALC: un esfuerzo conjunto para cerrar la brecha digital en ALC**

La Alianza Digital Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-ALC), puesta en marcha en marzo de 2023, se propone impulsar la cooperación digital entre ambas regiones a través de actuaciones concretas que promuevan el desarrollo de la infraestructura digital y la convergencia de políticas y regulaciones que garanticen la protección de los derechos humanos también en línea. La iniciativa se enmarca en la estrategia europea Global Gateway, concebida para establecer vínculos de confianza con los países asociados y contribuir así al desarrollo de las economías y sociedades de ALC. Para su coordinación, se apoyará en el Centro Europeo de Desarrollo Digital (D4D) y en la CEPAL.

Los proyectos que se desarrollarán en el marco de la Alianza Digital EU-ALC son: i) ampliar el cable de fibra óptica BELLA que conecta a Europa y América Latina para crear una conectividad troncal digital segura y acercar entre sí a investigadores de ambas regiones; ii) potenciar la estrategia regional Copernicus, con Centros Regionales de Datos Copernicus en Panamá y Chile; iii) crear un acelerador digital UE-ALC para fomentar la competitividad y la innovación en el ámbito digital; y iv) reforzar y consolidar un espacio de diálogo permanente entre las dos regiones sobre cuestiones de conectividad significativa, marcos regulatorios, gobernanza, ciberseguridad y transformación digital.

La Alianza Digital EU-ALC aspira a fortalecer las capacidades institucionales de los países de ALC y apoyar la transformación productiva basada en la digitalización y la innovación en la región. Se prevé que ayude a los países de ALC a eliminar las brechas y disparidades digitales, promover la cohesión social, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y entre étnias, mejorar la capacitación de los jóvenes y establecer una sociedad y una economía digitales que sean integradoras y no dejen a nadie atrás.

Fuente: (CEPAL, 2023[108]); (Comisión Europea, 2023[109]).

Los intercambios en materia de políticas sobre la transición verde y las normas verdes internacionales también pueden beneficiar a ambas regiones. Con la entrada en vigor del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea se dotará de regulaciones sobre las importaciones de productos agrícolas y agroindustriales. El marco regulatorio de la UE sobre pesticidas y fertilizantes, así como la entrada en vigor de normas que garanticen que los productos no contribuyen a la deforestación, tendrán importantes efectos en la balanza comercial UE-ALC. Los países asociados tendrán que invertir importantes recursos para cumplir estas regulaciones y adaptar los procesos actuales a las nuevas normas internacionales. Los países de ALC ya están trabajando en la actualización de sus regulaciones y en el establecimiento de procesos de trazabilidad. Por ejemplo, Colombia está tramitando en el Congreso un proyecto de ley para combatir la deforestación haciendo obligatoria la trazabilidad de la carne vacuna, lo que implica realizar un seguimiento del ganado para garantizar que no procede de zonas deforestadas ilegalmente (Tarazona, 2022[110]). La adopción de esta ley, en su caso, situaría a Colombia a la vanguardia de la regulación verde y permitiría que los productos agroalimentarios cumplieran en el futuro los requisitos de la UE. En el marco de una asociación reforzada, será crucial que la Unión Europea ofrezca asistencia técnica y financiera a los países de ALC para que puedan satisfacer los nuevos requisitos más estrictos de acceso a su mercado.

El hecho de que los países de ALC y de la UE compartan prioridades estratégicas ofrece una oportunidad para forjar una alianza mutuamente beneficiosa en torno a áreas tan prioritarias como las tres transiciones: verde, digital y social. Aunque distintos, los objetivos de cada transición son complementarios y las trayectorias para alcanzarlos se entrecruzan.

Principales mensajes en materia de políticas

La cooperación y las asociaciones internacionales se han vuelto cruciales en ALC para fomentar más y mejores inversiones que permitan la transformación productiva. En un contexto en el que una serie de crisis reforzadas entre sí —como el cambio climático, la pandemia de COVID-19, perturbaciones en las cadenas de valor mundiales y la guerra en Ucrania— han fragmentado el sistema multilateral, es imperativo dar una respuesta coordinada. La triple transición —verde, digital y social— brinda a ALC la oportunidad de fortalecer alianzas internacionales y establecer nuevos modelos de crecimiento y desarrollo sostenibles para garantizar que la región no se quede atrás en esta nueva agenda de industrialización. Los principales mensajes en materia de políticas (Recuadro 5.7) destacan de qué modo las alianzas internacionales pueden ayudar a:

- resolver el déficit de financiamiento del desarrollo movilizando capital del sector privado;
- garantizar que las inversiones tengan un mayor impacto social; y
- promover y apoyar la integración regional.

Estos mensajes ofrecen consideraciones generales para ayudar a los países de ALC a implementar su propio conjunto de políticas para atraer IED y otras inversiones que impulsen la transformación productiva de forma sostenible y justa.

Recuadro 5.7. **Principales mensajes en materia de políticas**

Promover una mayor coordinación y alineación para movilizar mayores y mejores recursos para la inversión.

- Mejorar la coordinación entre los gobiernos, el sector privado, las agencias de cooperación internacional, los BMD y las DFI a través de plataformas para el diálogo y el intercambio de información. Esto puede ayudar a movilizar más inversiones privadas que estén alineadas con las prioridades nacionales y subnacionales de las agendas de desarrollo productivo de los países y sus territorios , y contribuir a un entorno propicio para la inversión en la región.
- Hacer un mayor uso de instrumentos de movilización de recursos, como el financiamiento mixto, que pueden utilizarse para reducir el riesgo percibido por los inversores institucionales en proyectos de inversión en ALC.
- Adaptar los marcos de las políticas nacionales a las normas internacionales, por ejemplo, mediante taxonomías, instrumentos de políticas internacionales o acuerdos multilaterales para crear una comprensión común y diligencia debida para la movilización de capital privado.
- Evaluar los posibles beneficios de introducir enfoques nuevos o alternativos en los tratados de inversión para garantizar que respetan las normas ambientales, los derechos laborales y el bienestar social.
- Promover el apoyo al desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología en el marco de inversiones en sectores estratégicos clave. Esto incluye un mayor apoyo a API nacionales y locales y a instituciones financieras locales para alinear el financiamiento sostenible con las prioridades nacionales.
- Promover la creación de espacios de discusión entre las API nacionales y locales, en apoyo de sectores estratégicos para las inversiones, involucrando a la sociedad civil y los actores locales, para alinear la inversión con las prioridades nacionales.
- Utilizar adecuadamente los requisitos de contenido local para crear vínculos con pymes nacionales y fomentar las cadenas de valor necesarias en inversiones específicas para cada contexto.

Hacia una integración regional revitalizada

- Reforzar la integración intrarregional, en particular la integración productiva, con el fin de crear un mercado amplio y estable que permita conseguir economías de escala, con costos de transacción reducidos, e infraestructuras regionales. Esto puede lograrse a través de una contratación pública estratégica, la armonización regulatoria, medidas de facilitación del comercio y políticas de desarrollo productivo orientadas directamente a la integración regional.
- Prestar la atención debida a la regionalización de las redes comerciales y de producción (una tendencia mundial emergente) y orientar las alianzas internacionales en apoyo de este cometido. Esto será vital en la búsqueda de una mayor autonomía estratégica en el abastecimiento de productos e insumos clave.
- Aumentar la cooperación y el diálogo sobre políticas con la Unión Europea para fomentar una integración regional en ALC adaptada al contexto actual de creciente demanda de materias primas críticas y a la necesidad de mejorar las cadenas de valor en la región.

Hacia una nueva alianza estratégica con la Unión Europea

- Reforzar el diálogo y el intercambio en materia de políticas entre ALC y la Unión Europea a través de la Agenda de Inversiones Global Gateway para promover el comercio e inversiones de calidad entre ambas regiones. Ejemplos de dicha cooperación son la asociación UE-ALC para la fabricación local de vacunas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias; intercambios técnicos sobre estrategias de especialización inteligente; la Alianza Digital UE-ALC; y la transición verde.

Notas

1. Dos bases de datos, Convergence y OECD, brindan información sobre el estado de las finanzas combinadas a nivel mundial. Los datos de Convergence (Convergence, 2023[33]) se recopilan de i) fuentes públicas creíbles como comunicados de prensa, ii) acuerdos de intercambio de datos y iii) ejercicios de validación con miembros de Convergence. Para ser incluido en la base de datos de Convergence, un acuerdo debe cumplir tres criterios principales:
   1. La transacción atrae la participación financiera de uno o más inversores comerciales que de otro modo no habrían invertido en la oportunidad.
   2. La transacción utiliza capital catalizador de una de las siguientes maneras: a) Los inversionistas públicos/filantrópicos son concesionales dentro de la estructura de capital; b) Inversionistas públicos/filantrópicos proporcionaron garantías o seguros de riesgo con un precio inferior al del mercado; c) el diseño o preparación de la transacción está financiado por una subvención; d) La transacción está asociada a una instalación de Asistencia Técnica.
   3. La transacción tiene como objetivo crear un impacto en el desarrollo relacionado con los ODS en los países en desarrollo, o impactar directamente a los beneficiarios en los países en desarrollo.
2. La OCDE ha desarrollado un estándar internacional para medir y recopilar datos sobre los montos movilizados del sector privado por las intervenciones oficiales de desarrollo (OECD. Stat, 2023[35]). Denominada "base de datos de movilización", describe el vínculo causal entre la financiación privada disponible para un proyecto específico y una intervención oficial. Los datos se recopilan siguiendo metodologías específicas para cada instrumento, que cubren todos los mecanismos de apalancamiento utilizados por las DFIs y los BMD: garantías, préstamos sindicados, esquemas de financiamiento de proyectos, acciones en vehículos de inversión colectiva, inversión directa en empresas, líneas de crédito y cofinanciamiento simple.

Referencias

Almaguer, F. y A. Davidson (2023), *Impact Investing in Latin America: Trends 2020-2021*, Aspen Network of Development Entrepreneurs, Washington, DC, https://andeglobal.org/wp-content/uploads/2023/06/latam-report-2023-v8.pdf. [24]

Alvarez Pagliuca, C. et al. (2022), *Sustainable financing of economic and social infrastructure in Latin America and the Caribbean: trends, key agents, and instruments*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0004497. [40]

Attridge, S. y L. Engen (2019), *Blended finance in the poorest countries: The need for a better approach*, Overseas Development Institute, London, https://cdn.odi.org/media/documents/12666.pdf. [39]

Banco Mundial (2023), *World Development Indicators (database)*, World Bank Group, Washington, DC, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed on 19 September 2023). [27]

Banco Mundial (2022), *Colombia: Leading the Path to Sustainability in Latin America*, The World Bank, Washington, DC, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/08/31/colombia-leading-the-path-to-sustainability-in-latin-america. [63]

Beeber, M., J. Li y J. Schulz (2022), *The Growth of Impact Investing in Latin America: Insights From Latibex Forum 2022*, Sustainlytics, https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/corporate-esg-blog/impact-investing-in-latin-america-insights-from-latibex-forum-2022. [61]

BID (2023), *2022 Partnership Report: Envisioning a New Future Together*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0004821. [45]

BID (2023), *Amazonia Siempre (sitio web)*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://www.iadb.org/es/quienes-somos/tematicas/amazonia (accessed on 5 Octubre 2023). [64]

BID (2023), "Mobilized by IDB and BNDES, Development Banks Launch Green Coalition for the Amazon", Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://www.iadb.org/en/news/mobilized-idb-and-bndes-development-banks-launch-green-coalition-amazon (accessed on 7 October 2023). [65]

BID (2022), "Barbados Places Climate Financing Firmly on Agenda with IDB, Nature Conservancy Support", Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://www.iadb.org/en/news/barbados-places-climate-financing-firmly-agenda-idb-nature-conservancy-support. [46]

Bilal, S. (2021), *The rise of public development banks in the European financial architecture for development*, Elcano Royal Institute, Madrid, https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/12/wp12-2021-bilal-rise-of-public-development-banks-in-european-financial-architecture-for-development.pdf. [77]

Bilal, S. y K. Karaki (2023), "Strengthening the European financial architecture for development through better coordination", *Discussion Paper*, No. 351, The centre for Africa-Europe relations (ECDPM), Maastricht, https://ecdpm.org/application/files/6416/8837/0523/Strengthening-European-Financial-Architecture-Development-Better-Coordination-ECDPM-Discussion-Paper-351-2023.pdf. [81]

Business & Human Rights Resource Centre (2023), *Mandatory Due Diligence*, Business & Human Rights Resource Centre, London, https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/mandatory-due-diligence/ (accessed on 31 August 2023). [60]

CABANA (2023), "About the CABANA Network", Capacity Building for Bioinformatics in Latin America, Global Challenges Research Fund, https://cabana.network/about (accessed on 12 July 2023). [74]

CAF (2021), *Pathways to integration: trade facilitation, infrastructure, and global value chains: Executive Summary*, Development Bank of Latin America, Caracas, https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021-Executive%20Summary.pdf?sequence=5&isAllowed=y. [89]

CEPAL (2023), *América Latina y el Caribe y la Unión Europea refuerzan sus lazos de colaboración con el lanzamiento de la Alianza Digital EU-LAC*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/node/58644 (accessed on 30 August 2023). [108]

CEPAL (2023), *Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/48978-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2023. [22]

CEPAL (2023), *Oportunidades para la inversión y la colaboración entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, https://repositorio.cepal.org/items/8b0c6345-2af2-4c16-9260-33f298e351d1. [71]

CEPAL (2022), *Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, https://repositorio.cepal.org/items/0c3cb0d5-e733-4b7c-8576-806df49e2775. [96]

CEPAL (2021), *Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/items/cd260f41-54aa-4b5e-890b-e90caa705c88. [103]

CEPAL (2021), *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la crisis*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, https://repositorio.cepal.org/items/a57403d7-a034-4aa9-a496-21613fa0eb38. [87]

CEPAL (2020), *Global Input-Output Tables: Tools for the analysis of the integration of Latin America with the world*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/events/global-input-output-tables-tools-analysis-integration-latin-america-world (accessed on 7 July 2023). [91]

CEPAL/OCDE (2018), *Nuevos desafíos y paradigmas: Perspectivas sobre la cooperación internacional para el desarrollo en transición*, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/eb994771-d049-4107-aeb7-b7ae63b58ba7/content. [100]

Chaturvedi, S. (2016), "The Development Compact: A Theoretical Construct for South-South Cooperation", *RIS Discussion Papers*, No. 203, Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2022-06/Chaturvedi%20%282016%29%20Development%20Compact.pdf. [6]

Comisión Europea (2023), *EU-LAC Global Gateway Investments Agenda - Infographics*, European Commission, Brussels, https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/eu-lac-global-gateway-investment-agenda-infographics_en (accessed on 21 July 2023). [104]

Comisión Europea (2023), "Global Gateway in Latin America and the Caribbean", European Commission, Brussels, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-latin-america-and-caribbean_en (accessed on 29 August 2023). [101]

Comisión Europea (2023), "Global Gateway: EU, Latin America and Caribbean partners launch in Colombia the EU-LAC Digital Alliance", European Commission, Brussels, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1598 (accessed on 28 August 2023). [109]

Comisión Europea (2023), "Joint Communication To The European Parliament And The Council: A New Agenda for Relations between the EU and Latin America and the Caribbean", European Commission, Brussels, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/JOIN_2023_17_1_EN_ACT_part1_v7.pdf. [13]

Comisión Europea (2022), "EU-Latin America and Caribbean Partnership: manufacturing vaccines, medicines and health technologies and strengthening health systems", *Press release*, European Commission, Brussels, https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/eu-latin-america-and-caribbean-partnership-manufacturing-vaccines-medicines-and-health-technologies-2022-06-22_en (accessed on 28 August 2023). [102]

Comisión Europea (2022), "European Commission and EIB sign an Agreement to enable further investments worldwide", *Press release*, European Commission, Brussels, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2870 (accessed on 1 August 2023). [18]

Comisión Europea (2022), "European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+)", European Commission, Brussels, https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/funding-instruments/european-fund-sustainable-development-plus-efsd_en (accessed on 12 July 2023). [12]

Comisión Europea (2022), "Global Gateway: EU greenlights 40 new guarantee programmes under the European Fund for Sustainable Development plus", *Press release*, European Commission, Brussels, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7799 (accessed on 29 August 2023). [19]

Convergence (2023), *Historical Deals [database]*, https://www.convergence.finance/historical/deal/summary-analysis?sort=eyJjb2x1bW4iOiJhcHByb3ZlZF9hdCIsImRpcmVjdGlvbiI6ImRlc2MifQ%3D%3D&filters=eyJrZXl3b3JkIjpudWxsLCJkZWFsVHlwZXMiOltdLCJibGVuZGluZ0FwcHJvYWNoZXMiOltdLCJ0YWdzIjpbXSwic2VjdG9yc0FuZFN1YlNlY3Rv (accessed on 30 June 2023). [33]

Convergence (2022), *Blended Finance in Latin America & the Caribbean*, Convergence, Toronto, https://www.convergence.finance/resource/blended-finance-in-latin-america-and-the-caribbean/view. [32]

CSIS (2018), *The BUILD Act Has Passed: What's Next?*, Center for Strategic & International Studies, Washington, DC, https://www.csis.org/analysis/build-act-has-passed-whats-next (accessed on 5 May 2023). [14]

Da Costa, R. y A. Caicedo (2023), "Expandir el potencial de la alianza UE-LAC: enfoques integrados para la transición verde justa en América Latina y el Caribe", *Documentos de trabajo*, nº83 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid, https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.DT83. [85]

Dallmann, J. (2021), *Latin America Is The New Frontier For Impact Investing*, Forbes, https://www.forbes.com/sites/jpdallmann/2021/07/18/latin-america-is-the-new-frontier-for-impact-investing/?sh=4c72d33768bb. [23]

Dembele, F. et al. (2022), "Blended finance funds and facilities: 2020 survey results", *OECD Development Co-operation Working Papers*, No. 107, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fb282f7e-en. [34]

Di Cataldo, M., V. Monastiriotis y A. Rodríguez-Pose (2022), *How 'smart' are smart specialization strategies?*, Industrial Analytics Platform, UNIDO, Vienna, https://iap.unido.org/articles/how-smart-are-smart-specialization-strategies. [105]

Dixon, J. y P. Haslam (2016), "Does the Quality of Investment Protection Affect FDI Flows to Developing Countries? Evidence from Latin America", *The World Economy*, Vol. 39/8, pp. 1080-1108, https://doi.org/10.1111/twec.12299. [69]

Durán Lima, J. y A. Pellandra (2017), "La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina y el Caribe", *Serie Comercio Internacional nº131*, https://www.cepal.org/es/publicaciones/41021-la-irrupcion-china-su-impacto-la-estructura-productiva-comercial-america-latina. [93]

EBRD (2023), "Belt and Road Initiative (BRI)", *European Bank for Reconstruction and Development*, https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html (accessed on 30 August 2023). [7]

Eco.business Fund (2023), *Impact*, Eco.business Fund, Bertrange, https://www.ecobusiness.fund/en/impact (accessed on 1 August 2023). [44]

Eco.business Fund (2023), *The Fund*, Eco.business Fund, Bertrange, https://www.ecobusiness.fund/en/the-fund (accessed on 1 August 2023). [43]

EUCA Trade (2021), *Study on 6 priority sectors for EU Trade and Investment in Central America*, EU-Central America Association Agreement, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/country-assets/euca_01_Study%20on%206%20priority%20sectors%20for%20EU%20trade%20and%20investment%20in%20Central%20America.pdf. [95]

fDi Markets (2023), *fDi Markets: the in-depth crossborder investment monitor from the Financial Times*, https://www.fdimarkets.com/ (accessed on 11 July 2023). [99]

FICS (2022), *Finance in Common Progress Report to the G20*, Finance in Common, https://financeincommon.org/sites/default/files/2022-10/FICS%20Progress%20Report%20to%20the%20G20%2C%20July%202022_0.pdf (accessed on 29 September 2023). [76]

FMI (2023), *Perspectivas de la economia mundial, octubre de 2023*, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October (accessed on 8 Noviembre 2023). [36]

Freymann, E. y A. García-Herrero (2022), "A new kind of Belt and Road Initiative after the pandemic", *Bruegel Blog*, https://www.bruegel.org/blog-post/new-kind-belt-and-road-initiative-after-pandemic. [9]

Gaukrodger, D. (2021), "The future of investment treaties - possible directions", *OECD Working Papers on International Investment*, No. 2021/03, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/946c3970-en. [70]

GPEDC (2019), *Kampala Principles on Effective Private Sector Engagement in Development Co-operation*, Global Partnership for Effective Development Co-operation, https://effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf. [5]

Halleux, V. (2016), *Smart specialisation: The concept and its application to EU cohesion policy*, European Parliament, Strasbourg, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589813/EPRS_BRI(2016)589813_EN.pdf. [106]

Hamadeh, N., C. Van Rompaey y E. Metreau (2023), "World Bank Group country classifications by income level", *World Bank Blogs*, World Bank, Washington, DC, https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24. [26]

Hansen, U. et al. (2019), "The effects of local content requirements in auction schemes for renewable energy in developing countries: A literature review", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 127, https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109843. [83]

Hausmann, R. (2023), "Dodgy Climate Finance", *Project Syndicate*, 30 March, https://www.project-syndicate.org/commentary/just-energy-transition-program-announcements-are-misleading-by-ricardo-hausmann-2023-03. [50]

IDB (2023), *IDB's Innovative Financing Tool Rewards Results on Nature and Climate*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://www.iadb.org/en/news/idbs-innovative-financing-tool-rewards-results-nature-and-climate (accessed on 27 September 2023). [48]

IDB/ILO (2020), *Jobs in a Net-Zero Emissions Future in Latin America and the Caribbean*, Inter-American Development Bank and International Labor Organization, Washington, DC/Geneva, Switzerland, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_752069.pdf. [82]

IFC (2023), *DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects*, International Finance Corporation, Washington, DC, https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/2023-03-dfi-bcf-joint-report.pdf. [49]

Joint SDG Fund (2023), *Finance for the Sustainable Development Goals (website)*, https://www.jointsdgfund.org/sdg-financing (accessed on 28 September 2023). [75]

LACIF (2023), *Facts & figures CIF*, Latin America and Caribbean Investment Facility, Brussels, https://www.eulaif.eu/en/facts-figures-CIF (accessed on 1 August 2023). [17]

LACIF (2023), *Facts & figures LAIF*, Latin America and Caribbean Investment Facility, Brussels, https://www.eulaif.eu/en/facts-figures (accessed on 1 August 2023). [16]

LACIF (2023), *Success Story: eco.business fund for the development of sustainability in Latin America*, Latin America and Caribbean Investment Facility, Brussels, https://www.eulaif.eu/en/success-story-eco-business-fund-development-sustainability-latin-america (accessed on 30 August 2023). [42]

Maloney, W. et al. (2023), *The Promise of Integration: Opportunities in a Changing Global Economy*, Latin America and the Caribbean Economic Review, http://hdl.handle.net/10986/39612. [53]

McBride, J., N. Berman y A. Chatzky (2023), *China's Massive Belt and Road Initiative*, Council on Foreign Relations, New York, https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative (accessed on 31 August 2023). [11]

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (2016), *Build a New Type of International Relations Featuring Win-Win Cooperation*, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201607/t20160701_468628.html (accessed on 21 July 2023). [10]

Mushemeza, E. et al. (2017), "What Matters When it Comes to Adopting Local Content? A comparative analysis of success factors in Africa and Latin America", *ACODE Policy Research Series*, No. 79, Kampala, https://www.acode-u.org/uploadedFiles/PRS79.pdf. [84]

OAS (2023), *CooperaNet*, Organization of American States, Washington, DC, https://www.oas.org/ext/en/development/cooperanet/Cooperation-Exchange (accessed on 16 August 2023). [80]

OCDE et al. (2019), *Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es. [21]

OECD (2023), *Blended Finance (website)*, OECD, Paris, https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/ (accessed on 29 August 2023). [31]

OECD (2023), *Improving the Landscape for Sustainable Infrastructure Financing*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bc2757cd-en. [66]

OECD (2023), *OECD-LAC Regional Policy Networks (website)*, OECD, Paris, https://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/regional-policy-networks/ (accessed on 29 August 2023). [68]

OECD (2023), *Private finance mobilised by official development finance interventions*, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dac/2023-private-finance-odfi.pdf. [4]

OECD (2023), *Table 25: ODA Receipts and Selected Indicators for Developing Countries and Territories [Base de datos]*, OECD, https://webfs.oecd.org/oda/ReadymadeTables/EN/Table25_EN.xlsx (accessed on 13 September 2023). [28]

OECD (2022), *FDI Qualities Guide for Development Co-operation: Strengthening the Role of Development Co-operation for Sustainable Investment*, OECD Development Policy Tools, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7f251bac-en. [30]

OECD (2022), *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2023: No Sustainability Without Equity*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fcbe6ce9-en. [3]

OECD (2022), *Responsible Business Conduct in the Financial Sector in Latin America and the Caribbean*, OECD Publishing, Paris, https://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-financial-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf. [57]

OECD (2022), *The role of sustainability initiatives in mandatory due diligence*, Background note on Regulatory Developments concerning Due Diligence for Responsible Business Conduct, http://mneguidelines.oecd.org/the-role-of-sustainability-initiatives-in-mandatory-due-diligence-note-for-policy-makers.pdf. [58]

OECD (2021), *OECD Implementation Handbook for Quality Infrastructure Investment: Supporting a Sustainable Recovery from the COVID-19 Crisis*, https://www.oecd.org/finance/OECD-Implementation-Handbook-for-Quality-Infrastructure-Investment.htm. [67]

OECD (2020), *OECD Investment Policy Reviews: Egypt 2020*, OECD Investment Policy Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f9c589a-en. [79]

OECD (2019), "FDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development impacts of investment", OECD, Paris, https://www.oecd.org/investment/FDI-Qualities-Indicators-Measuring-Sustainable-Development-Impacts.pdf. [54]

OECD (2018), "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", OECD, Paris, https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf. [56]

OECD (2016), *Marco de acción para la inversión, Edición 2015*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264251106-es. [55]

OECD.Stat (2023), *Mobilisation [database]*, OECD.Stat, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DV_DCD_MOBILISATION (accessed on 23 May 2023). [35]

OECD/UNCDF (2020), *Blended Finance in the Least Developed Countries 2020: Supporting a Resilient COVID-19 Recovery*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/57620d04-en. [29]

OHCHR (2023), *Mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD)*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights/mandatory-human-rights-due-diligence-mhrdd (accessed on 30 August 2023). [59]

Oxfam (2019), "Faith is Not Enough: Ensuring that aid donor-private sector partnerships contribute to sustainable development", *Briefing Paper*, Oxfam, https://policy-practice.oxfam.org/resources/faith-is-not-enough-ensuring-that-aid-donor-private-sector-partnerships-contrib-620839/. [52]

Oxfam/Eurodad (2017), "Blended Finance: What it is, how it works and how it is use", *Research Report*, Oxfam and European Network on Debt and Development, https://www.eurodad.org/blended_finance_what_it_is_how_it_works_and_how_it_is_used. [51]

Pérez, G. y R. Sánchez (2019), *Logistics for production, distribution and trade*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/44899-logistics-production-distribution-and-trade. [92]

Peter Lankes, H. y A. Prizzon (2023), *Multilateral development bank reform can – and must – benefit both low- and middle-income countries*, Overseas Development Institute, London, https://odi.org/en/insights/multilateral-development-bank-reform-can-and-must-benefit-both-low-and-middle-income-countries/. [20]

PNUD (2022), *Our Voices from Below: Diagnosis of the Results of the "Sembrando Vida (Sowing Life) and Jóvenes Construyendo el Futuro (Young People Building the Future)" projects in their Beneficiaries in El Salvador and Honduras*, United Nations Environment Program, Nairobi, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/Diagnostico_SV_CF_2022.en_.pdf. [86]

REIF (2023), *Fondo de Innovación en Energías Renovables (website)*, https://reifuruguay.org.uy/ (accessed on 30 August 2023). [37]

Reuters (2023), "Natural evolution: Record Galapagos deal sparks clamour for eco-friendly debt swaps", 11 June, Reuters, https://www.reuters.com/business/environment/natural-evolution-record-galapagos-deal-sparks-clamour-eco-friendly-debt-swaps-2023-06-09/. [47]

Sanahuja, J. (2022), "El Pacto Verde, NextGenerationEU y la nueva Europa geopolítica", *Documentos de Trabajo*, No. 63 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid, https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.DT63. [2]

Sánchez-Martín, M., R. de Arce y G. Escribano (2014), "Do changes in the rules of the game affect FDI flows in Latin America? A look at the macroeconomic, institutional and regional integration determinants of FDI", *European Journal of Political Economy*, Vol. 34, pp. 279-299, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.02.001. [88]

Schwartz, J. y M. Arévalo-Carpenter (2021), *Impact investing in Latin America and addressing the 'missing middle'*, World Economic Forum, Cologny, Switzerland, https://www.weforum.org/agenda/2021/03/impact-investing-for-latin-america-s-great-reset-addressing-the-missing-middle. [25]

SICE (2023), *Americas Partnership for Economic Prosperity*, Organization of American States, Washington, DC, http://www.sice.oas.org/TPD/Americas_Partnership/Americas_Partnership_e.asp (accessed on 30 August 2023). [15]

SIFEM (2023), *Central America Small Enterprise Investment Fund IV*, Swiss Investment Fund for Emerging Markets, Geneva, https://sifem.ch/investments/portfolio/detail/central-american-small-enterprise-investment-fund-iv (accessed on 12 July 2023). [41]

Sorescu, S. y C. Bollig (2022), "Trade facilitation reforms worldwide: State of play in 2022", *OECD Trade Policy Papers*, No. 263, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ce7af2ce-en. [97]

Steenbergen, V. (2023), "What Makes an Investment Promotion? Findings from a Structural Gravity Model", *Policy Research Working Paper*, N° 10276, World Bank Group, https://doi.org/10.1596/1813-9450-10276. [78]

Stroe, O. (2017), "Bioinformatics in Latin America", in *Bioinformatics in Latin America*, European Molecular Biology Laboratory, https://www.embl.org/news/lab-matters/bioinformatics-latin-america/. [73]

Tarazona, D. (2022), *Colombia: avanza proyecto de ley para combatir la deforestación al regular procedencia de la carne*, Mongabay, Menlo Park, CA, https://es.mongabay.com/2022/12/avanza-proyecto-para-combatir-deforestacion-al-regular-procedencia-de-carne-en-colombia/. [110]

UN Comtrade (2023), *International Trade Statistics Database*, https://comtrade.un.org/ (accessed on 30 August 2023). [94]

UNASUR (2023), *Integration Priority Project Agenda (API)*, Union of South American Nations, Buenos Aires, https://iirsa.org/en/Page/Detail?menuItemId=95 (accessed on 30 August 2023). [98]

UNCTAD (2023), *International Investment Agreements Navigator (database)*, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/advanced-search (accessed on 23 June 2023). [72]

UNCTAD (2022), *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment*, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Publications, Geneva, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf. [62]

UNCTADStat (2023), *UNCTADStat database*, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (accessed on 30 August 2023). [90]

UNIDO (2022), "Through the Renewable Energy Innovation Fund (REIF), UNIDO and its partners will support Uruguay´s 2nd energy transition by decarbonizing the transportation and industry sectors", United Nations Industrial Development Organization, Vienna, https://www.unido.org/news/through-renewable-energy-innovation-fund-reif-unido-and-its-partners-will-support-uruguays-2nd-energy-transition-decarbonizing-transportation-and-industry-sectors. [38]

United Nations (2023), *The Sustainable Development Goals Report 2023*, Department of Economic and Social Affairs (DESA), United Nations, New York, https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023.pdf (accessed on 29 August 2023). [1]

UTEC (2021), "Qué es la Estrategia de Especialización Inteligente (EEI) (website)", Universidad Tecnológica, https://utec.edu.uy/es/noticia/que-es-la-estrategia-de-especializacion-inteligente-eei/. [107]

Vadell, J., G. Brutto y A. Leite (2020), "The Chinese South-South development cooperation: an assessment of its structural transformation", *Revista Brasileira De Politica Internacional*, Vol. 63, https://www.scielo.br/j/rbpi/a/7bGWCPphHqQZT7wKDg3SLgw/?lang=en. [8]

Anexo 5.A.

Anexo Tabla 5.A.1. **Número de tipos de productos exportados a destinos seleccionados, 2021**

	ALC	Estados Unidos	UE-27	China
Argentina	3 352	1 388	1 479	409
Barbados	671	433	98	13
Belice	85	76	25	1
Bolivia	569	240	225	64
Brasil	4 358	3 311	3 730	1 968
Chile	3 260	1 311	1 391	364
Colombia	3 292	2 022	1 380	234
Costa Rica	2 869	2 015	950	182
Cuba	268	3	373	46
Ecuador	2 267	1 344	789	161
El Salvador	2 412	1 076	567	69
Guatemala	3 536	1 449	741	130
Guyana	769	525	175	40
Honduras	1 823	1 083	364	39
Jamaica	382	348	82	20
México	1 448	2 858	503	361
Nicaragua	1 852	974	255	52
Panamá	271	144	64	30
Paraguay	1 388	431	397	106
Perú	3 294	1 867	1 555	266
Rep. Dominicana	2 362	2 278	1 288	135
Trinidad y Tobago	1 769	295	508	27
Uruguay	1 490	567	519	140
Venezuela	958	266	613	63
Total ALC	**44 745**	**26 304**	**18 071**	**4 920**

Nota: Los productos se especifican al nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Los datos de Cuba, Trinidad y Tobago y (Rep. Bol. de) Venezuela se han calculado a partir de estadísticas espejo. Los datos de Argentina son de 2017. Las casillas sombreadas en azul claro corresponden al destino al que se exportó la mayor cantidad de productos.
Fuente: UN Comtrade, Base de datos de estadísticas de comercio internacional, https://comtrade.un.org/.

NOTAS PAÍS

- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- República Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay

GUÍA DEL LECTOR

Los cuadros estadísticos siguen las principales áreas identificadas en las *Perspectivas económicas de América Latina* (*LEO*): 1) dimensión socioeconómica; 2) productividad e innovación; 3) inversión y transformación productiva; 4) percepción de los ciudadanos e instituciones; y 5) situación fiscal.

El promedio de **América Latina y el Caribe (ALC)** es un promedio simple del mayor conjunto de países de ALC del que se dispone de datos.

El promedio de la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)** es un promedio simple del mayor conjunto de países miembros de la OCDE sobre los que se disponía de datos en julio de 2023.

Los países de los que no se dispone de datos para los dos años seleccionados se han excluido de los promedios para garantizar la comparabilidad entre dichos años. En las notas encontrará una explicación sobre estas excepciones.

En la presente edición se han aplicado los mismos criterios que en las ediciones anteriores de *LEO*. La selección de datos da prioridad a la comparabilidad entre los países de ALC y muestra los últimos datos comparables disponibles en la fecha de publicación del informe.

Dimensión social

Pobreza extrema:[1] hace referencia a la proporción (%) de la población cuyos ingresos medios per cápita son inferiores al umbral de pobreza extrema, tal como lo especifica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Método de cálculo: "n" se define como el número total de personas e "i" es el número de personas cuyos ingresos per cápita se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema; el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema se expresa como I=(i/n)x100 (conocido como "índice de recuento"). Los ingresos medios per cápita se calculan dividiendo los ingresos totales de cada hogar entre el número de personas que lo forman. Datos de la CEPAL (2023[1]), *Social Panorama of Latin America and the Caribbean*, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a4d96610-6048-4044-bf89-2eb3c31fc369/content.

Pobreza:[1] hace referencia a la proporción (%) de la población cuyos ingresos medios per cápita son inferiores al umbral de la pobreza, tal como lo especifica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Método de cálculo: "n" es el número total de personas y "p" es el número de personas cuyos ingresos per cápita se encuentran por debajo del umbral de pobreza; el porcentaje de personas que viven en la pobreza se expresa como P=(p/n)x100. Este indicador incluye a las personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza extrema, por definición. Los ingresos medios per cápita se calculan dividiendo los ingresos totales de cada hogar entre el número de personas que lo forman. Datos de la CEPAL (2023[1]), *Social Panorama of Latin America and the Caribbean*, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a4d96610-6048-4044-bf89-2eb3c31fc369/content.

Coeficiente de Gini:[2] mide hasta qué punto la distribución de los ingresos (o, en algunos casos, el gasto en consumo) entre los individuos u hogares de una economía se desvía de una distribución perfectamente igualitaria. Un coeficiente de Gini de cero representa una igualdad perfecta; un coeficiente de 100 representa una desigualdad perfecta. Datos del Banco Mundial (2023[2]), *World Bank Open Data*, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.

Proporción de usuarios de Internet: mide las personas con acceso a Internet desde cualquier lugar en los últimos tres meses como porcentaje de la población total. Se incluye el acceso a través de ordenador, teléfono móvil, asistente digital personal, videoconsola, televisión digital, etc. Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2023[3]), *Global ICT Statistics*, www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.

Proporción de la población total en hogares informales (general y por quintiles):[3] proporciona la distribución de la población total que vive en hogares informales en términos generales y por quintiles. Un hogar es considerado informal si todos los trabajadores del hogar operan en el sector informal. Los quintiles se basan en el consumo o los ingresos totales mensuales del hogar. Datos de la OCDE (2023[4]), *Base de datos de indicadores clave de informalidad basados en las personas y sus hogares*, www.oecd.org/dev/key-indicators-informality-individuals-household-kiibih.htm.

Índice de instituciones sociales y género (SIGI): mide la discriminación contra la mujer en instituciones sociales (p. ej., leyes formales e informales, normas y prácticas sociales). Los valores más bajos indican niveles más bajos de discriminación en las instituciones sociales: el índice SIGI oscila entre el 0% (ausencia total de

discriminación) y el 100% (niveles muy altos de discriminación). Datos de la OCDE (2023[5]), *Datos del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SIGI2019.

Puntuación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en ciencias:[4] refleja la puntuación media del desempeño en ciencias conforme al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) para cada país. El desempeño en ciencias mide la alfabetización científica de un joven de 15 años en el uso de conocimientos científicos para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y sacar conclusiones con base empírica con respecto a cuestiones relacionadas con la ciencia. Datos de la OCDE (2023[6]), *Indicador del desempeño en ciencias (PISA)*, https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm#indicator-chart.

Productividad e innovación

Productividad laboral: estimación que mide la producción por persona empleada como porcentaje de la producción de Estados Unidos por persona empleada (en USD internacionales de 2022, convertidos utilizando la paridad del poder adquisitivo). Datos del Conference Board (2023[7]), *Total Economy Database*, www.conference-board.org/data/economydatabase/totaleconomy-database-productivity.

Exportaciones de productos de alta tecnología:[5] mide las exportaciones de productos que tienen una alta intensidad en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del total de exportaciones manufactureras. Datos del Banco Mundial (2023[2]), *World Bank Open Data*, https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS.

Gasto en I+D:[6] mide los gastos corrientes y de capital como porcentaje del PIB en cuatro sectores principales: empresas, gobierno, educación superior y privado sin ánimo de lucro. La I+D abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Datos del Banco Mundial (2023[2]), *World Bank Open Data*, https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.

Inversión y transformación productiva

Inversión total:[7] mide la formación bruta de capital fijo (FBCF) como porcentaje del PIB. La FBCF incluye las mejoras del terreno (vallas, zanjas, desagües, etc.); la compra de instalaciones, maquinaria y equipos; y la construcción de carreteras, vías férreas y similares (incluyendo escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales privadas y edificios comerciales e industriales). Según el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) de 1993, las adquisiciones netas de objetos de valor también se consideran formación de capital. Datos del Banco Mundial (2023[2]), *World Bank Open Data*, https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS.

Inversión extranjera directa (IED):[8] mide las entradas netas de inversión para adquirir una participación de gestión duradera (10% o más de las acciones con derecho a voto) en una empresa que opera en una economía distinta a la del inversor como porcentaje del PIB. Es la suma del capital social, la reinversión de beneficios, otro capital a largo plazo y el capital a corto plazo, tal y como aparecen en la balanza de pagos. Esta serie muestra las entradas netas (entradas de nuevas inversiones menos desinversiones) en la economía declarante procedentes de inversores extranjeros y se divide por el PIB. Datos del Banco Mundial (2023[2]), *World Bank Open Data*, https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS.

Inversión privada: mide la FBCF privada como porcentaje del PIB. La FBCF privada se ha calculado restando a la FBCF total la FBCF de las administraciones públicas. Datos del Fondo Monetario Internacional (2023[8]), *IMF Data*, https://data.imf.org/?sk=388dfa60-1d26-4ade-b505-a05a558d9a42.

Inversión pública en infraestructura económica:[9] mide los recursos destinados a la inversión en infraestructura económica: agua y saneamiento, defensas contra inundaciones, energía, regadíos, telecomunicaciones y transporte. Tiene en cuenta la inversión del sector público, incluidas tanto las empresas públicas no financieras como las administraciones públicas, pudiendo estas últimas comprender tres o más niveles de gobierno (central; estatal, provincial o regional; y local). Datos de Infralatam (2023[9]), *Datos de inversión pública en infraestructura económica en ALC*, http://infralatam.info/.

Percepción de los ciudadanos e instituciones

Proporción (%) de la población que percibe la IED como beneficiosa: porcentaje de encuestados que responden que "la inversión extranjera es beneficiosa" a la pregunta: ¿Considera que la inversión extranjera es beneficiosa o perjudicial para el desarrollo económico del país o considera que no sabe lo suficiente al respecto para opinar? Datos del Latinobarómetro (2023[10]), *Opinión Pública Latinoamericana*, www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.

Proporción (%) de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados: porcentaje de encuestados que están de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente afirmación: En general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados. Datos del Latinobarómetro (2023[10]), *Opinión Pública Latinoamericana*, www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.

Índice de percepción de la corrupción: mide la percepción que tienen los ciudadanos de los niveles de corrupción local en su país, donde 0 es completamente corrupto y 100 es totalmente incorrupto. Datos de Transparency International (2023[11]), *Corruption Perception Index*, www.transparency.org/en/cpi/2022.

Indicador de riesgos de seguridad: tiene en cuenta las amenazas a la seguridad de un Estado, como bombardeos, atentados y muertes en combate, movimientos rebeldes, motines, golpes de Estado o terrorismo. El Índice de riesgos de seguridad también contempla factores delictivos graves, como la delincuencia organizada y el número de homicidios, y la confianza percibida de los ciudadanos en la seguridad nacional. Un 0 significa riesgos de seguridad bajos y un 10, riesgos de seguridad altos. Datos del Fund for Peace (2023[12]), *Fragile States Index*, https://fragilestatesindex.org/global-data/.

Ciencia y tecnología: reacción promedio a la afirmación "Gracias a la ciencia y la tecnología, las generaciones venideras tendrán más oportunidades", donde un 1 es completamente en desacuerdo y un 10, completamente de acuerdo. Datos de la World Values Survey (2023[13]), *Online Data Analysis*, www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.

Educación: proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos. Datos de la World Values Survey (2023[13]), *Online Data Analysis*, www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.

Situación fiscal

Total de ingresos tributarios:[10] mide los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB. Datos de la OCDE (2022[14]), *Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL.

Ingresos tributarios ambientales:[11] mide los ingresos procedentes de impuestos relacionados con el medioambiente como porcentaje del PIB. Incluye los impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), impuestos sobre combustibles, impuestos sobre el uso de carreteras, impuestos forestales e ingresos procedentes de la subasta de permisos de sistemas de comercio de emisiones de GEI. Datos de la OCDE (2023[15]), *Ingresos tributarios ambientales*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR.

Proporción del IVA (impuesto sobre el valor agregado):[10] mide el IVA como porcentaje del PIB. Datos de la OCDE (2022[14]), *Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL.

Impuesto sobre la renta a las personas naturales:[10] mide los impuestos sobre los ingresos, beneficios y ganancias de capital a las personas naturales como porcentaje del PIB. Datos de la OCDE (2022[14]), *Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL.

Impuesto sobre las sociedades:[10] mide los impuestos sobre los ingresos, beneficios y ganancias de capital a las empresas como porcentaje del PIB. Datos de la OCDE (2022[14]), *Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL.

Percepción de la evasión de impuestos: mide la proporción de la población, como porcentaje de la población adulta, que afirma haber oído hablar de personas que pagan menos impuestos de los que deberían. Datos del Latinobarómetro (2023[10]), *Opinión Pública Latinoamericana*, www.latinobarometro.org/latOnline.jsp.

Gasto social:[12] mide el gasto público social como porcentaje del PIB. Los principales ámbitos de las políticas sociales son: población adultos mayores, supervivientes, prestaciones por incapacidad, salud, familia, políticas activas de mercado laboral, desempleo y vivienda, entre otros. En el caso de los países de la OCDE, los datos hacen referencia al *Gasto social* de la OCDE (2022[14]), *Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG. En el caso de los países de ALC, los datos hacen referencia al *Gasto social* de la CEPAL (2023[1]), *CEPALSTAT*, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat.

Servicio de la deuda: mide el servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios. El servicio de la deuda se calcula como la diferencia entre el balance fiscal primario y el balance fiscal. Los cálculos de los autores se basan en Datos del Fondo Monetario Internacional (2023[16]), *Base de datos de Perspectivas de la*

economía mundial, www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April y de la OCDE (2022[14]), *Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL.

Notas

1. Pobreza y pobreza extrema: Todos los datos son datos a nivel nacional, excepto los de Argentina, para los cuales solo se dispone de datos a nivel urbano (por lo que Argentina está excluida de los promedios de ALC). Brasil no tiene una estimación oficial de pobreza. Los datos corresponden a estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indicadas en la fuente con base en las líneas utilizadas por el Banco Mundial para países de ingresos bajos y medios-bajos. Los datos de Colombia de 2021 y 2022 corresponden a series nuevas, basadas en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, y no son comparables con datos de años anteriores. Para Ecuador, la medición de la CEPAL considera la muestra acumulada anual desde 2021. Los datos oficiales para Ecuador se basan en la muestra de diciembre de cada año. Los promedios ponderados de ALC para pobreza y pobreza extrema se pueden consultar en el Capítulo 1.
2. Coeficiente de Gini: En el caso de los promedios de la OCDE y ALC de 2016, los datos de Chile son de 2015. En el caso del promedio de ALC de 2021, los datos de Chile y México son de 2020, y los de Honduras son de 2019. En el caso del promedio de la OCDE de 2020: los datos de Islandia son de 2017; los de Australia, Canadá, Israel y Suiza son de 2018; y los de Alemania, Noruega, Polonia y Turquía son de 2019.
3. Indicadores de informalidad: En el caso de los promedios de informalidad por quintiles y general: en 2009, los datos de Argentina, Costa Rica, Colombia, México y Perú son de 2010; los datos de El Salvador y Honduras son de 2014; y los datos de Uruguay son de 2008. En el caso de los promedios de 2021, los datos de Chile son de 2017; los datos de Argentina, Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Uruguay son de 2018; los datos de Brasil, Honduras y Perú son de 2019, y los datos de Costa Rica y México son de 2020. Los países de los que no se dispone de datos para los dos años seleccionados no se han excluido de los promedios de los indicadores relativos a la proporción de la población total en hogares informales en términos generales y por quintiles.
4. Puntuación PISA en ciencias: El promedio de los países de ALC y de la OCDE es simple y no está ponderado siguiendo el esquema de ponderaciones replicadas como en www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2015-Technical-Report-Chapter-8-Survey-Weighting.pdf.
5. Exportaciones de productos de alta tecnología: En el caso del promedio de ALC de 2016, los datos de Belice son de 2017. En el caso del promedio de ALC de 2021, los datos de San Cristóbal y Nieves son de 2017; los datos de Antigua y Barbuda y Bahamas son de 2018; los datos de Honduras y Santa Lucía son de 2019; y los datos de Costa Rica, Jamaica, Perú y Uruguay son de 2020. En el caso del promedio de la OCDE de 2021, los datos de Costa Rica, Irlanda y Corea son de 2020.
6. Gasto en I+D: En el caso del promedio de la OCDE de 2016, los datos de Australia, Suiza y Nueva Zelanda son de 2017. En el caso de los promedios de la OCDE y ALC de 2019, los datos de Costa Rica son de 2018.
7. Inversión total: En el caso del promedio de ALC de 2022, los datos de Panamá son de 2017 y los de Bolivia, de 2021. En el caso del promedio de la OCDE, los datos de Japón, Nueva Zelanda y los Estados Unidos son de 2021.
8. Inversión extranjera directa: En el caso del promedio de ALC en 2022, los datos son de 2021 para Antigua y Barbuda, Barbados, Bermudas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. En el caso del promedio de ALC de 2022, los datos de Austria, Luxemburgo y Portugal son de 2021.
9. Inversión pública en infraestructura económica: En el caso del promedio de ALC en 2021, los datos de Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú son de 2019; y los de Chile, Costa Rica y México son de 2020.
10. Ingresos tributarios: En el caso del promedio de la OCDE con respecto al total de ingresos tributarios en 2021, los datos de Australia y Japón son de 2020. En el caso de los promedios de la OCDE con respecto a la proporción del IVA, del impuesto sobre la renta a las personas naturales y del impuesto sobre las sociedades en 2021, los datos de Australia, Grecia y Japón son de 2019.
11. Ingresos tributarios ambientales: En el caso del promedio de ALC, los datos de Colombia son de 2020. En el caso del promedio de la OCDE, los datos de Colombia, Grecia y Suiza son de 2020.
12. Gasto social: En el caso del promedio de ALC de 2021, los datos de Bolivia, Cuba y Panamá son de 2020. En el caso del promedio de la OCDE de 2021, los datos de Australia, México y Turquía son de 2019, y los de Canadá, Costa Rica y Japón son de 2020.

Referencias

ECLAC (2023), *CEPALSTAT. Statistical Databases and Publications*, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html. [1]

Infralatam (2023), *Data on Public Investment in Economic Infrastructure in Latin America and the Caribbean*, http://infralatam.info/. [9]

International Monetary Fund (2023), *IMF Data: Access to Macroeconomic & Financial data*, https://data.imf.org/?sk=388dfa60-1d26-4ade-b505-a05a558d9a42. [8]

International Monetary Fund (2023), *World Economic Outlook Database*, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April. [16]

International Telecommunication Union (2023), *Statistics, International Telecommunication Union, Geneva*, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. [3]

Latinobarómetro (2023), *Latinobarómetro: Opinión Pública Latinoamericana*, https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. [10]

OECD (2023), *Key Indicators of Informality based on Individuals and their Household (KIIbIH)*, https://www.oecd.org/dev/key-indicators-informality-individuals-household-kiibih.htm. [4]

OECD (2023), *OECD.Stat*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR. [15]

OECD (2023), *Science performance (PISA)* (indicator), https://doi.org/10.1787/91952204-en (accessed on 14 December 2023). [6]

OECD (2023), *Social Institutions and Gender Index*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SIGI2023. [5]

OECD (2022), *OECD.Stat: Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022*, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RS_GBL. [14]

The Conference Board (2023), *The Conference Board Total Economy Database™, April 2023*, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/total-economy-database-productivity. [7]

The Fund for Peace (2023), *Fragile States Index*, https://fragilestatesindex.org/global-data/. [12]

Transparency International (2023), *Corruption Perception Index*, http://www.transparency.org/en/cpi/2022. [11]

World Bank (2023), *World Bank Open Data*, https://data.worldbank.org/. [2]

World Values Survey (2023), *World Values Survey: Online Data Analysis*, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. [13]

ARGENTINA

1. Tendencias actuales

La pobreza en Argentina se incrementó del 21.5% en 2016 al 30.1% en 2022, por encima del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también aumentó, del 2.9% en 2016 al 3.9% en 2022, aunque se mantuvo por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini siguió en 42.0 entre 2016 y 2021, también por debajo del promedio de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Argentina aumentó del 14.3% del PIB en 2016 al 17.3% en 2022, aunque se mantuvo por debajo del promedio de ALC, que se incrementó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada, sin embargo, descendió ligeramente, del 8.0% del PIB al 7.7%, considerablemente por debajo del promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Argentina, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, disminuyó del 40.7% en 2016 al 34.9% en 2023, por lo que sigue estando por encima del promedio de ALC del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales descendió en el país del 9.0% en 2016 al 4.4% en 2021, por debajo del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, también lo hicieron en Argentina, del 59.3% en 2016 al 44.3% en 2020. Los ingresos tributarios del país descendieron ligeramente, del 30.7% del PIB en 2016 al 29.1% en 2021, una cifra que sigue siendo considerablemente superior al promedio regional del 21.5%. Los ingresos tributarios ambientales del país descendieron del 2.1% del PIB en 2016 al 1.1% en 2021.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Argentina ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en facilitar el acceso al financiamiento a las empresas que llevan a cabo proyectos de inversión. El país creó el programa de crédito para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas denominado CreAR, destinado a aquellas entidades que realizan proyectos de inversión y demuestran tener posibilidades de cambiar la estructura productiva promoviendo el desarrollo de cadenas de valor estratégicas, impulsando las exportaciones y sustituyendo de forma eficiente las importaciones. Desde 2009, Argentina también ha aplicado un Programa de Apoyo a la Competitividad destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que cofinancia, a través de aportes no reembolsables, asistencia técnica para que las empresas desarrollen capacidades empresariales y mejoren su competitividad. En consonancia con estas iniciativas, desde 2016, Argentina ha puesto en práctica el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo es promover el desarrollo de proveedores nacionales de sectores estratégicos, impulsar la industria, diversificar la matriz nacional de producción y promover la competitividad y la transformación productiva.

Para avanzar en un modelo productivo inclusivo y sostenible, Argentina ha centrado su programa nacional de promoción de parques industriales en cuatro ejes fundamentales: planificación territorial, promoción de la planificación productiva local, generación de empleo y fomento de regímenes empresariales y asociativos. En 2022, se creó el Programa de Emprendimientos Dinámicos para facilitar la puesta en marcha de proyectos que no tenían suficiente financiamiento mediante la concesión de aportes no reembolsables.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Argentina ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, crearon el Centro Latinoamericano de Biotecnología. Este Centro comprende una red de grupos de investigación en biotecnología y promueve la puesta en práctica de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo (I+D) y la formación de recursos humanos de alto nivel. **Fuera de ALC**, Argentina y la Unión Europea (UE) formalizaron (en 2023) un memorando de entendimiento centrado en la integración de las cadenas de valor sostenibles de las materias primas, como parte de la Iniciativa Global Gateway de la UE. Otros objetivos principales son: promover cadenas de valor sostenibles de las materias primas, actividades avanzadas de I+D; armonizar los criterios ambientales, de sostenibilidad y de gobierno (ASG); el desarrollo de infraestructuras; el fortalecimiento de capacidades; y generar empleo de calidad para potenciar el crecimiento económico y la transición al uso de energías limpias. Argentina participa además en un acuerdo de cooperación con el Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial de España. A través de dicho acuerdo, se financian proyectos empresariales, pilotos o prototipos, de empresas que participan en iniciativas de colaboración para crear tecnologías innovadoras con perspectivas de mercado.

Indicadores clave – Argentina						
	Argentina		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	2.9	3.9	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	21.5	30.1	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	71.0	87.2	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	42.0	42.0	46.3	44.8	34.1	33.6
	2010	**2018**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	34.5	36.8	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	12.2	14.1	23.9	21.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	72.8	35.0	77.6	78.5	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	N/A	17.7	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	432	404	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	40.7	34.9	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	9.0	4.4	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.6	0.5	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	14.3	17.3	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	0.6	2.4	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	8.0	7.7	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.1	1.0	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	59.3	44.3	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	34.6	34.0	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	36.0	38.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	4.0	4.6	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.5	7.6	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	48.0	48.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	30.7	29.1	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	2.1	1.1	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	7.1	7.0	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	2.1	2.2	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	2.9	2.5	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	6.2	6.2	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	14.2	14.6	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	34.7	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/5rgtfe

BRASIL

1. Tendencias actuales

La pobreza en Brasil disminuyó del 20.9% en 2016 al 19.5% en 2022, manteniéndose por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema, se situó en el 5.3% en 2022, por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini disminuyó de 53.3 en 2016 a 52.9 en 2021, manteniéndose por encima del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Brasil aumentó del 15.5% del PIB en 2016 al 18.8% en 2022, siguiendo la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada representó el 14.2% del PIB, una cifra ligeramente inferior al promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Brasil, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, fue del 24.7% en 2023, por debajo del promedio de ALC del 27.1%. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales descendió del 16.0% en 2016 al 9.0% en 2021, aunque se mantuvo por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, también lo hicieron ligeramente en Brasil, del 63.4% en 2016 al 60.0% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 31.6% del PIB en 2016 al 33.5% en 2021, en oposición a las tendencias regionales. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente igual, en el 0.7% en 2021.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Brasil ha hecho importantes esfuerzos **para atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en estimular la producción, adquisición y exportación de bienes de capital e innovación tecnológica. En 2009, creó el Programa de Apoyo a la Inversión, que funciona a través de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del país. Desde 2011, este programa funciona también a través de la Finep, para apoyar proyectos innovadores en el desarrollo de procesos y productos nuevos o innovadores que tengan oportunidades de mercado. El gobierno federal, junto con los organismos que a él pertenecen, promueve empresas innovadoras a través de regulaciones y programas públicos. En 2021, Brasil aprobó el Marco Legal para Start-ups, para reducir la burocracia de las pequeñas empresas innovadoras. Entre los programas públicos de promoción del desarrollo de las empresas emergentes están: *Inovativa Hub*, un programa gratuito de aceleración para empresas emergentes; *Centelha*, para fomentar la creación de empresas innovadoras; *Garagem*, financiado por el BNDES, para apoyar a empresas emergentes en etapas iniciales e intermedias; *Diplomacia de la Innovación*, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para internacionalizar los ecosistemas de innovación brasileños; *Startup Outreach*, un programa de varias partes interesadas para integrar las empresas emergentes en etapas intermedias o finales en prometedores ecosistemas de innovación internacionales; y *Sebrae Start-ups*, un programa de formación y aceleración orientado a empresas emergentes. Por lo que se refiere al impulso de la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), desde 2013 *EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)*, una entidad de financiamiento centrada en conectar centros de investigación y empresas privadas, invirtió alrededor de 648 millones de USD en el financiamiento de proyectos de I+D en Brasil.

Para avanzar en un modelo productivo inclusivo y sostenible, Brasil enfoca su Plan de Desarrollo Sostenible de 2030 en cinco misiones clave: futuro digital e inclusivo, innovación en bioeconomía y Amazonía, agronegocio responsable, ciudades e infraestructuras sostenibles, y salud como motor de desarrollo. Además, el gobierno participa en el desarrollo de infraestructuras a través de la Secretaría Especial del Programa de Asociaciones de Inversión (SEPPI), con más de 321 proyectos desde 2016, abarcando sectores como transporte, energía, 5G y atención sanitaria. El nuevo *Programa de Aceleração do Crescimento* (PAC), con una inversión planeada de 1.7 billones de BRL en cuatro años, busca estimular el crecimiento económico y reducir desigualdades a través de nueve ejes principales: infraestructura social inclusiva; transporte sostenible; inclusión digital; agua; seguridad y transición energética; innovación en defensa, educación y tecnología; ciudades resilientes, y salud.

En cuanto a las **asociaciones regionales e internacionales** para promover inversiones de calidad, Brasil colabora con socios dentro y fuera de ALC. **Dentro de la región**, creó un programa de formación para países de ALC, avanzando en la defensa de la competencia y fortaleciendo su posición como referencia. Junto a Uruguay y con el apoyo de la CAF, se está examinando la creación de una vía navegable (*Lagoa Mirim* y *Canal de São Gonçalo/rs*) que genere efectos económicos y ambientales positivos. **Fuera de ALC**, Brasil impulsa un programa de desarrollo urbanístico en Mozambique y un programa de cooperación con la UE en el marco de la Iniciativa *Global Gateway*. Este último supone una inversión de la UE de 2 000 millones de EUR en hidrógeno verde y eficiencia energética en la industria brasileña. La UE continuará apoyando proyectos como *EllaLink*, co-financiado por Brasil, y la inversión e investigación en biocombustibles y tecnología de la información.

	Indicadores clave – Brasil					
	Brasil		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	5.3	5.3	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	20.9	19.5	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	60.9	80.7	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	53.3	52.9	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2019**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	37.7	29.8	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	20.2	7.9	23.9	21.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	72.7	75.5	20.2	7.9	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	21.2	21.6	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	401	404	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	26.6	24.7	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	16.0	9.0	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	1.3	1.2	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	15.5	18.8	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	4.1	4.8	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	13.5	14.2	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2019**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	0.5	0.4	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe que la IED es beneficiosa (%)	63.4	60.0	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	47.1	48.0	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	40.0	38.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	6.4	6.5	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.6	7.1	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	82.0	75.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	31.6	33.5	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.9	0.7	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	6.6	7.6	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	2.6	3.0	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	3.2	3.7	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	20.5	15.0	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	17.3	17.3	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	24.5	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/bcs40g

CHILE

1. Tendencias actuales

La pobreza en Chile fue del 8.1% en 2022, por lo que se mantuvo por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema se situó en el 2.1% en 2022, cifra inferior al promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini fue de 44.9 en 2020, prácticamente a la par del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Chile aumentó del 24.1% del PIB en 2016 al 24.8% en 2022, manteniéndose por encima del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada aumentó ligeramente en Chile, del 20.9% del PIB en 2016 al 21.1% en 2019, por encima del promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Chile, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, se mantuvo prácticamente sin cambios, al aumentar del 41.3% en 2016 al 41.4% en 2023, una cifra considerablemente por encima del promedio de ALC del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales se incrementó del 8.4% en 2016 al 12.4% en 2021, por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, también lo hicieron de manera significativa en Chile, del 68.1% en 2016 al 45.7% en 2020. En oposición a una tendencia de descenso en la región, los ingresos tributarios de Chile aumentaron del 20.2% del PIB en 2016 al 22.2% en 2021. De forma similar al promedio de ALC, los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente iguales, en el 1.0% en 2021.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Chile ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en simplificar, facilitar y optimizar los procesos de inversión. Se ha creado el plan *Invirtamos en Chile* cuyos objetivos son establecer incentivos tributarios a la inversión privada, mejorar el acceso a financiamiento, generar propuestas para mejorar la inversión pública, promover la inversión extranjera, mejorar la eficiencia de los trámites regulatorios y obtención de permisos, así como promover las asociaciones público-privadas para invertir. Desde 2016, Chile cuenta con un organismo de promoción de la IED denominado *InvestChile*, creado en virtud de la Ley 20.848. *InvestChile* lidera la búsqueda activa de empresas extranjeras específicas para atraerlas al país, a las cuales ayuda con la búsqueda de clientes potenciales y el proceso de instalación. Este organismo promueve además la reinversión por parte de empresas ya establecidas en Chile para llevar a cabo nuevos proyectos y ampliar sus vínculos con productores locales, en particular con pequeñas empresas y sociedades situadas en el ámbito subnacional. Desde 2023, *InvestChile* ha aplicado su Estrategia Nacional de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera Directa, que busca contribuir activamente, a través de una política proactiva de atracción de proyectos de IED, a la recuperación económica y el desarrollo sostenible.

Para avanzar en un modelo productivo inclusivo y sostenible, Chile ha centrado su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en varios ejes: personas; planeta; prosperidad; paz, justicia e instituciones; y alianzas. El principal objetivo de este programa es proporcionar una hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en un contexto de paz, justicia y alianzas. Es flexible y se puede adaptar a las necesidades específicas de cada región y localidad, ya que pretende generar condiciones propicias para la elaboración de estrategias subnacionales de desarrollo sostenible, tomando como base una hoja de ruta nacional y una organización subnacional que facilite la representación de los diversos actores locales. Desde 2020, Chile cuenta con una Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, dividida en tres etapas principales: la primera (2020-2025) tiene por objetivo activar la industria doméstica y desarrollar la exportación; la segunda (2025-2030) está destinada a apalancar la experiencia local para entrar con fuerza en mercados internacionales; y la tercera (de 2030 en adelante) explotará las sinergias y economías de escala para avanzar como proveedor global de energéticos limpios.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Chile ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, Chile posee varios proyectos de cooperación con Argentina, como la iniciativa "Transferencia de experiencias y buenas prácticas en el área del comercio exterior, oportunidades y barreras para el libre flujo de bienes y servicios entre la Provincia de Neuquén y la Región de La Araucanía", cuyo objetivo es reforzar el comercio entre estas dos regiones. **Fuera de ALC**, Chile y la Unión Europea (UE), como parte de la Iniciativa Global Gateway de la UE, están cooperando en la creación de cadenas locales de valor para materias primas críticas que promuevan las transiciones digital y a las energías limpias (p. ej., el litio), el avance del hidrógeno verde y la producción de combustibles que no emitan carbono usando energía eólica. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará proyectos de acción climática en Chile por un importe superior a 300 millones de EUR. En el marco del programa Ecovivienda, su primer préstamo hipotecario verde fuera de Europa, el BEI financiará hipotecas de casas nuevas con mejores niveles de eficiencia energética. Asimismo, el Banco también apoya el sector del hidrógeno renovable de Chile, que contribuirá a la consecución del objetivo nacional de tener un 100% de energía limpia para 2050.

	Indicadores clave – Chile					
	Chile		ALC		OCDE	
Social						
	2015	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	1.8	2.1	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	13.7	8.1	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	83.6	90.2	54.5	74.2	81.8	89.6
	2015	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	44.4	44.9	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2017**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	24.5	20.2	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	17.3	7.0	23.9	21.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	39.4	46.0	20.2	7.9	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	36.1	27.2	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	447	444	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	41.3	41.4	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	8.4	12.4	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.4	0.3	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	24.1	24.8	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	4.6	6.9	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	20.9	21.1	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	2.6	2.3	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	68.1	45.7	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	37.7	58.2	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	66.0	67.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	2.9	3.9	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.5	6.8	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	65.0	66.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	20.2	22.2	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	1.2	1.0	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	8.3	9.5	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	1.8	2.4	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	4.2	3.8	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	1.4	2.8	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	16.2	24.9	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	14.1	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/5gx6z8

COLOMBIA

1. Tendencias actuales

La pobreza en Colombia se incrementó del 30.9% en 2016 al 34.5% en 2022, manteniéndose por encima del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también se incrementó del 12.0% en 2016 al 16.9% en 2022, por encima del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini aumentó de 50.6 en 2016 a 51.5 en 2021, manteniéndose por encima del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Colombia fue del 19.0% en 2022, frente al promedio de ALC del 21.3% en el mismo período. La productividad laboral de Colombia, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, aumentó del 25.9% en 2016 al 28.1% en 2023, por encima del promedio de ALC del 27.1%. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales disminuyó del 10.2% en 2016 al 8.2% en 2021, aunque se mantuvo por encima del promedio de ALC (7.2%). La percepción positiva de la inversión extranjera directa (IED), que descendió en toda la región, también lo hizo notablemente en Colombia, desde el 55.9% en 2016 al 37.2% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron ligeramente, del 19.1% del PIB en 2016 al 19.5% en 2021, por lo que esquivaron la tendencia regional descendente. Los ingresos tributarios ambientales descendieron ligeramente, del 0.8% del PIB en 2016 al 0.6% en 2020.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Colombia ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en promover el aumento de los niveles de formalidad de las empresas en la economía. En 2019, Colombia introdujo la Política de Formalización Empresarial (documento CONPES n.º 3956), por la cual se optimizan los procesos de formalización de empresas, se mejora el cumplimiento de las regulaciones, se recaban mejores datos empresariales y se comparten pruebas sobre los impactos de las políticas. Para lograr estos objetivos, la política de formalización redujo las tarifas del registro mercantil, lo que generó un ahorro colectivo para los empresarios de cerca de 85 393 millones de COP en 2022. La política amplió además la "ventanilla única empresarial" a 57 lugares de toda la nación, lo que facilitó la creación de 177 599 empresas de junio de 2018 a diciembre de 2022. En 2020, Colombia formalizó la Metodología de Articulación para la Competitividad (ArCo), basada en cinco objetivos principales: promover la articulación desde y hacia los usuarios; mejorar la eficiencia del gasto público; orientar el presupuesto a resultados; definir una oferta regionalizada; y reforzar la transparencia de la información y el acceso a esta. Durante el mismo año, el Gobierno nacional puso en marcha la plataforma *Innovamos* para agrupar todas las convocatorias y los programas públicos relacionados con la competitividad y la innovación en ciencia, tecnología e innovación. Esta plataforma ha simplificado el proceso de solicitud para los ciudadanos y las empresas que desean aprovechar instrumentos de política nacional, al facilitar de manera eficiente información pertinente.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, Colombia creó el Plan Nacional de Desarrollo de 2022-2026, titulado "Colombia, potencia mundial de la vida". Este plan se estructura en torno a cinco transformaciones esenciales: i) ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental; ii) preservación de la riqueza natural, la seguridad humana y la justicia social; iii) derecho humano a la alimentación; iv) transformación productiva, internacionalización y acción climática; y v) convergencia regional. En cuanto al crecimiento inclusivo, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia creó el Consejo Nacional de la Economía Popular, cuyo objetivo es incentivar con firmeza las economías comunitarias mediante el impulso de unidades productivas pequeñas y medianas. En 2022, Colombia actualizó, aprobó y puso en marcha también la aplicación de la primera fase del plan de acción de la "Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Cerrando la brecha". Su objetivo es movilizar de manera eficaz recursos para financiar iniciativas de mitigación y adaptación a lo largo de todo el ciclo de políticas, en aras de conseguir los objetivos nacionales en materia de cambio climático con equidad y justicia.

Por lo que se refiere a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Colombia ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, Colombia ofrece y recibe cooperación Sur-Sur y triangular relacionada con la transformación productiva, el empleo y la competitividad, junto con Chile, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. **Fuera de ALC**, la Unión Europea apoya iniciativas de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y financia proyectos que tratan de construir modelos de desarrollo sostenible y promover iniciativas de paz. Asimismo, junto con el Reino Unido y Alemania, Colombia participa en el Corredor de Financiamiento Climático. Por último, la Alianza Digital UE-ALC debería promover el uso de las tecnologías digitales en favor del programa de paz, la transición verde, la conservación de los recursos naturales y el cierre de las brechas social y geográfica en Colombia.

	Indicadores clave – Colombia					
	Colombia		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	12.0	16.9	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	30.9	34.5	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	58.1	73.0	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	50.6	51.5	46.3	44.8	34.1	33.6
	2010	**2021**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	62.6	54.1	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	44.3	17.9	23.9	21.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	69.6	90.2	44.3	17.9	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	15.0	23.5	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	416	413	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	25.9	28.1	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	10.2	8,2	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.3	0.3	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	22.1	19.0	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	4.9	4.9	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	18.2	18.2	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2019**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.7	1.4	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	55.9	37.2	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	38.2	29.6	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	37.0	39.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	7.0	6.6	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.0	7.2	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	91.0	69.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	19.1	19.5	22.0	21.5	33.6	34.1
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.8	0.6	1.1	0.9	2.4	2.0
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción del IVA (% PIB)	4.8	5.9	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	1.1	1.3	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	4.9	4.6	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	10.1	14.7	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	12.5	15.0	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	25.5	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/a7wnyz

COSTA RICA

1. Tendencias actuales

La pobreza en Costa Rica fue del 16.6% en 2022, considerablemente por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema descendió del 4.2% en 2016 al 3.3% en 2022, también muy por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini se mantuvo sin cambios, en el 48.7 de 2016 a 2021, por encima del promedio de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Costa Rica se mantuvo prácticamente sin cambios en los pasados años, cerca del 18% del PIB en 2022 (frente al promedio de ALC del 21.3% en el mismo año). La inversión privada descendió del 13.3% del PIB al 11.1%, por debajo del promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Costa Rica, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, aumentó del 38.8% en 2016 al 39.1% en 2023, por encima del promedio de ALC del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales representó el 15.7% en 2020, más del doble del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región, también lo hicieron en Costa Rica, del 70.8% en 2016 al 62.1% en 2020. En contraste con una tendencia regional descendente, los ingresos tributarios del país aumentaron del 23.5% del PIB en 2016 al 24.2% en 2021. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente sin cambios durante dicho período, en el 2.1% en 2021, más del doble del promedio de ALC (0.9% del PIB en 2021).

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Costa Rica ha hecho importantes esfuerzos **para atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en simplificar, facilitar y optimizar los procesos de inversión. El país creó una ventanilla única de inversión, que constituye un esfuerzo interinstitucional por facilitar los procesos para fomentar la inversión, eliminar requisitos innecesarios, reducir el tiempo y los costos, y promover la trazabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica. Desde 2023, Costa Rica también ha mejorado su Estrategia de Inversión Extranjera Directa para atraer y retener IED que contribuya a tres áreas fundamentales: la diversificación de las exportaciones, la creación de empleo y el desarrollo sostenible e inclusivo en todas las regiones, con una especial concentración en la Gran Área Metropolitana.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública de 2023-2026 centra el programa de inversión en siete sectores fundamentales: educación; cultura; finanzas públicas; agricultura y ganadería; salud; seguridad pública y justicia; y transporte y obras públicas. Para lograr los objetivos del plan, será necesaria una inversión total estimada superior a los 13 800 millones de USD. En 2022, Costa Rica publicó su Plan Estratégico Nacional 2050, cuyo objetivo es hacer una transición de un modelo de desarrollo históricamente centralizado a otro *modelo de desarrollo económico y social* descentralizado, digitalizado y descarbonizado (3D). Con el compromiso de convertirse en una economía moderna, verde y sin emisiones, Costa Rica definió un Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, centrado en los sectores del transporte y la movilidad, la energía, el medioambiente, la agricultura, la industria, la construcción y la planificación del uso del suelo.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Costa Rica ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, Costa Rica firmó un convenio de cooperación para el desarrollo transfronterizo con Panamá, cuyo objetivo es profundizar en las relaciones de cooperación gracias a mejoras socioeconómicas, ambientales y políticas en la región fronteriza, así como al impulso de la integración entre ambos países. En el marco de dicho convenio, se construyó el Corredor Vial Atlántico en la zona fronteriza Sixaola/Guabito, que promueve la integración vial de ambos países a través de un sistema de transporte eficiente, económico y seguro. Esto fomentará el desarrollo económico y social de la región atlántica, al tiempo que reduce los costos de operación vehicular. **Fuera de ALC**, Costa Rica participa en varias acciones de cooperación con la Unión Europea (UE), entre ellas: el fortalecimiento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) en la Gran Área Metropolitana y las ciudades periféricas para mejorar la gestión del sistema e impulsar la resiliencia al cambio climático; el fortalecimiento de la capacidad para reducir el riesgo de desastres debido a inundaciones y sequías; el fortalecimiento de la capacidad institucional para promover y desarrollar la producción agrícola orgánica; y el desarrollo de la Estrategia de la Acción Nacional para el Empoderamiento Climático.

	Indicadores clave – Costa Rica					
	Costa Rica		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	4.2	3.3	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	16.5	16.6	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	65.9	82.8	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	48.7	48.7	46.3	44.8	34.1	33.6
	2010	**2020**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	26.9	26.8	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	5.9	2.8	23.9	21.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	69.3	81.4	77.6	78.5	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	27.9	10.9	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	420	416	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	38.8	39.1	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	18.4	15.7	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2018**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.4	0.4	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	18.8	17.9	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	4.5	5.2	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	13.3	11.1	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	2.5	1.7	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	70.8	62.1	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	34.9	30.5	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	58.0	54.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	3.3	3.2	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las generaciones venideras (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	N/A	N/A	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	N/A	N/A	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	23.5	24.2	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	2.3	2.1	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	4.4	5.1	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	1.3	1.6	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	2.3	2.4	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	11.8	20.0	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	11.9	11.7	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	33.8	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/fbp81l

REPÚBLICA DOMINICANA

1. Tendencias actuales

La pobreza en la República Dominicana disminuyó en los últimos años, del 26.7% en 2016 al 20.4% en 2022, y actualmente se sitúa por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también disminuyó, del 7.0% en 2016 al 5.1% en 2022, también por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini cayó con fuerza, de 45.7 en 2016 a 38.5 en 2021, y ha vuelto a situarse por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en la República Dominicana aumentó considerablemente, del 22.9% del PIB en 2016 al 33.2% en 2022, superando con creces la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada también aumentó en la República Dominicana, del 20.5% del PIB al 21.7%, superando el promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, aumentó del 29.6% en 2016 al 33.5% en 2023, por encima del promedio de ALC, del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales prácticamente se duplicó, del 4.4% en 2016 al 8.5% en 2021, por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en la región de ALC, también lo hicieron de manera pronunciada en la República Dominicana, del 85.1% en 2016 al 65.3% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 13.0% del PIB en 2016 al 14.5% en 2021, aunque se mantuvieron considerablemente por debajo del promedio regional del 21.5%. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente sin cambios, al descender del 1.8% del PIB en 2016 al 1.7% en 2021, por lo que prácticamente duplican el promedio regional del 0.9%.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

La República Dominicana ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, con un amplio sistema de incentivos para dinamizar sectores clave de la economía. Creó la Ley n.º 16-95 sobre Inversión Extranjera y su Reglamento n.º 214-04 para proteger a inversores extranjeros y facilitar la repatriación de capital. En 2020, aprobó la Ley 47-20 para regular alianzas público-privadas, estableciendo la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), fundamental para atraer capital y desarrollar infraestructuras. En 2021, se promulgó la Ley n.º 12-21 que creó la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y el régimen de incentivos en varias provincias. Desde 2021, el "Programa Cero Burocracia: hacia un Gobierno Eficiente", se ha propuesto aumentar la productividad, reducir costos y agilizar los servicios públicos.

Para avanzar en un modelo productivo inclusivo y sostenible, la República Dominicana enfoca su Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30 en cuatro ejes: instituciones eficientes y transparentes; una sociedad cohesionada con igualdad de oportunidades; economía innovadora y sostenible con crecimiento alto, sostenido, y empleo decente; y manejo sostenible del medio ambiente y adaptación al cambio climático. En 2007, creó la Ley 57-07 para incentivar las fuentes renovables de energía, eximiendo de impuestos a equipos y accesorios necesarios para la producción de energía verde, reduciendo impuestos a financiamiento externo y otorgando incentivos fiscales a autoproductores de energía.

En cuanto a las **asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, la República Dominicana colabora en iniciativas regionales e internacionales. **Dentro de la región**, forma parte de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica para articular políticas nacionales y objetivos estratégicos comunes en la materia. **Fuera de ALC**, la República Dominicana y la Unión Europea, cooperan en áreas prioritarias del Programa Indicativo Plurianual (MIP) 2021-2024: empleabilidad y emprendimiento, en particular entre las mujeres y los jóvenes; la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad; y la prestación eficiente de planificación y servicios públicos. También participa, junto con Alemania, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y otros países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). en la Iniciativa MIPYMES verdes II, promoviendo el financiamiento de inversiones ambientales e infraestructura energética.

	Indicadores clave – República Dominicana					
	República Dominicana		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	7.0	5.1	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	26.7	20.4	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	63.9	85.2	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	45.7	38.5	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2018**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	N/A	42.3	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	N/A	15.7	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	N/A	74.9	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	18.2	14.8	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	332	336	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	29.6	33.5	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	4.4	8.5	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	N/A	N/A	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	22.9	33.2	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	3.3	3.5	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	20.5	21.7	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.4	0.6	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	85.1	65.3	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	55.7	51.1	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	31.0	32.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	5.5	5.8	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	N/A	N/A	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	N/A	N/A	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	13.0	14.5	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	1.8	1.7	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	4.6	4.8	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	1.2	1.3	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	2.0	2.8	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	19.5	21.5	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	7.7	8.9	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	27.9	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/b2fqa5

ECUADOR

1. Tendencias actuales

La pobreza en Ecuador se situó en el 25.7% en 2022, por encima del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema cayó del 7.5% en 2016 al 6.9% en 2022, por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini fue de 45.8 en 2021, manteniéndose por encima del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Ecuador disminuyó del 25.1% del PIB en 2016 al 21.3% en 2022. Durante ese mismo período, la inversión regional total aumentó en promedio del 20.8% al 21.3%. Cabe destacar que, en paralelo, la inversión privada se incrementó con fuerza, del 13.1% del PIB al 17.8%, superando el promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral del Ecuador, con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, disminuyó del 20.5% en 2016 al 18.2% en 2023, con lo que siguió cayendo por debajo del promedio de ALC, del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales fue del 4.8% en 2021, considerablemente por debajo del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en la región de ALC, también lo hicieron de manera pronunciada en Ecuador, del 83.9% en 2016 al 48.3% en 2020. Los ingresos tributarios del país descendieron ligeramente, del 19.9% del PIB en 2016 al 19.4% en 2021 (por debajo del 21.5% promedio de ALC). Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron bajos y prácticamente sin cambios, en el 0.4% en 2016 y el 0.3% en 2021.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Ecuador ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en simplificar, facilitar y optimizar los procesos de inversión. Creó un Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de las Inversiones con el objetivo de reducir tiempos, costos y número de trámites para el establecimiento de la inversión privada; incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones; y gestionar y evaluar mejor la ejecución de proyectos de inversión. Desde 2021, Ecuador ha puesto en funcionamiento también una Ventanilla Única de Inversiones que brinda a los inversionistas un canal único para gestionar todos los permisos y autorizaciones necesarios para el inicio de sus operaciones de forma rápida y transparente. En consonancia con estos esfuerzos, el Decreto Ejecutivo n.º 68 de 2021 declara política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción, la simplificación de trámites y la Agenda de Competitividad del país.

Para avanzar en un modelo productivo inclusivo y sostenible, Ecuador ha centrado su Plan de Creación de Oportunidades para 2021-2025 en cinco ejes fundamentales: económico, social, seguridad integral, ambiental e institucional. El plan cuenta con una inversión total estimada de más de 14 000 millones de USD. En 2021, se creó la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada, junto con la regulación de las asociaciones público-privadas. Esta entidad coordina y articula las medidas interinstitucionales para atraer, facilitar, materializar y mantener inversiones privadas, centradas en la generación de infraestructura y en la prestación de servicios públicos a través de varias modalidades de gestión delegada. Para **fortalecer el sector energético**, Ecuador diseñó un Plan Maestro de Electricidad 2020-2031. En 2022, se encontraban en fase de ejecución seis proyectos hidroeléctricos, uno de energía eólica y otro de fotovoltaica, además de otros nueve proyectos, previstos para estar operativos en 2024. En relación con el cambio climático, en junio de 2023, Ecuador publicó la norma técnica por la que se crea el mecanismo de compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero de Ecuador, cuyo objetivo es reducir las emisiones y aumentar la eliminación de ese tipo de gases.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Ecuador ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas de Ecuador firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el período 2023-2025 con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión). El objetivo de este convenio es promover la cooperación, el intercambio de experiencias y la asistencia mutua entre las instituciones, con especial atención a la transferencia de conocimientos relacionados con las asociaciones público-privadas. **Fuera de ALC**, Ecuador es miembro de Euroclima, el programa insignia de la Unión Europea para promover medidas verdes en países de ALC. La Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC puede seguir redoblando esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y las inversiones tanto locales como internacionales. Algunos proyectos específicos en curso sobre clima y energía son: "Un Pacto Verde para Ecuador" que promueve medidas y marcos institucionales para ejecutar proyectos de mitigación climática y bajas emisiones de carbono a nivel subnacional; la promoción del desarrollo de un mercado de bonos verdes; el fortalecimiento de la integración energética de la región andina, en particular la infraestructura de transmisión de electricidad entre Ecuador y Perú; y la Alianza por los Bosques entre la UE y Ecuador en Ukumari para promover el uso sostenible de la biodiversidad de los bosques, la agrosilvicultura y la recuperación forestal, incluida la protección de la reserva marina de Galápagos.

	Indicadores clave – Ecuador					
	Ecuador		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	7.5	6.9	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	24.3	25.7	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	54.1	76.2	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	45.0	45.8	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2021**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	N/A	N/A	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	N/A	N/A	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	N/A	N/A	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	28.9	17.0	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	N/A	N/A	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	20.5	18.2	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	9.2	4.8	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	N/A	N/A	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	25.1	21.3	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	0.8	0.7	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	13.1	17.8	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	2.9	0.3	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	83.9	48.3	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	51.4	45.8	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	31.0	36.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	6.5	5.6	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.3	7.0	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	78.0	80.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	19.9	19.4	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.4	0.3	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	6.0	6.2	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	N/A	N/A	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	N/A	N/A	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	7.7	6.7	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	8.8	11.0	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	27.9	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/tqzpay

EL SALVADOR

1. Tendencias actuales

La pobreza en El Salvador ha disminuido considerablemente en los últimos años, del 40.4% en 2016 al 29.8% en 2022, aunque se mantiene por encima del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también disminuyó, del 10.7% en 2016 al 8.7% en 2022, ligeramente por encima del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini se redujo, de 40.0 en 2016 a 39.0 en 2021, manteniéndose por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en El Salvador aumentó del 15.5% del PIB en 2016 al 20.0% en 2022, demostrando una tasa de crecimiento más sólida que la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada también aumentó en El Salvador, del 13.6% del PIB al 15.8%, igual que el promedio de ALC (15.8% en 2019). La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales aumentó del 5.4% en 2016 al 7.4% en 2021, de manera que se colocó ligeramente por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, mostraron un ligero aumento en El Salvador, del 71.3% en 2016 al 72.0% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 20.5% del PIB en 2016 al 23.3% en 2021, en oposición a la tendencia regional descendente. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron sin cambios, representando el 0.6% del PIB de 2016 a 2021, por debajo del promedio de ALC del 0.9%.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

El Salvador ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en crear nuevas instituciones para promover la inversión. Se creó una nueva Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (INVEST) para atraer inversión de calidad en sectores prioritarios seleccionados: agroindustria; energía; turismo; productos químicos farmacéuticos; manufacturas; textiles y prendas de vestir; bitcoin; tecnologías digitales; y servicios. De 2023 a 2027, El Salvador implementará la Estrategia de Agilización y Modernización del Comercio Exterior a través del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, que tiene por objeto facilitar, modernizar y promover el comercio exterior en El Salvador, así como mejorar la prestación de servicios públicos y la colaboración interinstitucional, simplificando y centralizando los procedimientos.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, El Salvador ha centrado su Política de Comercio e Inversiones 2020-2050 en tres macrobjetivos principales: aumentar la importancia de las exportaciones en el PIB; eliminar el déficit de la balanza de pagos; y aumentar el volumen de IED. La Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio de El Salvador 2023-2027 se centra en seis ejes principales: agilizar y digitalizar los trámites para conseguir un clima competitivo; modernizar la infraestructura logística para dar con una nueva forma de hacer negocios; promover una gestión fronteriza coordinada y unificada; modernizar el marco jurídico de comercio exterior; promover la transparencia y la disponibilidad de la información sobre comercio exterior; y gestionar el talento humano.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, El Salvador ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, El Salvador participa (junto con Honduras y Guatemala) en un programa cuyo objetivo es integrar los países del Triángulo Norte en las cadenas de valor regionales. Dicho programa pretende además impulsar la culminación de los estudios superiores, dotando a los trabajadores de competencias básicas en inglés y certificaciones en tecnologías de la información. Un total de 191 personas realizaron el curso de inglés y, como resultado, 131 fueron contratadas. Está planificado también un programa de formación piloto en francés. **Fuera de la región**, El Salvador y la Unión Europea (UE) cooperan, a través de la Iniciativa Global Gateway de la UE, en un programa de inversión que comprende varios proyectos de infraestructura, entre ellos: en primer lugar, la unión de los puertos de Acajutla y San Salvador mediante 108 kilómetros de vías ferroviarias; en segundo lugar, la construcción de un sistema de transporte eléctrico de pasajeros en el área metropolitana de San Salvador; y en tercer lugar, dotar de conectividad por banda ancha los centros escolares y de salud públicos de zonas sin servicio, entre otros. El Salvador participa en el Proyecto de USAID para la Competitividad Económica, una iniciativa de cinco años que persigue el fortalecimiento de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas para aumentar la competitividad del país, ampliando la competencia en los mercados nacional y de exportación. Se ha creado la plataforma digital MiEmpresa.gob.sv como una ventanilla única para facilitar y digitalizar el proceso de formalización de empresarios y empresas que inician su actividad. El proyecto cuenta con asistencia técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y con financiamiento de Luxemburgo y Estados Unidos.

	Indicadores clave – El Salvador					
	El Salvador		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	10.7	8.7	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	40.4	29.8	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	29.0	62.9	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	40.0	39.0	46.3	44.8	34.1	33.6
	2015	**2021**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	52.4	54.4	44.2	46.8	N/A	N/A
	2014	**2021**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	20.5	20.7	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	90.4	95.0	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	22.9	19.6	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	N/A	N/A	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	N/A	N/A	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	5.4	7.4	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.1	0.2	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	15.5	20.0	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	2.0	0.0	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	13.6	15.8	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.2	1.7	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	71.3	72.0	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	51.1	50.9	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	36.0	33.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	7.0	6.3	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	N/A	N/A	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	N/A	N/A	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	20.5	23.3	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.6	0.6	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	7.5	9.6	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	3.0	3.2	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	3.2	3.8	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	14.2	19.5	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	7.8	12.6	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	27.0	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/0pt3ke

GUATEMALA

1. Tendencias actuales

Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Guatemala aumentó del 13.9% del PIB en 2016 al 16.8% en 2022, siguiendo la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada se incrementó ligeramente en Guatemala, del 12.6% del PIB al 12.8%, aunque se mantiene por debajo del promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Guatemala, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, en general se mantuvo sin cambios, al situarse en el 15.7% en 2016 y el 15.8% en 2023, por debajo del promedio de ALC del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales descendió del 5.8% en 2016 al 5.2% en 2021, por debajo del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, también lo hicieron en Guatemala, del 55.1% en 2016 al 45.5% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 13.2% del PIB en 2016 al 14.2% en 2021, manteniéndose por debajo del promedio regional del 21.5%. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente sin cambios, al descender del 0.9% del PIB en 2016 al 0.8% en 2021.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Guatemala ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en crear nuevos puestos de trabajo de calidad. Constituyó el plan *Guatemala no se detiene*, cuyo objetivo es fortalecer sectores en los que Guatemala ya tiene un desempeño eficiente, para aumentar las exportaciones en 5 000 millones de USD para 2030, y atraer nuevas inversiones, aprovechando las ventajas competitivas que le brinda su proximidad con mercados importantes de todo el mundo. Los sectores principales identificados han sido el de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, dispositivos electrónicos y la prestación de servicios de externalización de procesos empresariales y tecnología de la información. Este plan promueve la atracción de más IED al país abordando cinco ejes principales: priorización de sectores, capital humano, infraestructura, seguridad jurídica y turismo.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, Guatemala ha centrado su Política Nacional de Competitividad 2018-2032 en tres directrices estratégicas, denominadas 11-11-9: 11 clústeres con el mayor potencial de generación de empleo; 11 prioridades que Guatemala debe abordar en términos de competitividad; y 9 territorios aptos para su agrupación en ciudades intermedias. En 2015, se formuló la Política Nacional de Emprendimiento *Guatemala emprende*, aplicable a la mayoría de los sectores económicos del país. Su objetivo principal es fomentar una cultura de emprendimiento que promueva nuevas formas de pensar y actuar, que contribuyan al desarrollo humano, económico, social y ambiental del país. Para lograrlo, se puede facilitar la creación, el establecimiento y el fortalecimiento de empresas sostenibles, la generación de riqueza, la creación de un clima empresarial adecuado para atraer inversión y la creación de empleos de calidad para los guatemaltecos.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Guatemala ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. Guatemala ha formalizado marcos de cooperación con el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y los gobiernos de España, Colombia, Estados Unidos y Chile encaminados a promover el desarrollo sostenible. Las iniciativas de cooperación Sur-Sur se han centrado en el empleo y la inversión, que son elementos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo del país. Las instituciones nacionales que participaron en esta iniciativa fueron (entre otras) el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Entre los principales proyectos desarrollados en este contexto están las Redes de Inclusión Laboral y Emprendimiento Juvenil para la Generación de Empleo. Guatemala también es miembro de Euroclima, el programa insignia de la UE para promover medidas verdes en países de ALC. El Programa Indicativo Plurianual de Euroclima 2021-2024 de Guatemala se centra en tres áreas prioritarias: i) un Acuerdo Verde, que apoya el desarrollo de una agricultura a pequeña escala inclusiva, sostenible y resiliente; ii) crecimiento sostenible e inclusivo, que promueve una estructura económica abierta, inclusiva y competitiva, y también un clima de inversión sólido; y iii) buena gobernanza y desarrollo humano, que promueve administraciones nacionales, regionales y locales sólidas, responsables y transparentes.

	Indicadores clave – Guatemala					
	Guatemala		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	N/A	N/A	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	N/A	N/A	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	34.5	50.8	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	N/A	N/A	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2021**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	N/A	N/A	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	N/A	N/A	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	N/A	N/A	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	28.6	25.7	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	N/A	N/A	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	15.7	15.8	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	5.8	5.2	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.0	0.0	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	13.9	16.8	20.8	21.3	21.9	22.8
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	1.3	1.4	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	12.6	12,8	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	0.5	0.8	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe que la IED es beneficiosa (%)	55.1	45.5	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	46.6	41.4	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	28.0	24.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	7.3	6.5	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	N/A	7.1	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	N/A	76.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	13.2	14.2	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.9	0.8	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	4.8	5.6	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	0.4	0.7	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	2.9	2.8	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	11.6	12.1	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	7.2	7.6	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	22.3	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/4chbnd

MÉXICO

1. Tendencias actuales

La pobreza en México decreció, del 37.6% en 2016 al 28.6% en 2022, manteniéndose por encima del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). Asimismo, la pobreza extrema disminuyó de 8.4% en 2016 a 6.2% en 2022 y se situó por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini cayó de 47.7 en 2016 a 45.4 en 2020, por encima del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en México fue del 21.2% en 2022, similar al promedio de ALC del 21.3% en el mismo período. La inversión privada representó el 15.0% del PIB en 2019, una cifra ligeramente inferior al promedio de ALC (15.8% del PIB). La productividad laboral de México, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, disminuyó del 38.2% en 2016 al 32.7% en 2023, aunque se mantiene por encima del promedio de ALC, del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales representó casi el 20% en 2021, considerablemente por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, disminuyeron del 59.3% en 2016 al 54.3% en 2020. En oposición al descenso del promedio de ALC, los ingresos tributarios de México aumentaron ligeramente, del 16.6% al 16.7% del PIB. Los ingresos tributarios ambientales del país descendieron del 1.6% del PIB en 2016 al 1.0% en 2021, pero se mantienen ligeramente por encima del promedio de ALC (0.9% del PIB en 2021).

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

México ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en atraer inversiones en actividades industriales. En 2023, México aprobó un decreto por el que se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec. México también implementó, en 2019, la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, con el objetivo global de movilizar, reorientar y mejorar el acceso a fuentes de financiamiento proveniente de fuentes públicas y privadas para desarrollar actividades y proyectos compatibles con el desarrollo nacional sostenible, el cambio climático y los objetivos de conservación de la biodiversidad.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, México publicó en 2023 una Taxonomía Sostenible, un instrumento público de política financiera para la sostenibilidad, que expone los criterios y parámetros técnicos para identificar actividades, activos o proyectos de inversión con efectos positivos de carácter ambiental y social. La Taxonomía ofrece un catálogo de 124 actividades, distribuidas en seis sectores estratégicos de la economía: agricultura y silvicultura; energía y agua; manufactura; transporte; construcción; y gestión de residuos. En agosto de 2020, entró en vigor en México la Ley de Infraestructura de Calidad (LIC), cuyo objetivo es promover la innovación tecnológica en bienes, servicios y procesos para: mejorar la calidad de vida; facilitar la creación de mayor infraestructura física y digital (mediante actividades de estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología); y promover el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios (ampliando la capacidad productiva y mejorando la inserción en las cadenas de valor).

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, México ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, México promovió el programa *Sembrando vida* con inversiones en El Salvador (15.5 millones de USD) y Honduras (20 millones de USD). Este innovador proyecto tiene por objeto contribuir a la seguridad alimentaria en zonas rurales de bajos ingresos a través de sistemas agroforestales que fomentan el autoconsumo y la comercialización de los excedentes. **Fuera de ALC**, México es miembro de Euroclima, el programa insignia de la Unión Europea (UE) para promover medidas verdes en países de ALC. Esta participación activa contribuirá de manera significativa a la implementación de la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC, redoblando esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones tanto locales como internacionales.

Indicadores clave – México						
	México		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	8.4	6.2	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	37.6	28.6	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	59.5	75.6	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	47.7	45.4	46.3	44.8	34.1	33.6
	2010	**2020**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	41.6	36.8	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	13.4	14.4	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	80.7	72.5	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	29.0	21.9	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	416	419	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	38.2	32.7	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	20.6	19.8	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.4	0.3	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	22.8	21.2	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	3.6	2.8	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	16.0	15.0	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.8	0.5	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	59.3	54,3	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	37.7	41.0	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	30.0	31.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	8.0	8.6	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.8	7.5	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	92.0	90.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	16.6	16.7	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	1.6	1.0	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	3.9	4.3	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	3.4	3.6	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	3.5	3.4	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	18.8	23.1	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	9.9	9.9	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	24.3	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/f7rc01

PANAMÁ

1. Tendencias actuales

La pobreza en Panamá decreció del 16.7% en 2016 al 14.3% en 2022, considerablemente por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también disminuyó, del 7.4% en 2016 al 6.5% en 2022, por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini aumentó ligeramente, de 50.4 en 2016 a 50.9 en 2021, manteniéndose por encima del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Panamá aumentó del 38.4% del PIB en 2016 al 39.3% en 2017, manteniéndose muy por encima del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada descendió ligeramente en Panamá, del 25.0% del PIB al 24.6% entre 2016 y 2019, aunque se mantuvo muy por encima del promedio de ALC (15.8% en 2019). La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales descendió del 1.2% en 2016 al 0.3% en 2021, por debajo del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región de ALC, también lo hicieron en Panamá, del 67.8% en 2016 al 50.0% en 2020. Los ingresos tributarios del país descendieron del 15.5% del PIB en 2016 al 12.7% en 2021, en línea con la tendencia regional descendiente, y se mantienen considerablemente por debajo del promedio de ALC (21.5% en 2021). Los ingresos tributarios ambientales descendieron del 0.7% del PIB en 2016 al 0.4% en 2021, por debajo del promedio de 0.9% de ALC.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Panamá ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en impulsar la participación en la economía internacional, atraer inversiones y promover las exportaciones. El país creó PROPANAMA para: diseñar e implementar la Estrategia de Inversión; diseñar e implementar el Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados de Exportación; acompañar la promoción de la Marca País de Panamá; promover el desarrollo de acciones interinstitucionales; y fortalecer su capacidad institucional. En 2023, Panamá presentó su Mapa de Inversiones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promovido por el Ministerio de Comercio e Industrias con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta iniciativa identifica oportunidades de inversión y modelos empresariales con un importante potencial para promover los ODS y generar rendimientos económicos atractivos para los inversores.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, Panamá ha centrado su Plan Estratégico de Gobierno para 2021-2024 en cinco ejes fundamentales: buen gobierno; estado de derecho; economía competitiva que genere empleo; combate a la pobreza y la desigualdad; y educación, ciencia, tecnología y cultura. A principios de 2016, el Gobierno anunció un diálogo para adoptar Panamá 2030, un Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, cuyo objetivo es facilitar la consecución de los ODS. Este Plan establece cinco objetivos que sientan las bases de desarrollo del país: buena vida para todos; crecer más y mejor; sostenibilidad ambiental; democracia, instituciones y gobernanza; y alianzas estratégicas para el desarrollo. Para avanzar hacia la circularidad, la resiliencia y la progresiva reducción de las emisiones, Panamá diseñó el Plan Nacional de Acción Climática (PNAC). Este instrumento fundamental promueve un programa nacional y sectorial a largo plazo en materia de cambio climático, con el objetivo de facilitar y garantizar que Panamá implemente su primera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional del país y cumpla sus compromisos.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Panamá ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera. **Dentro de la región**, Panamá firmó un acuerdo pionero en 2015 con Costa Rica para proteger los derechos laborales de los migrantes, incluidas las poblaciones indígenas. Dicho acuerdo tiene por objeto mejorar la colaboración entre estos dos gobiernos en aras de gestionar una migración de la mano de obra dignificada, ordenada, humana y segura, además de monitorizar las condiciones laborales y garantizar el acceso a servicios como la sanidad, la educación y la seguridad social. **Fuera de la región**, Panamá y la Unión Europea han definido diversas prioridades de cooperación para 2023: en materia de clima y energía (incluida la producción de hidrógeno verde y el acceso universal a la energía); salud (creación de un centro regional de desarrollo y una fábrica de vacunas); y educación digital e investigación (p. ej., la creación del centro de datos Copernicus).

	Indicadores clave – Panamá					
	Panamá		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	7.4	6.5	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	16.7	14.3	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	54.0	67.5	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	50.4	50.9	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2021**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	N/A	N/A	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	N/A	N/A	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	N/A	N/A	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	N/A	15.2	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	N/A	365	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	N/A	N/A	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	1.2	0.3	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.1	N/A	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2017**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	38.4	39.3	20.8	21.3	21.9	22.8
	2016	**2021**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	9.1	3.5	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	25.0	24.6	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	3.0	1.1	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	67.8	50.0	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	41.8	39.5	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	38.0	36.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	5.4	4.9	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	N/A	N/A	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	N/A	N/A	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	15.5	12.7	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.7	0.4	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	2.6	1.8	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	1.5	1.7	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	1.8	0.9	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	10,5	16.1	11.3	12.3	5.4	5.3
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Gasto social (% del PIB)	8.5	11.4	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	29.8	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/pwvg5q

PARAGUAY

1. Tendencias actuales

La pobreza en Paraguay disminuyó del 24.0% en 2016 al 21.1% en 2022, por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema se mantuvo estable en 7.9% entre 2016 y 2022, manteniéndose por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini descendió de 47.9 en 2016 a 42.9 en 2021 y se sitúa por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Paraguay aumentó del 19.1% del PIB en 2016 al 21.8% en 2022, de manera que el país se sitúa ligeramente por encima del promedio de ALC del 21.3% en el mismo período. Sin embargo, la inversión privada descendió ligeramente, del 11.1% del PIB al 10.7%, manteniéndose por debajo del promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Paraguay, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, disminuyó del 22.9% en 2016 al 22.0% en 2023, por debajo del promedio de ALC del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales disminuyó ligeramente, del 7.6% en 2016 al 7.4% en 2021, aunque se mantiene por encima del promedio de ALC en 2021 (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región, también lo hicieron en Paraguay, del 84.6% en 2016 al 55.4% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 13.4% del PIB en 2016 al 14.0% en 2021, aunque se mantienen por debajo del promedio regional de ALC (21.5% del PIB). Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente sin cambios, al descender del 1.0% del PIB en 2016 al 0.9% en 2021, lo que sitúa a Paraguay en el mismo nivel que el promedio de ALC.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Paraguay ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en incentivos que fomentan la adopción de prácticas y tecnologías sostenibles, impulsan la transformación digital de las empresas y promueven la creación de empleo y la inclusión social. En virtud de la Ley 60/90 de Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital Nacional y Extranjero, se crea un incentivo fiscal con el objetivo de promover y aumentar las inversiones de capital, acrecentar la producción de bienes y servicios, crear empleo, fomentar las exportaciones y la sustitución de importaciones, e incorporar tecnologías que aumenten la eficiencia productiva. En las últimas tres décadas, Paraguay ha implementado la ley que establece el Régimen de Zonas Francas, el cual fomenta el desarrollo económico y promueve la inversión en una región determinada o en el país en general. En línea con estos esfuerzos, la Ley de la Industria Maquiladora de Exportación ofrece incentivos fiscales para promover el desarrollo industrial, la creación de empleo y el aumento de las exportaciones.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, Paraguay ha centrado su Plan Nacional de Desarrollo 2030 en tres ejes fundamentales: reducción de la pobreza y desarrollo social; crecimiento económico inclusivo; e inserción de Paraguay en el mundo. Para lograr los objetivos del plan, será necesaria una inversión total estimada de 500 millones de USD. En 2020, el Gobierno introdujo unas directrices estructurales y transversales a través de la Ley n.° 6.490/20 de Inversión Pública y su reglamento, como base para la elaboración del Plan Nacional de Inversión de Paraguay. Desde la entrada en vigor del Plan, solo se pueden evaluar e implementar posteriormente los proyectos de inversión pública incluidos en él. Las principales prioridades del nuevo gobierno son la creación de empleo y el impulso de la productividad, con la implementación de importantes reformas favorables al mercado. Entre dichas reformas se incluyen el apoyo al sector privado para estimular el empleo y el crecimiento económico a largo plazo, la exigencia de esfuerzos coordinados en todas las instituciones y regiones, y la colaboración con el sector productivo.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Paraguay ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, Paraguay participa en el Protocolo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones Intra-Mercosur, junto con Argentina, Brasil y Uruguay. El objetivo de este protocolo es promover la cooperación entre los Estados miembros para facilitar la inversión directa para un desarrollo sostenible. Paraguay se adhiere además al Protocolo de promoción y protección recíproca de las inversiones provenientes de Estados que no son parte del Mercosur, tales como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Sudáfrica, España y Estados Unidos, entre otros. Este protocolo establece que cada país asegurará un tratamiento justo y equitativo de las inversiones provenientes de terceros Estados y les concederá plena protección. Paraguay y la Unión Europea (UE) han formado, en el marco de la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC, una asociación que abarca proyectos concretos de infraestructura en los ámbitos clave del clima (p. ej., un nuevo proyecto de plantación forestal y pasta de papel); la energía (p. ej., la renovación de la red de transmisión de la electricidad); y la salud (p. ej., un proyecto de agua y saneamiento en Asunción).

Indicadores clave – Paraguay						
	Paraguay		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	7.9	7.9	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	24.0	21.1	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	53.4	77.0	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	47.9	42.9	46.3	44.8	34.1	33.6
	2009	**2018**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	66.3	57.4	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	28.8	16.6	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	98.0	96.5	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	32.8	20.6	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	N/A	N/A	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	22.9	22.0	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	7.6	7.4	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.1	0.1	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	19.1	21.8	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	2.1	1.1	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	11.1	10.7	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.8	4.0	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe que la IED es beneficiosa (%)	84.6	55.4	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	58.1	41.9	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	30.0	28.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	6.8	6.0	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	N/A	N/A	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	N/A	N/A	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	13.4	14,0	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	1.0	0.9	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	5.1	5.1	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	0.2	0.1	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	2.0	2.5	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	6.6	11.4	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	8.5	10.3	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	27.0	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/72dtbj

PERÚ

1. Tendencias actuales

La pobreza en Perú disminuyó, del 19.1% en 2016 al 17.2% en 2022, manteniéndose por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). Igualmente, la pobreza extrema descendió del 5.2% en 2016 al 3.3% en 2022, situándose por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini se redujo, de 43.6 en 2016 a 40.2 en 2021, manteniéndose por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Perú aumentó del 21.4% del PIB en 2016 al 23.6% en 2022, en línea con la tendencia del promedio de la región, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada ascendió ligeramente, del 15.7% al 15.9%. La productividad laboral de Perú, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, disminuyó del 19.0% en 2016 al 18.6% en 2023, por lo que sigue estando por debajo del promedio de ALC del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados se mantuvo sin cambios, en el 4.8% de 2016 a 2020, considerablemente por debajo del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región, también lo hicieron en Perú, del 67.8% en 2016 al 41.3% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 16.1% del PIB en 2016 al 17.9% en 2021, manteniéndose por debajo del promedio regional del 21.5%. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron sin cambios, en el 0.5% del PIB entre 2016 y 2021, prácticamente la mitad del promedio de ALC del 0.9% en 2021.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Perú ha hecho importantes esfuerzos para **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, centrándose principalmente en mejorar la infraestructura social y económica. En 2018, creó la Política Nacional de Competitividad y Productividad para lograr la sostenibilidad y un funcionamiento adecuado de la infraestructura económica, social y ambiental. Este enfoque se centra en el crecimiento territorial y la capacidad para resistir desastres naturales. En julio de 2019, Perú creó su primer Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para 2019-2022, que priorizaba la implementación de 52 proyectos en todo el país, con una inversión de casi 30 000 millones de USD. En octubre de 2022, Perú publicó el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad para 2022-25, que se basa en el PNIC 2019-2022 y lo amplía, añadiendo aspectos sociales y centrándose en la sostenibilidad.

Para avanzar en **un modelo productivo inclusivo y sostenible**, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de Perú elaboró su *Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)* 2021-2023 con el fin de dotar de recursos públicos la construcción de infraestructura pública que contribuya al desarrollo del país. Este programa se centra en seis áreas principales a las que destinar la inversión pública: la educación, la atención sanitaria, el transporte y la comunicación, la vivienda y el saneamiento, la agricultura, y la energía y la minería.

En cuanto a **las asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Perú ha puesto en marcha iniciativas de colaboración con socios tanto de ALC como de fuera de la región. **Dentro de la región**, Perú participa en la definición de infraestructura sostenible a través de la Alianza del Pacífico, junto con Chile, Colombia y México. La Alianza del Pacífico, a través del Grupo de Trabajo sobre Inversión en Infraestructura, trata de estandarizar el concepto de infraestructura sostenible entre los países miembros, en línea con el marco conceptual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este marco engloba cuatro dimensiones de sostenibilidad: económica y financiera, social, ambiental e institucional. **Fuera de ALC**, Perú también es miembro de Euroclima, el programa insignia de la Unión Europea (UE) para promover medidas verdes en países de ALC. Esta colaboración contribuirá a la implementación de la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC, redoblando esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones tanto locales como internacionales.

	Indicadores clave – Perú					
	Perú		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	5.2	3.3	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	19.1	17.2	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	45.5	71.1	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	43.6	40.2	46.3	44.8	34.1	33.6
	2010	**2018**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	67.2	60.6	44.2	46.8	N/A	N/A
	2010	**2019**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	27.6	21.4	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	93.5	95.5	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	24.5	18.6	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	397	404	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	19.0	18.6	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	4.8	4.8	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.1	0.2	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	21.4	23.6	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	3.5	4.5	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	15.7	15.9	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2019**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	2.6	2.1	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	67.8	41.3	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	33.4	33.7	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	35.0	36.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	7.3	5.8	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.3	6.9	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	83.0	81.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	16.1	17.9	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	0.5	0.5	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	6.0	7.2	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	1.8	1.9	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	3.8	4.5	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	5.8	7.3	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	N/A	N/A	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	34.8	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/8a2x30

URUGUAY

1. Tendencias actuales

La pobreza en Uruguay se incrementó del 3.6% en 2016 al 4.3% en 2022, aunque se mantiene considerablemente por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema se incrementó ligeramente del 0.2% en 2016 al 0.3% en 2022, pero está muy por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini se incrementó de 39.7 en 2016 a 40.8 en 2021, manteniéndose por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en Uruguay aumentó del 16.9% del PIB en 2016 al 18.5% en 2022, siguiendo la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada, sin embargo, descendió en Uruguay, del 15.0% del PIB al 12.0%, de manera que sigue cayendo por debajo del promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral de Uruguay, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, descendió del 39.0% en 2016 al 38.0% en 2023, aunque se mantiene considerablemente por encima del promedio de ALC, del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales descendió del 10.6% en 2016 al 9.8% en 2020, aunque sigue por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en toda la región, también lo hicieron en Uruguay, del 74.3% en 2016 al 65.0% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 25.6% del PIB en 2016 al 26.5% en 2021, por encima del promedio regional del 21.5%. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente sin cambios, al aumentar del 1.7% del PIB en 2016 al 1.8% en 2021, por encima del promedio regional del 0.9%.

2. Políticas a largo plazo para promover la inversión y la transformación de la producción

Uruguay se ha esforzado en **atraer y movilizar inversión de alta calidad**, enfocándose en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Estableció el Uruguay Innovation Hub para atraer inversiones de alto valor agregado, acelerar proyectos empresariales, crear laboratorios abiertos y un campus de innovación, creando un fondo de financiamiento público-privado para empresas emergentes. Desde 1998, promueve inversiones a través de la Ley de promoción de inversiones 16.906, impulsando 708 proyectos hasta 2022 por cerca de 1 200 millones de USD en los sectores industrial, comercial, servicios, agrícola y turístico.

Para avanzar un **modelo productivo que sea inclusivo y sostenible**, Uruguay está desarrollando una Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) con tres objetivos clave: definir una visión circular, establecer prioridades estratégicas con indicadores relevantes y elaborar planes de acción a corto y mediano plazo. Desde 2011, implementa un programa público-privado bajo la Ley 18786 y el Decreto 49/022 para mejorar la infraestructura y la equidad social. Uruguay participa en el Pacto Mundial de Naciones Unidas y desde 2021 cuenta con una red nacional para integrar al sector privado en políticas y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Uruguay se está embarcando en su segunda transición energética tras haber logrado producir más de un 95% de su electricidad a partir de fuentes renovables (hídrica, eólica, biomasa y solar) en la primera. Esta segunda transición busca la descarbonización del sector industrial y el transporte, y cuenta con tres pilares principales: proseguir con la integración de la generación de nuevas energías renovables en su matriz energética, promover la movilidad eléctrica, y desarrollar el hidrógeno verde y sus derivados. En 2022, Uruguay estableció una Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde y sus Derivados con metas a corto, mediano y largo plazo, incluyendo soluciones de transporte pesado, combustibles sintéticos y fertilizantes verdes. Para guiar este proceso, el país creó el Programa H2U.

En cuanto a las **asociaciones regionales e internacionales** para promover la atracción de inversiones de calidad, Uruguay colabora regional e internacionalmente. **Dentro de la región**, participa en programas con Paraguay incluyendo la promoción de inversiones focalizadas y gestión fronteriza integrada. Con México, está trabajando para incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y el valor agregado en cadenas de producción locales. Uruguay colabora con Ecuador en estrategias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y sus capacidades de emprendimiento. **Fuera de la región**, colabora con el PNUD para implementar el Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP) y mejorar la gestión del Fondo de Desarrollo del Interior dentro de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública. En el campo de la energía renovable y la transición energética, trabaja con la ONUDI a través del Fondo de Innovación en Energías Renovables (REIF). El proyecto "Fortaleciendo la Transición Energética" es un ejemplo de cooperación triangular con Alemania y Bolivia. Uruguay también ha formado asociaciones para la economía verde y circular, como AL-INVEST Verde, CoopsUYxDS con la Unión Europea y un Programa de Intercambio de Conocimientos con Corea.

Indicadores clave – Uruguay						
	Uruguay		ALC		OCDE	
Social						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Pobreza extrema	0.2	0.3	8.1	8.3	N/A	N/A
Pobreza	3.6	4.3	25.9	24.1	N/A	N/A
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Proporción de usuarios de Internet (% de población)	66.4	90.1	54.5	74.2	81.8	89.6
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2020**
Coeficiente de Gini	39.7	40.8	46.3	44.8	34.1	33.6
	2008	**2018**	**2009**	**2021**	**2009**	**2021**
Proporción de la población total en hogares informales (%)	28.5	16.3	44.2	46.8	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta alta (%)	12.9	1.2	23.9	21.3	N/A	N/A
Proporción de la población total en hogares informales, quintil de renta baja (%)	68.7	56.1	77.6	78.2	N/A	N/A
	2019	**2023**	**2019**	**2023**	**2019**	**2023**
Índice de instituciones sociales y género (SIGI)	22.2	19.4	25.4	21.6	17.5	15.3
	2015	**2018**	**2015**	**2018**	**2015**	**2018**
Puntuación del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) en ciencias	435	426	411	407	489	487
Productividad e innovación						
	2016	**2023**	**2016**	**2023**	**2016**	**2023**
Productividad laboral (% de los Estados Unidos)	39.0	38.0	29.3	27.1	70.0	68.5
	2016	**2020**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de exportaciones manufactureras)	10.6	9.8	8.4	7.2	16.5	16.0
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Gasto en I+D (% del PIB)	0.4	0.5	0.3	0.4	1.8	2.0
Inversión y transformación productiva						
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Inversión total, formación bruta de capital fijo (% del PIB)	16.9	18.5	20.8	21.3	21.9	22.8
Inversión extranjera directa (IED), entrada neta de capital (% del PIB)	-0.9	13.2	4.4	4.6	6.8	3.5
	2016	**2019**	**2016**	**2019**	**2016**	**2019**
Inversión privada (% del PIB)	15.0	12.0	16.1	15.8	18.2	18.8
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Inversión pública en infraestructuras económicas (% del PIB)	1.9	1.3	2.3	1.6	N/A	N/A
Percepción de los ciudadanos e instituciones						
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2020**
Proporción de la población que percibe la IED como beneficiosa (%)	74.3	65.0	70.9	53.9	N/A	N/A
	2018	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**
Proporción de la población que considera que, en general, los productos nacionales son de menor calidad que los importados (%) (de acuerdo o muy de acuerdo)	27.4	26.5	44.6	42.7	N/A	N/A
	2016	**2022**	**2016**	**2022**	**2016**	**2022**
Índice de percepción de la corrupción (puntuación en una escala de 0 [altamente corrupto] a 100 [totalmente limpio])	71.0	74.0	41.2	40.6	67.3	66.3
Indicador de riesgos de seguridad (puntuación de 0 [riesgos de seguridad bajos] a 10 [riesgos de seguridad altos])	3.5	3.9	5.9	5.6	2.8	2.6
	2010-14	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**	**2010-14**	**2017-22**
Creencia de que la ciencia y la tecnología crearán más oportunidades para las próximas generaciones (puntuación en una escala de 1 [totalmente en desacuerdo] a 10 [totalmente de acuerdo])	7.6	7.4	7.3	7.2	7.6	7.2
Proporción (%) de la población que se preocupa (mucho o bastante) por no poder proporcionar una buena educación a sus hijos (%)	64.0	75.0	75.4	74.0	49.8	41.4
Situación fiscal						
	2016	**2021**	**2016**	**2021**	**2016**	**2021**
Total de ingresos tributarios (% del PIB)	25.6	26.5	22.0	21.5	33.6	34.1
Ingresos tributarios ambientales (% del PIB)	1.7	1.8	1.1	0.9	2.4	2.0
Proporción del IVA (% PIB)	7.1	7.2	5.9	6.1	6.6	7.0
Impuesto sobre la renta a las personas naturales (% PIB)	3.0	3.8	2.0	2.0	7.8	8.3
Impuesto sobre las sociedades (% PIB)	2.6	2.8	3.2	3.4	2.9	3.1
Servicio de la deuda (% del total de ingresos tributarios)	9.5	7.7	11.3	12.3	5.4	5.3
Gasto social (% del PIB)	14.7	15.6	11.3	13.3	20.1	22.0
	2016	**2020**	**2016**	**2020**	**2016**	**2019**
Percepción de la evasión de impuestos (%)	N/A	32.6	N/A	27.3	N/A	N/A

Nota: Para definiciones y fuentes, véase la Guía del Lector.

StatLink https://stat.link/z8gvsm

Perspectivas económicas de América Latina 2023

INVIRTIENDO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deben adoptar una amplia y ambiciosa agenda de inversión para emprender una trayectoria de desarrollo más sólida y sostenible. La decimosexta edición de *Perspectivas económicas de América Latina* propone formas para hacer realidad esta agenda mediante acciones coordinadas entre los responsables de la formulación de políticas, el sector privado y los socios internacionales. El informe sostiene que para cerrar las brechas de inversión existentes y superar los retos estructurales de la región es esencial incrementar tanto la inversión nacional como la extranjera. Estas inversiones deben actuar como catalizador de empleos de mayor calidad y optimizar la estructura productiva, aprovechando el potencial de los recursos de ALC y de las transiciones verde y digital. Es clave mejorar la gobernanza y la información para promover inversiones públicas y privadas efectivas y eficientes. Las instituciones públicas son fundamentales para alinear las inversiones con las estrategias nacionales de desarrollo y para fortalecer el contrato social. El informe presenta opciones de financiamiento para respaldar esta nueva agenda de inversión, entre las que se incluyen instrumentos de deuda innovadores y un papel renovado de las instituciones de financiamiento del desarrollo, al tiempo que destaca la importancia de revitalizar las alianzas internacionales en el marco de dicha agenda de inversión.

Cofinanciado por la Unión Europea

PRINT ISBN 978-92-64-93820-5
PDF ISBN 978-92-64-88545-5